ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL ARBITRAL ESTABLECIDO AL AMPARO DEL CAPÍTULO 9 DEL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TIPAT)

ALMADEN MINERALS LTD. Y ALMADEX MINERALS LTD.,
(DEMANDANTE)

C.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
(DEMANDADA)

(Caso CIADI No. ARB/24/23)

DÚPLICA

POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:
Alan Bonfiglio Ríos

ASISTIDO POR:

Secretaría de Economía
Rosalinda Toxqui Tlaxcalteca
Rafael Rodríguez Maldonado
Pamela Hernández Mendoza
Marisela Vázquez Estrada
Paulina Jazmín Rodríguez Cruz
María Daniela Parra Hernández
Aldo González Aranda
Sergio Alonso Patiño Reyes
Mildred Estefanía Villafuerte Chávez

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
Stephan E. Becker
Gary J. Shaw
D. Carolina Plaza E.

Tereposky & DeRose
Alejandro Barragán
Juan Pablo Gómez

4 de septiembre de 2026

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN 1

II. HECHOS 14

A. El Proyecto Ixtaca no era viable desde el punto de vista regulatorio y social 14

1. Etapas del proyecto y requisitos regulatorios aplicables 14

a. Los requisitos en materia de legislación minera, ambiental y social 14

b. Requisitos en materia de legislación minera y su relación con la debida diligencia social 16

c. Requisitos en materia de legislación ambiental y su relación con la debida diligencia social 17

d. Instrumentos de participación social en cualquier proyecto minero 21

(1) El Derecho de Consulta Indígena 21

(2) Evaluación de Impacto Social 27

(3) Evaluación de Impacto en Derechos Humanos 28

(4) La Licencia Social para Operar 29

2. El Proyecto Ixtaca nunca obtuvo la aprobación de las comunidades indígenas afectadas 32

a. Las comunidades indígenas impactadas por el Proyecto Ixtaca: El área de influencia para los impactos sociales 37

b. La oposición al Proyecto Ixtaca como expresión del ejercicio legítimo de los derechos de las comunidades 41

c. La estrategia reactiva de Minera Gorrión ante el rechazo del Proyecto Ixtaca no remedió sus deficiencias en impacto social 46

3. Las Demandantes tienen un historial de *mala praxis* en materia ambiental y social 59

a. Proyecto “El Cobre” 59

b. Proyecto “El Caballo Blanco” 61

B. Las Demandantes no han refutado que la Declaración de Insubsistencia y la Resolución de No Factibilidad fueron consecuencia de una orden judicial.....62

1. El acto reclamado en el Amparo 445/2015 fue la emisión de las Concesiones.....63

2. Las Demandantes intentan modificar el alcance de la Sentencia de la Suprema Corte 66

a. La Suprema Corte revocó las Concesiones y sus efectos cuando ordenó su insubsistencia en 2022.....71

b. El pronunciamiento con relación a la “factibilidad” de expedir las Concesiones 77

c. La Consulta Indígena estaba condicionada a la determinación de factibilidad por parte de Economía 80

d. La Suprema Corte le otorgó libertad jurisdiccional a Economía para evaluar la factibilidad de las Concesiones 82

3. Diversas autoridades judiciales supervisaron el cumplimiento de Economía con la Sentencia de la Suprema Corte y confirmaron que era adecuado.....83

C. Economía rechazó las Solicitudes de Concesión por deficiencias en los trabajos periciales presentados por las Demandantes 93

1. El Procedimiento para la evaluación de una Solicitud de Concesión Minera y su relación con la Sentencia de la Suprema Corte 93

2. DG Minas no está obligada a notificar al particular sobre deficiencias en su Solicitud de Concesión durante la etapa de la determinación final 94

a. Los artículos 24 y 31 del Reglamento de la Ley Minera y el artículo 17-A de la LFPA no son aplicables a la etapa de determinación final de la DG Minas.....96

b. Economía no cometió ninguna violación en materia de seguridad jurídica, confianza legítima o buena fe administrativa.....100

3. Los derechos derivados de las Concesiones y sus efectos fueron revocados por la Suprema Corte....101

4. Las Solicitudes de Concesión no generaban ninguna clase de derecho u obligación de resultado en favor de las Demandantes 107

5. Los incumplimientos de las Solicitudes de Concesión no eran menores o subsanables....112

a. Deficiencias técnicas de la Solicitud de Concesión de Cerro Grande....114

b. Deficiencias técnicas de la Solicitud de Concesión Cerro Grande 2....118

6. El Estudio del INPI no tuvo ninguna relevancia para la Resolución de No Factibilidad....119

7. No existen registros del supuesto borrador de resolución de factibilidad presentado por las Demandantes como Anexo C-930....122

D. Las Demandantes no agotaron los recursos legales disponibles en contra de la determinación de Economía....130

1. Las Demandantes tenían medios de impugnación disponibles en contra de la Resolución de No Factibilidad y decidieron abandonarlos....131

2. Las Demandantes pretenden que el Tribunal sustituya al TFJA y emita determinaciones sobre la legalidad de la Resolución de No Factibilidad....132

E. Las Demandantes descontextualizan la relación de Economía con el Proyecto Piloto de la UNECE....134

F. Las Demandantes no cumplieron con los requerimientos legales y técnicos para comprobar que su Proyecto era ambientalmente viable....138

1. Las Demandantes no han refutado que la Negativa de la MIA derivó de deficiencias técnicas y ambientales....138

a. La evaluación de la MIA del Proyecto Ixtaca implicaba la valoración de ciertos impactos ambientales....140

b. El alcance del Área de Influencia del Proyecto planteado en la MIA no contempló los daños a otras comunidades....142

c. La Reunión Pública de Información no vulneró los derechos de las Demandantes o las comunidades 146

d. Minera Gorrión siempre tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre las Solicitudes de Opinión Técnica adicionales 152

e. El requerimiento de realizar la Consulta Indígena dentro del PEIA y su alcance exclusivo sobre la MIA presentada 159

(1) Marco jurídico al momento de presentación de la MIA 160

(2) La ubicación de las comunidades indígenas según la MIA del Proyecto Ixtaca 165

f. Suspensión del PEIA 169

g. La resolución de la MIA se basó en cuestiones técnicas y no en ordenes políticas 173

(1) Cuestiones hídricas 174

(2) Cuestiones de jales y tepetates 178

(3) Flora y fauna 180

(4) Cuestiones indígenas 181

(5) Análisis Técnico de la DGIRA 185

2. Las Demandantes no impugnaron la Resolución Negativa de la MIA 188

3. Las Demandantes tenían proyectada la presentación de una Nueva MIA actualizada 193

4. Las Demandantes no demostraron la viabilidad hídrica del Proyecto Ixtaca 200

a. Los requerimientos hídricos del Proyecto Ixtaca excedían la cantidad de agua pluvial que las presas FWD y WSD capturarían 201

b. Las presas FWD y WSD no solo eran sistemas de almacenamiento de agua pluvial 207

c. Minera Gorrión no proporcionó la información necesaria para evaluar los impactos del Proyecto Ixtaca sobre las dinámicas hidrológicas de la región 209

5. Los Proyectos Comparables 211

6. Las Demandantes no acreditaron que cumplen con la totalidad de permisos, autorizaciones y licencias para poner en marcha el Proyecto Ixtaca 215

a. Cambio de uso de Suelo 216

b. Solicitud de obra para la construcción de caminos 217

c. Solicitud de conexión al sistema eléctrico 218

d. Permiso de explosivos 219

e. Residuos de Manejo Especial o Peligrosos 219

f. Locales 220

7. La fase de exploración del Proyecto Ixtaca no aseguraba la viabilidad del Proyecto 220

a. Las inspecciones de PROFEPA no convalidaron el Proyecto Ixtaca 221

b. Las actividades de exploración tenían inconsistencias 222

G. Las actuaciones de la SEMARNAT, el INPI y demás autoridades mexicanas fueron ejercicios regulares de sus facultades 223

H. Las Demandantes no han demostrado la existencia de una campaña política en contra del Proyecto Ixtaca 234

I. Deficiencias del Proyecto Ixtaca en materia hidríca 239

III. EL TRIBUNAL DEBE DESECHAR LA SOLICITUD DE INFERENCIAS ADVERSAS DE LAS DEMANDANTES 244

IV. EL TRIBUNAL NO TIENE JURISDICCIÓN SOBRE LAS RECLAMACIONES 248

A. El Tribunal carece de jurisdicción *ratione temporis* 249

1. Las reclamaciones de las Demandantes se derivan de hechos ocurridos antes de la entrada en vigor del TIPAT en el 30 de diciembre de 2018 249

2. Las reclamaciones de las Demandantes están fuera del plazo de prescripción aplicable en virtud del TIPAT 254

B. El Tribunal carece de jurisdicción *ratione materiae* porque Almadex y Minera Gavilán no cuentan con inversiones protegidas de conformidad con el TIPAT y el Artículo 25 del Convenio CIADI 259

C. El Tribunal carece de jurisdicción *ratione personae* y *ratione voluntatis* porque las Demandantes no refutaron que son mexicanas respecto de su supuesta inversión 267

1. Las Declaraciones no se limitan a la protección diplomática 267

2. El principio de *pacta sunt servanda* es aplicable por lo que las Demandantes no pueden escapar de sus compromisos voluntarios.....271

3. Las Demandantes están impedidas por *estoppel* de invocar su nacionalidad canadiense.....273

4. Las Declaraciones constituyen una renuncia válida a los derechos del Tratado 274

V. LAS DEMANDANTES NO HA DEMOSTRADO NINGUNA VIOLACIÓN DEL TIPAT 276

A. Las Demandantes no han demostrado que haya ocurrido una expropiación de la supuesta inversión 276

1. Las Demandantes no eran titulares de derechos susceptibles de expropiación.....276

2. No ocurrió una expropiación directa en el sentido del TIPAT 280

3. La reclamación de "expropiación judicial" es inadmisible y carece de fundamento 282

4. Las actuaciones de la Demandada fueron lícitas. 286

a. Utilidad pública.....287

b. Discriminación.....290

c. Debido proceso 290

d. Indemnización.....292

5. No ocurrió una expropiación porque las Demandantes abandonaron el Juicio de Nulidad.....292

B. Las Demandantes no han demostrado que existió una violación del Trato Justo y Equitativo con respecto su supuesta inversión.....295

1. La evolución del nivel mínimo de trato no elimina la carga de demostrar práctica estatal y *opinio juris* 296

2. La pretendida equivalencia entre el NMT y el estándar autónomo de TJE es incorrecta 299

3. México no sostiene que las decisiones gubernamentales estén inmunes al control internacional 303

4. Las Demandantes confunden factores relevantes para evaluar el NMT con obligaciones autónomas inexistentes 306

a. No existe una prohibición general contra la conducta arbitraria en virtud del NMT 306

b. La buena fe no constituye una obligación independiente del NMT 309

c. La transparencia y el debido proceso no imponen un régimen general de revisión administrativa 309

d. La consistencia, la no retroactividad y la proporcionalidad no son obligaciones autónomas 311

e. No existe una prohibición general de la discriminación en virtud del NMT 313

5. Las alegaciones sobre supuestas motivaciones políticas no demuestran una violación del estándar de TJE 314

6. La falta de utilización de los recursos internos impide a las Demandantes demostrar que las medidas controvertidas violaron el Artículo 9.6 316

7. La conducta de México no infringió el NMT 321

a. La suspensión y la negativa de la MIA respondieron a razones jurídicas, técnicas y ambientales, no a una instrucción política 322

(1) La suspensión de la evaluación de la MIA no fue pretextual 322

(2) La negativa de la MIA no fue arbitraria ni políticamente predeterminada 327

b. La Resolución de No Factibilidad de las Concesiones no infringió el TJE 334

(1) La actuación de México no fue contradictoria ni retroactiva 335

(2) La revocación de las Concesiones no fue arbitraria 341

(3) La Resolución de No Factibilidad fue transparente y no vulneró el debido proceso.....344

(4) La Resolución de No Factibilidad no fue desproporcionada.....346

(5) México no discriminó a las Demandantes.....347

c. La Sentencia de la Suprema Corte confirma la justificación jurídica de la actuación de Economía.....348

d. Las actuaciones de México son conformes con sus obligaciones internacionales en materia de protección ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas.....349

C. Las Demandantes no han demostrado que existió una denegación del Trato Nacional o del Trato de Nación Más Favorecida con respecto de supuesta inversión.....356

1. Las Demandantes no han demostrado "trato" discriminatorio en el sentido de los Artículos 9.4 y 9.5.....358

2. Las Demandantes no fueron tratadas menos favorablemente que inversionistas o inversiones "en circunstancias similares".....361

3. En cualquier caso, las medidas respondieron a objetivos gubernamentales legítimos y no discriminatorios.....371

VI. DAÑOS.....377

A. Las aclaraciones de la Demandante sobre su reclamación de daños son insuficientes.....377

B. Estándar de compensación.....382

1. La reparación integral exige restituir a las Demandantes a la posición anterior al ilícito, no otorgarles un valor futuro incierto.....382

2. El escenario contrafáctico bajo el estándar de reparación plena.....385

a. El escenario contrafactual no puede suponer un resultado favorable en procesos administrativos locales que competen a las autoridades mexicanas.....386

b. El escenario contrafactual de las Demandantes llama al tribunal a sustituir decisiones de autoridades competentes con su propio criterio.....391

c. El escenario contrafactual no puede eliminar el impacto de actos anteriores a la fecha crítica 396

C. Fecha de valuación y uso de información *ex post* 397

1. Las Demandantes no logran desvirtuar ninguna de las razones para rechazar la fecha del laudo como fecha de valuación 399

a. Las Demandantes tergiversan la posición de la Demandada sobre la fecha de valuación apropiada 399

b. La lógica con la cual las Demandantes abogan por la fecha del laudo como fecha de valuación no aplica en este caso 402

c. La valuación *ex post* no es apropiada en el caso de inversiones preoperativas como Ixtaca 404

2. Las Demandantes solo buscan maximizar su reclamación de daños con el análisis *ex post* que proponen 407

a. La información *ex post* se utiliza para expandir el alcance del Proyecto para maximizar la reclamación de daños 413

D. Culpa concurrente 416

1. El Artículo 39 de los Artículos de la CDI no exige la infracción de una norma de derecho positivo, sino una contribución causal al daño 416

2. Los precedentes que invocan las Demandantes no fijan el umbral que les atribuyen 418

3. La conducta de las Demandantes contribuyó causalmente a la pérdida que reclaman 419

E. Valuación de los daños 423

1. La metodología de capitalización de mercado debe ser preferida al enfoque de ingresos en las circunstancias de este caso 423

a. El Código CIMVAL admite el enfoque de mercado y no impone el enfoque de ingresos 423

b. Las circunstancias de este caso favorecen el uso del enfoque de mercado y el método de capitalización de mercado 427

c. La práctica arbitral confirma que el enfoque de ingresos no es el apropiado para proyectos mineros preoperativos 430

2. La valuación de Quadrant refleja el valor justo de mercado de la inversión de las Demandantes 435

a. Los presuntos defectos de la valuación de Quadrant 435

(1) La valuación de Quadrant no está "contaminada" por la anticipación de conducta ilegal 436

(2) El estándar de reparación plena no exige considerar la evolución del Proyecto como suponen las Demandantes 441

b. Los casos que citan las Demandantes confirman la confiabilidad del método de capitalización de mercado 443

3. La valuación DCF de las Demandantes es excesivamente especulativa e innecesaria dada la existencia de una alternativa más confiable 447

a. La sorprendente evolución de las valuaciones de Brattle 449

b. Precios 453

c. La estimación de riesgos 457

d. La supuesta verificación de la confiabilidad del modelo de Brattle 460

e. Las valuaciones por costos hundidos y comparables son inaplicables y no corroboran el DCF de las Demandantes 461

F. Intereses 463

VII. SOLICITUD DE COSTOS 467

VIII. PETITORIOS 468

GLOSARIO

Nombre corto	Nombre completo
2° Tribunal Colegiado	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en Puebla
Acuerdo de Escazú	Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe
AIA	Autorización de Impacto Ambiental
Almaden	Almaden Minerals Ltd.
Almadex	Almadex Minerals Ltd.
Amparo 445/2015	Amparo Indirecto 445/2015 presentado por la comunidad indígena Tecoltemi por el que reclamaban el otorgamiento de las concesiones mineras sin la realización de la Consulta Previa, Libre e Informada
CAPEX	Riesgo de sobre costos de capital
CCF	Código Civil Federal
CDI	Comisión de Derecho Internacional
CEPE	Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
Cerro Grande	Concesión minera 219469 otorgada en 2003 a Minera Gavilán, de superficie 11,201.55 ha, ubicada en Tetela de Ocampo, Ixtacamaxtitlán, Puebla.
Cerro Grande 2	Concesión minera 233434 otorgada en 2009 a Minera Gavilán, de superficie 3,028 ha, ubicada en Zautla, Puebla.
CESDER	Centro de Estudios para el Desarrollo Rural
Código	Se refiere al código o lineamientos elaborados por el CIMVAL
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
Concesiones	Concesiones Cerro Grande y Cerro Grande 2
Convenio 169 de la OIT	Convenio Internacional del Trabajo No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo
CPEUM / Constitución de México / Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DCF	Discounted Cash Flow
Declaración de Insubsistencia	Se refiere a la Declaración de Insubsistencia emitida el 20 de junio de 2022 por Economía
Denegación de la MIA o Negativa de la MIA	Se refiere a la decisión de la Semarnat del 17 de diciembre de 2020 que negó la autorización ambiental

DG Minas	Dirección General de Minas
DGIRA	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
DOF	Diario Oficial de la Federación
Economía	Secretaría de Economía
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental
EIDH	Evaluación de Impacto de Derechos Humanos
ERA	Estudio de Riesgo Ambiental
EVIS	Evaluación de Impacto Social
FMV	Valor Justo de Mercado
FS	Feasibility Study
FUNDAR	Fundar, Centro de Análisis e Investigación
IFC	International Finance Corporation
IMDEC	Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario
IMTA	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
INPI	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Juzgado 2° de Distrito	Juzgado Segundo de Distrito en Puebla
LGEEPA	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
LIE	Ley de Inversión Extranjera
LSO	Licencia Social para Operar
Manual de Minería	Manual de Servicios al Público en Materia de Minería de 1993
MIA	Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Minera Gorrión para la explotación del Proyecto Ixtaca
Minera Gavilán	Minera Gavilán, S.A. de C.V.
Minera Gorrión	Minera Gorrión, S.A. de C.V.
NMT	Nivel Mínimo de Trato
NOMs	Normas Oficiales Mexicanas
NSR	Retorno Neto de Fundición
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ONG / NGO	Organización No Gubernamental / Non-Governmental Organization

ONU	Organización de las Naciones Unidas
PEA	Preliminary Economic Assessment
PEIA	Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
PFS	Preliminary Feasibility Study
PODER	Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación
Principios del ICMM	Principios Mineros del Consejo Internacional de Minería y Metales
PROFEPA	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Proyecto Ixtaca	Proyecto de Explotación y Beneficio de Minerales Ixtaca
Queja 184/2017	Recurso de Queja 184/2017 presentado por Tecoltemi en contra del cumplimiento de la Dirección General de Minas por el que autorizó la reducción de las concesiones
Recurso de Revisión 134/2021	Recurso de Revisión 134/2021 que resuelve las impugnaciones de Minera Gorrión, Economía y Tecoltemi en contra de la sentencia definitiva del Amparo 445/2015
Reglamento LGEEPA	Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental
Reglamento LIE	Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera
Resolución de No Factibilidad	Se refiere a la Resolución emitida por Economía el 9 de febrero de 2023 en relación con las Solicitudes de Concesión Cerro Grande y Cerro Grande 2
RIA	Requerimiento de Información Adicional
RSC	Responsabilidad Social Corporativa
SAR	Sistema Ambiental Regional
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEGOB	Secretaría de Gobernación
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SRE	Secretaría de Relaciones Exteriores
TBI	Tratado Bilateral de Inversión
Tecoltemi / Tecoltemic	Comunidad Indígena y Ejido que presentaron el Amparo 445/2015

TFJA	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
TIPAT	Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
TJE	Trato Justo y Equitativo
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte

I. INTRODUCCIÓN

1. Este Memorial de Dúplica contiene la respuesta fáctica, legal y de cuantía (*quantum*) a las reclamaciones presentadas por las Demandantes en contra del Estado mexicano en torno al Proyecto Ixtaca. México ha aportado, tanto en el Memorial de Contestación como en esta Dúplica, pruebas que demuestran que las Demandantes han presentado una descripción parcial e incoherente de los hechos, y que sus acusaciones infundadas de colusión e interferencia política carecen de fundamento y constituyen un abuso del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado previsto en el Capítulo 9 del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).[1]

2. Con base en la evidencia presentada por la Demandada, este Tribunal Arbitral podrá corroborar que no existió una campaña con motivaciones políticas promovida por el Gobierno de México o por las autoridades administrativas en contra del Proyecto Ixtaca, ni se otorgó al proyecto un trato arbitrario o menos favorable en comparación con otras inversiones. Por el contrario, la Demandada ha demostrado que las actuaciones y decisiones emitidas por la Secretaría de Economía (Economía) y por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) fueron plenamente razonables y apegadas a derecho, tomando en consideración la inviabilidad de las solicitudes de concesión, el mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte) y la importancia fundamental de proteger el medio ambiente, los recursos hídricos y los derechos constitucionales de las comunidades indígenas afectadas, en particular la comunidad de Tecoltemic.

3. El Proyecto Ixtaca no es un ejemplo de una inversión legítima aparentemente "destruida" por una arbitrariedad estatal, sino un ejemplo de un proyecto minero que nació con deficiencias técnicas y legales insubsanables, avanzó ignorando el impacto social en la región de

[1] México ve con preocupación que las Demandantes han evitado explicar con puntualidad la estructura, alcances y términos del Third-Party Litigation Funding Agreement y sobre todo del Key Persons Retention Agreement. Con base en cierta información disponible, la Demandada entiende que ejecutivos de Almaden —algunos de los cuales fungen simultáneamente como testigos en el arbitraje— son beneficiarios de un esquema de remuneración mediante el cual recibirán un porcentaje directo o una compensación sujeta al éxito de su reclamación en contra de México. Ver News Release, "Almaden Announces Litigation Financing of up to US$9.5 million; Streamlines Arbitration Management", June 24, 2024. **R-0251**. News Release, "Almaden Enters Into Key Persons Retention Agreement", May 23, 2025. **R-0252**. Key Person Retention Agreements. **R-0253**. Annual Report Almaden Minerals Ltd., for the fiscal year ended December 31, 2025. **R-0254**.

Ixtacamaxtitlán y nunca tuvo claro los impactos ambientales que provocaría. Todo esto llevó al Proyecto Ixtaca a su propio colapso.

Hechos

4. Para facilitar la comprensión del Tribunal Arbitral y desmantelar la historia distorsionada por las Demandantes, la sección de Hechos de la Dúplica se divide en los tres pilares que definieron el colapso del Proyecto Ixtaca: *primero*, la ausencia de licencia social y la firme oposición de Tecoltemic; *segundo*, el cumplimiento del mandato de la Suprema Corte y la estricta legalidad de Economía al reevaluar las solicitudes; y *tercero*, la inviabilidad ambiental y las deficiencias insubsanables de la MIA que impidieron su aprobación por la SEMARNAT.

5. A lo largo de este escrito, la Demandada demostrará que la actuación de cada una de las autoridades mexicanas involucradas respondió de manera legal e independiente a diversas fallas del Proyecto Ixtaca, sin que existiera en momento alguno una "campaña de mala fe" o una instrucción política predeterminada hacia su Proyecto.

6. Esta actuación estatal se dio, además, en un marco legal y regulatorio que las Demandantes conocían perfectamente y estaban obligadas a acatar.

7. *Primero*. Los proyectos extractivos en México requieren debida diligencia social y la aceptación de las comunidades afectadas. El Proyecto Ixtaca no contaba con la aceptación social que le permitiera continuar. Además, Minera Gorrión no implementó los mecanismos de participación social de forma culturalmente apropiada. La Evaluación de Impacto Social (EVIS) y la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) comisionada por las Demandantes, se realizaron cuando el proyecto ya enfrentaba conflictos significativos. Además, la EVIS fue seriamente defectuosa al no identificar adecuadamente a las comunidades como indígenas, entre ellas Tecoltemic. En ese sentido, la oposición de Tecoltemic y las comunidades de Ixtacamaxtitlán, en un ejercicio legítimo de su derecho a la autodeterminación y la defensa del territorio, era de esperarse.

8. *Segundo*. es importante recordar que los problemas con la comunidad iniciaron en 2015, cuando la comunidad indígena de Tecoltemic promovió un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para exigir la protección y defensa de sus derechos humanos. Este juicio de amparo terminó con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte),

la cual estableció órdenes y efectos claros y obligatorios para la autoridad: *(i)* declarar la insubsistencia de los actos que causaban la violación a los derechos de la comunidad —es decir, dejar sin efectos las concesiones otorgadas—; *(ii)* ordenó a la DG Minas evaluar nuevamente la factibilidad de expedir las concesiones conforme al marco legal y regulatorio aplicable; y *(iii)* únicamente en el caso de determinar que su emisión era técnica y jurídicamente factible, llevar a cabo la consulta indígena previa, libre e informada a Tecoltemic.

9. En lugar de asumir la importancia y alcance de esta sentencia, las Demandantes han tratado de desvirtuar la estricta legalidad de una autoridad mexicana que se limitó a acatar un mandato judicial. Como demostrará la Demandada, las Demandantes incluso llegan al extremo de criticar a Economía por no reexpedir concesiones que objetivamente resultaban no factibles por presentar errores técnicos graves e insubsanables, pretendiendo que la autoridad violara la legislación minera mexicana para favorecer sus intereses comerciales.

10. Para intentar justificar e inmunizar estas graves deficiencias técnicas en sus solicitudes, las Demandantes acuden a toda clase de pretextos. Por un lado, invocan una supuesta aprobación implícita o respaldo institucional por parte de Economía a través de sus actuaciones en los juicios de amparo y en iniciativas como el proyecto piloto de la Clasificación Marco de las Naciones Unidas para la Energía y los Recursos Minerales (UNECE), pretendiendo otorgar a un ejercicio de autodiagnóstico o de prueba una validación y respaldo que nunca tuvo.

11. Por otro lado, las Demandantes parecen pretender que la autoridad debió otorgarles un trato de excepción para permitirles corregir errores técnicos de los que eran plenamente conscientes, alterar el sentido directo de la sentencia de la Suprema Corte, o incluso reducir y modificar solicitudes sobre concesiones que jurídicamente ya no existían. Finalmente, la desesperación procesal de las Demandantes las ha llevado al extremo de exhibir documentos sobre los cuales existen serias dudas de su autenticidad e integridad —como el supuesto "borrador" favorable de finales de 2022 (Anexo C-930)—, con el fin de construir su falsa narrativa de que una decisión técnica y justificada era en realidad una conspiración política.

12. Las Demandantes incurren en graves contradicciones sobre su actuar y el de las autoridades. Respecto a la legalidad de la actuación de la DG Minas, las Demandantes omitieron ejercer los medios de impugnación locales que tenían a su alcance para combatir exactamente las mismas decisiones que hoy cuestionan ante este arbitraje. O bien, cuando sí los ejercieron, diversas

cortes y tribunales mexicanos les demostraron en distintas instancias que su interpretación de la sentencia de la Suprema Corte era jurídicamente errónea. En lugar de aceptar los fallos de la justicia mexicana o haberlos combatido a tiempo, las Demandantes buscan ahora que este Tribunal actúe como una corte de apelación y reabra discusiones legales que ya están completamente cerradas por las cortes nacionales.

13. *Tercero*. La Resolución de diciembre de 2020 mediante la cual la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT negó la autorización de impacto ambiental al Proyecto Ixtaca fue una decisión legal y técnicamente fundamentada. La DGIRA evaluó el Proyecto con base en la información proporcionada por las propias Demandantes durante el PEIA y determinó que ésta no era suficiente para acreditar su viabilidad ambiental. La negativa no respondió, por tanto, a una decisión arbitraria o predeterminada, sino a la imposibilidad de establecer, con base en la evidencia científica disponible, que los impactos ambientales del Proyecto podían ser adecuadamente prevenidos, mitigados o controlados.

14. Esta conclusión debe entenderse a la luz de la naturaleza del PEIA como un instrumento de política ambiental de carácter eminentemente preventivo. Su finalidad es precisamente permitir que el Estado evalúe, antes de que se materialice un daño, los posibles efectos de obras y actividades que puedan producir impactos significativos en el ambiente. En ese contexto, los principios preventivo y precautorio permiten y exigen que, frente a riesgos potencialmente graves y a incertidumbre científica, las autoridades adopten medidas de prevención, regulación o restricción. La función de la DGIRA no consistía, por tanto, en demostrar que el Proyecto necesariamente causaría un daño, sino en determinar si la información disponible permitía concluir que sus impactos podían ser adecuadamente gestionados conforme al marco ambiental aplicable.

15. Las Demandantes intentan cuestionar esta conclusión presentando el PEIA como un procedimiento en el que se vulneraron sus derechos al debido proceso. Sin embargo, la evidencia demuestra lo contrario. Las Demandantes tuvieron oportunidad de presentar su MIA, responder a los requerimientos de información adicional y formular las manifestaciones que estimaron pertinentes. Las actuaciones que ahora cuestionan —como la reprogramación de la Reunión Pública de Información, la incorporación de Opiniones Técnicas adicionales o la suspensión del PEIA— estuvieron sustentadas en las facultades de la DGIRA y Minera Gorrión decidió no impugnarlas.

16. Más importante aún, las deficiencias que llevaron a la negativa fueron sustantivas y técnicas, y no meramente procedimentales. La información presentada por las Demandantes contenía deficiencias en aspectos fundamentales para evaluar la viabilidad del Proyecto, incluyendo la disponibilidad y manejo del agua, el modelo de jales y tepetates, los impactos sobre flora y fauna y las posibles afectaciones a comunidades indígenas. Asimismo, la información de la MIA sobre la presencia de población indígena resultó inexacta ante la información obtenida por la DGIRA, lo que hizo necesario profundizar el análisis correspondiente. A pesar de los requerimientos de información adicional formulados durante el PEIA, las Demandantes no lograron solventar las deficiencias identificadas por la DGIRA y, en diversos casos, sostuvieron que la información originalmente presentada era suficiente.

17. Una vez emitida la resolución de la DGIRA, las Demandantes contaban con diversas vías legales para impugnarla, pero deliberadamente decidieron no hacerlo. Esa decisión no puede ser atribuida a la Demandada. Asimismo, las Demandantes prepararon una nueva MIA en 2022, acompañada de información y estudios adicionales destinados, precisamente, a atender algunas de las deficiencias previamente identificadas; sin embargo, decidieron no presentarla, por lo que la autoridad ambiental nunca tuvo oportunidad de evaluarla. No puede, por tanto, atribuirse a México la falta de revisión o eventual autorización de información que las propias Demandantes decidieron no someter a consideración de la autoridad.

18. La autorización de impacto ambiental tampoco constituía el único requisito para desarrollar y operar el Proyecto Ixtaca. Aun de haberse obtenido dicha autorización, el Proyecto habría requerido diversos permisos, licencias y autorizaciones adicionales que tampoco llegaron a materializarse. La DGIRA ejerció sus facultades preventivas con base en la información disponible y fueron las Demandantes quienes no lograron acreditar, dentro del procedimiento correspondiente, la viabilidad ambiental de su Proyecto.

19. *Finalmente*, las Demandantes pretenden convertir actuaciones ordinarias de las autoridades mexicanas en evidencia de una conspiración o actuación de mala fe, sin aportar prueba de que alguna autoridad hubiera actuado fuera de sus facultades o con un propósito ilícito predeterminado.

20. Según las Demandantes la existencia de reuniones interinstitucionales, estudios técnicos y comunicaciones oficiales son elementos de una supuesta “bad faith campaign” contra el Proyecto Ixtaca. Sin embargo, como se demuestra en este Memorial de Dúplica, dichas actuaciones

constituyeron ejercicios ordinarios de las facultades legales de la SEMARNAT, el INPI y las demás autoridades involucradas. En particular, la intervención de estas autoridades tuvo su origen en solicitudes formuladas por habitantes de la región en ejercicio de su derecho constitucional de petición, y a las que las autoridades estaban obligadas a dar respuesta. En ese contexto, la coordinación entre dependencias especializadas y la elaboración de estudios técnicos sobre el agua, suelo, aire, biodiversidad y condiciones sociales y culturales de la zona fueron actuaciones regulares dirigidas a generar información dentro de sus respectivas competencias.

21. Tampoco existe evidencia que permita concluir que estas actuaciones formaran parte de una supuesta campaña política "anti-minería" promovida por el entonces Presidente López Obrador. Las Demandantes construyen esa teoría a partir de declaraciones públicas aisladas, modificaciones regulatorias que no afectaron sus inversiones y políticas públicas legítimas, sin demostrar que el Ejecutivo hubiera instruido a las autoridades competentes a resolver los procedimientos relativos al Proyecto Ixtaca en un sentido determinado. Por el contrario, la evidencia demuestra que las autoridades ejercieron sus atribuciones dentro del marco legal aplicable.

Jurisdicción

22. El Tribunal carece de jurisdicción para conocer de las reclamaciones de las Demandantes por tres razones.

23. *Primero*. El Tribunal carece de jurisdicción *ratione temporis*. Las reclamaciones de las Demandantes derivan de hechos y situaciones que surgieron antes de la entrada en vigor del TIPAT, el 30 de diciembre de 2018. Intentan caracterizar las medidas que impugnan como actos posteriores al Tratado, autónomos y susceptibles de ser reclamados de manera independiente, que se habrían concretado únicamente con la denegación formal de la MIA el 17 de diciembre de 2020. Sin embargo, los propios escritos de las Demandantes demuestran que la controversia sobre la validez y subsistencia de las Concesiones se originó en 2015, con los procedimientos de *amparo* iniciados por Tecoltemi. Las propias Demandantes sitúan los orígenes de la controversia en la elección del Presidente López Obrador y alegan que, desde principios de diciembre de 2018, su administración adoptó una política dirigida a impedir el desarrollo minero extranjero, incluido el Proyecto Ixtaca. Las Demandantes no pueden presentar una política anterior a la entrada en vigor

del tratado como la causa común de las supuestas violaciones y, al mismo tiempo, pedir al Tribunal que la ignore al delimitar su jurisdicción temporal. Lo anterior se aborda en la Sección IV.A.1.

24. Las reclamaciones de las Demandantes también están prescritas de conformidad con el artículo 9.21.1 del TIPAT. Para efectos del plazo de prescripción, el artículo 9.21.1 exige que el inversionista haya tenido —o debiera haber tenido— conocimiento de la supuesta violación y de la pérdida o daño derivados de ella después de la Fecha Crítica, el 14 de diciembre de 2020. Conforme a la propia teoría del caso de las Demandantes, ambos requisitos se cumplieron antes de la Fecha Crítica. Su Memorial y su Réplica describen una secuencia de conductas supuestamente ilícitas, que conocían desde 2019, que afectaron progresivamente al Proyecto y culminaron con la denegación de la MIA y la revocación de las Concesiones. Sus propios testigos confirman que tenían conocimiento de la disminución del precio de las acciones que supuestamente fue causada por la conducta de México mucho antes de diciembre de 2020. Las Demandantes intentan evitar esta conclusión volviendo a categorizar sus reclamaciones como si estuvieran basadas en cuatro medidas independientes, todas posteriores al 14 de diciembre de 2020. Sin embargo, esto es irreconciliable con su teoría de un curso de conducta único: no pueden sostener que las medidas formaron parte de un curso de conducta único, acumulativo e indivisible para efectos del mérito y de los daños, y simultáneamente tratar cada medida como un acto independiente y susceptible de ser reclamado por separado para efectos del plazo de prescripción. Conforme a su propia teoría del curso de conducta indivisible, el plazo de prescripción comenzó a correr antes de la Fecha Crítica. Lo anterior se aborda en la Sección IV.A.2.

25. *Segundo*. El Tribunal carece de jurisdicción *ratione materiae* respecto de las reclamaciones de Almadex y Minera Gavilán. La regalía NSR y la participación accionaria de Almadex en Minera Gavilán derivan de una reorganización interna que no implicó la aportación de nuevos recursos a México y no satisface los requisitos de aportación, riesgo de inversión, duración y contribución al desarrollo económico exigidos por el artículo 9.1 del TIPAT y el artículo 25(1) del Convenio del CIADI. En la Réplica, las Demandantes intentan caracterizar la NSR como el "legado económico" de las aportaciones previas de Minera Gavilán al Proyecto. Sin embargo, al describir una regalía como el legado de aportaciones pasadas —aportaciones que ya habían sido compensadas mediante la transferencia de 2011—, las Demandantes reconocen efectivamente que Almadex no realiza actualmente ninguna aportación al desarrollo económico de México.

26. *Tercero*. El Tribunal carece de jurisdicción *ratione personae* y *ratione voluntatis*. Las subsidiarias mexicanas de las Demandantes —Minera Gorrión y Minera Gavilán— suscribieron declaraciones exigidas por la legislación mexicana al amparo de la Constitución, la Ley Minera, la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento, mediante las cuales acordaron ser consideradas como nacionales mexicanos respecto de sus derechos mineros y se comprometieron a no invocar protección extranjera. En la Réplica, las Demandantes sostienen que estas declaraciones son cláusulas Calvo de formato estándar limitadas a la protección diplomática, que los requisitos establecidos por el derecho interno no pueden prevalecer sobre los derechos conferidos por el TIPAT y que las declaraciones no constituyen una renuncia válida a los derechos derivados del tratado. Ninguno de estos argumentos resiste un escrutinio. Las declaraciones no se limitan a la protección diplomática: constituyen compromisos constitucionales, legales y jurídicos que permitieron a las Demandantes acceder al sector minero mexicano. Las Demandantes no pueden aceptar la nacionalidad mexicana cuando esta les abre la puerta a las concesiones y rechazarla cuando les cierra la puerta al arbitraje.

Méritos

Expropiación

27. Las Demandantes no eran titulares de derechos susceptibles de expropiación. Los derechos que las Demandantes identifican como objeto de la supuesta expropiación —los derechos a explorar, explotar y beneficiarse de los recursos minerales— estaban condicionados a la obtención de permisos y autorizaciones adicionales, incluida la MIA, cuya autorización fue denegada. Las Demandantes nunca adquirieron el derecho a explotar los recursos minerales, y un derecho que nunca fue adquirido no puede ser expropiado. Asimismo, no tuvo lugar una expropiación directa en el sentido del TIPAT. El Anexo 9-B(2) define la "expropiación directa" como aquella que implica una "transferencia formal del título de propiedad o una incautación directa". La Resolución de No Factibilidad de la Secretaría de Economía denegó las solicitudes de concesión de las Demandantes; no transfirió ningún título de propiedad a México ni a un tercero, ni implicó una requisa.

28. La tardía teoría de "expropiación judicial" planteada por las Demandantes es inadmisible y carece de mérito. Por primera vez en la Réplica, las Demandantes sugieren que la decisión de la Suprema Corte constituye una "expropiación judicial ilícita". Esta reclamación nunca fue

planteada en el Memorial y no puede introducirse en esta etapa. En cualquier caso, el estándar aplicable a la expropiación judicial —en la medida en que el TIPAT siquiera contemple dicho concepto— es el de denegación de justicia o ilegalidad manifiesta. Las Demandantes no han alegado una denegación de justicia, no han identificado sus elementos ni han intentado demostrar que la decisión de la Suprema Corte haya violado el derecho internacional.

29. Incluso suponiendo *arguendo* que las Demandantes fueran titulares de derechos susceptibles de expropiación, las actuaciones de México satisficieron las condiciones de legalidad.

30. Resulta aplicable la doctrina de los poderes de policía ("*police powers*"): los actos regulatorios no discriminatorios destinados a proteger objetivos legítimos de bienestar público —incluida la protección ambiental y los derechos indígenas— no constituyen una expropiación que dé lugar a una obligación de indemnizar. La Secretaría de Economía denegó las solicitudes de concesión porque la solicitante no cumplió con los requisitos legales y técnicos establecidos en la Ley Minera y su Reglamento, determinación que se encuentra claramente comprendida dentro de la finalidad pública de garantizar que las concesiones mineras se otorguen únicamente cuando se satisfagan las condiciones establecidas por la ley. Los tribunales internacionales han reconocido consistentemente que debe otorgarse cierto margen de deferencia a las autoridades regulatorias que actúan dentro de sus ámbitos de competencia técnica, y que un tribunal arbitral no debe sustituir su propio criterio por el de la autoridad nacional en materias especializadas de regulación ambiental y minera.

Nivel Mínimo de Trato

31. El Artículo 9.6 del TIPAT limita el trato justo y equitativo al estándar mínimo de trato conforme al derecho internacional consuetudinario; no crea obligaciones autónomas de transparencia, coherencia, proporcionalidad, buena fe o ausencia de arbitrariedad. Las Demandantes no han establecido el contenido de las normas consuetudinarias que invocan ni han demostrado una conducta que alcance el umbral elevado exigido por dicho estándar.

32. La conducta de México no fue contradictoria, retroactiva, discriminatoria ni arbitraria. Las actuaciones posteriores de la Secretaría de Economía no contradijeron arbitrariamente las confirmaciones previas de las Concesiones: respondieron a una sentencia vinculante de la Suprema Corte que ordenó declarar insubsistentes las Concesiones y exigió una nueva evaluación de su factibilidad. La evaluación de la Secretaría de Economía no fue retroactiva: examinó las solicitudes

originales a la luz de los requisitos legales aplicables al momento de su presentación, y no de nuevas normas aplicadas con posterioridad. Las alegaciones de las Demandantes respecto de una campaña política carecen de sustento: la Resolución de No Factibilidad respondió al mandato de la Suprema Corte y expuso razones jurídicas y técnicas específicas para la determinación. La denegación de la MIA, asimismo, fue resultado de una evaluación ambiental individualizada que identificó múltiples deficiencias concretas.

33. Las Demandantes no han demostrado que consideraciones políticas hayan determinado las medidas impugnadas —la denegación de la MIA y la Resolución de No Factibilidad— ni que las razones jurídicas, técnicas y ambientales expresadas por las autoridades hayan sido pretextuales. La denegación de la Autorización de Impacto Ambiental a través de la MIA y la Resolución de No Factibilidad fueron emitidas por autoridades distintas, en procedimientos diferentes y con fundamentos regulatorios y judiciales independientes.

34. El hecho de que las Demandantes no hayan impugnado la denegación de la MIA y hayan abandonado el Juicio de Nulidad les impide demostrar que las medidas impugnadas fueran definitivas, irreparables o suficientemente graves como para constituir una violación del artículo 9.6.

Trato Nacional

35. Las Demandantes no han demostrado un trato discriminatorio en el sentido de los artículos 9.4 y 9.5. Como lo confirma la Nota Interpretativa acordada por las Partes del TIPAT, estas disposiciones "no prohíben todas las medidas que resulten en un trato diferenciado. Más bien, buscan garantizar que los inversionistas extranjeros o sus inversiones no sean tratados de manera menos favorable en razón de su nacionalidad". La denegación de la MIA fue resultado de una evaluación ambiental individualizada, mientras que la Resolución de No Factibilidad fue resultado de un procedimiento exigido por una decisión vinculante de la Suprema Corte; ninguna de las dos medidas estuvo dirigida contra las Demandantes debido a su nacionalidad.

36. Las Demandantes no han identificado comparadores válidos que se encontraran en circunstancias similares. En la Réplica, las Demandantes contrastan distintos resultados regulatorios entre diversos proyectos mineros, pero no toman en cuenta las diferencias fundamentales que hicieron que dichos proyectos no fueran comparables y que condujeron a decisiones regulatorias distintas: ningún otro titular de una concesión estuvo sujeto al mismo

procedimiento ante la Suprema Corte, a la misma orden judicial que declaró insubsistentes sus concesiones ni a la misma reevaluación administrativa *de novo*. Los distintos resultados regulatorios no implican discriminación cuando las circunstancias fácticas, técnicas, jurídicas y sociales de cada proyecto eran fundamentalmente distintas. En cualquier caso, las medidas de México respondieron a objetivos gubernamentales legítimos, racionales y no discriminatorios. Las medidas impugnadas por las Demandantes estaban vinculadas con circunstancias regulatorias concretas: la protección ambiental, los derechos indígenas y el cumplimiento de una decisión vinculante de la Suprema Corte. Estas políticas se aplicaron sin distinción de nacionalidad y reflejaron el ejercicio de las facultades regulatorias soberanas de México.

37. Por lo tanto, las Demandantes no han acreditado prima facie un caso que permita trasladar la carga de la prueba a México. En cualquier caso, las medidas impugnadas guardaban una relación racional con objetivos regulatorios legítimos y no discriminatorios.

Daños

38. La reclamación de daños de las Demandantes sigue teniendo inconsistencias infranqueables. Por un lado, la valoración de daños no es compatible con una reclamación por expropiación directa, ya que ni el Proyecto ni la mina en operación que las Demandantes suponen para efectos de determinar el quantum pasaron a manos del Estado. La Demandada observa además que las Demandantes han ofrecido una única reclamación de daños que solo cuantifica los daños asociados con la presunta expropiación directa. De esta manera, si el Tribunal determinara que no hubo tal expropiación, no habría una cuantificación de los daños en este caso, y la consecuencia de tal omisión no es una reducción del monto sino la desestimación total de su reclamo de daños por falta de prueba. A ello se suma que la reclamación sigue sin desagregarse entre Almaden, Almadex y las inversiones en México, pese a que los artículos 9.29(2) y 9.29(5)(b) del Tratado prescriben acciones distintas según quién haya sufrido la pérdida. Estos y otros problemas de especificación de la reclamación, incluyendo la introducción de argumentos nuevos en la Réplica, se abordan en la Sección VI.A.

39. Las Demandantes malinterpretan el estándar de compensación aplicable (reparación plena) y, suponen, equivocadamente, que éste les permite plantear un escenario contrafactual conforme al cual el Proyecto habría continuado desarrollándose entre la fecha de Denegación de la MIA y la fecha de la Resolución de No Factibilidad para así poder determinar los daños con base en una

mina operativa que nunca existió. En esencia, solicitan a este Tribunal suponer la existencia de la inversión cuya expropiación reclaman. Sin embargo, la pregunta jurídica relevante no es cuál habría sido el valor del Proyecto si se hubiese llevado a cabo, sino cuál habría sido su valor de no haberse producido ese ilícito. Este argumento se desarrolla a detalle en la Sección VI.B

40. En esa misma sección se explica que el escenario contrafactual no puede suponer un resultado favorable en procesos administrativos locales que competen solo a las autoridades locales como la evaluación de la MIA o la decisión sobre la viabilidad de las concesiones. Suponer, por ejemplo, que la MIA se habría aprobado en el escenario contrafactual, como lo sugieren las Demandantes, implicaría sustituir el criterio adoptado por las autoridades mexicanas con el criterio del Tribunal, algo que los tribunales internacionales sistemáticamente han rechazado. Como se explicará más adelante, el contrafactual jurídicamente correcto consiste en suponer que la MIA habría sido evaluada sin violar las disposiciones del Tratado, lo cual evidentemente no implica su aprobación. A ello se añade que, incluso asumiendo la aprobación de la MIA, el Proyecto no habría quedado en condiciones de seguir desarrollándose: faltaban otros permisos federales y locales, la consulta a las comunidades indígenas seguía pendiente y el derecho a explotar los recursos nunca llegó a adquirirse. Se observa además que este mismo argumento puede ser planteado, en la alternativa, como un argumento de causalidad, ya que el daño reclamado no se sigue de las violaciones que se reclaman y el artículo 9.19.1del TIPAT exige que se acredite que el daño o la pérdida se haya sufrido "by reason of, or arising out of, that breach".

41. Sobre la fecha de valuación, la Demandada mantiene su posición de que una valoración de daños *ex ante* es congruente con el estándar de reparación plena y el enfoque apropiado considerando que el Proyecto nunca avanzó a su fase de construcción. Sin embargo, sostiene que, en virtud del reconocimiento de las Demandantes de que el Proyecto no habría podido continuar desarrollándose sin la aprobación de la MIA, la fecha ex ante debe redefinirse como el 17 de diciembre de 2020, sin perjuicio de la objeción *ratione temporis* que se desarrolla en la sección de jurisdicción de este escrito respecto de la conducta anterior al 14 de diciembre de 2020. En contraste, el enfoque *ex post* no es adecuado cuando la intención se limita a maximizar el monto reclamado sin reducir la incertidumbre asociada a la estimación, particularmente en casos en donde el Estado no obtuvo un beneficio indebido como resultado del presunto ilícito. Asimismo, la Demandada sostiene que incluso si este Tribunal fuese de la idea de que una valuación ex post es el enfoque apropiado a seguir en este caso, el enfoque de Quadrant permite llevar a cabo esa

valoración sin incurrir en los excesos especulativos de suponer una mina plenamente operativa que nunca se construyó para efectos de quantum a partir de 2023. Estos temas se abordan en la Sección VI.C

42. La Demandada mantiene su posición sobre la culpa concurrente de las Demandantes. Contrario a lo que sugieren las Demandantes, la posición de la Demandada no es que Almaden hubiese infringido una obligación autónoma de obtener una licencia social, sino que determinadas decisiones y omisiones de las Demandantes contribuyeron materialmente a generar y agravar el perjuicio cuya reparación reclaman en este procedimiento. En el presente caso existe una secuencia causal concreta de la contribución de las Demandantes al fracaso del Proyecto: las deficiencias en la identificación y gestión del riesgo indígena y comunitario dieron lugar a una controversia constitucional promovida por la comunidad Tecoltemi en 2015 que, a su vez, derivó en las medidas cautelares y decisiones judiciales que afectaron los derechos de las Demandantes como concesionarias. A pesar de conocer este riesgo desde 2015, las Demandantes continuaron desarrollando el Proyecto como si ese riesgo no hubiese existido. Esto se desarrolla en detalle en la Sección VI.D

43. El tema de la cuantificación de los daños se aborda en la Sección VI.E. La posición de la Demandada es que la valuación DCF que utilizan los peritos de las Demandantes es excesivamente especulativa, no solo porque se basa en la existencia de una mina en operación desde 2023 que nunca existió, sino porque se apoya en proyecciones de precios insostenibles y en una redefinición expansiva del alcance del proyecto basada en la opinión de SLR. Los expertos en minería de la Demandada presentan un segundo informe en donde explican que la redefinición del Proyecto por parte del experto de las Demandantes SLR excede con mucho los límites del FS en el que se apoyan las Demandantes para justificar su método.

44. En contraste, el enfoque utilizado por el perito de la Demandada (capitalización de mercado) se basa en el valor que el público inversionista asignaba al Proyecto inmediatamente antes de las violaciones reclamadas. El perito de la Demandada explica además que dicho valor se puede actualizar a cualquier otra fecha que el Tribunal considere apropiada aplicando un índice representativo del sector que refleja, sobre una base objetiva, la evolución probable del Proyecto.

45. En esa misma sección (VI.E) se responde a las dos críticas de las Demandantes y Brattle sobre la supuesta inviabilidad del enfoque de Quadrant. Ahí se explica, entre otras cosas, que no

se puede afirmar que el valor de capitalización de Almaden estuviese "contaminado" por la expectativa de conducta ilegal futura porque el objetivo de la reparación plena es resarcir a la parte demandante los daños causados por los presuntos ilícitos y, por consiguiente, los escenarios contrafactual y real no pueden divergir antes de la primera violación que se reclama. También se responde a la segunda objeción consistente en que Quadrant ignoró el desarrollo del Proyecto entre la primera medida reclamada (la Denegación de la MIA) y la Resolución de No Factibilidad. Para la Demandada es claro que el estándar de reparación plena no exige semejante hipótesis y, aun si lo hiciere, el resultado sería un ejercicio profundamente especulativo y no un resultado probable.

46. Finalmente, la Sección VI.F aborda el tema de los intereses. La Demandada mantiene su postura de que la tasa de interés pre laudo que solicitan las Demandantes las compensaría por un riesgo de impago (country default risk) que no enfrentaron ni enfrentarán entre la fecha del daño y la fecha del laudo. Por lo tanto, redundaría en una sobrecompensación material del daño en caso de concederse. La Demandada también sostiene que el argumento de que una tasa menor a la que proponen las Demandantes incentivaría un retraso en el pago del laudo es especulativo e irrelevante, pues el objetivo del estándar de reparación plena es asegurar una compensación adecuada del daño causado por la violación, no incentivar el pago de un laudo.

II. HECHOS

A. El Proyecto Ixtaca no era viable desde el punto de vista regulatorio y social

1. Etapas del proyecto y requisitos regulatorios aplicables

a. Los requisitos en materia de legislación minera, ambiental y social

47. Las Demandantes presentan la terminación del Proyecto como si el Estado hubiera interrumpido arbitrariamente el desarrollo de una mina encaminada a su explotación. Esa caracterización omite una cuestión fundamental para entender la controversia: la existencia de concesiones y actividades de exploración no equivale a la existencia de una mina viable, autorizada y lista para operar. Para entender qué fue lo que efectivamente ocurrió, es necesario situar los hechos en el proceso de desarrollo que atravesaba el Proyecto y determinar qué etapa había alcanzado y qué condiciones aún debía satisfacer para avanzar.

48. Ese desarrollo es necesariamente progresivo. Cada etapa supone un mayor grado de información, certeza técnica y evaluación económica. En términos generales, pueden identificarse las siguientes etapas: *i)* exploración inicial; *ii)* exploración avanzada; *iii)* Preliminary Economic Assessment (PEA); *iv)* Preliminary Feasibility Study (PFS); *v)* Feasibility Study (FS); *vi)* construcción y operación, una vez financiado y autorizado el proyecto; y *vii)* cierre, con desmantelamiento, rehabilitación y monitoreo posterior.[2]

49. Cada etapa tiene exigencias técnicas, ambientales y sociales crecientes y acumulativas, cada una con su propio objeto de tutela. Además, los proyectos tienen exigencias transversales como el estándar internacional de conducta empresarial responsable. El cumplimiento de cada exigencia es independiente. Por ejemplo, la obtención del título de concesión no exime a la empresa minera de satisfacer la autorización ambiental, ni tampoco a dejar de realizar una diligencia debida social.[3]

50. Con esto en mente, es necesario distinguir las tres exigencias técnicas que las Demandantes no cumplieron y presentan como una supuesta "coordinated campaign against the Project":[4]

- Las solicitudes de las Concesión de Cerro Grande tuvieron errores insubsanables, en clara contradicción de las disposiciones técnicas aplicables;[5]
- La MIA tenía inconsistencia y omisiones importantes que no permitían conocer los impactos del Proyecto Ixtaca;[6] y
- Las deficiencias en su relacionamiento con las comunidades de Ixtacamaxtitlán no cumplió una debida diligencia social.[7]

51. Cada exigencia técnica responde a un fundamento técnico y jurídico propio. En las dos primeras intervinieron dos autoridades distintas, que adoptaron sus respectivas decisiones con base en consideraciones y motivaciones específicas, debidamente documentadas. Por lo tanto, estos hechos no guardan entre sí la relación que pretenden atribuirles las Demandantes, ni tienen sustento alguno en una supuesta campaña política.

---

2 Memorial de Contestación, ¶ 126.

3 Memorial de Contestación, ¶¶ 9,41.

4 Réplica, ¶ 562.

5 *Ver* Sección C.5 *infra.*

6 Memorial de Contestación, Sección II.D.

7 *Ver* Sección 2 *infra*.

52. Por su carácter transversal, la ausencia de Licencia Social y de buenas prácticas en materia de diligencia social tuvo repercusiones en la totalidad del desarrollo del Proyecto. Por ejemplo, en el caso de las Concesiones, las mismas fueron declaradas Insubsistentes en 2022 debido a que la comunidad indígena de Tecoltemic no había sido consultada ni informada previo a la emisión de las Concesiones sobre sus territorios, generando un fuerte rechazo al Proyecto que dio origen al Amparo 445/2015. Ese mismo rechazo de las comunidades locales estuvo presente durante el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto.

53. En este sentido, ni las Concesiones ni la MIA por si solas aseguraban que el desarrollo del Proyecto Ixtaca fuera viable o pudiera entrar en operación. Las Demandantes tenían que observar una larga lista de requisitos técnicos, regulatorios, ambientales y sociales a lo largo de la totalidad del Proyecto. Las siguientes Secciones buscan explicar algunos de los requisitos principales y relevantes para este caso.

b. Requisitos en materia de legislación minera y su relación con la debida diligencia social

54. En su Memorial de Contestación, la Demandada explicó que la minería en México pertenece a un régimen especial regulado por el Artículo 27 de la Constitución. Conforme a este régimen, la propiedad de los minerales es del dominio de la Nación, el cual es inalienable e imprescriptible.[8] La explotación por particulares únicamente puede realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal conforme a los requisitos y condiciones establecidas en las leyes aplicables, *i.e.*, la Ley Minera, el Reglamento a la Ley Minera y el Manual de Servicios al Público en Materia de Minería.[9]

55. El Artículo 13 de la Ley Minera sujeta el otorgamiento de una concesión al cumplimiento de las condiciones y requisitos que establecen la Ley y su Reglamento, evaluados por la DG Minas a través del examen de factibilidad. Los Artículos 4 y 16 del Reglamento de la Ley Minera detallan los requisitos formales y técnicos de toda solicitud de concesión y cuyo incumplimiento faculta a la autoridad para desaprobar la solicitud conforme al Artículo 23 del Reglamento de la Ley Minera.

---

[8] Memorial de Contestación, ¶ 35. Ver también, Constitución mexicana, Artículos 27-28. La Consitución mexicana aclara que la concesión del uso y aprovechamiento de bienes del dominio de la Nación deberán sujetarse a las leyes, las cuales fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la utilización social de los bienes.

[9] Memorial de Contestación, ¶¶ 37-38, 41.

56. La concesión minera es un acto administrativo condicionado y no un derecho de propiedad incondicional. Por lo tanto, se sujeta al cumplimiento continuo de los requisitos legales aplicables, inclyendo aquellos en materia ambiental y social discutidos *infra*.

57. En el caso de las Concesiones, en el Amparo 445/2015, promovido en 2015 por la comunidad indígena de Tecoltemic, se cuestionó que fueron otorgadas sin cumplir con el requisito en materia de Consulta Previa, Libre e Informada (Consulta Indígena) exigida por el Convenio 169 de la OIT y reflejado en el Artículo 2 de la Constitución Mexicana. Tecoltemi argumentó que la emisión de las Concesiones afectaba su derecho a ser consultada, así como su derecho a disfrutar y aprovechar su territorio. En consecuencia, la Suprema Corte resolvió en 2022 que las Concesiones debían ser declaradas insubsistentes y que DG Minas debía evaluar la factibilidad de su emisión para después, en el caso de ser factibles, se consultara a las comunidades indígenas sobre el Proyecto.

58. En México, la Consulta Indígena se ha desarrollado progresivamente a través del marco constitucional y de los criterios de la Suprema Corte, que han reconocido la obligación de realizar una Consulta Indígena cuando una autorización o decisión pública pueda afectar a una comunidad indígena.[10] La reforma a la Ley de Minería de 2023 reforzó expresamente esta obligación al vincular la Consulta Indígena con proyectos ubicados en territorios indígenas o afromexicanos.[11] Si bien dicha reforma es posterior a los hechos centrales de esta controversia, su contenido confirma que el requisito de Consulta Indígena es transversal a los requisitos regulatorios en materia minera.

c. Requisitos en materia de legislación ambiental y su relación con la debida diligencia social

59. Tras la obtención de una concesión minera, el titular debe obtener los permisos y autorizaciones ambientales correspondientes a la etapa en que se encuentre el proyecto. Si bien un proyecto minero puede comprender diversas fases y actividades desde el punto de vista técnico y

[10] Tesis 2a./J. 10/2023: "Derecho Humano a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas. Resulta exigible en forma previa a la emisión de las evaluaciones y autorizaciones ambientales atinentes a proyectos u obras que puedan impactar en su entorno o forma de vida". Onceava Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 2023, página 2201. **R-0116**.

[11] Artículo 6, Ley Minera 2023. **R-0015**.

operativo, para efectos de los permisos y autorizaciones ambientales, dichas actividades se encuadran, en términos generales, en dos grandes etapas: (i) exploración y (ii) explotación.

60. Como explicó la Demandada en su Memorial de Contestación, para 2010, cuando las Concesiones ya estaban vigentes, el marco jurídico ambiental aplicable a las actividades de las Demandantes estaba conformado, entre otros instrumentos, por la LGEEPA y su Reglamento.[12]

61. Durante la etapa de exploración minera, y de conformidad con la NOM-120, que establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa, se deben presentar los Informes Preventivos correspondientes al proyecto. Estos documentos tienen por objeto dar a conocer los datos generales de una obra o actividad.[13]

62. Para pasar a la etapa de explotación, un proyecto debe primero obtener una Autorización de Impacto Ambiental ("AIA"), esta autorización está dentro de un procedimiento administrativo integrado por diversas etapas regulatorias prolongadas y sucesivas, denominado PEIA.[14] Este procedimiento se inicia con la presentación de una MIA, un documento técnico en el que se describen las obras o actividades proyectadas, sus posibles efectos sobre el medio ambiente y las medidas preventivas, de mitigación y, en su caso, de compensación que se proponen para atenderlos.[15]

63. La DGIRA de la SEMARNAT es la autoridad competente para evaluar la MIA y, cuando resulte necesario para continuar con la evaluación, formular Requerimientos de Información Adicional.[16] Estos requerimientos tienen por objeto que el promovente subsane omisiones o proporcione la información necesaria para que la autoridad pueda continuar con la evaluación correspondiente.[17]

64. Dentro del PEIA, y con base en el Artículo 34 de la LGEEPA, se contempla la posibilidad de llevar a cabo una Consulta Pública cuando las obras o actividades puedan causar desequilibrios

---

12 Memorial de Contestación, ¶ 179.

13 Memorial de Contestación, ¶ 180.

14 Memorial de Contestación, ¶ 72

15 Memorial de Contestación, ¶ 74. Artículo 30, LGEEPA. **C-0156**.

16 Memorial de Contestación, ¶ 69. *Ver también*, Reglamento Interior SEMARNAT, 27 de julio de 2022. **R-0032**.

17 Artículo 35 Bis, LGEEPA. **C-0156**.

ecológicos o daños a la salud pública o al ecosistema. Esta Consulta Pública constituye un mecanismo de participación ambiental distinto e independiente de la Consulta Indígena.[18]

65. De forma paralela, el Convenio 169 de la OIT reconoce un derecho específico de los pueblos y comunidades indígenas, a ser consultados por el Estado cuando una medida legislativa o administrativa pueda afectarles directamente, en específico cuando se encuentren involucrados recursos naturales existentes en sus territorios.[19]

66. En México, este derecho se ha desarrollado progresivamente a través del marco constitucional y de los criterios de la Suprema Corte, que han reconocido la obligación de realizar un Consulta Indígena cuando una autorización o decisión pública pueda afectar a una comunidad indígena.[20] La reforma a la Ley de Minería de 2023 reforzó expresamente esta obligación al vincular la Consulta Indígena con proyectos ubicados en territorios indígenas o afromexicanos.[21] Si bien dicha reforma es posterior a los hechos centrales de esta controversia, su contenido es consistente con un marco jurídico que ya reconocía, al momento relevante, la obligación de realizar una Consulta Indígena al momento relevante.[22] En el caso del Proyecto Ixtaca, en febrero de 2019, las Demandantes buscaron obtener la AIA del Proyecto, y para ello presentaron la MIA del Proyecto Ixtaca,[23] acompañada de un Estudio de Riesgo Ambiental, aplicable a "actividades altamente riesgosas".[24]

67. La DGIRA formuló un Requerimiento de Información Adicional y posteriormente, decretó la suspensión del procedimiento dentro del propio PEIA antes de resolver, en definitiva, la MIA. Finalmente, negó la MIA debido a que las Demandantes "no cumpl[ieron] con la información mínima requerida" para garantizar el cumplimiento de la LGEEPA y su Reglamento. Entre otras,

---

18 Memorial de Contestación, ¶ 218.

19 Convenio 169 de la OIT, Artículos 6, 15. **RL-0028**.

20 Tesis 2a./J. 10/2023: "Derecho Humano a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas. Resulta exigible en forma previa a la emisión de las evaluaciones y autorizaciones ambientales atinentes a proyectos u obras que puedan impactar en su entorno o forma de vida". Onceava Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 2023, página 2201. **R-0116**.

21 Artículo 6, Ley Minera 2023. **R-0015**.

22 Sección II.A.1.d.1.

23 Memorial de Contestación, ¶ 214. Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019. **C-0262**.

24 Artículo 147, LGEEPA. **C-0156**. Artículo 17, Reglamento LGEEPA. **C-0166**.

se señalaron deficiencias respecto de la reserva y disponibilidad de agua para el Proyecto, de las solicitudes de permisos, de la caracterización de los jales y tepetates, y del impacto ambiental sobre el Sistema Ambiental Regional.[25]

68. Vale la pena distinguir dos mecanismos de participación que, aunque comparten la denominación de "consulta", tienen destinatarios, objeto, inicio y efectos distintos. Como se explicó anteriormente, la consulta pública ambiental forma parte del PEIA, mientras que la Consulta Indígena deriva del derecho específico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a ser consultados frente a medidas susceptibles de afectarles directamente.

69. El Artículo 34 de la LGEEPA contempla un mecanismo general de participación pública dentro del PEIA. Una vez integrada la MIA al expediente, la SEMARNAT debe ponerla a disposición del público y, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, puede llevar a cabo una consulta pública.[26] Las observaciones y propuestas formuladas se incorporan al expediente y se reflejan en la resolución que emita la autoridad ambiental.[27]

70. Sus destinatarios son personas de la comunidad, sin que exista un sujeto colectivo titular del derecho; su objeto se refiere a los aspectos ambientales del proyecto y a las medidas de prevención y mitigación; y su realización depende de una solicitud y de la decisión de la autoridad ambiental. La reunión pública de información constituye, a su vez, una facultad de la SEMARNAT que procede en los supuestos establecidos en la LGEEPA y se desarrolla conforme a las reglas previstas en el Reglamento.[28]

71. El papel del promovente también es distinto. La empresa presenta la MIA y proporciona la información técnica necesaria para la evaluación del proyecto y, cuando corresponde, participa en la consulta pública y en la reunión de información. Sin embargo, la evaluación ambiental y la decisión sobre la autorización corresponden a la autoridad ambiental, no a la empresa ni a los participantes en la consulta.[29]

---

25 Memorial de Contestación, Sección D.2.d.

26 Artículo 34, fracción I, LGEEPA. **C-0156**.

27 Artículo 34, fracción V, LGEEPA. **C-0156**.

28 Artículo 34, fracción III, LGEEPA. **C-0156**. Artículo 43, fracciones I-V, Reglamento LGEEPA. **C-0166**.

29 Artículo 43, fracción III, Reglamento LGEEPA. **C-0166**.

72. La Consulta Indígena, en cambio, constituye un derecho específico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La obligación de garantizar su realización corresponde al Estado y se activa cuando una medida administrativa o legislativa pueda afectarles directamente.[30] La Consulta Indígena debe realizarse previamente a la adopción de la medida susceptible de producir la afectación, de modo que la participación de la comunidad pueda incidir efectivamente en el proceso de decisión.[31]

73. En consecuencia, la empresa ocupa una posición distinta en cada mecanismo. Mientras que en la consulta pública ambiental participa como promovente del proyecto sujeto a evaluación, en la Consulta Indígena participa, en su caso, como interesado y fuente de información.[32]

d. Instrumentos de participación social en cualquier proyecto minero

(1) El Derecho de Consulta Indígena

74. La Consulta Libre Previa e Informada, conocida también como Consulta Indígena, es el procedimiento mediante el cual el Estado entabla un diálogo de buena fe con los pueblos o comunidades susceptibles de resultar afectados por una medida legislativa o administrativa. Debe realizarse de manera previa, informada y culturalmente adecuada, a través de las instituciones representativas de la comunidad. Conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 de la OIT), su finalidad es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas propuestas.[33]

---

[30] Artículo, 20 Bis 8, LGEEPA. **C-0156**. *Ver también,* Artículos. 6.1.a, Convenio 169 de la OIT. **RL-0028**.

[31] Tesis 2a./J. 10/2023: "Derecho Humano a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas. Resulta exigible en forma previa a la emisión de las evaluaciones y autorizaciones ambientales atinentes a proyectos u obras que puedan impactar en su entorno o forma de vida". Onceava Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 2023, página 2201. **R-0116**. Tesis 2a./J. 11/2023: "Derecho a la consulta previa. El deber de llevarla a cabo se actualiza ante la mera posibilidad de que la decisión estatal afecte o incida de manera directa o diferenciada a los pueblos y comunidades indígenas, sin que resulte exigible la acreditación del daño y su impacto significativo". Onceava Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 2023, página 2199. **R-0118**.

[32] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Compilación y análisis del marco jurídico de la consulta indígena en México*, julio de 2019, p. 75. **RL-0220.**

[33] Convenio 169 OIT, Artículo 6.2. **RL-0028**.

75. Conviene precisar dos elementos de la Consulta Indígena: *Primero,* el Convenio 169 de la OIT y los instrumentos que lo desarrollan atribuyen la obligación a la autoridad, que es quien debe diseñar, conducir, supervisar y validar el procedimiento. *Segundo,* los posibles resultados del proceso de Consulta Indígena no equivalen a otorgar automáticamente a las comunidades un derecho general de veto sobre cualquier medida.[34] Su finalidad es alcanzar un acuerdo, y el estándar interamericano contempla el consentimiento como requisito en los casos de proyectos de desarrollo o inversión a gran escala capaces de producir un impacto profundo en el territorio y los derechos de los pueblos indígenas o tribales. [35]

76. La obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas no surgió con la sentencia de la Suprema Corte de 2022. El punto de partida es el Convenio 169 de la OIT, que entró en vigor para México en 1991.[36] Sus artículos 6 y 15 establecen, respectivamente, la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, y garantías específicas tratándose de los recursos naturales existentes en sus tierras.

77. El reconocimiento constitucional siguió de inmediato. En 1992 se reformó el Artículo 4° de la Constitución para reconocer expresamente la composición pluricultural en México "sustentada originalmente en sus pueblos indígenas", y garantizar el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social.[37]

---

[34] Tesis 2a./J. 10/2023: "Derecho Humano a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas. Resulta exigible en forma previa a la emisión de las evaluaciones y autorizaciones ambientales atinentes a proyectos u obras que puedan impactar en su entorno o forma de vida". Onceava Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 2023, página 2201. **R-0116**. Tesis 2a./J. 11/2023: "Derecho a la consulta previa. El deber de llevarla a cabo se actualiza ante la mera posibilidad de que la decisión estatal afecte o incida de manera directa o diferenciada a los pueblos y comunidades indígenas, sin que resulte exigible la acreditación del daño y su impacto significativo". Onceava Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 2023, página 2199. **R-0118**. *Ver también,* "Derecho a una consulta previa", Comisión Nacional de los Derechos Humanos, "La Consulta Previa, Libre, Informada, De buena fe y Culturalmente Adecuada: Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y el papel de las empresas", 2017. **RL-0221**.

[35] Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 32. **RL-0204**. *Ver también, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam*, Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28 de noviembre de 2007. **RL-0205**.

[36] Convenio 169 OIT. **RL-0028**.

[37] DECRETO por el que se reforma el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 28 de enero de 1992. **R-0120**.

78. El desarrollo se consolidó con la reforma constitucional integral en materia indígena de agosto de 2001, que dio lugar al actual Artículo 2°. Su apartado A reconoce el derecho a la libre determinación y la autonomía, y su apartado B establece obligaciones específicas a cargo del Estado.[38] La relevancia de esa reforma para el presente arbitraje es doble; por una parte, elevó a rango constitucional el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas sobre su territorio, de modo que la protección dejó de descansar únicamente en tratados internacionales. Por otra, incorporó al texto constitucional un deber expreso de consulta. En ese marco se otorgaron las Concesiones: la de Cerro Grande el 5 de marzo de 2003 y la de Cerro Grande 2 el 23 de febrero de 2009.[39]

79. Con posterioridad al otorgamiento, y con anterioridad a la controversia, el marco legal continuó consolidándose. La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en junio de 2011 modificó entre otros, el Artículo 1° de la Constitución Mexicana. Con ello, se estableció que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ordenando que las normas internacionales se interpreten favoreciendo en todo momento la protección más amplia, y estableciendo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos.

80. Esa reforma es relevante porque eliminó toda duda sobre la aplicabilidad directa de los derechos reconocidos en el Convenio 169 y sobre su rango, e impuso el deber de garantizarlos a la totalidad de las autoridades del Estado, incluidas las administrativas competentes en minería.

81. El Estado desarrolló asimismo los instrumentos administrativos para conducir los procesos de consulta. En febrero de 2013, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas emitió un protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con los estándares del Convenio 169, que ordenó el procedimiento en fases sucesivas.[40] En enero de 2019, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sucesor de

---

38 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 2, 2001. **R-0014**.

39 Memorial de Contestación, ¶ 459.

40 Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, febrero 2013. **R-0121**.

aquella Comisión, publicó un documento sobre los fundamentos, principios y metodología para la implementación del derecho a la consulta libre, previa e informada por la Administración Pública Federal.[41] Ambos instrumentos precisaron cómo debía conducirse una obligación que ya existía.

82. Como ejemplo, en mayo de 2013, al resolver el asunto conocido como "Acueducto Independencia", la Suprema Corte confirmó la existencia de una obligación de consulta a un pueblo indígena y distinguió ese procedimiento de la consulta pública en materia ambiental.[42]

83. Las adiciones legislativas posteriores confirman esa trayectoria. En abril de 2022 se adicionó a la LGEEPA el Artículo 20 Bis 8, que incorpora la Consulta Indígena.[43] En mayo de 2023, la reforma a la Ley Minera incorporó el mismo requisito.[44] Si bien ambas reformas son posteriores a los hechos en controversia y ninguna se invoca como norma aplicable a las Concesiones, su referencia es relevante porque acreditan que la exigencia que la Suprema Corte aplicó en 2022 no constituía una anomalía ni un criterio aislado, sino la consolidación legislativa de una tendencia que ya operaba en el momento relevante y que los estándares internacionales invocados por las propias Demandantes contemplaban desde antes.[45]

84. Este tipo de desarrollo progresivo del marco jurídico no es inusual. En *Kappes c. Guatemala*, el tribunal rechazó la premisa de que el marco jurídico aplicable a las consultas del Convenio 169 de la OIT hubiera experimentado una "ruptura drástica" a partir de 2015. Por el

---

41 Derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas bases, principios y metodología para su implementación por la Administración Pública Federal, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 2019. **R-0122**.

42 Amparo en Revisión 631/2012, Suprema Corte de Justicia de la Nación, pp. 84-86. **R-0123**.

43 Artículo 20 Bis 8, LGEEPA. **C-0156**.

44 Ley Minera, art. 6 Bis, 2023. **R-0015**.

45 Tesis 2a./J. 10/2023: "Derecho Humano a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas. Resulta exigible en forma previa a la emisión de las evaluaciones y autorizaciones ambientales atinentes a proyectos u obras que puedan impactar en su entorno o forma de vida". Onceava Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 2023. **R-0116**. Tesis 2a./J. 11/2023: "Derecho a la consulta previa. El deber de llevarla a cabo se actualiza ante la mera posibilidad de que la decisión estatal afecte o incida de manera directa o diferenciada a los pueblos y comunidades indígenas, sin que resulte exigible la acreditación del daño y su impacto significativo". Onceava Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 2023. **R-0118**. *Ver también*, Memorial de Contestación, ¶¶ 79-82 (control de convencionalidad, principio pro persona y principio de autoadscripción).

contrario, concluyó que se trató del desarrollo progresivo de principios esenciales que ya se encontraban establecidos, aunque posteriormente fueran precisados con mayor detalle.[46]

85. Asimismo, el tribunal de *Kappes* consideró que, cuando una autoridad ejecutiva expide una licencia sobre la base de una interpretación de los requisitos legales que posteriormente es considerada incorrecta por los tribunales, la decisión judicial que ordena adoptar medidas correctivas no vulnera, por sí misma, un "derecho adquirido" del titular de la licencia. El tribunal rechazó, por ello, la caracterización de dichas medidas como una aplicación retroactiva de nuevas normas "hechas por los jueces."[47]

86. La misma lógica resulta aplicable en este caso. La sentencia de la Suprema Corte no creó una nueva condición para las Concesiones, sino que hizo efectiva una obligación jurídica preexistente y determinó las consecuencias de su incumplimiento en el caso concreto. La posterior actuación de la DG Minas no constituyó, por lo tanto, una aplicación retroactiva de nuevas reglas, sino el cumplimiento de una sentencia judicial que ordenó la reevaluación de la factibilidad de las Concesiones.

87. Una autoridad administrativa puede haber interpretado incorrectamente el derecho; los tribunales pueden corregir esa interpretación y ordenar medidas correctivas sin que ello constituya, por sí mismo, una afectación ilícita de derechos adquiridos. Que la medida correctiva se adopte con posterioridad no la convierte en aplicación retroactiva de una norma nueva.

88. Conviene hacer una precisión: la Consulta Indígena es un derecho de los pueblos y comunidades indígenas, y correlativamente un deber del Estado de respetarlo y garantizarlo. El Estado no consulta para validar una concesión, consulta porque los pueblos indígenas tienen derecho a participar en las decisiones que puedan afectar su territorio y su vida colectiva.[48]

---

[46] *Daniel W. Kappes and Kappes, Cassiday & Associates c. República de Guatemala*, Caso CIADI No. ARB/18/43, Laudo, 23 de diciembre de 2025, ¶ 807. **RL-0206.**

[47] *Daniel W. Kappes and Kappes, Cassiday & Associates c. República de Guatemala*, Caso CIADI No. ARB/18/43, Laudo, 23 de diciembre de 2025, ¶¶ 822-823. **RL-0206.**

[48] Tesis 2a./J. 10/2023: "Derecho Humano a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas. Resulta exigible en forma previa a la emisión de las evaluaciones y autorizaciones ambientales atinentes a proyectos u obras que puedan impactar en su entorno o forma de vida". Onceava Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 2023, página 2201. **R-0116**.

89. Ese deber estatal es distinto de la relación que un particular construye con las comunidades en el territorio donde desarrolla su proyecto. El cumplimiento o la omisión de la Consulta Indígena no mide ni sustituye esa relación. Son planos distintos. El Estado debe identificar y gestionar los impactos de su actividad y relacionarse con las comunidades conforme a los estándares aplicables a su industria. Ninguno de los dos deberes suple al otro, y el incumplimiento de uno no exime ni justifica el del otro.

90. Además, el Artículo 133 de la Constitución establece que los tratados internacionales celebrados por el Presidente y aprobados por el Senado, siempre que fueran conformes con la Constitución, formaban parte de la "Ley Suprema de la Unión".[49] En materia de derechos humanos, este marco debe entenderse conjuntamente con los criterios desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte) respecto de la relación entre el derecho interno, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[50]

91. En materia de derechos de los pueblos indígenas, la Corte Interamericana ha reconocido que su relación con la tierra y los recursos naturales va más allá del concepto clásico de propiedad, pues forma parte de su subsistencia, cultura e identidad:

> la estrecha vinculación de los integrantes de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura […] deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana.

92. Por ello, cuando una decisión estatal puede afectar directamente un territorio indígena, la protección de sus derechos exige mecanismos que permitan su participación. La Consulta Indígena responde a esa obligación.

93. El caso *Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua* ilustra este principio. La Corte Interamericana consideró incompatible con la protección del derecho de propiedad indígena

---

49 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 133. **R-0014**.

50 Contradicción de tesis 293/2011 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en materias administrativa y de trabajo del Décimo primer circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en materia civil del Primer circuito, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 de septiembre de 2013. **R-0124**.

el otorgamiento de concesiones a terceros sobre recursos ubicados en territorios que correspondían, total o parcialmente, a la comunidad, aun cuando la concesión no hubiera sido explotada. [51]

94. En términos del Artículo 9.16 del TIPAT:

> Nada de lo dispuesto en este Capítulo se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar, mantener o hacer cumplir cualquier medida, que sea compatible con este Capítulo, que considere apropiada para asegurar que la actividad de inversión en su territorio se realice de una manera sensible al medio ambiente, salud u otros objetivos regulatorios.

95. Por lo tanto, la Consulta Indígena en México es parte de las medidas regulatorias para los proyectos mineros y se ha estado consolidando en la legislación mexicana.

(2) Evaluación de Impacto Social

96. Las Demandantes identifican la EVIS como un instrumento preventivo de impactos, integrado a las etapas tempranas de planificación y prefactibilidad, para que sus resultados puedan influir en el diseño del proyecto.[52]

97. Un instrumento de diligencia social sea voluntario u obligatorio, se evalúa conforme a tres preguntas: ¿cuándo se elaboró?, ¿sobre qué perímetro? y ¿qué acredita? La respuesta a la primera determina si el instrumento todavía podía influir en el diseño del proyecto o si llegó cuando las decisiones relevantes ya estaban tomadas.[53] La respuesta a la segunda determina el universo de comunidades y titulares que el instrumento pudo, siquiera en principio, identificar.[54] La respuesta a la tercera permite distinguir qué hechos acredita realmente el instrumento y cuáles no pueden inferirse de su contenido.[55]

---

51 *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua*, Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 31 de agosto de 2001, ¶ 153. **RL-0207**.

52 Réplica, ¶ 234.

53 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶ 69.

54 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 53, 155.

55 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 114, 269.

98. Los estándares de la industria minera, incluidos los que las propias Demandantes invocaron ante sus inversionistas y financiadores,[56] sitúan cada tipo de instrumento en una etapa distinta del proyecto. La identificación de titulares de derechos colectivos corresponde al momento previo a la adquisición del título,[57] mientras que la evaluación de impacto social corresponde a la etapa de prefactibilidad, cuando sus resultados todavía pueden modificar el diseño.[58]

99. Para esa identificación temprana, el criterio aplicable no es qué sabía efectivamente el operador, sino si desplegó las averiguaciones que cabría esperar de un operador diligente antes de concluir que no existía población indígena potencialmente afectada.[59] Ese deber de indagar se activa no solo ante evidencia manifiesta, sino ante cualquier indicio (lingüístico, histórico, territorial, cultural o institucional) que razonablemente sugiera la posible presencia de titulares de derechos colectivos.[60]

(3) Evaluación de Impacto en Derechos Humanos

100. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas configuran la debida diligencia en derechos humanos como un proceso continuo y preventivo consistente en identificar riesgos antes de que se materialicen, prevenirlos, mitigarlos y rendir cuentas. La Norma de Desempeño 1 traduce esto en una jerarquía de mitigación cuyo primer escalón es evitar el impacto. Ese escalón solo está disponible mientras la decisión que genera el riesgo todavía pueda modificarse; una vez que la decisión ya se tomó, solo quedan la mitigación y la compensación.[61]

101. En ese sentido, el Sr. Cabrera precisa una distinción entre informar y participar. La literatura en la materia, la describe como justicia procesal en escalones que van desde ser escuchado hasta incidir efectivamente en la decisión. Informar de manera amplia y sistemática no equivale a conducir un proceso participativo. La diferencia está en si la comunidad tuvo, en los

---

56 Almaden Minerals Ltd., *Annual Information Form for the year ended December 31, 2024*, 17 de marzo de 2025, p. 5. **GCS-0049.** Moose Mountain Technical Services (2019). NI 43-101 Technical Report on the Feasibility Study – Ixtaca Gold-Silver Project, p. 38. **C-0314**.

57 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 116-117.

58 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶ 65.

59 Segundo Informe del Sr. Cabrera, Sección VI.2.

60 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 250, 261.

61 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 115, 140

hechos, la posibilidad de influir en el contenido de la decisión, no solo en si recibió información sobre ella.[62]

102. La debida diligencia en materia de derechos humanos se concibe como un proceso continuo y preventivo, no como un ejercicio de verificación posterior.[63] Su eficacia preventiva depende de que los riesgos se identifiquen y atiendan con suficiente anticipación. Una vez que se adopta una decisión que genera impactos, las opciones se reducen a mitigar o compensar sus efectos.[64]

103. La calidad metodológica de un instrumento y su función preventiva son cuestiones distintas. Un instrumento puede estar bien elaborado, con comité asesor externo y metodología robusta, y aun así no cumplir su función si se despliega después de que la decisión que debía informar ya se tomó.[65] La solidez técnica no sustituye a la oportunidad.

104. Un segundo criterio distingue entre informar y participar. Un programa de relacionamiento puede documentar comunicación constante hacia las comunidades sin que ello implique que estas tuvieran capacidad real de incidir en el perímetro, el calendario o el diseño del proyecto.[66] Esa capacidad de incidencia, y no el volumen de información compartida, distingue una participación efectiva de un ejercicio informativo.[67]

(4) La Licencia Social para Operar

105. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la LSO no son lo mismo. La RSC es un conjunto de actividades que la empresa define y entrega de forma unilateral. La LSO es un estado de la relación (legitimidad, credibilidad y confianza) que solo las comunidades pueden conceder.[68] Un programa de aportaciones, por extenso que sea, no se traduce automáticamente en aceptación. Lo que distingue uno de otro no es qué se entregó, sino cómo se diseñó.[69] Es decir, el resultado tangible en la relación o percepción de la comunidad sobre la empresa.

---

62 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 69, 189.

63 Segundo Informe del Sr. Cabrera, Tabla 18.

64 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 115, 140.

65 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶ 158.

66 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 115, 140.

67 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 102-104, 220-221.

68 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 16, 37-38, 81.

69 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶ 86.

106. La LSO tampoco es una construcción reciente ni un concepto ajeno a quienes participan en la industria minera. Su desarrollo se remonta a la década de 1990. En 1998, la industria creó la Global Mining Initiative, que impulsó el estudio de los principales desafíos sociales que enfrentaba el sector. Posteriormente, entre 2000 y 2002, el proyecto *Mining, Minerals and Sustainable Development* desarrolló directrices sobre la contribución de la industria minera al desarrollo sostenible. Sobre estas bases, organismos como el Consejo Internacional de Minería y Metales y el *Canadian Towards Sustainable Mining Program* consolidaron posteriormente estándares y directrices específicos para obtener y mantener una LSO.[70]

107. La LSO no es un permiso que otorgue el Estado. Es un estándar de gestión de riesgo reconocido por la propia industria minera y sus financiadores, que describe la aceptación social continua que las comunidades le dan, o le niegan, a un proyecto:

> [N]o es su función [del Estado] tomar la mano de un inversionista y entregarle una "licencia social" […]. Le corresponde al inversionista obtener la "licencia social", […] [y ningún tratado de inversión funciona como] póliza de seguro contra el fracaso de un inversionista preparado de manera inadecuada para obtener dicha licencia.[71]

108. Sobre esa base se han desarrollado marcos voluntarios, pero ampliamente adoptados, para evaluar si existe o no una LSO.[72] Todos delinean el mismo tipo de buena práctica: participación social significativa, transparencia institucional y gestión preventiva, no reactiva, del riesgo social. La norma GRI 413 (Comunidades Locales) exige, además, divulgar el grado de involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones y las estrategias para evitar desplazamientos, conflictos o afectaciones culturales.[73]

109. Ninguno de estos instrumentos tiene fuerza jurídica vinculante, pero eso no los vuelve irrelevantes. Su cumplimiento se convirtió en un estándar de facto exigido por mercados financieros,[74] inversionistas institucionales y organismos multilaterales, los mismos actores ante

---

70 Lesser, P., Poelzer, G., Gugerell, K., Tost, M., & Franks, D., Exploring scale in social licence to operate: European perspectives. *Journal of Cleaner Production, 384*, 2023, p. 2. **RL-0211**.

71 *Bear Creek Mining Corporation v. República del Perú*, Caso CIADI No. ARB/14/21, Opinión parcial disidente del profesor Philippe Sands, 30 de noviembre de 2017, ¶ 37. **RL-0128**.

72 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 15, 67-68.

73 *Global Reporting Initiative*, GRI 413: Local Communities 2016, 2016, pp. 1,7,10. **RL-0212**.

74 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 101, 109-112.

quienes las Demandantes declararon su adhesión a estándares internacionales de desempeño social.[75]

110. Tampoco es un riesgo abstracto o ajeno al contexto mexicano. La Exposición de Motivos de la reforma a la Ley de Minería de 2023 reconoce que la conflictividad social asociada a proyectos mineros, incluyendo conflictos de coexistencia y de rechazo social, es un fenómeno creciente y documentado en México.[76] Un inversionista sofisticado, operando en el sector durante el periodo relevante, no podía ignorar ese riesgo, conocido y en aumento, sin importar su origen jurídico.

111. El punto de partida de toda diligencia social es determinar a quién afecta el proyecto. Una delimitación estrecha produce un efecto en cadena. Quien queda fuera del área no es identificado, quien no es identificado no es convocado, y quien no es convocado no otorga ni niega nada. Simplemente queda fuera de la conversación.

112. Las Demandantes construyen su argumentación como si la validez de sus títulos agotara toda pregunta sobre su relación con las comunidades. Resulta extraño, porque el concepto de LSO no les era ajeno, ellas mismas lo invocaron. Almaden cotizó en el NYSE American desde diciembre de 2005 y, en esa calidad, declaró ante sus inversionistas su adhesión a las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional y a los Principios de Ecuador.[77] Esa declaración no es un dato anecdótico, es un estándar de conducta autoimpuesto. Quien invoca un estándar para atraer capital no puede después medirse por uno inferior.

113. Ese estándar exige, para lo que aquí interesa, identificar tempranamente a los pueblos indígenas del área y sus derechos consuetudinarios (Norma 7), delimitar el área de influencia con criterios explícitos antes de avanzar (Norma 1) y tratar la adquisición de tierras con el mismo cuidado (Norma 5). Ninguna de estas obligaciones depende de que el Estado actúe primero. Son obligaciones del particular frente a las comunidades, verificables con documentos concretos.[78]

---

75 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 290-291.

76 Cámara de Diputados, *Exposición de motivos. Iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena*, Gaceta Parlamentaria, núm. 6257-III-2, 18 de abril de 2023, pp. 2-3. **R-0117**.

77 Almaden Minerals Ltd., *Annual Information Form for the year ended December 31, 2024*, 17 de marzo de 2025, p. 5. **GCS-0049.** Moose Mountain Technical Services (2019). NI 43-101 Technical Report on the Feasibility Study – Ixtaca Gold-Silver Project, p. 38. **C-0314**.

78 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 53, 283-284.

114. Para 2018, cuando Almaden elaboró su EVIS, la industria minera llevaba aproximadamente dos décadas desarrollando y aplicando este concepto como parte de sus prácticas de relacionamiento social.

115. Los estándares que invocaron las propias Demandantes asignan a cada instrumento social una etapa del ciclo del Proyecto. La lógica es simple: la capacidad de influir en el diseño decrece conforme avanza la ingeniería, y el costo de corregir un error crece en la misma proporción.[79]

116. El Proyecto Ixtaca debía cumplir tres requisitos independientes: contar con concesiones mineras válidas, obtener la autorización ambiental para avanzar a explotación y realizar una debida diligencia social suficiente frente a las comunidades potencialmente afectadas. La existencia de concesiones no sustituía la evaluación ambiental ni la gestión social del proyecto; cada requisito tenía un fundamento propio y debía cumplirse separadamente para que el Proyecto pudiera considerarse viable.

2. El Proyecto Ixtaca nunca obtuvo la aprobación de las comunidades indígenas afectadas

117. Al igual que en el Memorial de Demanda, las Demandantes argumentan en la Réplica que su relación con las comunidades de Ixtacamaxtitlán fue "excelente" y sus actos están completamente desligados con Declaración de Insubsistencia de las Concesiones.[80] Las Demandantes se equivocan. Los hechos son inequívocos: La Insubsistencia de las Concesiones no hubiera ocurrido sin que el ejido de Tecoltemic promoviera el Amparo 445/2015. En otras palabras, este arbitraje no existiría sin el litigio iniciado por una comunidad indígena y su fallo, el cual, las autoridades mexicanas acataron.

118. Las causas y motivaciones del ejido de Tecoltemic así como la oposición del resto de las comunidades, entre ellas, Santa María Zotoltepec, Tentzoncuahuigtic, San Francisco Ixtacamaxtitlán, Tuligtic y Zacatepec, nacen de preocupaciones sobre la actividad minera y de sus

---

79 Segundo Informe del Sr. Cabrera, ¶¶ 69, 118.

80 La sección de hechos de las Demandantes es alrededor de 300 páginas y alrededor de 100 páginas han sido utilizadas para tratar de refutar el fracaso en su relacionamiento con las comunidades de Ixtacamaxtitlán. En el Memorial de Demanda utilizaron al menos seis secciones de los hechos, lo cual es poco más de un cuarto de dicha sección.

"convicciones … sobre el tipo de desarrollo que prefieren y rechazan en su región".[81] Abajo se muestra un mapa con algunas de las comunidades relacionadas con las Concesiones.

Imagen: Mapa de las comunidades relacionadas con las Concesiones



Fuente: Elaboración propia.

119. Las Demandantes simplemente no pueden separarse del rechazo de las comunidades alegando que Tecoltemic no sería afectada o que las ONG fueron las verdaderas opositoras.[82] Fueron las Demandantes quienes ignoraron el vínculo de las comunidades con su forma de vida, la tierra, sus bienes comunales y el activismo en la Sierra Norte de Puebla. Como lo concluyó, desde 2014, el entonces relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya:

> Just as indigenous peoples have the right to pursue their own initiatives for resource extraction, as part of their right to self-determination and to set their own strategies for development, they have the right to decline to pursue such initiatives in favour of other initiatives for their sustainable development, and they should be supported in such other pursuits as well.[83]

120. Según las Demandantes, México busca distraer al Tribunal de la verdadera materia del arbitraje. Sin embargo, las Demandantes se confunden cuando consideran que México exige una

---

81 Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 17.

82 Réplica, § 2.7.5, ¶ 682.

83 Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, James Anaya, U.N. Doc. A/HRC/24/41, p. 20. **C-0748**.

licencia social para el Proyecto Ixtaca o inclusive señalan que "social opposition, independently of State consultation obligations, [does not] constitute a valid basis for cancellation of investment rights".[84] En realidad, México está presentando de forma objetiva al Tribunal el conflicto social derivado del Proyecto Ixtaca; las razones por las cuales surgió, y el fracaso de las Demandantes para relacionarse de manera culturalmente apropiada con las comunidades. Esto atiende a los cientos de páginas que han utilizado para autodesignarse empresa pionera en transparencia, inclusividad y colaboración sustentable, cuando, en realidad, la falta de debida diligencia terminó comprometiendo la viabilidad del Proyecto Ixtaca.[85]

121. Según las Demandantes, México ha tergiversado la posición de las Demandantes porque éstas no controvierten el principio de autoadscripción de las comunidades indígenas.[86] El expediente muestra lo contrario. El litigio iniciado por Tecoltemic, los oficios por lo que solicitaban a las autoridades mexicanas que confirmaran la inexistencia de comunidades indígenas,[87] y este arbitraje muestran que las Demandantes negaron y cuestionaron el principio de

---

84 Réplica, ¶¶ 669, 691, 713.

85 Memorial de Contestación, ¶ 145.

86 Réplica, ¶ 225.

87 *Ver* Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, (Debe decirse que no asiste razón a … Minera Gorrión, … al señalar la parte quejosa no es una comunidad indígena), p. 31. **C-0092**. *Ver también* Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de Minera Gorrión (Ofrezco desde este momento, copia certificada del escrito de fecha 19 de noviembre de 2016, en el cual el Diputado Federal, Hernan de Jesus Orantes Lopez, Secretario de la Comisión de Asuntos Indigenas de la LXIII Legislatura de la Camara de Diputados indica que NO se localizó dentro del catálogo respectivo ninguna comunidad o localidad con el nombre de TECOLTEMI, en el municipio de Ixtacamaxtitlán del estado de Puebla y si se refiere a la localidad de Tecoltémic, esta no es considerada localidad ni comunidad indígena por el Catálogo de Comunidades Indigenas de la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas. Esta prueba se relaciona en el presente incidente para el efecto de que la misma se valore en su conjunto y se observe que tampoco se afectan derechos de comunidades con la realización del trámite administrativo que se solicita en las concesiones respecto de las cuales es titular mi autorizante.), 9 de febrero de 2017, p. 13. **R-0125** (Énfasis añadido). SEMARNAT Oficio No. DFP/SGPARN/2638/2015,18 de agosto 2015. **C-0036**. Respuesta del Sr. Orante López, diputado de la LXIII Legislatura, 10 de agosto de 2016. **C-0225**. Respuesta del Sr. Orante López, diputado de la LXIII Legislatura, 10 de noviembre de 2016. **C-0227**. Oficio de la CDI a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, 28 de septiembre de 2018. **C-0256**. Oficio No. 272/PM/2017 del Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán, 7 de septiembre de 2017. **C-0474**.

autoadscripción: "[d]espite the fact that [Tecoltemic] had self-declared as indigenous *only* in 2015".[88] Tuvieron que pasar más de 10 años, para que las Demandantes cambiarán de opinión.

122. La *volte-face* de las Demandantes evidencia los desatinos y fracasos en su relacionamiento con las comunidades de Ixtacamaxtitlán. Aunque las Demandantes comenzaron su caso alegando que Almaden está comprometida con las comunidades y el medio ambiente;[89] ahora, las Demandantes enfatizan que Tecoltemic estaba fuera del área de influencia del Proyecto. Con esta disminución en el área de las Concesiones buscan minimizar la legitimidad del amparo de Tecoltemic y el conflicto social que han vivido las comunidades de Ixtacamaxtitlán.

123. Aún si se llegase a considerar que el área de influencia es relevante para la Insubsistencia las Concesiones (*quad non)*, las Demandantes olvidan que, Santa María Zotoltepec (la comunidad indígena más cerca a esa zona) tampoco fue consultada previo la emisión de las Concesiones.[90]

124. Según las Demandantes el área de influencia es la única área geográfica importante en este arbitraje y no comprenden la oposición de Tecoltemic para reducir las áreas concesionadas.[91] Nuevamente, las Demandantes, de manera discriminatoria, cuestionan que una comunidad tenga capacidad para tener intereses e ideas propias sobre cómo desarrollar su territorio.[92] Precisamente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (Declaración de la ONU) contempla:

---

88 *Ver* Memorial de Demanda, ¶¶ 223-226. *También ver* Memorial de Demanda, ¶ 221: [O]n 15 March 2015, the Tecoltemi community self-declared as an"indigenous community" *for the first time in its history*. (Énfasis añadido).

89 Memorial de Demandada. ¶¶ 12-14.

90 Reconocimiento como comunidad indígena de los Estados Unidos Mexicanos a Santa María Zotoltepec ("Quinto. - se reconoce y autoadscribe como comunidad indígena, de conformidad con lo manifestado al solicitar su registro en el Catálogo Nacional de Pueblas y Comunidades Indígenas y Afromexicanas" … La presente Constancia debe de entenderse con efectos declarativos… es un derecho inalienable de los pueblos y comunidades indígenas, determinar libremente su condición política y su carácter jurídico, en el ejercicio de su libre determinación y autonomía), 23 de agosto de 2024. **C-0813**.

91 Las Demandantes repiten su Réplica más de 60 veces este concepto, al menos 48 veces el término *area of influence* y 18 veces el acrónimo AOI.

92 Informe Dra. Torres, ¶¶ 144-149.

> Artículo 32. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.[93]

125. Así, las decisiones de Tecoltemic, Santa María Zotoltepec y más comunidades de Ixtacamaxtitlán es por excelencia el ejercicio de su derecho a la autodeterminación.[94] El Sr. Anaya, cuando fue relator especial exhortó a los países de la Mancomunidad de Naciones, entre ellos Canadá, a reflexionar sobre la Declaración de la ONU y enfatizó que implementarla permitiría abandonar los legados coloniales.[95]

126. En las siguientes cuatro secciones, la Demandada explicará: *i)* porque el área de influencia que proponen las Demandantes para los impactos sociales del Proyecto Ixtaca está viciada y es irrelevante para este arbitraje; *ii)* la oposición al Proyecto Ixtaca por parte de Tecoltemi y otras comunidades deviene de la falta de confianza en Almaden y no de agentes externos como las ONG; *iii)* los desaciertos de Almaden en su relacionamiento con las comunidades y, *iv)* si, en realidad, las Demandantes hubieran buscado obtener una licencia social las Concesiones no se hubieran envuelto en litigios que culminaron con la insubsistencia de las mismas.

---

93 G.A. Res. 61/295, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples ("Article 32. 1. Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for the development or use of their lands or territories and other resources."), 13 September 2007. **C-0762**. *Ver* Declaración Testimonial del Sr. Anaya, ¶ 83.

94 Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, James Anaya, U.N. Doc. A/HRC/24/41, p. 5. **C-0748**. *Ver* Carta del Consejo de Vigilancia de Santa María Zotoltepec ("…nos permitimos expresarle nuestra preocupación e interés en el caso, solicitándoles con respeto a la independencia judicial que emitan una sentencia que garantice, proteja y restablezca los derechos indígenas y agrarios de la comunidad de Tecoltemi, mediante la cancelación de las concesiones mineras impugnadas y mediante la declaración de inconstitucionalidad de inconvencionalidad de diversos artículos de la ley minera."), 18 de enero de 2022, p. 2. **R-0126**. (Énfasis añadido) *Ver también* Compilado de cartas de las comunidades de Ixtacamaxtitlán, enero de 2022**. R-0127**.

95 Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, James Anaya, U.N. Doc. A/HRC/24/41, p. 24. **C-0748**. En su libro *Indigenous Peoples in International Law* el Sr. Anaya destaca como en el derecho internacional ha negado el estatus de soberanía a los pueblos indígenas para apoyar a las fuerzas colonizadoras, lo cual ha evitado que los pueblos indígenas determinen su propio curso en condiciones de igualdad. *Ver* J. Anaya, *Indigenous Peoples in International Law* ("Thus, whether through the doctrine of trusteeship or the positivist legal construction that denied sovereign status to indigenous peoples, international legal discourse and related decision processes developed historically to support the forces of colonization and empire that have trampled the capacity of indigenous peoples to determine their own course under conditions of equality"), Oxford Univ. Press, 1996, 2d ed. 2004, p. 34. **RL-0210**.

a. Las comunidades indígenas impactadas por el Proyecto Ixtaca: El área de influencia para los impactos sociales

127. Las Demandantes repiten *ad nauseam* la llamada área de influencia o AOI, por sus siglas en inglés, para alegar que el Proyecto Ixtaca no causaría ningún impacto a Tecoltemic, ambiental ni social, especialmente, según SLR, Tecoltemic no sería impactada en la cantidad y calidad del agua;[96] y que el estudio de impacto social del INPI expandió indebidamente los impactos del Proyecto Ixtaca.[97] Sin embargo, las Demandantes omiten que el área de influencia y el sistema regional ambiental propuestas por las Demandantes tienen inconsistencias y son defectuosas.[98] El estudio de impacto social del INPI, en cambio, contempla la totalidad de las Concesiones como acto administrativo que afecta a comunidades indígenas, lo cual es similar al sistema regional ambiental.[99]

128. Según las Demandantes y SLR la práctica estándar de la industria es que el impacto social se base en la huella del proyecto, las actividades esperadas y las relaciones con las comunidades, en lugar de un "blanket spatial extent".[100] Sin embargo, esta alegación omite varios puntos importantes:

129. *Primero*, la normativa mexicana prevé criterios para proyectos como el Proyecto Ixtaca, los cuales están específicamente determinados, especialmente en materia ambiental. No sólo se trata de una práctica estándar de la industria, porque las actividades mineras a cielo abierto tienen impactos que interactúan entre sí y pueden amplificarse mutuamente lo que afecta a un sistema ambiental regional.[101]

---

96 Réplica, ¶¶ 682-683.

97 Réplica, ¶¶ 752-753.

98 Inclusive unos de sus puntos de referencia son las Concesiones reducidas. *Ver* Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019 ("El Área del Proyecto se encuentra ubicado dentro de las concesiones mineras… las cuales han sido otorgadas …. y vigentes a partir del 29 de mayo de 2017…"), p. 15. **C-0262**.

99 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Estudio de Impacto Social, Cultural y de Espiritualidad Indígena Respecto al Proyecto Minero: "Explotación y Beneficio de Minerales Ixtaca" en el Municipio de Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla. Títulos de Concesión: 219469 y 233434 (Cerro Grande y Cerro Grande 2), enero de 2023, p.5. **C-0407**.

100 Segundo Informe SLR, ¶ 315. Réplica, ¶ 759.

101 Informe Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 49, 209. *Ver* Artículo 11, Reglamento LGEEPA, 30 de mayo 2000. **C-0166**.

130. *Segundo*, la EVIS retomó la AOI de la Manifestación de Impacto Ambiental para el Proyecto de Ixtaca (MIA), para señalar cuáles eran los impactos sociales. Sin embargo, la MIA tiene vacíos de información para determinar la AOI y el sistema ambiental regional (SAR) que no justifican la exclusión de Tecoltemic como potencialmente afectada. En la sección G.1 se proporcionan los detalles de estas omisiones importantes.[102]

131. *Tercero*, el declive en la cantidad de agua subterránea en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde se encuentra Tecoltemic, ha sido registrado y no ha mostrado mejorías desde 2018.[103]

132. *Cuarto*, el sistema de presas de las Demandantes (FWD -presa de agua fresca- y WSD -presa de almacenamiento de agua) no consideraba cuánta agua escurría realmente, por lo que no podía calcular adecuadamente cómo impactaría aguas abajo.[104] Esto enfatiza la incertidumbre en la disposición del agua que el Proyecto Ixtaca traería para las comunidades, incluida Tecoltemic.

133. *Quinto*, SLR alega que "an impact asignificance is derived from the interaction of project-specific receptor sensitivity, and could range from negligible to major on different 'receptors', not the entire AOI".[105] Sin embargo, SLR utiliza la AOI establecida en la EVIS, la cual no explica ninguna de esas interacciones, ni la sensibilidad de los receptores.

134. *Sexto*, GMI Consultores delimitó la AOI utilizando 1km alrededor del Santa María Zotoltepec y Zacatepec,[106] las corrientes de agua (incluido el Río Apulco), las carreteras y caminos que conducen a la cabecera municipal y los asentamientos humanos; cada uno sin justificar su pertinencia.[107]

---

102 Los Sres. Del Razo y Rábago presentan los detalles técnicos en su segundo informe. *Ver* Sección E, ii del Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago.

103 Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 38-43.

104 Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 55. *Ver* Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 131-132. *Ver también* Segundo Informe Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 213, iv).

105 Informe SRL, ¶ 316.

106 GMI Consultores denominó a esas dos localidades como área núcleo. Igual Consultores, Evaluación de Impacto Social proyecto Minero Ixtaca, julio de 2018. **C-0253**.

107 Igual Consultores, Evaluación de Impacto Social proyecto Minero Ixtaca, julio de 2018, pp. 14-19. **C-0253**.

135. *Séptimo*, aunque la EVIS refiere a la International Association for Impact Assesment, no sigue su guía. La EVIS omite entender todas las dimensiones del proyecto, abarcar las comunidades de interés –por vínculos culturales, económicos o espirituales, los impactos indirectos (por ejemplo: los cambios en la economía local, la migración inducida por el proyecto) y acumulativos y, sobre todo, no incluye la percepción y conocimiento local sobre los posibles efectos del proyecto.[108]

136. *Octavo*, la afectación de Tecoltemic ya fue discutida y acreditada en cortes nacionales. La Suprema Corte otorgó valor probatorio pleno a las pruebas en antropología presentadas en el amparo de Tecoltemic. Éstas concluyeron que definitivamente el patrimonio cultural y moral de Tecoltemic y las comunidades vecinas se vería seriamente afectado por las concesiones mineras. Pues las concesiones trastocaban más del 25% del territorio de Ixtacamaxtitlán y también: [109]

> El gran cerro de Mikisxochio, el "Jefe de los cerros" de la región es el responsable de la dotación de agua de río Apulco y del río Zempoala, además sus escurrimientos y los de las serranías secundarias, alimenta a cerca de 56 manantiales que alimentan a las comunidades de la región de Ixtacamaxtitlán. - - - Tecoltemi satisface sus necesidades de agua gracias a dos manantiales, uno que nace en el municipio de Tetela, el Tecuitapan y el otro el Texocotitan, éste, ubicado dentro de los terrenos ejidales de Tecoltemi.

137. *Noveno*, la EIDH del Centro de Investigaciones Interculturales, Jurídicas y Ambientales (Centro de Investigaciones) contempla a Tecoltemic como parte de su evaluación de impacto social.[110] Precisamente el Sr. Anaya alude a que después de su visita a Tecoltemic, en enero de

---

[108] Además de que no incluye a Tecoltemic, la EVIS se limita a referir que las mesas de diálogo buscaron incentivar la participación de los grupos vulnerables y/o grupos opositores sin proporcionar detalles de cómo esos grupos influían en la AOI. Igual Consultores/ GMI Consultores, Evaluación de Impacto Social proyecto Minero Ixtaca, julio de 2018, p. 13. **C-0253**. Vanclay, F., et. al, 205, *Social Impact Assessment: Guidance for assesing and managing the social impacts of Project*, International Association for Impact Assessment, pp. 8, 34-35, 41, 46, 78-79, 86. **GCS-0027**. En esta guía se enfatiza que: "[social impact assessment] has the potential to identify local knowledge that could guide project siting decisions and reduce cost to companies that comes from poor siting decisions. While much information can be gained from technical surveys and model predictions, they are no substitutes for the lived experiences of local people. Having the positive support of local communities can greatly assist project development". Vanclay, F., et. al, 205, *Social Impact Assessment: Guidance for assesing and managing the social impacts of Project*, International Association for Impact Assessment, p. 9 **GCS-0027**.

[109] *Ver* Sentencia del Recurso de Revisión 134/2021, 16 de febrero de 2022, pp. 26-30. **R-0128**. *Ver también* Sentencia del Amparo Indirecto 445/2015, Juzgado 2º de Distrito, 11 de abril de 2019, pp. 35-44. **C-0066**.

[110] A pesar de que Almaden se opuso al apartado este terminó incluyéndose: "(6) Incluir la discusión sobre Tecoltemic …cuya omisión en el cuerpo de la EIDF es notoria. Sin embargo, el Comité toma nota de la puntual explicación de la empresa en sus comentarios a la EIDH, incluyendo las razones ahí expresadas

2022, pudo conocer la relación de la comunidad con el Proyecto y reforzó su punto de vista sobre la importancia de tener una comunicación significativa, sostenible, proactiva y respetuosa con la comunidad.[111]

138. Por último, la EIDH del Centro de Investigaciones contempla impactos por influencia directa, indirecta y regional y define a estos últimos como aquello que "las personas no tienen una interacción directa con las actividades del Proyecto, pero que de no darles la atención pertinente pueden tener repercusiones a largo plazo, lo que puede ocasionar un impacto a los derechos humanos de los mismos."[112] Con ello, incluso si se dijera que Tecoltemic no era parte de los impactos directos o indirectos, es altamente probable que fuera parte de los impactos regionales. De hecho, la EIDH de las ONG, hecha con participación de las comunidades, señala a Tecoltemic con un impacto medio.[113]

139. En suma, las críticas de las Demandantes sobre cuál es la AOI del Proyecto, y su posición sobre la inexistencia de evidencia sobre las afectaciones que el proyecto tendría sobre la comunidad indígena de Tecoltemic están viciadas. Por un lado, en materia ambiental –criterio importante para los efectos sociales— la MIA tiene inconsistencias serias en la determinación que no permiten explicar por qué Tecoltemic no es considerada como localidad afectada. Asimismo, el Dr. Pedrozo encuentra que el proyecto presenta incertidumbres sobre el modelo hidrológico que asegure el abastecimiento de agua, para el proyecto y para las comunidades, en climas críticos. Por otro, en materia social, la Suprema Corte ya decidió que definitivamente Tecoltemic sería afectada y la misma EIDH del Centro de Investigaciones reconoció la importancia en materia social de

para omitirla." *Ver* Anexo 20 de la EIDH de CIIJA, Comentarios del Comité, p. 10. **C-0422**. Evaluación de Impactos en Derechos Humanos del "Proyecto Ixtaca" (EIDH), pp. 82, 2023. **C-0408**.

111 Declaración Testimonial del Sr. James Anaya, ¶ 41.

112 *Ver* Anexo 6 de la EIDH de CIIJA, Metodología para la identificación de impactos en los derechos humanos. pp. 4-5. **C-0550**. A pesar de esta clasificación sobre la espacialidad del impacto, la EIDH no muestra no da más detalles sobre los impactos regionales. No obstante, en su Anexo 5 adjunta un mapa del sistema ambiental regional que de primera vista se ve mucho más amplio que el de la MIA. *Ver* Anexo 5 de la EIDH de CIIJA, Impactos Ambientales Resumen, p. 4. **R-0129**.

113 PODER, Unión de comunidades y ejidos en defensa de la tierra del agua y de la vida, IMDEC, CESDER, *Minería canadiense en Puebla y su impacto los derechos humanos, por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán t la Cuenca del Río Apulco*, febrero de 2017, p. 138. **C-0229**.

Tecoltemic. Finalmente, inclusive si se insistiera en la falta de efectos directos, la comunidad pudo tener impactos indirectos o medios.

b. La oposición al Proyecto Ixtaca como expresión del ejercicio legítimo de los derechos de las comunidades

140. Las Demandantes reiteran que Tecoltemic fue solo un instrumento para el gran objetivo de las ONG: impugnar las Concesiones de las Demandantes y, con ello, cambiar el sector minero mexicano.[114] Una vez más las Demandantes minimizan los intereses de las comunidades y cuestionan el ejercicio legítimo de los derechos de las comunidades indígenas, en especial a su derecho a la autodeterminación.

141. A pesar de omitirlo en su Memorial de Demandada, las Demandantes reconocen en su Réplica la existencia de movimientos en contra de megaproyectos en la Sierra Norte de Puebla, donde Ixtacamaxtitlán también se ubica. [115] No obstante, las Demandantes alegan que las ONG fueron las precursoras para rechazar sus Concesiones, en lugar de Tecoltemic o cualquier otra comunidad. Además, enfatizan que el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), el Consejo Tiyat Tlali en defensa de nuestro territorio (Consejo Tiyat Tlali) y la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la tierra, el agua y la vida Atcolhua (Unión de Ejidos Atcolhua) no representan a las comunidades y, por lo tanto, reiteran su falta de legitimidad para impugnar las Concesiones. Las Demandantes se equivocan, tanto de manera analítica como en los hechos.

142. La Dra. Torres-Mazuera explica que, desde los estudios en movimientos sociales, "la participación de organizaciones externas no deslegitima una demanda local ni una movilización social".[116] Se ha documentado ampliamente que las organizaciones civiles son un componente relevante para *i)* la protección y exigibilidad de los derechos humanos, *ii)* la obtención de objetivos democráticos y *iii)* el contrapeso frente a las asimetrías de poder. Las organizaciones civiles permiten "enfrentar las asimetrías de poder entre colectivos marginales o subalternos frente a empresas y Estados". [117]

---

114 Réplica, ¶ 225.

115 Réplica, ¶¶ 193, 197, 273.

116 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 14.

117 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶¶ 23, 25, 27. Precisamente, la ONU les ha otorgado el estatus de consultivo al aportar estudios, informes y recomendaciones a sus órganos. Segundo Informe Dra.

143. La teoría del caso de las Demandantes para desacreditar el Amparo 445/2015 de Tecoltemic es simplista y exhibe tendencias discriminatorias. En Antropología Social, la Dra. Torres-Mazuera explica que el Amparo 445/2015 encuadra en lo que se ha conceptualizado como "las armas de los débiles", las cuales son "estrategias mediante las cuales actores subalternos recurren a los instrumentos disponibles para resistir relaciones de dominación".[118] Estas estrategias surgen cuando los canales ordinarios son insuficientes o han fallado. Desafortunadamente, esto sucedió. No sólo las Concesiones se otorgaron sin consulta previa, libre e informada, sino que las protestas realizadas contra la minera no detuvieron sus actividades de exploración.[119] Evidentemente, promover un juicio de amparo en contra las Concesiones es una estrategia factible para el reconocimiento efectivo de su derecho a la consulta previa, libre e informada y, con ello, salvaguardar su territorio.

144. Si se aceptara la teoría del caso de las Demandantes se aceptarían los "estereotipos que [contra] los pueblos indígenas como sujetos pasivos, infantilizados y carentes de capacidad propia de decisión, desconociendo su agencia, sus formas de organización y su capacidad para evaluar, adoptar y sostener posiciones frente a los procesos que afectan sus territorios y modos de vida".[120]

145. En los hechos, como se explicó desde el Memorial de Contestación, los habitantes de Ixtacamaxtitlán fueron informándose de la actividad minera a raíz de los movimientos de rechazo de los municipios vecinos: Tetela de Ocampo y Zautla, lo cual comenzó en 2012.[121] Personas originarias de las comunidades de Ixtacamaxtitlán, exalumnos y empleados de Cesder alertaron a sus comunidades.[122] [redacted], colaboradora de Cesder, recuenta:[123]

> Las y los compañeros del CESDER que han participado en las acciones contra la minera son oriundos de comunidades de Ixtacamaxtitlán. Conocieron de la presencia de la

Torres-Mazuera, ¶¶ 25-26. El Artículo 71 de la Carta de la ONU establece: "El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo miembro de las Naciones Unidas."

118 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 53.

119 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶¶ 53-54.

120 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 31.

121 Memorial de Contestación, ¶ 118.

122 Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶¶ 140-141.

123 Reporte de entrevistas, 2025, p. 23. **GTM-073**. (Énfasis añadido)

> minera por sus familiares y amigos en visitas a sus comunidades y al igual que los que habitan las comunidades, se preocuparon tanto por el trato de los empleados de la minera a sus paisanos,[124] como por la falta de claridad en las decisiones y los permisos que facilitaron su actividad.
>
> […] Una resistencia que lleva 12 años [2025] y que ha transitado en su accionar de la defensa a la autodeterminación y autogestión de los territorios.

146. Habitantes de San Francisco, Ixtacamaxtitlán también lo confirman: "En Santa María no había internet, desde 2002. La minera puso internet en la clínica. Los jovencitos se informaban y quitaron el internet. Yo me enteré de la minera a cielo abierto por el caso de Tetela".[125]

147. El Sr. [redacted], exprofesor de Cesder y originario de Tecoltemic, explicó que se organizaron contra el Proyecto Ixtaca desde 2013. Los egresados del Cesder y el Cesder fueron quienes solicitaron a Economía conocer la existencia o no de las Concesiones en Ixtacamaxtitlán.[126]

148. A raíz de las movilizaciones en Zautla, Tetela de Ocampo, y otro municipio aledaño—Libres— se creó el Consejo Tiyat Tlali,[127] del cual Cesder también forma parte.[128] El Consejo Tiyat Tlali publicó que surgió a raíz de "la amenaza de la destrucción de la vida de los pueblos originarios, campesinos y mestizos de la Sierra Norte de Puebla por la estrategia de despojo por megaproyectos que sumaban 27 concesiones mineras, 5 hidroeléctricas y 50 ciudades rurales".[129]

149. En 2014, después de una caravana informativa se conformó la Unión de Ejidos Atcolhua, integrada por ejidos de Ixtacamaxtitlán, incluido Tecoltemic.[130] Desde esa caravana las comunidades comenzaron "a discutir las estrategias políticas y legales para hacer frente al desarrollo minero en [Ixtacamaxtitlán]".[131]

---

124 Por el término "paisano" se debe entender conciudadano.

125 Reporte de entrevistas, 2025, p. 14. **GTM-073**.

126 Memorial de Contestación, ¶ 117.

127 El Consejo Tiyat Tlali está conformado por la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl, Pastoral Social Indígena, Coordinadora Regional de Desarrollo con Identidad, Agencia Timomaxtican, Unión de Cooperativas Tosepan, Maseual Siuamej Mosenyolchicauani, Universidad de la Tierra en Puebla, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Nakú Sygoy, Tetela hacia el Futuro, Cesder, Centro de Estudios Ecuménicos y Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A. C.

128 Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶¶ 48, 139.

129 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 48

130 Reporte de entrevistas, 2025, p. 7. **GTM-073**.

131 Reporte de entrevistas, 2025, p. 7. **GTM-073**.

150. La Unión de Ejidos Atcolhua contactó a integrantes del Consejo Tiyat Tlali y a través de ellos es que se logró el contacto con el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (IMDEC), el Centro de Análisis e Investigación, A.C. (Fundar) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).[132]

151. La Sra. [redacted] fue la abogada autorizada en el Amparo 445/2015 quien se relaciona con el IMDEC, mientras que Fundar asesoró en la estrategia legal.[133] La coordinadora del IMDEC narra que el móvil principal de las comunidades fue la protección al medio ambiente y "la molestia de las personas fue aumentando progresivamente por la falta de honestidad de los empleados de Minera Gorrión".[134]

152. La Unión de Ejidos Atcolhua, el Consejo Tiyat Tlali, el Cesder y el IMDEC continúan sus labores en la Sierra Norte de Puebla. En diciembre de 2024, representantes de ejidos y comunidades como Santa María Zotoltepec, Tecoltemic, Tagcotepec, Tepexoxuca, Loma Larga, Ixtacamaxtitlán[135] y Tateno, de la Unión de Ejidos Atcolhua, expresaron su interés en este arbitraje por estar relacionado con el Proyecto Ixtaca. En ese mismo mes la Unión de Ejidos Atcolhua, a través del Sr. [redacted], solicitó la autorización ante este Tribunal para presentar un *amicus curia*e.[136] El Consejo Tiyat Tlali, en junio de 2026, presentó una denuncia popular por irregularidades de una minera de feldespatos en Zacatlán.[137]

153. El Cesder y el IMDEC son instituciones de larga data en México. El Cesder se fundó en 1983 y el IMDEC en 1963. Ambos son asociaciones civiles enfocadas en ser centros de estudio para las comunidades indígenas y campesinas. Como se ha explicado el Cesder es y ha sido especialmente relevante en Puebla, lo que ha permitido, incluso, que la Secretaría de Educación

---

132 Memorial de Contestación, ¶ 118.

133 Reporte de entrevistas, 2025, pp. 7, 12. **GTM-073**.

134 Reporte de entrevistas, 2025, p. 21. **GTM-073**.

135 El municipio de Ixtacamaxtitlán cuenta con la comunidad de San Francisco Ixtacamaxtitlán. Algunos documentos pueden referir a la localidad de Ixtacamaxtitlán la cual se refiere a San Francisco Ixtacamaxtitlán.

136 Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, Solicitud de autorización para presentar un *amicus curiae*, 12 de diciembre de 2024. **C-0932**.

137 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 50.

retome su modelo de enseñanza para la creación de escuelas preparatorias llamadas bachilleratos comunitarios.[138]

154. En términos de la sociología de los movimientos sociales, todos estos actores pueden clasificarse de la siguiente manera:

- El Cesder y el IMDEC son asociaciones de base, es decir, organizaciones sin ánimo de lucro que surgen por iniciativa ciudadana con el fin de generar cambios positivos en localidades específicas.[139]
- La Unión de Ejidos Atcolhua y el Consejo Tiyat Tlali son redes de defensa, es decir, estructuras que intercambian información, recursos y capacidades, conectan actores locales con organizaciones nacionales e internacionales para presionar actores con capacidad de decisión.[140]
- Fundar y PODER son estructuras de soporte, es decir, organizaciones dedicadas a la defensa de derechos que cuentan con fuentes de financiamiento estable, el cual también puede provenir de recursos públicos.[141]

155. Por lo tanto, el Cesder, el IMDEC, la Unión de Ejidos Atcolhua, el Consejo Tiyat Tlali, Fundar y PODER son actores en el movimiento social de Ixtacamaxtitlán en contra del Proyecto Ixtaca y acompañaron técnica y legalmente a la comunidad indígena de Tecoltemic para hacer valer sus derechos.

156. Por último, las Demandantes insisten en desacreditar el Amparo 445/2015 iniciado por Tecoltemic porque las comunidades relevantes para ellas—aquellas de la AOI según la MIA—y en favor el Proyecto Ixtaca no fueron escuchadas.[142] Según las Demandantes los anexos C-77, C-308, C-684 lo demuestran. Nuevamente, las Demandantes se equivocan. Como lo explica la Dra. Torres-Mazuera: estas cartas no demuestran la aprobación de las comunidades, ni de los ejidos, porque las decisiones colectivas de estas comunidades se realizan mediante "instituciones

138 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 40.
139 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 15.
140 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 16.
141 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 17.
142 Réplica, ¶¶ 186-192.

específicas de representación y deliberación, como las autoridades agrarias, los comisariados ejidales y, particularmente, las asambleas comunitarias o ejidales".[143] Por lo tanto, estas cartas no muestran que en realidad tengan alguna legitimidad representativa en nombre de las comunidades y ejidos. En cambio, Tecoltemic sí lo demostró en el Amparo 445/2015.[144] De hecho, en el expediente del Recurso de Revisión 134/2021, última instancia ante la Suprema Corte, comisariados ejidales, consejos de vigilancia, jueces de paz, inspectores y presidentes municipales, tanto de las comunidades relacionadas con el Proyecto (entre ellas Santa María Zotoltepec, Loma Larga, Almeya, Ahuateno y Cruz de Ocote) como otras mostraron su apoyo con Tecoltemic.[145]

157. En suma, el Amparo 445/2015 es la expresión legítima de la defensa de los derechos indígenas de Tecoltemic, quien se apoyó en asociaciones de base, redes de defensa y estructuras de soporte para hacer valer sus derechos. Tecoltemic, las comunidades y ejidos que lo apoyaron demuestran la agencia política de estas comunidades, que no debe ser reemplazada por prejuicios discriminatorios y, mucho menos, desacreditada con cartas que omiten las autoridades y órganos de representación comunitaria que existen en las comunidades indígenas y campesinas de la región.

c. La estrategia reactiva de Minera Gorrión ante el rechazo del Proyecto Ixtaca no remedió sus deficiencias en impacto social

158. Mientras que, en Memorial de Demanda, las Demandantes, SLR y el Sr. Santamaría Tovar sostienen que encargaron estudios para mediar el impacto social y humano del Proyecto Ixtaca. Ahora en la Réplica alegan que la EVIS sólo midió percepciones y la EIDH midió impactose hasta que hubo más claridad sobre el alcance del Proyecto.[146]

---

143 *Ver* Sección III. d (El problema de la representación y representatividad de las personas movilizadas en favor del Proyecto Ixtaca) del Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera.

144 El Amparo 445/205 fue promovido por el comisariado ejidal después de haber sido aprobado en la asamblea ejidal. *Ver* Amparo 445/2015 interpuesto por la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemic y el Ejido de Tecoltemic (Sexto Distrito Judicial de la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla), 7 de abril de 2015, pp. 10, 41. **C-0032**. *Ver también* Acta de Asamblea Comunitaria en Tecoltemic, 15 marzo de 2015. **R-0130**.

145 *Ver* Carta del Consejo de Vigilancia de Santa María Zotoltepec, 18 de enero de 2022, p. 2. **R-0126**. *Ver también* Compilado de cartas de las comunidades de Ixtacamaxtitlán, enero de 2022**. R-0127**.

146 Memorial de Demanda, ¶¶ 153-154. Réplica, ¶ 250. Informe SLR, ¶ 253. Segundo Informe SLR, ¶ 253.

> I note that the EVIS and the HRIA are not the same tool deployed at different moments, as Mexico incorrectly suggests. Rath the EVIS is designed to identify community perceptions and concerns, i.e., what people know, understand, and worry about, while the HRIA is designed to identify impacts, i.e., how the Project, as designed, would affect the lives of the surrounding communities, and provide a mitigation framework. By definition, an HRIA cannot be conducted until a mining project is designed and its parameters are defined; otherwise, it is impossible to assess project impact. This sequencing is consistent with the methodology of the Danish Institute of Human Rights, which contemplates the HRIA as a tool to assess the impact of a project, as designed, on the rights of surrounding communities.[147]

159. Aunque las Demandantes pretendan modificar de su primera postura, las Demandantes no pueden negar que tanto la EVIS, elaborada por GMI Consulting (posteriormente Igual Consultores), así como la EIDH, elaborada por el Centro de Investigaciones estudiaron los impactos sociales del Proyecto Ixtaca y ambas tuvieron como fin evaluar cómo debían relacionarse con las comunidades.[148]

160. La Demandada ha señalado que la EVIS tuvo errores metodológicos importantes, uno de ellos su interpretación y conclusión sobre la no existencia de comunidades indígenas. Además, que la EIDH del Centro de Investigaciones fue reactiva ante la sentencia de la Suprema Corte.[149]

161. La Demandada reafirma su posición. Mientras que la EVIS contó con elementos suficientes para considerar la existencia de comunidades indígenas, inclusive sin contar a Tecoltemic, ésta concluyó lo contrario –además documenta las prácticas inapropiadas de la empresa con las comunidades –y la EIDH responde directamente al Amparo 445/2015 de Tecoltemic. Desde abril de 2019, el Juzgado 2º de Distrito resolvió el Amparo 445/2015 y determinó la violación al

---

147 Segunda Declaración Testimonial del Sr. Santamaría, ¶ 63.

148 Almaden Press Release, Almaden announces completion of Social Impact Assessment at Ixtaca Project ("Almaden … is pleased to announce that in the Spring of 2017 it engaged an arms-length consultant to conduct a Social Impact Assessment ('SIA') of the Ixtaca Project… which provides objective insight into the degree to which community members understand the Ixtaca project, and provides a valuable road map for further interactions with the communities who live local to the Ixtaca project area in Puebla State, Mexico"), December 12, 2017. **C-0052**. Almaden Press Release, Almaden Updates Progress on Environmental Permit Preparation and Announces Intention to Conduct Human Rights Impact Assessment (In furtherance of this commitment and consistent with the Company's historic practice and recently-adopted Human Rights Policy, Human Rights Policy, the Company has decided to pursue a Human Rights Impact Assessment ("HRIA") in accordance with best international practice and in observance of the latest developments in international human rights legislation and precedents. It will seek to predict, identify, characterize, and assess the impacts the project may have on these matters and will propose strategies which amplify the positive impacts and mitigate or compensate for any negative ones.), 19 October 2021. **R-0131**.

149 Memorial de Contestación, ¶¶ 154-159. Informe Dra. Torres, ¶ 252.

Convenio 169 de la OIT, la Sentencia de la Suprema Corte confirmó la falta del gobierno mexicano en 2022, pero se debe tener presente que la EIDH se solicitó en 2021.[150]

162. De una lista concisa de los eventos de ambos documentos se puede apreciar que Almaden y Minera Gorrión presentaron estos estudios en respuesta a la oposición al Proyecto.

- En 2014, la red de defensa Unión de Ejidos Atcolhua se conforma.[151]
- El de 7 abril de 2015, Tecoltemic promueve el Amparo 445/2015.[152]
- En julio de 2015, Minera Gorrión solicita la reducción de la Concesión Cerro Grande.[153]
- En febrero de 2017, la Unión de Ejidos Atcolhua, PODER, el IMDEC y el CESDER presentan una evaluación de impactos en derechos humanos.[154]
- El 30 de mayo de 2017, Economía emite, por orden judicial, la reducción de las Concesiones.[155]
- En julio de 2018, Igual Consultores presenta la EVIS.[156]

---

150 Sentencia del Amparo Indirecto 445/2015, Juzgado 2º de Distrito, 11 de abril de 2019, pp. 98-99, 118, 128-133. **C-0066**.

151 Reporte de entrevistas, 2025, p. 7. **GTM-073**.

152 Amparo 445/2015 interpuesto por la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemic y el Ejido de Tecoltemic (Sexto Distrito Judicial de la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla), 7 de abril de 2015, pp. 3-4**. C-0032**.

153 Solicitud de reducción, Cerro Grande, 31 de julio de 2015. **C-0035**. Solicitud de reducción, Cerro Grande 2, 31 de julio de 2015. **C-0051**

154 PODER, Unión de comunidades y ejidos en defensa de la tierra del agua y de la vida, IMDEC, CESDER, Minería canadiense en Puebla y su impacto los derechos humanos, por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la Cuenca del Río Apulco, febrero de 2017. **C-0229**. Esta EIDH tomó alrededor de 4 años para su elaboración, por lo que pudo comenzar desde 2013. *Ver* Consejo Tiyat Tlali, La Evaluación de Impacto en Derechos Humanos en Ixtacamaxtitlán ya fue presentada en 2017 ("Dicho análisis lo realizamos a lo largo de cuatro años y lo presentamos en 2017, tras un proceso participativo, transparente y, sobre todo, dirigido por las personas afectadas en las comunidades."), 21 de octubre de 2021. **R-0132**. *Ver también* Anexo 7, Comunicaciones del equipo de implementación con autoridades locales, estatales y federal, la empresa Almaden Minerals, la Embajada de Canadá y especialistas diversos ("Estimado Morgan Poliquin… Como usted sabe desde septiembre de 2014 hemos llevado a cabo una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos ex ante y liderada por la comunidad…"), 11 de julio de 2016, p. 105. **R-0248.**

155 DGM Oficio No. SE/610-02973/2017, 30 de mayo de 2017. **C-0045**. DGM Oficio No. SE/610-02972/2017, 30 de mayo de 2017. **C-0046**.

156 Igual Consultores/ GMI Consultores, Evaluación de Impacto Social proyecto Minero Ixtaca, julio de 2018. **C-0253**.

- El 19 de diciembre de 2018, Economía, por orden judicial, revoca la reducción de las Concesiones.[157]
- El 19 de diciembre de 2018, Minera Gorrión presenta la Manifestación de Impacto Ambiental para el Proyecto de Ixtaca (MIA).[158]
- El 11 de abril de 2019, El Juzgado 2º de Distrito emite la sentencia del Amparo Indirecto 445/2015.[159]
- El 28 de julio de 2021, Almaden adopta una política de derechos humanos.[160]
- El 19 de octubre de 2021, Almaden anuncia el comienzo de un estudio de impactos en materia de derechos humanos.[161]
- 16 de febrero de 2022, la Suprema Corte emite la Sentencia en el Recurso de Revisión 134/2021 y ordena la insubsistencia de las Concesiones.[162]
- En 2023, el Centro de Investigaciones presenta una evaluación de impacto en derechos humanos.[163]

163. A lo largo de estos eventos, es razonable concluir que Almaden y Minera Gorrión presentaron la EVIS y la EIDH del Centro de Investigaciones de manera reactiva a la oposición del Proyecto Ixtaca y, aún con ello, no lograron la aceptación del Proyecto.

164. Para SLR las evaluaciones de impacto social comisionadas por las Demandantes, así como sus actividades de relacionamiento con las comunidades son acordes con la industria. Inclusive, SLR alega que Almaden mostró una diligencia debida proactiva y reactiva, acorde con la guía de participación significativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

---

157 Dirección General de Minas, Oficio No. 610.23714.2018, 19 de diciembre de 2018, pp. 3-4. **R-0096**.

158 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, p. 15. **C-0262**.

159 Sentencia del Amparo Indirecto 445/2015, Juzgado 2º de Distrito, 11 de abril de 2019. **C-0066**.

160 Almaden Minerals Ltd., Human Rights Policy, 28 July 2021. **C-0369**.

161 Almaden Press Release, Almaden Updates Progress on Environmental Permit Preparation and Announces Intention to Conduct Human Rights Impact Assessment, 19 October 2021. **R-0131**.

162 Sentencia del Recurso de Revisión 134/2021, 16 de febrero de 2022, pp. 26-30. **R-0128**.

163 Evaluación de Impactos en Derechos Humanos del "Proyecto Ixtaca" (EIDH). **C-0408**.

(OCDE).[164] SLR alega que Almaden se involucró de buena fe con las comunidades para entender sus preocupaciones e incorporaron medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos en el Proyecto Ixtaca. También, Almaden supuestamente fue reactivo porque fue evolucionando en su enfoque ante los cambios regulatorios y políticos.[165] La propia EVIS, la Sentencia de Suprema Corte[166] y la EIDH del Centro de Investigaciones demuestran lo contrario.

165. La EVIS identifica y caracteriza a los actores de interés para el Proyecto Ixtaca.[167] La gran mayoría tenían un interés negativo al proyecto minero. De los 42 actores de interés, solamente identificaron alrededor de cinco con influencia muy alta (personas de las que depende el éxito del Proyecto) quienes también en su mayoría tenían un interés negativo.[168]

166. En Santa María Zotoltepec, comunidad indígena y la más cercana al Proyecto, sólo una persona tenía un interés positivo. En Ahuateno y Zacatepec ningún actor tenía un interés positivo. El número máximo de personas con interés positivo de algunas localidades fueron dos.[169]

Tabla: Comparativo por localidad

---

164 Segundo Informe SLR, ¶ 392.

165 Segundo Informe SLR, ¶ 393.

166 *Ver* Sentencia del Recurso de Revisión 134/2021 ("Debe decirse que no asiste razón a la parte tercero interesada Minera Gorrión... al señalar la parte quejosa no es una comunidad indígena; pues para ello, ofreció como prueba de su parte lo siguiente: a) Copia certificada del oficio [anexo C-0474]. b) Copia certificada del oficio [anexo C-0227]. b) Copia certificada del oficio [anexo C-0257] … Por ello, las documentales exhibidas por la parte tercero interesada resultan insuficientes para desvirtuar la calidad con que se ostentan los peticionarios de amparo, pues el hecho de que en elMunicipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, no se cuente con un padrón de comunidades indígenas, que en el catálogo de comunidades indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, resultado del censo INEGI 2010, no se haya localizado a la comunidad Tecoltemi, en el Municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla y que según lo informado por la Directora General de Promoción de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla, no advirtió la presencia de población indígena en la zona del "Proyecto Ixtaca", ni en su área de influencia, no resta eficacia a la afirmado por los peticionarios al autoadscribirse como integrantes del pueblo indígena Náhua Tecoltemi, asentado en la localidad de Ixtacamaxtitlán, Puebla"), 16 de febrero de 2022, p. 31. **R-0128**.

167 Es decir, "todas aquellas personas, comunidades, grupos, organizaciones, instituciones, autoridades y cualquier otro que pueda tener influencia en el diseño, implementación y sostenibilidad del Proyecto *Ver* Apartado III, Identificación y caracterización de los actores de interés, diciembre de 2018, p. 1. **R-0134**.

168 *Ver* Apartado III, Identificación y caracterización de los actores de interés, diciembre de 2018. **R-0134**.

169 *Ver* Apartado III, Identificación y caracterización de los actores de interés, diciembre de 2018, p. 1. **R-0134**.

Localidad	Negativo	Positivo
Almonamique	**1**	**1**
Cruz de Ocote	**5**	**1**
El Encanto	**1**	**2**
La Vega	**2**	**2**
San Francisco Ixtacamaxtitlán	**2**	**1**
Santa María Zotoltepec	**0**	**1**
Tuglitic	**2**	**1**
Zacatepec	**2**	**0**
Total	**25**	**9**

Fuente: Identificación y caracterización de los actores de interés. **R-0134**.

167. Entre las descripciones de las personas con influencia muy alta se encuentra: *i)* Sr. [redacted] (Ahuateno) carnicero, activista social, gestor de servicios públicos; su interés es negativo, pero su influencia es muy alta porque posee tierras, negocios y liderazgo económico; *ii)* Sr. [redacted] (Cruz de Ocote) juez de paz, líder administrativo y fáctico, con oposición pública al proyecto minero; *iii)* Sr. [redacted] (Cruz de Ocote) Comisariado ejidal, líder de ejidatarios, oposición al proyecto; *iv)* Sr. [redacted] (La Vega) exjuez, administrador de apoyos, figura de autoridad informal; y *v*) Sra. [redacted] (San Francisco Ixtacamaxtitlán) candidata a diputada federal, liderazgo en campañas contra la mina.[170]

168. Otras personas con influencia alta, como el Sr. [redacted], quien cuida parte de un manantial, lo describen como: aunque no está en contra de la mina "su lucha es en contra de la contaminación o cierres de paso del agua" y que su postura influiría de manera negativa porque

[170] *Ver* Apartado III, Identificación y caracterización de los actores de interés, diciembre de 2018, p. 1. **R-0134**.

"*ésta no ha dado una explicación de su forma de operar a los pobladores (no se ha mostrado ante las personas)*."[171]

169. La EVIS también incluye un diagnóstico del conocimiento del proyecto y sus posibles impactos, así como de la opinión de los programas sociales—denominados ProIxtaca. De poco más de 80 personas; 22 personas tuvieron conocimiento alto, 47 personas conocimiento medio y19 personas conocimiento bajo.[172] De ellas, la mayoría tienen una opinión negativa de los programas sociales (46 personas); positiva solamente 29 personas y neutra cinco. De estas opiniones, las personas calificaron a los programas como *i)* intentos de "comprar" a la gente, *ii)* estrategias para ganar aceptación o *iv)* manipulación.[173] Las opiniones positivas se concentraron en aquellos programas que se acercaban más a mejoras tangibles para la comunidad como las becas para los estudiantes. De las personas con conocimiento alto y con una opinión negativa a los programas, se encontraron 15, en cambio, aquellas con conocimiento alto y opinión positiva sólo se encontraron nueve. [174]

170. Cinco años después, los resultados no cambiaron de forma significativa y, en su lugar, muestran afectaciones a los derechos humanos. La EIDH del Centro de Investigaciones determinó que, la comunicación entre empresa y comunidades indicaba problemas y concluyó que el derecho humano a la participación fue afectado de forma severa.[175]

171. El sistema legal mexicano determinó la violación al derecho a la consulta, previa, libre e informada de las comunidades indígenas al emitir las Concesiones sin realizar dicha consulta. El Estado remedió esa violación, las Concesiones fueron declaradas insubsistentes. La EIDH del Centro de Investigaciones encontró otra afectación o violación a los derechos humanos de las

---

171 *Ver* Apartado III, Identificación y caracterización de los actores de interés, diciembre de 2018, p. 17. **R-0134**. (Énfasis añadido)

172 Este apartado no define qué es un conocimiento alto, medio o bajo del Proyecto Ixtaca.

173 Si nos enfocamos en los viajes a las minas, alrededor de 19 personas identificaron a este programa, sólo 5 personas tuvieron opinión positiva de esos viajes y 11 negativa. La Sra. [redacted] opinión que "[s]e llevan a las personas, pero no les dan la información necesaria." Apartado VII, Diagnóstico de conocimiento del proyecto y percepciones, diciembre de 2018, p. 13. **R-0135**.

174 *Ver* Apartado VII, Diagnóstico de conocimiento del proyecto y percepciones, diciembre de 2018. **R-0135**.

175 *Ver* Evaluación de Impactos en Derechos Humanos del "Proyecto Ixtaca" (EIDH), pp. 373-377. **C-0408**.

comunidades, ésta por parte de Minera Gorrión. Tanto el derecho a la consulta, previa, libre e informada como el derecho a la participación en esencia se refieren a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Cuando estas no se respetan, no se respetan su forma de vida.

172. Aunque las Demandantes insistan en que trabajaron "proactively to engage the community in open and transparent dialogue through door to-door conversations, as well as through larger meetings and events",[176] la realidad es que su relacionamiento con las comunidades de Ixtacamaxtitlán estuvo completamente desconectado a ellas. Por ejemplo, el Sr. Santamaría acepta que en 2014 ese relacionamiento se enfocó en obtener el permiso por parte de los pequeños propietarios para utilizar sus tierras.[177]

173. La IEDH del Centro de Investigaciones registra que la información proporcionada por la empresa no se calificó ni por su suficiencia ni, tampoco, si era culturalmente pertinente, porque para las operaciones de la empresa –en exploración—no era relevante. También señaló que "[faltaba] mayor información en comunidades sobre impactos ambientales".[178]

174. El Centro de Investigaciones registró testimonios en los que se decía: "Queremos que asambleas nos contesten con claridad, ya que en algunas ocasiones nos dejan con dudas y nos confunden más". También: "La comunidad está molesta porque la mina no nos ha escuchado y no nos ha tomado en cuenta. Sabemos que existe un buzón de quejas, pero también sabemos que ellos mismos [las] abren y no nos hacen caso y, no nos toman en cuenta, sabemos que quitan las quejas y no llegan a las personas indicadas".[179]

175. Entre los apuntes del Centro de Investigaciones se encuentran observaciones como las siguientes:[180]

---

176 Segunda Declaración Testimonial del Sr. Santamaría, ¶ 22.

177 Segunda Declaración Testimonial del Sr. Santamaría, pie de página 50. El Sr. Santamaría cita "53 purchase and lease agreements that we concluded with local landowners and duly registered with the local land registry". Sin embargo, esos contratos no son de renta (C-0870, C-0876, C-0877, C-0878, C-0879, C-0893, C-0894, C-0901, C-0918), sino que son ventas que no terminaron de completarse. De acuerdo con el artículo 2180 del Código Civil del Estado de Puebla, las compras con reservas de dominio son aquellas que en las que "se reserve la propiedad de la cosa vendida hasta que su precio haya sido pagado". *Ver* Artículo 2180 del Código Civil del Estado de Puebla. **R-0136**.

178 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 63. *Ver* Consultas y participación y Medio ambiente, EIDH del Centro de Investigaciones, Anexo 7, Indicadores, 2023. **R-0137**.

179 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 64.

180 Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 64.

> Las personas están preocupadas por la contaminación del agua a causa de la minería, la falta de información sobre los impactos del proyecto y la falta de participación de las comunidades.
>
> Los participantes consideran que la información que se les otorga por parte de la minera no es confiable, ponen en tela de juicio que la empresa esté siendo transparente con la información que ha brindado, sienten que puede existir algo que estén ocultando.
>
> Los asistentes expresaron que no hay información veraz por parte del personal de la mina, y esto genera que no tengan total conocimiento del Proyecto y que quisieran enterarse más.

176. La evidencia demuestra que las Demandantes no se involucraron adecuadamente con las comunidades locales.

177. Ixtacamaxtitlán forma parte de la región indígena de la Sierra Norte de Puebla, la cual se rige mediante "las asambleas ejidales y comunales [, las cuales] se han consolidado como espacios de participación que trascienden lo estrictamente agrario, pues articulan el interés comunitario amplio y la defensa del territorio indígena".[181] En las asambleas ejidales y comunales se informa y deliberan asuntos como "el acceso a programas gubernamentales, la gestión del agua agrícola y potable, así como la organización de faenas[182]".[183] En lugar de que los pobladores discutieran el Proyecto en las asambleas comunitarias y en las asambleas ejidales, Minera Gorrión utilizó a figuras cercanas al gobierno municipal para movilizar a los pobladores sin convocar las asambleas comunitarias.[184]

178. Minera Gorrión omitió por completo el carácter indígena y campesino de Ixtacamaxtitlán. El acercamiento con las comunidades debió de tener en cuenta al menos lo siguiente: *i)* el tipo de gobernanza de las comunidades (asambleas comunitarias y ejidales); *ii)* la identidad colectiva y diversa de las comunidades; *iii)* las redes o relacionamientos entre comunidades y municipios[185] y

---

181 Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 80. Memorial de Contestación, ¶ 104.

182 Las faenas son trabajos colectivos, gratuitos y de participación obligatoria para las personas adultas de la comunidad.

183 *Ver* Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶¶ 82-83.

184 Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 168.

185 En el continente americano las personas indígenas tienen como característica general que el poder de decisión es descentralizado y compartan territorios. *Ver* J. Anaya, *Indigenous Peoples in International Law* ("The concept of the nation-state in the post-Westphalian sense is based upon European models of political and social organization whose dominant defining characteristics are exclusivity of territorial domain and hierarchical, centralized authority. By contrast, indigenous peoples of the Western Hemisphere and elsewhere, at least prior to European contact, typically have been organized primarily by tribal or kinship ties, have had decentralized political structures often linked in confederations, and have enjoyed

iv) los modelos de educación campesina, los cuales promueven la autogestión, el trabajo agroecológico y la vida comunitaria.[186]

179. Estos elementos fueron completamente ignorados por Minera Gorrión. Las entrevistas de la EVIS también muestran claras indicaciones de Ixtacamaxtitlán como región indígena. Por ejemplo:

- "Hablante 1: ¿No, aqui aqui no hay una leyenda como de acá, no, no de acá, nati de acá no el sabe usted qué significa aguateno? Hablante 2: Pues sí. Hablante 1: ¿Que significa aguateno? Hablante 2: Aguateno es quiere decir Encinos junto al río. Hablante 1: Encinos junto, aquí se da el encino. Hablante 2: Estaban por aquí abajito. Hablante 1: ¿Usted lo sabe trabajar? Hablante 2: No, pues ahi nacieron en el río. Hablante 1: Ah. Hablante 2: Por eso dice Encinos junto al. Hablante 1: Río Encinos, que sí. Hablante 2: El nahuatl, casi se palabra el nahuatl. Hablante 1: ¿Usted o sus papas o sus abuelos hablaban en lengua? Hablante 2: Uh, mi abuelita, Ah, mi abuelita hablaba. Hablante 1: ¿Y usted ya no aprendió? Hablante 2: Pues es que si no hemos dejado que nosotros, la, la, la, el, el dialecto de nosotros era mexicano, Ah, y ya ver quién habla mexicano, no, tú hablas en mexicano."[187]
- "Hablante 1: Esos son como esos indígenas que están hacia allá. OK, porque también es importante nosotros ir hacia allá a verificar que haya comunidad. Hablante 2: Pero aquí anda en Almonique Hablante 3: No, aquí no, ahorita. Hablante 2: No aquí ya o sea, si provienen de sean como como que la raza. Hablante 1: Se ha modificado mucho porque. Hablante 2: Se ha mezclado, pero si es es este lugar de gente indígena. Hablante 3: Sí, si es."[188]
- "Hablante 2: Pues pues nomás él es como que un respaldo del juez, pero sus actividades que son del inspector, pues por ejemplo es que si se va a hacer una faena en el camino, pues el inspector es el que tiene, que junto con el juez lógico tienen que mandar, avisar que va a haber faena. ¿Y a qué hora se tiene uno que presentar y qué herramienta tiene uno que llevar? Y luego él es el que tiene que andar revisando que se haga bien el trabajo ajáo que todos asisten a la faena."[189]
- "Hablante 1: ¿Me podría decir, por favor, cuál es el nombre de su comunidad? Hablante 2: Cruz de Ocote. Hablante 1: ¿Me podría decir por que le dicen cruz de Ocote? Hablante 2: A cruz de Ocote le dicen porque este nació de una cruz en un árbol. De un árbol que es una especie que se llama Ocote, entonces ahi nació la se hizo la cruz y de ahí nació el el, el, el nombre, el nombre del. Hablante 1: Ya que digamos que ese bueno es un ocote, valla es un árbol que se formó bueno, la forma de cruz adquirió la forma de cruz. Hablante 2: La forma de cruz, si, y ya antes de que se. Antes de que se hiciera este comunidad, ah porque ahorita

---

shared or overlapping spheres of territorial control"), Oxford Univ. Press, 1996, 2d ed. 2004, p. 22. **RL-0203**

186 Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶¶ 87, 90, 147-149, 170, 203-204.

187 Consulta 10, Ahuateno, p. 25. **R-0138**.

188 Consulta 2, Almonamique, p. 54. **R-0139**.

189 Consulta 3, Cruz de Ocote, p. 32. **R-0140**.

pues aqui pertenecía yo cuando yo nací ya era cruz Yokotano era una comunidad, pero más antes me platicaba mi papa que pertenecían a tuliti."[190]

- "Hablante 1: OK, pero aquí, por ejemplo, en la Comunidad no se ha sabido de ninguna. ¿Cree que hay población indígena que pudiera ser afectada por este proyecto? Hablante 2: Pues por los derrames de agua, sí por la contaminación que se va para abajo, porque para abajo. Hablante 1: ¿Pero hay población indígena por ahí? Hablante 2: Para abajo, sí, porque mire este escurridero este escurridero supongamos que este no es este rio, pero si es este y esta calle a este rio, mire el rio Pulco, el rio Pulco llega, se va hasta colindando a Veracruz."[191]
- "Hablante 1: OK, entonces usted idce que su papá le enseñó el nahuatl, así es. Pero toda su familia hablaba nauatl. Hablante 2: Casi pues. "[192]
- "Hablante 2: ¿Aca lo más comun hacen juntas entre los ciudadanos y pues entre todos se ponen de acuerdo, eligen al juez, al tesorero, al inspector y pues yo creo que si les van dando los cargos es la responsabilidad que vean no? O sea, se ponen muy de acuerdo y muchas de las veces dicen no, pues queremos que él sea tesorero. Algunos están de acuerdo, algunos no porque dicen no, pues es que no nos va a entregar buenas cuentas y yo creo que aquí buscan el bienestar para la Comunidad. Entonces eligen a un juez que sea realmente responsable, que esté dispuesto, pues, a sacar la Comunidad adelante, que no la deje caer, al contrario, que siga avanzando para seguir progresando.?"[193]

180. Minera Gorrión simplemente ignoró todas estas indicaciones. La supuesta estrategia proactiva y reactiva de la empresa estuvo claramente desvinculada de las comunidades de Ixtacamaxtitlán. Inclusive, si las Demandantes quisieran alegar que sus prácticas cambiaron a raíz de la sentencia de la Amparo 445/2015, de abril de 2019, o de los trabajos del Centro de Investigaciones en 2021, hasta que se publicó en 2023, las repercusiones en las comunidades ya habían provocado divisiones internas. El ejido de Santa María Zotoltepec es la muestra por excelencia.

181. Según las Demandantes, la división de los ejidatarios de Santa María Zotoltepec comenzó a raíz de una reunión convocada por el Consejo Tiyat Ttlali, al que asistió la Sr. [redacted], presidenta del comisariado ejidal, sin haber primero obtenido la autorización de la asamblea ejidal.

190 Consulta 12, Cruz de Ocote, p. 1. **R-0141**.

191 Consulta 9, Tuligtic, p. 38. **R-0142**.

192 Consulta 11, Tuligtic, p. 5. **R-0143**.

193 Consulta 6, Zacatepec (ALMADEN_MEX_00031694 - ALMADEN_MEX_00031714), 19 de septiembre 2017, p. 8. **R-0144**.

También señalan que la Sra. [redacted] se negó a convocar a la asamblea de ejidatario después de esta reunión porque sabía que la removerían. Las Demandantes tergiversan los hechos.[194]

182. La Sra. [redacted] no necesitaba ningún permiso para acudir y representar al ejido porque como representante del ejido sus actos son legales mientras no perjudique las tierras ejidales. En septiembre de 2022, decenas de ejidos y localidades acordaron "[seguir] ejerciendo [su] derecho a la libre determinación para defender[se] de las grandes empresas que buscan despojar[los] … del territorio …[sus] antepasados porque de ello depende [su] vida."[195] En cambio, Minera Gorrión comprometió a los ejidatarios a vender sus vender sus parcelas entre 2017 y 2018, sin obtener la aprobación de la asamblea de ejidatarios, 2017, ni en 2018, tampoco al menos hasta 2025.[196]

183. Las Demandantes también señalan que se aprobó un acuerdo de colaboración en febrero de 2023 y al mes siguiente votaron la remoción de la Sra. [redacted]. En realidad, los documentos que adjuntan no demuestran la validez del acuerdo, ni la legalidad de la remoción de la Sra. [redacted]. Estos documentos no contienen las negativas a convocar la asamblea, ni las convocatorias que debió realizar la Procuraduría Agraria para remover a la Sra. [redacted].[197] Más relevante, en octubre de 2025, la Sra. [redacted] entregó el sello del ejido y se eligió al nuevo comisariado.[198] La Demandada aclara que por error señaló que no se votó el comisariado ejidal en octubre de 2025.

---

194 Réplica, ¶¶ 106-114.

195 Acta de asamblea de la 34 asamblea en defensa del territorio y construcción de planes de vida de los pueblos maseual, tutunakú y mestizo de la Sierra Norte de Puebla, Realizada en la localidad de Santa María Zotoltepec, Ixtacamaxtitlán, 18 de septiembre de 2022, p. 2. **R-0145**. *Ver* Artículo 33 de la Ley Agraria que faculta al comisariado a representar a los ejidos. **R-0146**.

196 Mediante estos contratos, aunque no se había hecho la compra hasta que los lotes cambiarán su estatus a propiedad privada, en lugar de ejidal, los contratos autorizaban a Minera Gorrión a "lle[var] a cabo en el TERRENO el desarrollo de trabajos de exploración minera". *Ver* Contrato de promesa para celebrar contrato de compraventa de terreno entre [redacted], y Minera Gorrión, 25 de mayo 2017, p. 6. **C-0662**. Contrato de promesa para celebrar contrato de compraventa de terreno entre [redacted] y Minera Gorrión, 25 de mayo de 2017, p. 6. **C-0663.** Contrato de promesa para celebrar contrato de compraventa de terreno entre [redacted], y Minera Gorrión, 25 de mayo de 2017. **C-0664.** Contrato de promesa para celebrar contrato de compraventa de terreno entre [redacted] y Minera Gorrión, 18 de mayo de 2018. **C-0665**.

197 *Ver* Artículos 32, 34 y 35 de la Ley Agraria. **R-0146**.

198 Solicitud de emisión de convocatoria y aprobación del nuevo comisariado ejidal de Santa María Zotoltepec, febrero de 2024 a octubre de 2025, p. 56. **R-0147**.

Es evidente que el ejido de Santa María Zotoltepec sufrió de divisiones internas por casi una década, lo cual afectó gravemente su vida comunitaria. [199]

184. En suma, es irrelevante la diferencia que proponen las Demandantes sobre la pertinencia en el tiempo que encomendaron la EVIS y la EIDH, cuando ninguna remedió las malas prácticas de Minera Gorrión al relacionarse con las comunidades. Ambos instrumentos buscan medir el impacto social del proyecto y con base en sus resultados implementar medidas que atiendan las preocupaciones de las comunidades. Minera Gorrión ni Almaden lograron relacionarse de manera culturalmente adecuada con las comunidades, y a pesar de contar con evidencia suficiente para considerar la existencia de comunidades indígenas, éstas fueron ignoradas. El orden de los hechos evidencia que Minera Gorrión fue respondiendo, de manera errónea, a la oposición contra el Proyecto Ixtaca y el resultado fue que la EIDH del Centro de Investigaciones determinará la afectación severa al derecho humano a la participación. El ejido de Santa María Zotoltepec es un fracaso importante en la diligencia debida de Minera Gorrión, pues constata las divisiones provocadas por la minera en la vida comunitaria del ejido.[200]

185. Con base en las tres secciones anteriores, la Demandada reafirma que el fracaso del Proyecto Ixtaca, en especial el rechazo sostenido de las comunidades se debe a las propias Demandantes.[201] Si las Demandantes hubiera obtenido de manera temprana la legitimidad, credibilidad y confianza de las comunidades el Proyecto Ixtaca hubieran evitado retrasos y pérdidas financieras en su proyecto.[202]

---

199 Memorial de Contestación, ¶ 169. Informe Dra. Torres, ¶¶ 181-184.

200 La Demandantes y el Sr. García Herrera se equivocan al decir que el Sr. Herrara fue elegido como "Presidente" de la comunidad indígena. No existe un cargo como ese en Santa María Zotoltepec, sólo existen los jueces de paz o los inspectores. El ejido está separado de la localidad, su sistema de gobernanza no se mezcla con el del pueblo de Santa María Zotoltepec. *Ver* Réplica, ¶ 183. Segunda Declaración Testimonial del Sr. García Herrera, ¶ 31.

201 *Ver* Compilado de actas comunitarias, intercomunitarias y asambleas expresando el rechazo al Proyecto Ixtaca, 2013-2022. **R-0148.**

202 Memorial de Contestación. ¶¶ 168-172.

3. Las Demandantes tienen un historial de *mala praxis* en materia ambiental y social

186. Contrario a la narrativa construida por las Demandantes desde su Memorial de Demanda[203] y ahora en su Escrito de Réplica,[204] el fracaso del Proyecto Ixtaca, no constituye un evento fortuito ni el resultado de una presunta "colusión" de las ONGs y el Gobierno de México. Por el contrario, la inviabilidad ambiental y social del Proyecto Ixtaca es la consecuencia directa de un patrón sistemático en la conducta corporativa de las Demandantes en sus proyectos mineros, caracterizados por una falta de debida diligencia, y un modelo de negocio basado en especulaciones financieras bajo el que operan las Demandantes y sus subsidiarias.

187. El historial de proyectos operados por las Demandantes y sus subsidiarias es evidencia de dos constantes en su conducta: la prioridad otorgada a la pronta obtención de concesiones o permisos administrativos para impulsar su cotización en la Bolsa de Toronto (TSXV); y la falta de certeza hacia la viabilidad técnica real, la fragilidad ambiental de las zonas de los proyectos y los derechos de las comunidades locales. El Proyecto Ixtaca simplemente es un ejemplo de ello.

a. Proyecto "El Cobre"

188. El Proyecto denominado "El Cobre", un depósito de pórfido de cobre y oro que abarca aproximadamente 7,000 hectáreas en los municipios de Actopan y Alto Lucero, Veracruz,[205] demuestra de forma contundente el modelo de reestructuraciones corporativas y falta de responsabilidad social de las Demandantes en sus proyectos mineros.

189. En 2015, tras el hallazgo del yacimiento Ixtaca, Almaden ejecutó una reorganización mediante la cual escindió sus proyectos de exploración en etapas tempranas, incluido El Cobre, hacia una nueva entidad denominada Almadex Minerals Ltd. (una de las Demandantes en este caso). Posteriormente, en mayo de 2018, Almadex completó un Plan de Arreglo (*Plan of Arrangement*) para reparar sus activos, transfiriendo la titularidad directa de El Cobre a Azucar

---

203 Memorial de Contestación, § 2.11.

204 Réplica, § Sección 2.7.5.

205 News Release, Azucar Minerals Commences Drilling at the El Cobre Project, Mexico, 13 June 2018, p. 1. **R-0149**.

Minerals Ltd., mientras que Almadex retuvo una regalía de Retorno Neto de Fundición (NSR por sus siglas en inglés) del 1.75%.[206]

190. Al igual que en el Proyecto Ixtaca, las Demandantes buscaron validar bursátilmente el proyecto atrayendo inversión de grandes actores en la industria minera, como Newcrest Mining Ltd., que adquirió el 19.9% de Azucar Minerals en 2018,[207] mientras que ignoraban por completo la oposición comunitaria en el terreno donde se planeaba desarrollar el proyecto.

191. El Proyecto El Cobre generó un severo rechazo social encabezado por la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) y ejidatarios locales. La oposición del proyecto radicó en que las zonas planeadas para la exploración y explotación a tajo abierto se sobreponen con áreas críticas de recarga acuífera en una región de alto estrés hídrico.[208] Asimismo, evaluaciones técnicas alertaron que las perforaciones y detonaciones masivas pretendidas por Azucar Minerals se ubicaban a menos de 5 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de nombre Laguna Verde, generando un riesgo estructural e hídrico inaceptable para las comunidades.[209]

192. Al igual que en el Proyecto Ixtaca, las omisiones en la obtención de la licencia social, la falta de una evaluación de impacto ambiental adecuada y los bloqueos de núcleos ejidales derivaron en la paralización total de las operaciones de exploración de Azucar Minerals.

193. Finalmente, y confirmando el carácter meramente especulativo de sus activos, el 29 de junio de 2026 Almadex vendió de forma definitiva su regalía del 1.75% NSR sobre El Cobre a la empresa privada mexicana Minerales Críticos de México, S.A.P.I. de C.V. por la suma de US $500,000,[210] desvinculándose financieramente del yacimiento tras haber generado severos conflictos sociales en la región.

---

206 News Release, Almadex Minerals Ltd. And Azucar Minerals Ltd. Announce Closing of Arrangement and Closing of private placement with Newcrest, 18 May 2018, p. 3. **R-0150**.

207 News Release, Newcrest To Acquire Indirect 19.9% Interest in El Cobre Through Investment of Cad$19 Million; Almadex to Spin-Out Mineral Exploration and Royalty Assets, 26 February 2018, p. 2. **R-0151**.

208 El Heraldo de México, "Realizan toma simbólica de mina a cielo abierto en Veracruz", 19 de junio de 2021. **R-0152**.

209 SinEmbargo MX, "Se le dijo 'no' por el riesgo nuclear, y ni así: minera de Canadá perfora con fuerza en Veracruz", 25 de julio de 2018. **R-0153**.

210 News Release, Almadex Announces Sale of El Cobre NSR Royalt, 29 June 2026. **R-0154**.

b. Proyecto "El Caballo Blanco"

194. El Proyecto Caballo Blanco, originalmente descubierto por Almaden y que posteriormente fue vendido a Goldgroup Mining Inc.,[211] consiste en un yacimiento de oro en el municipio de Alto Lucero, Veracruz.[212]

195. En este caso, Almaden promovió este desarrollo a pesar de estar ubicado en un ecosistema de bosque tropical seco de alta vulnerabilidad y dentro de un corredor biológico crítico para la migración de aves rapaces, así como zonas con alto estrés hídrico.[213]

196. En los mercados financieros internacionales, Almaden lo promocionó como un proyecto altamente prometedor, con el potencial de albergar un depósito de oro de clase mundial,[214] y manifestando que la cercanía a la única central nucleoeléctrica del país era un atributo de "excelente infraestructura"[215] sin informar los riesgos que esto conllevaba. A la par que esto sucedía, en las regiones de Alto Lucero y Actopan se encontraban graves inconformidades sociales y una creciente oposición comunitaria en contra del proyecto por la amenaza de lixiviación con cianuro.[216] Esto nunca fue informado por Almaden en sus reportes financieros.

197. Tras estos hechos, en octubre de 2011 Almaden vendió su participación del Caballo Blanco a Goldgroup Mining Inc., asegurando para sí una NSR del 1.5%. De este modo, Almaden obtuvo ganancias transfiriendo un proyecto con graves problemas sociales y ambientales a otra empresa.

---

211 Almaden Minerals Ltd., Form 20-F Annual Report, Fiscal Year ended December 31, 2015. **R-0155**.

212 Vanguardia, "Veracruz, en la mira de empresas mineras canadienses", 28 de septiembre de 2015. **R-0156**.

213 E-consulta Veracruz, "La Paila: el proyecto minero que amenaza corredor de aves y sitio ramsar", 27 de septiembre de 2017. **R-0157.**

214 News Release, Almaden Will Advance the Caballo Blanco Project in 2007, 8 January 2007. **R-0158**.

215 News Release, Caballo Blanco, Mexico: Drillhole CB06-03 intersects 144 m of 1.0 g/t gold, 76 m of 1.7 g/t gold, and 26m of 2.5 g/t gold, 9 August 2006. **R-0159**.

216 Revista Proceso, "Veracruz: piden a Semarnat negar manifestación de impacto ambiental a minera", 23 de marzo de 2012. **R-0160**.

Poco después de la venta, la fuerte oposición comunitaria y falta de viabilidad técnica y ambiental terminaron en la paralización del proyecto.[217]

B. Las Demandantes no han refutado que la Declaración de Insubsistencia y la Resolución de No Factibilidad fueron consecuencia de una orden judicial

198. Las Demandantes argumentan que "Economía's baseless February 2023 Oficio was the product of a political directive and a leadership change at the head of Economía in October 2022",[218] y presentan una interpretación novedosa sobre el alcance de la Sentencia de la Suprema Corte. Su posición ignora totalmente que Economía siguió las instrucciones emitidas por diversas autoridades judiciales con respecto a la forma de dar cumplimiento a la Sentencia de la Suprema Corte, así como las múltiples ocasiones en las que dichas autoridades judiciales confirmaron que tanto la Declaratoria de Insubsistencia como la Resolución de No Factibilidad cumplieron adecuadamente con la Sentencia de la Suprema Corte.

199. La interpretación novedosa que pretenden introducir ahora las Demandantes no solo se contradice con las instrucciones de las autoridades judiciales relacionadas con el Amparo 445/2015 y la Revisión 134/2021, sino con el propio entendimiento original que las Demandantes tuvieron de la Sentencia de la Suprema Corte.[219]

200. En términos simples, las Demandantes pretenden re litigar un asunto que ya fue resuelto por el máximo tribunal judicial en México.[220] El arbitraje de inversión no es el medio idóneo para

---

217 Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc-UNAM) / Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales (LET), "Registro y documentación del conflicto socioambiental por la minería de tajo abierto en Caballo Blanco, Veracruz". **R-0161.**

218 Dúplica, ¶ 509

219 Segundo Informe de Experto Sres. Aguinaco, ¶¶ 228-232. Ver también Como se relata en la Resolución de la Segunda Sala Regional de Oriente del TFJA en el expediente 0026 2023-02-C-21-02-03-02-L, al resolver el recurso de reclamación interpuesto por Minera Gorrión y Minera Gavilán, pp. 5-6, 8-9. "En el único agravio del recurso de reclamación, aduce la enjuiciante que el acuerdo recurrido es ilegal, toda vez que el acto impugnado fue emitido en libertad de jurisdicción por parte de la autoridad demandada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, por lo cual resulta procedente el presente juicio; ya que precisamente, mediante la resolución emitida en el juicio de amparo, el juez de distrito del conocimiento tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo con la emisión del oficio impugnado en el presente juicio, siendo un hecho notorio." (Énfasis añadido). **FMAB-0068**.

220 Réplica, ¶ 511. ("The Supreme Court's decision in this respect was irregular and contrary to fundamental Mexican legal principles of non-retroactivity and legal certainty. As the Claimants explained, the Supreme Court ordered a retroactive reassessment of the "feasibility" of the existing Concession titles

reinterpretar sentencias de la Suprema Corte de un Estado o discutir sobre la idoneidad de las mismas, mucho menos si la base de la reclamación presentada no es una denegación de justicia o expropiación judicial basada en actuaciones judiciales.

201. La situación en este caso es clara. El actuar de DG Minas no puede ser considerado arbitrario ni discrecional debido a que se dio en estricto cumplimiento de una orden judicial que le instruyó a "pronunciarse nuevamente" con respecto a si las Solicitudes de Concesión "cumpl[ían] con las condiciones y requisitos" de la legislación minera. [221] La evaluación de la DG Minas se realizó siguiendo la normativa aplicable. Como se verá infra, el hecho de que el resultado de la evaluación de factibilidad no haya sido positivo para las Demandantes fue una consecuencia de las deficiencias técnicas de los trabajos periciales presentados por la propia empresa en sus Solicitudes de Concesión, lo cual no puede ser responsabilidad del Estado mexicano.

1. El acto reclamado en el Amparo 445/2015 fue la emisión de las Concesiones

202. Como explicó la Demandada en su Memorial de Contestación, el conflicto legal se originó a raíz de la oposición de Tecoltemic al Proyecto Ixtaca.[222] Fue en ese contexto que, en febrero de 2015 Tecoltemic solicitó a Economía informarles si se habían otorgado concesiones sobre sus tierras.[223] Un mes después, Economía confirmo la existencia de dos concesiones mineras ("Cerro Grande" y "Cerro Grande 2") otorgadas sobre sus tierras a Minera Gavilán sin que se hubiera realizado una consulta indígena previa.[224]

203. Ante esta información, el 7 de abril de 2015, Tecoltemic promovió el juicio de Amparo 445/2015, en el cual reclamó que la expedición de las Concesiones vulneraba directamente sus derechos sobre su territorio y recursos naturales, derivado de la omisión de llevar a cabo una

---

and imposed a requirement of mandatory consultation on Economía – which, as set forth below, Economía never carried out.) La Demandada entiende que las reclamaciones presentadas no están basadas en violaciones al TIPAT ocasionadas por las actuaciones de la Suprema Corte, por lo que la idoneidad o regularidad de la Sentencia de la Corte es un hecho que no está bajo discusión frente a este Tribunal.

221 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, p. 206. **C-0092**. ("el efecto de esta sentencia será para que, la autoridad responsable se pronuncie nuevamente con relación a la factibilidad de expedir los títulos solicitados, y en el caso de que se considere que se cumplen las condiciones y requisitos").

222 Memorial de Contestación, ¶¶ 353-361.

223 Memorial de Contestación, ¶¶ 353-356.

224 Memorial de Contestación, ¶ 354.

Consulta Indígena a su comunidad de conformidad con el artículo 2° Constitucional y el Convenio 169 de la OIT. [225]

204. Para defender sus derechos, Tecoltemic cuestionó ante el Juzgado de Distrito la constitucionalidad de la propia Ley Minera por no contemplar en sus disposiciones la consulta indígena; pero, de manera fundamental, reclamó que la expedición de las Concesiones era violatorio de su derecho humano a sus territorios.[226]

205. El 11 de abril de 2019, el Juzgado 2º de Distrito resolvió el Amparo 445/2015 a favor de Tecoltemic y delimitó la *litis* relacionada con la inconstitucionalidad de la Ley Minera de la siguiente manera:

> Ahora bien, por cuestión de técnica se procederá al análisis de las normas reclamadas tomando en consideración los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en los que esencialmente plantea que en dichos preceptos no observaron sus derechos a disfrutar de la tierra y territorio, a ser consultados y a obtener su consentimiento libre e informado; lo cual, a criterio de esta Juez Federal y, en suplencia de la deficiencia de la queja, que como se vio opera en favor de la parte impetrante, se traduce en una omisión legislativa relativa, dado que las normas reclamadas no regulan el derecho de la parte quejosa a ser consultada y a obtener su consentimiento libre e informado, con lo cual no se respeta su derecho a disfrutar de la tierra y el territorio.[227] [Énfasis añadido]

206. La sentencia otorgó el amparo a Tecoltemic debido a que se habían afectado sus derechos: por un lado, por las disposiciones de la Ley Minera que fueron aprobadas sin una Consulta Indígena;[228] y por otro lado, por la emisión de las Concesiones sin Consulta Indígena:

> Al emitir los títulos de concesión minera ****** y, ****** en favor de la tercera interesada, se ignoró el deber de obtener el consentimiento libre e informado de la parte quejosa, al tratarse de un proyecto de desarrollo a gran escala que ocasiona graves impactos en su territorio.[229]

---

225 Amparo 445/2015 interpuesto por la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemic y el Ejido de Tecoltemic (Sexto Distrito Judicial de la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla), 7 de abril de 2015, pp. 27-37. **C-0032**.

226 Amparo 445/2015 interpuesto por la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemic y el Ejido de Tecoltemic (Sexto Distrito Judicial de la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla), 7 de abril de 2015, pp. 27-37. **C-0032**.

227 Sentencia del Amparo Indirecto 445/2015, Juzgado 2º de Distrito, 11 de abril de 2019, p. 92. **C-0066**.

228 Sentencia del Amparo Indirecto 445/2015, Juzgado 2º de Distrito, 11 de abril de 2019, p. 87. **C-0066**.

229 Sentencia del Amparo Indirecto 445/2015, Juzgado 2º de Distrito, 11 de abril de 2019, p. 89. **C-0066.**

207. De lo anterior se desprende que, contrario a lo sostenido por las Demandantes y su experto,[230] la *litis* o el objeto del Amparo 445/2015 no se limitó únicamente la omisión de realizar una consulta indígena, sino que comprendió dos elementos (*i.e.*, la expedición de la Ley Minera y el otorgamiento de las concesiones mineras), afectando dos derechos sustanciales: el derecho al territorio y sus recursos naturales, y el derecho a la Consulta Indígena.

208. Estos dos elementos continuaron bajo discusión en el Amparo en Revisión 134/2021 ante la Suprema Corte. Tecoltemic recalcó en el Amparo en Revisión que el otorgamiento de las Concesiones afectaba directamente los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. La comunidad explicó que su derecho al territorio no solo protege el suelo, sino también la preservación de sus recursos naturales y la relación espiritual con sus tierras ancestrales, elementos clave para su vida y dignidad.[231] Asimismo, Tecoltemic reiteró al expedir las concesiones, se violó su derecho a la consulta indígena porque debió realizarla antes de entregar las concesiones.[232]

209. Finalmente, en la Sentencia de la Suprema Corte del 16 de febrero de 2022, se concedió el amparo a Tecoltemic precisamente contra un acto positivo, consistente en el otorgamiento de las concesiones mineras, tal como se desprende del siguiente párrafo de la sentencia:[233]

> TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Nicéforo Lobato Martínez, Fidencio Romano Romano y Leoncio Lobato Martínez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal de Tecoltemi y representantes de la Comunidad Indígena Náhua de Tecoltemi, en contra de los títulos de concesión minera números ********** y ********** cuyo titular es la empresa denominada Minera Gorrión, Sociedad Anónima de Capital Variable; para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria.
>
> (Énfasis añadido)

210. Contrario a lo que afirman las Demandantes y su experto, el Sr. Cossío Díaz,[234] el objeto del Amparo 445/2015 no fue únicamente la omisión de consulta indígena de forma aislada, sino la expedición de las Concesiones a favor de Minera Gavilán como acto violatorio de los derechos de

---

230 Réplica, ¶¶ 512, 526, 534-536. Informe de Experto del Sr. Cossío, ¶¶ 35-54, 100-106.

231 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, pp. 10-11. **C-0092**.

232 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, pp. 14-17. **C-0092.**

233 Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 28.

234 Informe del Experto Sr. Cossío Díaz, ¶¶ 100-106.

Tecoltemic sobre sus tierras y recursos naturales. En otras palabras, el acto examinado por la Suprema Corte y que afectaba a los derechos de Tecoltemic fueron las Concesiones.

211. Es por eso que, como se explicará más adelante,[235] los efectos de la Sentencia de la Suprema Corte no podían limitarse a realizar la Consulta Indígena sin eliminar el acto que generó la violación a los derechos de Tecoltemic.

2. Las Demandantes intentan modificar el alcance de la Sentencia de la Suprema Corte

212. Las Partes coinciden en que la Sentencia de la Suprema Corte contiene tres efectos: (*i*) declarar insubsistentes las Concesiones, (*ii*) ordenar a Economía que se "pronuncie nuevamente" con relación a la factibilidad de expedir las Concesiones, conforme a las condiciones y requisitos aplicables en la fecha en que fueron solicitadas originalmente y (*iii*) "en el caso de que se considere que se cumplen las condiciones y requisitos, antes de otorgarlas sobre los terrenos de la comunidad indígena, Economía debía previamente realizar el procedimiento de consulta".[236] Sin embargo, las Demandantes y su experto reinterpretan incorrectamente el alcance, la secuencia y el significado de cada uno de los efectos ordenados por la Suprema Corte. Tres consideraciones deben tomarse en consideración:

213. *Primero,* como explican los Sres. Aguinaco, los efectos de una sentencia de amparo deben examinarse partiendo de las consideraciones y resolutivos de la misma.[237] En este caso, las Demandantes y su experto dejan de lado que cuando la Suprema Corte otorgó el amparo a Tecoltemic en contra de la expedición de las Concesiones por parte de Economía, precisó el alcance de su propia decisión, por lo que no es necesario realizar una nueva interpretación:

> TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Nicéforo Lobato Martínez, Fidencio Romano Romano y Leonicio Lobato Martinez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal de Tecoltemi y representantes de la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemi, <u>en contra de los títulos de concesión minera números ****** y ******* cuyo titular es la empresa denominada</u>

---

235 Ver *infra* Sección II.b.2.

236 Réplica, ¶ 513.

237 Segundo Informe de Experto de los Sres. Aguinaco, ¶ 18. *Ver también* Tesis con registro digital 232789, del Pleno de la Suprema Corte, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Primera Parte, página 113, de rubro: "SENTENCIAS. SUS PUNTOS CONSIDERATIVOS Y RESOLUTIVOS FORMAN UNA UNIDAD, SIN QUE PUEDA SER IMPUGNADA SOLO UNA DE SUS PARTES." **FMAB-0075**.

> Minera Gorrión, Sociedad Anónima de Capital Variable; para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria.[238] [Énfasis añadido]

214. Específicamente, el último considerando (párrafos 296 y 297) de la Sentencia aclara y delimita los efectos de la resolución de la Suprema Corte de la siguiente manera:

> DÉCIMO. Efectos Esta Primera Sala determina que lo procedente es ordenar a la Secretaría de Economía , a través de su Dirección General de Regulación Minera, dejar insubsistentes los títulos de concesión minera registrados con los números ****** y *****, bajo los nombres de lotes "*****" y "******", emitidos el cindo de marzo de dos mil tres y el veintitrés de febrero de dos mil nueve, respectivamente.
>
> Ahora bien, tomando en cuenta que el procedimiento inició a solicitud de la tercero interesada, realizándose diversas actuaciones en términos de los artículos 13 de la Ley Minera y 16 de su Reglamento, vigente al momento de la presentación, el efecto de esta sentencia será para que, *la autoridad responsable se pronuncie nuevamente con relación a la factibilidad de expedir los títulos solicitados,* y en el caso de que se considere que se cumplen las condiciones y requisitos, antes de otorgarlas sobre terrenos de la comunidad indígena, *deberá previamente realizar el procedimiento de consulta a la comunidad indígena*, observando el contenido y requisitos establecidos en los artículos 6, 7 , 16 y demás aplicables del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, este caso, como mínimo, lo siguiente:[239] [Énfasis añadido]

215. Conforme a la interpretación de las Demandantes, la Sentencia de la Corte aseguraba la re-expedición de las Concesiones sin importar el resultado de la evaluación de la factibilidad que la Suprema Corte ordenó a Economía o de la Consulta Indígena sobre el Proyecto que se llegara a realiza. Sin embargo, no hay nada en el texto de la Sentencia de la Suprema Corte o en cualquier otra resolución posterior que confirme la interpretación de las Demandantes y su experto.

216. La decisión de la Suprema Corte no se puede traducir como una orden automática para realizar una consulta indígena y por tanto otorgar automáticamente las Concesiones, sino que brindo una serie de instrucciones para la autoridad: dejar insubsistentes los títulos, reevaluar la factibilidad y sólo si resultaba factible, proceder con la consulta indígena. De hecho, como se explicará *infra*, los argumentos presentados por las Demandantes en este arbitraje en relación con el alcance y los efectos de la Sentencia de la Suprema Corte, incluido su entendimiento sobre el término "insubsistencia", fueron rechazados por autoridades judiciales.[240]

---

238 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, p. 211. **C-0092**.

239 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, pp. 206-206. **C-0092**.

240 Ver Sección II.B.2.a.

217. Los efectos de la sentencia de la Suprema Corte deben interpretarse de tal forma que cada uno de los efectos decretados en la sentencia tengan plena eficacia y efecto útil. Como el Sr. Cossío Díaz reconoce, el primer efecto consistió en dejar insubsistentes las concesiones mineras.[241] Pretender ahora (como lo hace el experto de las Demandantes) que la DG Minas estaba obligada únicamente a realizar la consulta, considerando el examen de factibilidad específicamente para el propósito de allegarse de información para la consulta a la comunidad, significaría vaciar de contenido al segundo y tercer efecto de la Suprema Corte, a un mero trámite.

218. *Segundo,* Las Demandantes incurren en un reduccionismo inaceptable cuando argumentan que la única manera de restituir a Tecoltemic de su derecho era ordenando una consulta indígena sin afectar el acto que originó la violación (*i.e.*, las Concesiones).[242]

219. Conforme al Artículo 77 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un amparo es de carácter positivo,[243] los efectos de la Sentencia serán "restituir a la persona en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación".[244] En este caso, Tecoltemic impugnó la expedición de las Concesiones y los actos de ejecución que derivaron de dichas Concesiones, *i.e.*, un acto positivo:[245]

> DEL DIRECTOR GENERAL DE MINAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, reclamamos la expedición de los Títulos de Concesión Minera 219469 y 233434 con nombres de lotes "CERRO GRANDE" y "Cerro Grande 2", emitidos el cinco de marzo de dos mil tres y el veintitrés de febrero de dos mil nueve respectivamente, en aplicación

---

241 Informe de Experto del Sr. Cossío, ¶ 77.

242 Réplica, ¶¶ 515, 518. ("The Court did not resolve that the Concessions were non-existent, but rather ordered Economía to declare the titles insubsistentes so that Economía could remedy the defect identified by the Court (i.e., the lack of an indigenous consultation), and then re-issue the titles")

243 Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. *Ver* Contradicción de tesis 84/2021, Primera Sala. **R-0162**.

244 Ley de Amparo, Artículo 77. **R-0163**.

245 Amparo 445/2015 interpuesto por la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemic y el Ejido de Tecoltemic (Sexto Distrito Judicial de la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla), 7 de abril de 2015, pp. 3 y 38. **C-0032**. ("Con fundamento en lo previsto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado es competente para conocer del asunto que por esta vía se demanda, pues los títulos de concesiones mineras que se impugnan tendrán ejecución dentro de su jurisdicción.")

> de los artículos 6, 19, 15 y 19 fracciones I, II, IV, V, VI y VIII de la Ley Minera. Así como los actos de ejecución que deriven de dichas concesiones, particularmente la exploración y explotación.[246]

220. Tecoltemic solicitó la protección de la justicia federal porque la expedición de las concesiones violaba su derecho al uso, disfrute y aprovechamiento de su tierra y territorio, así como su derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado y señaló que "las autoridades responsables no debieron expedir los títulos de concesión minera […], sin antes contar con el consentimiento libre e informado de Tecoltemic".[247] Tecoltemic, contrario a lo que parecen argumentar las Demandantes y su experto, no solicitó que se ordenara realizar una consulta indígena para legitimar las Concesiones, sino la protección en contra de las Concesiones que violaban sus garantías constitucionales y, como explicaron en su demanda de amparo, podrían ocasionar graves impactos en su comunidad:

> Es importante enfatizar que uno de los efectos posibles de los graves impactos que la actividad minera a cielo abierto tendría sobre las tierras, territorios, aguas y demás recursos naturales de nuestra Comunidad Indígena, su Ejido y el resto de la población del Municpio de Ixtacamaxtitlán, es el desplazamiento forzado de la Comunidad y su consecuente reubicación, pues la integridad y de vida de la Comunidad buscarían preservarse.
>
> En conclusión, por ser la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemi, así como su Ejido, susceptibles a este tipo de afectaciones, las autoridades responsables no debieron expedir los títulos de concesión minera con números 2194669 y 233434 con nombres de lotes "Cerro grande" y "Cerro grande 2" en favor de MINERA GAVILAN, S.A. DE C.V., sin antes contar con nuestro consentimiento libre e informado, previsto tanto por el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas y en otras fuentes autorizadas.[248]
>
> Las violaciones a la consulta y al consentimiento traen consigo la afectación directa al ejercicio de otros derechos fundamentales como pueblos indígenas. La garantía de consulta y consentimiento carece de sentido si no es en su carácter de proteger nuestros derechos a la libre determinación y a la autonomía, al uso y disposición de nuestras tierras, territorios y recursos naturales, así como a preservar nuestro patrimonio cultural ancestral y condiciones de vida digna para las generaciones presentes y futuras.
>
> [Énfasis añadido]

---

[246] Amparo 445/2015 interpuesto por la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemic y el Ejido de Tecoltemic (Sexto Distrito Judicial de la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla), 7 de abril de 2015, p. 3. **C-0032**.

[247] Amparo 445/2015 interpuesto por la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemic y el Ejido de Tecoltemic (Sexto Distrito Judicial de la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla), 7 de abril de 2015, p. 35. **C-0032**.

[248] Amparo 445/2015 interpuesto por la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemic y el Ejido de Tecoltemic (Sexto Distrito Judicial de la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla), 7 de abril de 2015, p. 35. **C-0032**.

221. Es claro que no se restituiría a Tecoltemic del pleno goce de sus derechos si las Concesiones y los derechos generados a favor de terceros seguían existiendo. En este sentido, la Sentencia de la Suprema Corte eliminó las Concesiones y sus efectos —un acto de naturaleza positiva emitido por Economía— para restituir a Tecoltemic en el pleno goce de sus derechos y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, *i.e.*, al momento anterior a la expedición de las Concesiones.

222. *Tercero,* No hay nada en el texto de la Sentencia de la Suprema Corte que sugiera que la consulta indígena era un requisito *sine qua non* para que Economía diera cumplimiento a la Sentencia de la Corte. De hecho, el Juzgado Segundo determinó que Economía cumplió la Sentencia de la Suprema Corte con la Resolución de No Factibilidad y señaló que realizar el procedimiento de consulta a la comunidad indígena era innecesario.

> En consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo.
>
> Lo anterior, en la inteligencia de que no fue necesario transitar al tercer efecto de la ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión de amparo en revisión 134/2021, esto es, que en caso de que la autoridad responsable considerara que se cumplían con las condiciones y requisitos para expedir lso títulos solicitados, antes de otorgarlos, debería previamente realizar el procedimiento de consulta a la comunidad indígena, observando el contenido y requisitos establecidos en la legislación ahí citada.
>
> Ello, en virtud de que, en la especie, la autoridad responsable consideró que no era factible expedir los títulos solicitados; entonces, se toma innecesario que realizara el procedimiento de consulta a la comunidad indígena; de ahí que, sea innecesario transitar al tercer efecto de la ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de recisión amparo en revisión 134/2021.[249]

223. *Cuarto,* incluso si los efectos de la Sentencia de Corte fueran poco claros y requirieran interpretación, las Demandantes y el Sr. Cossío, no toman en consideración que la propia autoridad judicial aclaró el alcance de la Sentencia de la Suprema Corte y emitió instrucciones específicas que guiaron las actuaciones de Economía al dar cumplimiento a la orden judicial (*Ver*, Memorial de Contestación, Sección II.E.2).

---

[249] Amparo 445/2015 interpuesto por la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemic y el Ejido de Tecoltemic (Sexto Distrito Judicial de la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla), 7 de abril de 2015, p. 35. **C-0032**.

a. La Suprema Corte revocó las Concesiones y sus efectos cuando ordenó su insubsistencia en 2022

224. La Sentencia de la Suprema Corte dispuso expresamente una orden a la DG Minas para "dejar insubsistentes los títulos de concesión".[250] Las Demandantes alegan que la insubsistencia debe entenderse como una "temporary measure so that Economía could cure the defect in the Concession titles and then restore them to Minera Gorrión" o una "order to suspend the legal effects".[251] Esto es incorrecto.

225. Como lo explican los expertos de la Demandada, el Diccionario de Lengua Española define subsistencia como "permanencia, estabilidad y conservación",[252] mientras que diccionarios jurídicos entienden a la insubsistencia como la "situación de lo que ha dejado de vivir o de existir".[253] Esta definición, por si misma, deja en claro que no existe ninguna idea o noción de que dicho término refiera a una suspensión o temporalidad.

226. Además, la Suprema Corte aclaró que la "insubsistencia" equivalía a invalidar el acto, al referirse en la propia sentencia a las concesiones declaradas insubsistentes como los "títulos [de concesión] invalidados",[254] confirmando que su decisión conllevó una anulación definitiva de las concesiones y no una mera suspensión temporal de las mismas.

227. En su voto concurrente dentro del Amparo en Revisión 134/2021, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue contundente al analizar el alcance de lo resuelto en la sentencia de la Suprema Corte, y señaló:

> 49. Lo anterior, pues dejar insubsistentes los títulos de concesión otorgados, equivale a una nulidad absoluta en materia administrativa y eso me parece que puede dar lugar a diversas imprecisiones sobre la materia que deberían modularse, pues derivan de una

---

250 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, p. 206. **C-0092**.

251 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, p. 206. **C-0092**.

252 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 44. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, voz «insubsistencia», 23.ª ed., versión en línea, https://dle.rae.es/insubsistencia (consulta: 22 de agosto de 2026). **FMAB-0047.** Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Diccionario de la lengua española, voz «subsistencia», 23.ª ed., versión en línea, https://dle.rae.es/subsistencia (consulta: 22 de agosto de 2026). **FMAB-0048**.

253 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 45. Poder Judicial de Costa Rica, Diccionario Usual del Poder Judicial, «Insubsistencia». **FMAB-0049**.

254 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, p. 299. **C-0092**

> omisión legislativa cuya afectación no recae únicamente en la eficacia de un acto de autoridad, sino que trasciende a intereses de los particulares en forma adversa.
>
> […]
>
> 51. Es decir, explicitar si con la obligación de consulta previa se extinguían por completo los derechos de la concesión que le asisten a la tercera interesada, pues la determinación de dejar insubsistentes las concesiones equivale a declarar la nulidad absoluta del acto, lo implica que es inválido con todas sus consecuencias jurídicas y esto podría tener incluso efectos retroactivos y un gran impacto social y económico a las partes que intervienen.[255]

228. Esto es de gran relevancia pues no solo demuestra que la insubsistencia equivalía a la anulación definitiva de los títulos, sino que también demuestra que un Ministro de la Suprema Corte entendió que la sentencia de la Suprema Corte equivalía a una nulidad absoluta. Lo más revelador es que el Ministro Gonzalez Alcántara sugirió que la Suprema Corte pudo haber optado por una solución distinta —como la opción que sugieren las Demandantes—, pero reconoció de forma expresa que esa no fue la decisión que aprobó la Suprema Corte.

229. A partir de estos elementos, (el sentido gramatical, la jurisprudencia aplicable, el propio texto de la sentencia y la postura de uno de los Ministros de la Suprema Corte) queda claro que la postura de las Demandantes es errónea. Sin embargo, en un intento por sostener que las Concesiones y los derechos derivadas de las mismas no fueron definitivamente afectadas por la Suprema Corte, las Demandantes y el Sr. Cossío sostienen, de manera incorrecta, que la insubsistencia debe entenderse necesariamente como una situación provisional de suspensión de derechos de las Concesiones a la luz de la Ley Minera.[256] Esta interpretación carece de sentido por las siguientes razones:

230. *Primero.* Para las Demandantes y su experto, el Artículo 7 de la Ley Minera distingue entre insubsistencia y cancelación, por lo que la Suprema Corte no podía usar el término insubsistencia para cancelar las Concesiones.[257] Sin embargo, la Suprema Corte rechazó el mismo argumento presentado por las Demandantes y aclaró que la insubsistencia ordenada debía entenderse como una revocación de las Concesiones.

---

255 Voto Concurrente que Formula el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá relativo a la sentencia del amparo en revisión 134/2021, ¶¶ 48-51. **FMAB-0046**. Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 52-55.

256 Réplica, ¶¶ 518-520. Informe de Experto del Sr. Cossío, ¶¶ 77-87.

257 Réplica, ¶ 518. Informe de Experto del Sr. Cossío, ¶ 79.

> 170. Además, sostiene que no es óbice a lo anterior que el artículo 7, fracción VI, de la Ley Minera señale que la Secretaría de Economía está facultada de resolver sobre la nulidad, cancelación, suspensión o insubsistencia de los derechos que deriven de los títulos, puesto que dichas figuras contemplan supuestos e hipótesis distintas a la del caso.
>
> 171. Sobre ello, esta Primera Sala estima que no le asiste razón a la parte recurrente en atención a que, los órganos del Poder Judicial de la Federación, en aras de cumplir con la naturaleza y alcances del juicio de amparo, y además de reparar a la parte quejosa de la violación ocasionada lo más pronto y expeditamente posible – por ser parte de su derecho al acceso a la justicia – se encuentran facultados para estudiar la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado y determinar su revocación o insubsistencia a través de las consideraciones expuestas en la sentencia de amparo, y por tanto, en la parte resolutiva de la misma.[258]

231. *Segundo*, la jurisprudencia de la Suprema Corte, confirma que cuando una sentencia de amparo declara la insubsistencia de un acto, este pierde todos sus efectos legales de manera automática e inmediata desde que se dicta la sentencia, sin que la autoridad tenga que hacer un trámite o emitir una nueva resolución para confirmarlo.[259]

232. Los Sres. Aguinaco también aclaran que la sentencia de la Suprema Corte tuvo dos consecuencias muy claras que las Demandantes y su experto confunden:[260]

- Por un lado, la consecuencia negativa, que "borró" por completo del ámbito jurídico a las concesiones mineras otorgadas a Minera Gavilán, y
- Por otro lado, la consecuencia positiva, consistente en devolver el expediente a la DG Minas, para que evaluara, con base en sus atribuciones legales y libertad de jurisdicción, si correspondía o no emitir una nueva decisión que se tradujera en el otorgamiento de una concesión.

233. En este sentido, al haber quedado eliminadas las concesiones anteriores del ámbito jurídico, ya no existía ningún derecho otorgado sobre el cual hacer una consulta de forma automática.[261] Por lo que la DG Minas no podía simplemente "volver a emitir" las mismas concesiones, sino que

---

258 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, p. 152. **C-0092.** Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 80-81.

259 Segundo Informe de Experto de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 48-49. Jurisprudencia I.1o.A. J/19 (10a.), de la Décima Época, de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 66, Tomo III, página 2360, con registro digital 2019976, de rubro siguiente: "SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO. TIENE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS." **FMAB-0050.**

260 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 31.

261 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 33.

estaba obligada bajo un mandato judicial a revisar si las solicitudes originales de concesión cumplían con todos los requisitos legales y técnicos antes de proceder con la consulta indígena.

234. *Tercero.* La Sentencia de la Suprema Corte únicamente reconoció la existencia de las Solicitudes de Concesión presentadas por Minera Gavilán conforme a los artículos 13 de la Ley Minera y 16 de su Reglamento, como parte de un procedimiento o trámite iniciado, lo cual no genera, por sí mismo, derecho alguno. La Suprema Corte ha aclarado que las solicitudes de concesión son una "petición" y el otorgamiento de la concesión requiere de un procedimiento en el que se califique el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento.

> El solicitante de una concesión sobre un terreno libre únicamente tenía el deseo o la expectativa de su obtención. Es decir, la sola petición no tenía por consecuencia jurídica inmediata que se otorgara la concesión, ni generaba derecho alguno. Ello, ya que la acción, que es la solicitud, y la consecuencia, que es el otorgamiento de la concesión, no se actualizan en un solo momento, sino que se requiere de un trámite en el que se califique el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento.[262]

235. En este sentido, la Suprema Corte únicamente permitió que las Solicitudes de Concesión originales — y no las Concesiones— fueran evaluadas nuevamente por Economía a la luz de la legislación aplicable al momento de su solicitud, evitando que Minera Gavilan o Minera Gorrión tuvieran que presentar nuevamente una solicitud de concesión. Esto no significa que la Suprema Corte reconocería algún derecho derivado de las Concesiones, porque de hecho había ordenado la eliminación de todos sus efectos legales.

236. *Cuarto.* Contrario a lo que las Demandantes y su experto sugieren, la referencia al artículo 13 de la Ley Minera y 16 del Reglamento no debe entenderse como derecho automático a recibir las Concesiones.[263] Estas disposiciones condicionan el otorgamiento de una concesión al cumplimiento de las condiciones y requisitos que establecen la Ley Minera y su Reglamento, lo cual forzosamente requiere de una evaluación por parte de Economía. En específico, el artículo 13 de la Ley Minera señala que las concesiones serán otorgadas al primer solicitante en tiempo, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la Ley y su reglamento:

> ARTICULO 13.- Las concesiones de exploración y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero, siempre

---

262 Tesis 1ª.XLVII/2025, "Concesión Minera. Su Solicitud no genera el derecho a su otorgamiento", Onceava Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, agosto de 2025. **R-0164**.

263 Réplica, ¶ 54.

> que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.[264]

237. Como explica el Sr. Palma, la Sentencia de la Suprema Corte permitió que las solicitudes originales fueran consideradas como el "primer solicitante" para efectos de la evaluación de Economía sobre la procedencia del otorgamiento de una concesión, sin embargo, el otorgamiento *per se* de las concesiones y los derechos derivados de las mismas seguía condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos de la Ley. Situación que no se cumplió.

> Derivado de esta insubsistencia, y en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte, la DG Minas procedió a evaluar la factibilidad de las solicitudes de concesión, para lo cual examinó las solicitudes originales conforme a las condiciones existentes al momento en que fueron presentadas. Es importante aclarar que evaluar las solicitudes de concesión originales no implicaba una aprobación automática, sino que únicamente que las solicitudes originales serían nuevamente examinadas para determinar su factibilidad.
>
> Conforme a mi experiencia en el sector público (primero en la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Chihuahua y ahora en la DG Minas), el trámite de una solicitud de concesión funciona como una "fila" en donde cada solicitud se registra con fecha y hora respecto de una superficie de interés que queda "apartada" desde el momento de la presentación de dicha solicitud. Ese "apartado" no significa que la superficie ya les ha sido concedida. Conforme al procedimiento que seguimos en la DG Minas, únicamente permiten mantener un orden para asegurar que las concesiones se otorguen al primer solicitante en tiempo que cumpla con la totalidad de la normatividad.[265]

238. *Quinto.* En el Oficio de Insubsistencia, Economía aclaró que, a partir de su notificación a Minera Gavilán, las concesiones mineras no estarían sujetas a los derechos ni las obligaciones que confiere la Ley conforme a lo ordenado por la Suprema Corte.

> Por lo anterior, a partir de la notificación de la presente resolución, las citadas concesiones mineras no estarán sujetas a los derechos ni a las obligaciones, que confieren e imponen respectivamente los artículo 19 y 27 de la Ley Minera, mismos que se transcriben.[266]

239. Economía también ordenó al Registro Público de Minería (RPM) la inscripción de la insubsistencia.[267] Economía presentó los certificados de inscripción de la insubsistencia como

---

264 Artículo 13, Ley Minera. **R-0002**.

265 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶¶ 12-13.

266 Oficio de Insubsistencia, 22 de junio de 2022, p.5. **C-0095**.

267 Oficio de Insubsistencia, 22 de junio de 2022, p.7. ("Se ordena al Registro Publico de Minería, llevar a cabo las gestiones necesarias para la inscripción pertinente en relación a la insubsistencia decretada en el resolutivo PRIMERO de la presente, respecto"). **C-0095**.

evidencia de cumplimiento ante el Juzgado 2º de Distrito, las cuales confirman que Economía dio por revocadas las concesiones a partir de junio de 2022.[268]

240. Ninguna de estas fichas presenta aclaraciones que sugieran que la insubsistencia debía de ser entendida como una "suspensión temporal". Lo cierto es que las Concesiones fueron revocadas por orden de la Suprema Corte, al igual que cualquier efecto jurídico que produjeron durante su vigencia.

241. *Sexto*. La interpretación de la Demandada no solo tiene sentido conforme a los términos expresos de los considerandos y resolutivos de la sentencia, los actos contemporáneos de Economía y del RPM, sino que también resulta ser la única compatible con la protección constitucional otorgada a Tecoltemic. En el juicio de amparo, Tecoltemic demostró que las Concesiones violentaban un precepto constitucional al ser emitidas sin realizar una consulta indígena previa, libre e informada. En consecuencia, la única forma de reparar dichas violaciones consistía en eliminar por completo el acto que no era compatible con las obligaciones internacionales de México en materia de consulta indígena, así como con los derechos agrarios de la comunidad. Sostener, como afirma el experto de las Demandantes, que las concesiones quedaron "suspendidas" hasta ser reactivadas automáticamente por la consulta,[269] contraviene la naturaleza restitutoria del juicio de amparo y priva de cualquier efecto útil a la sentencia de la Suprema Corte.

242. *Séptimo. E*l propio texto de la Sentencia de la Suprema Corte invalida la postura de las Demandantes sobre la simple "suspensión" de las concesiones, pues en dicha sentencia se ordenó de manera expresa a expedir u otorgar una nueva concesión y no a reactivar o levantar una suspensión existente. Si la postura de las Demandantes fuera correcta, la Suprema Corte no habría dispuesto que el efecto del amparo consistía en que la DG Minas se pronunciara nuevamente sobre la factibilidad de "expedir los títulos solicitados", y en el caso de que se considere que se cumplen las condiciones y requisitos, antes de otorgarlas", llevar a cabo la consulta previa.[270]

243. Si las concesiones hubieran permanecido suspendidas, la Suprema Corte habría utilizado términos como "restablecer", "reanudar" o "levantar" la suspensión; sin embargo, optó

---

268 Certificados de Inscripción de la Insubsistencia de las Concesiones, julio 2022. **R-0165**.

269 Informe del Sr. Cossío, ¶ 87.

270 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, p. 206. **C-0092.**

deliberadamente por los verbos "expedir" y "otorgar", los cuales únicamente podrían aplicar para la emisión de un nuevo acto administrativo.[271]

b. El pronunciamiento con relación a la "factibilidad" de expedir las Concesiones

244. La posición de las Demandantes es contradictoria. Por un lado, aceptan que la Suprema Corte "ordered a retroactive reassessment of the "feasibility" of the existing Concession titles"[272] y, por otro lado, argumentan que Economía debía emitir un pronunciamiento automático de factibilidad sin una evaluación *de novo* de los Expedientes.[273] Sin embargo, las partes parecen estar de acuerdo en que la Suprema Corte ordenó a Economía realizar una evaluación a la luz de los requisitos y condiciones establecidos en la legislación aplicable.

245. En este sentido, es importante aclarar el contenido y alcance de la evaluación ordenada por la Suprema Corte. La Suprema Corte señaló lo siguiente:

> 297. Ahora bien, tomando en cuenta que el procedimiento inició a solicitud de la tercero interesada, realizándose diversas actuaciones en términos de los artículos 13 de la Ley Minera y 16 de su Reglamento, vigentes al momento de la presentación, el efecto de esta sentencia será para que, la autoridad responsable *se pronuncie nuevamente* con relación a la factibilidad de expedir los títulos solicitados, y en el caso de que se *considere que se cumplen las condiciones y requisitos*, antes de otorgarlas sobre terrenos de la comunidad indígena, deberá previamente realizar el procedimiento de consulta a la comunidad indígena, observando el contenido y requisitos establecidos en los artículos 6, 7, 16 y demás aplicables del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, este caso como mínimo, lo siguiente.[274]

246. Al no existir las Concesiones, por haber sido declaradas insubsistentes, la evaluación de Economía debía realizarse con respecto de los expedientes de las Solicitudes de Concesión originales que habían sido reconocidos por la Suprema Corte en su Sentencia. En términos claros, Economía debía pronunciarse respecto a si "consider[aba] que se cumplen las condiciones y requisitos" para expedir las Concesiones. Como lo explican los Sres. Aguinaco, el análisis de "factibilidad" y la emisión de un nuevo "pronunciamiento" exigían un verdadero examen técnico

---

271 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 57.

272 Réplica, ¶ 511.

273 Réplica, ¶¶ 530-538.

274 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, p. 206. **C-0092**.

y jurídico por parte de la autoridad administrativa,[275] en este caso, la DG Minas, conforme a lo siguientes tres puntos:

247. *Primero*. Conforme a la orden de la Suprema Corte Economía debía "pronunciarse nuevamente", lo que corresponde a una "decisión administrativa que resuelve la procedencia o improcedencia de la solicitud" y no una simple confirmación o ratificación automática de actos previos.[276] Sostener lo contrario, significaría reducir la orden de la Suprema Corte a un mero trámite que habría vaciado de sentido útil a la propia sentencia que buscaba eliminar un acto que violaba un precepto constitucional.

248. El uso de la palabra *nuevamente* implica que la autoridad debía volver a examinar un asunto del que la DG Minas ya se había pronunciado antes. Esto quiere decir que, no podía pronunciarse *nuevamente* de algo que todavía no había ocurrido, como la consulta indígena.[277]

249. *Segundo.* Cuando la Suprema Corte ordenó pronunciarse sobre la "factibilidad" de expedir las concesiones, necesariamente se refirió a la "verificación de que concurren todos los requisitos jurídicos y técnicos"[278] para poder otorgar una concesión. En este sentido, la postura de las Demandantes y su experto respecto a que el término "factibilidad" no estaba definido en la Ley Minera y por tanto fue "usado de forma coloquial" para referirse a la mera existencia de información para la consulta indígena"[279] es incorrecta.

250. Como señalan los Sres. Aguinaco, el término "factibilidad" ha sido utilizado sistemáticamente por la Suprema Corte para referirse al "análisis previo que debe realizarse antes de autorizar ciertos actos administrativos".[280] Muestra de ello, es el Amparo en Revisión 606/2005,

---

275 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 13, inciso iii).

276 *Ver* Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 118. *Ver también* Tesis de jurisprudencia 1a./J. 133/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, página 281, con número de registro digital: 2015690. **FMAB-0056**.

277 *Ver* Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 93.

278 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, p. 206. **C-0092**.

279 Informe del Experto Sr. Cossío, ¶ 129.

280 *Ver* Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, 107. *Ver también* Sentencia A.R. 606/2005, Primera Sala, Suprema Corte. **FMAB-0055**.

en el cual, la Suprema Corte sostuvo que un análisis de factibilidad exige una evaluación técnica previa por parte de la autoridad antes de conceder o autorizar derechos sobre una concesión.[281]

251. Aquí cobra relevancia el asunto resuelto mediante la Sentencia del Amparo en Revisión 606/2005 relacionada con el caso "*Minerales y Minas Mexicanas*" —aprobada por unanimidad y con el voto del propio experto de las Demandantes durante su función como Ministro de la Suprema Corte—[282] confirma que la Suprema Corte suele utilizar el término "factibilidad" para referirse a un análisis de procedencia para autorizar concesiones.[283] Este antecedente confirma que la Suprema Corte condicionó la consulta indígena a que la autoridad verificara primero si "se cumplen las condiciones y requisitos legales"[284] para definir si era procedente otorgar nuevamente las concesiones, antes de dar paso al tercer efecto: el procedimiento de consulta indígena.

252. *Tercero*. Al emplear la expresión de verificar si "se cumplen las condiciones y requisitos", la sentencia remitió directamente al marco legal aplicable, en este caso, el que rige a las concesiones sobre bienes de dominio directo de la Nación.[285] En este sentido, el artículo 27 de la Constitución establece expresamente que el aprovechamiento de estos recursos por particulares no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas "de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes";[286] misma idea que es replicada en la Ley Minera al regular la expedición de las concesiones previa comprobación del cumplimiento de sus "condiciones y requisitos".[287]

253. Por lo tanto, el uso de las palabras "condiciones" y "requisitos" no estaba refiriéndose a una ambigüedad, o dejando espacio para considerar que estas eran únicamente para efectos de la consulta indígena. Se refería a aplicar toda la normativa en la materia: la Constitución, la Ley

---

281 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 109-110. *Ver también* Sentencia A.R. 606/2005, Primera Sala, Suprema Corte. **FMAB-0055**.

282 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 110. *Ver también* Sentencia A.R. 606/2005, Primera Sala, Suprema Corte. **FMAB-0055**. La Demandada se reserva el derecho de realizar comentarios adicionales sobre la participación del Sr. Cossío en el arbitraje. Ver Anexo **R-0249**.

283 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 110.

284 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, p. 206. **C-0092**.

285 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 98. Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, p 206. **C-0092**.

286 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27. **R-0001.**

287 Ley Minera, Artículo 10, 13 y 33. **R-0002**.

General de Bienes Nacionales, la Ley Minera, su Reglamento y el Manual.[288] Esto es plenamente lógico ya que, para que una concesión sea emitida, la autoridad tiene el deber de revisar que la solicitud cumpla con todas las "condiciones y requisitos" aplicables a las concesiones.[289]

c. La Consulta Indígena estaba condicionada a la determinación de factibilidad por parte de Economía

254. Finalmente, la Suprema Corte señaló expresamente en su Sentencia que, únicamente en "el caso de que se considere que se cumplen las condiciones y requisitos, antes de otorgar[] [las concesiones] sobre [los] terrenos de la comunidad indígena, [la DG Minas] deberá previamente realizar el procedimiento de consulta".[290]

255. Con base en el Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, esta secuencia de tres efectos fijada por la Suprema Corte responde a la propia naturaleza jurídica de la consulta indígena que se caracteriza por ser un "mecanismo de participación dentro del proceso de una adopción de una decisión estatal susceptible de afectar directamente a la comunidad".[291] Esto demuestra la improcedencia del argumento de las Demandantes y su experto por tres principales razones.

256. *Primero*. La Consulta Indígena no constituye un procedimiento autónomo, aislado ni un fin en sí mismo, sino una etapa dentro del proceso de la toma de decisiones de una autoridad administrativa del Estado.[292] De acuerdo con el artículo 6.1.a del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la CoIDH, la consulta indígena busca garantizar la participación efectiva de las comunidades para influir en una medida estatal "potencialmente adoptable".[293] Por ende, es erróneo pretender que el examen de factibilidad debía postergarse e incluirse únicamente hasta la fase informativa de la consulta,[294] ya que la consulta solo podía llevarse a cabo cuando existiera un acto jurídicamente factible de ser adoptado.

---

288 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 98-103.

289 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 98.

290 Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, p. 206. **C-0092**.

291 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 137.

292 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 137-138.

293 Sentencia CoIDH, *Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador*, 27 de junio de 2012, ¶ 167. **RL-0208**.

294 Informe del Experto Sr. Cossío, ¶ 112.

257. *Segundo*, exigir la realización de una consulta sobre una medida cuya adopción sea legalmente inviable violaría el principio de buena administración.[295] Además, este supuesto convertiría al procedimiento de consulta indígena en una mera actuación de forma y puramente simbólico y carente de cualquier efecto útil, al someter a la comunidad de Tecoltemic a un proceso de simulación de opinión sobre una concesión que la autoridad de todos modos no podría autorizar porque la solicitud incumple los requisitos legales exigidos, sin que pudiera incidir en un proceso real de toma de decisiones.[296]

258. El propio experto legal de las Demandantes ha reconocido que el proceso de consulta indígena debe realizarse cuando está decidiéndose acerca de la aprobación de un proyecto y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad sobre lo ya realizado, ya que su finalidad es lograr un acuerdo con la comunidad sobre las medidas propuestas por el Estado que afectarán a la comunidad indígena, *so pena* de que no exista un acuerdo y la implementación del proyecto propuesto se vea obstaculizado:

> En el artículo 7 se establece, a su vez, que los pueblos tienen el derecho de decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan. En segundo lugar, la posición de los pueblos y comunidades indígenas también se encuentra respaldada en el derecho de participación previsto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como no podría ser de otra manera, sobre el entendimiento que le ha dado la Corte Interamericana al resolver los casos Pueblo Saramaka vs. Surinam, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador y Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz vs. Honduras. Adicionalmente y por las posibilidades litigiosas que previsiblemente se abrirán en caso de que las consultas no se realicen o lo sean de un modo indebido, conviene recordar que la Suprema Corte ha establecido varios elementos acerca del modo como las mismas consultas indígenas deben efectuarse: realizarse cuando esté decidiéndose acerca del plan o proyecto de desarrollo y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad sobre lo ya realizado y ejecutado; efectuarse conforme a los métodos de decisión y condiciones de representación propios de cada comunidad o pueblo interviniente; ser plenamente informada sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto, incluidos los posibles riesgos ambientales, además de recabarse mediante un consentimiento previo, libre e informado, con todo lo que ello significa. ¿Qué implica todo lo anterior de manera real y presente?
>
> […] Si el proceso de consulta no alcanza a incorporar las posiciones consideradas necesarias por parte de los pueblos y comunidades consultados, el proyecto se encontraría con un grave obstáculo para su implementación, dado que la consulta no se

295 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 146-147.

296 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 145.

> agota en sí misma, ni su observancia es discrecional para las autoridades del Estado, sino que su finalidad es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.[297] [Énfasis añadido]

259. *Tercero*, el sostener que la sentencia de la Suprema Corte estableció tres efectos subsecuentes, no es una decisión arbitraria de la Demandada, sino que responde al orden de secuencial establecido por la misma Suprema Corte y reforzado por el 2º Juzgado de Distrito y el 2º Tribunal Colegiado en la etapa de cumplimiento de la Sentencia (*Ver* Sección II.B.3 *infra*).

d. La Suprema Corte le otorgó libertad jurisdiccional a Economía para evaluar la factibilidad de las Concesiones

260. El experto de las Demandantes afirma que la DG Minas carecía de libertad de jurisdicción para reevaluar la factibilidad de las concesiones, bajo el argumento de que la *litis* constitucional del amparo únicamente abordó la reclamación de una omisión consistente en la falta de consulta indígena.[298] Esta postura es errónea y se contradice con el propio entendimiento de las Demandantes ante cortes nacionales.

261. La posición de las Demandantes pierde de vista que el acto reclamado tanto en el Amparo 445/2015 como en la Revisión 134/2021, fue el otorgamiento de las Concesiones en detrimento de los derechos de Tecoltemic sobre sus territorios y recursos naturales por la falta de la consulta indígena.[299] Es decir, un acto de carácter positivo.

262. Como explican los Sres. Aguinaco, las medidas para restituir y hacer cumplir esas obligaciones dependen, en buena medida, del criterio de las personas juzgadoras. Por eso, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, las sentencias de amparo deben determinar con precisión los efectos de la sentencia.[300] En este caso, la sentencia de la Suprema Corte permitió que la autoridad recuperara la atribución de evaluar de forma autónoma el expediente administrativo conforme a la legislación aplicable y resolver si procede o no emitir un nuevo acto.

---

297 José Ramón Cossío Díaz, *"Consultas indígenas"*, Hechos y Derechos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2020. **R-0168**.

298 Informe del Experto Sr. Cossío, ¶¶ 157-158

299 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 28.

300 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 30. Ley de Amparo, artículo 77, segundo párrafo. **FMAB-009**.

263. En ese sentido, la DG Minas conservó plenamente su libertad de jurisdicción para determinar si resultaba técnica y legalmente procedente emitir nuevamente las Concesiones conforme a las condiciones y requisitos de la legislación minera aplicable.[301] Las propias Demandantes reconocieron en el Recurso de Reclamación promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en contra del desechamiento del Juicio de Nulidad en contra de la Resolución de No Factibilidad que dicha Resolución no era un acto de ejecución autómata por parte de la DG Minas, sino una resolución emitida con plena libertad de jurisdicción por parte de la autoridad.

> **TERCERO.** En el único agravio del recurso de reclamación, aduce la enjuiciante que el acuerdo recurrido es ilegal, toda vez que el acto impugnado fue emitido en libertad de jurisdicción por parte de la autoridad demandada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, por lo cual resulta procedente el presente juicio; ya que precisamente, mediante la resolución emitida en el juicio de amparo, el juez de distrito del conocimiento tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo con la emisión del oficio impugnado en el presente juicio, siendo un hecho notorio.[302]

264. En consecuencia, las Demandantes reconocieron que la DG Minas no estaba obligada a acatar una orden de ejecución automática y emitir las Concesiones sin realizar una nueva evaluación, sino que conservaba sus facultades legales para evaluar de manera autónoma el expediente de las Solicitudes de Concesión y resolver, según su valoración técnica y jurídica, si era factible otorgarlas.[303] Resulta contradictorio que ahora el experto de las Demandantes pretenda desconocer la libertad de jurisdicción que las propias Demandantes invocaron para lograr la admisión de su juicio de nulidad.

3. Diversas autoridades judiciales supervisaron el cumplimiento de Economía con la Sentencia de la Suprema Corte y confirmaron que era adecuado

265. Como se explicó en el Memorial de Contestación, los actos de Economía para dar cumplimiento a la Sentencia de la Suprema Corte estuvieron guiados por al menos tres autoridades judiciales (*i.e.*, la Suprema Corte, el Juzgado 2º de Distrito y el 2º Tribunal Colegiado) que

---

301 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 169 y nota al pie de página 102.

302 Resolución de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 0026-2023-02-C-21-02-03-02-L, p. 5. **FMAB-0068**.

303 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 169-171.

emitieron instrucciones para la ejecución de la Sentencia de la Suprema Corte y confirmaron la idoneidad de los actos emitidos por Economía en cumplimiento de la misma.[304]

266. Además, los Sres. Aguinaco explican que corresponde a las autoridades judiciales conocer de la fase de ejecución de la sentencia e interpretar el alcance de la misma para verificar que sea correctamente cumplida. En este caso, todas las autoridades judiciales involucradas confirmaron que Economía cumplió cabalmente con la Sentencia de la Suprema Corte y sus alcances:

> La existencia de tres resoluciones jurisdiccionales emitidas en procedimientos distintos confirma que los efectos de la sentencia han sido entendidos de manera uniforme por los órganos jurisdiccionales que conocieron de las controversias derivadas de su cumplimiento. Esa coincidencia adquiere especial relevancia porque, conforme al sistema de cumplimiento de las sentencias de amparo, corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de su ejecución interpretar el alcance de la sentencia y verificar si ésta ha sido cumplida, a fin de evitar decisiones contradictorias respecto de sus efectos. La circunstancia de que esa misma interpretación haya sido posteriormente consistente con la adoptada por el TFJA refuerza aún más la solidez de esa conclusión.[305]
>
> La relevancia de ese criterio uniforme radica en que cada órgano jurisdiccional examinó la actuación de la DGM desde una perspectiva procesal distinta. Sin embargo, ninguno sostuvo que la autoridad estuviera obligada a realizar la consulta indígena con independencia del resultado del nuevo análisis de factibilidad; ninguno consideró que la sentencia hubiera sido incumplida por esa razón, ni consideró que el estudio de factibilidad fuera parte del cumplimiento únicamente en la etapa de consulta indígena como argumenta el experto de las Demandantes. Si la interpretación que ahora propone el experto de las Demandantes fuera correcta, alguno de esos tres órganos habría debido concluir que el cumplimiento de DGM era defectuoso o insuficiente. Lejos de ello, las resoluciones dictadas en cada una de esas instancias confirman una comprensión coincidente de los efectos de la sentencia.[306] [Énfasis añadido]

267. La primera autoridad judicial que supervisó las actuaciones de Economía a la luz de la Sentencia de la Suprema Corte fue el Juzgado 2º de Distrito, como autoridad encargada de la ejecución de la Sentencia. Los Sres. Aguinaco explican que, el Juzgado 2º de Distrito revisó los

---

304 Memorial de Contestación, ¶¶ 404-407, 412, 417-419. Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 152. ("La misma interpretación fue posteriormente confirmada por los órganos jurisdiccionales que conocieron de las incidencias derivadas de su cumplimiento: primero, el Juzgado de Distrito encargado de vigilar la ejecución; después, el Tribunal Colegiado que resolvió el recurso de inconformidad; y finalmente, la Segunda Sala Regional de Oriente del TFJA al resolver un recurso de reclamación").

305 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 153.

306 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 154.

actos de Economía y confirmó en al menos cuatro ocasiones distintas que las actuaciones de la DG Minas se ajustaron a los efectos contenidos en la Sentencia de la Suprema Corte.[307]

- El 12 de mayo de 2022, cuando ordenó a Economía el cumplimiento de la Sentencia y requirió expresamente a la DGM que dejara insubsistentes las concesiones y pronunciarse nuevamente en relación con la factibilidad de expedir las concesiones.[308]
- El 5 de diciembre de 2022, cuando declaró por cumplido el primer efecto de la sentencia a través de la Declaración de Insubsistencia y ordenó a la DG Minas que diera cumplimiento del segundo efecto de la sentencia a través de un nuevo pronunciamiento sobre la factibilidad de emitir las concesiones.[309]
- El 25 de enero de 2023, cuando concedió una prórroga a Economía para dar cumplimiento al segundo efecto de la Sentencia para efectos de concluir el análisis técnico de las solicitudes de concesión y determinar la factibilidad de emitir las Concesiones.[310]
- El 11 de abril de 2023, cuando declaró el cumplimiento cabal de la Sentencia por parte de Economía y señaló que la realización de una consulta indígena no era necesaria a la luz de la Resolución de No Factibilidad.[311]

268. El Juzgado 2º de Distrito también emitió resoluciones que sirvieron como instrucciones para guiar las actuaciones de Economía. En específico, *infra* se desarrollan cada una de las instrucciones emitidas por el Juzgado 2º de Distrito a luz de la Sentencia de la Suprema Corte y los actos de cumplimiento de Economía en seguimiento a esas instrucciones:

- En mayo de 2022, el Juzgado 2º de Distrito requirió a DG Minas el cumplimiento de la Sentencia en los términos ordenados por la Suprema Corte.[312] En consecuencia, el 20 de junio de 2022, en cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte, Economía emitió la Declaración de Insubsistencia, ordenó la inscripción de la insubsistencia en el Registro Público de Minería y aclaró que las concesiones dejaban de estar sujetas a derechos y obligaciones que la Ley Minera y su Reglamento confieren.[313]
- El 28 de junio de 2022, el Juzgado 2º de Distrito, para efectos de analizar el cumplimiento de la Sentencia, le solicitó a DG Minas que remitiera las

307 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 158- 163.

308 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 158- 163.

309 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 158- 163.

310 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 158- 163.

311 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 158- 163.

312 Auto 12 de mayo de 2022, Juzgado 2º de Distrito. **R-0169**.

313 Declaración de Insubsistencia, 20 de junio de 2022, pp. 6-7. **R-0098**.

notificaciones de la Declaración de Insubsistencia al Registro Público de Minería e informara sobre las gestiones realizadas a efecto de llevar a cabo la consulta indígena mencionada en la Declaración de Insubsistencia.[314] En atención a la orden del Juzgado 2º de Distrito, el 15 de julio de 2022, Economía presentó las constancias del Registro Público de Minería en las que se reflejaba la insubsistencia de las Concesiones y aclaró que "única y exclusivamente en caso de considerar la factibilidad de la emisión [de las Concesiones], se tiene la obligación de realizar la consulta previa referida. Contrario sensu, en caso de no cumplir con los requisitos que señala el marco normativo en materia de minería, no es necesario realizar la consulta previa".[315]

- El 5 de diciembre de 2022, tras examinar la Declaración de Insubsistencia, el Juzgado 2º de Distrito declaró "cumplido el primer efecto de la ejecutoria de amparo" y emitió instrucciones para el "tránsito al cumplimiento del segundo efecto del fallo protector".[316] En específico, para dar cumplimiento al segundo efecto de la Sentencia, el Juzgado 2º de Distrito ordenó a la DG Minas que "específica y concretamente se pronuncie nuevamente con relación a la factibilidad de expedir los títulos solicitados por [Minera Gorrión y Minera Gavilán]". [317] En enero de 2023, Economía informó que se encontraba en vías de cumplimiento y solicitó una extensión del plazo concedido para concluir adecuadamente el análisis de factibilidad y emitir su nuevo pronunciamiento:

> En atención a lo indicado por ese H. Juzgado, se solicita a su Señoría amplié el plazo concedido en forma considerable, en virtud de que la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, informó a esta representación legal que, para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a la segunda etapa de la ejecutoria de amparo se están realizando los estudios y análisis exhaustivos a los

---

314 Auto del Juzgado 2º de Distrito, 28 de junio de 2022. **R-0170**.

315 Oficio No. 110-02/12154/2022, 15 de julio de 2022. **R-0171**. Ver también, Oficio por el que DG Minas informa sobre notificación de Declaración de Insubsistencia a UAJ, 15 de julio de 2022. **R-0172**. ("Por último, se informa que en estricto cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de fecha 16 de febrero de 2022, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión amparo en revisión 134/2021, y en apego al numeral 297 de la ejecutoria de mérito, la Dirección General de Minas, se encuentra realizando el estudio y dictamen de las solicitudes de las concesiones mineras de mérito, en términos de los artículos 13 de la Ley Minera y 16 de su Reglamento, vigentes al momento de la presentación, y en el caso de que se considere que se cumplen las condiciones y requisitos, se determinara el procedimiento para realizar la consulta previa a la comunidad indígena"). [Énfasis añadido]

316 Acuerdo sobre el Primer Cumplimiento de la Sentencia, 5 de diciembre de 2022, pp. 1, 9. **C-0553**. ("Toda vez que la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, ahora denominada Dirección General de Minas, dejó insubsistentes los títulos de concesión minera registrados con los números 219469 y 233434, bajo los nombres de lotes "Cerro Grande" y "Cerro Grande 2", emitidos el cinco de marzo de dos mil tres y el veintitrés de febrero de dos mil nueve, respectivamente, se llega a la conclusión de que el primer efecto de la ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión amparo en recisión 134/2021, se encuentra cabalmente cumplido"). [Énfasis añadido]

317 Acuerdo sobre el Primer Cumplimiento de la Sentencia, 5 de diciembre de 2022, p. 9. **C-0553**.

> expedientes administrativos en coordinación con las distintas unidad administrativas a ella adscritas, dada la composición y relevancia del asunto, pues se analizan cuestiones técnicas propias de la materia de minería; siendo una materia muy compleja, técnica, propia de un estudio específico y detallado para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 16 del Reglamento de la Ley Minera, a efecto de emitir una determinación acorde a lo requerido, situaciones que implican un término mayor al concedido.[318] [Énfasis añadido]

- El 25 de enero de 2023, el Juzgado 2º de Distrito concedió una prórroga de 5 días hábiles para que Economía emitiera su determinación sobre la factibilidad de emitir las Concesiones.[319] El 9 de febrero de 2023, Economía emitió la Resolución de No Factibilidad en cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte y conforme a la prórroga concedida por el Juzgado 2º de Distrito.[320] Economía aclaró que no resultaba necesario proceder con la realización de una consulta indígena en términos de la Sentencia de la Suprema Corte:

  > TERCERO. Derivado de que esta autoridad determinó que no es factible la expedición de títulos de concesión, no resulta necesario realizar la consulta previa establecida en los puntos 298 y 299 de la ejecutoria de mérito.[321]

- El 2 de marzo de 2023, el Juzgado 2º de Distrito requirió a Economía para que remitiera copias de los elementos que tomó en consideración para la emisión de su Resolución de No Factibilidad, con el objetivo de analizarlos y estar en posibilidades de pronunciarse con respecto al cumplimiento de la Sentencia.[322] En consecuencia, el 24 de marzo, Economía envió al Juzgado 2º Distrito una copia completa de los elementos tomados en consideración para la Resolución de No Factibilidad.[323]

- El 11 de abril de 2023, tras analizar la Resolución de No Factibilidad, las copias de los elementos que tomó en cuenta Economía para su Resolución y las

---

318 Solicitud de prórroga para dar cumplimiento al segundo efecto de la Sentencia, 19 de enero de 2023, p.1. **R-0173**.

319 Auto por el que se concede la prórroga a Economía para la emisión de la Resolución de No Factibilidad, 25 de enero de 2023. **R-0174**.

320 Oficio por el que se remite la Resolución de No Factibilidad al Juzgado 2º de Distrito. **R-0175**.

321 Resolución de No Factibilidad, 9 de febrero de 2023. **R-0099**.

322 Auto por el que se requieren constancias que formaron la base de la Resolución de No Factibilidad, 2 de marzo de 2023. **R-0176**. ("Sin embargo, fue omisa en remitir las constancias que tomó en consideración para la emisión de la resolución contenida en el oficio SE/610/364/2023 de nueve de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, a fin de contar con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre el cumplimiento al segundo efecto de la ejecutoria concesiva de amparo, se provee: para el único efecto de verificar la existencia de las documentales y datos que tomó en cuenta requiérase al Director General de Minas de la Secretaría de Economía, para que en el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de presente proveído remita todos aquellos elementos que tomó en consideración para la emisión de la resolución").

323 Oficio No. 110.03.3990.2023, 24 de marzo de 2023. **R-0133**.

> manifestaciones presentadas por Tecoltemic y Minera Gorrión, el Juzgado 2º de Distrito declaró el cabal cumplimiento de la Sentencia de la Suprema Corte y aclaró que la consulta indígena no resultaba necesaria.[324]

269. Adicionalmente, el Juzgado 2º de Distrito rechazó sistemáticamente los argumentos de Minera Gorrión que buscaban reinterpretar el alcance de la Sentencia de la Suprema Corte o calificar los actos de cumplimiento de Economía como deficientes o excesivos. Los argumentos que fueron rechazados por el Juzgado 2º de Distrito coinciden en gran medida con los argumentos que las Demandantes presentan en este arbitraje. Resaltan al menos dos ocasiones.

270. *La primera ocasión* ocurrió tras la emisión de la Declaración de Insubsistencia, momento en el que Tecoltemic presentó manifestaciones ante el Juzgado 2º de Distrito por medio de las cuales rechazó la Declaración de Insubsistencia por considerar que se entendía como una "suspensión temporal de las concesiones mientras se lleva a cabo la consulta" y no una cancelación de las mismas y que, además, alteraba la secuencia de los efectos ordenados por la Suprema Corte.[325]

271. En respuesta, el 6 de julio de 2022, el Juzgado 2º de Distrito rechazó que la insubsistencia ordenada por la Suprema Corte pudiera caracterizarse como una "suspensión de las concesiones" y aclaró que la Sentencia "estableció efectos diferenciados y autónomos entre sí".

> De lo anterior se aprecia claramente que, en la protección constitucional otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció efectos diferenciados y autónomos entre sí:
>
> 1) El primero de ellos se refiere a la orden de dejar insubsistentes los títulos de concesión que indica,
>
> 2) Este primer efecto es la condición para cumplir con los siguientes señalados en el fallo.
>
> Por tanto, a fin de dotar de orden y claridad al cumplimiento del mismo, una vez que las autoridades responsables den cumplimiento a lo requerido por auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, en relación a la remisión de las constancias de notificación a la parte quejosa y tercero interesada y al Registro Público de Minería de [la Declaración de Insubsistencia], con el que la responsable pretende cumplir el primer efecto señalado,

---

[324] Segunda Declaratoria de Cumplimiento de la Sentencia, 11 de abril de 2023, p. 12. **R-0100**.

[325] Escrito de Manifestaciones de Tecoltemic sobre la Declaración de Insubsistencia, 28 de junio de 2022, pp. 2-3. **R-0177**. Minera Gorrión también solicitó una aclaración de la Sentencia de la Suprema Corte a la luz de la Declaración de Insubsistencia (**Anexo C-581**). En su solicitud requirió que el Juzgado 2º de Distrito aclarara que la Sentencia no condicionaba la emisión de las concesiones al consentimiento de las comunidades y si el término "subsistente" refiere a una invalidez en el procedimiento de la emisión de las concesiones y no solo en el acto de emisión de la Concesión.

> el suscrito se pronunciará sobre las manifestaciones de la parte quejosa y si en el caso está o no cumplido el punto indicado, para así poder transitar al cumplimiento de los demás puntos de la ejecutoria.[326]

272. *La segunda ocasión* ocurrió en febrero de 2023, cuando el Juzgado 2º de Distrito concedió a las partes —incluida Minera Gorrión como tercera interesada— para que hicieran las manifestaciones que consideraran relevantes con respecto de la Resolución de No Factibilidad.[327] Tecoltemic estuvo de acuerdo con el cumplimiento de Economía y con el hecho de que la Consulta Indígena era innecesaria tras determinarse la no factibilidad de las Concesiones.[328] Por su parte, Minera Gorrión se opuso al cumplimiento por parte de Economía por las mismas razones por las que ahora reclaman en este arbitraje una violación al TIPAT, *e.g.*, pronunciarse sobre cuestiones técnicas de las Solicitudes de Concesión para determinar su No Factibilidad; no permitirle a Minera Gorrión subsanar las deficiencias de sus Solicitudes de Concesión; incluir referencias a los estudios del INPI y SEMARNAT en su determinación; y, finalmente, no realizar la consulta indígena.[329]

273. El Juzgado 2º de Distrito rechazó las manifestaciones presentadas por Minera Gorrión y aclaró que la existencia de las Solicitudes de Concesión no impedía que Economía realizara una evaluación estricta del cumplimiento de la legislación:

> En relación con las manifestaciones de la tercera interesada, debe precisarse que en el caso la autoridad responsable expresó motivos concretos y documentados del por qué no era factible expedir los títulos de concesión, lo cual es acorde con el fallo protector emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ordenó que se pronunciara "nuevamente" en relación con la factibilidad de emitir los títulos de concesión que derivó precisamente de la necesidad de subsanar y proteger el derecho que tienen sobre sus territorios y la necesidad de ser tomados en cuenta en su utilización y administración y conservación; de modo que la autoridad estaba obligada a analizar estrictamente como

---

326 Primera aclaración del alcance de la Sentencia de la Suprema Corte, Juzgado 2º de Distrito, 6 de julio de 2022. **R-0178**.

327 Auto por el que se conceden 3 días a Minera Gorrión para pronunciarse respecto de la Resolución de No Factibilidad, 20 de febrero de 2023. **R-0179**.

328 Escrito de Tecoltemic con manifestaciones sobre el Segundo Cumplimiento de Economía, 27 de febrero de 2023. R-**0180**. ("Al determinarse por la Secretaría de Economía que NO ES FACTIBLE la expedición de los títulos de concesión, resulta improcedente y/o innecesaria la realización de una consulta previa establecida en los puntos 298 y 299 de la ejecutoria de mérito, ya que es del todo evidente que la SCJN en el segundo efecto de su sentencia sólo condicionó la realización de la consulta al supuesto de que fuese declarado factible el otorgamiento de las concesiones: condición que no se dio. Por tanto, el tercer efecto de la sentencia queda insubsistente y debe declararse por cumplida la sentencia").

329 Escrito de manifestaciones de Minera Gorrión con respecto al Segundo Cumplimiento. **R-0181**.

> lo hizo, si era factible expedir los títulos de concesión a la luz de los requerimientos legales vigentes al momento de la presentación de la solicitud.
>
> Todo ello sobre la base de que el derecho al respeto del territorio y consulta que la parte quejosa adujo en el juicio de amparo, fue la materia del fallo protector y el principal derecho primigenio que debe garantizarse, sin que la petición de expedición de los títulos citados pueda restringir, o impedir el ejercicio de aquellos.[330]

274. Después de la Resolución del 11 de abril de 2023 en la que el Juzgado 2º de Distrito daba por cumplida la Sentencia de la Suprema Corte a través de la Declaración de Insubsistencia y la Resolución de No Factibilidad, Minera Gorrión presentó el Recurso de Inconformidad 21/2023 ante el 2º Tribunal Colegiado.[331] El 2º Tribunal Colegiado fue la segunda autoridad judicial encargada de supervisar los actos de Economía y decidir si existía un cumplimiento adecuado de la Sentencia de la Suprema Corte.

275. Como parte del Recurso de Inconformidad 21/2023, al igual que en este arbitraje, Minera Gorrión argumentó, *inter alia*, que:

- Economía se extralimitó en su libertad de jurisdicción al resolver la Resolución de No Factibilidad.
- Economía debió considerar las solicitudes de reducción de las concesiones en su análisis de factibilidad.[332]
- Economía debió prevenir a Minera Gorrión sobre los defectos en sus Solicitudes de Concesión conforme al Artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.[333]
- Economía consideró indebidamente los estudios presentados por SEMARNAT y el INPI.[334]
- Economía violentó el derecho de Minera Gorrión a la confianza legítima y los principios de congruencia y seguridad jurídica ante los distintos momentos donde confirmó que el expediente era factible de resolución.[335]
- Economía incumplió la Sentencia de la Suprema Corte por no realizar una consulta indígena.[336]

---

330 Segunda Declaratoria de Cumplimiento de la Sentencia, 11 de abril de 2023, pp. 11-12. **R-0100**.

331 Recurso de Inconformidad 23/21 de Minera Gorrión. **C-0118**.

332 Recurso de Inconformidad 23/21 de Minera Gorrión, p. 16. **C-0118**.

333 Recurso de Inconformidad 23/21 de Minera Gorrión, pp. 9-13. **C-0118**.

334 Recurso de Inconformidad 23/21 de Minera Gorrión, p. 17. **C-0118**.

335 Recurso de Inconformidad 23/21 de Minera Gorrión, pp. 22-32. **C-0118**.

336 Recurso de Inconformidad 23/21 de Minera Gorrión, pp. 32-43. **C-0118**.

276. En octubre de 2023, el 2º Tribunal Colegiado desestimó el Recurso de Inconformidad y confirmó que la consulta indígena solo se realizaría en el caso en que Economía, a través de la DG Minas, determinara que el otorgamiento de las Concesiones era legal y técnicamente factible.

> Además debe declararse inoperantes los planteamientos que hacen valer los inconformes en su carácter de extraños al juicio, porque, si bien la realización de la consulta a la comunidad indígena es parte de los efectos para los que fue concedida la protección federal; lo cierto es que eso no se puede cumplir cuando no se ha acreditado la factibilidad de la expedición de nuevas concesiones; por lo que con sus argumentos no combaten la razón por la que se estimó innecesario realizar la consulta para tener por cumplida la ejecutoria de mérito.[337]

277. El 2º Tribunal Colegiado también aclaró que la legalidad del contenido de la Resolución de No Factibilidad no era objeto del Recurso de Inconformidad y rechazó los argumentos de Minera Gorrión por considerar que la Sentencia de la Suprema Corte había dado libertad de jurisdicción o discrecionalidad a Economía para evaluar la factibilidad de las solicitudes de concesiones conforme a la Ley Minera y emitir una nueva determinación.

> Ahora bien, resultan inoperantes los motivos de inconformidad en que la tercera interesada cuestiona el actuar de la autoridad responsable en relación con la nueva calificación de la factibilidad de expedir los títulos de concesión solicitados; en virtud de que, sobre punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 134/2021, dejó a la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, en libertad de jurisdicción para que emitiera el dictamen correspondiente; de manera que si dicha autoridad concluyó que no cumplieron los requisitos de factibilidad, es inconcuso que eso lo determinó con libertad.
>
> Así se estima, porque en el punto segundo de los efectos de la ejecutoria, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esa autoridad debía pronunciarse nuevamente en relación con la factibilidad de expedir los títulos solicitados, en términos de los artículos 13 de la Ley Minera y 16 de su Reglamento, vigentes al momento de la presentación; esto es, sin que precisara los lineamientos que debía revisar, sino atendiendo a la legislación vigente en el momento en que se presentaron las solicitudes (dos mil tres y dos mil nueve).[338]

278. Finalmente, la tercera autoridad judicial encargada de analizar las actuaciones de Economía fue la Segunda Sala Regional del TFJA en el Recurso de Reclamación presentado por Minera Gorrión en contra del rechazo del Juicio de Nulidad que había presentado en contra de la Resolución de No Factibilidad de 2023.

---

337 Sentencia del Recurso de Inconformidad 23/21, p. 41. **C-0588**.

338 Sentencia del Recurso de Inconformidad 23/21, pp. 53-54. **C-0588**.

279. Como explican los Sres. Aguinaco, consideró que la Resolución de No Factibilidad constituía un nuevo acto emitido por Economía en cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte y que este podía impugnarse de manera autónoma, por lo que el Juicio de Nulidad debía ser admitido:

> El TFJA le dio la razón a Minera Gorrión y Minera Gavilán, revocó el desechamiento y ordenó la admisión de la demanda para continuar el juicio. Esta resolución resulta particularmente relevante porque reconoce que el Oficio de No Factibilidad constituyó un acto administrativo emitido en ejercicio de las facultades de la autoridad para dar cumplimiento a la sentencia, susceptible de afectar la esfera jurídica de las empresas.[339] Ello presupone, precisamente, que la sentencia otorgó a la DGM la facultad y el deber de realizar un nuevo análisis de factibilidad, cuyo resultado podía ser favorable o desfavorable.[340]

280. En conclusión, como explican los Sres. Aguinaco: "Que tres controles jurisdiccionales independientes coincidieran en [la] interpretación [de la Demandada sobre la Sentencia], refuerza que la postura de la DGM no constituye una lectura aislada, sino el entendimiento uniforme que los propios órganos jurisdiccionales atribuyeron a los efectos de la sentencia de la Suprema Corte".[341]

281. En este sentido, la DG Minas actuó siempre con el acompañamiento y la supervisión de las autoridades judiciales, las cuales confirmaron que sus actos eran correctos y cumplían cabalmente con lo ordenado por la Suprema Corte.

---

339 Resolución de la Segunda Sala Regional de Oriente del TFJA en el expediente 0026-2023-02-C-21-02-03-02-L, página 11: "En este orden de ideas, y tomando en consideración que, en caso de resultar infundados los recursos de inconformidad interpuestos por las partes en el juicio de amparo, la resolución contenida en el oficio SE/610/364/2023, de nueve de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, mediante el cual informa que no es factible la expedición de los títulos de concesión minera solicitados el veintiocho de dos mil dos y catorce de julio de dos mil dieciocho, respecto de los lotes denominados "Cerro Grande" y "Cerro Grande 2", quedaría firme y por tanto sus efectos, afectarían la esfera jurídica de las aquí recurrentes." **FMAB-0068**.

340 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 170.

341 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 173.

C. Economía rechazó las Solicitudes de Concesión por deficiencias en los trabajos periciales presentados por las Demandantes

1. El Procedimiento para la evaluación de una Solicitud de Concesión Minera y su relación con la Sentencia de la Suprema Corte

282. El otorgamiento de una concesión minera bajo el Reglamento de la Ley Minera es el resultado de un procedimiento secuencial con etapas diferenciadas, cada una con su propio objeto, autoridad competente y estándar de revisión.

- En una primera etapa, el solicitante presentaba el formato de solicitud con los datos del lote, perímetro y punto de partida, junto con la documentación técnica y fotográfica exigida por el Manual de Servicios al Público en Materia Minera ante la agencia de minería adscrita al territorio en el que se encontraba el terreno.[342]
- En una segunda etapa, la unidad administrativa competente (conocida como "Oficina Regional") constataba, sin calificar el contenido, que la solicitud estuviera completa, admitía la solicitud a estudio y expedía el certificado credencial para que el perito ejecutara los trabajos periciales en el terreno.
- En una tercera etapa, dentro de los 60 días siguientes a la admisión, el interesado presentaba los trabajos periciales para calificación por parte de la Oficina Regional dentro de los 45 días siguientes; si no se apegaban a la normativa, la autoridad debía notificar al interesado, por escrito y por una sola vez, para que los corrigiera dentro de los 60 días siguientes, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.[343]
- Una vez aprobados los trabajos periciales, se abría una cuarta y última etapa, reservada exclusivamente a la DG Minas, consistente en una revisión final de 15 días para constatar el carácter libre del lote y verificar, sobre el expediente ya integrado por la Oficina Regional, si se satisfacían las condiciones y requisitos legales aplicables, a efecto de expedir el título o rechazar la solicitud.[344]

283. La Sentencia de la Suprema Corte declaró insubsistentes las concesiones y facultó a DG Minas para revisar el cumplimiento de los requisitos y condiciones para el otorgamiento de las concesiones conforme a los elementos contenidos en los expedientes originales de las Solicitudes de Concesión. Como se explicará *infra*, la etapa final del procedimiento se limita a la deliberación por parte de la DG Minas con base en la información del expediente integrado por la Oficina Regional y no contempla ningún tipo de deber de prevenir al particular sobre inconsistencias en

342 Artículos 16 y 17 del Reglamento de la Ley Minera, **R-0012**.

343 Artículo 22 del Reglamento de la Ley Minera, **R-0012.**

344 Artículo 23 del Reglamento de la Ley Minera, **R-0012.**

su solicitud que impida a DG Minas resolver en sentido negativo una solicitud de concesión ante incumplimientos con la normativa aplicable.

2. DG Minas no está obligada a notificar al particular sobre deficiencias en su Solicitud de Concesión durante la etapa de la determinación final

284. Las Demandantes afirman que la postura de México consistente en que "la DG Minas no está obligada a notificar al particular sobre el incumplimiento de su solicitud" es "engañosa e incorrecta",[345] sin embargo, las Demandantes ignoran que al momento de la Resolución de No Factibilidad las etapas del procedimiento, con sus respectivas notificaciones al particular sobre deficiencias y omisiones en su Solicitud de Concesión (también conocidas como "prevenciones") y oportunidades para subsanar errores o deficiencias en las solicitudes o trabajos periciales, ya habían sido agotadas.

285. A diferencia de lo que parecen argumentar las Demandantes, debido a que el procedimiento se rige bajo el principio de "primero en tiempo, primero en derecho", no existe un deber general de prevenir y subsanar las deficiencias de las solicitudes de concesión de los particulares a cargo de la DG Minas. En su lugar, el Reglamento de la Ley Minera regula cada una de las etapas del procedimiento para el otorgamiento de una concesión y establece de manera expresa los momentos procesales en los que Economía debe prevenir al particular sobre deficiencias en su solicitud de concesión o trabajos periciales y permitirle subsanarlos.

286. En específico, los artículos 17 y 22 del Reglamento de la Ley Minera establecen mecanismos y momentos procesales en los que Economía debe notificar al particular de deficiencias en su solicitud de concesión y en los trabajos periciales.

> ARTÍCULO 17.- Las solicitudes de concesión de exploración o de asignación minera se presentarán en forma personal ante la unidad que corresponda en razón de la ubicación del lote minero, conforme a la circunscripción que determine la Secretaría mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
>
> […]
>
> Registrada la solicitud por la unidad administrativa competente, la misma constatará, sin calificar su contenido, que se encuentren completos los requisitos establecidos en este Reglamento para su presentación y venga acompañada del número de tantos y anexos que indique el Manual, y procederá de la manera siguiente:

[345] Réplica, Sección 2.3, ¶¶ 46, 55, 58.

> […]
>
> I.- Si falta algún requisito o documento, pedirá verbalmente a quien presentó la solicitud lo proporcione en ese momento. Si es proporcionado procederá conforme a la fracción anterior. En caso contrario, se desechará la solicitud y la unidad administrativa hará constar las causas que dan lugar a esta situación en el original y en las copias correspondientes, debiéndose entregar una de ellas al interesado.
>
> ARTÍCULO 22.- El procedimiento para la presentación y calificación de los trabajos periciales será el siguiente: […]
>
> III.- Si los trabajos periciales no cumplen con las disposiciones señaladas, la Secretaría, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de éstos, notificará al interesado, por escrito y por una sola vez, para que presente las correcciones conducentes o nuevos trabajos periciales, dentro de los 60 días siguientes a aquél en que se haya realizado la notificación respectiva.
>
> Si el interesado no desahoga la prevención en el término y forma señalados, se le tendrá por desistido de su solicitud y la Secretaría procederá a publicar la declaratoria de libertad de terreno que legalmente hubiese sido amparado. Si el particular desahoga la prevención, la autoridad contará con el plazo restante a partir de la suspensión, para resolver en definitiva sobre la aprobación de los trabajos.

287. El mismo mecanismo de prevención es establecido en ambos artículos: notificación al particular por una sola ocasión y con plazo fijo para subsanar la deficiencia o error. Estas etapas habían sido agotadas en el procedimiento de las Concesiones Cerro Grande y Cerro Grande 2 y, conforme a lo ordenado por la Sentencia de la Suprema Corte, Economía únicamente debía emitir una determinación final basada en las constancias de los expedientes originales sin reponer o repetir las actuaciones anteriores.[346]

288. A diferencia de las disposiciones con mecanismos expresos para la prevención al particular sobre deficiencias, el Artículo 23 del Reglamento de la Ley Minera, —que regula la etapa de la determinación final por DG Minas— no contiene un mecanismo que obligue a la autoridad a prevenir al particular sobre errores o deficiencias en su solicitud o trabajos periciales, mucho menos que le permita corregir incumplimientos a la normativa aplicable.

> ARTÍCULO 23.- A partir del día siguiente a aquél en que los trabajos periciales se aprueben o se tengan por aprobados de conformidad con el artículo anterior, la Secretaría contará con 15 días para resolver sobre el otorgamiento de la concesión de exploración o asignación minera.
>
> Durante el plazo de respuesta antes citado, la Secretaría constatará el carácter libre del lote objeto de la solicitud y, si se satisfacen las demás condiciones y requisitos previstos por la Ley y este Reglamento, expedirá el título de concesión de exploración o de asignación minera, de acuerdo con los datos derivados de la propia solicitud, de la cartografía minera, de los expedientes involucrados y de los datos del Registro, por el

346 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 177, 186.

> lote solicitado o por la parte que tenga carácter de libre. En este caso, comunicará al solicitante los antecedentes de los terrenos que abarquen la parte no libre.
>
> Si la solicitud no satisface las condiciones y requisitos que establecen la Ley y este Reglamento, será desaprobada y se procederá a la publicación de la declaratoria de libertad del terreno que legalmente haya sido amparado.[347] [Énfasis añadido]

289. La disposición es clara; en caso de incumplimiento con las condiciones y requisitos que establece la Ley, DG Minas debe "desaprobar" la Solicitud de Concesión. En consecuencia, cuando la DG Minas realizó la evaluación de la factibilidad de emitir las Concesiones en 2023, no tenía la obligación de autorizar en automático las concesiones ni estaba en posibilidades de ignorar incumplimientos a la normativa aplicable. La etapa final es una calificación integral y final de las solicitudes de concesión y los trabajos periciales presentados por el particular a la luz de la normativa aplicable, similar a la determinación o adjudicación que realiza un Tribunal después de haber agotado un procedimiento escrito y oral.

a. Los artículos 24 y 31 del Reglamento de la Ley Minera y el artículo 17-A de la LFPA no son aplicables a la etapa de determinación final de la DG Minas

290. En su Réplica, las Demandantes insisten en que "Articles 24 and 31 of the Mining Regulations establish a clear pathway for the correction of technical defects in existing mining concessions by Economía ex officio".[348] Esto es incorrecto. Las propias Demandantes señalan que estos artículos son aplicables a correcciones de "concesiones existentes". Para 2023, momento en que DG Minas realizó su análisis de factibilidad, las Concesiones ya habían sido declaradas insubsistentes y, en consecuencia, no había "concesiones existentes" sobre las cuales Economía pudiera invocar los Artículos 24 y 31 del Reglamento de la Ley Minera. Algunas precisiones son relevantes.

291. *Primero*. Los Artículos 24 y 31 regulan la facultad de Economía para hacer la corrección de errores de datos en concesiones existentes contenida en el Artículo 18 de la Ley Minera

> ARTICULO 18.- Cuando la Secretaría encuentre que los datos consignados en un título de concesión o de asignación mineras son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deba amparar, lo comunicará a su titular para que, dentro de un plazo de 30 días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos. La Secretaría dictará resolución con base en la

347 Reglamento de la Ley Minera, Art. 23. **R-0012**.

348 Réplica, ¶ 64.

> contestación del interesado y las constancias del expediente y, de proceder, ordenará la corrección del título, así como su inscripción en el Registro Público de Minería.")

292. Es evidente que para que esta facultad sea ejercida por Economía deben existir por lo menos dos elementos: (i) un título de concesión existente y (ii) un titular de una concesión existente. Ninguno de estos elementos existía. Las Concesiones de Minera Gorrión se habían declarado Insubsistentes en 2022 y la calidad de titular de concesión de Minera Gorrión se había perdido con la insubsistencia. Como veremos en la Sección II.C.4 II.C.4 *infra*, después de la Declaración de Insubsistencia, Minera Gorrión/Minera Gavilán perdieron su estatus como titulares de una concesión minera y pasaron a ser únicamente solicitantes de un título de concesión, lo cual no genera ningún derecho conforme a la Ley Minera y su Reglamento.

293. Las Demandantes parecen confundir el procedimiento de evaluación de una solicitud de concesión minera descrito *supra* con la facultad de Economía para corregir una concesión ya otorgada cuando los datos establecidos en el título de concesión son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deba amparar.[349]

294. *Segundo,* el Artículo 24 del Reglamento de la Ley Minera se refiere expresamente a "las solicitudes de concesión de explotación que se presenten con el mismo punto de partida y por el mismo perímetro que tenga el lote amparado por la concesión de exploración que se sustituye […]" esto es, regula el tránsito de una concesión de exploración ya otorgada hacia una concesión de explotación, no el trámite de una solicitud de concesión de exploración.

> ARTÍCULO 24.- Las solicitudes de concesión de explotación que se presenten con el mismo punto de partida y por el mismo perímetro que tenga el lote amparado por la concesión de exploración que se sustituye, expresarán, para efectos de su registro y admisión, además de lo dispuesto en el artículo 4o. de este Reglamento, el nombre del lote, superficie en hectáreas, municipio y estado en que se ubique, así como el número de título del que deriva.
>
> En este supuesto, la Secretaría tendrá por aprobada la solicitud y deberá expedir el título de concesión dentro de un término de 15 días, a partir de la recepción de dicha solicitud.
>
> La Secretaría se reserva en los términos del artículo 18 de la Ley, la facultad de modificar el título así expedido, si con posterioridad se requiere llevar a cabo alguna

[349] Ley Minera, Artículo 18. **R-0002**. ("ARTICULO 18.- Cuando la Secretaría encuentre que los datos consignados en un título de concesión o de asignación mineras son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deba amparar, lo comunicará a su titular para que, dentro de un plazo de 30 días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos. La Secretaría dictará resolución con base en la contestación del interesado y las constancias del expediente y, de proceder, ordenará la corrección del título, así como su inscripción en el Registro Público de Minería.")

> corrección en el mismo, si sus datos son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deba amparar. En este supuesto se estará a lo previsto en el artículo 31 de este Reglamento.[350]

295. En este sentido, el artículo supone la existencia de una concesión de exploración válidamente otorgada cuyos datos deban corregirse con motivo de esa sustitución y no pretende facultar a Economía para corregir cualquier solicitud de concesión en trámite ni los trabajos periciales entregados por el particular en apoyo de su solicitud o permitir la emisión de concesiones a pesar de incumplimientos con la legislación aplicable.

296. *Tercero*, el artículo 31 confirma esta lectura, ya que se activa "cuando la Secretaría verifique... que los datos consignados en un título de concesión o asignación minera son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deban amparar", y en ese caso "procederá a iniciar de oficio el procedimiento para corregir el título de concesión o asignación minera correspondiente". Esta disposición no menciona la corrección de trabajos periciales o las solicitudes de concesión.[351]

297. *Cuarto,* los defectos por los cuales se emitió la Resolución de No Factibilidad no pueden ser considerados dentro los supuestos de corrección previstos en los artículos 24 y 31 del Reglamento a la Ley Minera. Estos artículos presuponen que la concesión fue válidamente otorgada, y que el título, una vez expedido, contiene un dato que debe ajustarse. En este caso la Suprema Corte había declarado la insubsistencia de las Concesiones por violentar un precepto constitucional. Sus efectos habían desaparecido totalmente.

298. Además, conforme al artículo 23 del Reglamento de la Ley Minera, si la solicitud de concesión —como en este caso— no satisface los requisitos y condiciones establecidos en la legislación minera, Economía debe rechazar la solicitud, no corregirla o subsanarla. En la Resolución de No Factibilidad, DG Minas constató incumplimientos a los requisitos y condiciones establecidas en la legislación minera, lo que provocó la desaprobación de la solicitud.

299. En conclusión, los artículos 24 y 31 del Reglamento de la Ley Minera no eran aplicables a la evaluación de las Solicitudes de Concesión realizada por Economía en 2023, porque regulan un

350 Reglamento de la Ley Minera, Artículo 24. **R-0012**.

351 Reglamento de la Ley Minera, Artículo 31. **R-0012**.

supuesto específico para la corrección errores en concesiones existentes. En este caso no existía ninguna concesión, habían sido declaradas insubsistentes por la Suprema Corte.

300. Las Demandantes también insisten en que el Artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ("LFPA") obligaba a Economía a notificar a Minera Gorrión sobre las deficiencias de sus solicitudes de concesión.[352] Esto es incorrecto. Como explican los Sres. Aguinaco, la Sentencia de la Suprema Corte no ordenó reponer el procedimiento de evaluación de la Solicitud de Concesión en su totalidad, sino únicamente la etapa final de deliberación por parte de la DG Minas, en la cual no existe un deber de prevenir al particular por deficiencias en el contenido de su solicitud conforme al Artículo 17-A de la LFPA.

> El Oficio de No Factibilidad de la DGM se ajusta plenamente a los efectos ordenados por la Suprema Corte. La sentencia no ordenó preponer el procedimiento administrativo ni repetir cada una de sus etapas, sino emitir un nuevo pronunciamiento sobre la factibilidad de las solicitudes de concesión. Por ello, no puede sostenerse[353] que la autoridad haya contravenido las disposiciones administrativas como el artículo 17-A de la LFPA[354] –que obliga a prevenir a los interesados para subsanar omisiones–. Esa obligación corresponde al trámite ordinario de las solicitudes y no al nuevo análisis de factibilidad que la sentencia ordenó realizar con base en los documentos que ya integraban los expedientes administrativos.[355]

301. El Artículo 17-A de la LFPA no debe interpretarse como un deber ilimitado de las autoridades competentes para subsanar las deficiencias en el contenido de las solicitudes que el particular presenta. El Artículo 17-A es de aplicación supletoria a la Ley Minera,[356] lo que significa que únicamente rige los procedimientos administrativos que no cuentan con una regulación especial. El procedimiento de evaluación de solicitudes de concesión minera cuenta con una regulación especial y contempla mecanismos específicos de prevención por parte de la autoridad al particular. Como se explicó *supra*, los momentos procesales para la prevención del particular

---

352 Réplica, ¶ 58.

353 Informe de Experto del Sr. Cossío Díaz, ¶ 209.

354 Artículo 17-A LFPA,: "**Artículo 17-A.-** Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. (…)". **FMAB-005**

355 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 182.

356 Artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo: "Esta Ley, salvo por lo que toca al Título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas." **R-0013**.

sobre errores en su solicitud y trabajo pericial ya habían sido agotados en relación con las Solicitudes Cerro Grande y Cerro Grande 2. Conforme a lo ordenado por la Suprema Corte, la DG Minas se encontraba en la etapa final de deliberación sobre la procedencia de las solicitudes de concesión.

b. Economía no cometió ninguna violación en materia de seguridad jurídica, confianza legítima o buena fe administrativa

302. Las Demandantes sostienen que el Oficio de febrero de 2023 vulneró los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe administrativa, invocando para ello la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Código de Ética de la Administración Pública Federal.[357] Sin embargo, las Demandantes ignoran a conveniencia que dicho Oficio fue emitido en cumplimiento de una sentencia de amparo y dentro del ámbito de facultades que dicha sentencia dejó expresamente a salvo.[358]

303. Como explican los Sres. Aguinaco, la sentencia dictada en el Amparo en Revisión 134/2021 ordenó a la autoridad pronunciarse nuevamente sobre la factibilidad de otorgar las concesiones, preservando sus facultades legales para emitir dicho pronunciamiento.[359] La propia sentencia no ordenó la expedición de los títulos ni predeterminó el sentido de la nueva determinación; más bien condicionó la continuación de las etapas subsecuentes, esto es, la consulta indígena, a que el nuevo pronunciamiento fuera favorable.[360]

304. Así, el cumplimiento de una ejecutoria de amparo no constituye, en este contexto, una actuación discrecional de la autoridad. Estamos ante una obligación jurídica cuyo alcance está determinado por los efectos de la propia sentencia de la Suprema Corte.[361]

---

357 Réplica, ¶¶ 630-632.

358 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 223.

359 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 224.

360 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 224.

361 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 225; es importante destacar que la Ley de Amparo, sí exige el cumplimiento puntual de las sentencias y obliga a las autoridades que deban intervenir en ese cumplimiento a realizar los actos necesarios para ello. Ver Ley de Amparo, Artículo 192. **FMAB-0009**.

305. Ese mismo razonamiento responde también a la referencia que hacen las Demandantes a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a los demás ordenamientos que mencionan: los deberes de legalidad, imparcialidad y buena fe que esas normas imponen a los servidores públicos no pueden entenderse afectados por el ejercicio de una facultad que la propia sentencia de amparo preservó y que un tribunal validó y ordenó.[362]

306. Las Demandantes no explican cómo es que, actuar dentro de ese margen judicialmente reconocido, constituye simultáneamente un acto de cumplimiento a una orden judicial que fue validado por diversas autoridades judiciales y una infracción en materia de responsabilidad de los servidores públicos o de ética del servicio público. Por lo anterior, no puede sostenerse que el Oficio haya vulnerado la seguridad jurídica, la confianza legítima o la buena fe administrativa por el solo hecho de que una determinación no haya sido favorable a un particular.

3. Los derechos derivados de las Concesiones y sus efectos fueron revocados por la Suprema Corte

307. Las Demandantes sostienen que la emisión de las Concesiones "develop[ed] a legitimate legal expectation" y que Economía estaba impedida de emitir la Resolución de No Factibilidad en virtud de la propia Declaración de Insubsistencia y los actos previos de Economía que confirmaban la validez y existencia de las Concesiones.[363] Esto es incorrecto e ignora por completo que las Concesiones fueron revocadas por la Suprema Corte, por lo que los títulos quedaron insubsistentes, eliminando sus efectos jurídicos y facultando a la DG Minas a emitir una nueva determinación de factibilidad.

308. Contrario a lo que las Demandantes sostienen, la Resolución de No Factibilidad no constituyó la revocación unilateral o espontánea de actos que continuaran vigentes, ni una contradicción arbitraria con la conducta anterior de la autoridad, sino el resultado del nuevo pronunciamiento exigido por la sentencia una vez eliminados los efectos jurídicos de las concesiones originales.[364]

---

362 La Ley de Amparo en su artículo 192 señala que el incumplimiento con ejecutorias de amparo puede culminar en la separación del puesto y consignación penal. Véase Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 225.

363 Réplica, ¶ 630.

364 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 203-204.

309. *Primero,* la Demandante se equivoca al señalar que la Declaración de Insubsistencia de 2022 señalaba que "everything that was done prior to granting of the concession titles subsists" y, por tanto, impedía que DG Minas se pronunciara sobre deficiencias en los trabajos periciales o la solicitud de concesión en la Resolución de No Factibilidad.[365] La Demandada explicó *supra,* que la Sentencia de la Suprema Corte le otorgó libertad de jurisdicción a Economía para analizar *de novo* los expedientes originales de las Solicitudes de Concesión y emitir un nuevo pronunciamiento respecto de la factibilidad de emitir las concesiones a la luz de las condiciones y requisitos de la legislación aplicable.[366]

310. La Declaración de Insubsistencia únicamente determinó que los expedientes originales de las Solicitudes de Concesión conservaban su existencia, por lo que no sería necesario que Minera Gorrión las presentara nuevamente o se repitiera en su totalidad el procedimiento de solicitud de concesión,[367] mientras que la Resolución de No Factibilidad corresponde a la decisión sustantiva de la DG Minas sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones contenidas en la legislación aplicable.[368]

311. La propia Declaración de Insubsistencia aclaraba que a pesar de que los expedientes originales de las Solicitudes de Concesión subsistían, DG Minas emitiría un nuevo pronunciamiento "respecto a la procedencia de la expedición de los títulos de concesión".

> CUARTO. Para la emisión de un nuevo pronunciamiento respecto a la procedencia de la expedición de los títulos de concesión, subsiste todo lo actuado previamente al otorgamiento de los títulos de concesión, es decir, tomando en consideración las diversas actuaciones realizadas en términos de los artículo 13 de la Ley Minera y 16 de

---

365 Réplica, ¶ 630. ("Economía's own 20 June 2022 Oficio had stated that "everything that was done prior to the granting of the concession titles subsists."1795 That ruling plainly covered the mining expert reports filed in support of the original concession applications, as well as Economía's express approval of those reports some 14-20 years earlier. Moreover, during the almost 20 years in which the Claimants had held their Concessions, Economía had never once questioned the so-called feasibility of the Concession titles or the validity of the underlying, approved expert reports").

366 *Ver supra* Sección II.B.2.b. y II.B.2.c.

367 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 197-199. ("Al señalar que subsistía lo actuado, el Primer Oficio únicamente determinó que esas actuaciones conservaban su existencia dentro del expediente y que, por tanto, no era necesario reponer materialmente el procedimiento administrativo desde su inicio. Ello no significaba que las conclusiones técnicas o jurídicas hubieran quedado intocadas, ni que la autoridad estuviera obligada a reproducir la decisión adoptada originalmente").

368 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 199-201.

> su Reglamento, vigentes al momento de la presentación de la solicitud, en apego al numeral 297 de la ejecutoria de mérito.[369]

312. De esto se desprende que la procedencia de las solicitudes de concesión permanecía pendiente de resolución y que la subsistencia de las actuaciones previas no equivalía al otorgamiento de las concesiones.[370] Los Sres. Aguinaco explican que la subsistencia de los expedientes originales de las Solicitudes de Concesión no puede entenderse como una obligación para Economía de reproducir automáticamente las concesiones dejadas insubsistentes. Esto equivaldría a dejar sin sentido útil la insubsistencia ordenada por las Demandantes y el segundo efecto de la Sentencia consistente en la emisión de un "nuevo pronunciamiento".

> Por el contrario, el propio Primer Oficio de Insubsistencia, en su punto Cuarto, distinguió entre la subsistencia de las actuaciones previas ("subsiste todo lo actuado previo al otorgamiento de los títulos de concesión") y la necesidad de emitir un nuevo pronunciamiento sobre la procedencia de los títulos, al decir que se emite un nuevo pronunciamiento de procedencia de la expedición de los títulos de concesión, en apego al numeral 297 de la sentencia de la Suprema Corte.
>
> Esta determinación exigía examinar nuevamente los elementos que integraban el expediente y valorar si, a partir de ellos, se encontraban satisfechos los requisitos legales para expedir nuevamente las concesiones. Si los actos previos hubieran sido inmutables y sus conclusiones fueran vinculantes para la DGM, el nuevo pronunciamiento habría quedado predeterminado y el cumplimiento de la sentencia se habría reducido a la reproducción automática de las concesiones dejadas insubsistentes.[371] [Énfasis añadido]

313. El Sr. Palma, Director de Cartografía y Concesiones Mineras, explica que la DG Minas entendió que la insubsistencia ordenada por la Suprema Corte "equivalía a dejar [las Concesiones] sin efectos mediante la revocación de las mismas, es decir, las concesiones dejaron de existir y el titular de la concesión (es decir Minera Gorrión) dejó de tener derechos y obligaciones derivados de los títulos".[372] En ese sentido, la evaluación de factibilidad ordenada por la Suprema Corte no suponía una aprobación automática de las Solicitudes de Concesión o re-emisión de las

---

369 Declaración de Insubsistencia, 20 de junio de 2022, p. 9. **R-0098**.

370 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 200. ("Por las mismas razones, el Primer Oficio no podía generar una expectativa legítima de que los títulos serían necesariamente reexpedidos. Lejos de anticipar una decisión favorable, ese oficio señaló expresamente que aún debía emitirse un nuevo pronunciamiento de factibilidad. Las Demandantes conocían, por tanto, que la procedencia de las solicitudes de concesión permanecía pendiente de resolución y que la subsistencia de las actuaciones previas no equivalía al otorgamiento de las concesiones").

371 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 198.

372 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 11.

Concesiones, sino que implicaba un análisis integral para confirmar que los expedientes originales de las Solicitudes de Concesión cumplían con la legislación aplicable.

> Derivado de esta insubsistencia, y en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte, la DG Minas procedió a evaluar la factibilidad de las solicitudes de concesión, para lo cual examinó las solicitudes originales conforme a las condiciones existentes al momento en que fueron presentadas. Es importante aclarar que evaluar las solicitudes de concesión originales no implicaba una aprobación automática, sino que únicamente que las solicitudes originales serían nuevamente examinadas para determinar su factibilidad.[373]

314. *Segundo*, los actos preparatorios identificados por las Demandantes en su Memorial de Contestación y Réplica (incluidos los Anexos C-3, C-8, C-171 y C-175), así como los actos de Economía relacionados con las Concesiones que fueron emitidos antes de la Sentencia de la Suprema Corte,[374] no impedían que Economía emitiera la Resolución de No Factibilidad.

315. La aprobación de los trabajos periciales y las valoraciones técnicas realizadas durante el procedimiento original, previo a la evaluación y determinación final por parte de DG Minas, tenían una naturaleza preparatoria y no impedían a DG Minas realizar su propia evaluación de los expedientes originales de las Solicitudes de Concesión y emitir su propia determinación final sobre la factibilidad del otorgamiento de las Concesiones a la luz de la legislación aplicable.[375]

316. Los Sres. Aguinaco, con base en criterios emitidos por la Suprema Corte, aclaran que los actos preparatorios no pueden considerarse resoluciones definitivas que impidan a DG Minas a elaborar su propia evaluación y emitir una determinación final.

> Al respecto, resulta ilustrativa la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que distingue entre las actuaciones que integran las distintas fases de un procedimiento administrativo y la resolución que expresa la voluntad definitiva de la Administración. Conforme a este criterio, cuando una resolución culmina un procedimiento administrativo "las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental

---

373 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 12

374 Réplica, ¶¶ 65-71.

375 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 208-209. ("Debe partirse de una premisa fundamental: las actuaciones previas practicadas durante el procedimiento administrativo —como la aprobación de los peritajes, la validación de la solicitud, la integración del expediente y las demás diligencias realizadas para verificar el cumplimiento de los requisitos legales— no constituyen actos administrativos definitivos con efectos jurídicos autónomos. Se trata de actuaciones preparatorias cuya función consiste únicamente en proporcionar a la autoridad los elementos de hecho y de derecho necesarios para emitir la decisión definitiva sobre el otorgamiento o la negativa de los títulos de concesión").

> no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento".[376]

317. La DG Minas se encontraba jurídicamente facultada para valorar nuevamente todas las actuaciones técnicas y administrativas que integraban el expediente y, con base en ese nuevo examen, confirmar o apartarse de las conclusiones previamente alcanzadas. Los Sres. Aguinaco explican que: "sostener lo contrario implicaría que el nuevo análisis se encontraba predeterminado por valoraciones preparatorias realizadas para sustentar la expedición original de los títulos, lo que privaría de contenido material al nuevo pronunciamiento de factibilidad ordenado por la Primera Sala".[377]

318. *Tercero,* la posición de Economía durante el Amparo 445/2015, el registro de las Concesiones en Registro Público de Minería, la cesión de las Concesiones a Minera Gorrión, la aprobación de la reducción de las concesiones — después declarada inválida por una autoridad judicial— y los certificados de validez emitidos durante la vigencia de las Concesiones no impedían que Economía ejerciera su libertad de jurisdicción para evaluar el cumplimiento de las Solicitudes de Concesión originales con las condiciones y requisitos contenidos en la legislación aplicable y emitiera una determinación al respecto.[378] Todo ello es incorrecto.

319. Por lo que hace a los actos de Economía emitidos durante la vigencia de las Concesiones, su existencia jurídica y relevancia desapareció cuando la Suprema Corte declaró insubsistentes las Concesiones. Como explican los Sres. Aguinaco, la Sentencia dejó sin efectos las Concesiones, por lo que las actuaciones relacionadas con las mismas no podrían vincular el sentido del nuevo pronunciamiento ordenado por la Suprema Corte ni generar un derecho en favor de las Demandantes para que la autoridad reiterara una determinación que había sido revocada por la Suprema Corte.

> Por las mismas razones, la doctrina de los actos propios no obligaba a Economía a reproducir la decisión originalmente adoptada. Una actuación que había sido privada de efectos por resolución judicial no podía vincular el sentido del nuevo pronunciamiento ni generar un derecho a que la autoridad reiterara la misma determinación. Sostener lo contrario equivaldría a restituir indirectamente los efectos de los títulos declarados

376 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 210.

377 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 217.

378 Réplica, ¶ 68.

> insubsistentes y a convertir el cumplimiento de la sentencia en un ejercicio meramente formal.[379]

320. En todo caso, los actos identificados por las Demandantes no impedían que la autoridad realizara el nuevo análisis de factibilidad ordenado por la Suprema Corte ni vinculaban el sentido de la determinación que debía emitir. Mientras las Concesiones permanecieron vigentes, gozaban de presunción de validez propia de los actos administrativos, por lo que resultaba jurídicamente consistente que Economía sostuviera su validez y legalidad durante el juicio de amparo. Sin embargo, una vez que la Suprema Corte ordenó dejarlas insubsistentes, los títulos dejaron de surtir efectos jurídicos y ya no podían operar como fundamento para predeterminar el resultado del nuevo pronunciamiento. En consecuencia, Economía debía evaluar nuevamente, con base en las constancias de los expedientes administrativos y conforme a la legislación aplicable, si las Solicitudes de Concesión cumplían con las condiciones y requisitos necesarios para la expedición de nuevos títulos

321. Las Demandantes parecen argumentar que la Resolución de No Factibilidad solo podría justificarse si Economía hubiera cuestionado, dentro del Amparo 445/2015,[380] la legalidad de las Concesiones. Esto es incorrecto. Mientras las concesiones permanecieron vigentes y no habían sido privadas de sus efectos jurídicos derivado de una resolución jurisdiccional, Economía se encontraba obligada para defender la validez de los actos emitidos por la propia Secretaría, sin que esa defensa procesal predeterminara el contenido del nuevo pronunciamiento que posteriormente debía emitir en cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte.

322. En el juicio de amparo 445/2015 y el Recurso de Revisión 134/2021, Economía intervino como autoridad responsable y se encontraba obligada a ejercer las acciones y defensas que correspondieran a la Secretaría. En particular, el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía atribuye a la UAJ-Economía la atribución expresa de "ejercer todas las acciones, defensas y excepciones que correspondan a la Secretaría".[381] El incumplimiento a las atribuciones legalmente encomendadas a los servidores públicos puede, en su caso, dar lugar a responsabilidades administrativas sancionables conforme al régimen aplicable.[382] Por tanto, el hecho de que

379 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 207.

380 Réplica, ¶ 839.

381 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, Artículo 14. **R-0011**.

382 Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículos 49, fracción I, 50 y 75. **R-0182**.

Economía hubiera defendido la legalidad de las Concesiones durante el juicio de amparo no resulta incompatible con que, una vez que la Suprema Corte ordenó dejarlas insubsistentes y emitir un nuevo pronunciamiento de factibilidad, la DGM ejerciera nuevamente las atribuciones técnicas y jurídicas que la ejecutoria dejó a salvo.

323. En conclusión, cualquier supuesta "expectativa" o aparente "derecho" generado por las Concesiones o actos derivados de las mismas se extinguió con la Sentencia de la Suprema Corte que ordenó la insubsistencia de las Concesiones y permitió que Economía realizara una evaluación *de novo* sobre la factibilidad de las Solicitudes de Concesión a la luz de la legislación aplicable. La Sentencia de la Suprema Corte no garantizaba un resultado favorable a las Demandantes ni limitaba las facultades regulatorias de Economía para realizar su evaluación y emitir una determinación en el mismo sentido que los actos previos relacionados con las Concesiones.

4. Las Solicitudes de Concesión no generaban ninguna clase de derecho u obligación de resultado en favor de las Demandantes

324. Las Demandantes sostienen erróneamente que las Concesiones "developed a legitimate legal expectation" y "accorded to Minera Gorrión, among other things, the rights to explore, exploit, and benefit from the mineral resources in the Concession areas for a renewable term of 50 years".[383] Esto es incorrecto. Las Concesiones no generan ningún derecho, expectativa incondicional u obligación de resultado en favor de las Demandantes. Tres precisiones son relevantes.

325. *Primero*, como explican los Sres. Aguinaco, las Concesiones no otorgan ningún derecho incondicional, ya que están sujetas al cumplimiento del marco jurídico aplicable y a la obtención de las demás autorizaciones necesarias para desarrollar el proyecto minero, *e.g.*, una MIA.

> Además, aunque las concesiones no garantizaban de manera absoluta e incondicionada la explotación del Proyecto Ixtaca. Durante su vigencia, su ejercicio se encontraba sujeto al marco jurídico aplicable y a la obtención de las demás autorizaciones necesarias para desarrollar el proyecto.[384]

326. La naturaleza condicionada de las concesiones mineras está señalada en el Artículo 28 de la Constitución mexicana,[385] el cual aclara que los concesionarios deben sujetarse a las leyes y

---

383 Réplica, ¶ 630.

384 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 204.

385 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 28. **R-0246**.

ordenamientos vinculadas con su objeto. La Suprema Corte ha aclarado que las concesiones se sujetan incluso a las leyes y ordenamientos expedidos con posterioridad a su otorgamiento.

> El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su décimo párrafo, establece que el Estado podrá concesionar la prestación de servicios públicos, así como la explotación, uso o aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, y que las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia en la prestación de dichos servicios y la utilización social de los bienes en uso o explotación. El Estado en su calidad de concesionante y los particulares como concesionarios, deberán sujetarse a las leyes que regulan el servicio público o los bienes concesionados, proporcionando el marco de los derechos, obligaciones, límites y alcances de las partes en una concesión; ello genera certidumbre para los gobernados respecto a las consecuencias de sus actos y acota las atribuciones de las autoridades correspondientes para impedir actuaciones arbitrarias, con lo que se respeta la garantía de seguridad jurídica consignada por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. No es óbice a lo anterior el hecho de que en el título de concesión se establezca que el concesionario quedará sujeto a todas las leyes y ordenamientos expedidos con posterioridad al otorgamiento de ésta, puesto que se entiende que sólo podrá estar sujeto a aquellas disposiciones u ordenamientos normativos que se vinculen con el objeto de la concesión explotada, atendiendo al régimen de concesión de servicios y bienes públicos previsto por el referido artículo 28 constitucional.[386]

327. La Ley Minera también refleja la naturaleza condicionada de las concesiones en diversas disposiciones:

> Artículo 10. […]Los títulos de concesión y de asignación mineras y los decretos de declaración de zonas de reservas mineras se expedirán siempre y cuando se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos por esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de tercero.[387]
>
> Artículo 13. Las concesiones de exploración y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.[388]
>
> Artículo 27. Los titulares de concesiones de exploración y de explotación, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:
>
> I.- Ejecutar y comprobar respectivamente las obras y trabajos de exploración o de explotación en los términos y condiciones que establecen esta Ley y su Reglamento; […].[389]
>
> Artículo 39. En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán procurar el cuidado del medio ambiente

386 Pleno de la Suprema Corte, *Concesiones. Se Rigen Por Las Leyes Vinculadas Con Su Objeto*, Tesis P. XXXIV/2004, agosto de 2004. **FMAB-0072**.

387 Ley Minera, Artículo 10. **R-0002**.

388 Ley Minera, Artículo 13. **R-0002**.

389 Ley Minera, Artículo 27. **R-0002**.

> y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia.[390]

328. Las Concesiones *per se* no garantizaban de manera absoluta e incondicionada la explotación del Proyecto Ixtaca, lo cual también se refleja en los propios títulos de concesión.

329. *Segundo*, no puede existir una "transferencia formal de la titularidad ni confiscación" de los derechos de explotación o exploración de minerales, ya que sólo la Nación ejerce el dominio directo sobre los recursos minerales conforme al Artículo 27 de la Constitución mexicana. [391]

330. La Suprema Corte ha explicado que las concesiones mineras pertenecen a un régimen específico por tratarse de bienes de dominio público y que aun cuando la Ley Minera permite que los concesionarios puedan ejercer derechos, como el de transmisión, no significa que la naturaleza de propiedad de la Nación desaparezca, ya que la concesión —como autorización administrativa— no modifica el origen y la naturaleza pública del bien concesionado.

> Las concesiones mineras pertenecen a un régimen jurídico específico de la Federación que deriva directamente del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, aun cuando la Ley Minera, permite que los concesionarios puedan ejercer derechos de transmisión, ello no significa que el bien materia de la explotación se desvincule de su naturaleza de propiedad de la Nación, ya que sólo ésta ejerce un dominio directo que puede llevarse a cabo a través de la autorización de concesiones temporales cuyos derechos de explotación o aprovechamiento no pueden constituirse en actos exclusivos de particulares o de propiedad privada, toda vez que

---

390 Ley Minera, Artículo 39. **R-0002**.

391 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27. **R-0001**. ("Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.

[…] En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas.") [Énfasis añadido]

> dicha autorización administrativa no modifica el origen y la naturaleza del bien concesionado.[392]

331. En consecuencia, si bien una concesión minera autoriza que particulares puedan explotar recursos minerales, ello no significa que los recursos minerales y los derechos derivados de los mismos se desvinculen de su naturaleza de propiedad de la Nación. El dominio directo de los recursos naturales y los derechos derivados de los mismos no se transfiere en ningún momento de la Nación al particular, ya que es intransferible e inalienable conforme a la Constitución. En términos simples: no puede existir una "transferencia formal de la titularidad ni confiscación" porque los derechos derivados de la Concesión nunca dejaron de pertenecer al Estado mexicano.

332. *Tercero,* las Concesiones y los efectos jurídicos que generaron durante su vigencia fueron revocados por la Suprema Corte en junio de 2022 cuando ordenó a Economía declarar su insubsistencia de las Concesiones y regresar los efectos al momento previo a su emisión para que Economía se pronunciara nuevamente sobre la factibilidad de emitirlas.

333. Para junio de 2022, lo único que las Demandantes mantenían eran sus Solicitudes de Concesión originales. Como explica el Sr. Palma, las solicitudes de concesión no generaban ningún derecho en favor del solicitante ni aseguraba una determinación favorable.

> Conforme a mi experiencia en el sector público (primero en la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de Chihuahua y ahora en la DG Minas), el trámite de una solicitud de concesión funciona como una "fila" en donde cada solicitud se registra con fecha y hora respecto de una superficie de interés que queda "apartada" desde el momento de la presentación de dicha solicitud. Ese "apartado" no significa que la superficie ya les ha sido concedida. Conforme al procedimiento que seguimos en la DG Minas, únicamente permiten mantener un orden para asegurar que las concesiones se otorguen al primer solicitante en tiempo que cumpla con la totalidad de la normatividad.[393]

334. La jurisprudencia de la Suprema Corte confirma que la solicitud de concesión es un trámite que no genera ningún derecho.[394] En este sentido, como explican los Sres. Aguinaco, "ni siquiera

---

392 Tesis 1a. CCXXVI/2011, "Concesiones Mineras. Su Regulación Pertenece A Un Régimen Específico De La Federación Que Deriva Directamente Del Artículo 27 De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, Por Tratarse De Bienes De Dominio Público", Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, noviembre de 2011. **R-0183**.

393 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 13.

394 Tesis: P./J. 8/2026, "Desechamiento De Solicitudes En Trámite De Nueva Concesión De Exploración Y Explotación. El Artículo Quinto Transitorio, Párrafo Tercero, Del Decreto En Materia De

durante la vigencia de las concesiones, las Demandantes podían asumir legítimamente que la explotación del Proyecto Ixtaca se encontraba asegurada con independencia del cumplimiento de los requisitos legales y de la obtención de las autorizaciones correspondientes. Mucho menos podían sostener esa expectativa después de que las concesiones fueron dejadas insubsistentes por mandato judicial y su eventual reexpedición quedó sujeta a un nuevo pronunciamiento de factibilidad de la autoridad".[395]

335. *Cuarto*. la insubsistencia decretada por la Suprema Corte no debe confundirse con la cancelación de una concesión en términos del artículo 42 de la Ley Minera, ni con la declaratoria de libertad de terreno derivada de una cancelación de concesión o del rechazo de una Solicitud de Concesión.

336. La cancelación opera por causas específicas (vencimiento de la vigencia, desistimiento del titular, sustitución de títulos por reducción, división, identificación o unificación de superficie, infracciones del artículo 55 de la Ley Minera, o resolución judicial)[396] y va seguida de la publicación de la declaratoria de libertad de terreno.

337. La insubsistencia, en cambio, tiene como resultado dejar sin efectos los títulos de concesión. A partir de ese momento, ya no existían títulos vigentes ni podían ejercerse derechos derivados de ellos. Ello no implicó la reposición del procedimiento administrativo ni la repetición de sus etapas, sino la obligción de que la DGM emitiera un nuevo pronunciamiento sobre la factibilidad de expedir los títulos, para lo cual podía revisar nuevamente las constancias que obraban en los expedientes administrativos y valorar si se satisfacían las condiciones y requisitos aplicables. En palabra de los Sres. Aguinaco, los efectos de la insubsistencia son que "las Demandantes perdier[a]n de forma definitiva y permanente sus Títulos de concesión."[397]

338. Lo que subsistía después de la Sentencia de la Suprema Corte era la expectativa de que un nuevo procedimiento de evaluación fuera llevado a cabo por Economía para determinar la factibilidad de la emisión de las Concesiones. Conforme al Artículo 23 del Reglamento de la Ley

---

Concesiones Para Minería Y Agua, No Viola El Principio De Irretroactividad De La Ley", Doceava Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, marzo de 2026. **R-0184**.

395 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 206.

396 Artículo 52 de la Ley de Minería 2023. **R-0015.**

397 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 49-51.

Minera, si una Solicitud de Concesión no satisface las condiciones y requisitos de la legislación, sería desaprobada y Economía debía declarar la libertad del terreno solicitado.

339. La libertad de terreno en este caso no ocurrió debido a la suspensión otorgada por el TFJA en el Juicio de Nulidad que impedía que la Resolución de No Factibilidad surtiera plenos efectos.[398] La suspensión garantizaba que la DG Minas estuviera jurídicamente impedida para declarar la libertad de los terrenos mientras se resolvía dicho juicio. Esto no significaba que el TFJA hubiera reconocido algún tipo de derecho en favor de las Demandantes derivado de las Concesiones; simplemente preservaba el "apartado" del terreno solicitado por las Demandantes en sus Solicitudes de Concesión a pesar de que la emisión de las Concesiones había sido declarada no factible para asegurar que los terrenos continuaran libres en caso de que el resultado del Juicio de Nulidad fuera favorable para las Demandantes y se ordenara la emisión de un nuevo pronunciamiento en relación con la factibilidad de las Concesiones.[399]

5. Los incumplimientos de las Solicitudes de Concesión no eran menores o subsanables

340. Como se explicó en la Sección II.B *supra*, la Suprema Corte ordenó a Economía realizar una evaluación para determinar si la emisión de las Concesiones era factible conforme a las condiciones y requisitos establecidos en la legislación aplicable.[400] Economía debía emitir su determinación sobre la factibilidad tomando en cuenta los elementos ya integrados en los expedientes originales de las Solicitudes de Concesión, sin que la autoridad estuviera obligada a realizar peticiones adicionales de información o subsanar los errores y deficiencias contenidas en las Solicitudes de Concesión.

341. Como explica el Sr. Palma, la evaluación de las Solicitudes de Concesiones ordenada por la Suprema Corte no implicaba una aprobación automática de las Concesiones; DG Minas tenía la obligación de confirmar que las condiciones y requisitos aplicables efectivamente se cumplieran,

---

398 TFJA, Sentencia Interlocutoria por el que se concede la suspensión definitiva en contra de la Resolución de No Factibilidad, 3 de agosto de 2023. **R-0185**.

399 Reglamento de la Ley de Minería, Artículo 23. **R-0012**. ("Si la solicitud no satisface las condiciones y requisitos que establecen la Ley y este Reglamento, será desaprobada y se procederá a la publicación de la declaratoria de libertad de terreno que legalmente haya sido amparada.")

400 Ver *supra* Sección II.B.

de la misma manera en que lo haría con cualquier otra Solicitud de Concesión en su práctica cotidiana.[401]

> Derivado de esta insubsistencia, y en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte, la DG Minas procedió a evaluar la factibilidad de las solicitudes de concesión, para lo cual examinó las solicitudes originales conforme a las condiciones existentes al momento en que fueron presentadas. Es importante aclarar que evaluar las solicitudes de concesión originales no implicaba una aprobación automática, sino que únicamente que las solicitudes originales serían nuevamente examinadas para determinar su factibilidad.[402]
>
> En este sentido, después de que se dejaron sin efectos las concesiones de Minera Gorrión, la determinación de la factibilidad de las mismas se basó en el análisis de las solicitudes de concesión, la cuales se ubicaron en la fase en la que la DG Minas emite su dictamen final sobre el expediente ya integrado. En esta etapa, la DG Minas únicamente se limitó a evaluar lo presentado por el solicitante (Minera Gavilán, solicitante original de las concesiones) e integrado por la Oficina Regional de la Secretaría de Economía.[403]

342. En este sentido, hubiera sido inapropiado que DG Minas hiciera su determinación sobre la factibilidad de las Solicitudes de Concesión basada en información que no se encontrara en los expedientes originales de las Solicitudes de Concesión y los trabajos periciales presentados por Minera Gorrión en 2003 y 2009. En concreto, las solicitudes de reducción presentadas en 2022 con el objetivo de "eliminar" a Tecoltemic del área concesionada y evitar los efectos de la Sentencia de la Suprema Corte o cualquier otro acto emitido durante la vigencia de las Concesiones originales no podría formar parte de la evaluación de la DG Minas porque la Suprema Corte ya había declarado insubsistentes las Concesiones y los efectos o actos derivados de las mismas durante su vigencia.[404]

343. Además, como explican los Sres. Aguinaco, "la sentencia no ordenó a la DGM resolver las solicitudes que las Demandantes presentaran durante su cumplimiento ni condicionó el pronunciamiento de factibilidad a dar respuesta a dichas peticiones".[405] Por lo tanto, no tomar en

---

401 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 16. ("Es importante precisar que la evaluación de las solicitudes de concesión para el Proyecto Ixtaca es un procedimiento que la DG Minas realiza de forma cotidiana para definir la procedencia de cualquier solicitud de concesión, misma que consiste en revisar el contenido de la solicitud y los trabajos periciales con la normativa aplicable").

402 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 12.

403 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 15.

404 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 192.

405 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 192.

consideración las reducciones solicitadas en 2022 no incumplía la sentencia de la Suprema Corte. No obstante, aunque las Demandantes no recibieron una respuesta formal a sus solicitudes de reducción de Concesiones en 2022, el Artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento contempla la figura de negativa ficta, la cual señala que, ante el silencio de la autoridad con respecto de una solicitud de un particular, debe entenderse como negada la solicitud. Ante la negativa ficta, el particular puede acudir ante autoridades jurisdiccionales para impugnar el sentido negativo de la determinación.[406]

344. En todo caso, las solicitudes de reducción en 2022 fueron presentadas en relación con Concesiones que habían sido revocadas por la Suprema Corte y, por lo tanto, habían dejado de ser susceptibles de generar efectos jurídicos. Sencillamente, las Concesiones no existían para el momento en que las reducciones fueron solicitadas, por lo que su análisis por parte de la DG Minas resultaba fútil.

345. Con esto en contexto, las siguientes secciones explican las deficiencias técnicas por las que la DG Minas determinó que las Solicitudes de Concesión y los trabajos periciales presentados por Minera Gorrión y Minera Gavilán no cumplían con los requisitos y condiciones de la legislación aplicable, por lo que no era factible la emisión de las Concesiones.

a. Deficiencias técnicas de la Solicitud de Concesión de Cerro Grande

346. La determinación de no factibilidad técnica de la Solicitud de Concesión Cerro Grande derivó de un error de localización del terreno solicitado insubsanable y causado por el propio perito que Minera Gavilán contrató.

347. Como el Sr. Palma explica, existen tres elementos clave para ubicar el terreno de una concesión en el mapa:[407]

- Punto de partida: Consiste en una marca o referencia física en el suelo, normalmente ubicado a través de una piedra o concreto en el terreno (mojonera).
- Polígono: Es la figura geométrica que forma el perímetro del terreno donde se pretende explorar o explotar. El primer punto de referencia del perímetro se conoce como Punto 1.

406 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 192.

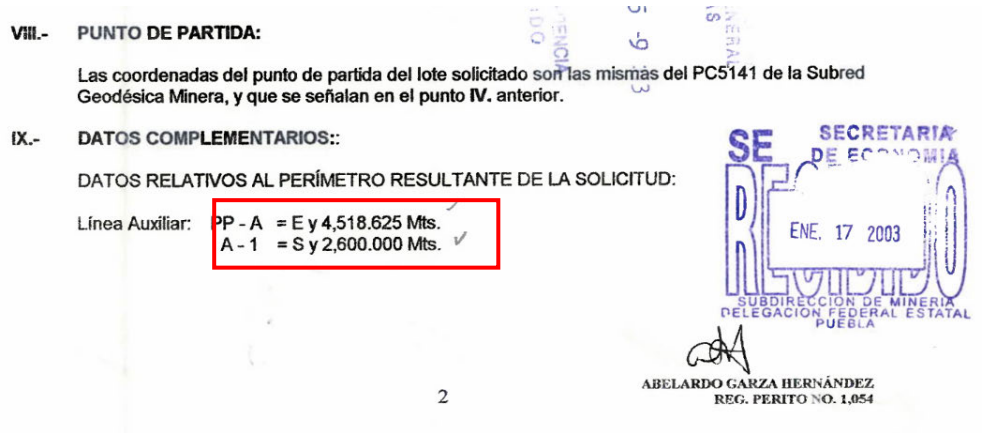
407 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 24.

- Línea auxiliar: Es el trazo o la distancia que une al punto de partida con el punto 1 del perímetro.

348. Para estos tres elementos existen disposiciones técnicas que deben de cumplirse estrictamente para evitar errores en los mapas cartográficos y garantizar que se conozca con exactitud en donde empieza y en donde termina una concesión minera, sin afectar derechos de terceros o del propio Estado.[408] En este sentido, las disposiciones vigentes en ese momento establecían que la línea auxiliar no debía de medir más de 3,000 metros.[409] Esta era una condición que debían de cumplir todos los solicitantes de concesiones mineras a menos que se trataran de concesiones en zonas marinas o cuando las concesiones mineras estaban unificadas. En ninguno de estos supuestos se encontraba la solicitud de Cerro Grande.[410]

349. Como explica el Sr. Palma, al momento de que se revisó las Solicitudes de Concesión de Cerro Grande y los trabajos periciales presentados por Minera Gavilán, la DG Minas detectó que la línea auxiliar que conectaba el punto de partida con el punto 1 del perímetro medía 5,213.625 metros, como se muestra en la siguiente imagen:[411]

Imagen: Trabajos Periciales de la Solicitud de Concesión Cerro Grande.



VIII.- **PUNTO DE PARTIDA:**

Las coordenadas del punto de partida del lote solicitado son las mismas del PC5141 de la Subred Geodésica Minera, y que se señalan en el punto IV. anterior.

IX.- **DATOS COMPLEMENTARIOS::**

DATOS RELATIVOS AL PERÍMETRO RESULTANTE DE LA SOLICITUD:

Línea Auxiliar: PP - A = E y 4,518.625 Mts.
A - 1 = S y 2,600.000 Mts.

SE SECRETARIA DE ECONOMIA
RECIBIDO
ENE. 17 2003
SUBDIRECCION DE MINERIA
DELEGACION FEDERAL ESTATAL
PUEBLA

2

ABELARDO GARZA HERNÁNDEZ
REG. PERITO NO. 1,054

408 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 24.

409 Manual, Disposición Vigésima. **R-0008 y R-0009.**

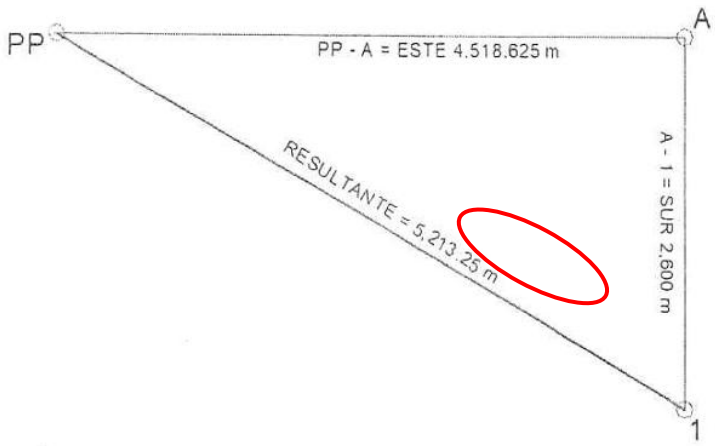
410 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 33. Manual, Disposición Vigésima, "tratándose de concesiones de exploración sobre terreno comprendido por las zonas marinas mexicanas, la mojonera podrá construirse en el litoral, único caso en el que la distancia al punto número 1 del perímetro podrá estar a más de 3,000 metros". **R-0008 y R-0009.**

411 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 26.

Fuente: Trabajos Periciales de la Solicitud de Concesión de Cerro Grande. **C-2.** Tabla de Inconsistencias del Anexo C-930. **R-0243**.

350. Es decir, conforme a la solicitud presentada por Minera Gavilán, el límite permitido por la normativa se superaba por más de 2 kilómetros, claramente yendo en contra de las disposiciones técnicas aplicables.[412]

Imagen: Representación de los datos presentados en los Trabajos Periciales de la Solicitud de Concesión Cerro Grande.



Fuente: Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 24

351. Contrario a lo que hacen parecer las Demandantes, este error no era mínimo ni subsanable. El Sr. Palma señala en su testimonial que, si la línea auxiliar excede la distancia permitida de 3,000 metros, se pierde la precisión cartográfica. En la práctica, esto significa que no hay forma de saber con certeza en qué punto exacto del terreno se encuentra la concesión minera o si se estarían invadiendo concesiones vecinas o terreno del Estado, y por lo tanto no es factible otorgar una concesión minera en esas condiciones.[413]

352. Estos errores tampoco pueden ser subsanables. El Sr Palma explica que, desde el punto de vista técnico, no es posible corregir la línea auxiliar una vez que la solicitud ya fue presentada y únicamente se está a la espera de la valoración y resolución de la DG Minas. Esto es por dos razones principales: la primera es que es el propio solicitante (en este caso Minera Gavilán) quien

412 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 26.

413 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶¶ 26, 29.

decide y propone desde el primer momento qué terreno quiere explotar y con base en eso solicita la concesión con los datos aportados. La autoridad no puede ni tiene la facultad de modificar los datos aportados por el particular; la segunda es que, en dado caso de que se le permitiera al particular cambiar la distancia o el trazo de la línea auxiliar para enmendar errores de la solicitud, la consecuencia sería que todo el polígono de la concesión se desplazaría a un lugar diferente en el mapa.[414]

353. Permitir que un particular corrija o mueva alguno de estos tres elementos (punto de partida, línea auxiliar o punto 1 del perímetro) después de que la solicitud ya fue presentada y registrada, violaría el principio de "primero en tiempo, primero en derecho" que rige el procedimiento de otorgamiento de concesiones.[415] Como explica el Sr. Palma, en la práctica, esto equivaldría a permitir que alguien presente una solicitud con un terreno en el que queda "apartado" hasta que se resuelve la procedencia de la solicitud, para que luego se desplace a otra ubicación, guardando la misma prioridad en la "fila", afectando así a otros solicitantes que esperaban obtener una concesión sobre esos terrenos o generando incertidumbre al Estado.[416]

354. En consecuencia, y contrario a lo que señalan las Demandantes, la única razón por la que la DG Minas determinó que no era factible otorgar la concesión de Cerro Grande era porque existía una violación a la normativa técnica y al principio de "primero en tiempo, primero en derecho"; esto no es un error mínimo, porque un desfase de 2 kilómetros impediría definir la ubicación real del terreno en el mapa y generaría un riesgo real de que se invadieran o afectaran derechos de terceros o del Estado. Asimismo, no era un error subsanable porque modificar la línea auxiliar equivaldría a cambiar ilegalmente la ubicación del terreno apartado.[417]

414 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶¶ 29-31.

415 Ley Minera, Artículo 13. **R-0002**. ("Las concesiones de exploración y las asignaciones mineras seotorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento."). [Énfasis añadido]

416 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 30.

417 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶¶ 30-31.

b. Deficiencias técnicas de la Solicitud de Concesión Cerro Grande 2

355. Como se explicó anteriormente, el primer paso para poder otorgar una concesión, es ubicar el terreno en el mapa. Para esto, primero se tienen que ubicar con precisión las coordenadas geográficas del punto de partida, es decir, de la mojonera. La mojonera funciona como un tipo de "ancla" física en la superficie a partir del cual se proyecta y dibuja el polígono de la concesión. Si las coordenadas del punto de partida contienen un error, entonces todo el polígono se desplaza en el mapa, lo que impide definir la ubicación real del terreno.[418]

356. Para calcular las coordenadas exactas de la mojonera, la normativa aplicable permite utilizar diversa tecnología de medición, entre ellas sistemas de navegación por satélite (GPS). Sin embargo, cuando un solicitante de una concesión elige el método de GPS de translocalización, la norma establece reglas precisas a seguir: se deben usar dos receptores de alta precisión trabajando simultáneamente, colocando uno sobre la mojonera del terreno y enlazando obligatoriamente el otro a un punto de control geodésico oficial del INEGI. Este procedimiento es el único que permite corregir los márgenes de error de los satélites y validar la precisión de las coordenadas obtenidas para la mojonera.[419]

357. El Sr. Palma explica que, al revisar la solicitud de concesión de Cerro Grande 2, se descubrió que Minera Gavilán y su perito trataron de justificar la ubicación usando una "lectura autónoma de satélites" sin enlazarse a un punto oficial. Este método solo es válido si no existen puntos de control a menos de 50 kilómetros; sin embargo, en este caso existía el Punto de Control No. 5205 del INEGI a solo 3.8 kilómetros de distancia, insumo oficial que el perito de la empresa simplemente omitió.[420]

358. La lectura autónoma de satélites tiene una precisión muy baja, con un margen de error de 10 metros o más. En la cartografía minera, un margen de error así provoca que los límites del lote se desplacen decenas de metros, lo que genera el riesgo de invadir terrenos de terceros o del Estado.

---

418 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 36.

419 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 36.

420 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 37.

Además, como los yacimientos se explotan a profundidad indefinida, un desfase de metros puede significar la extracción no autorizada de volúmenes de mineral considerable.[421]

359. Adicionalmente, el Sr. Palma hace notar que este no fue el único error en esta solicitud, sino que también el perito contratado por Minera Gavilán no acudió físicamente al sitio a realizar los trabajos periciales, sino que copió y transcribió datos de expedientes antiguos elaborados por otros peritos para otras concesiones. Este tipo de trabajos periciales "de escritorio" carece de validez técnica, pues la esencia de dichos trabajos es acudir directamente al terreno y verificar su ubicación.[422]

360. Las Demandantes argumentan que estas omisiones son detalles menores (*de minimis*) y subsanables; sin embargo, como lo menciona el Sr. Palma en su testimonial, técnicamente no es posible corregir un trabajo pericial que nunca se realizó. La responsabilidad de realizar las mediciones de campo recae exclusivamente en el perito contratado por el particular, no en la autoridad minera.[423]

361. En consecuencia, se determinó que tampoco era factible otorgar la concesión de Cerro Grande 2 porque se violaron los requisitos técnicos de la Ley Minera, su Reglamento y el Manual aplicable. Estos no eran errores mínimos porque usar un método inexacto y omitir el punto oficial del INEGI desplaza los límites del lote por decenas de metros, poniendo en riesgo recursos del Estado y derechos de terceros. Considerando además que no se podía corregir estos datos ya que el perito omitió ir al terreno y copió datos de otros expedientes, lo cual técnicamente equivale a no haber presentado el trabajo pericial exigido por la ley.

6. El Estudio del INPI no tuvo ninguna relevancia para la Resolución de No Factibilidad

362. Las Demandantes sostienen con base en el Anexo C-804 que el estudio del INPI es la verdadera base de la Resolución de No Factibilidad.[424] Esto es incorrecto.

---

421 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 38.

422 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 39.

423 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 40.

424 Réplica, ¶¶ 542, 616, 677.

363. Como explicó el Sr. Palma, autor del correo electrónico presentado como Anexo C-804, las Demandantes malinterpretan el contenido del correo electrónico. El Sr. Palma explica que envió el Estudio INPI a la encargada del control documental dentro de la DG Minas para que fuera incluido al expediente de las concesiones, lo cual es una práctica común en la dependencia y no sugiere que haya sido la base definitiva de la Resolución de No Factibilidad.[425]

> En segundo lugar, me gustaría aclarar el contenido del correo electrónico de 8 de marzo de 2023, el cual consiste en una comunicación interna entre las áreas de la DG Minas. En específico, en dicho correo electrónico únicamente se envió el Estudio del INPI a la Sra. María Deifilia, entonces Directora de Control Documental de la DG Minas de la Secretaría de Economía, a fin de que, como responsable del resguardo documental, lo incorporara en el expediente correspondiente. La integración de todo documento recibido en los expedientes de la DG Minas es una actividad cotidiana y de obligaciones de control interno y transparencia.[426]

364. El Sr. Palma también aclaró que se incluyó el Estudio del INPI, así como el resto de los estudios preparados por autoridades ambientales en el expediente de las concesiones porque habían sido mencionados en la Resolución de No Factibilidad.[427] Esto no significaba que hubieran formado la base para la determinación de DG Minas.

> También preciso conforme a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ninguna consideración ambiental o social fue considerada como parte de la evaluación de la Secretaría de Economía para la determinación de factibilidad. En este sentido, la razón por la que se hizo mención a los estudios enviados por parte de diversos organismos de la SEMARNAT, es porque estos fueron presentados ante la DG Minas, y al ser recibidos oficialmente a través de la oficialía de partes, teníamos la obligación de integrarlos al expediente. Esto no quiere decir que la determinación de factibilidad se redujera a esos estudios.[428]

365. De hecho, la propia Resolución de No Factibilidad aclara que la base de dicha determinación son los elementos de hecho y derecho contenidos en los apartados A

---

425 Ley General de Archivos, Artículo 11: "Los sujetos obligados deberán: […] II. Establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos y llevar a cabo los procesos de gestión documental;" y "III. Integrar los documentos en expedientes;" **R-0186**. *Ver también*, LFPA, Artículo 54. Esta disposición señala que aún los informes u opiniones solicitados a otros órganos administrativos pueden ser obligatorios o facultativos, y vinculantes, o no. "Los informes u opiniones solicitados a otros órganos administrativos podrán ser obligatorios o facultativos, vinculantes o no. Salvo disposición legal en contrario, los informes y opiniones serán facultativos y no vinculantes al órgano que los solicitó y deberán incorporarse al expediente." **R-0013.**

426 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 48.

427 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 51.

428 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 47.

(Manifestaciones sobre "CERRO GRANDE"), B (Manifestaciones sobre "Cerro Grande 2") y C (Análisis de Factibilidad) de la Resolución de No Factibilidad, excluyendo el apartado en el que se mencionan los estudios ambientales y del INPI de la base de la determinación.

> Una vez analizados los procedimientos administrativos para el otorgamiento de la concesión minera de conformidad con el marco legal aplicable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13, 19, fracciones I, II y V y 20 de la Ley Minera, y 16 de su Reglamento, y con base en lo señalado en los apartados A, B y C de este oficio, esta autoridad, en cumplimiento de la ejecutoria dictada en fecha y al acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2022, dictada por ese H. Juez de Distrito, en el Amparo Indirecto con número de expediente 445/2015, hace de su atento conocimiento que existen elementos de hecho y de derecho para determinar que NO ES FACTIBLE la expedición de los títulos de concesión.[429] [Énfasis añadido]

366. Adicionalmente, la DG Minas confirmó que los elementos que tomó como base para la Resolución de No Factibilidad no incluían el Estudio del INPI en diversas ocasiones.

367. Por ejemplo, el 23 de marzo de 2023 el Sr. Palma envió una comunicación interna dirigida a la Jefa de Departamento de Dictaminación de la Unidad de Apoyo Jurídico (UAJ) de Economía enlistando los elementos que la DG Minas tomó como base de la Resolución de No Factibilidad. Esta comunicación aclara los elementos tomados en cuenta para cada una de las concesiones.

368. En el caso de la Concesión "CERRO GRANDE", el Sr. Palma aclaró que se tomó en cuenta: la (i) la solicitud de concesión minera presentada el 28 de octubre de 2002 y (ii) el informe de trabajo periciales. Para la concesión minera "CERRO GRANDE 2", aclaró que se tomó en cuenta: (i) la Solicitud de concesión minera presentada el 14 de julio de 2008, (ii) el informe de trabajos periciales y (iii) la ficha técnica del Punto de Control del INEGI.[430] No se hizo ninguna mención al Estudio del INPI porque no fue un elemento que la DG Minas tomara como base en la determinación contenida en la Resolución de No Factibilidad.

369. La misma explicación se presentó ante el Juzgado de Distrito encargado de dar seguimiento al cumplimiento de la Sentencia de la Suprema Corte. Incluso DG Minas remitió la totalidad de la

---

429 Resolución de No Factibilidad, p.16. **R-0099**.

430 Comunicación interna SE con explicación de la base de la Resolución de No Factibilidad, 23 de marzo de 2023. **REPM-001**.

documentación utilizada como base de la Resolución de No Factibilidad ante el Juzgado de Distrito, sin incluir el Estudio del INPI al no haber formado la base de esa determinación.[431]

7. No existen registros del supuesto borrador de resolución de factibilidad presentado por las Demandantes como Anexo C-930

370. Las Demandantes señalan que "officials within Economía prepared a draft oficio ruling that issuing the Concession titles was feasible in November 2022, before that position was reversed under Secretary Buenrostro in circumstances consistent with external direction".[432] El borrador fue presentado como Anexo C-930 y presenta serias inconsistencias que permiten sostener que el documento no fue elaborado ni transmitido por funcionarios de Economía.

371. El 12 de agosto de 2026, después de confirmar que el Anexo C-930 no se encuentra en los archivos de Economía y derivado de que las Demandantes presentaron información limitada y poco clara respecto del origen y contexto en el que obtuvieron el supuesto documento, la Demandada solicitó de buena fe a las Demandantes la presentación del documento en formato "nativo" con el objetivo de corroborar los comentarios intercambiados dentro del documento y los metadatos del mismo para ampliar las búsquedas dentro de Economía respecto del documento.[433] Sin embargo, las Demandantes se rehusaron.[434]

372. En consecuencia, el 17 de agosto México solicitó al Tribunal que le ordenara a las Demandantes exhibir el documento nativo correspondiente al Anexo C-930. El Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 8, en la cual ordenó a las Demandantes producir el anexo en su formato nativo, acompañado del correo electrónico por el que supuestamente Economía lo había transmitido a las Demandantes, así como información básica sobre el origen y elaboración del documento.[435]

---

431 Oficio de DG Minas al Segundo Juzgado de Distrito sobre elementos considerados para la Resolución de No Factibilidad, 24 de marzo de 2023. **REPM-0002**.

432 Réplica, ¶ 22, inciso h).

433 Correo electrónico de la Demandada, 12 de agosto de 2026. **R-0187**.

434 Correo electrónico de las Demandantes, 14 de agosto de 2026. **R-0188**.

435 Resolución Procesal No. 8, 26 de agosto de 2026, p.3.

> ("The Tribunal […] orders Claimants to disclose and produce, by August 31, 2026, the following information and documents, to the extent they exist and are in Claimants' possession, custody or control:

373. El 31 de agosto de 2026, las Demandantes presentaron una comunicación dirigida al Tribunal informando sobre la entrega de los documentos requeridos,[436] sin embargo estuvieron lejos de cumplir con las órdenes del Tribunal.

374. En su comunicación, las Demandantes reclamaron que el documento fue elaborado originalmente por la entonces titular de la Unidad de Apoyo Jurídico (*i.e.*, UAJ-Economía), Margarita Olivas Islas, y por el titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Efraín Alva Niño, bajo la gestión de la entonces Secretaria Tatiana Clouthier.[437] Asimismo, señalaron por primera vez dentro del arbitraje, que la Sra. Margarita Olivas habría compartido el documento a través de Whatsapp con el abogado de Minera Gorrión, Héctor Garza Cervera, a finales de 2022.[438]

375. La explicación proporcionada por las Demandantes es deficiente porque no identifican la fecha real en la que el documento fue supuestamente compartido, no produjeron el correo electrónico o comunicación por la que el documento fue supuestamente transmitido, y además las Demandantes eliminaron las propiedades (metadata) del archivo nativo del Anexo C-930 que porporcionaron —que de hechos ni siquiera corresponde a la versión original del documento supuestamente enviado por Economía—, impidiendo que la Demandada confirme la fecha de creación del documento original, sus autores y editores.

1. the Draft in its native format, with the accompanying e-mail by Economía;

2. the name(s) of the author(s) of the Draft;

3. the name of Economía's official who transmitted the Draft to Minera de Gorrión; and

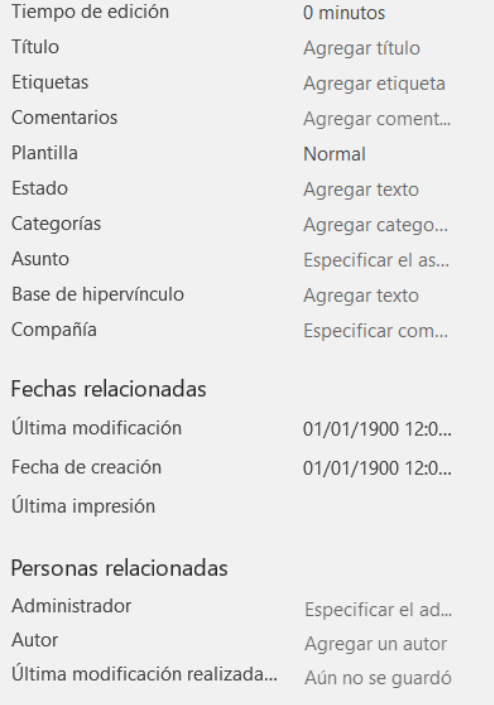
4. the date when the Draft was transmitted to Minera de Gorrión.")

436 Comunicación de las Demandantes al Tribunal, 31 de agosto de 2026. **R-0189**.

437 Comunicación de las Demandantes al Tribunal, 31 de agosto de 2026, ¶ 2. **R-0189**.

438 Comunicación de las Demandantes al Tribunal, 31 de agosto de 2026, ¶ 5. **R-0189**.

Imagen: Propiedades del Archivo Nativo producido por las Demandantes



Fuente: Archivo Nativo producido por las Demandantes el 31 de agosto de 2026. **R-0244**.

376. La Demandada sostiene firmemente que el Anexo C-930 carece de autenticidad y validez oficial porque existe una alta posibilidad de que sea falso o haya sido generado exclusivamente con motivo de este arbitraje. Algunos de los elementos que soportan esta conclusión son:

- El documento no fue localizado en los registros, archivos y expedientes de la DG Minas ni de la UAJ-Economía;
- El documento fue supuestamente elaborado y transmitido por individuos que ya no trabajaban en Economía en las fechas señaladas por las Demandantes;[439]
- Las Demandantes no proporcionaron el correo o comunicación por la que supuestamente fue transmitido el documento;
- La versión del archivo que aportaron las Demandantes no pudo haber sido suministrada por Olivas; de hecho, las Demandantes reconocen que dicho archivo no es el que alegan haber recibido y que presentaron como Anexo C-930, sino uno elaborado por Lammoglia y que nunca fue aprobado por Economía; y
- El documento presenta diversas inconsistencias de formato e identidad institucional.

439 Réplica, ¶ 650.

377. En este contexto, existen cinco aspectos fundamentales que la Demandada, respetuosamente, solicita al Tribunal preste especial atención:

378. *Primero*. El Sr. Palma, quien participó directamente en el análisis de la factibilidad de las Solicitudes de Concesión en el periodo 2022-2023, confirmó que "no recuerd[a] haber visto ese borrador en ningún momento durante mi participación en la revisión de las solicitudes de concesión para dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte".[440]

379. *Segundo*. Durante la fase de producción de documentos, tras recibir la Réplica con el Anexo C-930 y tras recibir la carta de las Demandantes con supuestas precisiones sobre el origen del documento, la Demandada realizó búsquedas exhaustivas en los archivos de Economía para localizar el documento y entender el contexto y los antecedentes en el que había supuestamente sido preparado el documento.[441] Estas búsquedas confirmaron que no existe registro del documento en los archivos oficiales de Economía.[442]

380. *Tercero*. La justificación presentada por las Demandantes en su carta de 31 de agosto de 2026 en relación con el supuesto origen y contexto del Anexo C-930 es contradictoria y poco plausible a la luz de la posición fáctica que presentaron en la Réplica.

381. En su carta de 31 de Agosto de 2026, las Demandantes afirman "Ms. Olivas and her team in the Legal Support Unit prepared the June 2022 Oficio and the draft February 2023 Oficio" porque "[a]t that time, Ms. Margarita Olivas Islas, the then-Head of the Legal Support Unit at Economía, was responsible for implementing the Supreme Court's decision, together with Mr. Efraín Alva Niño, the then-Head of Economía's Unit for the Coordination of Extractive Activities" y que "Mr. Garza nonetheless has confirmed that Ms. Olivas and her team prepared the draft Oficio on Economía's letterhead and shared it with him sometime in the second half of 2022, likely by WhatsApp on his firm-issued phone (to which he no longer has access)."[443] Esto no hace sentido

---

440 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 59.

441 *Ver* Oficio de la DGCJCI a la DG Minas del 29 de julio de 2026. **R-0190**. *Ver también* Oficio de la DGCJCI a la DG Minas del 1 de septiembre de 2026. **R-0191**. Ver también Oficio de la DGCJCI a la UAJ del 1 de septiembre de 2026. **R-0192**.

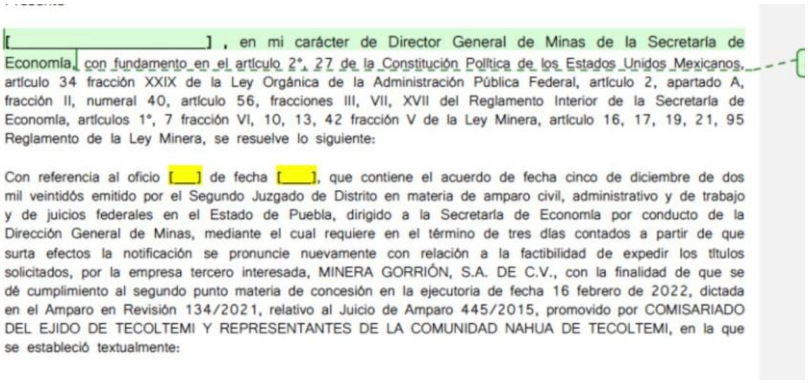
442 Oficio de respuesta de la DG Minas del 10 de agosto de 2026. **R-0193**. *Ver también* Oficio de respuesta de la DG Minas del 3 de septiembre de 2026. **R-0194**. *Ver también* Oficio de respuesta de la UAJ del 2 de septiembre de 2026. **R-0195**.

443 Comunicación de las Demandantes al Tribunal, 31 de agosto de 2026, ¶ 2. **R-0189**.

con el contenido del propio documento o con la descripción fáctica proporcionada en su Réplica y por el Sr. Santamaría, donde afirmaron que el documento había sido enviado por Economía en diciembre de 2022.[444]

382. Además, el Anexo C-930 hace referencia en su segundo párrafo al acuerdo del 5 de diciembre de 2022 emitido por el Juzgado 2º de Distrito. Lo que significa que el Anexo C-930 debió ser preparado necesariamente en esa fecha o en un momento posterior a la misma.

Imagen: El Anexo C-930 no pudo ser preparado antes del 5 de diciembre de 2022.



[_____] , en mi carácter de Director General de Minas de la Secretaría de Economía, con fundamento en el artículo 2°, 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 34 fracción XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 2, apartado A, fracción II, numeral 40, artículo 56, fracciones III, VII, XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, artículos 1°, 7 fracción VI, 10, 13, 42 fracción V de la Ley Minera, artículo 16, 17, 19, 21, 95 Reglamento de la Ley Minera, se resuelve lo siguiente:

Con referencia al oficio [___] de fecha [____], que contiene el acuerdo de fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós emitido por el Segundo Juzgado de Distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales en el Estado de Puebla, dirigido a la Secretaría de Economía por conducto de la Dirección General de Minas, mediante el cual requiere en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación se pronuncie nuevamente con relación a la factibilidad de expedir los títulos solicitados, por la empresa tercero interesada, MINERA GORRIÓN, S.A. DE C.V., con la finalidad de que se dé cumplimiento al segundo punto materia de concesión en la ejecutoria de fecha 16 febrero de 2022, dictada en el Amparo en Revisión 134/2021, relativo al Juicio de Amparo 445/2015, promovido por COMISARIADO DEL EJIDO DE TECOLTEMI Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD NAHUA DE TECOLTEMI, en la que se estableció textualmente:

Fuente: Tabla de Inconsistencias del Anexo C-930. **R-0243.**

383. De acuerdo con los registros oficiales de la Dirección General de Recursos Humanos de Economía, la Sra. Olivas Islas y el Sr. Alva Niño renunciaron a sus puestos en Economía el 12 y 11 de octubre de 2022, respectivamente, y dejaron de ejercer funciones desde el 15 de octubre de 2022, es decir, al menos dos meses antes de la supuesta preparación y envío del Anexo C-930 a las Demandantes.[445] En consecuencia, resulta imposible que hayan participado en la elaboración del documento o representaran a Economía en diciembre de 2022, cuando supuestamente compartieron el documento con las Demandantes.

384. *Cuarto*. El borrador presentado como Anexo C-930 presenta diversas inconsistencias que hacen dudar de su autenticidad. Para beneficio del Tribunal, *infra* se detallan las inconsistencias

444 Réplica, ¶ 650. ("This is confirmed by the fact that Economía was ready to approve the feasibility of the Concession titles in December 2022. Around that time, Economía circulated a draft oficio, which, given the novelty of the issues, it asked Minera Gorrión to comment on").

445 Renuncia de la Sra. Margarita del Rosario Olivas Islas, 12 de octubre de 2022. **R-0196**. Ver también, Renuncia del Sr. Efraín Alva Niño, 11 de octubre de 2022. **R-0197**.

evidentes entre el Anexo C-930, el oficio que contiene la Declaración de Insubsistencia y el Manual de Identidad Gráfica aplicable a la Administración Pública Federal, incluida Economía:

- **Membretado del Anexo C-930:** Durante 2022, el membretado oficial utilizado en los documentos oficiales del Gobierno Federal de México era una plantilla con diversos distintivos, entre ellos el logo de Economía en el lado superior izquierdo y la imagen de Ricardo Flores Magón en el lado inferior derecho. Si comparamos ambos archivos, el Tribunal podrá observar que el membretado no es el mismo, es decir, el del Anexo C-930 no corresponde al formato oficial que utilizaba Economía durante el año 2022.

Imagen: Anexo C-930 vis-á-vis Formato Institucional de Economía 2022. **R-0245**.

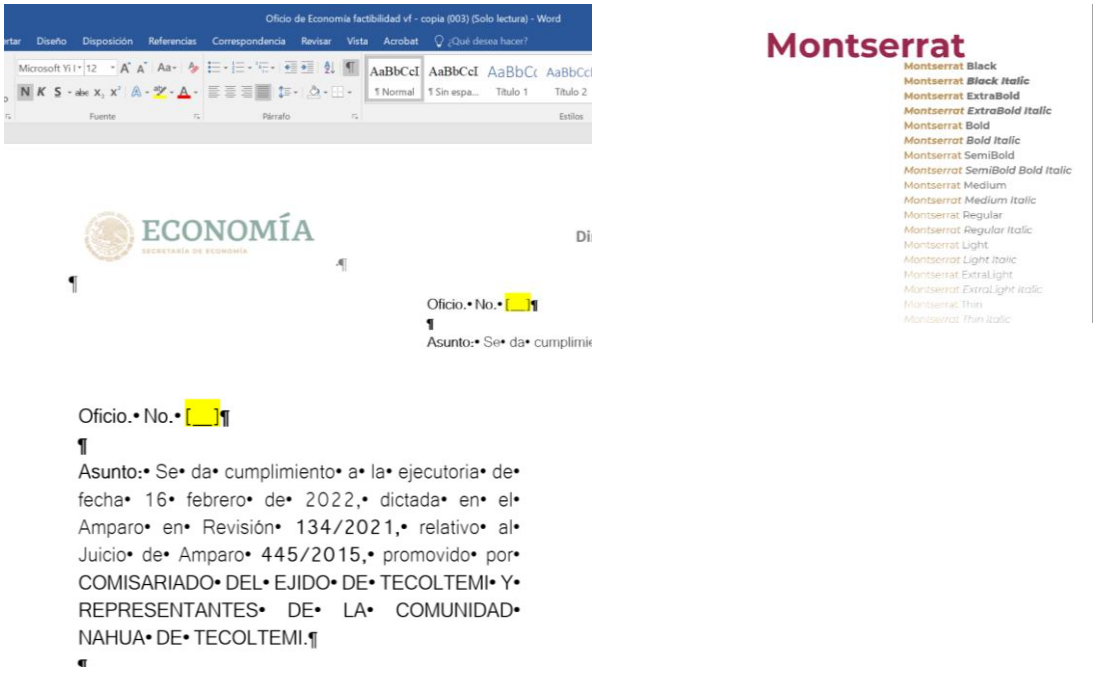


Fuente: Anexo **C-930**. Tabla de Inconsistencias del Anexo C-930. **R-0243**

- **Tipo de letra usada en el Anexo C-930:** De igual forma, por disposición oficial, el tipo de letra oficial utilizada en 2022 en comunicaciones oficiales del Gobierno Federal mexicano correspondía a la tipografía "Montserrat".[446] Si observamos el archivo en formato Word presentado por las Demandantes el 31 de agosto de 2026, el Tribunal podrá observar que la letra utilizada en el documento es "*Microsoft Yi Baiti"*.

[446] Manual de Identidad Gráfica 2018-2024, p. 40. **R-0198**.

Imagen: Tipografía del Anexo C-930 vis-á-vis Formato Institucional de Economía 2022.



Fuente: C-930. Manual de Identidad Gráfica 2018-2024 y **R-0243**.

- **Leyendas Institucionales:** El Anexo C-930 carece de las leyendas institucionales superiores obligatorias para las resoluciones y oficios emitidos por unidades administrativas de Economía, tales como “Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas”, “Dirección General de Minas” o “Dirección del Registro Público de Minería y Derechos Mineros”.

Imagen: Identidad Institucional del Anexo C-930 vis-á-vis Declaración de Insubsistencia.

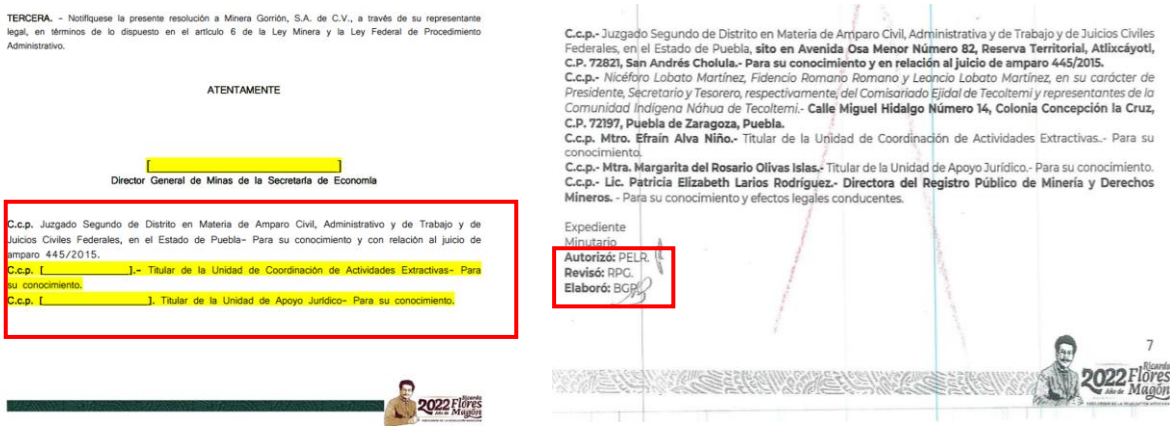


Fuente: C-930, C-0095 y **R-0243**.

- **Información sobre funcionarios públicos que elaboraron y revisaron el documento:** El Anexo C-930 no cuenta al calce con las iniciales de identificación del personal que redactó, revisó y autorizó el proyecto, las cuales constituyen un

elemento de control interno de uso general en documentos elaborados por la DG Minas.

Imagen: Información del Anexo C-930 vis-á-vis Declaración de Insubsistencia.



TERCERA. - Notifíquese la presente resolución a Minera Gorrión, S.A. de C.V., a través de su representante legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Minera y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ATENTAMENTE

[redacted]
Director General de Minas de la Secretaría de Economía

C.c.p. Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Civiles Federales, en el Estado de Puebla- Para su conocimiento y con relación al juicio de amparo 445/2015.
C.c.p. [redacted].- Titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas- Para su conocimiento.
C.c.p. [redacted]. Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico- Para su conocimiento.

C.c.p.- Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Civiles Federales, en el Estado de Puebla, **sito en Avenida Osa Menor Número 82, Reserva Territorial, Atlixcáyotl, C.P. 72821, San Andrés Cholula.- Para su conocimiento y en relación al juicio de amparo 445/2015.**
C.c.p.- *Nicéforo Lobato Martínez, Fidencio Romano Romano y Leoncio Lobato Martínez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal de Tecoltemi y representantes de la Comunidad Indígena Náhua de Tecoltemi.*- **Calle Miguel Hidalgo Número 14, Colonia Concepción la Cruz, C.P. 72197, Puebla de Zaragoza, Puebla.**
C.c.p. Mtro. Efraín Alva Niño.- Titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Mtra. Margarita del Rosario Olivas Islas.- Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Patricia Elizabeth Larios Rodríguez.- Directora del Registro Público de Minería y Derechos Mineros. - Para su conocimiento y efectos legales conducentes.

Expediente
Minutario
Autorizó: PELR.
Revisó: RPG.
Elaboró: BGP.

7

Fuente: C-930, C-0095 y **R-0243**.

- **Lenguaje utilizado en el Anexo C-930 y en la Declaración de Insubsistencia:** La redacción del documento emplea términos ajenos al lenguaje técnico y habitual de la DG Minas. Por ejemplo, utiliza el concepto "estudios periciales" en lugar del término reglamentario "trabajos periciales", e incluye dentro de los supuestos requisitos técnicos la entrega de "planos geológicos y de muestreo", los cuales no forman parte de los requisitos exigidos para las solicitudes de concesión minera conforme a la normatividad aplicable.[447]

385. *Quinto*, las Demandantes sugieren que la Sra. Margarita Olivas elaboró el Anexo C-930 en su calidad de titular de la UAJ-Economía, sin embargo, la UAJ-Economía no cuenta con facultades para emitir determinaciones en materia minera ni otorgar concesiones. La única unidad administrativa facultada para el otorgamiento de concesiones mineras es la DG Minas, unidad que no cuenta con ningún registro histórico sobre la elaboración, evaluación o aprobación del documento presentado por las Demandantes como Anexo C-930.[448]

386. Ante estas irregularidades, la Demandada manifiesta una grave preocupación sobre la autenticidad del Anexo C-930. La presentación de un documento con inconsistencias notorias relacionadas con su origen y elaboración, propiedades (metadatos) alterados y serias deficiencias en relación con las características de identidad institucional no es una cuestión menor.

447 Oficio de respuesta de la DG Minas del 10 de agosto de 2026. **R-0193**.

448 Oficio de respuesta UAJ-Economía del 2 de septiembre de 2026. **R-0195**.

387. En consecuencia, la Demandada solicita al Tribunal que desestime el Anexo C-930 y aplique inferencias negativas al momento de analizar la relevancia del mismo. De conformidad con el párrafo 16.20 de la Resolución Procesal No. 1 —el cual faculta al Tribunal para extraer inferencias adversas ante la falta de producción injustificada—, y el artículo 9 de las Reglas de la IBA sobre la Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional de 2020 (IBA Rules 2020), el Tribunal debe inferir que la resistencia de las Demandantes a presentar el documento nativo del Anexo C-930 tiene como propósito ocultar que dicho "borrador" jamás fue emitido por Economía, confirmando que la determinación de no factibilidad estuvo fundada estrictamente en razones técnicas, y que la narrativa política de las Demandantes carece de sustento y sentido.

D. Las Demandantes no agotaron los recursos legales disponibles en contra de la determinación de Economía

388. La Demandada sostiene que cualquier ilegalidad, arbitrariedad o violación de debido proceso derivada de los actos de Economía o SEMARNAT pudo haber sido revisada, y en su caso, subsanada ante cortes nacionales. Sin embargo, las propias Demandantes frustraron esta posibilidad, por un lado, al presentar recursos legales con argumentos que fueron descartados por las autoridades judiciales y por el otro, al omitir iniciar o al desistirse de los medios de defensa disponibles.

389. Las Demandantes pretenden indebidamente utilizar este arbitraje como una instancia de apelación adicional para revivir reclamaciones que: *(i)* ya fueron resueltas por la Suprema Corte, el Juzgado 2º de Distrito y el 2º Tribunal Colegiado; *(ii)* que precluyeron por la omisión de las Demandantes o *(iii)* a las que decidieron renunciar frente a cortes nacionales a pesar de existir medios de defensa disponibles.

390. Para analizar los medios de defensa disponibles es indispensable distinguir la naturaleza de los dos argumentos principales de las Demandantes en contra de los actos de Economía:

- El cuestionamiento de las Demandantes sobre si la DG Minas acató las órdenes que la Suprema Corte estableció en su sentencia.[449]
- La discusión de si la Resolución de No Factibilidad fue emitida legalmente.[450]

[449] Réplica, ¶¶ 643-657.

[450] Réplica, ¶¶ 630-633.

391. Respecto al primer punto, como confirman los Sres. Aguinaco, la controversia sobre si la DG Minas dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de amparo, quedo definitivamente resuelta en el mismo juicio de amparo. Tanto el Juzgado de Distrito como el Tribunal Colegiado confirmaron en dos ocasiones que la DG Minas cumplió con lo ordenado por la Suprema Corte, primero al haber dejado insubsistentes las concesiones y posteriormente, al emitir la Resolución de No Factibilidad.[451] No existía ningún medio de defensa adicional en contra del cumplimiento de Economía con la Sentencia de la Suprema Corte.

392. Sin embargo, cualquier ilegalidad o deficiencia de la Resolución de No Factibilidad podría haber sido impugnada por las Demandantes ante cortes nacionales. Al omitir interponer los recursos disponibles o desistirse de ellos, las Demandantes consintieron que los actos de Economía quedaran firmes y fueran definitivos, a pesar de sus supuestas irregularidades.

1. Las Demandantes tenían medios de impugnación disponibles en contra de la Resolución de No Factibilidad y decidieron abandonarlos

393. Las Demandantes no han refutado que existían al menos tres medios de impugnación disponibles para combatir las ilegalidades de la Resolución de No Factibilidad y, en caso de obtener una sentencia favorable, lograr que Economía corrigiera las deficiencias de su determinación. En concreto, los Sres. Aguinaco identifican los siguientes medios de defensa:

- Promover un Amparo Indirecto en contra de las supuestas violaciones al debido proceso o afectaciones a derechos sustantivos dentro del procedimiento de evaluación de las Solicitudes de Concesión.[452]
- Promover un Juicio de Nulidad en contra de las deficiencias legales en la Resolución de No Factibilidad relativas al debido proceso, derecho de audiencia, aplicación del artículo 17-A de la LFPA y aplicación de la Ley Minera y su Reglamento.[453]
- Promover un Amparo Directo en contra de una resolución desfavorable dentro del Juicio de Nulidad promovido por las Demandantes.[454]

394. En este sentido, para febrero de 2023, las Demandantes contaban con amplia oportunidad para impugnar cualquier ilegalidad de la Resolución de No Factibilidad o del procedimiento de

451 *Ver* Sección II.B *supra*.

452 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 244.

453 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 237.

454 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 245.

evaluación de las Solicitudes de Economía realizado por Economía, pero decidieron no continuarlos.

2. Las Demandantes pretenden que el Tribunal sustituya al TFJA y emita determinaciones sobre la legalidad de la Resolución de No Factibilidad

395. El 30 de marzo de 2023, Minera Gorrión y Minera Gavilán promovieron un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en contra de la Resolución de No Factibilidad. En su demanda, las empresas presentaron exactamente las mismas reclamaciones que las Demandantes presentan en este arbitraje. En esencia, sostuvieron (al igual que lo hace ahora su experto), que el juicio de amparo solo había versado sobre la omisión de la Consulta Indígena y no sobre la factibilidad de las concesiones, solicitando la anulación de dicha Resolución bajo los siguientes argumentos:

- Alegaron que la Resolución de No Factibilidad era ilegal porque la DG Minas limitó su análisis a las solicitudes originarias de 2002 y 2008, omitiendo evaluar las solicitudes de reducción de superficie y ajuste de perímetro presentadas ad cautelam el 15 de noviembre de 2022. Sostuvieron que, de haber tomado en cuenta estas nuevas solicitudes, la autoridad habría tenido que resolver a su favor.[455]
- Argumentaron que la Resolución de No Factibilidad carecía de fundamentación y motivación debido a que la DG Minas descalificó sus solicitudes originarias e informes periciales evaluando de manera errónea los datos técnicos y las referencias normativas del Manual de Servicios.[456]
- Señalaron que la Resolución de no Factibilidad violaba las reglas del procedimiento administrativo, pues la DG Minas no les notificó ni les dio la oportunidad de corregir o prevenir las supuestas fallas de sus solicitudes antes de negar la factibilidad, como lo prevé el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.[457]
- Sostuvieron que la Resolución de No Factibilidad constituía una revocación ilegal de un acto favorable previo. Afirmaron que Economía ya había ordenado realizar la Consulta Indígena y mantenido válido lo actuado en la Declaración de

[455] Demanda de Juicio de Nulidad, 30 de marzo de 2023, p. 5-6, 12-13, 16-19. **R-0101**. *Ver también,* Réplica, ¶ 619. Memorial, ¶ 420.

[456] Demanda de Juicio de Nulidad, 30 de marzo de 2023, pp. 38-41. **R-0101**. *Ver también,* Réplica, ¶¶ 625, 630, inciso b). Memorial, ¶¶ 426, 433-434.

[457] Demanda de Juicio de Nulidad, 30 de marzo de 2023, pp. 38-41. **R-0101**. *Ver también,* Réplica, ¶¶ 58, 630, inciso c). Memorial, ¶ 345.

Insubsistencia de 2022, lo que a su juicio significaba un reconocimiento implícito de factibilidad de las Concesiones.[458]

- Argumentaron que la DG Minas actuó de forma ilegal al negar la factibilidad basándose en estudios e informes de órganos externos como el INPI, CONABIO, IMTA e INECC. Según las empresas, estos informes no forman parte del procedimiento de la Ley Minera para evaluar la factibilidad y no podían sustituir la consulta previa a las comunidades.[459]
- Afirmaron que la Resolución de No Factibilidad violaba el principio de buena fe y las expectativas legítimas, argumentando que durante casi dos décadas la autoridad nunca cuestionó la validez técnica de las solicitudes e incluso defendió los títulos a lo largo de todo el juicio de amparo.[460]

396. En el Juicio de Nulidad Minera Gorrión y Minera Gavilán únicamente buscaban la nulidad de la Resolución de No Factibilidad y la suspensión de sus efectos para evitar que la DG Minas declarara los terrenos como libres.[461] Minera Gorrión y Minera Gavilán no solicitaron ninguna de las medidas de reparación que ahora pretenden obtener en este arbitraje —compensación, indemnización o pago de daños—. Por lo tanto, conforme a los términos del Artículo 9.21.3 del TIPAT, las Demandantes no estaban obligadas a desistirse de dicho recurso nacional para continuar con este procedimiento.

397. Tampoco hay evidencia de que el Juicio de Nulidad fuera fútil o se encontrara fuera del alcance de las Demandantes. Tanto los Sres. Aguinaco como el experto de las Demandantes coinciden en que el Juicio de Nulidad era un recurso idóneo y disponible en contra de la Resolución de No Factibilidad.[462] De hecho, las Demandantes habían recibido una suspensión definitiva y la determinación del Recurso de Reclamación en su favor. El Recurso de Reclamación confirmó que el Juicio de Nulidad era procedente y estaba disponible en contra de la Resolución de No Factibilidad.[463]

---

458 Demanda de Juicio de Nulidad, 30 de marzo de 2023, pp. 41-49. **R-0101**. *Ver también,* Réplica, ¶ 630, inciso f), 973. Memorial, ¶¶ 376-381.

459 Demanda de Juicio de Nulidad, 30 de marzo de 2023, pp. 55-64. **R-0101**. *Ver también,* Réplica, ¶¶ 851, 865-866. Memorial, ¶ 431.

460 Demanda de Juicio de Nulidad, 30 de marzo de 2023, pp. 64-70. **R-0101**. *Ver también,* Réplica, ¶¶ 630, incisos a), c) y f), 649. Memorial, ¶¶ 438-441.

461 Demanda de Juicio de Nulidad, 30 de marzo de 2023, pp. 9-10 (Pretensión) y p. 70 (Capítulo XI. Suspensión). **R-0101**.

462 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 238. Informe del Sr. Cossio, ¶ 230.

463 Resolución de la Segunda Sala Regional de Oriente del TFJA en el expediente 0026-2023-02-C-21-02-03-02-L, p. 11. **FMAB-0068**.

398. Los Sres. Aguinaco explican los potenciales escenarios que se hubieran producido con una sentencia favorable a las Demandantes en el Juicio de Nulidad:

> El escenario habría sido distinto si Minera Gorrión y Minera Gavilán hubieran continuado el juicio de nulidad y sus argumentos hubieran prosperado. En ese supuesto, el TFJA habría podido declarar la nulidad del Oficio de No Factibilidad y, dependiendo de la naturaleza de la ilegalidad identificada, determinar los efectos correspondientes. En particular, si se hubiera tratado de un vicio susceptible de subsanación, la DGM habría quedado obligada a emitir una nueva resolución en la que corrigiera la irregularidad advertida por el TFJA y volviera a pronunciarse sobre la factibilidad de expedir las concesiones.
>
> Una sentencia favorable en el juicio de nulidad no habría implicado, por sí misma, que las Demandantes tuvieran derecho a obtener nuevamente los títulos de concesión. Esa consecuencia habría dependido del alcance y los efectos concretos de la sentencia del TFJA. Lo relevante es que el juicio de nulidad ofrecía precisamente la vía para que las objeciones de legalidad que ahora formulan fueran examinadas por el órgano jurisdiccional competente y, de resultar fundadas, se corrigieran sus consecuencias. Fueron las propias empresas quienes, al desistirse del juicio, renunciaron a obtener ese pronunciamiento.[464] [Énfasis añadido]

399. En consecuencia, al abandonar el Juicio de Nulidad, las Demandantes renunciaron a una suspensión que las protegía en contra de los efectos de la Resolución de No Factibilidad y permitieron que la Resolución quedara firme y tuviera carácter definitivo, a pesar de las supuestas violaciones y deficiencias legales. Las Demandantes no pueden utilizar el arbitraje como una corte supranacional o alternativa para resolver sobre la legalidad de actos emitidos por una autoridad mexicana en el ejercicio de sus poderes regulatorios, sin permitir antes que las propias cortes nacionales competentes ejerzan sus funciones de control de legalidad.

E. Las Demandantes descontextualizan la relación de Economía con el Proyecto Piloto de la UNECE

400. Las Demandantes sostienen, por un lado, que Economía fue responsable de la selección de su Proyecto para participar en el programa piloto de la UNECE y, por el otro, que dicha selección obedeció a los supuestos méritos excepcionales del Proyecto.[465] Ninguna de esas afirmaciones es correcta.

401. *Primero*, el Proyecto Piloto no fue desarrollado por Economía ni buscaba reconocer a las empresas participantes como ejemplos en materia de responsabilidad social o ambiental. En realidad, se trataba de un proyecto impulsado por UNECE a través del Sr. Ulises Uri, cuyo alcance

---

464 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 239-240.

465 Réplica, ¶¶ 43, 140, 166, 171, 172, 544-562.

era "analizar cuantitativamente y cualitativamente los aspectos técnicos, económicos, sociales, normativos y ambientales que están involucrados en el desarrollo de los proyectos mineros […] encaminados a la identificación de los retos y oportunidades, [para] identificar de manera objetiva y efectiva las acciones que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 de la ONU".[466]

402. En otras palabras, la UNECE buscaba analizar las prácticas de las empresas mineras mexicanas para identificar áreas de oportunidad y ayudarlas a incorporar acciones que contribuyeran a cumplir con los objetivos del Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 de la ONU. A lo mucho, el Programa Piloto buscaba ayudar a las empresas mineras interesadas en desarrollar proyectos en México a que establecieran las mejores prácticas en materia de responsabilidad social y ambiental, y el hecho de que fueran seleccionadas para la prueba piloto significaba de alguna manera que sus prácticas eran perfectibles o nulas.

403. La Secretaría de Economía no participó en la selección del proyecto de los Demandantes; De hecho, el Plan Proyecto señala que México era responsable únicamente de proporcionar información sobre los proyectos candidato elegidos por la UNECE. [467] Además, correspondía a UNECE, analizar y organizar la información proporcionada por Economía, así como por la propia empresa interesada en el Proyecto Piloto, coordinar su revisión con los grupos de expertos de la ONU y elaborar el documento final.[468]

404. *Segundo*, la evidencia presentada por las Demandantes para sostener el supuesto reconocimiento de las buenas prácticas de Almaden por Economía a través de su incorporación en el Proyecto Minero en realidad corresponden a comunicaciones enviadas por el Sr. Ulises Neri, representante de la UNECE, y quien no actuaba en representación de Economía.[469]

---

466 UNECE, Plan de Proyecto – Prueba Piloto Minas, País: México, pp.1, 3. **Anexo C-805**. ("La misión principal de la CEPAL en el área de recursos naturales es fortalecer la capacidad institucional de los países de la región para mejorar la gobernanza, políticas, gestión y uso de los recursos naturales y de los servicios asociados para favorecer el cambio estructural progresivo con igualdad y sostenibilidad social, económica y ambiental").

467 UNECE, Plan de Proyecto – Prueba Piloto Minas, País: México, pp.7-8. **C-0805**.

468 UNECE, Plan de Proyecto – Prueba Piloto Minas, País: México, p. 7. **C-0805**.

469 Véase Memorial de Demanda, ¶ 392 y Réplica, ¶ 544.

405. La Demandante atribuye a la Sra. Tatiana Clouthier que ella "publicly championed the Pilot Project, emphasizing its importance in shaping the future of mining in Mexico"[470] para lo que cita una declaración de la Sra. Clouthier hablando, por un lado, del programa piloto, y por el otro, de la minería en México.[471] Sin embargo, el Anexo **C-805** reafirma que el programa buscaba, primero identificar empresas mineras en México que buscaran establecer un proyecto en México, evaluar y calificar sus prácticas empresariales y ayudarlas a implementar mejores prácticas en materia social y ambiental para emitir un informe con los resultados de la aplicación del Programa Piloto.[472] El Programa Piloto no era un sistema de premiación o reconocimiento para empresas con buenas prácticas, por el contrario, buscaba mejorar las prácticas empresariales y la UNECE identificó a Almaden como una empresa que podía beneficiarse de la implementación de la metodología de la UNECE para mejorar sus prácticas empresariales.

406. En ese mismo sentido, de los documentos aportados por los propios Demandantes, así como de la documentación del programa, se desprende que la UNECE seleccionó tres proyectos piloto con el propósito de aplicar su marco metodológico en materia de mejores prácticas mineras, evaluar el funcionamiento de su metodología en proyectos específicos y generar estándares de mejores prácticas que pudieran ser aplicables a la industria minera mexicana.

- La UNECE aclaró que "These pilot studies provide insights for tailoring URNMS for Mexico and the entire Latin American región" y que el establecimiento de un ICE-SRM permitiría avanzar hacia patrones de aprovechamiento sostenible de los recursos y reducir los conflictos sociales.[473]

- La Dirección General de Desarrollo Minero, al explicar que el programa buscaba analizar los proyectos mineros conforme a los estándares UNFC y UNRMS para identificar retos y

---

470 Réplica, ¶544.

471 La Sra. Clouthier señaló que "[e]s importante hablar que hemos firmado un convenio con la ONU para hacer tres prototipos de investigación y estudios, para poder llevar una coordinación y un respeto al medio ambiente, a la comunidad y al desarrollo armónico de los mismos[…]" así reforzando que, lejos de elegir al programa por sus excelentes prácticas, se eligió como parte de un desarrollo a futuro. Este mismo lenguaje trata de tergiversarse, sin éxito, en el mismo escrito de la Demandante. *Véase* **Anexo C-371** y Réplica, ¶¶ 540-550.

472 UNECE, Plan de Proyecto – Prueba Piloto Minas, País: México, p. 1. **C-805**.

473 UNECE, *Countries are committing to implementation of the United Nations Resource Management System,* 24 de septiembre de 2021, **R-0199**.

oportunidades, así como definir estrategias que contribuyeran al cumplimiento de la Agenda 2030.[474]

407. En otras palabras, el programa no tenía por objeto reconocer proyectos que ya constituyeran referentes de minería responsable, sino aplicar metodologías en desarrollo para evaluar su funcionamiento, identificar áreas de oportunidad y perfeccionar los estándares propuestos por la ONU. Los propios Anexos C-806**[475]** y C-809**[476]** describen el programa en esos términos, contrario a las descripciones que les atribuyen las Demandantes.

408. El Director Ejecutivo de la UNECE explicó en sus comunicaciones que "fueron elegidas tres operaciones mineras que se ubican en diferentes etapas, pero que comparten la extracción de oro y plata y que tienen sede en Canadá"; que "las tres operaciones aplicarán los estándares y metodologías para una minería sostenible" y que el propósito de observar operaciones en distintas etapas era "detectar las necesidades y retos que se van suscitando". [477]

409. La finalidad del programa y los criterios de selección son incompatibles con el argumento de los Demandantes. Si el proyecto Almaden hubiera constituido un *"*gold standard for responsible and sustainable mining", no habría sido necesario someterlo a un programa piloto diseñado precisamente para aplicar metodologías que permitieran identificar retos en materia de sostenibilidad y perfeccionar sus prácticas corporativas.

---

474 La Dirección General de Desarrollo Minero, en el Diagnóstico del 2do Semestre 2022, *Empresas Mineras Mexicanas con Capital Extranjero en la Industria Minero Metalúrgica del País,* 2023, señaló: "que es un programa cuyo objetivo es: "analizar cuantitativa y cualitativamente los principales elementos que están involucrados en el desarrollo de los proyectos mineros en toda su cadena de valor, desde la exploración, pasando […] bajo los estándares de la UNFC (United Nations Framework Classification) y del UNRMS (United Nations Resources Management System) encaminados a la identificación de los retos y oportunidades que permitan […] identificar de manera objetiva y efectiva las acciones que permitan al sector llevar a cabo acciones o definir estrategias que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030." **R-0200**.

475 Anexo que reconoce como objetivo principal del programa "[a]pply and test the UNRMS based on the UNFC.", p.4.

476 Anexo que señala que se "busca destacar la oportunidad que ofrecen las Industrias Extractivas para establecer acciones objetivas y efectivas hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU mediante diversas acciones tales como la aplicación de estándares cómo lo son los de la UNFC y la UNRMS", p.1.

477 Business and Human Rights Centre, *México: País es seleccionado para proyecto piloto de minería sostenible en la ONU*, 21 de octubre de 2022, **R-0204**.

410. De hecho, los Anexos de 2021 **C-370**[478] y de 2022 **C-805**[479] confirman expresamente que los proyectos fueron seleccionados por su potencial para aplicar la metodología del programa piloto, no porque ya representaran un estándar acabado de excelencia en minería responsable.

411. Sencillamente, los Demandantes pretenden atribuir al programa piloto un significado que la documentación no le otorga. Ninguno de los documentos describe la participación de Almaden como una certificación de excelencia o como un reconocimiento de que el proyecto constituyera un "gold standard for responsible and sustainable mining". Esa conclusión es incompatible tanto con la finalidad del programa, con la documentación disponible, y con los mismos criterios empleados para la selección de los proyectos.

F. Las Demandantes no cumplieron con los requerimientos legales y técnicos para comprobar que su Proyecto era ambientalmente viable

412. Las Demandantes han señalado en su Memorial de Demanda[480] y Réplica[481] que la negativa de la MIA del Proyecto Ixtaca tiene su origen en una campaña política adoptada por el expresidente López Obrador a partir de 2018, ignorando deliberadamente las cuestiones técnicas de prevención y protección ambiental que realmente llevaron a la DGIRA a ese resultado. Las Demandantes son omisas en señalar que su Proyecto no cumplía con los estándares de cumplimiento normativo para obtener la AIA requerida.

1. Las Demandantes no han refutado que la Negativa de la MIA derivó de deficiencias técnicas y ambientales

413. Antes de iniciar el análisis de las cuestiones del PEIA que culminaron en la Resolución negativa de la MIA, es importante contextualizar que la EIA es un instrumento de política pública

---

478 El Anexo señala en su página 1 que "[l]a visita representó una oportunidad para conocer de manera directa los aspectos técnicos, económicos, legales, sociales, culturales, indígenas y ambientales del proyecto, de los cuales se destacan los principales aspectos clave para ser considerado un Proyecto candidato para la aplicación de la metodología UNFC-UNRMS" [Énfasis añadido].

479 El anexo señala que el programa piloto se realiza "considerando una muestra de unidades mineras representativas en México", y que el análisis por medio de estándares como la UNFC y la UNRMS "podrían implicar una mejora en la gobernanza en la administración de recursos y su correspondiente repercusión en la adaptación de la política pública y regulatoria hacia el desarrollo sostenible integral." [Énfasis añadido], pp. 4-5.

480 Memorial de Demanda, ¶ 268.

481 Réplica, ¶ 272.

ambiental de carácter eminentemente preventivo[482] que rige al PEIA para determinar la viabilidad de obras y actividades sujetas a la autorización de la autoridad (SEMARNAT) conforme a la LGEEPA y demás disposiciones correspondientes.

414. En ese sentido, los servidores públicos están obligados a verificar que el solicitante que busque realizar obras o actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente prevenga, minimice o repare los daños que cause, así como prevenir las causas que los generen.[483] Lo anterior acredita la existencia e importancia de los Principios de Precaución y Prevención existentes en la propia naturaleza de la LGEEPA y los derechos que se buscan proteger.

415. Existen diferencias entre el Principio de Prevención y el Principio Precautorio.[484] El precautorio se actualiza cuando los riesgos son inciertos pero potencialmente graves,[485] y el principio de prevención opera cuando los riesgos son conocidos y se adoptan medidas para prevenir, compensar y mitigar los efectos de los impactos ambientales dentro de una región ecológica. Esa diferencia es importante porque en materia ambiental la incertidumbre científica es

---

482 "La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos", Artículo 15, fracción VI, LGEEPA. **C-0156.** Como lo indica el Profesor Viñuales, la EIA es una evaluación en materia de medio ambiente que se realiza de manera previa a la autorización de cualquier actividad que pueda tener impactos adversos significativos sobre el mismo. Este tipo de herramientas permite que el respeto y protección al medio ambiente se convierta en un recuerdo, y no solo en una esperanza. Ver Pierre-Marie Dupuy y Jorge E. Viñuales, "International Environmental Law", Cambridge, 2nd Edition, 2018, pp. xvi, 78-80. **RL-0209.** En concordancia con el compromiso internacional de la Demandada de "asegurar que sus leyes y políticas ambientales prevean y alienten altos niveles de protección ambiental la EIA sirve para verificar que las obras o proyectos que se pretendan realizar cumplan con altos estándares de protección ambiental. Ver Capítulo 20 "Medio Ambiente", Artículo 20.3, TIPAT. **RL-0156.**

483 Artículos 15, fracciones IV y VI, 28 y 30, LGEEPA. **C-0156**. Es importante notar que la protección ambiental es compartida, en tanto "[l]as autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico". Artículo 15, fracción III, LGEEPA. **C-0156.**

484 Réplica, ¶¶ 351 y 352.

485 Principio 15 (Precautorio), Declaración de Río sobre el Medio Ambiente Humano (1992). **RL-0027.** La Corte Internacional de Justicia determinó que el principio precautorio es uno de los principios guía para la interpretación y aplicación de la normativa legal aplicable; en este sentido, sostuvo que "where there are plausible indications of potential risks, a State would not meet its obligation of due diligence if it disregarded those risks […] under the duty to prevent significant harm to the environment". Ver International Court of Justice, Advisory Opinion on Obligations of States in Respect of Climate Change, 23 July 2025, ¶¶ 161, 294. **RL-0215.** Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño "en casos donde haya indicadores plausibles [de] que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica". Opinión Consultiva OC-23/17 emitida el 15 de noviembre de 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¶ 180. **RL-0130**.

la constante y lo que sucede con mayor frecuencia, por lo que, el Principio Precautorio acepta esa incertidumbre y actúa por esa razón.

416. La relevancia del Principio Precautorio en materia ambiental permite la pauta interpretativa ante las limitaciones de la ciencia y evidencia científica para establecer con absoluta certeza los riesgos en materia de impacto ambiental. En el caso de las autoridades ambientales, implica el deber de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades que son riesgosas para el medio ambiente.

417. En este sentido, debe procurarse una solución *ex ante*, evitando el daño, en lugar de optar por remedios como una solución *ex post* (*e.g.* indemnizando), lo que se traduce en la esencia de una EIA para cualquier actividad, obra o proyecto que produzca o pueda producir un impacto significativo en el medio ambiente, sujeta a la resolución de una autoridad competente.

a. La evaluación de la MIA del Proyecto Ixtaca implicaba la valoración de ciertos impactos ambientales

418. Como ha señalado el experto de las Demandantes,[486] la MIA es el "documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo[487] y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo".[488]

419. En ese sentido, para la identificación y valoración de dichos impactos ambientales, la DGIRA debe tomar en cuenta y verificar el cumplimiento de diversos ordenamientos (LGEEPA, Reglamento LGEEPA, NOMs, Programas de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico del Territorio, etc.), [489] *i.e.*, la autoridad valora tanto cuestiones legales como cuestiones técnicas ambientales, tal como se ve en la siguiente imagen:

---

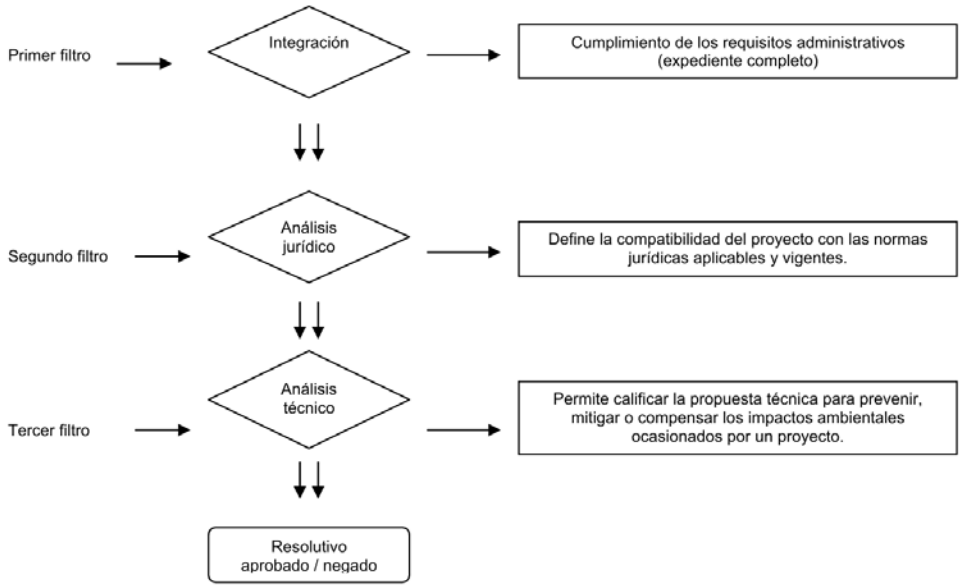
486 Primer Informe Sr. Limón, ¶ 16.

487 El Impacto Ambiental Significativo o relevante es "[a]quel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales". Artículo 3, fracción IX, Reglamento LGEEPA. **C-0166.**

488 Artículo 3, fracción XXI, LGEEPA. **C-0156.**

489 Artículo 35, LGEEPA. **C-0156.**

Imagen: Filtros de evaluación de la MIA



Fuente: Guía MIA-R 2010, p. 6. **MLA-0003**

420. Específicamente y tal como se señaló en el Memorial de Contestación,[490] para el caso de MIAs regionales (como la del Proyecto Ixtaca),[491] la solicitud debe incluir: *i)* descripción de las obras o actividades y, de ser el caso, de los programas o planes parciales de desarrollo,[492] *ii)* descripción del SAR,[493] *iii)* identificar, describir y evaluar los impactos ambientales,

490 Memorial de Contestación, ¶ 73.

491 Existen MIA Particulares y MIA Regionales, las segundas se presentan cuando el Proyecto se trate de *i)* parques industriales y acuícolas, carreteras, vías férreas, proyectos de generación de energía nuclear, o cualquier proyecto que altere cuencas hidrológicas; *ii)* obras o actividades que se encuentren dentro de un plan o programa de parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico; *iii)* obras o actividades que se realicen en una región ecológica determinada, y *iv)* proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que, por su interacción con diversos componentes ambientales regionales, provoquen impactos acumulativos, sinérgicos o residuales en los ecosistemas. En los demás casos, se presentan MIAs particulares. Artículo 11, Reglamento LGEEPA. **C-0166.**

492 Artículo 13, fracción III, Reglamento LGEEPA. **C-0166.**

493 Artículo 13, fracción IV, Reglamento LGEEPA. **C-0166.**

acumulativos[494] y residuales[495] del SAR,[496] *iv)* establecer estrategias para la prevención y mitigación de los impactos ambientales, acumulativos y residuales del SAR,[497] *v)* realizar pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas,[498] y *vi)* identificar los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan los resultados de la MIA.[499]

421. Todos los requisitos mencionados se materializan en la práctica como capítulos específicos que debe contener toda MIA, incluida la del Proyecto Ixtaca, pero, como se verá, Minera Gorrión no cumplió a cabalidad dichos requisitos, lo que culminó en la negativa de su AIA.

b. El alcance del Área de Influencia del Proyecto planteado en la MIA no contempló los daños a otras comunidades

422. Para el correcto cumplimiento de los requisitos anteriores y de la valoración de dichos impactos, es fundamental partir de la identificación del SAR y el Área de Influencia del Proyecto en la MIA.[500] Si bien ni la LGEEPA ni su Reglamento señalan concretamente qué es lo que debe entenderse por dichos conceptos, podemos encontrar su definición en las guías publicadas por SEMARNAT, mismas que sirven para la presentación de las MIAs regionales y otros instrumentos de impacto ambiental (*e.g.* Estudios de Riesgo).[501]

423. Por un lado, la Guía para la Elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional de 2010 (Guía MIA-R 2010), vigente al momento de presentación de la MIA del Proyecto Ixtaca, señala que delimitar el SAR equivale a definir "los límites del o de los ecosistemas presentes en el área donde va a establecerse el proyecto",[502] es decir, identificar el SAR significa

---

494 El **Impacto Ambiental Acumulativo** se define como el "efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente". Artículo 3, fracción VII, Reglamento LGEEPA. **C-0166.**

495 El **Impacto Ambiental Residual** es aquel "impacto que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación". Artículo 3, fracción X, Reglamento LGEEPA. **C-0166.**

496 Artículo 13, fracción V, Reglamento LGEEPA. **C-0166.**

497 Artículo 13, fracción VI, Reglamento LGEEPA. **C-0166.**

498 Artículo 13, fracción VII, Reglamento LGEEPA. **C-0166.**

499 Artículo 13, fracción VIII, Reglamento LGEEPA. **C-0166.**

500 Guía para la MIA-R, SEMARNAT, 2010, p 22. **MLA-0003**.

501 Artículos 4 y 9, Reglamento LGEEPA. **C-0166.**

502 Guía para la MIA-R, SEMARNAT, 2010, p. 19. **MLA-0003**.

determinar el "estado cero" o el "estado actual" del conjunto de elementos bióticos y abióticos que conforman la región[503] antes del desarrollo del Proyecto. El SAR es entonces "la unidad geográfica de referencia para la toma de decisiones en materia de evaluación de impacto ambiental".[504]

424. Por otro lado, el Área de Influencia debe entenderse como el "espacio físico asociado al alcance máximo de los impactos directos e indirectos ocasionados por el proyecto en el sistema ambiental o región, y que alterará algún elemento ambiental",[505] es decir, se refiere al espacio geográfico que se vería ambientalmente trastocado debido al proyecto.

425. Para la delimitación del Área de Influencia, la autoridad recomienda al solicitante: *i)* hacer un análisis de las áreas de influencia directa e indirecta (sin definir qué se debe entender por cada uno de ellos); *ii)* identificar las áreas y épocas sensibles, de riesgos y de peligro, *iii)* identificar efectos significativos que potencialmente se pueden presentar más allá del Área de Influencia Directa del proyecto, e *iv)* identificar el periodo temporal en el que el proyecto pudiera afectar espacios geográficos de manera acumulativa, permanente o como una manifestación tardía del impacto.[506] Además, se debe precisar a detalle la metodología que se utilizó para definir el Área de Influencia del proyecto.[507]

426. Lo anterior significa que la delimitación tanto del SAR como del Área de Influencia se realiza unilateralmente por el promovente dependiendo de las características del Proyecto y, a partir de dichas delimitaciones geográficas, la DGIRA realiza su EIA partiendo del supuesto de que la información, valoración y delimitación de las diversas áreas señaladas previamente fueron presentadas de buena fe por el solicitante y la información presentada es verídica.

427. La correcta identificación de ambos conceptos es sumamente importante pues, por ejemplo, en el caso de que el solicitante identifique por SAR únicamente una delimitación del Área de Influencia o presente una propuesta alejada de lo que la autoridad establece en su Guía, puede

---

503 La **región** se refiere al "espacio geográfico ambientalmente homogéneo, resultado de la interacción de sus diversos componentes (bióticos y abióticos), cuya delimitación deriva de la uniformidad y continuidad de los mismos". Guía para la MIA-R, SEMARNAT, 2010, p. 51. **MLA-0003**.

504 Guía para la MIA-R, SEMARNAT, 2010, p. 19. **MLA-0003**.

505 Guía para la MIA-R, SEMARNAT, 2010. **MLA-0003**.

506 Guía para la MIA-R, SEMARNAT, 2010, p. 23. **MLA-0003**.

507 Guía para la MIA-R, SEMARNAT, 2010, p. 23. **MLA-0003**.

provocar no autorizar el proyecto en tanto los otros capítulos de la MIA podrían partir de una base errónea y, en consecuencia, tener valoraciones incorrectas de impacto ambiental.[508]

428. No obstante, en su MIA las Demandantes definieron dos términos: *i)* Área del Proyecto como el "espacio donde se construirán las obras y se instalará la infraestructura propia del proyecto" y *ii)* Área de Influencia como "[e]l espacio físico asociado al alcance máximo de los impactos directos e indirectos ocasionados por el proyecto (Ixtaca) en el SAR o región".[509] Si bien la definición de Área de Influencia de las Demandantes parece ir acorde a la que determina la Guía de la SEMARNAT, es importante destacar que *i)* varios de los cálculos y valoraciones de impacto ambiental de las Demandantes partieron del concepto de Área del Proyecto —y no de Área de Influencia— y *ii)* las Demandantes ocuparon el concepto de Área de Influencia muchas de las veces solo para el impacto *social*, tal como se explicará más adelante.

429. Las Demandantes identificaron en su MIA un Área de Proyecto de 1,044.02 Ha,[510] señalando que 466 Ha (44.64%) serían ocupadas por infraestructura y el espacio restante como "espacios libres, para protección de las instalaciones y seguridad de los procesos, así como caminos".[511] Asimismo, Minera Gorrión delimitó el SAR con la unión de dos microcuencas: Atexquilla Caupazo y Santa María Zotoltepec, abarcando una superficie de 13,852.04 Ha.[512] Según la MIA de Minera Gorrión, ambos conceptos se verían geográficamente de la siguiente manera:

---

508 Guía para la MIA-R, SEMARNAT, 2010, p. 20. **MLA-0003**.

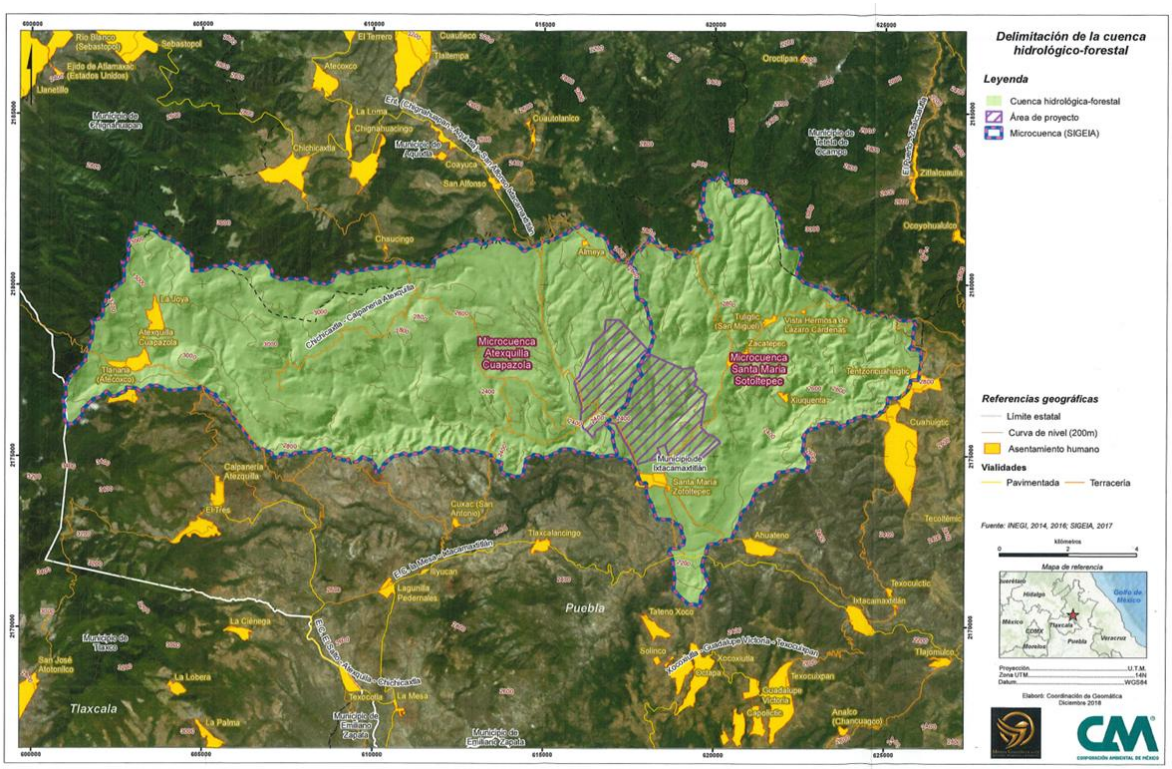
509 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, pp. IV-160 y IV-161. **C-0262.**

510 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, p. 39 (p. II-9). **C-0262.**

511 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, p. 35 (p. II-5). **C-0262.**

512 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, pp. 46 (p. II-16), 124 (p. IV-7). **C-0262.**

Imagen: Ubicación del SAR y el Área del Proyecto



Fuente: MIA del Proyecto Ixtaca (p. IV-10). **C-0262.**

430. Según la imagen anterior, el SAR en el que se desarrollaría el Proyecto Ixtaca cubriría diversos asentamientos humanos —no solo indígenas—, entre ellos a la comunidad de Santa María Zotoltepec, Zacatepec y Tuligtic (San Miguel), dejando fuera a la comunidad de Tecoltemic.

431. Es importante resaltar que durante el PEIA la autoridad valora en primer término el impacto ambiental que se pudiera causar por el desarrollo de los proyectos, pero también las implicaciones que tales impactos pudieran tener sobre las poblaciones cercanas al Proyecto, independientemente de si estas son indígenas, ejidales o propiedad privada, en tanto el derecho a un medio ambiente sano es reconocido a favor de todas las personas, independientemente del tipo propiedad que tengan sobre los terrenos o su auto adscripción étnica.

432. En ese sentido, durante el PEIA del Proyecto Ixtaca, la DGIRA valoró no solo los daños ambientales *per se*, sino también los daños ambientales que se le pudieran causar a las comunidades indígenas y a los diversos asentamientos humanos que existieran no solo dentro del Área de Influencia del Proyecto sino también dentro del SAR.

433. Además, es importante destacar que, continuando con la práctica de dejar de lado las preocupaciones de Tecoltemic, Minera Gorrión presentó su MIA con base en dos reducciones de Concesiones, refiriendo que estas habían sido otorgadas por Economía—aunque de hecho fueron revocadas por una autoridad judicial en 2018 como resultado de la Queja 184/2017—.[513]Esto demuestra que las Demandantes tergiversaron información clave de su proyecto, presentando su MIA con base en títulos de concesión que ni siquiera estaban vigentes para el momento de presentación de la MIA y mucho menos de su resolución.

434. Si bien una concesión no es un requisito expreso en la LGEEPA ni su Reglamento, la información relacionada con una concesión es imprescindible para la realización de actividades de explotación y que, por tanto, el solicitante debe contar con información verídica al momento de presentación de la MIA.

c. La Reunión Pública de Información no vulneró los derechos de las Demandantes o las comunidades

435. En su Réplica las Demandantes aclaran que "Minera Gorrión consented" el primer diferimiento y que por ello "take no issue with the first postponement",[514] manteniendo su inconformidad únicamente respecto de la reprogramación de la RPI a causa del cambio de titular en la SEMARNAT.

436. Las Demandantes señalan que la reprogramación es "misconceived" porque *i)* la SEMARNAT anunció la reprogramación de la Reunión Pública de Información (RPI) un día antes de su realización cuando, aparentemente funcionarios de la SEMARNAT ya habían llegado al área sin conocimiento de la cancelación;[515] *ii)* según la experiencia del Sr. Limón como ex funcionario de la SEMARNAT, el cambio de titular "no altera la capacidad institucional ni la continuidad

513 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, p. 15 (página I – 4). **C-0262.** Memorial de Contestación, ¶¶ 375-378. *Ver también* Acuerdo del 2° Juzgado de Distrito, 14 de diciembre de 2018, p. 4. **R-0095**. Dirección General de Minas, Oficio No. 610.23714.2018, 19 de diciembre de 2018, pp. 3-4. **R-0096.**

514 Réplica, ¶ 307.

515 Réplica, ¶ 309.

operativa de la SEMARNAT",[516] y *iii)* según las Demandantes, fue la presión de las ONGs la que realmente propició la reprogramación de la RPI.[517]

437. *Primero*, las Demandantes no han demostrado que los funcionarios de la SEMARNAT ya hubieran llegado al lugar donde se celebraría la RPI. Aunque el Sr. Santamaria hace referencia a este hecho,[518] no adjunta evidencia de que así hubiera sucedido. Aun y cuando así hubiese ocurrido, las autoridades ambientales a nivel federal y local deben estar coordinadas para atender la RPI, bajo las instrucciones de la UCPAST como área coordinadora, por lo que carece de sentido decir que, por la sola presencia de funcionarios de Puebla en el lugar, "[t]he RPI therefore could and should have simply gone ahead as planned",[519] pues haber llevado a cabo la RPI en contravención a la reprogramación que hizo la UCPAST, hubiese sido incluso ilegal.

438. En todo caso, de conformidad con el Reglamento Interior de la SEMARNAT,[520] la UCPAST estaba facultada para organizar la realización de las RPI *en coordinación* con la DGIRA y la delegación federal de Puebla, por lo que los impedimentos que cualquiera de dichas autoridades consideraran relevantes para la reprogramación de la RPI eran decisivos.[521]

439. *Segundo*, las Demandantes aluden a la experiencia del Sr. Limón dentro de la SEMARNAT, quien señaló que la reprogramación por el cambio de Secretario en dicha dependencia "careció de fundamento jurídico y vulneró las reglas del debido proceso, afectando los derechos del promovente como el derecho a la participación pública desde etapas iniciales del PEIA".[522] El Sr. Limón añade que, si la reprogramación de la RPI se debió al cambio del titular, "eso solo puede responder al carácter político que se le había dado ya a este proyecto".[523]

---

516 Réplica, ¶ 310. Segundo Informe del Sr. Limón, ¶ 69.

517 Réplica, ¶ 311.

518 Primer Declaración Testimonial del Sr. Santamaria, ¶ 97.

519 Réplica, ¶ 309.

520 Artículo 12, fracción IX, Reglamento Interior SEMARNAT, 26 de noviembre de 2012. **C-0190.**

521 "La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y entre los distintos niveles de gobierno y la concertación de la sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas […]". Artículo 15, fracción IX, LGEEPA. **C-0156.**

522 Segundo Informe Sr. Limón, ¶ 69.

523 Segundo Informe Sr. Limón, ¶ 71.

440. Es importante aclarar que la SEMARNAT nunca señaló que "the newly-appointed Secretary, Víctor Manuel Toledo, needed more time to familiarize himself with the case" como refiere el Sr. Santamaría,[524] sino más bien que el cambio de titular implicaba una reestructuración en la SEMARNAT que podría perjudicar la eficacia del PEIA.[525]

441. Además, contrario a lo señalado por el experto de las Demandantes, la reprogramación de la RPI no vulneró ninguna regla de debido proceso ni afectó el derecho de participación pública de Minera Gorrión. Como lo han explicado los Sres. Del Razo y Rábago,[526] el PEIA es un procedimiento administrativo uninstancial que no se sigue en forma de juicio, razón por la que no es posible que puedan existir violaciones de *debido proceso* más allá de lo establecido en la LGEEPA, su Reglamento y la LFPA, cuando sea el caso. Además, el derecho de participación pública que se hubiera vulnerado —lo cual no ocurrió— corresponde a los particulares que asistirían a la RPI, no a Minera Gorrión.

442. *Tercero*, en ánimos de ampliar su teoría conspirativa, las Demandantes señalan que "the contemporaneous record shows that coordinated NGO pressure, not the change of Secretary, drove the postponement",[527] refiriendo haber conocido dicha información derivado de la fase de producción de documentos del arbitraje.

443. Las Demandantes pretenden reconstruir la reprogramación de la RPI de la siguiente manera: el 29 de abril de 2019, la UCPAST se reunió con representantes de PODER y CESDER para discutir la RPI; el 4 de junio de 2019, la UCPAST solicitó a PODER y otras ONGs oponerse a que Minera Gorrión entregara comida en la RPI —sin presentar evidencia de ello—; el 9 de junio de 2019, Atcolhua solicitó a la SEMARNAT la cancelación de la RPI; y el 10 de junio de 2019,

---

524 Primer Declaración Testimonial del Sr. Santamaria, ¶ 97.

525 Oficio No. UCPAST/19/434/1-4 por el que la UCPAST comunica a Minera Gorrión el diferimiento de la RPI para el 25 de junio de 2019, 10 de junio de 2019. **C-0072.**

526 "El PEIA, en su carácter de instrumento rector de la política ambiental del Estado mexicano, no constituye un procedimiento seguido en forma de juicio ni un procedimiento administrativo cuya finalidad o efecto sea privar al administrado de un derecho previamente adquirido." Lo anterior no implica que no existan garantías procedimientales dentro del PEIA, en tanto "dicho procedimiento debe sujetarse a determinadas formalidades y requisitos procedimentales propios de la actuación administrativa". Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 62 y 42, respectivamente.

527 Réplica, ¶ 304. Segunda Declaración Testimonial del Sr. Santamaría, ¶ 98.

PODER publicó un tweet señalando que la postergación de la RPI se debió a la oposición de la comunidad y no al cambio de titular de SEMARNAT.[528]

444. Las Demandantes identifican los hechos anteriores con base en una carta presentada ante la SEMARNAT el 9 de junio de 2019 por dos particulares, quienes formaban parte de Atcolhua pero al parecer olvidan que también eran habitantes del municipio de Ixtacamaxtitlán.[529] Convenientemente, las Demandantes y sus testigos no mencionan esta última afiliación, ni mucho menos hacen referencia a que, en palabras de los particulares, tales ONGs los "han acompañado en la defensa de [su] territorio y muy particularmente en [ese] proceso de consulta pública ambiental".[530]

445. De la lectura de la misma carta se desprende que: *i)* la reunión del 29 de abril de 2019 entre CESDER, PODER y la UCPAST tuvo como propósito informar a las ONGs la fecha y lugar de la RPI derivado de la solicitud del Presidente municipal de Ixtacamaxtitlán de que se realizara después de las elecciones, así como señalar que, debido a la política de austeridad, SEMARNAT no podía ofrecer alimentos durante la reunión, *i.e.*, contrario a como lo plantean las Demandantes, esta no fue ninguna reunión en la que se plateara ningún sabotaje en contra de la RPI;

446. También se desprende que el 4 de junio de 2019 la UCPAST habló con PODER por teléfono para platicar ciertos detalles sobre la inscripción de ponencias en la RPI, preguntando la UCPAST si es que existiría algún un inconveniente en que la empresa proporcionara alimentos en la reunión, *i.e.*, en ningún momento la UCPAST solicitó a las ONGs que se opusieran a la entrega de alimentos por parte de Minera Gorrión como lo señalan las Demandantes. En todo caso, la oposición a ello surge como un acto propio de las ONGs (*e.g.* el tweet) —no atribuible al Estado mexicano— y no como una orden de la autoridad para que se opusieran.

447. En ese sentido, es claro que las Demandantes pretender tergiversar los hechos con base en suposiciones incorrectas, minimizando la preocupación de los habitantes al hacer referencias como

---

528 Réplica, ¶ 311.

529 Carta de habitantes de Ixtacamaxtitlán e integrantes de Atcolhua, 9 de junio de 2019. **C-0622**. *Ver también* Oficio No. SEMARNAT/UCPAST/UT/2404/19 por la que se remite respuesta a Solicitud de Transparencia y se adjunta la carta del 9 de junio de 2019, 12 de julio de 2019. **C-0300**.

530 Carta de habitantes de Ixtacamaxtitlán e integrantes de Atcolhua, 9 de junio de 2019, p. 2. **C-0622**.

la del Sr. Dorantes[531] y atribuyendo, con base en una única prueba: la carta del 9 de junio de 2019 y que el único intento de cancelación de la RPI únicamente provenía de ONGs y no de la comunidad,[532] lo cual ya quedó desmentido previamente.

448. Las Demandantes omiten señalar que, "debido a las restricciones de presupuesto", la SEMARNAT no podía ofrecer alimentos a los asistentes,[533] señalando la carta del 9 de junio de 2019 que la SEMARNAT estuvo de acuerdo en que Minera Gorrión se encargara de la renta de sillas, mesas, pantalla y otras cosas para la RPI, siendo enfática en que, por el contrario, no podía ceder la convocatoria de la RPI a Minera Gorrión al ser una obligación de las autoridades y no de la empresa.[534]

449. El Sr. Santamaría ha referido que PODER y Fundar "lobbied SEMARNAT officials *aggressively* to cancel the RPI altogheter",[535] ignorando el escrito fue presentado por dos habitantes del municipio de Ixtacamaxtitlán y a su vez integrantes Atcolhua. Además, lo que califica el Sr. Santamaría como *agresivo* no atiende a otra cosa sino a una solicitud de cancelación de la RPI "debido a la falta de condiciones de imparcialidad y de garantías de seguridad para su realización".[536] El testigo de las Demandantes añade que "[t]he day before the scheduled RPI, the then coordinator of UCPAST called us to complain about our use of a loudspeaker mounted on one of our trucks to encourage community attendance",[537] proporcionando como evidencia un correo del Sr. Santamaría a la UCPAST en el que en ningún momento se desprende que la UCPAST haya solicitado lo que el testigo menciona.[538]

---

531 "[N]o estoy convencido de que esas preocupaciones se originaran en las propias comunidades locales o en Tecoltemi". Segunda Declaración Testimonial del Sr. Dorantes, ¶ 10.

532 Segunda Declaración Testimonial del Sr. Dorantes, ¶ 10.

533 Carta de habitantes de Ixtacamaxtitlán y Atcolhua a la SEMARNAT donde se identifica el correo electrónico de la UCPAST a PODER por el que señala que se mantendrá la imparcialidad de la RPI, 5 de junio de 2019, p. 13. **C-0622.**

534 Carta de habitantes de Ixtacamaxtitlán y Atcolhua a la SEMARNAT, numeral 9, 9 de junio de 2019. **C-0071.**

535 Primera Declaración Testimonial del Sr. Santamaría, ¶ 97.

536 Carta de habitantes de Ixtacamaxtitlán y Atcolhua a la SEMARNAT, 9 de junio de 2019. **C-0071.**

537 Primera Declaración Testimonial del Sr. Santamaría, ¶ 97.

538 Correo del Sr. Santamaría a la UCPAST informando los preparativos que ha hecho para la RPI, 10 de junio de 2019. **C-289.**

450. Las Demandantes pretenden hacer creer al Tribunal que fueron PODER y Fundar quienes solicitaron la cancelación de la RPI, cuando en la realidad la solicitud de cancelación de la RPI la hicieron habitantes del municipio de Ixtacamaxtitlán que, en todo caso, formaban parte de Atcolhua. Además, el señalamiento de las Demandantes y de su testigo relativo a que hicieron dicho "descubrimiento" derivado de la fase de producción de documentos es falso. Desde su Memorial de Demanda, las Demandantes presentaron como anexo la carta del 9 de junio de 2019,[539] pudiéndose identificar desde esta las referencias a CESDER y PODER, con la única diferencia de que la carta que obtuvieron de producción de documentos identifica nombres de personas.[540]

451. Adicionalmente, el Sr. Dorantes señala que la SEMARNAT impidió que ciertos miembros de la comunidad hablaran en la RPI, refiriendo el ejemplo concreto de la [redacted], habitante de Santa María Zotoltepec. El testigo de las Demandantes agrega que, a pesar de ser un requisito de participación de la RPI, está justificado que la [redacted] no haya adjuntado al "Formato de solicitud de ponencia" el documento "given that other participants who had done less to meet these requirements were nonetheless allowed to speak".[541]

452. El razonamiento del testigo de las Demandantes es equivocado. El documento en cuestión era relevante porque en este los particulares debían plasmar las observaciones o propuestas de impacto ambiental del Proyecto, "respecto de los que la SEMARNAT solo aceptaría aquellos con observaciones de carácter legal y técnico relacionadas con el impacto ambiental".[542] En ese sentido, si el documento no fue presentado, es imposible que la SEMARNAT hubiese podido admitir la presentación de dicha ponencia.

453. Convenientemente, las Demandantes tampoco señalan que la autoridad determinó que dentro de sus atribuciones "no se encuentra facultada para llevar a cabo la cancelación de la

---

539 Oficio No. SEMARNAT/UCPAST/UT/2404/19 por la que se remite respuesta a Solicitud de Transparencia y se adjunta la carta del 9 de junio de 2019, 12 de julio de 2019. **C-0300.** *Ver también* Carta de habitantes de Ixtacamaxtitlán y Atcolhua a la SEMARNAT, 9 de junio de 2019. **C-0071.**

540 Carta de habitantes de Ixtacamaxtitlán y Atcolhua a la SEMARNAT donde se ven los nombres de Alejandro Marreros (CESDER) y Julieta Lamberti (PODER), 9 de junio de 2019. **C-0622.**

541 Primera Declaración Testimonial del Sr. Santamaría, ¶ 98.

542 Cadena de correos por el que se rechaza la ponencia de [redacted], 10 de junio de 2019. **C-0288.**

Reunión Pública de Información del proyecto",[543] *i.e.*, la solicitud de cancelación de la que se quejan las Demandantes ni siquiera prosperó y, por lo tanto, no les causó ninguna afectación.

454. Finalmente, se enfatiza que las mismas Demandantes han señalado haber obtenido un "positive RPI outcome",[544] por lo que no tiene sentido que continúen oponiéndose a la reprogramación a causa del cambio de titular de la SEMARNAT, ni mucho menos del desarrollo de la RPI.

d. Minera Gorrión siempre tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre las Solicitudes de Opinión Técnica adicionales

455. Las Demandantes señalan que no se siguió el Debido Proceso y estuvieron imposibilitados para pronunciarse sobre las Opiniones Técnicas adicionales recibidas fuera del plazo al que se refiere la LFPA.[545] Eso no es correcto y será detallado.

456. En marzo de 2019, la SEMARNAT realizó 14 solicitudes de Opinión Técnica a diversas autoridades,[546] señalando las Demandantes que "only four responded within the applicable 15-day deadline under the LFPA".[547] Concretamente, las Demandantes se quejan de lo siguiente:

- La aceptación de la DGIRA de dos "belated opinions"; una del INPI Puebla, presentada ante la DGIRA el 10 de abril de 2019;[548] y otra de la DGVS, presentada ante la DGIRA el 20 de febrero de 2020;[549] y

---

543 Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/04592 por el que la DGIRA informa a los particulares que no puede cancelar la RPI, 14 de junio de 2019. **R-0045.**

544 Segunda Declaración Testimonial del Sr. Santamaría, ¶ 95.

545 Réplica, ¶¶ 333 y 340. Segundo Informe Sr. Limón, ¶ 9, 57, 58, 62.

546 Memorial de Contestación, ¶ 236.

547 Réplica, ¶ 333.

548 Oficio DPUE/2019/OF/0373 mediante el que el INPI remite su Opinión Técnica, 22 de marzo de 2019. **R-0057.**

549 Oficio No. SGPA/DGVS/01228/20 por el que la DGVS remite su Opinión Técnica, 11 de febrero de 2020. **R-0063.**

- El requerimiento de la DGIRA del 19 de agosto de 2019 de dos "Opiniones Técnicas adicionales"[550] —después de que Minera Gorrión presentara su IA el 1° de agosto de 2019— a la DGGFS, presentada ante la DGIRA el 24 de octubre de 2019,[551] y a la UCAJ.

457. Las Demandantes omiten señalar que en cada uno de los casos la DGIRA solicitó las Opiniones Técnicas "en un plazo no mayor a 15 días a partir de la fecha de recepción del presente", *i.e.*, el conteo de los 15 días hábiles[552] comenzaría a partir de que la autoridad recibiera el requerimiento. Existen dos aspectos importantes que considerar.

458. *Primero*, las Demandantes se quejan de la presentación "tardía" de la Opinión Técnica del INPI. Sin embargo, las Demandantes omiten señalar que el mismo INPI refirió haber recibido el oficio de la DGIRA tres días después de su emisión,[553] *i.e.*, el jueves 7 de marzo de 2019, por lo que el plazo de 15 días hábiles para responder terminó el 28 de marzo de 2019.[554] El INPI emitió su respuesta el 22 de marzo de 2019, *i.e.*, dentro del plazo; sin embargo, la respuesta fue presentada ante la DGIRA el 10 de abril de 2019, *i.e.*, solo 7 días hábiles después de lo solicitado. Un retardo de 7 días hábiles no le causó ningún perjuicio a Minera Gorrión, sobre todo cuando las mismas Demandantes han reconocido que sí se pudieron pronunciar de esta Opinión Técnica en su IA.[555]

459. Si bien la Demandada coincide con el Sr. Limón en que la DGIRA señaló un plazo de 15 días hábiles para que las autoridades emitieran sus Opiniones Técnicas,[556] como ya lo han referido

---

550 Solicitud de Opinión Técnica de la DGIRA a la UCAJ, 19 de agosto de 2019. **R-0064.** *Ver también,* Solicitud de Opinión Técnica de la DGIRA a la DGGFS, 19 de agosto de 2019. **R-0065.**

551 Oficio SGPA/DGGFS/712/2185/19 por el que la DGGFS emite la respuesta a la solicitud de Opinión Técnica, 24 de octubre de 2019. **R-0066.**

552 "Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles. En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles salvo disposición en contrario. […]", Artículo 28, LFPA. **C-0160.**

553 "En atención a su al oficio SGPA/DGIRA/DG/01803, de fecha 4 de marzo de 2019, recibido por esta Entidad tres días después de su emisión […]". Oficio DPUE/2019/OF/0373 mediante el que el INPI remite su Opinión Técnica, 22 de marzo de 2019, p. 1. **R-0057.**

554 "No se considerarán días hábiles: los sábados, los domingos, el 1o de enero; 5 de febrero; 21 de marzo; 1o de mayo; 5 de mayo […]". Artículo 28, LFPA. **C-0160.**

555 "While SEMARNAT gave Minera Gorrión an opportunity to comment on the belated INPI opinión in its RAI […]", Memorial de Demanda, ¶ 308. Información Adicional presentada por Minera Gorrión, julio de 2019, pp. 61 y siguientes. **C-0299.**

556 Segundo Informe del Sr. Limón, ¶ 62.

los expertos de la Demandada, [557] no es correcto señalar que después de transcurrido dicho plazo, la ausencia de una respuesta por parte de la autoridad (en este caso la DGVS) implicó que no existieran comentarios u objeciones a la MIA del Proyecto Ixtaca. Para mayor claridad, el Artículo 55 de la LFPA menciona lo siguiente:

> "Artículo 55.- A quien se le solicite un informe u opinión, deberá emitirlo dentro del plazo de quince días, salvo disposición que establezca otro plazo.
>
> Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no se recibiese el informe u opinión, cuando se trate de informes u opiniones obligatorios o vinculantes, se entenderá que no existe objeción a las pretensiones del interesado." [558] [énfasis añadido]

460. Como se podrá observar, el Artículo 55 refiere que, a falta de una respuesta por parte de la autoridad en el plazo establecido, se entenderá que no existen objeciones "a las pretensiones del interesado" —que en este caso correspondería a cierta parte de la MIA (cuestiones de vida silvestre) del Proyecto Ixtaca—, pero ello ocurriría solo si se trata de informes u opiniones obligatorias o vinculantes, lo cual no ocurre en el presente caso.

461. Conforme al Reglamento de la LEGEEPA,[559] y tal como ya lo han mencionado los expertos de la Demandada,[560] las Opiniones Técnicas que recibe la DGIRA son facultativas y no vinculantes, lo cual también ha sido confirmado por el Sr. Limón.[561] A mayor contexto, el Artículo 24 del Reglamento de la LGEEPA, que regula las Opiniones Técnicas solicitadas por la DGIRA, señala lo siguiente:

> Artículo 24.- La Secretaría podrá solicitar, dentro del procedimiento de evaluación y en los términos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la opinión técnica de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, cuando por el tipo de obra o actividad así se requiera.
>
> Asimismo, la Secretaría podrá consultar a grupos de expertos cuando por la complejidad o especialidad de las circunstancias de ejecución y desarrollo se estime que sus

---

557 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 79. Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 125-126.

558 Artículo 55, LFPA.

559 Artículo 4, Reglamento LGEEPA. **C-0166**. ("Compete a la Secretaría: […] III. Solicitar la opinión de otras dependencias y de expertos en la materia para que sirvan de apoyo a las evaluaciones de impacto ambiental que se formulen; […]").

560 Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 126-128.

561 Primer Informe del Sr. Limón, ¶ 43. ("Además, las opiniones recibidas no son vinculantes u obligatorias para la SEMARNAT, pero sí deben incorporarse al expediente y señalarse en la resolución".)

> opiniones pueden proveer de mejores elementos para la formulación de la resolución correspondiente; en este caso, notificará al promovente los propósitos de la consulta y le remitirá una copia de las opiniones recibidas para que éste, durante el procedimiento, manifieste lo que a su derecho convenga.[562] [énfasis añadido]

462. Como se puede observar, el Artículo 24 no señala de manera expresa que las Opiniones Técnicas sean obligatorias, por lo que, de acuerdo con la LFPA,[563] todas las Opiniones Técnicas solicitadas por la DGIRA solo son facultativas y no vinculantes, quedando por tanto a consideración de la DGIRA si estas serían tomadas en cuenta o no para la resolución.

463. En ese sentido, el hecho de que la DGVS haya emitido su Opinión Técnica fuera del plazo de 15 días no debe entenderse como una "falta de objeción" o conformidad con la MIA del Proyecto Ixtaca. Sobre todo, tomando en consideración que la respuesta sí fue presentada ante la DGIRA el 20 de febrero de 2020.

464. Es falso que las Demandantes digan que "Minera Gorrión had *no* opportunity to comment on or even review the belated DGVS opinion, even though, as explained below, SEMARNAT relied on this opinion in multiple instances to reject Minera Gorrión's MIA."[564] Las promoventes, en este caso Minera Gorrión, nunca estuvo imposibilitado para presentar información complementaria o adicional que pudiera ayudar a la autoridad para tomar su determinación.

465. *Segundo*, por cuanto hace a las "Opiniones Técnicas adicionales", las Demandantes se quejan de que la DGIRA solicitó Opiniones Técnicas después de que Minera Gorrión presentara su IA y que una vez presentadas dichas Opiniones Técnicas, la DGIRA no le dio *vista* a Minera Gorrión para que esta pudiera pronunciarse sobre tales Opiniones Técnicas.

466. Para el análisis de este argumento, es necesario regresar al Artículo 24 del Reglamento de la LGEEPA transcrito previamente. Las Demandantes señalan que el Artículo 24 únicamente hace referencia a "dependencias y entidades" de la Administración Pública Federal, "whose opinions

---

562 Artículo 24, Reglamento LGEEPA. **C-0166.**

563 "Los informes u opiniones solicitados a otros órganos administrativos podrán ser obligatorios o facultativos, vinculantes o no. Salvo disposición legal en contrario, los informes y opiniones serán facultativos y no vinculantes al órgano que los solicitó y deberán incorporarse al expediente." Artículo 54, LFPA. **C-0160.**

564 Memorial de Demanda, ¶ 308.

are *not* required to be forwared to applicants under Article 24" y "grupos de expertos" "whose opinions *are* required to be forwared to applicants".[565]

467. En un intento desesperado por tratar de demostrar que la DGIRA le debió haber dado "vista" a Minera Gorrión sobre las Opiniones Técnicas de la DGVS y la DGGFS, las Demandantes hacen una interpretación equivocada del Artículo 24 del Reglamento de la LGEEPA, señalando que "[t]hese precise legal terms do not extend to internal directorates of a Secretaría de Estado like SEMARNAT. DGGFS and DGVS therefore fall outside the category of "entities and dependencies" altogether".[566]

468. Aceptar la interpretación de las Demandantes implicaría que, por cuanto hace a "dependencias" o "entidades", la DGIRA solo podría solicitar Opiniones Técnicas a los titulares de las Secretarías de Estado, lo cual denota lo absurdo e irracional de la propuesta. Es totalmente equivocado pretender que una solicitud de opinión técnica ambiental tan puntual, sobre un Proyecto en específico, pueda ser únicamente solicitada a un secretario de Estado (ministro) o a la Consejería Jurídica (oficina encargada de la representación presidencial). Como igual resulta irracional pensar que la estructura orgánica de la que se ramifica y apoya cada Secretaría de Estado no sea considerada como parte de la misma y se le deba dar un trato independiente y diferenciado.

469. Es evidente que el Artículo 24, al mencionar "dependencias", se refiere a las áreas, unidades administrativas o direcciones que orgánicamente comprenden cada dependencia. La solicitud de Opinión Técnica debe ir dirigida a un área, unidad o dirección específica de tales dependencias o secretarías de Estado conforme a las facultades que le atribuya su reglamento interno, sobre todo a áreas o direcciones pertenecientes a la propia SEMARNAT, cuyo principal mandato es la protección medioambiental, en tanto estas son las principales áreas a las cuales recurre la DGIRA para hacer este tipo de consultas.

470. Las Demandantes pretenden ubicar a la DGVS, la DGGFS y a la UCAJ dentro de la categoría de "grupos de expertos" para que, en consecuencia, la DGIRA tuviera la obligación de darles *vista* sobre las Opiniones Técnicas que presentaran.[567] Evidentemente, la Demandada

565 Réplica, ¶ 335.

566 Réplica, ¶¶ 335-336.

567 Réplica, ¶ 336.

reconoce la *expertise* y conocimientos de las áreas técnicas de la SEMARNAT, pero el término "grupo de expertos" se refiere a grupos externos de la Administración Pública Federal, *e.g.* asociaciones, institutos, academias y demás organizaciones que se encuentren fuera del aparato gubernamental, tal como lo refieren los Sres Del Razo y Rábago.[568]

471. Contrario al señalamiento de las Demandantes sobre que la DGIRA "had no legal basis to solicit additional technical opinions",[569] conforme el Artículo 26 del Reglamento de la LGEEPA[570] la DGIRA puede solicitar Opiniones Técnicas durante todo el PEIA, debiéndose agregar al expediente las Opiniones Técnicas "que se hubiesen solicitado", no haciendo una distinción sobre agregar solamente las que hayan "llegado a tiempo" (Opinión Técnica de la DGVS) ni las que se hubieren solicitado de manera "adicional" después de un primer requerimiento (Opinión Técnica de la DGGFS), *i.e.*, se deben integrar todas las Opiniones Técnicas.

472. Por cuanto hace al argumento de las Demandantes sobre que se le debió haber dado *vista* a Minera Gorrión respecto de las Opiniones Técnicas de la DGVS y la DGGFS, dicha obligación no existía para la DGIRA puesto que, conforme lo explicado anteriormente, tales Opiniones Técnicas no provenían de "grupos de expertos" que hubiesen sido consultados. Además, como ya se ha referido previamente, Minera Gorrión siempre ha tenido a su disposición el expediente del PEIA del Proyecto Ixtaca, pudiendo conocer las constancias que a este se fueran integrando.

473. Al no causarle ningún daño a las Demandantes la Opinión Técnica del INPI ni la inexistente Opinión Técnica de la UCAJ, las reclamaciones de las Demandantes respecto de las Opiniones Técnicas podrían incluso reducirse a las Opiniones Técnicas de la DGVS y la DGGFS. Sin embargo, como ya explicó previamente, estas no le causaron perjuicio a Minera Gorrión porque no existía una obligación por parte de la DGIRA de darle *vista* a Minera Gorrión y que esta se pudiera pronunciar sobre su contenido.

474. A manera de resumen, se destacan los siguientes puntos: *i)* las Opiniones Técnicas son facultativas y no vinculantes para la DGIRA —es la DGIRA quien decide si las toma en cuenta o no para la resolución—, *ii)* al ser facultativas, no hay obligación de *dar vista* al solicitante, *iii)*

---

568 Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 133 y 134.

569 Réplica, ¶ 309.

570 Artículo 26 "Iniciado el trámite de evaluación, la Secretaría deberá ir agregando al expediente: […] II. Las opiniones técnicas que se hubiesen solicitado; […]", Reglamento LGEEPA. **C-0166.**

deben ser integradas al expediente de la MIA, independientemente de cuando hayan sido recibidas, y *iii)* al ser facultativas, la presentación tardía de las Opiniones Técnicas no debe entenderse como una manifestación de conformidad con el proyecto.

475. El PEIA es un procedimiento uni-instancial sin fases o etapas, que no sigue las formalidades de un procedimiento seguido en forma de juicio, por lo que no existe formalmente una etapa de alegatos ni una obligación de *dar vista*, de hecho, ni la LGEEPA ni su reglamento establecen la figura de alegatos para el PEIA.[571]

476. En ese sentido, respecto de la posible supletoriedad de la LFPA para la figura de alegatos, se precisa que una característica esencial de esta es que, para que la norma sea supletoria, se requiere que la figura jurídica (alegatos) exista dentro de la norma principal, para que así la supuesta falta o insuficiencia de la norma principal sea suplida con el ordenamiento secundario o supletorio.[572] En este caso específico, no están reguladas dichas figuras en el PEIA, por lo que no se pueden subsanar o suplir figuras inexistentes y crear derechos donde no existen.

477. El PEIA, al ser un trámite sin fases o etapas seguidas en forma de juicio, no contempla la fase de alegatos, situación que es diferente en los actos de inspección y vigilancia regulados por la LGEEPA, como son los procedimientos de inspección y vigilancia (cumplimiento de la ley), que son oficiosos y cuentan con etapas de órdenes de visita y emplazamiento, que garantizan el derecho de audiencia, pruebas, alegatos y resoluciones.[573]

478. En todo caso, los argumentos de las Demandantes son deficientes porque el expediente siempre estuvo a su disposición desde la presentación de su MIA, por lo que Minera Gorrión pudo haber conocido las Opiniones Técnicas de la DGGFS y la DGGFS desde antes que se emitiera la

---

571 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 68-72.

572 Tesis Jurisprudencial "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 34/2013 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1065, Tipo: Jurisprudencia. **R-0205. "**La supletoriedad debería cubrir que: (i) el ordenamiento a suplir establezca esa posibilidad; (ii) la ley a suplir no contemple la figura o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente o las regule deficientemente; (iii) que la omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o problema jurídico planteado; y (iv) que la norma supletoria con la que se pretende llenar la deficiencia no contraríe con la norma principal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y bases; ante la falta de cualquiera de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una ley a otra."

573 Título Sexto "Medidas de Control y de Seguridad y Sanciones", LGEEPA. **C-0156.**

resolución si hubiera acudido a revisar el expediente físico de manera regular ante la DGIRA. No haber hecho lo anterior es una omisión atribuible a Minera Gorrión por no haber estado al tanto de las actualizaciones de su expediente, las cuales son fidedignas únicamente para la versión física de éste.[574]

479. Asimismo, tal como se señaló en el Memorial de Contestación,[575] las solicitudes de Opinión Técnica son actos intraprocesales que, en todo caso, pudieron haber sido impugnados, ya sea de manera diferenciada o al impugnar la resolución de la MIA. Además, como ya lo han señalado los expertos de la Demandada,[576] el PEIA es un procedimiento administrativo —no judicial—, por lo que calificar las acciones de la DGIRA como incumplimientos al marco regulatorio y violaciones al debido proceso[577] carecen de mérito.

480. En ese sentido, el argumento consiste en que "DGIRA's record keeping on its Sistema Nacional de Trámites ("SINAT") was defective and failed to reflect the solicitation or receipt of the DGVS and DGGFS opinions"[578] es equivocada por dos motivos: *Por un lado,* el SINAT es un Sistema interno de la propia DGIRA, cuyas actualizaciones no se reportan a los particulares, y en todo caso, las Demandantes y su experto se deben referir al Sistema de "Consulta tu trámite" donde no se realizan todas las actualizaciones; *Por otro lado,* no hay obligación de la DGIRA para *darle vista* a Minera Gorrión, por lo que, no había obligación de presentar alguna notificación o actualización en el Sistema de "Consulta tu trámite" que sea vinculante.

e. El requerimiento de realizar la Consulta Indígena dentro del PEIA y su alcance exclusivo sobre la MIA presentada

481. La normativa mexicana en torno a la protección y garantía de los derechos de las personas indígenas, específicamente sobre la Consulta Indígena, deviene de un marco constitucional y convencional, siendo un requisito para poder llevar a cabo actividades que puedan afectar a pueblos y comunidades indígenas. En el marco ambiental, la DGIRA tomó en consideración dicho marco normativo al resolver el procedimiento dentro del PEIA.

---

574 Memorial de Demanda, ¶ 310.

575 Memorial de Contestación, ¶ 237.

576 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 62.

577 Réplica, ¶ 310.

578 Réplica, ¶ 339.

(1) Marco jurídico al momento de presentación de la MIA

482. Cuando Minera Gorrión presentó su MIA en 2019, ya estaban en vigor importantes disposiciones reflejadas en los artículos 1º y 2º constitucionales. El artículo 1° establece la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; además, decreta una interpretación *pro persona*, esto es, una que favorezca la protección más amplia de los particulares, y que se realice de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales respectivos.[579]

483. Por su parte, el artículo 2 de la Constitución mexicana señalaba que, como parte de su libre determinación, los pueblos y comunidades indígenas cuentan con autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, para preservar y enriquecer todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, así como para acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares donde habiten.[580]

484. Ahora bien, el marco internacional sobre Consulta Indígena es el Convenio 169 de la OIT, vinculante para México desde 1991. Particularmente, los artículos 6 y 15 del Convenio 169 disponen el deber de consulta cuando exista una medida administrativa susceptible de afectar a los pueblos indígenas, especialmente cuando pueda trastocar sus recursos naturales.[581]

485. Así, cualquier acción que las autoridades nacionales tomaran que pudiera llegar a afectar los derechos de pueblos y comunidades indígenas debía acatar, por lo menos, los artículos 1 y 2 de la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la OIT.

486. Adicionalmente, existía el "Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos indígenas" de la SCJN. Este Protocolo, mediante el principio 5 "Protección Especial a sus Territorios y Recursos", dispone claramente que, cuando existe presencia indígena en áreas geográficas donde se pretenden desarrollar proyectos por parte de empresas, debe derivarse una fuerte presunción de que éstos

579 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1, 10 de junio 2011. **R-0014**.

580 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 2 (2018). **R-0247**.

581 Memorial de Contestación, ¶¶ 91, 92. Convenio 169 de la OIT, pp. 29, 40, 41. **RL-0028**.

tienen algún tipo de derecho sobre los recursos y los territorios.[582] Así, tal como lo señaló el INPI-Puebla dentro del PEIA,[583] independientemente de la cantidad de personas,[584] cuando existe presencia indígena en el territorio en cuestión, se debe llevar a cabo un diálogo inclusivo, lo que se interpreta, atendiendo al principio constitucional *pro persona*, como la necesidad de una Consulta Indígena.

487. La Guía MIA-R 2010 señala que, como parte de la descripción del SAR y el señalamiento de las tendencias del desarrollo y deterioro de la Región, se debe identificar a las comunidades indígenas y describir el proceso que se consideraría para integrarlas.[585]

488. Si bien, ni la LGEEPA ni su Reglamento establecían de forma explícita medidas en materia indígena, la autoridad medioambiental sí contaba con normativa que debía tomar en cuenta a la hora de emitir su resolución. Lo anterior sin dejar pasar la obligación implícita de velar por los principios de prevención contenidos en la LGEEPA.[586]

489. Por su parte, en su MIA, Minera Gorrión se limitó a señalar que no existían etnias susceptibles de ser afectadas en el Área del Proyecto ni en el SAR,[587] a pesar de incluir una tabla donde plasmó que, de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, existía población indígena en las diversas localidades que la solicitante incluyó dentro del Área de Influencia.[588]

490. Atendiendo a sus facultades y tomando en cuenta las opiniones vertidas por el INPI, la Subsecretaría de Atención a los Pueblos Indígenas del Gobierno del estado de Puebla y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (Comisión para el Diálogo) informaron sobre la presencia de población indígena. Ante ello, la DGIRA solicitó a Minera

---

582 Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, 2014, p. 47. **R-0206**.

583 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, p. 15. **C-0086**.

584 Memorial de Contestación, ¶ 100. *Ver* Informe Dra. Torres, ¶ 40.

585 Guía para la MIA-R, SEMARNAT, 2010, pp. 17 y 18. **MLA-0003**.

586 Artículos 15, 28, 30, LGEEPA. **C-0156**.

587 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, p. 8. **C-0262**.

588 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, pp. 299, 300. **C-0262**.

Gorrión que ampliara la información sobre las comunidades indígenas a las que el Proyecto causaría afectaciones y las medidas que tomaría para mitigar los daños que pudiera identificar.[589]

491. Sin embargo, en lugar de reconocer la presencia indígena, Minera Gorrión decidió convenientemente responder de forma escueta que, de acuerdo a información otorgada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no había comunidades indígenas y, por tanto, que no era necesario realizar ninguna acción.

492. Posteriormente, en diciembre de 2020, la DGIRA emitió la Resolución rechazando la llamada Autorización de Impacto Ambiental o "AIA", por considerar que Minera Gorrión no había brindado toda la información requerida por ley. En lo referente a los derechos indígenas, la autoridad señaló que la información mencionada por Minera Gorrión era falsa al afirmar que no había población indígena presente, en tanto la información proporcionada por las autoridades competentes confirmó su existencia, de forma tal que se incumplía con el Convenio 169 de la OIT pues era obligatorio que se llevara a cabo una Consulta Indígena con dichas comunidades.[590]

493. De una lectura integral del párrafo en cuestión, en efecto, la DGIRA reconoció que era obligación del Estado mexicano realizar la consulta.[591] El Proyecto requería de una Consulta Indígena para proseguir, misma que se llevaría a cabo por las autoridades, en cooperación de Minera Gorrión. Sin embargo, debido a que Minera Gorrión no reconoció la existencia de población indígena que pudiera ser afectada por el Proyecto, se presentó una falta de certidumbre sobre cómo es que este podría afectar a los pueblos y comunidades indígenas.

494. Esta no era la primera vez que Minera Gorrión escuchaba que se requería una Consulta Indígena para el Proyecto, pues la propia SEMARNAT ya había explicado previamente el camino a seguir para tener una Consulta Indígena.[592] En este sentido, si su MIA hubiera sido técnicamente viable (situación que no fue), Minera Gorrión debía acudir con la autoridad competente (INPI) para solicitar que se realizara el protocolo y se aplicara la consulta correspondiente. Así, la autoridad no trasladó el deber de realizar la consulta a Minera Gorrión, sino que el único trabajo

---

589 Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/03541 por el que la DGIRA solicita Información Adicional a Minera Gorrión, 9 de mayo de 2019, p. 2. **C-0285**.

590 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, p. 136. **C-0086**.

591 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, p. 136. **C-086**.

592 Oficio No. UP/DGPC/2014/OF/1255 de la CDI a Minera Gavilán, 04 de septiembre de 2014, p. 1. **C-0513**.

de la solicitante era identificar correctamente la presencia indígena para, en caso de que se determinara la viabilidad ambiental del proyecto, se activaran los mecanismos de Consulta Indígena.

495. Minera Gorrión afirmó que no había presencia de población indígena susceptible de una consulta con base en un oficio elaborado por la Comisión Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en septiembre de 2018.[593] Sin embargo, la respuesta de la Comisión se basó en la información acotada y proporcionada por Minera Gorrión; quien, a pesar de reconocer que había presencia de personas indígenas de acuerdo con datos del INEGI y de la propia Comisión, decidió realizar un restringido análisis de campo, mediante una encuesta a limitadas personas, con la cual concluyó que había una "inexistencia de personas indígenas". [594]

496. Ahí recae la diferencia entre la información presentada, por un lado, por Minera Gorrión en su MIA y su respuesta al RIA, y en el otro, la de DGIRA y las autoridades consultadas por la misma, pues si bien la autoridad parte del principio de buena fe sobre la información presentada por un solicitante, la SEMARNAT también se allegó de elementos necesarios para poder emitir una conclusión sobre la presencia o no de personas indígenas.

497. Este es un detalle fundamental que curiosamente se omitió contestar en la respuesta al RIA. Independientemente de cualquier oficio anacrónico, la DGIRA informó a Minera Gorrión que tres autoridades distintas habían determinado la presencia de población indígena y los pasos consecuentes que la solicitante debía tomar en cuenta. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dejó de existir al momento en que Minera Gorrión presentó su MIA debido a que sus funciones fueron transferidas al INPI.[595] En este entendido, si la autoridad competente señaló en un oficio posterior que sí existía población indígena susceptible de ser afectada, al utilizar metodología e información más actualizada, la obligación de Minera Gorrión era reconocer dicha situación.

---

593 Oficio No. SECOTRADE/SDE/DGP/074/2018 de SECOTRADE (anexo Oficio No. CGPE/2018/OF/0802 de CDI), 05 de octubre de 2018, **C-0257**.

594 Oficio No. CGPE/2018/OF/0802 de la CDI en relación con la presencia indígena en el Proyecto Ixtaca, 28 de septiembre de 2018. **C-0257**.

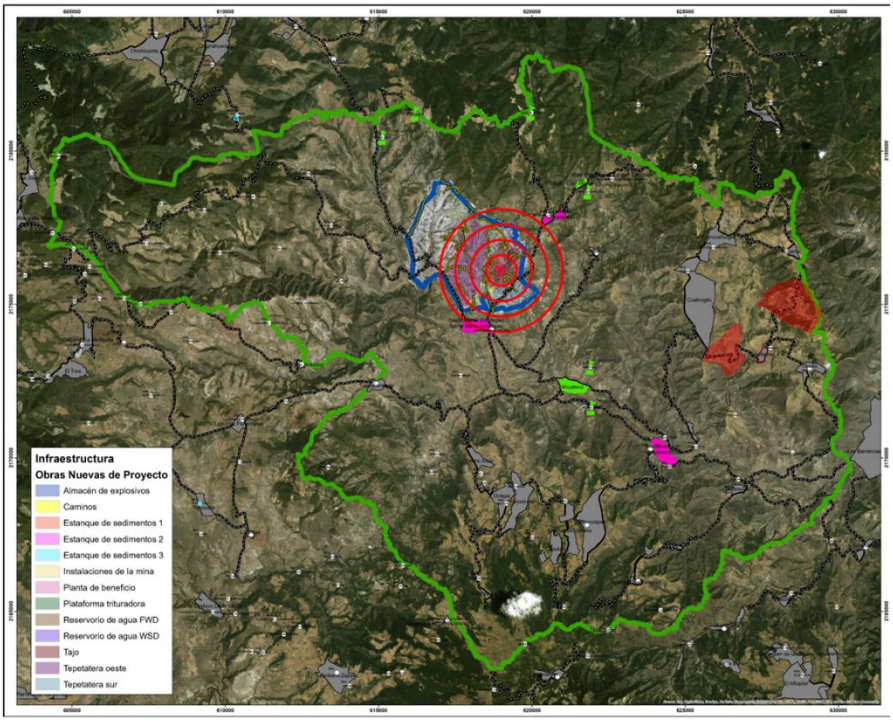
595 Mediante la Ley por la que se creó al INPI, se abrogó la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, haciéndose así el cambio de CDI a INPI, en diciembre de 2018. Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, diciembre de 2018. **R-0207.**

498. Adicionalmente, la primera consulta realizada por Minera Gorrión para saber si existía población indígena cerca del Área del Proyecto fue dirigida a la Delegación estatal de Puebla de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, misma que reconoció que tanto el municipio de Ixtacamaxtitlán como las localidades cuestionadas contaban con presencia indígena.

499. Cabe remarcar que Minera Gorrión debió de haber señalado en su MIA y en posteriores solicitudes de información cualquier medida en torno a la población indígena que pudiera encontrarse dentro del SAR. Sin embargo, decidió no hacerlo.

500. La Demandada identificó que la delimitación del SAR en la primera MIA fue convenientemente trazada para dejar fuera a comunidades que sabía de antemano eran indígenas. Lo anterior resulta aún más alarmante ya que Minera Gorrión sabía perfectamente que Tecoltemic era considerada como una comunidad indígena, pues llevaba un litigio con la comunidad desde 2015. Clara muestra es que, cuando Minera Gorrión preparaba su segunda MIA presentó un mapa donde perfectamente se observa que Tecoltemic es parte del SAR.[596]

Imagen: SAR de la Segunda MIA



596 Estudio Sonométrico y Mapa del SAR de la Nueva MIA, febrero 2021. **R-0208**.

Fuente: Estudio Sonométrico y Mapa del SAR de la Nueva MIA. **R-0208**

501. El supuesto desconocimiento de que hubiera personas indígenas en el Área de Influencia Directa contrasta con su supuesta voluntad de dialogar y negociar con las personas que pudieran ser afectadas por el Proyecto. Por un lado, reconoce la existencia de comunidades indígenas[597], pero por otro lado, existen otros documentos en los que desconoce la existencia de comunidades indígenas que pudieran ser afectadas a su conveniencia;[598] negar la existencia de los pueblos y comunidades indígenas no hace que desaparezcan, únicamente perpetúa su lucha por el reconocimiento y ejercicio de sus derechos humanos.

502. Finalmente, el argumento de las Demandantes consistente en que la DGIRA pudo haber aprobado condicionadamente la MIA, ignora el hecho de que la MIA fue negada por una multiplicidad de factores, no únicamente por la falta de una Consulta Indígena.[599] La cuestión de falta de una Consulta Indígena, únicamente es uno de los muchos considerandos dentro de la Negativa de la MIA; la *ratio decidendi* de DGIRA fue la falta de información suficiente que comprobara la viabilidad técnica ambiental del Proyecto, esto es, la multiplicidad de fallas que contenía la MIA y la deficiente respuesta al RIA, tal como se explicó en las secciones previas.

(2) La ubicación de las comunidades indígenas según la MIA del Proyecto Ixtaca

503. Según la MIA del Proyecto Ixtaca, las concesiones Cerro Grande R1 y Cerro Grande 2 R3 únicamente traslapaban el espacio geográfico de las localidades de Santa María Zotoltepec y Zacatepec, quedando aparentemente fuera Tuligtic (San Miguel), donde se encuentra la comunidad indígena de Tecoltemi, tal como se muestra en la siguiente imagen:

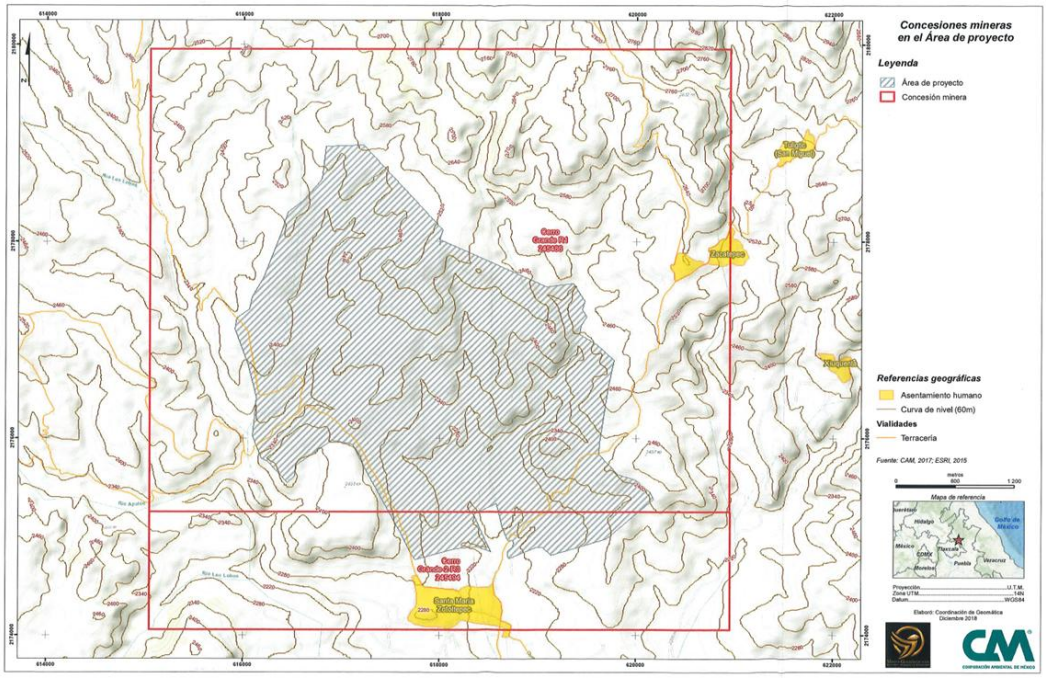
---

597 Réplica, ¶ 716.

598 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019. **C-0262.**

599 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 213-215.

Imagen: Comunidades/localidades que se ubicaban en las concesiones reducidas

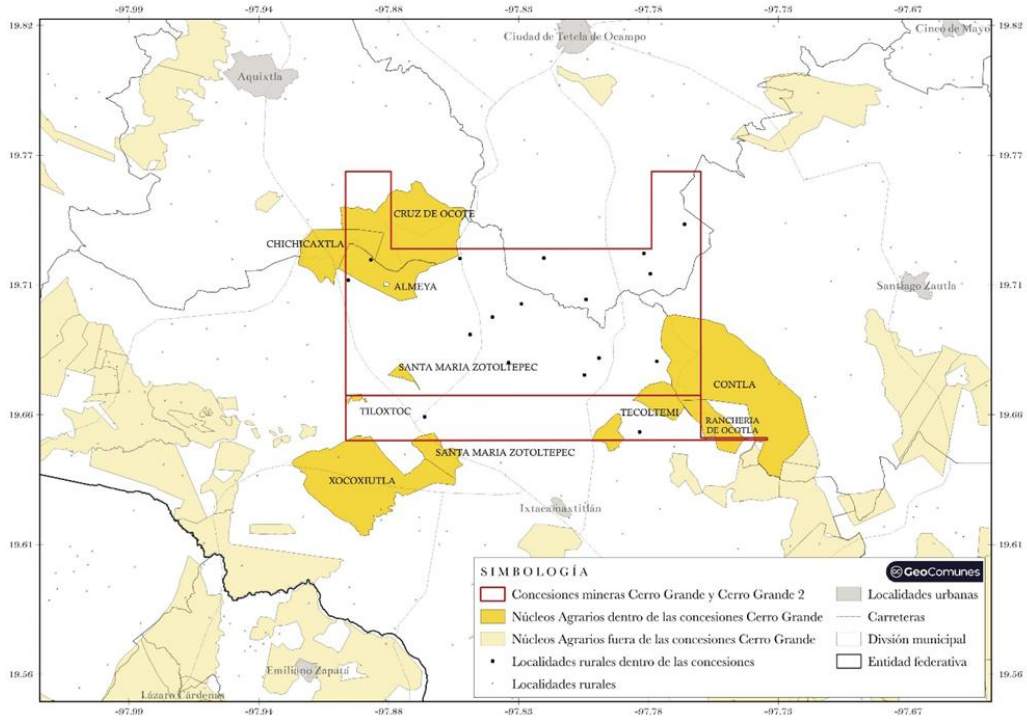


Fuente: MIA del Proyecto Ixtaca (p. I-7). **C-0262.**

504. Sin embargo, no se pueden ignorar dos puntos. *Primero*, la MIA fue presentada ante SEMARNAT bajo las Concesiones reducidas, dejando así de lado que impactaban asentamientos humanos. Como lo señaló la Dra. Torres,[600] las asambleas agrarias de los ejidos de Tecoltemic, Santa María, Almeya, Tateno y Contla no fueron informadas ni consultadas respecto de las Concesiones ni de la realización del Proyecto Ixtaca.

600 Primer Informe Dra. Torres, ¶ 86.

Imagen: : Ejidos con tierras dentro de las concesiones Cerro Grande y Cerro Grande 2



Fuente: Primer Informe Dra. Torres, Imagen 1, 21.

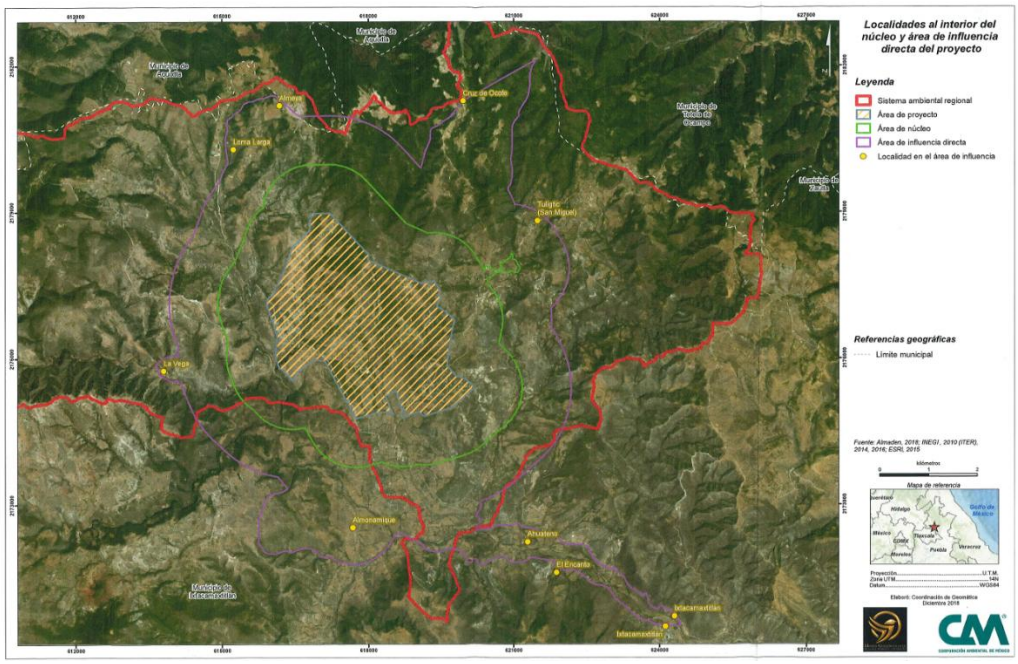
505. *Segundo*, es importante hacer notar al Tribunal que, aún y concediendo que dichas comunidades se encontraran fuera de las áreas de concesión, el análisis en el PEIA es diferente, en tanto la valoración de la autoridad no es sobre las áreas concesionadas —lo cual de por sí ya es un hecho controvertido— sino si existían asentamientos dentro del Área de Influencia y del SAR susceptibles de impacto ambiental.

506. Sin embargo, con el propósito de hacer una diferenciación de los impactos ambientales y sociales, las Demandantes dividieron el Área de Influencia en Zona Núcleo y Zona de Influencia Directa, trayendo estos conceptos de la legislación energética vigente para ese momento.[601]

601 El Área o Zona Núcleo es el espacio físico donde se construiría la infraestructura del Proyecto, abarca una superficie de 1,747.49 Ha e incluye una zona de amortiguamiento (buffer) de 1km. Identifica las localidades de Santa María Zotoltepec y Zacatepec, ambas del Municipio de Ixtacamaxtitlán. *Ver* Evaluación de Impacto Social Proyecto Ixtaca (EVIS), Resumen Ejecutivo, Julio 2018, pp. 13 y 14. **C-0252**. *Ver también*, Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, pp. IV-161 y IV-162. **C-0262**. El Área o Zona de Influencia Directa es el espacio físico contiguo al Área Núcleo "en el que se ubican los elementos socioeconómicos y

507. Según las Demandantes, la conjugación de los conceptos anteriores, en conjunto con el SAR y el Área del Proyecto se vería de la siguiente manera:

Imagen: Área del Proyecto, Área Núcleo, Área de Influencia Directa y SAR



Fuente: MIA del Proyecto Ixtaca (p. IV-163). **C-0262**.

508. Contrario a la conceptualización de la Guía MIA-R 2010, las Demandantes definen en el apartado social de su MIA (Resumen Ejecutivo de la EvIS) que el Área de Influencia "se establece con el propósito de identificar y caracterizar las localidades que interactúan con el proyecto en sus distintas fases; así como su grado de exposición a los posibles impactos generados, ya sean positivos o negativos".[602]

509. Tal caracterización del Área de Influencia no tiene ninguna justificación legal ambiental, en tanto las Demandantes dejan atrás una conceptualización de origen *ambiental* para darle,

socioculturales que podrían ser impactados directamente" por el Proyecto, tomándose en cuenta sus características, las corrientes de agua, las carreteras y caminos y los asentamientos humanos y/o localidades. Abarca un área de 3,538.57 Ha. Identifica a las poblaciones de Almonamique, Ixtacamaxtitlán, La Vega, Almeya, El Encanto, Cruz de Ocote, Loma Larga, Ahuateno, Tuligtic (San Miguel) e Ixtacamaxtitlán

602 Evaluación de Impacto Social Proyecto Ixtaca (EVIS), Resumen Ejecutivo, Julio 2018, p. 13. **C-0252.**

convenientemente, un tinte únicamente *social*, reduciendo así el verdadero impacto ambiental del Proyecto Ixtaca.

510. Lo anterior cobra relevancia porque, al utilizar el concepto de Área del Proyecto durante toda su MIA, y Área de Influencia *social* en varias ocasiones, las Demandantes acotaron el impacto ambiental que causaría el Proyecto Ixtaca pues este debía partir del SAR y no de cuestiones sociales, y subestimaron el impacto social del Proyecto al partir del Área del Proyecto y no de los asentamientos humanos que pudieran existir no solo en el Área de Influencia sino también en el SAR.

f. Suspensión del PEIA

511. La Demandada argumenta que "SEMARNAT lacked any legal basis to suspend the MIA evaluation".[603] Sin embargo, omite mencionar que existen aspectos de hecho bajo los cuales la autoridad razonablemente requería suspender el procedimiento hasta conocer el alcance de: (i) procedimientos legales en curso, (ii) posibles afectaciones sociales, y (iii) resolver cualquier impedimento y prevenir posibles violaciones a derechos sustantivos y procesales de comunidades indígenas que externaron preocupaciones legítimas.

512. La Demandada reconoce que en un curso normal de una PEIA la DGIRA debía resolver en 180 días.[604] Sin embargo, en este caso sucedieron situaciones atípicas y la DGIRA tenía dudas razonables en torno a los hechos relacionados con el Proyecto Ixtaca, por lo que la autoridad tomó la decisión de suspender el PEIA con fundamento en su autonomía técnica y los hechos acreditados en su expediente.[605]

513. Contrario al argumento de las Demandantes y su experto,[606] la DGIRA no se encuentra obligada a consultar a la UCAJ sobre el sentido o procedencia de su actuar dentro del PEIA.

514. La DGIRA tiene su margen de discrecionalidad sobre la apreciación técnica y administrativa respecto de las circunstancias que podían incidir directa o indirectamente en el PEIA, por lo que la autoridad determinó proteger los derechos de la comunidad con base en la

603 Réplica, ¶ 345.

604 Artículo 35 BIS, LGEEPA. **C-0156.**

605 Artículo 20, fracciones I y II, LGEEPA. **C-0156.**

606 Réplica, ¶ 349. Segundo Informe de experto del Sr. Limón, ¶ 79.

existencia de una suspensión definitiva otorgada en el Amparo 445/2015,[607] e informó a Minera Gorrión que suspendería el PEIA hasta no tener certeza jurídica sobre el estatus legal del Proyecto y así no transgredir la suspensión concedida en el Amparo Indirecto 445/2015.[608] La suspensión del PEIA puede no gustarle a las Demandantes, pero esa suspensión fue tomada dentro del ámbito de competencia de la DGIRA bajo su discrecionalidad y apreciación técnica y administrativa en materia de protección ambiental.[609]

515. Para claridad del Tribunal, el Juzgado 2º de Distrito informó que otorgó una *suspensión de plano* dentro del Amparo 445/2015 de la siguiente manera:

> Dígase a la autoridad oficiante que por acuerdo de ocho de abril de dos mil quince, se registró la demanda de amparo con el número 506/2015 y se admitió, asimismo, mediante proveído de ocho de junio de dos mil quince, se reenumeró el citado juicio de amparo bajo el nuevo número 445/2015, de igual forma en el citado auto de ocho de abril de dos mil quince, se concedió la suspensión de plano para los efectos siguiente:
>
> "…Por tanto, con fundamento en el artículo 126, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano solicitada, para el efecto de que el Ejido Tecoltemi no sea privado en forma total, parcial, temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a que se refiere la resolución presidencial de dotación de tierras de veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta, con motivo de los títulos de concesión 219469 y 233434 identificadas con nombres de lotes "Cerro Grande" y "Cerro Grande 2" en las cuales se autorizó la realización de obras y trabajos de exploración y explotación minera, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia definitiva que en su caso se llegue a dictar en el presente juicio..."[610] [énfasis añadido]

516. Aunque la suspensión dentro del Amparo 445/2015 es únicamente vinculante a las partes en ese procedimiento, la respuesta del Juzgado es muy general y no se puede inferir el alcance de la suspensión con claridad y así descartar que la SEMARNAT no estaba descartada de esa suspensión de pleno derecho. Adicionalmente, la autoridad ambiental (en el caso del PEIA) la DGIRA, tiene su actuar delimitado a la LGEEPA y su Reglamento, por lo que, su actuar siempre es bajo el principio Preventivo y Precautorio.

---

607 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 111.

608 Oficio SGPA/DGIRA/DG/8394 por el que la DGIRA suspende el PEIA. **C-0322**.

609 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶112-115.

610 Acuerdo del Juzgado Segundo de Distrito por el que informa a la DGIRA que dentro del Amparo Indirecto 445/2015 fue emitida una suspensión de plano. **C-0316**.

517. La autoridad ambiental consideró que la suspensión del PEIA evitaría cualquier posible contravención en materia ambiental y así momentáneamente evitar una posible violación de derechos procesales, para no afectar la protección jurídica otorgada por el Poder Judicial Federal en favor de las comunidades indígenas cuyo territorio suponía una posible afectación.[611] En su caso, la suspensión buscó garantizar el derecho a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, motivo suficiente para justificar la suspensión del PEIA, bajo la lógica de favorecer la protección más amplia sobre el derecho de la comunidad indígena.

518. La suspensión del PEIA fue notificada a las Demandantes el 29 de octubre de 2019, esta notificación fue cinco días después de haberse emitido la suspensión, el cual es un plazo razonable, y tuvieron la oportunidad de impugnarlo.[612]

519. Sobre esta suspensión, las Demandantes señalan que impugnaron esta suspensión por dos vías: dentro del Amparo Indirecto 445/2015)[613] y ante el Órgano Interno de Control de la SEMARNAT.[614] Sin embargo, esto no es del todo correcto, porque la vía para impugnar la decisión de suspensión del PEIA debía ser mediante un nuevo juicio de amparo e independiente sobre ese acto administrativo, situación que las Demandantes no ejercieron.

520. Lo anterior, es contradictorio con su propia postura en el arbitraje, ya que las Demandantes señalan que utilizaron la vía de amparo para impugnar la suspensión de la SEMARNAT, aun sabiendo que en ese procedimiento judicial no era parte la DGIRA. Situación que es contradictoria con su postura, al señalar que no era vinculante para la DGIRA y por ende no debía suspender el PEIA, pero curiosamente, utilizó ese mismo procedimiento para buscar que la DGIRA levantara la suspensión del PEIA.

---

611 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 105 y 106.

612 Oficio SGPA/DGIRA/DG/8394 por el que la DGIRA suspende el PEIA. **C-0322.**

613 Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión presentado por Minera Gorrión dentro del Amparo Indirecto 445/2015, por medio del que impugna la suspensión del PEIA, 04 de febrero de 2020. **C-0653.** Sentencia del Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento respecto de la suspensión en el PEIA, 03 de septiembre de 2020. **C-0652.**

614 Réplica, ¶¶ 355, 356.

521. Ese procedimiento no era el adecuado y las Demandantes utilizaron una vía legal que no era aplicable.[615]

522. Es erróneo afirmar que el Juzgado 2° de Distrito resolvió sobre algún recurso presentado por las Demandantes y que requirió a la DGIRA levantar la suspensión del PEIA.[616] En realidad, la DGIRA envió un segundo oficio al Juzgado 2° de Distrito preguntado sobre el estatus del amparo y los alcances de la suspensión, a lo cual el juzgado respondió a la DGIRA que no estaba vinculada con el Amparo 445/2015 y, por tanto, podía levantar la suspensión del PEIA.[617]

523. Por su parte, la queja presentada ante el OIC de la SEMARNAT es un procedimiento de responsabilidad administrativa a servidores públicos y su naturaleza es confidencial, dentro del cual el particular no es parte del procedimiento. Este procedimiento tiene la finalidad de fincar responsabilidad (si es que se acredita), pero no es un procedimiento resarcitorio sobre la medida reclamada.

524. Una vez que el Juzgado 2º de Distrito informó que la suspensión no era vinculante a la DGIRA y fue levantada la suspensión,[618] la DGIRA continuó con su proceso deliberativo interno y el 17 de diciembre de 2020 emitió su Resolución en la que negó la emisión de una AIA. El plazo desde el levantamiento de la suspensión es razonable (*i.e.*, 3 meses).

525. La suspensión razonada del PEIA, no constituyó por sí misma una violación al Debido Proceso o interferencia a la Seguridad Jurídica de Minera Gorrión, porque fue impuesta en el marco de facultades de la DGIRA, fue razonada ante situaciones atípicas y las Demandantes tenían a su alcance diversas vías para remediar u obligar a la autoridad a resolver.[619]

526. Un aspecto transversal que afectó la actividad global en este periodo fue la pandemia de COVID-19, situación que desde marzo de 2020 derivó en la suspensión total de actividades por

---

615 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 52. *Ver* Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, § XI.

616 Réplica, ¶¶ 356.

617 Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/01558 por el que la DGIRA consulta por segunda vez al Juzgado de Distrito sobre la reanudación del PEIA, 21 de febrero de 2020. **C-0335**.

618 Acuerdo del Juzgado 2º de Distrito por el que señala a la DGIRA que tiene libertad de jurisdicción para resolver el PEIA, 3 de septiembre de 2020. **C-0343.**

619 Memorial, ¶ 343. Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 148 y 149.

parte del gobierno de México; que incluyó a la SEMARNAT y al Poder Judicial de la Federación, del que el Juzgado 2º de Distrito forma parte.[620]

527. Otro aspecto que las Demandantes confunden, son sus referencias al sistema interno de la SEMARNAT, sobre el cambio de evaluador de último momento en el SINAT es imprecisa,[621] el evaluador siempre fue el mismo (*i.e*. el Sr. Miguel Barrera Perales) y lo señalado por el experto de las Demandantes solo es a partir de un correo interno para reactivar en el sistema interno el estatus del procedimiento; pero siempre fue el mismo servidor público el encargado de dar seguimiento técnico durante el PEIA, muestra de ello es que en las diferentes etapas del PEIA aparece el Sr. Miguel Barrera Perales como evaluador.[622]

528. Por último, las Demandantes tuvieron la posibilidad de interponer recursos legales adicionales para obligar a la autoridad a resolver el PEIA a través de: *(i)* un amparo indirecto en contra de la suspensión (*i.e.,* acción directa contra ese acto administrativo), *(ii)* interponer una solicitud de derecho de petición que conlleva solicitar una "Negativa ficta",[623] o (iii) impugnar la negativa ficta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.[624] Las Demandantes no ejercieron ninguna de estas vías, por lo que, las Demandantes consintieron la suspensión temporal del PEIA, sin existir privación de derecho alguno a Minera Gorrión.

g. La resolución de la MIA se basó en cuestiones técnicas y no en ordenes políticas

529. Las Demandantes pretenden hacer creer al Tribunal que la Negativa de la AIA fue el resultado de una presunta orden política, señalando que "the MIA Denial Decision executed the AMLO administration's political directive to block environmental permits for open-pit mining".[625] Como lo refirió la Demandada en su Memorial de Contestación,[626] tal señalamiento es incorrecto

620 Memorial, ¶¶ 259-261.

621 Réplica, ¶¶ 358 – 359.

622 Registro de movimientos dentro del PEIA (SINAT) **R-0209.**

623 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 26, 109 y 110.

624 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 330 y 333.

625 Réplica, ¶ 363.

626 Memorial de Contestación, § II.2.e.

y solo pretende evadir las verdaderas cuestiones técnicas de protección ambiental y social que hay detrás de la resolución.

530. La DGIRA señaló expresamente que para emitir su resolución revisó que la MIA se ajustara a las formalidades —incluidas aquí las formalidades esenciales del procedimiento— previstas en la LGEEPA, su Reglamento y las NOMs aplicables, sujetándose también a los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y demás disposiciones jurídicas aplicables.[627]

531. Además, es importante notar que, respecto de varios puntos torales de su MIA, las Demandantes tuvieron la oportunidad de demostrar la viabilidad ambiental y social de su proyecto al responder el RIA formulado por la DGIRA. Sin embargo, Minera Gorrión se limitó a reiterar que su MIA era correcta —lo cual no era así—, sin subsanar ni atender puntualmente cada uno de los requerimientos que hizo la DGIRA,[628] tal como se verá a continuación.

532. Como aspectos generales del Proyecto Ixtaca, se destacan los siguientes: la duración del proyecto sería de 14.5 años;[629] como parte de las obras del Proyecto, se incluía una tepetatera sur y otra oeste, el tajo, las presas de agua WSD y FWD, y la planta de beneficio, abarcando en total el Área del Proyecto una superficie de 1,044.02 Ha.[630]

(1) Cuestiones hídricas

533. Para la captación, administración y suministro del agua, la MIA del Proyecto Ixtaca se acompañó del modelo de balance hídrico realizado por SRK en 2018 "correspondiente al AP" que cuantificaría el agua disponible y requerida para el uso de la mina.[631] El Proyecto Ixtaca contemplaba la construcción de dos presas de agua denominadas FWD y WSD, con capacidad de

627 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, considerando 3, p. 12. **C-0086.**

628 Información Adicional presentada por Minera Gorrión, julio 2019. **C-0299.**

629 Según la MIA del Proyecto Ixtaca, las etapas del proyecto serían: *i)* preparación del sitio (0.5 años); construcción (1 año); *iii)* operación y mantenimiento (11 años) y cierre (1 año), lo que en suma da un total de 13.5 años y no 14.5 años. *Ver* Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, p. I-8. **C-0262.**

630 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, pp. II-9 y II-10. **C-0262.**

631 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, p. II-13. **C-0262.**

300,000 m^3 y 1,800,000 m^3, respectivamente. Los propios estudios de Minera Gorrión señalaban que los niveles de agua de la presa FWD fluctuarían debido a eventos de tormentas y a las demandas de la Planta de Proceso,[632] mientras que la presa WSD constituiría "la instalación principal para el manejo del agua superficial relacionada con el tajo".[633] Como se podrá ver más a adelante, las cuestiones hídricas del Proyecto Ixtaca tenían diversas inconsistencias.[634]

534. Ante las deficiencias de la información presentada en la MIA, la DGIRA solicitó como parte de su RIA, los estudios de disponibilidad de agua dentro de la cuenca, a través de los que se acreditara que por el aprovechamiento del agua en las actividades mineras con los volúmenes propuestos, no se ocasionaría un detrimento en cuanto a los "usos consuntivos"[635] del agua por parte de otras actividades presentes dentro del Área de Influencia, considerando el consumo de las necesidades de las poblaciones asentadas dentro del SAR —no solo el Área del Proyecto y/o el Área de Influencia—, garantizando su derecho humano a la disponibilidad del agua.[636]

535. De igual manera, solicitó hacer un análisis detallado de los efectos que tendría el Proyecto sobre el/los cauces que se aprovecharían para llevar a cabo la construcción de las presas FWD y WSD, incluyendo información sobre el caudal ecológico y considerando la descarga natural comprometida, *i.e.*, se debían señalar las aportaciones de los acuíferos como caudal base (*i.e.*, explicar y cuantificar como el agua subterránea contribuye al flujo de los ríos y arroyos, particularmente durante los periodos de lluvia), los escurrimientos superficiales, el régimen de

---

632 Expediente del PEIA del Proyecto Ixtaca, Tomo II, Programa de Monitoreo de agua superficial y subterránea, p. 169. **C-0629.**

633 Expediente del PEIA del Proyecto Ixtaca, Tomo II, Programa de Monitoreo de agua superficial y subterránea, p. 170. **C-0629.**

634 Dúplica, § F.4. Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, § VIII, E. e) a i).. Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 158-170. Segundo Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, § C.

635 El "uso consuntivo" se define como "[e]l volumen de agua de una calidad determinada que se consume al llevar a cabo una actividad específica, el cual se determina como la diferencia del volumen de una calidad determinada que se extrae, menos el volumen de una calidad también determinada que se descarga, y que se señalan en el título respectivo;", Artículo 3, fracción LV, Ley de Aguas Nacionales. **R-0076.** En otras palabras, el "uso consuntivo" del agua representa la porción del agua extraída que no regresa al sistema hídrico después de ser utilizada. Se calcula restando del volumen extraído el volumen efectictivamente descargado.

636 Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/03541 por el que la DGIRA solicita Información Adicional a Minera Gorrión, requerimiento a), 9 de mayo de 2019. **C-0285.**

extracción de la Cuenca y el agua comprometida aguas abajo de la zona donde se instalarían los reservorios.[637]

536. En atención a los requerimientos de la DGIRA, Minera Gorrión señaló dentro de su MIA que, con base en el Acuerdo 2016 de CONAGUA,[638] y un método previsto en la NOM-011-CONAGUA-2015,[639] la Cuenca hidrológica Río Tecolutla tenía un volumen disponible de salida de 6.058,73 millones de m^3, por lo que, según Minera Gorrión, no se comprometería la disponibilidad hídrica; de manera similar, señaló que la disponibilidad de aguas subterráneas tampoco se comprometería, puesto que, de conformidad con un Acuerdo de aguas subterráneas,[640] el Acuífero "Río Tecolutla" tenía una disponibilidad media anual (DMA) positiva de 27,596,238 m3, de los cuales solo consumirían entre el 2.2% y el 3.9% durante la etapa de operación y mantenimiento.[641] Minera Gorrión acompañó una tabla con los requerimientos de agua del Proyecto para los primeros 12 años.[642]

537. Con base en el estudio de SRK, Minera Gorrión señaló que las fuentes principales de las que se abastecería el Proyecto serían los escurrimientos al interior del tajo, mientras que la captación de agua pluvial de las presas FWD y WSD sería una fuente complementaria,[643] cuyos volúmenes captados estarían disponibles para la comunidad —sin señalar qué comunidad ni cómo lograría ello— o para canalizarse cauces aguas abajo.

---

637 Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/03541 por el que la DGIRA solicita Información Adicional a Minera Gorrión, requerimiento d), 9 de mayo de 2019. **C-0285.**

638 "Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos", publicado en el DOF el 7 de julio de 2016. **R-0210.**

639 NORMA Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, Conservación del recurso agua-Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, publicada en el DOF el 27 de marzo de 2015. **R-0211.**

640 ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las Regiones Hidrológico-Administrativas que se indican, publicado en el DOF el 04 de enero de 2018. **R-0255.**

641 Información Adicional presentada por Minera Gorrión, julio 2019, pp. 1-7. **C-0299.**

642 Información Adicional presentada por Minera Gorrión, julio 2019, pp. 5 y 6. **C-0299.**

643 Información Adicional presentada por Minera Gorrión, julio 2019, p. 5. **C-0299.** Anexo A Estudio de Factibilidad del Balance Hídrico del Sitio. Proyecto Ixtaca, 10 de abril de 2019. Expediente del PEIA del Proyecto Ixtaca, Tomo II, pp. 146-208. **C-0629.**

538. Por cuanto hace a la intervención de cauces, Minera Gorrión señaló que la construcción y operación de las presas implicaría "un bloqueo temporal del cauce, re-encausamiento, construcción de la presa, acumulación y almacenamiento y alternativas de desvío" para los ecosistemas aguas abajo", interceptando la corriente "Barranca Cuatepazolco" y el arroyo "Hacienda Vieja". Además, Minera Gorrión señaló que, con base en la disponibilidad de agua referida, se captaría agua suficiente para asegurar que los caudales ecológicos aguas abajo no se comprometan, refiriendo que el impacto ambiental tendría una intensidad baja, a pesar de señalar que su construcción llevaría 1 año y que su impacto sería permanente al no poder regresar el cauce a su estado natural.[644]

539. Finalmente, Minera Gorrión se limitó a afirmar —sin ningún respaldo— que con la instalación de ambas presas de agua, "se contar[ía] con una fuente de agua constante y suficiente tanto para el Proyecto, como para la comunidad y manteniendo la continuidad de los ecosistemas aguas abajo del AP", no vulnerando, según Minera Gorrión, el derecho humano de acceso al agua de la población.[645]

540. En la resolución, la DGIRA señaló que solo se presentaron los resultados de disponibilidad hídrica de los primeros 12 años, y no para los restantes años de la vida útil del Proyecto, siendo ello importante porque Minera Gorrión señaló que en los primeros años el consumo de agua es menor, lo que implica una subestimación de las necesidades reales de agua.[646]

541. Además, si bien se presentaron medidas de prevención y mitigación complementarias (monitoreo de flujo aguas arriba y abajo de las presas y actualización periódica del caudal ecológico), la DGIRA señaló que Minera Gorrión no presentó los impactos, medidas y/o consecuencias de la interrupción de los cauces que se realizaría por la construcción de ambas presas; no señaló cómo es que durante su construcción de las presas el agua estará disponible para la comunidad y/o para los procesos de los ecosistemas aguas abajo y aguas arriba; no presentó los elementos técnicos para determinar qué efectos tendría el establecimiento de las presas aguas

644 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, pp. 34-37. **C-0086.**

645 Información Adicional presentada por Minera Gorrión, julio 2019, pp. 6-7. **C-0299.**

646 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, p. 33. **C-0086.**

arriba y aguas abajo; ni determinó los impactos que existirían en caso de sequías o lluvias atípicas.[647]

542. Como lo han señalado los expertos de la Demandada,[648] la construcción de ambas presas implicaba en sí mismo la interferencia de cauces, lo cual se evidencia claramente con los mapas que la misma Minera Gorrión presentó[649] y con las confirmaciones que de esto los expertos de la Demandada han realizado;[650] sin embargo Minera Gorrión no explicó de manera detallada cuáles serían los impactos ambientales de dicha interferencia, ni tampoco demostró la suficiencia hídrica de su proyecto.

(2) Cuestiones de jales y tepetates

543. Para mayor claridad del Tribunal, los expertos de la Demandada han señalado que Minera Gorrión insistió en no llamar "presa de jales" a la estructura donde se depositarían los residuos mineros, refiriéndose a ella como "tepetatera".[651] Desde su Primer Informe, los Sres. Del Razo y Rábago, señalaron las deficiencias de dicha caracterización, en tanto el método de disposición de jales descrito en la MIA-R, es realmente una modalidad específica de "presa de jales" consistente en depositar los jales en "estado seco" o "filtrados",[652] lo que implica que, independientemente de la caracterización que de estos hagan las Demandantes, el Proyecto Ixtaca se encontraba sujeto al cumplimiento de la NOM-141.

544. Como parte de su RIA, y tomando en consideración que la misma Minera Gorrión había señalado que, en caso de requerir capacidad adicional para los jales y tepetates, se podría colocar una "instalación separada de disposición conjunta", la DGIRA solicitó presentar la información

---

647 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, pp. 33-37. **C-0086.**

648 "[C]constantemente se insiste en que las presas son de agua pluvial […], aún y cuando se trata de aprovechamiento de aguas superficiales sobre cauces de corrientes claramente definidas incluso reconocidas en la propia MIA-R. Este error de definición genera claridad para la autoridad ambiental, al no permitir valorar con precisión el origen, disponibilidad y competencia legal sobre el recurso". Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 166.

649 Información Adicional presentada por Minera Gorrión, julio 2019, Anexo D, p. D-5 y D-6. **C-0299.**

650 Segundo Informe de de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 290.

651 El término *tepetatera* "se utiliza tradicionalmente para designar el sitio de disposición de materia esteril o sin valor económico proveniente del minado, el cual no corresponde ni se origina del mismo proceso que genera los jales, ya que estos últimos derivan de las operaciones de beneficio y concentración mineral". Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 180, ii.

652 Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 172.

técnica relacionada con dicha obra (características, efectos, medidas de prevención y/ mitigación, etc.). Asimismo, si bien Minera Gorrión señaló en reiteradas ocasiones dentro de su MIA que el Proyecto Ixtaca no incluía una presa de jales[653], y dado que existirían cambios en las formas de terreno, la DGIRA solicitó realizar la vinculación del Proyecto Ixtaca con la NOM-141 consideradas todas las etapas del Proyecto.[654]

545. En respuesta al RIA, Minera Gorrión señaló que, dado que el proceso de explotación incluía el mecanismo de "*ore sorting*" y tomando en cuenta las reservas conocidas, no se requeriría un lugar adicional, *i.e.*, cambió de postura a lo previamente señalado en su MIA, por lo que no presentó la información de la posible obra. Por cuanto hace a la vinculación con la NOM-141, se limitó a remitir su compromiso de cumplir con la NOM-141, particularmente con las especificaciones de caracterización de los jales y el diseño de las instalaciones, reiterando que se basan en el estudio de factibilidad desarrollado por SRK, *i.e.*, no realizaron la vinculación solicitada por la DGIRA, ello tomando en cuenta las diversas deficiencias de vinculación que señaló Minera Gorrión en su MIA.

546. Considerando las deficiencias anteriores, la DGIRA determinó, entre otras cosas, que Minera Gorrión omitió presentar la vinculación del Proyecto con la totalidad de los criterios y lineamientos señalados en la NOM-141; que aun y cuando señaló que por la disposición conjunta de jales y tepetates no se generaría drenaje ácido, no se presentó ninguna medida adicional para evitar un posible lixiviado (filtración) de materiales riesgosos al suelo, ni se cuenta con información referente a una eventual degradación de la calidad de agua subterránea; omitió presentar elementos técnicos de los sitios donde se extrajeron las muestras de tepetate y jales para realizar su caracterización para determinar su descripción física y química y, en consecuencia, saber si no generarían drenaje ácido.[655]

---

653 Conforme la NOM-141, se entiende por *jales* a los "residuos sólidos generados en las operaciones primarias de separación y concentración de minerales" y por *presa de jales* a "la obra de ingeniería para el almacenamiento o disposición final de los jales, cuya construcción y operación ocurren simultáneamente".

654 Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/03541 por el que la DGIRA solicita Información Adicional a Minera Gorrión, requerimiento f), 9 de mayo de 2019. **C-0285.**

655 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, p. 61. **C-0086.**

(3) Flora y fauna

547. Derivado de la identificación en la MIA de especies de flora y fauna listadas en la NOM-059, se solicitó a Minera Gorrión *i)* presentar la información técnico-científica que garantizara que el Proyecto Ixtaca no afectaría a dichas especies, puesto que, *ii)* en caso contrario, se debía presentar la información sobre los posibles impactos que se causarían en el SAR, ÁI y AP, así como *iii)* describir las medidas de prevención, control, mitigación y/o acciones de conservación y protección a implementarse para tales especies.[656]

548. En la MIA, Minera Gorrión se limitó a señalar que no se afectaría *especies* sino *individuos* de estas, por lo que no se pondrían en riesgo las especies. Minera Gorrión señaló que realizaría acciones de conservación (sin señalar cuáles o remitir a una parte especifica de la MIA), así como que se diseñaría un plan de manejo específico para el cedro blanco, especie protegida bajo la NOM-059; sin embargo, Minera Gorrión no acompañó dicho plan, no acompañó las medidas de mitigación y compensación ni remitió a alguna parte especifica de la MIA.

549. La DGIRA señaló en su resolución que Minera Gorrión utilizó información desactualizada para identificar el uso de suelo y vegetación en el SAR y el Área del Proyecto, identificando que un tipo de vegetación (bosque de táscate) ocupaba solo el 0.05% Ha del Área del Proyecto. La DGIRA comparó tales datos con los datos del Sistema de Información Geográfica para la Evaluación de Impacto Ambiental (SIGEIA), encontrando que la superficie que realmente ocupaba era de 8.4429 Ha,[657] *i.e.*, Minera Gorrión subestimó la superficie del bosque y, en consecuencia, los impactos que le podría causar el Proyecto Ixtaca, y no indicó qué superficie total del bosque de táscate removería durante todo el ciclo del Proyecto.

550. Más importante aún es que Minera Gorrión solo muestreó o valoró el 1.15% del Área del Proyecto respecto de la vegetación,[658] denotando la clara subestimación de los impactos que el Proyecto pudiera tener sobre esta.

---

656 Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/03541 por el que la DGIRA solicita Información Adicional a Minera Gorrión, requerimiento e), 9 de mayo de 2019. **C-0285.**

657 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, pp. 84-85. **C-0086.**

658 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, p. 87. **C-0086.**

551. Como lo señalan los expertos de la Demandada, "[r]esulta particularmente relevante que, pese a identificar 12 impactos severos, 24 residuales y 11 acumulativos, la MIA-R concluyera que no existía ningún impacto ambiental significativo".[659]

(4) Cuestiones indígenas

552. Como se señaló previamente,[660] Minera Gorrión señaló en su MIA que el Área de Influencia *social*[661] estaba dividida en Zona Núcleo y Zona de Influencia Directa. A pesar de señalar la realización de trabajos de campo,[662] Minera Gorrión identificó la existencia de tan solo 674 habitantes del municipio de Ixtacamaxtitlán en la *Zona Núcleo* del Proyecto Ixtaca, justificando los datos con el censo de población 2010 del INEGI.[663] Por cuanto hace a *la Zona de Influencia Indirecta*, Minera Gorrión identificó la existencia de 1,283 habitantes pertenecientes a 10 localidades.[664]

553. Respecto de la población indígena en el Área de Influencia *social*, Minera Gorrión identificó la existencia de 121 habitantes (según datos del INEGI) y de 110 habitantes (según datos de la CDI), señalando que, si bien de conformidad con los catálogos de la CDI el municipio de Ixtacamaxtitlán es considerado municipio con presencia indígena, "la división administrativa municipal no necesariamente corresponde con el área que abarcan las regiones indígena".[665] Las conclusiones de Minera Gorrión sobre este aspecto fueron las siguientes:

> Derivado del trabajo de campo, se concluye que no se identificaron comunidades indígenas ni el habla de lenguas originarias dentro del área de influencia del proyecto. Tampoco se identificaron autoridades tradicionales. Ninguno de los entrevistados mencionó tener autoadscripción indígena, ni conocer a habitantes de las localidades del área de influencia que la tuvieran (salvo el caso del migrante que viviría en Tuligtic a quien no fue posible identificar en campo). Como se mencionó anteriormente, únicamente se identificó a una mujer adulta mayor en la localidad de Zacatepec, quien

---

659 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 261.

660 Dúplica, § F.1.b.

661 Minera Gorrión señaló en su MIA que, "para fines de la Evaluación de Impacto Social", el Área de Influencia era el "espacio físico asociado al alcance máximo de los impactos directos e indirectos ocasionados por el proyecto (Ixtaca) en el SAR o región". Expediente del PEIA del Proyecto Ixtaca, Tomo I, p. IV-161. **C-0611.**

662 Expediente del PEIA del Proyecto Ixtaca, Tomo I, p. IV-185. **C-0611**.

663 Expediente del PEIA del Proyecto Ixtaca, Tomo I, p. IV-161. **C-0611**.

664 Expediente del PEIA del Proyecto Ixtaca, Tomo I, p. IV-162. **C-0611**.

665 Expediente del PEIA del Proyecto Ixtaca, Tomo I, p. IV-183. **C-0611**.

> aun a pesar de conocer la lengua náhuatl, ya no la práctica, y considera no tener autoadscripción a ninguna etnia indígena.[666] [Énfasis añadido]

554. En suma, y como fue señalado *supra*, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sí reconoció la presencia indígena en un inicio. [667]

555. La DGIRA realizó solicitudes de Opinión Técnica al INPI, INPI Puebla,[668] la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas del Gobierno de Puebla,[669] con miras a identificar si con "el desarrollo de las obras y/o actividades pretendidas para dicho proyecto, un sujeto colectivo de población indígena pudiera verse afectado en sus intereses y/o derechos humanos" conforme el Convenio 169 de la OIT y las Recomendaciones 37/2012 y 56/2012 de la CNDH.[670]

556. Como lo señaló la Demandada en su Memorial de Contestación,[671] las autoridades respondieron lo siguiente:

- **Opinión Técnica INPI Puebla:** con base en el censo del INEGI de 2010, ubicó al Ejido Santa María Zotoltepec con 46 sujetos agrarios y a la localidad de "Santa María Zotoltepec", señalando que, en 2010, se registraban 431 habitantes, de los cuales 24 eran indígenas. El INPI Puebla señaló que los procesos de consulta no se determinan por el número de habitantes indígenas, recomendando sostener un diálogo con las comunidades

---

666 Expediente del PEIA del Proyecto Ixtaca, Tomo I, p. IV-185. **C-0611**. Como podrá notar el Tribunal, tal afirmación es falsa. Las Demandantes conocían de la presencia indígena en el muncipio de Ixtacamaxtitlán por lo menos desde el Amparo Indirecto 445/2015 presentado por la Comunidad indígena y Ejido de Tecoltemic. *Ver* Amparo 445/2015 interpuesto por la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemic y el Ejido de Tecoltemic (Sexto Distrito Judicial de la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla), 7 de abril de 2015. **C-0032.**

667 Oficio No. CGPE/2018/OF/0802 de la CDI en relación con la presencia indígena en el Proyecto Ixtaca, 28 de septiembre de 2018. **C-0257.**

668 Oficio SGPA/DGIRA/DG/01803 por el que DGIRA solicita la Opinión Técnica del INPI Puebla, 4 de marzo de 2019. **R-0056**.

669 Oficio SGPA/DGIRA/DG/01806 por el que DGIRA solicita la Opinión Técnica a la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas del Gobierno del estado de Puebla, 4 de marzo de 2019. **R-0060.**

670 CNDH, Recomendación 37/2012 sobre el caso del proyecto "Acueducto Independencia", en el estado de Sonora, 9 de agosto de 2012. **R-0212.** CNDH, Recomendación 56/2012 sobre la violación de los derechos humanos colectivos a la consulta, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, medio ambiente sano, agua potable, saneamiento de la y protección de la salud del pueblo Wixárika en Wirikuta, 28 de septiembre de 2012. **R-0213.**

671 *Ver* Memorial de Contestación, ¶¶ 241-247.

indígenas. Adjuntó un Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas.[672]

- **Opinión Técnica Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México:** señaló la obligación del Estado mexicano de realizar la Consulta Indígena; con base en el censo del INEGI de 2015, determinó que el municipio de Ixtacamaxtitlán tiene una población de 24,512 habitantes, de los cuales 4841 (19.75%) son población indígena. La Comisión identificó que Minera Gorrión no consideró las estadísticas oficiales pues solo identificó que el 11.06% de la población del Municipio de Ixtacamaxtitlán era indígena, y que solo el 2.3% de ella se localizaba en el Área de Influencia *social* del Proyecto Ixtaca. La Comisión señaló que la SEMARNAT, "en caso de ser la instancia gubernamental que implementará medidas administrativas que puedan afectar a los pueblos o comunidades indígenas […], fungiría como la autoridad responsable de realizar las Consultas necesarias a los pueblos indígenas". En concordancia con lo señalado por el INPI, la Comisión señaló que, en su caso, el procedimiento de Consulta Indígena sería determinado por el INPI como autoridad competente.[673]
- **Subsecretaria de Atención a Pueblos Indígenas del Gobierno de Puebla:** con base en un oficio remitido por el INPI (federal),[674] la Comisión señaló la identificación de 71 localidades con presencia indígena en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Los datos del INPI se basaron en el Censo del INEGI de 2010 y la Encuesta Intercensal de 2015;[675] de las 71 localidades con presencia indígena identificadas, en 28 de ellas la población indígena representaba entre el 44 y 100%.[676]

557. En síntesis, contrario a lo dicho por Minera Gorrión, las autoridades confirmaron la presencia de habitantes indígenas en el Municipio de Ixtacamaxtitlán.

---

672 El Protocolo se denomina "Bases, Principios y Metodología para su implementación en la administración pública federal"; el INPI lo acompañó señalando que este tiene como objetivo establecer los procedimientos metodológicos y técnicos para que los pueblos y comunidades indígenas sean consultados, definiendo un marco de actuación para el INPI y las autoridades en los procesos de Consulta Indígena. *Ver* Oficio DPUE/2019/OF/0373 mediante el que el INPI remite su Opinión Técnica, 10 de abril de 2019. **R-0057.**

673 Oficio No. SG/CDPIM/102/2019 por el que la Comisión remite Opinión Técnica a la DGIRA, 11 de marzo de 2019. **R-0059.**

674 Oficio No. CGPE/2018/OF/1084 de la Coordinación General de Planeación y Evaluación del INPI por el que se informan las localidades indígenas en el municipio de Ixtacamaxtitlán, 24 de diciembre de 2018. **R-0214.**

675 Las encuestas intercensales son encuestas a nivel nacional que realiza el INEGI con el propósito de actualizar la información sociodemográfica a la mitad del periodo comprendido entre los Censos de Población y Vivienda que se realizan cada 10 años. INEGI, "*Qué es la encuesta intercensal 2025?*. **R-0215.**

676 Oficio No. CGPE/2018/OF/1084 de la Coordinación General de Planeación y Evaluación del INPI por el que se informan las localidades indígenas en el municipio de Ixtacamaxtitlán, 24 de diciembre de 2018. **R-0214.**

558. Respecto de la Opinión Técnica del INPI, Minera Gorrión hizo referencia a las labores hechas con las comunidades indígenas, señalando no haber identificado comunidades indígenas dentro del Área de Influencia *social*, concluyendo la inexistencia de "sujetos indígenas".[677] De la Opinión Técnica de la Subsecretaría, Minera Gorrión se limitó a presentar un listado de las localidades dentro del Área de Influencia *social*.[678] Finalmente, respecto de la Opinión Técnica de la Comisión, Minera Gorrión repite la misma respuesta para el INPI y concluye, con base en su trabajo de campo plasmado en la EvIS, la inexistencia de "sujetos indígenas".[679] Las Demandantes no cumplieron a cabalidad el RIA y se limitaron a reiterar la información errónea que presentaron en su MIA, por lo que la afirmación de las Demandantes sobre que la información está completa, de nueva cuenta es errónea.

559. La DGIRA señaló en su resolución que, a pesar de que Minera Gorrión refirió que no existían comunidades indígenas en el "área de influencia ambiental",[680] el Proyecto se localiza dentro del municipio de Ixtacamaxtitlán considerado con población indígena, por lo que no solo se debía considerar la población presente dentro de los radios de letalidad como señaló Minera Gorrión, sino la totalidad de las comunidades y/o localidades que se encuentren en el SAR, Área de Influencia, y Área del Proyecto.[681] Lo anterior es relevante porque Minera Gorrión delimitó inicialmente su Área de Influencia al impacto *social* que causaría y no así el impacto ambiental.

560. Las Demandantes han señalado un oficio mediante el que la DGIRA le solicitó a la UCPAST su intervención respecto a la Consulta Indígena.[682] Es incorrecto entender ello como una orden directa e inmediata de realizarla, o como una aseveración categórica de que esta inevitablemente se realizaría. Como lo ha explicado la Demandada a lo largo de esta sección, el propósito primigenio y principal del PEIA es realizar una *Evaluación de Impacto Ambiental* de los

677 Información adicional de Minera Gorrión, 7 de julio de 2019, pp. 57-59. **C-0299.**

678 Información adicional de Minera Gorrión, 7 de julio de 2019, pp. 60-61. **C-0299.**

679 Información adicional de Minera Gorrión, 7 de julio de 2019, pp. 66 y 67. **C-0299.**

680 Información Adicional presentada por Minera Gorrión, julio de 2019, p. 15. **C-0299.** ("Tal y como se explica en la MIA y como se profundiza a continuación, no sólo no hay comunidades indígenas en el **área de influencia ambiental** del Proyecto, entendida como la que puede sufrir afectaciones asociadas al mismo, sino que no existen localidades, término utilizado por INEGI, de ningún tipo dentro de los radios de afectación con letalidad, que se muestran en el Estudio de Riesgo.") [Énfasis añadido]

681 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, considerando 3, p. 15. **C-0086.**

682 Réplica, ¶¶ 345, 442, 443, 444, 447, 452, 967, 1047.

proyectos que sean sometidos a su consideración. Adoptar la interpretación de las Demandantes implicaría afirmar que la DGIRA dejó de lado su obligación fundamental de evaluación técnica para únicamente realizar la Consulta Indígena.

561. Tal como es del conocimiento del Tribunal, la Consulta Indígena es de carácter previo a la medida que el Estado pudiere llegar a realizar, lo cual es confirmado por el mismo Convenio 169 de la OIT al señalar que "cada vez que se *prevean* medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente" los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados.[683] En ese sentido, la Consulta Indígena se debe realizar, en su caso, cuando ya se haya decidido que una medida legislativa o administrativa está a punto de adoptarse.

562. En este caso la DGIRA debió haber determinado primero que, con base en la viabilidad ambiental y jurídica del proyecto, *preveía* emitir la AIA del Proyecto Ixtaca, activando en consecuencia el mecanismo de Consulta Indígena previo a emitir la AIA. Como podrá notar el Tribunal, ello no fue necesario porque la DGIRA, en el cumplimiento de sus atribuciones, determinó la no viabilidad técnica y jurídica ambiental del Proyecto Ixtaca, no habiendo necesidad de iniciar cualquier procedimiento de Consulta Indígena.[684]

(5) Análisis Técnico de la DGIRA

563. Para la evaluación de las MIA del Proyecto Ixtaca, la DGIRA consideró *i)* los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse los ecosistemas, tomando en cuenta el conjunto de elementos que los conforman, y no únicamente los recursos objeto de aprovechamiento o afectación; *ii)* la utilización de los recursos naturales, de tal forma que se respetara la integridad funcional y capacidades de carga de los ecosistemas; y *iii)* las medidas preventivas, de mitigación y otras propuestas por Minera Gorrión,[685] con sustento y bajo las especificaciones del marco normativo señalado previamente.

683 Artículo 6, numeral 1, inciso a). Convenio 169 de la OIT. **RL-0028.**

684 La Demandada aclara que en ningún momento ha reconocido o inferido que la obligación de realizar la Consulta Indígena deba ser atribuida al particular, ni mucho menos que la falta de esta haya sido si quiera un factor determinante para la negativa de la MIA del Proyecto Ixtaca. *Ver* Memorial de Contestación, ¶¶ 303-306.

685 Artículo 33, Reglamento de la LGEEPA. **C-0166.**

564. En ejercicio de su facultad de conducción de la política ambiental del país,[686] la resolución de la DGIRA tomó en cuenta sus obligaciones respecto a garantizar el derecho de un medio ambiente sano de las personas; preservar el medio ambiente; preservar y proteger la biodiversidad y garantizar la participación de las personas en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental.[687]

565. Asimismo, como parte del bloque de convencionalidad del Estado mexicano, toda autoridad tiene la obligación de proteger los derechos humanos —entre ellos el derecho a un medio ambiente sano— que sean reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.[688] En ese sentido, "cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con la biodiversidad tiene una protección especial para su conservación y preservación bajo los principios medioambientales de aplicación transversal (*precautorio, propter rem, in dubio pro natura,* de progresividad y de equidad intergeneracional).[689]

566. En ese sentido, tomando en consideración las facultades y obligaciones de protección ambiental de la DGIRA, así como las deficiencias principales —no las únicas— del Proyecto Ixtaca identificadas previamente, la DGIRA determinó que Minera Gorrión no presentó los elementos técnicos científicos necesarios para establecer una "certeza científica absoluta" que demostrara que el desarrollo del Proyecto, en los sitios seleccionados y delimitados por la misma Minera Gorrión (SAR, AI, AP), garantizarían la **viabilidad ambiental y jurídica** del Proyecto Ixtaca, por lo que decidió que no era posible determinar que el desarrollo del Proyecto Ixtaca no causaría desequilibrios ecológicos en los ecosistemas en los que se pretendía establecer.[690]

---

686 Artículo 5, fracción I, LGEEPA. **C-0156.**

687 Artículo 1, fracciones I, II, IV y VII, LGEEPA. **C-0156.**

688 Tesis jurisprudencial: IV.2o.A. J/7, "Control de convencionalidad. es una obligación ineludible de la autoridad jurisdiccional ejercerlo, aun de oficio, cuyo incumplimiento vulnera el mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del estado mexicano en su conjunto", Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, diciembre de 2013. **R-0216.**

689 Tesis: I.22o.A.12 A, "Parámetro de control constitucional en materia medioambiental. la solución de controversias que directa o indirectamente involucren una especie en peligro de extinción, impone el deber de protección reforzada y un análisis que atienda de manera transversal los principios precautorio, propter rem, in dubio pro natura, de progresividad y de equidad intergeneracional", Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, febrero de 2025. **R-0217.**

690 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, p. 133. **C-0086.**

567. Los expertos de la Demandada han referido que, contrario a lo señalado por las Demandantes y el Sr. Limón, "no resulta adecuado interpretar la referencia a 'certeza científica absoluta' como la imposición de una obligación de demostrar que el Proyecto Ixtaca jamás produciría daño alguno", sino que más bien dicha referencia "debe entenderse dentro del razonamiento técnico que la acompaña [a la resolución] y no de manera aislada".

568. "El problema examinado por la DGIRA era si la información disponible permitía conocer, con un grado suficiente de sustento técnico, los posibles efectos del Proyecto Ixtaca y determinar su viabilidad ambiental", *quad non*, además de que "la propia Resolución Negativa explica inmediatamente cuáles eran los elementos concretos que impedían a la autoridad alcanzar una determinación favorable".[691] La sola presentación de la MIA y la IA por parte de Minera Gorrión no son, *per se*, un motivo para acreditar que demostraron la viabilidad ambiental y jurídica del Proyecto, es evidente que la DGIRA necesitaba realizar un análisis de la información para confirmar que evidentemente así fuera.[692]

569. Asimismo, la DGIRA señaló que, al no existir los elementos suficientes que permitieran valorar si los impactos significativos del Proyecto Ixtaca causarían un daño grave o irreversible al medio ambiente, puesto que no se presentaron los estudios científicos necesarios, se debe negar la AIA con base en el Principio Precautorio ya que el Proyecto, al requerir un cambio de uso de suelo, puede poner en riesgo la integridad del Sistema ambiental de Ixtacamaxtitlán y demás áreas de influencia del Proyecto.[693]

570. Tal como ya lo demostró la Demandada, la DGIRA señaló expresamente que en la MIA y la IA, Minera Gorrión no presentó la información técnica y científica que demostrara la viabilidad ambiental del Proyecto, en tanto Minera Gorrión:

- No demostró la congruencia de las obras y actividades del Proyecto con los ordenamientos jurídicos que regulan el uso de suelo y demás normas aplicables;

---

691 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 176 y 574.

692 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 206 ("Si la SEMARNAT consideró que el desahogo de la Información Adicional de Minera Gorrión fue deficiente, ello implica que, dentro de su margen de apreciación como autoridad ambiental, evaluó el expediente con base en lainformación disponible, de manera integral y, con fundamento en los artículos citados en el párrafo anterior, emitió una resolución negative").

693 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, p. 139. **C-0086.**

- No presentó la justificación técnica e información suficiente de caracterización ambiental del SAR para los componentes de mayor afectación y relevancia (uso de suelo, flora, fauna, flujos hidrológicos) que permitiera analizar y evaluar de manera integral los componentes ambientales de ser afectados;
- No presentó una valoración e identificación integral de los posibles impactos ambientales, incluidos los **acumulativos, sinérgicos y residuales** que se pudieran ocasionar **en el SAR, el AI, y no solo en el Área del Proyecto**; y que
- Derivado de las deficiencias anteriores, las medidas de mitigación, compensación y prevención, así como los pronósticos ambientales **están subvaloradas.**[694]

571. Como podrá notar el Tribunal, las deficiencias de la MIA del Proyecto Ixtaca no eran menores, como para sugerir que la DGIRA podía aprobar el proyecto de manera condicionada, tal como lo han referido las Demandantes en reiteradas ocasiones.[695] Las deficiencias fueron tan graves que, por mencionar un ejemplo, al partir de una caracterización errónea del SAR y el Área de Influencia, ni siquiera fue posible identificar de manera real los diferentes tipos de impactos que realmente hubiese ocasionado el Proyecto Ixtaca.

572. El marco normativo de protección ambiental de la Demandada no está en oposición con el desarrollo de grandes proyectos, pero para su autorización siempre buscará que el aprovechamiento de los recursos se haga de manera sustentable, "de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas".[696] La tutela del medio ambiente de la Demandada no puede ser reprochada por el Tribunal. Además, es importante aclarar que el Proyecto Ixtaca nunca fue negado por la autoridad, en tanto lo que se negó fue únicamente la solicitud de AIA en los términos —deficientes— planteados por Minera Gorrión.

2. Las Demandantes no impugnaron la Resolución Negativa de la MIA

573. La Resolución de la DGIRA de diciembre de 2020 a través de la cual se negó la AIA, por omisiones técnicas y legales en el proyecto presentado en su MIA, fue plenamente analizada por las Demandantes, quienes conocían las implicaciones de no impugnar la Resolución por las vías legales y consentir la determinación de la autoridad ambiental.

694 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, p. 135. **C-0086.**

695 Réplica, ¶¶ 964, 968, 1022.

696 Artículo 1, fracción V, LGEEPA. **C-0156.**

574. El testigo de las Demandantes, el Sr. McDonald, reconoce que el equipo directivo de las Demandantes y abogados evaluaron sus opciones y consideraron que existían bases suficientes para impugnar judicialmente la Resolución negativa de la DGIRA, confirmando así que conocían la existencia de una vía de impugnación y que la consideraron seriamente. El testigo también señala que decidieron no impugnar porque a su consideración un litigio tardaría años, retrasaría el Proyecto y afectaría su relación con SEMARNAT, lo que muestra que la decisión de no impugnar fue estratégica y comercial, no producto de la inexistencia de una vía jurídica. [697] Las Demandantes publicaron la existencia de "alternativas legales" respecto de la Resolución negativa y de la posibilidad de volver a presentar la MIA, y afirma que eligieron esas palabras deliberadamente y cuidadosamente, lo cual confirma que las Demandantes conocían tanto la posibilidad de impugnar como la de volver a presentar la MIA. [698]

575. La primera implicación del curso de esas acciones fue la omisión deliberada de no impugnar la Negativa de Resolución, eso no es un tema menor, ya que las Demandantes consintieron la Resolución de la SEMARNAT y no ejercieron los medios legales a su disposición para revertir esa determinación en el sentido de negarla o buscar claridad sobre la determinación misma.[699]

576. La Negativa de MIA, que implica la falta de obtención de una AIA que convalida su Proyecto y sus implicaciones ambientales para iniciar su construcción y operación, no dejaba a las Demandantes en indefensión, ya que siempre tuvieron la posibilidad de promover algún tipo de impugnación.[700] El marco legal mexicano prevé mecanismos adecuados, eficaces y plenamente utilizados en la práctica para revisar actos administrativos en materia ambiental, entre los que se encuentra:

---

697 Segunda Declaración Testimonial del Sr. Douglas J. McDonald, ¶¶ 134, 135 y 139.

698 Segunda Declaración Testimonial del Sr. Douglas J. McDonald, ¶¶ 139.

699 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 332. ("Lo anterior confirma que las Demandantes conocían que tenían a salvo, conforme al sistema jurídico mexicano, tanto la posibilidad de impugnar como la de volver a presentar una nueva MIA para su evaluación. No hacerlo produce consecuencias jurídicas relevantes, particularmente el consentimiento de los efectos que los actos administrativos generan en la esfera jurídica del interesado y la consecuente obligación de sujetarse a ellos, así como la validez y legalidad del acto administrativo.")

700 Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 234-237.

- Promover un recurso de revisión ante la SEMARNAT;[701]
- Impugnar la decisión de la DGIRA a través de un juicio contencioso administrativo ante el TFJA;[702]
- Juicio de amparo ante los juzgados de distrito que forman parte del Poder Judicial de la Federación.[703]

577. Al impugnar la Resolución, las Demandantes pudieron cuestionar las supuestas irregularidades procesales ocurridas durante el PEIA, a través de la presentación de un juicio de nulidad o amparo en contra de la Resolución Negativa. Las Demandantes contaban con mecanismos de defensa para impugnar las alegadas violaciones procedimentales dentro de dicho procedimiento,[704] y ese es un hecho que no está en disputa y las Demandantes simplemente lo omiten señalar.

578. Aunque el experto de las Demandantes, el Sr. Limón, erróneamente argumenta y clasifica dichas omisiones como violaciones al debido proceso dentro del PEIA,[705] el hecho de que las Demandantes optaran deliberadamente por no ejercer este medio de impugnación es trascendental para defender sus derechos y el alcance de los mismos.

579. No solo eso. La afirmación del Sr. Limón al señalar que la Resolución de Negativa era nula y no producía efectos,[706] es errónea y carece de fundamento. La declaración de nulidad de un acto administrativo depende de una sentencia ejecutoriada emitida por el TFJA, previa tramitación de un juicio contencioso administrativo. En México no existe la nulidad de pleno derecho y toda nulidad de un acto administrativo debe ser declarada jurisdiccionalmente y a menos que sea declarada, todos los actos administrativos gozan de presunción de validez.[707]

---

701 Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 235.

702 Órgano jurisdiccional competente en nuestro país para determinar la legalidad o ilegalidad de la actuación administrativa. Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 236. Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 425.

703 Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 237.

704 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, § XI.

705 Segundo Informe del Sr. Limón, § III.

706 Segundo Informe del Sr. Limón, ¶ 55.

707 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 333, nota al pie 271.

580. Como ya fue señalado, el PEIA es un procedimiento uni-instancial, que no sigue las formalidades de un procedimiento seguido en forma de juicio y los aspectos supletorios de la LFPA no son aplicables como las Demandantes y su experto consideran. En términos sencillos, el PEIA solo es un trámite que se materializa con la resolución de la DGIRA y es hasta ese momento que afecta la esfera jurídica del particular.

581. La resolución negativa de la DGIRA "absorbió" cualquier vicio que hubiera podido existir durante el PEIA. Incluidas las supuestas violaciones al debido proceso, omisiones o defectos secundarios, retrasos marginales o imprecisiones no sustantivas, las cuales no afectaron la validez de la resolución de la DGIRA, ya que la autoridad analizó y determinó que la aplicación para la AIA no cumplía con las formalidades técnicas viables para el Proyecto.[708]

582. Como lo señalan los expertos legales en materia ambiental de México, no basta con que las Demandantes señalen una irregularidad; es indispensable que demuestren que ésta produjo un perjuicio real de sus derechos y, en su caso,[709] impugnarla ante la instancia competente, situación que no sucedió.

583. La falta de impugnación produce consecuencias jurídicas relevantes, ya que implícitamente el particular consiente los efectos que los actos administrativos generan en la esfera jurídica del interesado y la consecuente obligación de sujetarse a ellos, es decir, convalidaron la Resolución de la DGIRA y sus efectos.[710] Incluido que los efectos de estos actos es que gozan de presunción de validez y el particular ya se encuentra jurídicamente sujeto a sus efectos.

584. La Resolución de la DGIRA es válida y eficaz por ley, hasta en tanto su invalidez no sea declarada por una autoridad competente (administrativa o jurisdiccional). El hipotético es que potencialmente la autoridad jurisdiccional nacional pudiese haber declarado la nulidad de los actos administrativos, de manera que dicha determinación pudiera servir para constatar la actualización de determinadas violaciones procesales o de fondo. Sin embargo, ése no es el caso del presente arbitraje.

---

708 Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 242-242.

709 Primer Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 226, 243-247.

710 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 35, 332, 334, nota al pie 272.

585. Por consiguiente, el particular que no impugna consiente todos los efectos jurídicos y, por tanto, la validez y legalidad de un acto administrativo cuando deja de impugnarlo mediante las vías y dentro de los plazos legales previstos para ello. Es decir, la Resolución de la DGIRA de diciembre de 2020 es válida y goza de validez en todos sus efectos y fondo, considerando legales para todos los efectos jurídicos aplicables y ante cualquier jurisdicción.

586. Las Demandantes se encuentran jurídicamente obligadas a sujetarse a las consecuencias legales de la Resolución negativa de la DGIRA, y conocían su alcance. Tanto lo conocían que hicieron todo lo necesario por preparar una MIA-R enmendada o ajustada para cumplir con el marco regulatorio, como se verá más adelante.

587. Adicional a lo expuesto por el testigo de las Demandante, la evidencia muestra que las Demandantes consintieron el alcance del Principio Precautorio contenido en la Resolución, así lo señalaron:

> My biggest fear is that not litigating this implies acceptance of a "precautionary principle" approach that SEMARNAT brought to its review of Ixtaca.[711]

588. Las Demandantes eran completamente conscientes de que impugnar y presentar una acción legal les daría certeza para aclarar aspectos técnicos evaluados por la autoridad para emitir su negativa y así ser corregidos para estar en posibilidad de presentar una nueva MIA.

> In my head legal action would serve the purpose of clarifying the specific technical reasons for rejection, and help inform future possible submissions. It may also help to throw out considerations that SEMARNAT applied this time, which could facilitate future submissions. Is there any other way to salvage an open pit mine plan for Ixtaca? Even under a new regime this may be necessary.[712] [Énfasis añadido]

589. Las omisiones deliberadas de las Demandantes ante los remedios legales que tenían a su disposición y conforme al marco normativo nacional, no pueden ser considerados medidas violatorias a cargo de la Demandada, optar por no utilizar los medios legales a su alcance y no impugnar la negativa de a la MIA del Proyecto Ixtaca, es irracional y contradictorio, porque ahora esa misma medida forma parte de su reclamación ante este Tribunal.

---

711 Cadena de correos entre Duane Poliquin, Douglas McDonald, Daniel Santamaría y Morgan Poliquin sobre la posibilidad de impugnar la resolución negativa de la MIA, 21 y 22 de diciembre de 2020, p. 1. **R-0218.**

712 Cadena de correos entre Duane Poliquin, Douglas McDonald, Daniel Santamaría y Morgan Poliquin sobre la posibilidad de impugnar la resolución negativa de la MIA, 21 y 22 de diciembre de 2020, p. 1. **R-0218.**

590. La presentación oportuna de la impugnación de la Resolución negativa de la MIA hubiera podido tener el efecto de revertir la determinación de la DGIRA en diversos escenarios, los cuales pudiera haber sido: (i) revertir la determinación para que la autoridad solvente posibles omisiones procesales —si las hubiera— y emita una nueva determinación, (ii) revertir la determinación para que la autoridad para que emita su resolución en cierto sentido, o (iii) confirmar la determinación de la autoridad. Sin embargo, la Resolución de la DGIRA ya se encuentra firme y produjo todos sus efectos, mismos que fueron consentidos por las Demandantes al no impugnar esa Resolución.

591. Adicional a la Resolución negativa de la MIA de diciembre de 2020, las Demandantes tenían diversos recursos legales nacionales a su disposición sobre hitos procedimentales que no fueron ejercidos, entre los que se encontraba: *i)* presentar amparos indirectos en cualquier momento del PEIA y ante cualquier posible violación procesal, incluida acciones u omisiones que a su consideración eran constitutivas de violaciones del debido proceso (incluida la falta de darles vista), así como o juicio contencioso,[713] *ii)* una vez excedido el plazo de 180 días para resolver el PEIA, Minera Gorrión podía obligar a la DGIRA a emitir su resolución y no exceder el plazo estipulado por normatividad (*i.e.,* obligar a la autoridad a emitir una respuesta),[714] y *iii)* frente a los actos posteriores vinculados con el Amparo 445/2015 y con la Declaratoria de Insubsistencia y la Resolución de No Factibilidad de las Concesiones, Minera Gorrión pudo haber presentado un amparo indirecto.[715]

3. Las Demandantes tenían proyectada la presentación de una Nueva MIA actualizada

592. Las Demandantes conocían los medios disponibles para solventar la obtención de su AIA, incluida la posibilidad de presentar una nueva MIA ante la DGIRA en la que solventarán las deficiencias por las cuales les fue negado su proyecto en diciembre de 2020.[716] La posibilidad de

---

713 Las Demandantes pudieron hacer valer varias acciones judiciales en contra de los supuestos violaciones al debido proceso. Sin embargo, las actuaciones de la DGIRA realizadas durante el PEIA, previo a la emisión de la Resolución de la DGIRA, en realidad no le causaron afectaciones directas a las Demandantes porque este tipo de resoluciones no afecta los derechos de la parte solicitante de una AIA sino hasta que la DGIRA emite la resolución final.

714 Artículo 8, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **R-0246.**

715 Memorial de Contestación, ¶¶ 341 – 352.

716 Cadena de correos entre Duane Poliquin, Douglas McDonald, Daniel Santamaría y Morgan Poliquin sobre la posibilidad de impugnar la resolución negativa de la MIA, 21 y 22 de diciembre de 2020, p.1. **R-0218**. Segunda Declaración Testimonial del Sr. Douglas J. McDonald, ¶¶ 134, 135 y 139.

presentar una nueva MIA incluía la posibilidad de: *i)* enmendar y ajustar los aspectos por los cuales les fue negada su MIA, para presentar una versión actualizada de su proyecto en la que se atendieran las deficiencias identificados por la autoridad ambiental, o *ii)* presentar una nueva MIA contemplando ajustes mayores en los que se incluyera estudios y ajustes en todo el rediseño del modelo de su proyecto.

593. Aunque el Sr. McDonald afirme que las Demandantes decidieron no presentar la MIA actualizada porque a su consideraron la SEMARNAT no la evaluaría de manera objetiva y que su presentación resultaría fútil.[717] La realidad es que fue una omisión fundamental a cargo de las Demandantes. La decisión de no presentar la Nueva MIA a la SEMARNAT, es el motivo por el cual la autoridad nunca tuvo oportunidad de evaluarla y no existe una resolución administrativa que permita conocer cuál habría sido el resultado de una nueva solicitud.[718] Como se señaló previamente, la DGIRA no negó el Proyecto Ixtaca, sino que negó la solicitud de Autorización de Impacto Ambiental en los términos presentados por Minera Gorrión.

594. Además, la Resolución negativa de la DGIRA de diciembre de 2020 no constituyó una prohibición o limitación para formular y someter una nueva solicitud. Las Demandantes conservaron sus derechos para ingresar una nueva MIA y someterla a análisis PEIA, para enmendar su proyecto y así sujetarlo a los lineamientos ambientales y legales que en materia ambiental sean aplicables, así como atendiendo las razones que fundamentaron y motivaron la negativa previa.[719]

595. La evidencia muestra que las Demandantes eran conscientes de la importancia de solventar las deficiencias de su MIA, situación que confirma que era técnicamente posible preparar una nueva MIA y someterla a evaluación. Motivo por el cual, una vez recibida la Negativa de la MIA en diciembre de 2020, procedieron a realizar estudios y análisis enfocados en: suelo, flora y fauna. Particularmente en 2021 y 2022, las Demandantes realizaron estudios de fauna,[720] Estudio de

---

717 Segunda Declaración Testimonial del Sr. Douglas J. McDonald, ¶¶ 144-145.

718 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 36.

719 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 335.

720 Fichas técnicas de fauna de la Nueva MIA, agosto 2021. **R-0219**.

Ruido ,[721] mapas de suelos,[722] mapas de polvos, mapas topográficos, mapas de vegetación, mapas de localización del proyecto,[723] mapas de asentamientos rurales,[724] áreas inundables, mapas de vientos, áreas de influencia directa[725] e indirecta, sitios RAMSAR,[726] hidrología superficial[727] y subterránea,[728] fallas geológicas, erosión y tierras frágiles.[729]

596. Dentro de las modificaciones del Proyecto se encuentran modificaciones de infraestructura eléctrica,[730] modificaciones de infraestructura como puentes, caminos, entubamiento, así como modificaciones en el modelo propio del Proyecto.

597. La nueva MIA-R estaba integrada por ocho capítulos de una MIA elaborada entre 2021 y 2022, que contenía ajustes y enmiendas respecto del proyecto presentado a la autoridad en 2019.[731]

598. Los expertos en materia ambiental de la Demandada identifican todas las diferencias y similitudes entre la MIA de 2019 y la Nueva MIA. A continuación, se incluyen las modificaciones relevantes:[732]

---

721 Mapa de estudio sonométrico y del SAR de la Nueva MIA, febrero 2021. **R-0208**.

722 Mapa de edafología (composición de suelos) de la Nueva MIA, febrero 2021. **R-0220**.

723 Mapa de localización general de la Nueva MIA, diciembre 2021. **R-0221.** Mapa de localización del proyecto de la Nueva MIA, diciembre 2021. **R-0222.** Excel con coordenadas de construcción del polígono del proyecto de la Nueva MIA, diciembre 2021. **R-0223.**

724 Mapa de asentamientos rurales de la Nueva MIA, enero 2022. **R-0224.**

725 Mapa de Área de Influencia Directa de la Nueva MIA, mayo 2022. **R-0225.** Mapa de Área de Influencia Directa de la Nueva MIA, febrero 2022. **R-0226.**

726 Mapa de sitios Ramsar de la Nueva MIA, mayo 2022. **R-0227.**

727 Mapa de hidrología superficial, febrero 2022. **R-0228.**

728 Mapa de hidrología subterránea, febrero 2022. **R-0229.**

729 Mapa de tierras frágiles de la Nueva MIA, febrero 2022. **R-0230**. Mapa de Área de Influencia Directa de la Nueva MIA, mayo 2022. **R-0225.**

730 Mapas de reubicación de línea eléctrica de la Nueva MIA, diciembre 2021. **R-0231**. Mapa de Área de Influencia Directa de la Nueva MIA, mayo 2022. **R-0225.**

731 Capítulo I Nueva MIA. **CRCR-0053.** Capítulo II Nueva MIA. **CRCR-0054.** Capítulo III Nueva MIA. **CRCR-0057.** Capítulo IV Nueva MIA. **CRCR-0055.** Capítulo V Nueva MIA. **CRCR-0059.** Capítulo VI Nueva MIA. **CRCR-0058.** Capítulo VII Nueva MIA. **CRCR-0056.**

732 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 334.

Modificación	Descripción
Cambio en la duración del Proyecto	La duración declarada aumenta de 174 a 222 meses, es decir, 48 meses o cuatro años. La Nueva MIA incorpora un año para "trámites diversos" y amplía el cierre y abandono de uno a cinco años, pero la operación y mantenimiento se mantienen en 11 años. Debe advertirse que la MIA original presenta una inconsistencia interna: los periodos desglosados suman 162 meses, equivalentes a 13.5 años, y no los 174 meses o 14.5 años declarados.
Concesiones mineras	Omisión en vincular el proyecto con las concesiones mineras;
Vida útil del Proyecto declarado	la Nueva MIA presenta una inconsistencia interna entre la vida útil textual y el horizonte mostrado en su cronograma; refiere 12 años en el Capítulo II, pero su cronograma incorpora actividades de cierre hasta los años 14–18 y el Capítulo I declara una duración total de 18.5 años.
Cambio de uso de Suelo	Existe una modificación sustantiva del alcance declarado del cambio de uso de suelo, la MIA original lo relación con el AP, mientras que la MIA 2.0 lo limita a la huella de las obras.
Coordenadas del Área del Proyecto:	existe una variación entre las coordenadas presentadas en ambas MIAs, aunque por sí solas no permiten concluir que exista una modificación o ampliación del polígono.
Base cartográfica de uso de suelo y vegetación	La Nueva MIA actualiza, sustituye y complementa la cartografía utilizada para la caracterización del uso de suelo y vegetación

599. El Capítulo II de la MIA 2.0 desarrolla la configuración física y operativa del Proyecto, incluyendo sus dimensiones, obras e infraestructura, etapas de ejecución, procesos de extracción y beneficio, manejo de agua y jales, obras asociadas, cierre, sustancias, residuos y emisiones; la MIA mantiene la configuración esencial del Proyecto de 2019 pero incorpora modificaciones relevantes en su huella, temporalidad, infraestructura, procesos y parámetros operativos.

Tema	Modificación
Biodiversidad del AP	Existe un cambio claro en la forma de valorar el efecto del Proyecto sobre la biodiversidad. Mientras la MIA original sostiene que la actividad minera no la compromete, la MIA 2.0 reconoce expresamente que el Proyecto compromete la biodiversidad de las 466.00 ha ocupadas por infraestructura.
Flora en el AP	La línea base florística del AP aumenta de 103 a 139 especies y se añade contexto sobre el origen/presencia de *Cupressus lusitánica*.

Fauna en el AP	La MIA 2.0 incrementa de 54 a 84 el número de especies expresamente identificadas en el AP.
Subprogramas de flora y fauna	La Nueva MIA incorpora más especies, sin embargo, no incorpora medidas específicas para las especies identificadas en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Los subprogramas de flora y fauna se mantienen generales y no desarrollan medidas diferenciadas para conservar o restituir hábitats, recursos y condiciones de conectividad.[733] La DGIRA ya había advertido que las acciones de rescate y reubicación planteadas no garantizan la sobrevivencia y había requerido considerar hábitats similares y recursos suficientes para el desarrollo de dichas especies.[734]
Población indígena en la justificación social	La afirmación expresa sobre inexistencia de etnias susceptibles de afectación, presente en 2018, no se reproduce en la justificación social de la MIA 2.0. Además, el texto social de la MIA 2.0 presenta una aparente pérdida/truncamiento de contenido en su primer punto, cuyo contenido faltante no puede reconstruirse a partir del documento.
Comunicas indígena focalizada	La Nueva MIA incorpora a la localidad Tecoltemi dentro del SAR, pero la mantiene fuera de las AID y AII.[735] Su inclusión únicamente en el ámbito regional no explica por qué la localidad quedó excluida de ambas áreas de influencia ni analiza de manera particular su relación con las concesiones y los posibles efectos sociales y ambientales del Proyecto. Esta falta de justificación adquiere relevancia frente a los antecedentes jurídicos de la comunidad y su relación previa con el Proyecto
Ordenamiento territorial municipal	La MIA 2.0 refuerza la justificación territorial con un argumento municipal específico que no fue formulado de esa manera en el Capítulo II original. La nueva MIA considera para el Área Núcleo las localidades de Santa María Zotoltepec y Zacatepec, mientras que el Área de Influencia Directa incluye diez localidades adicionales
Configuración y delimitación de las áreas	La Nueva MIA incluye clasificación distinta de las localidades consideradas originalmente. Algunas permanecen dentro del AID, otras pasan del AN o del AID al AII, y algunas quedan exclusivamente dentro del SAR, pero fuera de las anteriores.

733 Minera Gorrión, S.A. de C.V. (s. f.). *Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional, Proyecto Ixtaca ("MIA actualizada"),* Capítulo VI, Tablas VI.7 y VI.8, pp. 41-46. **CRCR-0059.**

734 Resolución Negativa de la MIA-R , (2020, 17 de diciembre), p. 39. **C-0086.**

735 Minera Gorrión, S.A. de C.V. (s. f.). *Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional, Proyecto Ixtaca ("MIA actualizada"),* Capítulo IV, Mapa IV-48, p. 356. **CRCR-0056.**

	También incorpora localidades que no fueron incluidas en las áreas de análisis original.
Comunidad de Tecoltemic	La comunidad no fue incorporada en las áreas de influencia de ninguna de las dos MIAs; sin embargo, a diferencia de la MIA original, la MIA actualizada sí la incluyó dentro del SAR
Reservorio FWD	La MIA 2.0 añade de manera un área de captación pluvial, una tubería para dar continuidad al escurrimiento aguas abajo y un vertedor en la FWD
Reservorio WSD	La MIA 2.0 precisa que el uso de agua para la actividad minera estaría sujeto a condiciones de sequía severa y que el volumen utilizado dependería de esas circunstancias
Afectaciones hidrológicas	La Nueva MIA reconoce que la construcción del Proyecto implicaría que "*algunos cauces intermitentes sean desviados o destruidos y que ello afectaría la disponibilidad del recurso para las comunidades ubicadas aguas abajo y para la fauna*".[736] Este reconocimiento muestra con mayor claridad que los efectos de las obras no se limitan a la captación de lluvia, sino que involucran la intervención de cauces y la modificación de los escurrimientos. Sin embargo, continúa la falta vinculación del Proyecto con la totalidad de los criterios y lineamientos de la NOM-141
Afectaciones de causes y ríos	La Nueva MIA realiza un esfuerzo adicional para identificar los impactos hidrológicos, y reconoce que la construcción de las obras puede desviar o destruir cauces intermitentes y afectar la disponibilidad de agua para las comunidades ubicadas aguas abajo. También contempla el arrastre y acumulación de sedimentos, la modificación de los patrones naturales de escurrimiento, y el riesgo de contaminación del agua subterránea.[737]
Reconocimiento del sistema hídrico	La Nueva MIA reconoce que el sistema hídrico puede alcanzar una importancia severa o crítica.[738] Sin embargo, continúa sin identificar las comunidades concretas que podrían experimentar una disminución del recurso; tampoco precisa los cauces, manantiales, norias o pozos que podrían resultar

[736] Minera Gorrión, S.A. de C.V. (s. f.). *Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional, Proyecto Ixtaca ("MIA actualizada"),* Capítulo VII, p. 13. **CRCR-0056.**

[737] Minera Gorrión, S.A. de C.V. (s. f.). *Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional, Proyecto Ixtaca ("MIA actualizada"),* Capítulo VII, pp. 13-14. **CRCR-0056.**

[738] Minera Gorrión, S.A. de C.V. (s. f.). *Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional, Proyecto Ixtaca ("MIA actualizada"),* Capítulo V, Tabla V-11, pp. 99-102.**CRCR-0059.** Capítulo VII, Tabla VII.2, p. 11. **CRCR-0056.**

	afectados, los usuarios que dependen de ellos ni la magnitud, extensión y duración de las afectaciones previstas
Obras de conservación de suelo y agua vinculadas a reservorios	La MIA 2.0 añade la referencia a un área de captación pluvial cuyo flujo sería entubado para mantener el escurrimiento aguas abajo, así como a un vertedor en la FWD. Estas obras y su función no se describen de manera equivalente en la MIA original, por lo que no es posible determinar si corresponden a componentes adicionales o a una descripción más detallada del sistema hidráulico
Delimitación del SAR	La Nueva MIA desarrolla delimitaciones de SAR y AI distintas a la MIA-R original. Mientras esta última sustentó el SAR principalmente en la integración de microcuencas, la nueva versión emplea una metodología cartográfica multicriterio que consideró componentes hidrológicos, unidades de paisaje, vegetación y uso de suelo, límites territoriales, dispersión de partículas y ruido, entre otros elementos. Asimismo, la MIA actualizada integra y diferencia un AID y un Área de Influencia Indirecta ("**AII**"); y en esta ocasión ambas sí se encuentran comprendidas dentro del SAR

600. Existen cambios que no son sustanciales entre ambas MIAs, pero se agrega mayor detalle sobre datos, aclaraciones e información complementaria en la MIA 2.0, situación que confirma que requería ser mejorada la MIA para brindar mayor certeza a la autoridad.

601. Esto demuestra que la obtención de una AIA era una gestión que debía ser enmendada y corregida, para eventualmente cumplir con la normatividad y obtener la misma. La obtención de una AIA estaba en las manos de las Demandantes, pero deliberadamente decidieron no presentar este requisito normativo (técnico y legal).

602. El análisis comparativo no implica o sustituye la evaluación que debió realizar la DGIRA ni anticipar el sentido de una resolución inexistente. Su objeto es comparar la información disponible de ambas manifestaciones e identificar los elementos adicionales incorporados en la Nueva MIA respecto de las deficiencias previamente identificadas por la autoridad, así como aquellos aspectos que permanecieron sin un desarrollo suficiente.[739]

603. Desafortunadamente, fue únicamente la determinación de las Demandantes la que después de un análisis de sus representantes, consultores y abogados decidieron no presentar una MIA enmendada y solventar sus deficiencias, así como tampoco decidieron impugnar la negativa de la

[739] Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 340.

AIA en el momento procesal oportuno. La Nueva MIA aun requería el análisis de la autoridad ambiental, pero de una comparación entre ambas MIAs se reconoce que las Demandantes reconocen mayores afectaciones sobre el alcance de su proyecto a los recursos naturales, entorno y ecosistemas de la región.

4. Las Demandantes no demostraron la viabilidad hídrica del Proyecto Ixtaca

604. En su Memorial de Contestación, México demostró que: (i) los requerimientos hídricos del proyecto no podían ser satisfechos exclusivamente con el agua que Minera Gorrión pretendía capturar en sus presas; (ii) las presas FWD y WSD no podían considerarse solo "reservorios de agua pluvial", ya que implicaban el aprovechamiento de aguas superficiales; y, (iii) Minera Gorrión no proporcionó la información necesaria para evaluar adecuadamente los impactos del Proyecto Ixtaca sobre las dinámicas hidrológicas de la región y las medidas necesarias para prevenirlos, mitigarlos o compensarlos.[740]

605. Las Demandantes alegan que la DGIRA no consideró ninguno de estos argumentos en la Resolución de SEMARNAT y que, por tanto, son explicaciones *post hoc* de México en este arbitraje.[741] Esto es incorrecto.

606. Sin embargo, la propia DGIRA explicó que Minera Gorrión no había proporcionado la información suficiente para determinar si el Proyecto podía generar impactos sobre la dinámica hidrológica de la zona y, en consecuencia, para establecer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar dichos impactos.[742]

607. En cualquier caso, las Demandantes confunden las razones por las cuales la DGIRA negó la MIA con la evidencia técnica que México ha presentado en este arbitraje para explicar por qué dicha información no permitía acreditar la viabilidad hídrica del Proyecto ni evaluar adecuadamente sus impactos. La Demandada no busca justificar *post hoc* la Resolución negativa de la MIA ni sustituir el razonamiento de la DGIRA. El argumento de la Demandada es más simple: la evidencia técnica demuestra por qué la información presentada por las Demandantes no

740 Memorial de Contestación, ¶ 312.

741 Réplica, ¶ 467.

742 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, pp. 34, 37. **C-0086**.

permitía a la DGIRA llegar a una conclusión favorable respecto de la viabilidad hídrica del Proyecto.

a. Los requerimientos hídricos del Proyecto Ixtaca excedían la cantidad de agua pluvial que las presas FWD y WSD capturarían

608. Los requerimientos hídricos del Proyecto Ixtaca no podían satisfacerse exclusivamente mediante el agua de lluvia que las Demandantes pretendían captar, sino que dependían del agua subterránea.[743]

609. Las Demandantes dedican buena parte de su Réplica a sostener que el Dr. Pedrozo exageró las necesidades de agua del Proyecto Ixtaca al utilizar factores de intensidad hídrica de *Northey et al.* (2016), mientras que SRK habría utilizado un modelo específico del Proyecto mediante GoldSim que, según ellas, toma en cuenta la recirculación, la recuperación de agua, la evaporación, la infiltración y los relaves filtrados.[744] Pero esta crítica parte de una comparación que no es equivalente.[745]

610. Por un lado, el Dr. Pedrozo no utilizó los factores de *Northey* para reproducir el balance hídrico del Proyecto. Los utilizó como un punto de referencia independiente para dimensionar la intensidad hídrica (*i.e.* la demanda de agua) del Proyecto a partir de las propias características de producción y recuperación metalúrgica de las Demandantes.[746]

611. Por otro lado, el modelo de SRK calculó la tasa de reposición del proceso, la cual representa el agua necesaria para compensar pérdidas inevitables del sistema, que debe incorporarse nuevamente al sistema después de la recirculación. Como explica el Dr. Pedrozo, esto no equivale a toda el agua que el proceso minero consume, ya que "no elimina las pérdidas consuntivas inevitables por evaporación, humedad retenida en jales, infiltración y otras salidas permanentes del sistema".[747] Por ello, las Demandantes no pueden presentar las cifras de 1,680 a 3,360 m³/día

---

743 Memorial de Contestación, ¶ 311. Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 87.

744 Réplica, ¶¶ 470, 471.

745 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 57, 58.

746 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 57.

747 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 59.

de agua de reposición neta de la planta como si demostraran que las necesidades hídricas del Proyecto se limitaban a esos volúmenes.[748] Esas cifras únicamente reflejan el agua de reposición después de que el modelo ha supuesto determinados niveles de recirculación y recuperación.[749]

612. En cualquier caso, el Tribunal no necesita resolver la controversia entre las estimaciones del Dr. Pedrozo y las de SRK. La cuestión relevante para determinar la viabilidad hídrica del Proyecto Ixtaca era si tenía un suministro confiable frente a las pérdidas, variaciones hidrológicas y demás condiciones que razonablemente podían presentarse durante su operación.[750] En ese sentido, incluso si se aceptaran como ciertas las estimaciones de SRK sobre las necesidades netas de reposición, éstas no demuestran que las fuentes de agua previstas fueran suficientes para toda la vida del Proyecto.

613. Y es precisamente en este punto donde el propio modelo de las Demandantes resulta revelador. Las Demandantes sostienen que su modelo GoldSim, basado en 500 simulaciones, permitió determinar que el Proyecto podría satisfacer sus necesidades operativas y las de las comunidades en aproximadamente 90% de los escenarios.[751] Por tanto, incluso conforme al propio modelo de las Demandantes, el suministro hídrico del Proyecto no estaba completamente asegurado: determinados escenarios requerían reducir la operación minera o recurrir a una fuente de agua que todavía no había sido obtenida.[752]

614. Además, el Dr. Pedrozo explica que las 500 simulaciones no capturan adecuadamente la incertidumbre climática, por lo que sus resultados no son confiables. El modelo de SRK utiliza como base de información los datos de precipitación histórica de 55 años; sin embargo, no toma en cuenta la incertidumbre de años venideros, donde el volumen de precipitación puede ser distinto a los años pasados. Por lo anterior, el evento más grave que podría ocurrir bajo su modelo es uno ya previamente calculado por SRK, y no uno realmente aleatorio.[753] De hecho, el propio Estudio

---

748 Réplica, ¶ 472.

749 Réplica, ¶ 472 ("SLR calculates that the SRK model shows *net plant make-up water* of 1,680 m^3/day (Years 1 to 4) increasing to 3,360 m^3/day (Years 5 to 11)". [Énfasis añadido]

750 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 56.

751 Réplica, ¶ 473.

752 Réplica, ¶ 474.

753 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 87, 90.

de Factibilidad reconoce que la viabilidad del Proyecto está sujeta a las condiciones hidrológicas futuras. En efecto, identifica como un riesgo la posible escasez de agua a partir del quinto año de operación, precisamente porque el suministro dependía de la lluvia y el escurrimiento.[754] Y por eso, el estudio recomendó seguir monitoreando la hidrología y actualizar el balance de agua durante la operación.[755] En ese contexto cobra especial relevancia el Informe del IMTA de 2022.[756]

615. Las Demandantes alegan que dicho informe no es "an independent scientific study", ya que la SEMARNAT había solicitado su elaboración como resultado de una supuesta coordinación con "anti-Project NGOs".[757] Pero como se explica con mayor detalle *infra*, las reuniones de la SEMARNAT con las ONGs, así como la coordinación con el IMTA para realizar estudios hidrológicos, fueron un ejercicio ordinario de sus respectivas facultades legales para proteger el medio ambiente.[758] Y fue en el ejercicio de dichas facultades legales que la SEMARNAT solicitó al IMTA la elaboración de "un estudio *que analice los efectos* de la actividad de exploración de la Minera Gorrión en el municipio de Ixtacamatitlán, estado de Puebla, en materia de agua."[759] Así, el informe del IMTA es un informe técnico, elaborado por una institución especializada y basado en un análisis objetivo de las condiciones del agua en la región.[760] No hay mayor evidencia

---

754 Moose Mountain Technical Services (2019). NI 43-101 Technical Report on the Feasibility Study – Ixtaca Gold-Silver Project, Sección 25.10, p. 295. **C-0314**.

755 Moose Mountain Technical Services (2019). NI 43-101 Technical Report on the Feasibility Study – Ixtaca Gold-Silver Project, Sección 25.10, p. 295. **C-0314**. Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 81, 85.

756 Informe del IMTA, "Informe de Actividades. Municipio de Ixtacamtitlán, Puebla, México, 2022". **C-0378**. Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 37-45.

757 Réplica, ¶ 476.

758 Estatuto Orgánico del IMTA, Considerandos ("[A]l Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se le otorgaron las funciones siguientes: I. Realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y actividades de investigación; desarrollar, adaptar y transferir tecnología; formar recursos humanos calificados que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo sustentable e integral del agua; II. Desarrollar proyectos de investigación, educación y capacitación especializadas de interés para otras instituciones […]."). **R-0232**.

759 Oficio de SEMARNAT al IMTA, 20 de julio de 2022. **R-0233**.

760 Informe del IMTA, "Informe de Actividades. Municipio de Ixtacamtitlán, Puebla, México, 2022", pp. 8-15. **C-0378**.

científica que ésta sobre las condiciones reales de la región y las Demandantes no logran desvirtuarla.[761]

616. Aquí cabe recordar que, según las Demandantes, la demanda hídrica del Proyecto Ixtaca sería cubierta principalmente mediante el agua de lluvia y escurrimientos que captarían las presas FWD y WSD.[762] En ese sentido, es relevante el hecho de que, en su informe, el IMTA concluyó que, de 2019 a 2020, en la región de Ixtacamatitlán había ocurrido un periodo de sequía en el municipio.[763] Por tanto, existía una incertidumbre sobre el suministro de agua para el Proyecto.[764]

617. Aunado a lo anterior, las presas FWD y WSD captarían menos agua de lo que sugieren las Demandantes. Como contexto, las presas supuestamente captarían el agua de escorrentía (*i.e.*, el agua de lluvia que corre sobre la superficie de la tierra cuando el suelo ya no puede absorberla).[765] El modelo de SRK parte de determinados supuestos sobre la cantidad de lluvia que se convertiría en escurrimiento y, con base en ellos, concluye que las presas captarían suficiente agua.[766] Sin embargo, como explica el Dr. Pedrozo,[767] los datos reales del propio sitio muestran un rendimiento de la cuenca (*i.e.*, volumen de escorrentía) de apenas 3.0% a 3.9%,[768] porcentaje muy por debajo del 7.5% que el propio modelo de SRK identificaba como un nivel en el que se comprometería la disponibilidad de agua para el Proyecto Ixtaca.[769]

---

761 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 140-142 ("el argumento de que el IMTA no constituye un balance específico del Proyecto no invalida su utilidad como evidencia independiente para evaluar el contexto hidrogeológico e hidrológico en el que éste se inserta: por el contrario, la evidencia satelital reseñada en el párrafo anterior demuestra que esa independencia metodológica —lejos de ser una debilidad— es precisamente lo que le permite captar una condición regional de estrés hídrico que el balance hídrico específico del Proyecto, por su propio diseño, no puede detectar.")].

762 Réplica, ¶ 477.

763 Informe del IMTA, "Informe de Actividades. Municipio de Ixtacamtitlán, Puebla, México, 2022". **C-0378**. Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 37-45, y Figuras 3 y 4.

764 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 72, 120, 135.

765 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 102.

766 SRK Consulting, *FS Site-Wide Water Balance – Ixtaca Project*, Secciones 2.2.1 ("Daily Precipitation Data") y 2.2.2 ("Stochastic Precipitation Matrix"), pp. 23-24, 9 de mayo de 2019, **Anexo C-286**.

767 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 125-128.

768 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 127.

769 SRK Consulting, *FS Site-Wide Water Balance – Ixtaca Project*, Secciones 2.2.1 ("Daily Precipitation Data") y 2.2.2 ("Stochastic Precipitation Matrix"), pp. 27, 9 de mayo de 2019, **Anexo C-286**.

618. Por lo anterior, el Dr. Pedrozo identifica que el Proyecto Ixtaca requeriría del agua subterránea.[770] Las Demandantes argumentan que el Proyecto Ixtaca usaría solo entre 2.2% y 3.9% del agua subterránea disponible en el acuífero Tecolutla y que la CONAGUA puede concesionar, conforme a la NOM-011-CONAGUA-2015.[771] Sin embargo, la disponibilidad de agua calculada en la NOM-011-CONAGUA-2015 refleja la situación del acuífero en su conjunto, pero no necesariamente lo que ocurre en una zona específica. Que el acuífero tenga un balance positivo no significa que la extracción del Proyecto no pueda provocar una disminución del nivel del agua localmente. En otras palabras, puede haber suficiente agua disponible en el acuífero en general y, al mismo tiempo, existir un problema de disponibilidad o abatimiento de agua en la zona inmediata al Proyecto.[772] Así, la NOM "no sustituye la necesidad de un balance hídrico de sitio verificado de forma independiente, ni resuelve la pregunta de abatimiento local".[773]

619. Además, aunque las Demandantes aleguen que la demanda hídrica del Proyecto Ixtaca sería cubierta exclusivamente mediante el agua captada por las presas FWD y WSD y que "[g]roundwater inflows into the pit would have been ancillary aditions to the overall water balance",[774] la propia MIA presentada por Minera Gorrión reconoce que "[e]l escurrimiento y flujo al Tajo será la *primera fuente* de agua en suministrar de sus requerimientos al Proyecto",[775] y que las presas serían en realidad una fuente de agua secundaria.[776]

620. El tajo estaría en contacto con el agua subterránea del Acuífero Tecolutla de manera sostenida durante 14.5 años, con una extracción estimada de 19 a 34 L/s.[777] El Dr. Pedrozo explica

---

770 Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 87.

771 Réplica, ¶ 479. Segundo Informe de SLR, ¶¶ 408-418. Segunda Declaración Testimonial del Sr. Dorantes, ¶ 43.

772 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 160-161 ("…la disponibilidad media anual conforme a la NOM-011-CONAGUA-2015 es un balance administrativo agregado sobre la totalidad de la superficie del acuífero (7,584 km² según mis cálculos con datos de CONAGUA), mientras que el efecto relevante para esta controversia es el abatimiento local sostenido en el entorno inmediato del tajo, donde se ubican los pozos de las comunidades más cercanas…")].

773 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 160-161, 203.

774 Réplica, ¶ 477.

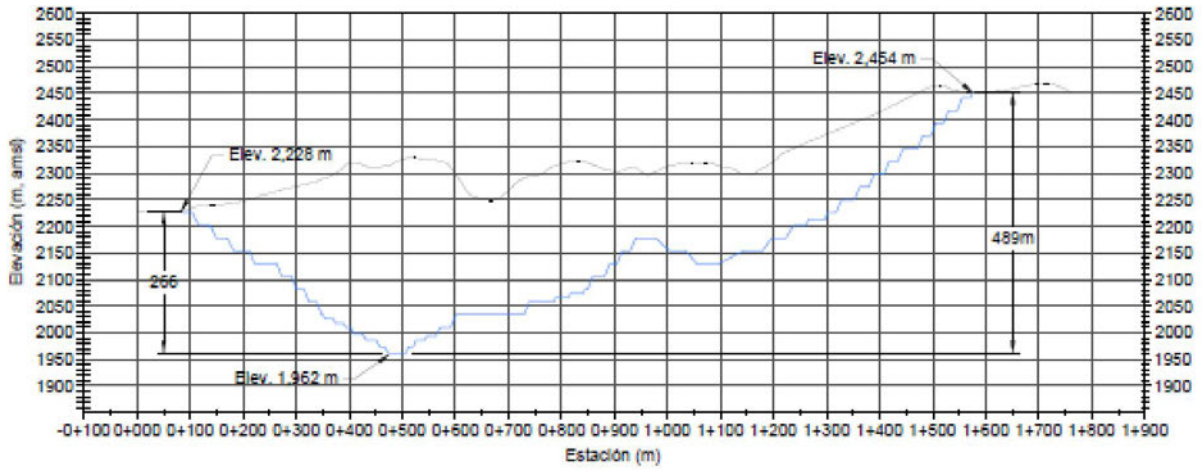
775 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, p. 30. [Énfasis añadido] **C-0086**.

776 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, p. 20. **C-086**. Información adicional de Minera Gorrión, julio de 2019, p. 9. **C-0299**.

777 Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 68-70. Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 162.

que "no se trata de una filtración marginal, sino de la intersección estructural y continua del diseño del tajo con el acuífero".[778]

Imagen: Corte transversal del tajo a cielo abierto del proyecto minero, reportado en la Figura II.3 MIA-R



Fuente: Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, Figura 6, p. 25.

621. En ese contexto, el modelo de SRK no permite descartar con suficiente certeza una afectación a los usuarios de agua subterránea cercanos al Proyecto.[779] Como explica el Dr. Pedrozo, aunque el modelo predice que el abatimiento (*i.e.*, descenso del nivel del agua subterránea en un acuífero debido principalmente a la extracción de agua) se mantendría limitado, ese resultado depende de supuestos y parámetros con incertidumbres importantes.[780] Por tanto, el modelo no demuestra que no habrá afectaciones; únicamente las descarta bajo las condiciones asumidas por el propio modelo.

622. Por tanto, ni Minera Gorrión ni las Demandantes han logrado demostrar que el Proyecto Ixtaca contara con un suministro confiable de agua que pudiera satisfacer su demanda hídrica, y que además evitara afectaciones a la disponibilidad de agua de las comunidades cercanas al Proyecto.

778 Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 163.

779 Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 160, 168.

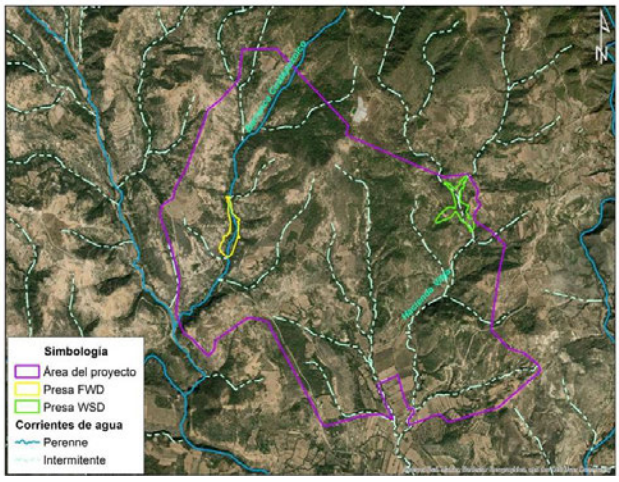
780 Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 153, 167, 169.

b. Las presas FWD y WSD no solo eran sistemas de almacenamiento de agua pluvial

623. En su Memorial de Contestación, México demostró que las Demandantes caracterizan incorrectamente las presas FWD y WSD como "reservorios de agua pluvial", ya que implicaban el aprovechamiento de aguas superficiales, y así pudieran eludir las regulaciones y permisos necesarios en materia de aguas nacionales.[781] En respuesta, las Demandantes se limitan a afirmar que el agua de lluvia no es "agua nacional" sino hasta que alcanza un cauce.[782] Esa afirmación pasa por alto el punto central del argumento de la Demandada.

624. Como explican los expertos ambientales de la Demandada, las presas "no se limitaban a captar la precipitación antes de que se incorporara a un cauce, sino que pretendían emplazar las presas sobre corrientes de agua claramente definidas".[783] En efecto, como se observa en el mapa del primer informe de los expertos, las presas se construirían sobre dos cauces existentes:

Imagen: Ubicación de las presas FWD y WSD con respecto de la hidrología superficial del sitio.



Fuente: Primer Informe de los Expertos de la Demandada en materia ambiental, p. 52.

625. La evidencia que las propias Demandantes proporcionaron confirma lo anterior:[784]

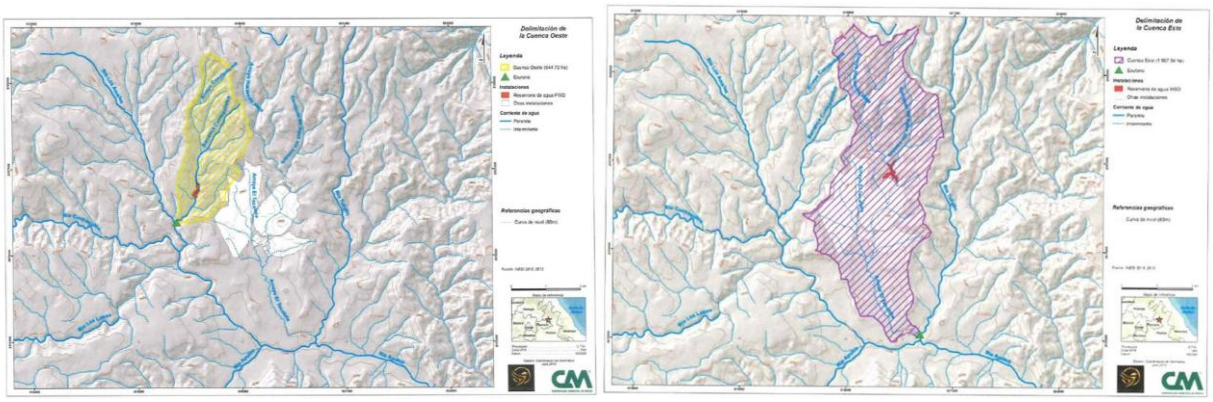
781 Memorial de Contestación, ¶¶ 317, 318.

782 Réplica, ¶ 480.

783 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶ 279.

784 Expediente de la MIA para el Proyecto Ixtaca No. 21PU2019M0014, Vol. II, diciembre 2018, pp. 259, 260. **C-0629**.

Imagen: Ubicación de las presas FWS y WSD con respecto de la hidrología del sitio.



Fuente: C-0629, pp. D-5 y D-6.

626. El propio Sr. Limón —experto de las Demandantes— admite que la construcción de las presas implicaría la modificación de algunos cauces.[785] Además, reconoce que "la empresa presentó los resultados de la determinación del caudal ecológico en los *cauces interceptados por la instalación de las obras de agua*."[786] El uso del término "cauces interceptados" es revelador.

627. En consecuencia, es evidente que las presas FWD y WSD no se limitarían a recolectar directamente la precipitación antes de su incorporación a los cauces, sino que se construirían desde un inicio sobre corrientes definidas para interceptar y almacenar los escurrimientos que ya circulaban por los cauces.[787]

628. Como admiten las Demandantes y el Sr. Limón,[788] conforme al Artículo 27 de la CPEUM, los cauces son aguas nacionales,[789] y, por tanto, su aprovechamiento requiere de autorización por parte de la CONAGUA.[790] Dado que las presas FWD y WSD hubieran aprovechado el agua de los cauces sobre los que se construirían, Minera Gorrión hubiera requerido de autorización por parte de la CONAGUA. Pero al caracterizarlas como "reservorios de agua pluvial", Minera Gorrión buscaba evitar tramitar y obtener los permisos correspondientes.

---

785 Segundo Informe de Experto del Sr. Mauricio Limón Aguirre, ¶ 125; Réplica, ¶¶ 480 y 481.

786 Segundo Informe de Experto del Sr. Mauricio Limón Aguirre, ¶ 129. [Énfasis añadido]

787 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶ 282.

788 Réplica, ¶ 480. Segundo Informe de Experto del Sr. Mauricio Limón Aguirre, ¶ 125.

789 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27. **R-0001**.

790 Artículo 4, Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. **MLA-57**.

c. Minera Gorrión no proporcionó la información necesaria para evaluar los impactos del Proyecto Ixtaca sobre las dinámicas hidrológicas de la región

629. Las deficiencias anteriores convergen en una cuestión fundamental: Minera Gorrión no proporcionó la información necesaria para que la DGIRA pudiera evaluar adecuadamente los impactos del Proyecto Ixtaca sobre las dinámicas hidrológicas de la región de Ixtacamatitlán.

630. La región de la subcuenca del río Apulco y del acuífero Tecolutla es ya de por sí una región con "estrés hídrico", y, por ello, para que se llevara a cabo una actividad hidrointensiva como la minería, se requería de un plan detallado de atención y mitigación de los impactos hídricos del proyecto.[791] Sin embargo, como ya se explicó, el propio Estudio de Factibilidad del Proyecto Ixtaca admite la incertidumbre en el suministro de agua para la operación del proyecto a partir del quinto año.[792]

631. La información presentada por Minera Gorrión cuenta con las siguientes deficiencias:

- El balance hídrico de SRK, que utilizó el modelo GoldSim, no captura adecuadamente la incertidumbre climática de la región.[793] Asimismo, el modelo fue alimentado con supuestos hidrológicos que no se sustentan con los datos reales del sitio.[794]
- Minera Gorrión no explicó técnicamente cómo las características de la instalación de codisposición (Dry Co-Disposal Facility) satisfacían los criterios aplicables de la NOM-141, pese al requerimiento expreso de la autoridad.[795] Como explican los expertos ambientales de la Demandada, Minera Gorrión "declaraba el cumplimiento de la [NOM-141] sin explicar cómo cada criterio relevante se aplicaría a una instalación que, según las propias Demandantes, no correspondía a una presa convencional de jales."[796]

---

791 Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 86.

792 Moose Mountain Technical Services (2019). NI 43-101 Technical Report on the Feasibility Study – Ixtaca Gold-Silver Project, Sección 25.10, p. 295. **C-0314.**

793 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 79, 90.

794 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 125, 129.

795 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶ 390.

796 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶¶ 278, 343(vi).

- La caracterización incorrecta de las presas FWD y WSD como obras de captación pluvial afectó directamente la suficiencia de la evaluación ambiental. Los expertos ambientales de la Demandada explican que, al omitir que en realidad estaban destinadas a interceptar, almacenar y regular escurrimientos superficiales en cauces definidos, la información presentada por Minera Gorrión no permitía determinar con precisión cómo se modificarían los flujos naturales, cuáles serían sus efectos sobre los ecosistemas asociados ni si las medidas propuestas serían suficientes para prevenirlos o mitigarlos.[797] Además, como ya se señaló, el volumen de escorrentía que, según el modelo de SRK, captarían las presas no se sustentaba en datos reales del sitio, sino en estimaciones que sobreestimaban el posible volumen de escorrentía, en contraste con los datos efectivamente registrados, que indicaban un volumen menor.[798]

- Las Demandantes sostienen que los estudios de factibilidad no necesitan contener el mismo nivel de detalle que la ingeniería definitiva y que determinados parámetros podrían refinarse durante etapas posteriores del Proyecto.[799] Las Demandantes confunden la existencia de un modelo de balance hídrico con la demostración de que el Proyecto contaba con agua suficiente y con información suficiente para evaluar sus impactos. Sin embargo, como ya se ha señalado, el problema es precisamente la falta de información suficiente sobre aspectos fundamentales que determinaban la confiabilidad del suministro y los impactos del Proyecto, tales como la variabilidad climática y datos reales del sitio.

632. La realidad es que con la información presentada por Minera Gorrión y las Demandantes, la DGIRA no podía determinar con certeza que el Proyecto Ixtaca fuera viable desde el punto de vista hidrológico.[800]

---

797 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶¶ 288-292.

798 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 127-129.

799 Réplica, ¶ 484 (d).

800 Segunda Declaración testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 96. ("[L]a finalidad de un estudio de factibilidad consiste precisamente en proporcionar evidencia suficiente para sustentar decisiones de diseño antes del inicio de la operación. Cuando la confirmación de hipótesis fundamentales queda diferida a información futura, el grado de confianza atribuible a las conclusiones debe interpretarse a la luz de esa limitación: no porque el Proyecto sea necesariamente inviable, sino porque la evidencia disponible al momento de la evaluación no demuestra, con el grado de robustez exigido, que el sistema mantendrá el desempeño previsto durante toda su vida útil.").

5. Los Proyectos Comparables

633. Las Demandantes reiteran que la "SEMARNAT's outright denial of the Ixtaca Project MIA stood in stark contrast to the way it approached similarly situated mining projects such as Camino Rojo, El Boleo, and Huazamota River –all of which were located near indigenous communities".[801] Esta postura deriva del supuesto trato desigual otorgado por parte de la DGIRA a otros proyectos en los que concedió una AIA de forma condicionada.

634. Las Demandantes basan su argumento en tres Proyectos: El Boleo, Camino Rojo y Río Huazamota. Sin embargo, dichos Proyectos presentan diferencias importantes con el Proyecto Ixtaca, por lo que no es posible establecer comparaciones entre proyectos que difieren sustancialmente en su magnitud, contexto histórico, características técnicas y tipo de actividad. Al ser proyectos sustancialmente diferentes en diversos aspectos, hace imposible una comparación real, motivo por el cual no se disputa la fiabilidad técnica y operativa de los otros proyectos.

635. Las diferencias consisten en los procesos de explotación, generación de residuos, infraestructura requerida y relación con las comunidades locales; las cuales son determinantes sobre las normas ambientales aplicables, las medidas de mitigación y el análisis caso por caso que realiza la DGIRA en cada proyecto.

636. Es metodológicamente incorrecto asumir que estos proyectos debían ser evaluados bajo los mismos requerimientos y condiciones, las diferencias entre sus procesos, impactos y contextos implican una evaluación individualizada sobre el tipo y nivel de información técnica necesaria, medidas de prevención, mitigación, seguimiento y normatividad aplicable.[802]

637. Adicionalmente, la autoridad está obligada a evaluar cada MIA en lo particular, porque debe considerar los efectos y afectaciones que cada proyecto pueda generar en los ecosistemas y

---

801 Memorial de Demanda, ¶¶ 354, 590 y 648. Réplica, ¶ 449.

802 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶ 359 ("No es posible establecer comparaciones homogéneas entre proyectos que difieren sustancialmente en su magnitud, contexto histórico y tipo de actividad, así como normatividad específicamente aplicable.307 El Boleo, Camino Rojo, Río Huazamota e Ixtaca difieren en sus procesos de explotación, generación de residuos, la infraestructura requerida, la magnitud de sus obras, el contexto territorial en que se desarrollan y su relación con las comunidades. Por ello, no resulta metodológicamente correcto asumir que estos proyectos debían ser evaluados bajo los mismos requerimientos y condiciones, dado que las diferencias entre sus procesos, impactos y contextos exigían una evaluación individualizada (normatividad aplicable, tipo y nivel de información técnica necesaria medidas de prevención, mitigación y seguimiento, etc").

no solo los recursos naturales afectados directamente,[803] por lo que, la sola comparación entre distintos proyectos no basta para intentar demostrar que la autoridad actuó de manera inconsistente.

638. *Primero.* Las diferencias técnicas que lo hacen imposible de comparar son:

- El proyecto del Boleo esté acotado a ampliar la superficie de extracción de una mina antigua utilizando instalaciones previamente autorizadas, por lo que es irracional buscar comparar la ampliación de tajo en una mina históricamente operada —que no modifica procesos de beneficio ni infraestructura de jales previamente autorizada— porque solo incorpora los componentes de una parte del proceso minero;[804]
- El proyecto de Camino Rojo operaba su mina mediante lixiviación en montones en una región con historia en explotación minera consolidada, por lo que no es posible comprar este proyecto que no generan jales y que se inserta en un entorno minero históricamente consolidado, bajo un contexto social completamente distinto.;[805] y
- El proyecto de Río Huazamota consistía en la extracción mecánica de menor escala en una superficie reducida y sin procesos metalúrgicos, esto es un proyecto de un banco de materiales pétreos de río, es decir, no es ni siquiera una mina de explotación minera.[806]

639. Estos tres proyectos no son similares al Proyecto Ixtaca que contemplaba un megaproyecto nuevo de minería a cielo abierto, con una superficie mucho mayor, dos presas de agua, manejo de sustancias riesgosas y generación estimada de millones de toneladas de jales y millones de toneladas de tepetate. Las dimensiones, alcances, procesos y condiciones socioambientales de Ixtaca son de naturaleza radicalmente diferente, por lo que los proyectos no se pueden comparar

803 Artículo 44, Reglamento LGEEPA. **C-0166**.

804 Primer Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶¶ 255-257.

805 Primer Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶¶ 263-265.

806 Primer Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶¶ 281-283.

640. Aunque el experto en materia ambiental de las Demandantes reconoce que los proyectos son distintos, también argumenta un supuesto trato discriminatorio por parte de la autoridad porque no impusieron exactamente los mismos requerimientos o exigencias sobre el análisis de la MIA.[807] Sin embargo, dos de los tres proyectos tienen características técnicas diferentes, sus impactos potenciales y el entorno en el que se desarrollan también son distintos.

641. Los requisitos que la DGIRA consideró para el Proyecto Ixtaca corresponden a las características técnicas y al contexto del propio proyecto, sobre los cuales Minera Gorrión no proporcionó la información suficiente y técnicamente sustentada para atender el requerimiento de la autoridad. La comparación con otros proyectos no sustituye ese análisis individualizado ni permite concluir, por sí sola, que existió un trato inconsistente o discriminatorio respecto de otros proyectos; porque sencillamente en este caso específico el promovente no cumplió con los estándares mínimos para obtener una AIA.[808]

642. *Segundo.* La comparación sobre el requerimiento de la Consulta Indígena no es un hecho comparable, es un requerimiento que se da por el simple hecho de existencia de presencia de población indígena. Desde 2023 es un requisito regulado en la LGEEPA y que una vez que existen indicios de existencia de población indígena, y se comprueba la viabilidad ambiental y jurídica del proyecto, se procede a realizar las consultas. Esta formalidad no da lugar a dudas y es necesaria su tramitación y realización. Pero nuevamente, la tramitación de un PEIA es caso por caso, ya que es un análisis individualizado a cada proyecto y sus características específicas.

643. La propuesta de otorgar una resolución condicionada no resultaba viable, porque la consulta no constituye únicamente un trámite, como lo quieren hacer ver los Sres. Limón y Dorantes. Autorizar primero y consultar después habría significado autorizar el proyecto sin contar

---

807 Segundo Informe de Experto del Sr. Mauricio Limón Aguirre, ¶ 181.

808 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶ 382 ("no es posible establecer comparaciones homogéneas entre proyectos que difieren sustancialmente en su magnitud, contexto histórico y tipo de actividad, así como normatividad específicamente aplicable.307 El Boleo, Camino Rojo, Río Huazamota e Ixtaca difieren en sus procesos de explotación, generación de residuos, la infraestructura requerida, la magnitud de sus obras, el contexto territorial en que se desarrollan y su relación con las comunidades. Por ello, no resulta metodológicamente correcto asumir que estos proyectos debían ser evaluados bajo los mismos requerimientos y condiciones, dado que las diferencias entre sus procesos, impactos y contextos exigían una evaluación individualizada (normatividad aplicable, tipo y nivel de información técnica necesaria medidas de prevención, mitigación y seguimiento, etc.").

con todos los elementos necesarios sobre el alcance de la MIA y autorizando un problema ambiental y social.[809]

644. *Tercero.* Otorgar la AIA condicionada para solventar problemas en el futuro (*i.e.*, medidas de mitigación), como sugieren las Demandantes y su experto, tampoco era viable. Las Demandantes omiten mencionar que no se solventaron las deficiencias técnicas esenciales para determinar la viabilidad del Proyecto.

645. Ante la falta de viabilidad técnica, la presentación posterior de actividades o programas no solventa aspectos esenciales de deficiencias en la MIA. Si en otros proyectos la autoridad ambiental impuso condicionantes futuras, se da a partir de la premisa que las medidas propuestas eran suficientes, específicas, congruentes y técnicamente idóneas para prevenir, mitigar, controlar o compensar los impactos propios del proyecto evaluado.[810]

646. *Cuarto.* Por lo que respecta al supuesto cumplimiento de la NOM-141 no basta con afirmar, que un proyecto cumplirá con una norma oficial. Para el Proyecto Ixtaca las Demandantes presentaron una vinculación deficiente y no acreditaron su cumplimiento, aunque manifestaron su compromiso de cumplirla, dicha vinculación fue meramente enunciativa y se limitó a algunos numerales, sin explicar técnicamente cómo las características de la instalación satisfacían los criterios aplicables de la norma.[811] Nuevamente, no se acreditó con evidencia su cumplimiento.

647. Los otros proyectos se sujetaron a las normas aplicables específicas. Como ejemplo, el proyecto Camino Rojo se sujetó al cumplimiento de la NOM-155-SEMARNAT-2007, que era la norma directamente aplicable a su proceso. Las Demandantes omiten señalar que la SEMARNAT también requirió a Camino Rojo desarrollar la vinculación con la NOM-155-SEMARNAT-2007 y que dicho requerimiento fue solventado con una vinculación técnica detallada. Situación que no sucedió con el Proyecto Ixtaca.

648. Por su parte, el Boleo consistió en la ampliación de la excavación de un tajo dentro de una mina que se encontraba en operación, que contaba con autorizaciones ambientales previamente

809 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶¶ 363-376.

810 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶¶ 377-379.

811 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶¶ 393.

emitidas y vigentes, motivo por el cual no requería acreditar el cumplimiento a ese NOM, porque no amplió la planta o los servicios previamente autorizados.

649. Sobre el otro proyecto, Río Huazamota, las propias Demandantes reconocen que la NOM-141 no era aplicable; ese proyecto únicamente contemplaba la extracción mecánica de gravas y arenas en greña y, por su naturaleza, no generaba jales ni contemplaba procesos de beneficio o instalaciones que tuvieran que estar regulados por esa NOM.

650. No existe una discriminación sobre el nivel de exigencia de la autoridad, sino la suficiencia técnica para acreditar el cumplimiento de las NOM o requerimientos técnicos que los otros proyectos si solventaron, situación que posiciona a los otros proyectos en una situación diferente y por ende no pueden ser tratados y comparados como equiparables en condiciones.

651. Los expertos de la Demandada son claros y concluyentes al señalar que la SEMARNAT no aplicó al Proyecto un estándar más severo que el utilizado en los proyectos comparados. La autoridad exigió la información técnica necesaria para identificar y valorar los impactos específicos de un proyecto nuevo, así como para determinar si las medidas propuestas eran suficientes y viables. La diferencia en el resultado de la evaluación no obedeció a una mayor exigencia o un trato diferenciado, sino a las características de cada proyecto y al grado de suficiencia de la información presentada.[812]

652. Cada proyecto debe ser evaluado de manera individual, considerando sus características técnicas, normativas y sociales. Pretender homologar criterios entre proyectos tan diferentes es metodológicamente incorrecto.

6. Las Demandantes no acreditaron que cumplen con la totalidad de permisos, autorizaciones y licencias para poner en marcha el Proyecto Ixtaca

653. La obtención de una Autorización de Impacto Ambiental, a través de la presentación de una MIA, es un permiso fundamental para poder llevar a cabo la explotación de un proyecto minero. Sin embargo, no representa la totalidad de permisos y autorizaciones necesarias para que un proyecto minero avance. En México, existe un extenso marco regulatorio que requiere diversas

812 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶¶ 394-395.

autorizaciones emitidas por distintas autoridades previo a que las empresas interesadas puedan empezar la fase de explotación de su proyecto.

654. Además de las obligaciones que impone la DGIRA para la aprobación de la MIA, los proyectos mineros están sujetos a normas federales y locales, entre ellas las siguientes:

- Federales: LGEEPA y su Reglamento; Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS); Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), y Ley General de Armas de Fuego y Explosivos.
- Locales: Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla; Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla; Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, en materia de prevención y control de la Contaminación Atmosférica; Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla, y Ley del Sistema Estatal de Protección Civil.

655. En este sentido, se observa que la operatividad de un proyecto como el que reclaman las Demandantes depende, entre otros factores, del cumplimiento de diversas regulaciones que van más allá de la autorización de la MIA por parte de SEMARNAT. No contar con todo el universo de permisos y licencias inherentes a un proyecto como el Proyecto Ixtaca lo hace inviable y/o inoperante, aun y cuando hubieran obtenido una AIA condicionada.

656. Además de la autorización de la MIA, se necesitaban otros permisos y autorizaciones, entre otros, se requería: el Permiso de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, Solicitudes de obra para la construcción de caminos, Solicitud de conexión al sistema eléctrico, el Permiso de Compra, Almacenamiento y Consumo o Compra-consumo de Materiales Explosivos para la industria minera, el Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial o Peligrosos y, la Licencia de Ruido.

a. Cambio de uso de Suelo

657. El Permiso de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales es una autorización administrativa en México que permite la remoción legal de vegetación de terrenos forestales, con

la finalidad de destinarlos a otro tipo de actividades, como las actividades industriales que Minera Gorrión llevaría a cabo.

658. Minera Gorrión conocía que debía tramitar dicho permiso, tal como lo reconoció en su Solicitud de MIA, e informó que presentaría "en breve" la Solicitud de Autorización del Cambio del Uso del Suelo en Terrenos Forestales (Solicitud de Cambio de Suelo), pero que, de momento, la MIA incluía la solicitud de autorización del impacto por el Cambio del Uso de Suelo de Áreas Forestales.[813]

659. Tal afirmación demuestra que Minera Gorrión sabía que podía presentar la Solicitud de Cambio de Suelo a la par que su MIA; por lo que, incluso aunque se hubiera autorizado su MIA, todavía no contaba con los permisos necesarios para explotar el Proyecto Ixtaca al no haber realizado aún el cambio de Uso de Suelo correspondiente.

b. Solicitud de obra para la construcción de caminos

660. Dentro de su Escrito de presentación de la MIA, Minera Gorrión indicó que no le correspondía realizar ciertas obras asociadas al Proyecto —como la construcción de caminos y la transmisión eléctrica—, sino que estas debían ser realizadas por las autoridades competentes; por tal motivo, según Minera Gorrión, la MIA no las incluía dentro de la solicitud de autorización, sino que las mencionaba para describir los impactos que el proyecto podría tener.[814]

661. Como lo mencionó la DGIRA en su resolución, Minera Gorrión necesitaba la construcción de un nuevo puente que cruzara el Río Apulco y una desviación para evitar el paso de tránsito pesado por la población de Santa María Zotoltepec;[815] sin embargo, a pesar de la magnitud de las obras, no incluyó su construcción como parte de su MIA de 2019.

662. Lo que la empresa omitió señalar es que, independientemente de quién ejecutara esas obras, la autoridad no las llevaría a cabo por cuenta propia, sino que debía ser a instancias del privado interesado, *i.e.*, Minera Gorrión tuvo que haber presentado solicitudes de obra ante las autoridades

---

813 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, p. III-18. **C-0262.**

814 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, p. II-14. **C-0262.** *Ver* Resolución de SEMARNAT (Oficio SGPA/DGIRA/DG/06549), 17 de diciembre de 2020, p. 24. **C-0086**.

815 Resolución de SEMARNAT (Oficio SGPA/DGIRA/DG/06549), 17 de diciembre de 2020, p. 24. **C-0086**.

locales para que ellas evaluaran el proyecto en estos aspectos; así como su relación con la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Puebla, el Plan de Desarrollo Urbano, Social y Económico del Estado y del municipio; su pertinencia con la Ley de Egresos del estado de Puebla, y su viabilidad ambiental. Todo lo anterior para poder determinar, en dado caso, la ejecución de dichas obras.

663. Así, se encontraba pendiente una solicitud básica para poder iniciar operaciones en el Proyecto Ixtaca, la cual estaría sujeta a sus propios requisitos y evaluaciones de todo tipo, incluidas las ambientales.

c. Solicitud de conexión al sistema eléctrico

664. Minera Gorrión señaló que necesitaría la instalación de una línea de transmisión eléctrica para suministrar de energía eléctrica al proyecto, instalación que, a decir de las Demandantes, estaría a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).[816] Al igual que en el caso de la construcción de caminos, la empresa debió informar y solicitar a la autoridad que ejecutara las obras requeridas, misma que evaluaría la necesidad y viabilidad de la solicitud, de conformidad con la normativa de la materia.[817]

665. En este orden de ideas, Minera Gorrión debería de haber presentado una Solicitud de Conexión como Centro de Carga ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).[818] Además, independientemente de quien llevara a cabo la construcción física de la línea de transmisión eléctrica, le correspondería a la interesada pagar la aportación correspondiente para que la CFE pudiera instalar la línea de transmisión, puesto que el suministro de electricidad a la mina no se encontraba previsto en los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución.[819]

666. Así pues, Minera Gorrión debía iniciar trámites ante la autoridad respectiva para poder suministrar electricidad a su proyecto, trámites que la autoridad no iniciaría *motu proprio*. Todas

---

816 Resolución de SEMARNAT (Oficio SGPA/DGIRA/DG/06549), 17 de diciembre de 2020, p. 24. **C-0086**.

817 Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, 31 de octubre de 2014. **R-0234**.

818 Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga, 19 de diciembre de 2017. **R-0235**.

819 Artículo 35, Ley de la Industria Eléctrica, 11 de agosto de 2014. **R-0236**.

estas solicitudes y contratos faltantes reflejan nuevamente que la empresa no contaba con los requerimientos para poner en marcha el Proyecto Ixtaca.

d. Permiso de explosivos

667. Dado que el proyecto contemplaba una mina a cielo abierto, se ocuparía el uso de explosivos, para los cuales se requeriría el Permiso de Compra, Almacenamiento y Consumo o Compra-consumo de Materiales Explosivos para la industria minera, el cual es otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional.[820]

668. La empresa reconocía que utilizaría explosivos y señaló que se cumplirían con las especificaciones de la autoridad.[821] No obstante, a pesar de ser uno de los primeros elementos que utilizarían en el proyecto, tampoco se encuentra evidencia en el expediente del permiso necesario para que llevaran a cabo de manera legal y segura el uso de explosivos o de que se encontrara en trámites de obtener este.

e. Residuos de Manejo Especial o Peligrosos

669. La misma situación ocurre para su Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial o Peligrosos. La empresa tenía claramente identificado que sería generador de residuos peligrosos a lo largo de todas las etapas del proyecto; tan es así, que consideraba construir un almacén para tales residuos.[822]

670. No obstante, en el expediente no existe evidencia de la gestión u obtención del permiso necesario para el manejo de dichos recursos ni se hace alusión a que se solicitaría en un futuro.[823] Lo anterior cobra relevancia puesto que el Proyecto empezaría a generar residuos de manejo especial desde las primeras etapas del proyecto; así, la falta del permiso correspondiente, evidencia que el Proyecto Ixtaca no cumplía con los requisitos para ponerse en marcha.[824]

---

820 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 11 de enero de 1972. **R-0237**.

821 Resolución de SEMARNAT (Oficio SGPA/DGIRA/DG/06549), 17 de diciembre de 2020, pp. 18 y 24. **C-0086**.

822 Resolución de SEMARNAT (Oficio SGPA/DGIRA/DG/06549), 17 de diciembre de 2020, p. 101. **C-0086**.

823 Resolución de SEMARNAT (Oficio SGPA/DGIRA/DG/06549), 17 de diciembre de 2020, p. 126. **C-0086**.

824 *Ver* Memorial de Contestación, § D.1, sub apartados (3) y (4).

f. Locales

671. Existían además múltiples permisos a nivel local que Minera Gorrión necesitaba tener para poder estar en condiciones de iniciar la operación del Proyecto Ixtaca, *e.g.* la Licencia de ruido, la Licencia de operación y funcionamiento de fuentes fijas de emisión de contaminantes a la atmósfera de jurisdicción estatal y el Permiso de manejo de residuos sólidos.

672. Lo anterior demuestra que Minera Gorrión necesitaba aun la obtención de otros permisos para poder realizar la explotación del Proyecto Ixtaca, por lo que la resolución de la MIA no era el único impedimento de su Proyecto.

673. Finalmente, cabe recordar que la MIA presentada por Minera Gorrión se basó en los títulos de concesión "reducidos", *i.e.*, en el Título de Concesión número 245486 "Cerro Grande R1" y en el Título No. 245494 "Cerro Grande 2 R3".[825] Sin embargo, desde diciembre de 2018, la Secretaría de Economía había revocado dichas reducciones y había dejado vigentes las concesiones originales con su tamaño inicial (Títulos de Concesión Cerro Grande y Cerro Grande 2).[826] En este sentido, incluso si se hubiera aprobado la MIA tal como fue presentada originalmente por Minera Gorrión, existía una posibilidad de que la DGIRA cancelara la autorización dado que la empresa presentó información falsa sobre la ubicación del Área del Proyecto.

7. La fase de exploración del Proyecto Ixtaca no aseguraba la viabilidad del Proyecto

674. Las Demandantes y su experto ambiental señalan que los resultados obtenidos durante ciertas visitas de inspección durante la fase de exploración, realizadas por la PROFEPA[827] al Proyecto, tuvieron como efecto que se validara el cumplimiento en materia ambiental del Proyecto Ixtaca prácticamente en su totalidad.[828] Eso es incorrecto, tales actuaciones de la PROFEPA se encuentran vinculadas únicamente a la fase de exploración, etapa previa y distinta de la fase de explotación del Proyecto.

---

825 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019, pp. I-4, I-7. **C-0262.**

826 Memorial de Contestación, ¶¶ 375-378. *Ver también* Acuerdo del 2° Juzgado de Distrito, 14 de diciembre de 2018, p. 4. **R-0095**. Dirección General de Minas, Oficio No. 610.23714.2018, 19 de diciembre de 2018, pp. 3-4. **R-0096.**

827 Memorial de Contestación, ¶¶ 181 – 184.

828 Réplica, ¶¶ 124, 125, 128 y130. Segundo Informe de Experto del Sr. Limón, ¶ 181.

a. Las inspecciones de PROFEPA no convalidaron el Proyecto Ixtaca

675. La existencia de una visita de inspección tiene una delimitación temporal y un objeto especifico de la visita, pues únicamente permiten documentar los hechos u omisiones observados por la autoridad durante el desarrollo de la visita misma y en la fecha en que ésta se lleva a cabo. Por ello, sus resultados no pueden constituir una validación universal del cumplimiento de la normativa ambiental o una confirmación integral del cumplimiento ambiental de su proyecto, así como tampoco implica una revisión de todas las materias ambientales o de manera general en relación con periodos anteriores o posteriores a la fecha en que tuvo lugar la inspección.

676. El objeto de una visita de inspección es definido en las órdenes de inspección y los inspectores gubernamentales que realizan las inspecciones solo tienen la facultad de revisar el objeto y materia delimitado en esa orden de inspección. Lo anterior implica que, la PROFEPA no revisó la totalidad de las obligaciones ambientales.

677. En su caso, lo único que la PROFEPA validó fue el hecho que no se realizaron actividades de explotación, únicamente actividades de exploración.[829] El alcance material de la PROFEPA para inspeccionar es limitado, por lo que es absurdo pensar que puede inspeccionar permanentemente a todos los regulados o todas las actividades del territorio nacional. Por esa razón, la actuación de la Administración Pública Federal parte de un principio de buena fe, conforme al cual se presume que los sujetos regulados cumplen voluntariamente con las obligaciones que les impone el marco normativo aplicable.

678. Otra inferencia errónea de las Demandantes es la falta de procedimientos administrativos abiertos para Minera Gorrión,[830] para afirmar que la empresa cumplió con la normativa ambiental aplicable. Sin embargo, la ausencia de procedimientos administrativos abiertos constituye una circunstancia meramente fáctica, no una determinación sustantiva de cumplimiento, es decir, la inexistencia de procedimientos abiertos no excluye que hubieran existido posibles violaciones o incumplimientos ambientales.[831]

---

829 Oficio No. PFPA/27.2/440/2019 emitido por la PROFEPA, del 12 de marzo de 2019. **C-0273.**

830 Acuerdo de la PROFEPA por el que confirma que no han existido procedimientos administrativos en los últimos 5 años. en contra de Minera Gorrión, del 14 de septiembre de 2017. **C-0233.**

831 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶¶ 349-358.

679. Por su parte, la sentencia del TFJA dentro del juicio de nulidad[832] determinó que no existían ilegalidades relacionadas con el Informe Preventivo Ixtaca IV. Este juicio de nulidad fue interpuesto por una preocupación legitima de la comunidad y sus pobladores sobre su derecho al medio ambiente sano y la disponibilidad de recursos naturales, por lo que, es incorrecto caracterizarla como un hecho creado con el propósito de robustecer la EIDH de PODER como lo señalan las Demandantes,[833] argumento que no tiene sustento o evidencia que lo soporte.

680. Sobra decir que el alcance de la sentencia del TFJA es acotada a la validez del Informe Preventivo y no constituye un pronunciamiento sobre el cumplimiento general, integral o sustantivo respecto de la totalidad de sus obligaciones en materia ambiental de las Demandantes.[834]

681. Un aspecto adicional que hubiera confirmado que su proyecto fue convalidado por la autoridad ambiental en ese momento, solo sobre la fase exploración, hubiera sido la obtención de Certificados de Industria Limpia, el cual acredita el cumplimiento ambiental existente al momento de su expedición.[835] Sin embargo, esos Certificado de Industria limpia no fueron gestionados u obtenidos por las Demandantes.

b. Las actividades de exploración tenían inconsistencias

682. La PROFEPA realizó una visita de inspección de residuos peligrosos en noviembre de 2021 y una visita complementaria en febrero 2022, la cual se llevó a cabo en cumplimiento de la regulación y el debido proceso, en el que Minera Gorrión fue escuchado y ejerció sus derechos procesales.[836] No obstante, se acreditaron varias irregularidades con sus permisos y manejo de registros peligrosos.

683. En marzo de 2022, la PROFEPA inició un procedimiento administrativo contra Minera Gorrión y le ordenó una medida correctiva consistente en presentar el registro como generador de

832 Juicio de Nulidad No. 2515/17-EAR-01-10, promovido por los Sres. Fidel Pérez Martínez, Evelia Hernández Juárez, Irma González Rodríguez, Ignacia Serrano Arroyo y Francisca Zamora Morales.

833 Réplica, ¶¶ 131-133.

834 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶¶ 349 y 356.

835 Segundo Informe de Carlos del Razo y Carlos Rábago, ¶¶ 352 y 353.

836 Memorial de Contestación, ¶¶ 191-213.

residuo identificado.[837] En julio de 2022, Minera Gorrión presentó un escrito ante la PROFEPA mediante el cual realizó diversas manifestaciones, sin embargo, no acreditaron el cumplimiento de las medidas correctivas, es decir, no presentó el registro como generador de residuos peligrosos.[838]

684. Al no haber solventado los incumplimientos, la PROFEPA emitió la resolución del procedimiento administrativo, concluyendo que persistían múltiples incumplimientos vinculados con el registro como generador de residuos peligrosos, la falta de bitácoras completas, la ausencia de autorización para almacenamiento prolongado, y la falta de documentos debidamente firmados que permitieran verificar la trazabilidad de los residuos gestionados en el sitio.[839]

685. La PROFEPA concluyó que Minera Gorrión estaba obligada a tramitar su propio registro como generador desde enero de 2019, año en el que asumió formalmente las obligaciones del Proyecto Ixtaca. La evidencia acredita que existen inconsistencias, omisiones e incumplimientos por parte de las Demandantes para atender sus obligaciones ambientales en la fase de exploración, contrario a lo que pretende hacer creer en sus argumentos.[840]

G. Las actuaciones de la SEMARNAT, el INPI y demás autoridades mexicanas fueron ejercicios regulares de sus facultades

686. Las Demandantes toman reuniones entre dependencias, estudios técnicos y comunicados institucionales —una serie de actuaciones perfectamente ordinarias a cargo de distintas autoridades públicas— y, mediante especulación, las presentan como si formaran parte de una "bad faith campaign" en contra del Proyecto Ixtaca.[841] La realidad es que ninguna de esas actuaciones demuestra arbitrariedad ni una instrucción para afectar al Proyecto Ixtaca.

687. Como autoridad ambiental federal, la SEMARNAT tiene amplias facultades para, entre otras cosas:

---

837 PROFEPA, Resolución al Expediente No. PFPA/27.2/2C.27.1/00054-21, 9 de marzo de 2022. **R-0043**.

838 PROFEPA, Acuerdo No. de Control 010-04, 28 de septiembre de 2022, p. 15. **R-0044**.

839 PROFEPA, Acuerdo No. de Control 010-04, 28 de septiembre de 2022. **R-0044**.

840 Memorial de Contestación, ¶¶ 207-213.

841 Réplica, Sección 2.16.

- Fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales;[842]
- Formular, conducir y evaluar la política en materia de recursos naturales, con la participación de otras dependencias y entidades;[843]
- Vigilar, promover y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento del marco legal en materia de medio ambiente;[844]
- Promover la participación social en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental, a efecto de concertar acciones con los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente;[845] y,
- Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad.[846]

688. Es decir, aunque ya hubiera concluido el procedimiento de evaluación de la MIA, la SEMARNAT seguía siendo la autoridad ambiental federal y como tal conservó competencia sobre el Proyecto Ixtaca. Nada en la legislación mexicana dispone que dichas facultades desaparezcan una vez concluido un PEIA. Precisamente, la SEMARNAT en el ejercicio de sus facultades sostuvo reuniones con otras dependencias y atendió las solicitudes de los habitantes y organizaciones de la Sierra Norte de Puebla en 2022.

689. Aquí cabe destacar que las Demandantes describen reiteradamente a la Unión de ejidos Atcolhua, a Tecoltemi y a otras ONG como "anti-mining NGOs", con el evidente propósito de presentar las reuniones como encuentros con grupos de presión privados. Esa caracterización omite un aspecto esencial, cómo están compuestas las diversas organizaciones y cuáles son sus objetivos.

842 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Artículo 32 bis, fracción I. **R-0010**.

843 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Artículo 32 bis, fracción II. **R-0010**.

844 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Artículo 32 bis, fracción V. **R-0010**.

845 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Artículo 32 bis, fracción XII. **R-0010**. Artículos 6, fracción XVI, 18 y 47, LGEEPA. **C-0156**.

846 Artículo 15, fracción XIII, LGEEPA. **C-0156**.

690. Por un lado, la Unión de ejidos Atcolhua y Tecoltemic son habitantes de la región y durante años expresaron sus preocupaciones ambientales, sociales e indígenas a causa del Proyecto Ixtaca.[847] De hecho, fueron los propios habitantes de la región quienes, al menos desde finales de 2019, solicitaron la intervención de las autoridades ambientales para plantear sus preocupaciones respecto de los posibles efectos del proyecto minero en su territorio,[848] y quienes promovieron el Amparo 445/2015.[849]

691. Por otro lado, organizaciones como FUNDAR, IMDEC y PODER son organizaciones de la sociedad civil dedicadas, entre otras cuestiones, a la promoción y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.[850] Presentar a todas estas organizaciones indistintamente como grupos de presión privados pretende ocultar que su intervención estaba vinculada con preocupaciones legítimas sobre un proyecto que afectaba directa e indirectamente su territorio y sus derechos. En la sección II. A de la Dúplica, la Demandada ha detallado las características de cada una de ellas, con el fin de presentar el marco analítico adecuado.

692. Las Demandantes parecen sugerir que la SEMARNAT debió no haber ejercido sus facultades, pero, precisamente como ellas reconocen,[851] los servidores públicos deben "[c]umplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio".[852] No cumplir con esa obligación puede resultar en

---

847 *Ver* La Jornada del Oriente, Habitantes de Ixtacamaxtitlán se reúnen con Albores para ratificar rechazo a Almaden, 13 de julio de 2022 ("[…] *pobladores de Ixtacamaxtitlán* reiteraron ante María Luisa Albores González, secretaria del Medio Ambiente federal, su rechazo a la explotación de un yacimiento de oro y plata a cielo abierto que pretende la filial de la transnacional de origen canadiense Almaden Minerals Ltd.") [énfasis añadido]. **C-0729**.

848 Expediente de la MIA del Proyecto Ixtaca No. 21PU2019M0014, producido por México, vol. II, diciembre de 2018, p. 12. **C-0629**.

849 Amparo 445/2015 interpuesto por la Comunidad Indígena Tecoltemic y el Ejido de Tecoltemic, 7 de abril de 2015. **C-0032**.

850 Fundar, Quiénes Somos, disponible en: https://fundar.org.mx/somos/. **R-0238**. PODER, Somos, disponible en: https://poderlatam.org/que-hacemos/. **R-0239**. IMDEC, Quiénes Somos, disponible en: http://www.imdec.net/quienes-somos/. **R-0240**.

851 Réplica, ¶ 573.

852 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, Artículo 8, fracción I. **R-0241**.

faltas administrativas sancionables con la destitución o la inhabilitación de hasta un año para desempeñar cargos en el servicio público.[853]

693. No sólo ellos, los particulares —incluidos los pueblos indígenas— tienen el derecho constitucional de petición. El artículo 8 de la Constitución mexicana establece expresamente que "los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición" y les impone la obligación de emitir una respuesta al peticionario "en breve término".[854]

694. En el presente caso, la actuación de la SEMARNAT tuvo un origen concreto que las Demandantes omiten: el 11 de julio de 2022 los propios habitantes de la región presentaron ante la SEMARNAT un escrito mediante el cual solicitaron la elaboración de estudios sobre las posibles afectaciones derivadas de la actividad minera.[855] Así, la intervención de la SEMARNAT no surgió de una iniciativa unilateral dirigida contra el Proyecto Ixtaca, sino de una petición formulada por habitantes de la región, al amparo de su derecho constitucional de petición. En estas circunstancias, la SEMARNAT no sólo estaba facultada para recibir y atender dicha solicitud; estaba constitucionalmente obligada a hacerlo.

695. Así, en respuesta a dicha solicitud, la SEMARNAT coordinó la elaboración de diversos estudios técnicos con las autoridades competentes, entre ellas el IMTA, el INECC y la CONABIO. Por tanto, contrario a lo que sugieren las Demandantes, la elaboración de estos estudios no fue una iniciativa unilateral de la SEMARNAT dirigida a obstaculizar el Proyecto Ixtaca, sino una actuación emprendida en respuesta a una petición presentada por habitantes de la región en ejercicio de su derecho constitucional de petición.

696. Además, las reuniones de julio y agosto de 2022 no son un caso excepcional. Las autoridades ambientales reciben constantemente peticiones de comunidades. De hecho, como señaló el Dr. Pedrozo desde su primera declaración testimonial, existen múltiples ejemplos de

---

853 Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículos 49, fracción I, 50 y 75. **R-0182**.

854 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 8. **R-0246**.

855 Oficio de SEMARNAT al IMTA, 20 de julio de 2022 ("Hago referencia al escrito de fecha de 11 de julio de 2022 dirigido a la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la cual, la Lic. [testado], integrante del Consejo Tiyat Tlali, Representante de la Comunidad Nahua y Ejido Tecoltemi, Comunidad de Tecoltemi, en el Estado de Puebla […] solicita se realicen los estudios necesarios, en los que se identifiquen y verifiquen las condiciones de la calidad del agua, aire, suelo, aire y cómo ha impactado dicha actividad minera en estos recursos naturales, así como la diversidad biológica."). **R-0233**.

reuniones entre la SEMARNAT y comunidades para atender zonas y proyectos de interés ambiental.[856] No existe, por tanto, nada irregular en que una autoridad ambiental reciba a miembros de una comunidad que manifiestan preocupaciones respecto de un proyecto y, a partir de ello, coordine con otras autoridades la obtención de información técnica relevante.

697. La realidad es que las Demandantes no identifican disposición legal alguna que prohíba tales reuniones ni demuestran que de ellas derivara instrucción ilegal alguna. En esas reuniones se buscaba "seguir analizando las afectaciones de la actividad minera en la región, así como el impacto social que genera".[857] Asimismo, en ellas, las autoridades ambientales refrendaron su compromiso de seguir "las acciones de inspección y vigilancia, a fin de que se cumpla con la normatividad ambiental".[858] Nada de ello equivale a una instrucción para cancelar las concesiones o impedir el desarrollo del Proyecto Ixtaca.

698. Las Demandantes caracterizan estas reuniones como "closed-door meetings" en un intento de presentarlas como reuniones clandestinas o impropias.[859] Sin embargo, resulta contradictorio calificar de "closed-door meetings" reuniones institucionales cuya existencia fue publicada. La propia SEMARNAT emitió comunicados de prensa reconociendo la celebración de dichas reuniones.[860] Y lo sucedido en ellas también fue entregado como cualquier otro acto administrativo. Las propias Demandantes obtuvieron, mediante mecanismos ordinarios de acceso a la información pública más documentos.[861] Que una reunión institucional no sea una reunión pública abierta a cualquier persona no la convierte en ilegal, irregular o secreta.

699. Contrario a lo que alegan las Demandantes, no existía una instrucción de llegar a una decisión predeterminada sobre el Proyecto Ixtaca. La decisión fue "la elaboración de un estudio técnico ambiental que analice *la factibilidad o no* para la instalación de *proyectos mineros* en la

---

856 Memorial de Contestación, ¶ 449. Primera Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Adrián Pedrozo, ¶ 15.

857 SEMARNAT, "Impulsa Semarnat un diálogo con autoridades y pobladores de la Sierra Norte de Puebla en favor del cuidado del medio ambiente", 12 de julio de 2022. **C-0393**.

858 SEMARNAT, "Impulsa Semarnat un diálogo con autoridades y pobladores de la Sierra Norte de Puebla en favor del cuidado del medio ambiente", 12 de julio de 2022. **C-0393**.

859 Réplica, ¶¶ 499, 572, 574, 581.

860 SEMARNAT, "Impulsa Semarnat un diálogo con autoridades y pobladores de la Sierra Norte de Puebla en favor del cuidado del medio ambiente", 12 de julio de 2022. **C-0393**.

861 Réplica, ¶ 566.

zona".[862] En efecto, para atender la solicitud de los habitantes de la región, la petición de la exsecretaria Albores fue "llevar a cabo un peritaje ambiental en suelos, agua, aire y biota en la localidad de Ixtacamaxtitlán, Puebla".[863] Y fue por ese motivo que se coordinó la elaboración de "estudios de calidad del agua, suelo, biota, forestal, flora y fauna a cargo del IMTA, INECC y PROFEPA".[864] Es evidente que en todo momento se buscó "sustentar con evidencia técnica y científica"[865] los estudios a realizar.

700. La coordinación de la SEMARNAT con el INECC, el IMTA, la CONABIO, el INPI y otras dependencias públicas tampoco es irregular. Como se señaló, SEMARNAT tiene la facultad de conducir la política ambiental *con la participación de otras dependencias y entidades*.[866] La participación de organismos especializados en materias técnicas distintas es fundamental para la protección ambiental y constituye un mecanismo ordinario de actuación administrativa, no evidencia de una campaña contra un proyecto específico.

701. En ese contexto, el Estudio de agua del IMTA, el Estudio de suelo y aire del INECC y el Informe de impacto a la biodiversidad de la CONABIO fueron estudios puramente técnicos.[867] Cada una de las dependencias contaba con facultades para hacerlos,[868] y éstas se basaron en un

---

862 Minuta de la reunión de seguimiento entre la SEMARNAT, el IMTA, el INECC y la PROFEPA, 29 de julio de 2022 [Énfasis añadido]. **C-0786**.

863 Minuta de la reunión entre la SEMARNAT, el INECC y FUNDAR, 9 de agosto de 2022. **C-0397**.

864 Minuta de la reunión entre la SEMARNAT, el IMTA, el INECC y la PROFEPA, 29 de julio de 2022. **C-0786**. *Ver* también Oficio de SEMARNAT al IMTA, 20 de julio de 2022 ("[P]or instrucciones de la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y por tratarse de un asunto de su competencia, le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que […] se realice un estudio *que analice los efectos* de la actividad de exploración de la Minería Gorrión en el municipio de Ixtacamatitlán, estado de Puebla, en materia de agua.") [Énfasis añadido]. **R-0233**. [documento E2.5]

865 Minuta de la reunión entre la SEMARNAT, el INECC y FUNDAR, 9 de agosto de 2022. **C-0397**.

866 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Artículo 32 bis, fracciones V y XII. **R-0010**. Artículos 6, fracción XVI, 18 y 47, LGEEPA. **C-0156**.

867 Informe del IMTA, "Informe de Actividades. Municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, México, 2022". **C-0378**. Informe del INECC, "Determinación de las Concentraciones Ambientales y la Exposición Personal a PM2.5 en el Municipio de Ixtacamaxtitlán, Estado de Puebla", diciembre 2022. **C-0403**. Informe de la CONABIO, "Informe sobre el Proyecto de Exploración de la Minería Gorrión en el municipio de Ixtacamaxtitlán, estado de Puebla (SE/092/2022)", 6 de diciembre de 2022. **C-0404**.

868 Estatuto Orgánico del IMTA, Artículo 7 ("El INECC tiene por objeto: I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; II. Brindar apoyo técnico y científico a la

análisis objetivo de muestras de agua, suelo, biota, flora y fauna de la zona.[869] Las Demandantes no explican por qué la generación de información técnica por las autoridades especializadas, en respuesta a una petición ciudadana, constituiría, por sí misma, evidencia de una actuación arbitraria o de mala fe.

702. Las Demandantes tampoco han demostrado que la participación del INPI en la elaboración del estudio social, cultural y de espiritualidad indígena haya sido irregular.[870] Las Demandantes presentan dicho estudio como evidencia de una supuesta coordinación indebida entre el gobierno y organizaciones contrarias al Proyecto.[871] Sin embargo, esa caracterización pasa por alto que el INPI es precisamente la autoridad especializada en materia de pueblos y comunidades indígenas y que, dentro del ámbito de sus atribuciones, puede realizar estudios y generar información sobre las condiciones sociales, culturales y espirituales de dichos pueblos.[872] El INPI también puede recibir

---

Secretaría para formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de cambio climático, equilibrio ecológico y protección del medio ambiente."). **R-0232**. Estatuto Orgánico del IMTA, Considerandos ("[A]l Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se le otorgaron las funciones siguientes: I. Realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y actividades de investigación; desarrollar, adaptar y transferir tecnología; formar recursos humanos calificados que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y manejo sustentable e integral del agua; II. Desarrollar proyectos de investigación, educación y capacitación especializadas de interés para otras instituciones […]."). **R-0232**. Acuerdo por el que se crea la CONABIO, 16 de marzo de 1992, Artículo Primero ("[La CONABIO] tendrá por objeto coordinar las acciones y estudios relacionados con el conocimiento y la preservación de las especies biológicas, así como promover y fomentar actividades de investigación científica para la exploración, estudio, protección y utilización de los recursos biológicos tendientes a conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para su manejo sustentable."). **R-0242**.

869 Informe del IMTA, "Informe de Actividades. Municipio de Ixtacamtitlán, Puebla, México, 2022", pp. 8-15. **C-0378**. Informe del INECC, "Determinación de las Concentraciones Ambientales y la Exposición Personal a PM2.5 en el Municipio de Ixtacamtitlán, Estado de Puebla", diciembre 2022, pp. 8-14. **C-0403**. Informe de la CONABIO, "Informe sobre el Proyecto de Exploración de la Minería Gorrión en el municipio de Ixtacamtitlán, estado de Puebla (SE/092/2022)", 6 de diciembre de 2022, pp. 19-29. **C-0404**.

870 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Estudio de Impacto Social, Cultural y de Espiritualidad Indígena Respecto al Proyecto Minero: "Explotación y Beneficio de Minerales Ixtaca" en el Municipio de Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla. Títulos de Concesión: 219469 y 233434 (Cerro Grande y Cerro Grande 2), enero de 2023. **C-0407**.

871 Réplica, ¶¶ 597-599.

872 Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, diciembre de 2018, Artículo 4 ("[…] el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y funciones: […] III. Promover, respetar, proteger y garantizar el reconocimiento pleno y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país sea parte. Para este efecto, se deberá establecer un diálogo sostenido e incluyente con los pueblos indígenas y afromexicano, como sujetos de derecho público y mediante una relación de respeto e

solicitudes de organizaciones y habitantes de la región para realizar estudios,[873] y enviarlos a otras autoridades para garantizar el reconocimiento, protección e implementación de los derechos de los pueblos indígenas.[874] Las razones para la elaboración del estudio fueron expresada por el INPI, y las Demandantes lo adjuntaron como anexo en este arbitraje—proporcionado por la Demandada. La interpretación del INPI es clara: "estima que es necesario tomar en consideración las afectaciones que generen sobre la cultura, la identidad, organización y relaciones espiritual de los Pueblos y comunidades indígenas con su tierra y su territorio, pues se trata de elementos que pueden tener como consecuencia el deterioro o incluso la desaparición de dicha especificidad cultural, tutelada… en la Constitución Federal [y el] Convenio 169 de la OIT".[875] Es evidente que

igualdad, para la coordinación y ejecución de acciones conjuntas basadas en la buena fe; […] Realizar acciones para el diseño y la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano: a) De colaboración y coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; […] VI. Proponer, promover e implementar las medidas que se requieran para garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano; […] VIII. Formular y ejecutar, en coordinación con los pueblos indígenas y afromexicano, los programas para la investigación, capacitación, defensa y promoción de los derechos de dichos pueblos; […] XV. Apoyar los procesos de reconocimiento, protección, defensa y conservación de las tierras, territorios, bienes y recursos naturales de los pueblos indígenas, de conformidad con la normatividad aplicable; XVI. Promover e instrumentar las medidas pertinentes, en coordinación con las instancias competentes, los pueblos indígenas y afromexicano, para la conservación y protección de la integridad de la biodiversidad y el medio ambiente de dichos pueblos, a fin de generar y mantener modos de vida sostenibles y hacer frente a las consecuencias adversas del cambio climático; […] XVIII. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los planes, programas, proyectos y acciones gubernamentales, […] y hacer recomendaciones para garantizar el reconocimiento, protección e implementación de los derechos, así como para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de dichos pueblos; XIX. Realizar, publicar, difundir y promover las investigaciones y estudios relativos a los pueblos indígenas y afromexicano […]."). **R-0207**.

873 Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, diciembre de 2018, Artículo 4 ("[…] el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y funciones: […] III. Promover, respetar, proteger y garantizar el reconocimiento pleno y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país sea parte. *Para este efecto, se deberá establecer un diálogo sostenido e incluyente con los pueblos indígenas y afromexicano,* como sujetos de derecho público y mediante una relación de respeto e igualdad, para la coordinación y ejecución de acciones conjuntas basadas en la buena fe; […] XXIV. *Asesorar y apoyar en los asuntos relativos a los pueblos indígenas y afromexicano, a las instituciones federales,* así como a los estados, municipios *y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten*; […]") [Énfasis añadido]. **R-0207**.

874 Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, diciembre de 2018, Artículo 4 ("[…] el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y funciones: […] XVIII. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los planes, programas, proyectos y acciones gubernamentales, […] *y hacer recomendaciones para garantizar el reconocimiento, protección e implementación de los derechos, así como para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de dichos pueblos*; […].") [Énfasis añadido]. **R-0207**.

875 Oficio del INPI a Secretaría de Economía, 9 de enero de 2023. **C-0796**.

el INPI actuó en el ejercicio de sus facultades. Las Demandantes pueden estar en desacuerdo con la interpretación del INPI. No obstante, las Demandantes no pueden rechazar que, en efecto, la Constitución y el Convenio 169 de la OIT buscan salvaguardar los derechos indígenas, entre ellos su especifididad cultural, como lo indica el INPI. La elaboración del Estudio del INPI no constituye, evidencia de una campaña coordinada contra el Proyecto Ixtaca.

703. Según las Demandantes, las autoridades debieron haber involucrado a Minera Gorrión en la elaboración de estos estudios.[876] Sin embargo, esas alegaciones carecen de fundamento. Tal como confirmaron las cortes mexicanas,[877] la elaboración de dichos estudios no fue un procedimiento administrativo o judicial en el que se debiera dar parte a Minera Gorrión,[878] sino que "sólo constituyen una opinión científica y técnica que tiene como finalidad la protección del medio ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático";[879] por lo que dichos estudios "por sí solos no generan una afectación a los derechos sustantivos de [Minera Gorrión]".[880]

704. En otras palabras, se trató de un análisis técnico de las condiciones del agua, aire, suelo, biodiversidad y condiciones sociales y culturales de la zona,[881] elaborado a petición de los

876 Réplica, ¶¶ 572, 605.

877 En enero de 2023, Minera Gorrión promovió un amparo indirecto en contra de la elaboración de los 4 estudios y el hecho de que las autoridades no notificaron a la empresa. Como las propias Demandantes admiten, este recurso no propseró. Réplica, ¶ 418. *Ver* Desestimación de la demanda de amparo presentada por Minera Gorrión contra los informes encargados por la SEMARNAT, 21 de septiembre de 2023. **C-0558**.

878 Desestimación de la demanda de amparo presentada por Minera Gorrión contra los informes encargados por la SEMARNAT, 21 de septiembre de 2023, pp. 19-28. **C-0558**.

879 Desestimación de la demanda de amparo presentada por Minera Gorrión contra los informes encargados por la SEMARNAT, 21 de septiembre de 2023, pp. 19-28. **C-0558**.

880 Desestimación de la demanda de amparo presentada por Minera Gorrión contra los informes encargados por la SEMARNAT, 21 de septiembre de 2023, pp. 39-46. **C-0558**.

881 Minuta de la reunión entre la SEMARNAT, el INECC y FUNDAR, 9 de agosto de 2022. **C-0397**. Minuta de la reunión entre la SEMARNAT, el IMTA, el INECC y la PROFEPA, 29 de julio de 2022. **C-0786**.

habitantes de la región,[882] en ejercicio de su derecho constitucional de petición.[883] En ese sentido, las autoridades debían proporcionar una respuesta a los peticionarios,[884] no a Minera Gorrión.

705. En ningún momento las Demandantes identifican disposición legal alguna que prohibiera a las autoridades ambientales y sociales coordinarse, recibir solicitudes ciudadanas, elaborar estudios técnicos o compartir información con otras dependencias.

706. Las Demandantes también sugieren que las reuniones y los estudios derivados de ellas fueron una "political advocacy" por parte de la SEMARNAT para que Economía negara la factibilidad de las concesiones.[885] Sin embargo, de ninguna forma se trata de un acto irregular el que la SEMARNAT hubiera enviado a Economía los estudios elaborados por el IMTA, el INECC, la CONABIO y el INPI.[886]

707. Por el contrario, de conformidad con la LGEEPA, la SEMARNAT puede solicitar a otras dependencias la cancelación de las concesiones otorgadas cuando el proyecto pudiera ocasionar deterioro al equilibrio ecológico.[887] De igual forma, el INPI tiene la facultad de hacer recomendaciones para garantizar el reconocimiento, protección e implementación de los derechos de los pueblos indígenas.[888] En ese contexto, es perfectamente compatible con sus respectivas facultades legales el que la SEMARNAT y el INPI hubieran remitido a Economía los estudios

882 Comunicación de Atcolhua al INPI, 1 de septiembre de 2022. **C-0792**. Comunicación de habitantes de la Sierra Norte de Puebla al INPI, 1 de septiembre de 2022. **C-0793**. Comunicación de Atcolhua, IMDEC, CTT, CESDER y Fundar a SEMARNAT, 11 de julio de 2022. **C-0730**. Expediente de la MIA del Proyecto Ixtaca No. 21PU2019M0014, producido por México, vol. II, diciembre de 2018, p. 12. **C-0629**.

883 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 8. **R-0246**.

884 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 8. **R-0246**.

885 Réplica, ¶ 574.

886 Réplica, ¶¶ 596, 600.

887 Artículo 64 ("La Secretaría, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, *podrá solicitar a la autoridad competente, la cancelación o revocación* del permiso, licencia, *concesión* o autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico.") [Énfasis añadido], LGEEPA. **C-0156**.

888 Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, diciembre de 2018, Artículo 4 ("[…] el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y funciones: […] XVIII. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los planes, programas, proyectos y acciones gubernamentales, […] *y hacer recomendaciones para garantizar el reconocimiento, protección e implementación de los derechos, así como para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de dichos pueblos*; […].") [Énfasis añadido]. **R-0207**.

elaborados por el IMTA, el INECC, la CONABIO y el propio INPI, con el propósito de aportar elementos para que Economía emitiera su decisión.

708. Cabe destacar que la propia comunicación de la SEMARNAT dejó expresamente a salvo la competencia de Economía, al señalar que los estudios se remitían "*sin perjuicio* de la valoración que se realice con base en sus atribuciones".[889] De igual forma el INPI envío su informe por considerar que "sus hallazgos y conclusiones *pueden ser* de gran utilidad" para Economía.[890] Evidentemente los estudios no tenían como objetivo privar a Economía de su autonomía en el ejercicio de sus atribuciones.

709. En todo caso, como se ha demostrado, la decisión de Economía sobre la factibilidad de las concesiones se basó en aspectos técnicos que Economía evaluó de forma independiente. Ninguno de los estudios del IMTA, el INECC, la CONABIO o el INPI fue el fundamento central o principal de la decisión de Economía.[891]

710. En suma, las Demandantes invitan al Tribunal a inferir una "conspiración administrativa" a partir de actuaciones que, consideradas individual y conjuntamente, constituyen actuaciones ordinarias del funcionamiento de la Administración Pública. Las Demandantes parecen partir de la premisa de que cualquier actuación de las autoridades mexicanas desfavorable para el Proyecto Ixtaca sería necesariamente arbitraria. Esa premisa es insostenible e ignora por completo las facultades legales de las autoridades.

711. Lo que el expediente demuestra es, en cambio, que las autoridades recibieron solicitudes de habitantes de la región, se coordinaron entre sí dentro del ámbito de sus respectivas competencias y generaron información técnica y social para atender dichas solicitudes y que Economía pudiera contar con mayores elementos al adoptar su decisión. Nada de esto es indicativo de una "bad faith campaign". Demostrar eso requiere evidencia de que las autoridades actuaron fuera de sus facultades o con un propósito ilícito predeterminado. Esa evidencia no existe.

889 Oficio de la SEMARNAT a Economía, 19 de diciembre de 2022 [Énfasis añadido]. **C-0791**.

890 Oficio del INPI a Economía, 9 de enero de 2023 [Énfasis añadido]. **C-0796**.

891 Resolución de No Factibilidad, 9 de febrero de 2023. **R-0099**.

H. Las Demandantes no han demostrado la existencia de una campaña política en contra del Proyecto Ixtaca

712. Las Demandantes insisten en la existencia de una supuesta campaña política en contra del Proyecto Ixtaca.[892] Sin embargo, basan sus alegaciones únicamente en declaraciones públicas descontextualizadas, en modificaciones regulatorias que no afectaron su inversión y en programas sociales legítimos.[893]

713. Contrario a lo que alegan las Demandantes, la Demandada no admite que las políticas del expresidente López Obrador hayan transformado a México en un "hostile environment for mining investment".[894] Como se explicó en el Memorial de Contestación y en esta Dúplica, las medidas de la SEMARNAT y de Economía se basaron en aspectos técnicos y regulatorios dentro de las facultades de dichas dependencias. Además, como lo admiten las propias Demandantes, otros proyectos mineros en el país se encuentran operando sin problemas.[895] Este hecho por sí solo contradice las alegaciones de las Demandantes sobre una supuesta campaña política "anti minería extranjera".

714. Asimismo, la reforma a la Ley Minera no demuestra las alegaciones de las Demandantes. Como lo expresó el expresidente López Obrador, las modificaciones a la Ley Minera eran "hacia adelante", por lo que no afectaron las concesiones mineras existentes.[896]

715. Si bien es correcto que el Poder Ejecutivo promovió la reforma, quien la aprobó en última instancia fue el Congreso —el Poder Legislativo—.[897] Las Demandantes sugieren que el expresidente López Obrador "controlled the legislative branch" porque el partido MORENA tenía una mayoría en el Congreso y éste aprobó un número de iniciativas promovidas por el expresidente.[898]

---

892 *Ver*, p. ej., Réplica, Sección 2.10.

893 Réplica, ¶¶ 272-275.

894 Réplica, ¶ 276.

895 Réplica, ¶¶ 449-464.

896 Memorial de Contestación, ¶ 443.

897 Memorial de Contestación, ¶ 442.

898 Réplica, ¶ 296.

716. Es perfectamente ordinario que en un Estado democrático el partido en el gobierno cuente con una mayoría legislativa. Más aún, el porcentaje de iniciativas aprobadas durante la administración del expresidente López Obrador no fue excepcional, sino incluso inferior al registrado en administraciones anteriores, precisamente como aquellas durante las cuales las Demandantes conceptualizaron el Proyecto Ixtaca.[899] El hecho de que el Congreso aprobara diversas iniciativas del Ejecutivo no demuestra, por sí mismo, una falta de independencia del Poder Legislativo ni constituye evidencia de actuación indebida alguna. En todo caso, las Demandantes no niegan que tuvieron disponibles todas las vías e instancias legales para impugnar la reforma en foros judiciales —si realmente consideraban que afectaba su inversión— y simplemente decidieron no hacerlo.[900]

717. La reestructuración de Economía y el inicio del programa *Sembrando Vida* tampoco son prueba de una supuesta campaña política "anti-minería".[901] Por un lado, la desaparición de la Subsecretaría de Minería fue una medida de austeridad gubernamental y no un cambio en la política minera de México. Sus atribuciones fueron absorbidas por la Dirección General de Minas, de modo que la administración y regulación del sector continuaron ejerciéndose sin interrupción, como las propias Demandantes admiten.[902]

718. Por otro lado, el programa *Sembrando Vida* es una política pública de desarrollo rural y reforestación dirigida a "lograr que las y los campesinos puedan cubrir sus necesidades alimenticias básicas con la producción que obtengan de sus tierras".[903] Las Demandantes alegan que este programa sirvió para crear oposición al Proyecto Ixtaca dentro de la comunidad de

---

899 Milenio, *AMLO aumenta marcador en reformas constitucionales y va por más durante su sexenio*, 29 de enero de 2024 ("No obstante, según el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, Enrique Peña y Felipe Calderón tuvieron una mayor efectividad. Peña obtuvo la aprobación de 79.84 de sus iniciativas y Calderón consiguió el aval para 79.55 de sus propuestas."). **C-0175**.

900 Memorial de Contestación, ¶ 442.

901 Réplica, ¶ 275.

902 Memorial de Demanda, ¶ 261. Secretaría de Economía, *La Secretaría de Economía anuncia la cancelación del cargo de subsecretario de Minería a partir del 1° de septiembre de 2020*, 31 de agosto de 2020 ("La cancelación del cargo de Subsecretario de Minería no implica ninguna afectación a las atribuciones, facultades y trabajos que la Secretaría de Economía lleva a cabo en materia de minería, a través de la Dirección General de Minas, la Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y la Dirección General de Desarrollo Minero."). **C-0531**.

903 Sembrando Vida, Programas para el Bienestar, disponible en: https://programasparaelbienestar.gob.mx/sembrando-vida, p. 1. **C-0537**.

Ixtacamtitlán. Sin embargo, más allá de la declaración del Sr. Santamaría Tovar, no proporcionan evidencia alguna que sustente esa afirmación.[904] Por el contrario, lo que la evidencia demuestra es que *Sembrando Vida* persigue el objetivo legítimo de "disminuir la pobreza rural".[905]

719. Las Demandantes también sugieren que el hecho de que el expresidente López Obrador haya designado a funcionarios afines como titulares de la SEMARNAT y de la SE es evidencia de una implementación de su supuesta política "anti minería".[906] Esto carece de todo fundamento. Es completamente ordinario que un Presidente designe como secretarios de Estado a funcionarios que compartan la visión y prioridades de su administración. Ese hecho, por sí solo, no demuestra la existencia de una instrucción presidencial en contra del Proyecto Ixtaca. En última instancia, eso es precisamente lo que las Demandantes tendrían que acreditar, pero no han aportado evidencia que así lo demuestre.

720. Conscientes de la ausencia de evidencia, las Demandantes señalan el envío de la carta de la comunidad de Ixtacamtitlán a SEMARNAT como supuesta prueba de una "veiled but unmistakable instruction to Toledo […] to halt Ixtaca in its tracks".[907] Nada más alejado de la realidad.

721. El correo mediante el cual la Oficina de la Presidencia envió la carta al exsecretario Toledo dice inequívocamente que lo que se solicitó fue que se "gire instrucciones a quien corresponda *a efecto de analizar el ocurso y dar respuesta directamente al ciudadano*".[908] En ese sentido, la remisión de la carta obedeció únicamente al compromiso de la Oficina de la Presidencia de "dar atención y respuesta a todas las peticiones que presentan las y los ciudadanos".[909] La propia Oficina de la Presidencia informó a la comunidad que su carta había sido enviada a SEMARNAT para que

---

904 Memorial de Demanda, ¶ 265. Declaración Testimonial de Santamaría Tovar, ¶ 92.

905 Sembrando Vida, Programas para el Bienestar, disponible en: https://programasparaelbienestar.gob.mx/sembrando-vida, p. 3. **C-0537**.

906 Réplica, ¶¶ 284, 287, 289, 294.

907 Réplica, ¶¶ 366-367.

908 Expediente de la MIA del Proyecto Ixtaca No. 21PU2019M0014, producido por México, vol. II, diciembre de 2018, p. 11 [énfasis añadido]. **C-0629**.

909 Expediente de la MIA del Proyecto Ixtaca No. 21PU2019M0014, producido por México, vol. II, diciembre de 2018, p. 11. **C-0629**.

esta emitiera una respuesta "en apego al marco normativo vigente".[910] En ninguna parte del documento se señala que se haya instruido a detener el Proyecto Ixtaca.

722. En efecto, las Demandantes no han logrado demostrar que la SEMARNAT o la DGIRA hayan sido privadas de su autonomía técnica.[911] Se limitan a sugerir que, en una conferencia de prensa, el expresidente López Obrador supuestamente declaró que se buscaba "resolver" el hecho de que la DGIRA estuviera a cargo de otra persona distinta del exsecretario Toledo.[912] Sin embargo, esa interpretación descontextualiza por completo el intercambio.

723. La pregunta de la periodista versaba sobre la autorización de una MIA relacionada con la presa Pilares en Sonora y la situación de la comunidad guarijía y no sobre el Proyecto Ixtaca.[913] La expresión "teníamos que resolver este tema" fue la respuesta del expresidente a esa problemática específica, tras explicar que había visitado la comunidad para atender sus necesidades y que era necesario conciliar los distintos intereses involucrados en torno a dicho proyecto.[914] La conferencia no demuestra que la DGIRA hubiera sido privada de su autonomía técnica ni, mucho menos, que existiera una instrucción para impedir el desarrollo del Proyecto Ixtaca.[915]

724. Lo mismo sucede con las declaraciones del expresidente respecto del exsecretario Toledo durante la misma conferencia. En ellas, el expresidente expresó su "plena confianza" en la experiencia y vocación del exsecretario Toledo.[916] Las Demandantes sugieren que esas

---

910 Expediente de la MIA del Proyecto Ixtaca No. 21PU2019M0014, producido por México, vol. II, diciembre de 2018, p. 12. **C-0629**.

911 Memorial de Contestación, ¶ 440.

912 Réplica, ¶ 282.

913 Página web de AMLO, "Versión estenográfica de la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador", 31 de octubre de 2019, pp. 20-24. **C-0711**.

914 Página web de AMLO, "Versión estenográfica de la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador", 31 de octubre de 2019, pp. 23-24. **C-0711**.

915 Por el contrario, el expresidente López Obrador señaló que "la Secretaría de Medio Ambiente resolvió y yo tengo confianza de que resolvió bien" al aprobar la MIA del proyecto la presa Pilares en Sonora pese a cierta oposición del sector social. Página web de AMLO, "Versión estenográfica de la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador", 31 de octubre de 2019, p. 23. **C-0711**.

916 Página web de AMLO, "Versión estenográfica de la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador", 31 de octubre de 2019, pp. 21, 23 ("yo le tengo plena confianza a Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente. Él está resolviendo con justicia y protegiendo al medio ambiente,

declaraciones demuestran que la SEMARNAT siguiera una instrucción en contra del Proyecto Ixtaca.[917] Sin embargo, lo único que las declaraciones demuestran, en realidad, es que el expresidente expresó su confianza en que el exsecretario Toledo estaba "resolviendo con justicia y protegiendo al medio ambiente".[918] El expresidente López Obrador expresó esa misma confianza respecto de la exsecretaria Albores.[919]

725. Lejos de demostrar que la SEMARNAT carecía de autonomía, las declaraciones únicamente reflejan la confianza del expresidente en que los titulares de esa dependencia desempeñaban sus funciones y ejercían las facultades que la ley les confería, entre las que se encuentra la protección del medio ambiente.[920] Las Demandantes parecen asumir que el ejercicio de esas facultades constituye, por sí mismo, evidencia de una política dirigida en contra del Proyecto Ixtaca, pero esa premisa es insostenible. Es precisamente de esperarse que la persona titular de la SEMARNAT tenga una trayectoria y vocación en materia ambiental y que ejerza las atribuciones que la ley le confiere para proteger el medio ambiente, tal como ocurrió con los exsecretarios Toledo y Albores.

726. Tampoco las declaraciones públicas de los exsecretarios Toledo y Albores demuestran la existencia de una instrucción presidencial o una supuesta decisión predeterminada respecto del

---

porque es una gente honesta, es un especialista, lo he dicho aquí varias veces, creo que es de las gentes que más sabe sobre esta materia."). **C-0711**.

917 Réplica, ¶¶ 280, 281, 284.

918 Página web de AMLO, "Versión estenográfica de la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador", 31 de octubre de 2019, p. 21. **C-0711**.

919 Milenio YouTube Channel, Conferencia matutina de AMLO, 3 de septiembre de 2020 ("María Luisa Albores, además de ser una mujer con principios, una profesional, es ambientalista, es del mismo equipo de Toledo, de Víctor Manuel Toledo. Yo los conocí juntos en Puebla, en Cuetzalan, Puebla, una cooperativa, ahí han hecho cosas importantísimas de defensa del medio ambiente, precisamente en defensa de la tierra y en contra de estos proyectos como el de las minas, otros proyectos contaminantes, ahí los conocí en esa lucha. Entonces, *María Luisa Albores va a actuar con la misma rectitud de Víctor Manuel Toledo*.") [énfasis añadido]. **C-0529**. *Ver* también Página web de AMLO, "Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador," 11 de junio de 2024, available at https://lopezobrador.org.mx/2024/06/11/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensamatutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-1199/. **C-0712**.

920 Artículo 5º, LGEEPA. ("Son facultades de la Federación: I.- La formulación y conducción de la política ambiental nacional; II.- La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en los términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal;"). **C-0156**.

Proyecto Ixtaca.[921] Aun si se aceptara que el exsecretario expresó una posición categórica sobre el Proyecto, ello no demuestra que la evaluación de la MIA o la resolución de factibilidad hayan dejado de sujetarse al marco legal vigente ni, mucho menos, que las autoridades hubieran actuado por instrucciones del Ejecutivo. Como se ha demostrado, los actos de la SEMARNAT y de Economía cumplieron en todo momento con el marco legal aplicable.

727. En suma, las Demandantes pretenden construir su teoría de una supuesta campaña política "anti minería" a partir de una selección de declaraciones públicas analizadas de manera aislada y fuera de contexto. Sin embargo, ninguna de ellas demuestra que el expresidente López Obrador, los titulares de la SEMARNAT o de Economía, o cualquier otro funcionario hubiera instruido a las autoridades competentes a resolver los procedimientos relacionados con el Proyecto Ixtaca en un sentido determinado.

728. Finalmente, las Demandantes invierten indebidamente la carga de la prueba al señalar que México "has not proffered testimony from AMLO or from Secretaries Toledo, Albores, or Buenrostro".[922] La realidad es que son las Demandantes quienes alegan la existencia de una instrucción política y, por tanto, quienes deben acreditarla. La ausencia del testimonio de determinados funcionarios no suple esa falta de prueba ni autoriza al Tribunal a extraer inferencias adversas, particularmente cuando las Demandantes no han presentado evidencia contemporánea que respalde su teoría.

I. Deficiencias del Proyecto Ixtaca en materia hidríca

729. En temas hídricos, el Estudio de Factibilidad de SRK presenta ciertas decisiones que generan incertidumbre y afectan la confiabilidad de sus resultados, con lo cual impide contar con un grado de certeza suficiente para sustentar decisiones clave del Proyecto.

730. Algunas de las carencias del Estudio de Factibilidad son las siguientes:

- No contaba con suficientes estaciones pluviométricas para medir adecuadamente la precipitación regional.
- La simulación de precipitación no utiliza un modelo efectivamente estocástico.

921 Réplica, ¶¶ 277, 285-286, 290-293.

922 Réplica, ¶¶ 297-298.

- El único dato de campo sobre el rendimiento hidrológico no fue incorporado como base o valor extremo para el modelo.
- Las estimaciones de aportación de agua subterránea al tajo son inciertas.
- El modelo hidrogeológico presenta incertidumbres significativas.

a) Insuficiencia de estaciones pluviométricas

731. La Organización Meteorológica Mundial recomienda una densidad mínima de 1 estación pluviométrica por cada 100-250 km² en terreno montañoso. La cuenca del río Tecolutla, donde se encontraba el Proyecto Ixtaca, mide 7,903 km²; en este sentido, la cuenca hubiera necesitado tener entre 32 y 79 estaciones para caracterizar de forma adecuada el nivel de precipitación de la cuenca, pues, derivado de las diferencias orográficas de la zona, pueden existir diversos niveles de lluvia en distintas partes de la cuenca.[923] Sin embargo, el balance hídrico de SRK se calibró con el registro de precipitación de una sola estación regional oficial con registro largo (estación No. 21047).

732. Asimismo, la empresa instaló cuatro estaciones en 2013 dentro del predio del Proyecto; sin embargo, dichas estaciones presentan un registro temporal muy limitado para cualquier análisis estadístico.[924]

733. Por lo anterior, el Balance hídrico del Estudio de Factibilidad utiliza una base de datos de precipitación de representatividad espacial limitada, motivo por el que el balance del Proyecto no contaba con un registro pluvial regional suficiente.

b) El balance hídrico no se basa en un modelo estocástico

734. Un modelo estocástico es aquel que incorpora el azar o la variabilidad en un análisis; en lugar de considerar que un fenómeno siempre ocurre exactamente de la misma manera, se representan diferentes resultados posibles y su probabilidad.[925]

[923] Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 66-67.
[924] Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 67.
[925] Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, Anexo A, p. 2.

735. SRK diseñó una simulación basada en el remuestreo Monte Carlo[926] para evaluar las condiciones climáticas. El informe de SRK indica que se realizaron 500 simulaciones, dentro de las cuales se ejecutaba un modelo de 12 años (atendiendo al periodo de vida de la mina), y cada uno de esos 12 años utilizaba un año climático histórico mediante una distribución uniforme que asegura que "todos los años de precipitación se utilicen por igual".[927]

736. Lo anterior indica que cada año se sortea de manera independiente de los demás. En este sentido, lo que SRK denomina "modelo estocástico" es en realidad un remuestreo Monte Carlo sobre un conjunto cerrado y fijo de 54 años reales más uno repetido, no un proceso estocástico generativo. Un muestreo de esta naturaleza no puede, por construcción, reproducir la persistencia temporal de las sequías, esto es la tendencia de los años secos a agruparse en secuencias plurianuales.[928]

737. Un modelo genuinamente estocástico puede producir valores de precipitación que nunca ocurrieron en el registro histórico; sin embargo, el modelo no puede explorar ningún valor de precipitación más extremo que el fijado por SRK. En este orden de ideas, el procedimiento no incorpora una fuente independiente de incertidumbre climática ni series adicionales de estaciones, sino que constituye un remuestreo de un conjunto de datos cerrado y fijo. Por ello, el modelo de SRK no genera incertidumbre sobre el valor de precipitación extremo, sino que lo fija de antemano.[929]

c) El único dato de campo sobre el rendimiento de cuenca no fue incorporado en el modelo

738. Para el diseño del sistema de abastecimiento de agua, SRK evaluó el rendimiento de cuenca bajo un escenario base y un caso considerado como extremo. Mediante una aproximación teórica, determinó para el caso base un rendimiento hidrológico del 12% - 16%, y el escenario extremo se

[926] Es una técnica estadística que permite estimar el rango de resultados posibles de un fenómeno incierto mediante la generación de un número muy grande de simulaciones aleatorias. *Ver* Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, Anexo A, p. 3.

[927] Estudio de Factibilidad sobre el Balance Hídrico del sitio, SRK, 10 de abril de 2019, secciones 2.1.1 y 2.2.2, pp. 4 y 8, **C-0286**.

[928] Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 72 y 89.

[929] Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 79, 89.

fijó en 7.5% - 7.6%.[930] Estos porcentajes reflejan que, de cada 100 litros de lluvia, 12 o 7.5 litros, respectivamente, se convertirían en agua aprovechable para el Proyecto.[931]

739. Sin embargo, datos de campo de 2017 tomados por SRK mostraron en realidad un rendimiento de cuenca de solo 3.0% a 3.9%. Es decir, cuando la empresa tomó información directamente en campo y no utilizó porcentajes únicamente teóricos, la realidad demostró que la superficie no presentaba el rendimiento hidrológico esperado.[932] No obstante, a pesar de la relevancia de este hecho, SRK no resolvió dicha discrepancia, sino que la relegó a ser refinada "durante el arranque y la fase temprana de la mina".[933]

740. En pocas palabras, el esquema de co-abastecimiento de los reservorios de agua se evaluó únicamente bajo un caso base y bajo un escenario de sensibilidad teóricos, pero nunca con los datos reales de campo que demostraban que el rendimiento de la cuenca podría ser menor que los utilizados para el diseño del modelo hidrológico.[934]

d) Las aportaciones de agua subterránea al tajo son inciertas

741. Los influjos de agua subterránea hacia el tajo fueron estimados mediante un modelo numérico de flujo subterráneo e incorporados al balance hídrico como parte de las fuentes disponibles del sistema de abastecimiento.

742. Para medir el movimiento del agua subterránea se utiliza un parámetro conocido como conductividad hidráulica, el cual indica con qué facilidad puede desplazarse el agua a través de las fracturas del suelo. De esta forma, constituye el parámetro más determinante para predecir el flujo del agua subterránea hacia el tajo.[935]

743. A pesar de su importancia, el modelo de flujo subterráneo de SRK presenta una limitación relevante en sus estimaciones de aportación de agua subterránea. Tal como lo reconoce SRK en su estudio de factibilidad, el valor medido de la conductividad hidráulica de la roca del sitio podía

[930] Estudio de Factibilidad sobre el Balance Hídrico del sitio, SRK, 10 de abril de 2019, Sección 2.3, Tabla 2-3, Sección 3.1, pp.4, 8, 22. **C-0286.**

[931] Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 126.

[932] Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 127-128.

[933] Estudio de Factibilidad sobre el Balance Hídrico del sitio, SRK, 10 de abril de 2019, p. 22. **C-0286**.

[934] Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 129.

[935] Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 148.

llegar a variar en un rango de cinco órdenes; esto significa que el valor real de la facilidad con la que el agua subterránea se infiltraría al tajo podría ser hasta 100,000 veces distinto del que se utilizó para calibrar el modelo.[936]

744. Lo anterior evidencia que el modelo de flujo subterráneo presenta una incertidumbre significativa en sus estimaciones respecto de la cantidad de agua que podría ingresar al tajo. Dicha variabilidad en la conductividad hidráulica implica que los caudales de ingreso de agua subterránea y, consecuentemente, las condiciones operativas previstas para el Proyecto podrían diferir sustancialmente de las estimadas en el modelo.

e) Incertidumbres metodológicas del modelo hidrogeológico

745. El modelo hidrogeológico de SRK se calibró principalmente con los niveles de agua subterránea medidos cuando el sistema estaba en reposo, es decir, sin bombeo. Esto implica que el modelo nunca fue puesto a prueba contra el comportamiento real y dinámico del agua subterránea del sitio. Sin embargo, comparar un modelo únicamente contra el nivel del agua en reposo es la forma más débil y menos confiable de comprobar que un modelo de agua subterránea funciona correctamente, por lo que no existe una base sólida para confiar en que se dimensionó correctamente la cantidad real de agua que llegaría a la mina.[937]

746. Además, aunque entre 2012 y 2018 se realizaron 247 pruebas de campo que mostraron que la facilidad con la que el agua se mueve a través de la roca varía enormemente —hasta 300,000 veces entre distintos puntos—, esos datos fueron utilizados únicamente como referencia general y no como datos precisos para calibrar el modelo.[938]

747. A esto se suma que el rendimiento y almacenamiento específico del acuífero, no fueron medidos directamente en el sitio, sino tomados de literatura y de la experiencia de SRK en proyectos con "condiciones similares".[939] Por ello, existe una incertidumbre importante sobre si el modelo representa adecuadamente las condiciones reales del subsuelo.

---

[936] Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 147-148.

[937] Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶¶ 155-156.

[938] Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 154-155.

[939] SRK Consulting, Hydrogeological Study Report, Ixtaca Gold-Silver Project, 11 de abril de 2019, Sección 5.2 "Simulation of Hydrogeology," p. 65., **SLR-0024**.

748. Esta incertidumbre es especialmente relevante respecto del Río Apulco, pues el modelo lo utiliza como frontera sur y control de drenaje. Al respecto, SRK sostiene que el abatimiento –el descenso del nivel del agua subterránea– no cruzaría el río; sin embargo, esa afirmación no se verificó en campo mediante mediciones independientes al otro lado del río, para comprobar que éste en efecto constituyera un límite hidráulico que impidiera que los efectos del abatimiento continuaran más allá.[940]

749. Finalmente, el propio análisis de sensibilidad de SRK muestra que, utilizando combinaciones plausibles de parámetros, la infiltración estimada podría aumentar respecto del escenario base, llegando aproximadamente a 35–46 L/s frente 19–34 L/s.[941] Esto indica que los resultados del modelo son sensibles a parámetros que no fueron suficientemente verificados en sitio. Por ello, la conclusión de que los efectos quedarían contenidos hasta el río depende en realidad de supuestos y parámetros cuya incertidumbre podría modificar significativamente el resultado.

III. EL TRIBUNAL DEBE DESECHAR LA SOLICITUD DE INFERENCIAS ADVERSAS DE LAS DEMANDANTES

750. Las Demandantes solicitan al Tribunal que extraiga ocho inferencias adversas contra México con fundamento en el párrafo 16.20 de la Resolución Procesal No. 1 y el Artículo 9.6 de las Reglas de la IBA.[942] Esa solicitud debe ser desechada en su totalidad.

751. Las inferencias adversas constituyen una facultad discrecional del Tribunal cuyo ejercicio presupone, como mínimo, que la parte requerida haya incumplido una orden de producción sin ofrecer una explicación satisfactoria.[943] Ninguno de estos presupuestos se configura en el presente

---

[940] Segunda Declaración Testimonial e Informe de Experto del Sr. Pedrozo, ¶ 167.

[941] Moose Mountain Technical Services (2019). NI 43-101 Technical Report on the Feasibility Study – Ixtaca Gold-Silver Project, pp. 261-262. **C-0314**.

[942] Réplica, ¶¶ 19-22.

[943] *Lone Pine Resources Inc. v. the Government of Canada*, ICSID Case No. UNCT/15/2, Final Award, 21 November 2022, ¶ 259. **RL-0063**; *Sevilla Beheer B.V. and others v. Kingdom of Spain*, ICSID Case No. ARB/16/27, Decision on Jurisdiction, Liability and the Principles of Quantum, 11 February 2022, ¶ 550. **RL-0140**; *Churchill Mining and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia*, ICSID Case No. ARB/12/40 and 12/14, Award, 6 December 2016, ¶¶ 248-249. **RL-0141**; *Churchill Mining and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia*, ICSID Case No. ARB/12/40 and 12/14, Decision on Annulment, 18 March 2019, ¶ 220 ("[W]hile adverse inferences are tools available for tribunals to deter parties from

caso. Por el contrario, la solicitud de las Demandantes constituye un intento inaceptable de invertir la carga de la prueba (*burden shifting*) y obtener, por vía presuntiva, conclusiones de fondo que les corresponde acreditar *prima facie*.[944]

752. La solicitud fracasa desde su premisa. México no desobedeció ninguna orden del Tribunal. México realizó búsquedas extensas, durante varios meses, en los archivos de múltiples áreas de diversas dependencias gubernamentales; produjo los documentos responsivos que localizó; explicó de manera transparente el resultado de sus búsquedas; y confirmó, cuando así correspondía, la inexistencia de documentos adicionales responsivos. La inconformidad de las Demandantes con esos resultados no convierte una búsqueda diligente y de buena fe en un incumplimiento procesal.

753. Las Demandantes basan su solicitud en las Solicitudes de Documentos C-1, C-4, D-5, E-1, E-3, E-8, G-1, G-4, Y G-6.[945] Sin embargo, en la Resolución Procesal No. 6, el Tribunal desestimó la solicitud de las Demandantes respecto de las Solicitudes de Documentos Nos. C-4, E-1, E-8 y G-6, tomando nota de la declaración de México de que no existen documentos adicionales responsivos.[946] El Tribunal también desestimó la Solicitud respecto de las Solicitudes Nos. C-1, y D-5, señalando que no estaba persuadido de que existieran fundamentos suficientes para ordenar

refusing to comply with their orders about the production of evidence, nothing requires that a tribunal grant such inferences."). **RL-0142.**

944 *Muhammet Çap & Sehil Inşaat Endustri ve Ticaret Ltd. Sti. v. Turkmenistan*, ICSID Case No. ARB/12/6, Award, 4 May 2021, ¶¶ 728-730 (sosteniendo que recae sobre la demandante *prima facie* la carga de la prueba de sus alegaciones; que la carga legal de la prueba no se invierte; y que, aunque un tribunal pueda extraer conclusiones desfavorables, sigue teniendo libertad para valorar las pruebas aportadas en el caso). **RL-0143**; *WNC Factoring Ltd (WNC) v. The Czech Republic*, PCA Case No. 2014-34, Award, 22 February 2017, ¶ 379 ("The Claimant asks the Tribunal to draw an adverse inference from Minister Kalousek's failure to appear and give evidence at the hearing, Minister Kalousek has (or should have had) much to say on that topic. But the Claimant has not produced even *prima facie* evidence supporting the alleged conspiracy, and the Tribunal is not in a position to draw any adverse inference against Minister Kalousek ..."). **RL-0144**; *FREIF Eurowind Holdings Ltd v. Kingdom of Spain*, SCC, Case No. 2017/060, Final Award, 8 March 2021, ¶ 563(b) (aplicando el "Sharpe test" el tribunal determinó que las inferencias que pretendía obtener el demandante eran "not sufficiently corroborated by other available evidence, and prima facie evidence [was] not consistent with the inference sought."). **RL-0145.** *Ver también Lone Pine Resources Inc. v. Canada*, ICSID Case No. UNCT/15/2, Final Award, 21 November 2022, ¶ 264. **RL-0063.**

945 Réplica, ¶ 22.

946 Resolución Procesal No. 6, ¶¶ 3, 10, 46.

producción adicional.[947] Respecto de las Solicitud G-1, México la proporcionó oportunamente, por lo que el Tribunal desestimó igualmente dicha solicitud en la Resolución Procesal No. 7.[948] Con respecto a los documentos testados en el *privilege log* presentado por la Demandada, las Demandantes retiraron su solicitud de producción de versiones no testadas, por lo que el Tribunal determinó que esa solicitud había quedado sin materia.[949] Finalmente, en ninguna de esas Resoluciones Procesales se requirió a México producir documentos adicionales, ni proporcionar explicaciones adicionales, respecto de las Solicitudes de Documentos E-3 y G-4.

754. En consecuencia, no hubo incumplimiento de una orden de producción documental. México produjo los documentos responsivos que localizó, explicó el resultado de sus búsquedas y confirmó la inexistencia de documentos adicionales cuando así correspondía, todo esto de acuerdo a las órdenes dictadas por el Tribunal.

755. Las Demandantes tampoco satisfacen los requisitos del Artículo 9.6 de las Reglas de la IBA. Primero, no acreditan que los documentos cuya ausencia invocan existan. Su argumento descansa en frases como "no es creíble" o "necesariamente debieron existir documentos".[950] Eso no es prueba; es especulación. Segundo, como se explicó anteriormente, no existe orden incumplida por México. Las Resoluciones Procesales Nos. 6 y 7 demuestran lo contrario: el Tribunal desestimó las Solicitudes bajo las cuales las Demandantes sustentan su petición de inferencias adversas y no requirió a México a producir documentos o explicaciones acerca de los mismos. Tercero, los Demandantes no demuestran que la explicación de México sea insatisfactoria. Decir que una explicación es "no creíble" porque no produce el resultado que las Demandantes esperaban no basta para justificar una inferencia adversa.

756. Pero el defecto más grave de la solicitud es conceptual. Las ocho inferencias solicitadas no son inferencias probatorias discretas. Son conclusiones de fondo disfrazadas de inferencias. El artículo 9.6 de las Reglas de la IBA tiene un alcance mucho más limitado, pues únicamente permite al tribunal inferir que los *documentos* no producidos habrían sido desfavorables para la parte que se negó a exhibirlos. Sin embargo las Demandantes piden al Tribunal que concluya que la

947 Resolución Procesal No. 6, ¶¶ 14, 46.

948 260630 comunicación de los Estados Unidos Mexicanos; Resolución Procesal No. 7, ¶¶ 3-8.

949 Resolución Procesal No. 7, ¶¶ 3-8.

950 Réplica, ¶ 22 (b), (d), (e), (h).

suspensión de la MIA fue pretextual; que SEMARNAT actuó por directivas políticas del Presidente López Obrador; que SEMARNAT intentó trasladar a Minera Gorrión una obligación estatal de consulta; que ciertas declaraciones públicas formaron parte de una campaña de mala fe; que reuniones interinstitucionales fueron diseñadas para "fabricar" evidencia; que ciertos estudios fueron preparados para presionar a Economía; que Economía entendía la "insubsistencia" como suspensión; y que Economía canceló las Concesiones por una directiva política.[951] Cada una de esas supuestas inferencias son elementos constitutivos de las reclamaciones de las Demandantes por arbitrariedad, motivación política y violación del debido proceso — es decir, exactamente lo que las Demandantes deben probar para prevalecer en sus alegatos de expropiación ilegal, violación del estándar mínimo de trato y discriminación. Conceder tales "inferencias" equivaldría a relevar a las Demandantes de su carga probatoria respecto de los elementos esenciales de sus reclamaciones bajo los Artículos 9.4, 9.5, 9.6 y 9.8 del TIPAT.

757. Los casos citados por las propias Demandantes confirman que las inferencias adversas no pueden cumplir esta función. En *OPIC Karimum c. Venezuela*, el tribunal ejerció esta facultad de manera limitada y discreta, concluyendo que las inferencias adversas en sí mismas "absent direct evidence, are not sufficient to establish" la cuestión de, en ese caso, consentimiento de Venezuela para la jurisdicción al CIADI.[952] En *Gujarat State Petroleum c. Yemen*, el tribunal fue explícito en que las inferencias sirven para "complementar la evidencia disponible en el expediente" — no para sustituirla.[953] Y como el tribunal en *Apotex c. Estados Unidos* observó, la parte demandante conserva en todo momento la carga legal de la prueba (*legal burden of proof*).[954] La carga evidenciaria que eventualmente pueda trasladarse al demandado no equivale a una presunción de las conclusiones de fondo ni dispensa a la demandante de acreditar sus pretensiones con evidencia afirmativa.

---

951 Réplica, ¶ 22.

952 *OPIC Karimum Corporation v. The Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB/10/14, Award, 28 May 2013, ¶ 146. **CL-0247.**

953 *Gujarat State Petroleum Corporation Limited, Alkor Petroo Limited, and Western Drilling Constructors Private Limited v. the Republic of Yemen and the Yemen Ministry of Oil and Minerals*, ICC Arbitration No. 19299/MCP, Award,10 July 2015, ¶ 102. **CL-0254**.

954 *Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. v. United States of America*, ICSID Case No. ARB(AF)/12/1, Award, 25 August 2014, ¶¶ 8.8-8.10. **CL-0089.**

758. Son las Demandantes, no la Demandada, quienes tienen la carga de demostrar que las medidas de México fueron arbitrarias, pretextuales, políticamente motivadas, discriminatorias o contrarias al debido proceso. No pueden obtener esas conclusiones mediante una presunción basada en documentos que no han identificado, cuya existencia no han probado y cuya falta de producción ya fue explicada por México.

759. Conceder inferencias adversas en estas circunstancias sentaría un precedente peligroso. Si el Tribunal aceptara que la mera ausencia de ciertos documentos basta para presumir mala fe, motivación política y arbitrariedad, entonces cualquier parte podría eludir su carga probatoria invocando documentos hipotéticos. Ello vaciaría de contenido el estándar probatorio aplicable y convertiría la producción documental en una herramienta para fabricar responsabilidad, no para esclarecer hechos. Las Demandantes no han identificado un solo caso en el que se hayan adoptado medidas tan drásticas.

760. En suma, México actuó de buena fe y conforme a las instrucciones del Tribunal. Las Demandantes no han probado la existencia de documentos adicionales, no han demostrado incumplimiento alguno de México y no han identificado una inferencia limitada que se derive lógicamente de una omisión probatoria específica. Lo que solicitan es mucho más ambicioso e improcedente: que el Tribunal presuma los elementos centrales de sus reclamaciones bajo los Artículos 9.4, 9.5, 9.6 y 9.8 del TIPAT. El Tribunal debe rechazar esa invitación y desechar en su totalidad la solicitud de inferencias adversas formulada por las Demandantes. La Demandada se reserva el derecho de ampliar o modificar esta respuesta durante la pre-audiencia, la audiencia y los escritos posteriores a la audiencia, de ser el caso.

IV. EL TRIBUNAL NO TIENE JURISDICCIÓN SOBRE LAS RECLAMACIONES

761. El Tribunal carece de jurisdicción sobre las reclamaciones presentadas por las Demandantes. La Réplica no subsana ninguno de los defectos jurisdiccionales identificados por México. Por el contrario, confirma que las reclamaciones: (i) se fundan en hechos y situaciones anteriores a la entrada en vigor del TIPAT y, en todo caso, antes de la Fecha Crítica del 14 de diciembre de 2020; (ii) incluyen reclamaciones de Almadex y Minera Gavilán respecto de activos que no reúnen las características de una inversión protegida; y (iii) son promovidas por inversionistas que aceptaron ser considerados mexicanos y no invocar protección extranjera

respecto de los mismos derechos mineros que ahora pretenden someter al TIPAT. Cada uno de estos defectos constituye una razón independiente y suficiente para que el Tribunal decline jurisdicción

A. El Tribunal carece de jurisdicción *ratione temporis*

762. México reitera sus argumentos en el Memorial de Contestación de que este Tribunal carece de jurisdicción *ratione temporis* sobre las reclamaciones presentadas por las Demandantes.[955] En su Memorial de Réplica, las Demandantes intentan refutar dichos argumentos sosteniendo que (i) todas las medidas que impugnan son posteriores a la entrada en vigor del TIPAT y constituyen violaciones independientes y separables de la conducta anterior, y (ii) que no existió ninguna violación cristalizada ni pérdida antes del 17 de diciembre de 2020, fecha de la denegación de la MIA por parte de la SEMARNAT.[956] Como se demuestra a continuación, ambos argumentos son infundados, no pueden reconciliarse con la propia teoría de las Demandantes y deben ser rechazados por este Tribunal.

1. Las reclamaciones de las Demandantes se derivan de hechos ocurridos antes de la entrada en vigor del TIPAT en el 30 de diciembre de 2018

763. El principio de irretroactividad de los tratados constituye una piedra angular del derecho internacional que las Demandantes no controvierten.[957] Pretenden eludirla, sin embargo, calificando las medidas impugnadas como actos "autónomos" e "independientes" que habrían cristalizado después del 30 de diciembre de 2018.[958] Ese enfoque es incorrecto. La cuestión no es sólo cuándo se formalizó cada medida, sino si ésta dio origen a una controversia jurídicamente nueva. En este caso, las medidas impugnadas derivan de hechos y situaciones anteriores a la entrada en vigor del TIPAT.[959]

764. Específicamente, sitúan los "orígenes" de la controversia en la elección del presidente López Obrador y alegan que, desde 2018, su Gobierno adoptó una política destinada a impedir el

---

955 Memorial de Contestación, Section III (B).

956 Réplica, ¶ 798.

957 Réplica, ¶ 800.

958 Réplica, ¶¶ 801-802.

959 *LSF-KEB Holdings SCA and others v. Republic of Korea*, ICSID Case No. ARB/12/37, Award, August 30, 2022, ¶¶ 355-357, 947 (C). **RL-0047**.

desarrollo minero extranjero, incluido el Proyecto Ixtaca.[960] Esa alegación no es mero contexto: las Demandantes la invocan para establecer mala fe, discriminación, predeterminación y una unidad de propósito entre las medidas posteriores. No pueden presentar una política pretratado como causa común de las supuestas violaciones y, al mismo tiempo, pedir al Tribunal que la ignore al delimitar su jurisdicción temporal.

765. Las Demandantes además sostienen que la reclamación relativa a la MIA sólo "cristalizó" con la resolución de 17 de diciembre de 2020 y que los hechos anteriores constituyen mero contexto.[961] Pero afirman que la negativa ejecutó una política adoptada en 2018, que su resultado estaba predeterminado y que formó parte de una campaña específicamente dirigida contra Ixtaca.[962] Estos son elementos esenciales de la supuesta violación y tuvieron lugar antes a la entrada en vigor del TIPAT.

766. Las Demandantes también sostienen que la sentencia de la Suprema Corte de 16 de febrero de 2022 constituyó una medida autónoma porque introdujo una evaluación de "factibilidad" y modificó aspectos del razonamiento del Juzgado de Distrito.[963] Este argumento es curioso porque las Demandantes no han formulado debidamente ninguna reclamación contra la decisión de la Suprema Corte.[964] Suponiendo que se hubiera formulado, la sentencia, incluida la instrucción relativa a la factibilidad, fue dictada dentro del Amparo 445/2015, promovido en abril de 2015 contra el otorgamiento y la validez de las mismas Concesiones que ahora sustentan sus reclamaciones.[965] La validez de los títulos ya había sido formalmente impugnada antes de la

960 Réplica, ¶¶ 6-7, sección 2.12.1.

961 Réplica, ¶ 801(a).

962 Memorial de Demanda, ¶ 330 (afirmando que SEMARNAT se había adherido a la directiva política del presidente López Obrador y que "[t]he MIA Denial Decision for the Ixtaca Project was a direct result of this arbitrary political directive"); Réplica, ¶ 360 ("As the Claimants demonstrated in the Memorial, SEMARNAT's 17 December 2020 MIA Denial Decision was arbitrary and politically motivated… SEMARNAT crafted the MIA Denial Decision to satisfy a political imperative…").

963 Réplica, ¶¶ 801(b), 809.

964 Como se explica *infra*, la alegación de las Demandantes de que la SCJN "expropió judicialmente" sus derechos no constituye una reclamación debidamente planteada ante este Tribunal y, en cualquier caso, carece por completo de fundamento.

965 Memorial de Contestación, ¶ 509.

entrada en vigor del TIPAT. Las propias Demandantes reconocen que ese amparo condujo a la decisión de la Suprema Corte de 2022.[966]

767. Que la Suprema Corte haya modificado parte del razonamiento de primera instancia o diseñado un remedio distinto no transformó el amparo en un procedimiento independiente. Las decisiones de primera instancia, revisión y cumplimiento son etapas del mismo proceso constitucional y versan sobre la misma controversia: la subsistencia de las Concesiones frente a la alegada falta de consulta indígena. Independientemente de la etapa procesal o de la medida de reparación adoptada, las Concesiones estuvieron sujetas en todo momento a la misma controversia. La teoría de las Demandantes permitiría que cualquier litigio pretratado quedara automáticamente comprendido en un tratado cuando una instancia revisora emitiera una decisión posterior, resultado incompatible con el Artículo 9.2.3 del TIPAT.

768. Las Demandantes presentan como tercera medida una supuesta "campaña de mala fe" desarrollada por SEMARNAT mediante reuniones con ONG y la preparación de estudios destinados a influir en Economía.[967] Pero las Demandantes presentan esa campaña como continuación de la política antiminería que, según alegan, comenzó con la toma de posesión del presidente López Obrador el 1 de diciembre de 2018,[968] antes de la entrada en vigor del TIPAT.

769. Las Demandantes también sostienen que el Oficio de febrero de 2023 fue autónomo porque no constituyó una consecuencia mecánica de la sentencia de la Suprema Corte y Economía

---

966 Memorial de Demanda, ¶ 209.

967 Réplica, ¶ 801(c).

968 Memorial de Demanda, ¶¶ 3, 5-6, 9-10, 18, 251-268, 590-591, 608; Réplica, ¶¶ 6, 242, 272, 300, 302. *Ver también* Primera Declaración Testimonial del Sr. Douglas J. McDonald, 17 de marzo de 2025, ¶ 86 ("[t]he election of AMLO in 2018 triggered a decisive shift in the Mexican mining sector. AMLO and his administration adopted an openly adversarial stance to mining activities."); Segunda Declaración Testimonial del Sr. McDonald, ¶ 115 ("AMLO and his administration adopted an openly adversarial stance to mining activities, amplifying and endorsing the anti-mining agenda of the NGOs."); Primera Declaración Testimonial del Sr. Santamaría, ¶ 93 ("Following the election of AMLO in 2018, one of the most significant challenges Minera Gorrión encountered on the Project was SEMARNAT's abnormal handling of the MIA review process"); Segunda Declaración Testimonial del Sr. Santamaría, ¶ 94 ("following the election of AMLO and the rise of anti-mining policies within the Mexican Government, one of the most significant challenges Minera Gorrión encountered on the Project was SEMARNAT's abnormal handling of the MIA review process."); Informe de Brattle, ¶ 33 ("In 2018, AMLO was elected as President of Mexico and a coalition led by his party, MORENA, gained a parliamentary majority. This change in leadership raised concerns among market participants about the potential adoption of restrictive policies that would prevent the granting of new mining concessions or reverse existing ones").

conservaba cierto margen de decisión.[969] Sin embargo, esa caracterización es difícil de conciliar con su propia teoría del caso. Las Demandantes alegan que la decisión de factibilidad estuvo determinada por una campaña coordinada contra el Proyecto y por presiones provenientes de la Oficina de la Presidencia, e incluso sostienen que Economía actuó conforme a una directriz política del presidente López Obrador para cancelar las Concesiones.[970] De acuerdo con su propio relato, por tanto, el Oficio de febrero de 2023 no dio lugar a una controversia nueva o independiente, sino que formó parte de la misma controversia relativa a las Concesiones. Además, la declaración de insubsistencia y la resolución de febrero de 2023 no surgieron de un procedimiento iniciado espontáneamente en 2023: fueron emitidas dentro de la etapa de cumplimiento del Amparo 445/2015 y en ejecución de la sentencia que ordenó a Economía pronunciarse nuevamente sobre la factibilidad de las solicitudes.

770. Como explicó México en el Memorial de Contestación, las Concesiones habían sido suspendidas mucho antes de la entrada en vigor del TIPAT.[971] Las Demandantes sabían que esas suspensiones y, más ampliamente, el Amparo 445/2015 ponían en riesgo su capacidad de continuar ejerciendo los derechos derivados de las Concesiones. Las Demandantes intentan desviar este análisis discutiendo el alcance territorial de la suspensión. Alegan que sólo afectaba actividades en terrenos de Tecoltemi, que no se superponían con el sitio del Proyecto.[972] Pero esa distinción es irrelevante en este contexto. La DG Minas dejó claro a las Demandantes que, dado que el territorio de Tecoltemi se encontraba dentro de las áreas concesionadas, debía preservarse el *statu quo*, lo que impedía registrar cualquier acto, contrato o convenio minero que pudiera afectar las Concesiones. Ese efecto suspensivo más amplio constituía precisamente el núcleo de la controversia entre las Demandantes y México.

771. Las demás distinciones planteadas por las Demandantes son igualmente irrelevantes. El hecho de que las Concesiones permanecieran formalmente vigentes mientras se tramitaba el amparo no elimina la controversia subyacente a esos procedimientos.[973]

969 Réplica, ¶ 801(d).

970 Réplica, ¶ 991.

971 Memorial de Contestación, ¶ 510.

972 Réplica, ¶ 805.

973 Réplica, ¶ 805.

772. La existencia o falta de un perjuicio permanente durante este periodo tampoco elimina la disputa.[974] México no necesita demostrar que la totalidad del perjuicio reclamado se había materializado antes del TIPAT, sino que la situación jurídica de la cual derivan las medidas posteriores ya existía y había producido consecuencias concretas antes del 30 de diciembre de 2018. México ha demostrado precisamente eso.

773. Las Demandantes sostienen que *Feldman*, *Mondev* y *Astrida Carrizosa* son irrelevantes porque las medidas impugnadas en esos casos precedían a los respectivos tratados.[975] Pero esa distinción no responde al principio que esos casos ilustran: una parte no puede invocar actos posteriores a la entrada en vigor del tratado para presentar como nueva una controversia que, en realidad, ya había surgido de hechos pretratado.[976] Eso es precisamente lo que las Demandantes pretenden hacer aquí.

774. Su distinción de *LSF-KEB* es igualmente formalista.[977] Que en ese caso actuara el mismo regulador antes y después de la entrada en vigor del tratado no convierte la identidad del órgano en el criterio decisivo. Lo relevante es si la conducta posterior creó una controversia jurídicamente nueva o desarrolló, confirmó o ejecutó una situación anterior.[978]

775. Aquí existe una cadena jurídica directa. La Suprema Corte resolvió el Amparo 445/2015 que empezó en el 2015 y Economía emitió el Oficio de 2023 para cumplir esa sentencia. Que primero interviniera la Suprema Corte y después Economía no demuestra la existencia de medidas independientes. Ambas actuaciones forman parte de la misma secuencia jurídica iniciada con el Amparo 445/2015.

---

974 Réplica, ¶ 806.

975 Réplica, ¶ 810.

976 Memorial de Contestación, ¶ 506; *Marvin Roy Feldman Karpa c. los Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/99/1, Decisión provisional acerca de cuestiones jurisdiccionales preliminares, 6 de diciembre de 2000, ¶ 62. **RL-0046;** *Mondev International Ltd. v. United States of America*, ICSID Case No. ARB(AF)/99/2, Award, October 11, 2002, ¶ 68. **RL-0016**; *Astrida Benita Carrioza c. Colombia*, Caso CIADI No. ARB/18/5, Laudo, 19 de abril de 2021, ¶126. **RL-0010.**

977 Réplica, ¶ 811.

978 *LSF-KEB Holdings SCA and others v. Republic of Korea*, ICSID Case No. ARB/12/37, Award, August 30, 2022, ¶¶ 355-357, 947 (C). **RL-0047**.

776. La negativa de la MIA tampoco es independiente.[979] Que la MIA fuera tramitada por SEMARNAT bajo un régimen jurídico distinto demuestra únicamente que se trataba de un procedimiento administrativo diferente; no establece que la negativa de 2020 haya dado origen a una controversia completamente nueva y desvinculada de los hechos anteriores. Las propias Demandantes conectan la actuación de SEMARNAT, la Suprema Corte y Economía al alegar que respondieron a una misma agenda política contra el Proyecto Ixtaca. No pueden invocar esa unidad para establecer mala fe y coordinación, pero negarla al analizar la jurisdicción *ratione temporis.*

777. En suma, la controversia sobre la validez y subsistencia de las Concesiones comenzó en 2015 y dio lugar al mismo procedimiento judicial y administrativo del que emanaron las decisiones posteriores. La evolución de ese litigio, aunque haya producido nuevos razonamientos, remedios o consecuencias, no modifica su origen pre-TIPAT.

2. Las reclamaciones de las Demandantes están fuera del plazo de prescripción aplicable en virtud del TIPAT

778. La Réplica de las Demandantes parte de una premisa equivocada: que el plazo de prescripción sólo podía comenzar con la negativa formal de la MIA de 17 de diciembre de 2020.[980] El Artículo 9.21.1 no exige conocimiento de una decisión "final" ni de la pérdida total de la inversión, sino que el inversionista conozca —o deba conocer— por primera vez la presunta violación y alguna pérdida o daño derivado de ella. Como la Solicitud de Arbitraje fue presentada el 14 de junio de 2024, las reclamaciones están prescritas si ese conocimiento existía antes del 14 de diciembre de 2020.

779. Bajo la propia teoría de las Demandantes, ambos requisitos se cumplieron antes de esa fecha. Su Memorial de Demanda y su Réplica describen una secuencia de actuaciones supuestamente ilícitas, conocida desde 2019, que habría afectado progresivamente el Proyecto y culminado en la negativa de la MIA.[981] No obstante, para evitar la prescripción, intentan argumentar que sus reclamaciones se basan en cuatro medidas independientes, todas ellas posteriores al 14 de diciembre de 2020, y reducen las alegaciones anteriores a mero "contexto".

---

979 Réplica, ¶ 811.

980 Réplica, ¶ 812.

981 Memorial de Demanda, ¶¶ 311-325, 582-584; Réplica, ¶¶ 277, 333, 345.

780. Esa reformulación contradice su posición inequívoca de que las medidas impugnadas "are not divisible as they formed part of a single course of conduct directed at the same investment and producing the same result".[982] En efecto, en el Memorial de Demanda sostuvieron que el resultado estaba "preordained" y que, antes de concluir la evaluación, el Secretario Toledo y el Presidente ya habían anunciado que el Proyecto no sería autorizado.[983] La Réplica insiste en que las declaraciones públicas del Secretario Toledo de agosto de 2019 revelaban una decisión política ya adoptada y que SEMARNAT suspendió el procedimiento para ganar tiempo mientras fabricaba los fundamentos de la negativa.[984] Si, como sostienen, esas medidas fueron indivisibles y formaron un único curso de conducta, entonces ese curso de conducta necesariamente inició antes del 14 de diciembre de 2020.

781. Esas declaraciones revelan también el conocimiento implícito de las mismas. Aunque en su Memorial de Demanda, las Demandantes afirman que Minera Gorrión sólo las descubrió al preparar el arbitraje,[985] en su Réplica las describen como declaraciones públicas de agosto de 2019 que anticipaban el resultado de la MIA y formaban parte del mismo curso de conducta.[986] Un inversionista razonablemente diligente que seguía estrechamente ese procedimiento debió conocerlas antes de la Fecha Crítica.

782. Pero el argumento de México no depende únicamente de declaraciones políticas. Las Demandantes alegan que la supuesta directriz comenzó a ejecutarse mediante actuaciones concretas de SEMARNAT mucho antes del 14 de diciembre de 2020. Según ellas, SEMARNAT solicitó y recibió opiniones técnicas fuera de plazo, ocultó las opiniones de la DGVS y la DGGFS y privó a Minera Gorrión de la oportunidad de examinarlas y formular observaciones, en violación de sus derechos de debido proceso.[987] Bajo su propia caracterización, esas actuaciones no fueron simples dificultades regulatorias, sino componentes del curso de conducta ilícito – "a single course

982 Réplica, ¶ 1063.

983 Memorial de Demanda, ¶¶ 325, 583-584, 651.

984 Réplica, ¶¶ 277, 345, 363-365, 955-957.

985 Memorial de Demanda, ¶ 313.

986 Réplica, ¶¶ 277, 364, 955.

987 Memorial de Demanda, ¶¶ 305-310, 333-337; Réplica, ¶¶ 333-344.

of conduct directed at the same investment and producing the same result" – que ahora atribuyen a México. [988]

783. La suspensión de la MIA es altamente relevante en este contexto. El Memorial de Demanda relata que SEMARNAT suspendió el procedimiento en octubre de 2019; que Minera Gorrión conoció la suspensión de inmediato; que ese mismo día solicitó que fuera levantada; y que posteriormente recibió la notificación formal.[989] La Réplica añade que Minera Gorrión objetó la suspensión ante SEMARNAT en noviembre de 2019, presentó una queja ante el órgano interno de control en enero de 2020 y acudió al Juzgado de Distrito en febrero de 2020.[990] Esas actuaciones demuestran que conocía la medida, la consideraba adversa y entendía que afectaba sus derechos.

784. Más importante aún, las Demandantes califican expresamente la suspensión y demora en decidir la MIA como "pretextual, arbitrary and breached Minera Gorrión's due process rights" y afirman que un regulador que fabrica un pretexto político para congelar un procedimiento "commits a clear violation of Article 9.6."[991] Conforme a su propia formulación, la conducta presuntamente violatoria había ocurrido y era conocida antes de la Fecha Crítica.

785. Tampoco es sostenible su afirmación de que ninguna violación estaba "completa" mientras el procedimiento de evaluación permaneciera formalmente abierto.[992] Ese argumento presupone que la única conducta impugnada es la resolución final, pero las Demandantes alegan también interferencia política, predeterminación, irregularidades procedimentales, ocultamiento de opiniones técnicas, suspensión pretextual y denegación de debido proceso. La negativa pudo confirmar o agravar esas conductas; no pudo borrar el conocimiento que ya habían adquirido de ellas.

786. *Gold Reserve* y *Resolute Forest Products* no conducen a una conclusión distinta. Las Demandantes los invocan para sostener que el plazo sólo comienza cuando se perfecciona el acto que fundamenta la reclamación.[993] Aquí, sin embargo, ellas mismas afirman que durante la

988 Réplica, ¶ 1063.

989 Memorial de Demanda, ¶¶ 319-320.

990 Réplica, ¶¶ 354-356.

991 Réplica, ¶¶ 345, 351, 355-357, 950-958.

992 Réplica, ¶ 813.

993 Réplica, ¶ 813, nota de pie 2215.

evaluación del MIA existieron violaciones de sus derechos procesales y que la suspensión de la evaluación carecía de fundamento jurídico. [994] No pueden ahora redefinir retrospectivamente la conducta impugnada para presentar la negativa de la MIA —la última actuación de esa secuencia— como el único acto jurídicamente relevante.

787. Las Demandantes no abordan directamente su conocimiento del perjuicio que México estableció en el Memorial de Contestación. A pesar de que sostienen que no sufrieron daño antes de la negativa,[995] en materia de cuantificación, sostienen que el precio de las acciones de Almaden ya había caído materialmente antes del 17 de diciembre de 2020 y que esa caída reflejaba el "cumulative impact" de la anticipación de la conducta de México. [996]

788. Específicamente, alegan que, tras anunciarse la suspensión de la MIA el 29 de octubre de 2019, el precio de las acciones de Almaden cayó aproximadamente un 20% en un contexto de alto volumen de negociación, mientras que los índices utilizados como referencia aumentaron cerca de un 5%.[997] El propio Sr. McDonald reconoció que "[t]he suspension caused a significant drop in our share price and some apprehension among investors."[998] La Réplica identifica además otra caída de entre 20% y 30% el 1 de diciembre de 2020 —trece días antes de la Fecha Crítica— tras la decisión judicial relativa a las reducciones de las Concesiones.[999] Asimismo, Brattle concluye que entre el 28 de enero de 2019 y el 17 de diciembre de 2020 las acciones de Almaden tuvieron un desempeño marcadamente inferior al oro, la plata y los índices de empresas mineras junior.[1000]

789. El Artículo 9.21.1 no exige la pérdida total de la inversión ni el conocimiento de su cuantía definitiva. Basta el conocimiento de alguna pérdida o daño.[1001] Bajo la propia teoría de las

---

994 Réplica, Sección 2.11.

995 Réplica, ¶ 813.

996 Réplica, ¶¶ 1124-1125.

997 Réplica, ¶¶ 1124-1125.

998 Réplica, ¶ 1124; Segunda Declaración Testimonial del Sr. McDonald, ¶ 55; Segundo Informe Brattle, ¶¶ 32-35 y figura 1.

999 Réplica, ¶ 1124; Segundo Informe Brattle, ¶¶ 42-43.

1000 Réplica, ¶ 1125.

1001 *Mondev International Ltd. v. United States of America*, ICSID Case No. ARB(AF)/99/2, Award, October 11, 2002, ¶ 87. **RL-0016**. *Resolute Forest Products Inc. v Government of Canada*, PCA Case No. 2016-13, Decision on Jurisdiction and Admissibility, January 30, 2018, ¶ 165. **RL-0012**; *Carlos Ríos y Francisco Ríos c. Chile*, Caso CIADI No. ARB/17/16, Laudo, 11 de enero de 2021, ¶ 175. **RL-0017**. *Spence*

Demandantes, la caída del precio de las acciones, la inquietud de los inversionistas, los retrasos y la paralización de un procedimiento esencial para el Proyecto constituían pérdidas presentes y conocidas antes de la Fecha Crítica.

790. Las Demandantes tampoco logran distinguir *Carlos Ríos*, *Spence* y *Mondev*.[1002] México no los invoca para sostener que sólo una decisión formalmente definitiva puede activar el plazo, sino para demostrar que el inversionista no necesita conocer la extensión final de su pérdida. El plazo comienza con el primer conocimiento de la conducta impugnada y de alguna pérdida, aunque ésta continúe o aumente posteriormente.

791. Por la misma razón, *Grand River*, *Infinito Gold* y *Apotex* son pertinentes.[1003] Esas decisiones confirman que un inversionista no puede renovar el plazo mediante actos posteriores que implementan, desarrollan o confirman una conducta conocida que ya había causado alguna pérdida. La regla no depende de que los hechos de esos casos sean idénticos,[1004] sino de que la actuación posterior sea una manifestación del mismo curso de conducta.

792. Bajo la teoría de las Demandantes, eso es precisamente lo ocurrido. La negativa de 17 de diciembre de 2020 no fue un acto nuevo e imprevisible, sino la supuesta culminación de una secuencia iniciada en 2019, cuando SEMARNAT supuestamente ejecutó la directriz contra Ixtaca, incurrió en irregularidades y suspendió el procedimiento para fabricar una justificación para rechazar la MIA. La negativa pudo profundizar el daño, pero no reinició el plazo.

793. La alegada independencia jurídica entre el Amparo 445/2015 y el procedimiento de la MIA tampoco responde a la objeción.[1005] Lo relevante es que las propias Demandantes alegan que SEMARNAT utilizó ese amparo como pretexto para suspender la MIA y que la suspensión fue el

---

International Investments, Aaron C. Berkowitz, Brett E. Berkowitz and Trevor B.Berkowitz v. Republic of Costa Rica, No. UNCT/13/2, Laudo Provisional (Corregido), 30 de mayo de 2017, ¶ 213. **RL-0018.**

1002 Memorial de Demanda, ¶¶ 816-817.

1003 Memorial de Contestación, ¶ 514; *Grand River Enterprises Six Nations, Ltd., et al. v. United States of America*, UNCITRAL, Decision on Objections to Jurisdiction, July 20, 2006, ¶ 81. **RL-0013;** *Infinito Gold Ltd. v. Costa Rica*, ICSID Case No. ARB/14/5, Award, 3 June 2021, ¶ 231. **RL-0014;** *Apotex Inc. v. United States of America*, ICSID Case No. UNCT/10/2, Award on Jurisdiction and Admissibility, June 14, 2013, ¶¶ 325, 328. **RL-0015.**

1004 Réplica, ¶ 819.

1005 Réplica, ¶ 820.

primer paso para ejecutar la política contra Ixtaca. Aceptando esa teoría *prima facie,* la suspensión fue una medida concreta, conocida y perjudicial anterior a la Fecha Crítica.

794. Antes de la Fecha Crítica, las Demandantes conocían: (i) la suspensión de la MIA y la impugnaron inmediatamente, (ii) las irregularidades procedimentales que califican como violaciones del debido proceso; y (iii) pérdidas concretas reflejadas, según su propia evidencia, en la caída del precio de las acciones.[1006] Por ende, bajo su propia teoría de un curso de conducta único, acumulativo e indivisible, el plazo del Artículo 9.21.1 comenzó a correr antes del 14 de diciembre de 2020, y la negativa posterior de la MIA no podía reiniciarlo ni desplazar artificialmente su fecha de inicio. En consecuencia, las reclamaciones fundadas en esa conducta única e indivisible están prescritas.

795.

B. El Tribunal carece de jurisdicción *ratione materiae* porque Almadex y Minera Gavilán no cuentan con inversiones protegidas de conformidad con el TIPAT y el Artículo 25 del Convenio CIADI

796. Almadex y Minera Gavilán no han demostrado que la regalía sobre ingresos netos de fundición ("NSR") constituya, por sí misma, una inversión protegida bajo el Artículo 9.1 del TIPAT y el Artículo 25(1) del Convenio CIADI. En su Contestación, México explicó que las Demandantes tienen la carga de probar una inversión protegida y que no basta invocar de manera genérica la amplitud del Artículo 9.1 del TIPAT o el Proyecto Ixtaca en su conjunto; cada demandante debe probar que su propio activo satisface las características objetivas de una inversión, incluyendo contribución, riesgo, duración y contribución al desarrollo del Estado receptor.[1007] Almadex no lo ha hecho respecto de la regalía NSR.

797. La Réplica de las Demandantes confirma la objeción de México. Según estas, el supuesto derecho de Almadex y Minera Gavilán consiste en una regalía del 2% NSR, creada mediante una cesión intra-grupo por la cual Minera Gavilán transfirió las Concesiones a Minera Gorrión y recibió, a cambio, un derecho contingente a pagos futuros si el Proyecto llegaba a producir minerales.[1008] Con ello, las Demandantes reconocen que ese activo no consiste en derechos

---

1006 Memorial de Demanda, ¶¶ 305-310, 319-325, 332-337; Réplica, ¶¶ 333-359, 952-955, 1124-1125.

1007 Memorial de Contestación, Sección III (C).

1008 Réplica, ¶¶ 824, 827.

mineros, control sobre el Proyecto, participación en su operación, ni una contribución económica independiente en México. Se trata, en cambio, de un derecho contractual y contingente a recibir pagos futuros únicamente si otra sociedad del grupo lograba llevar el Proyecto a producción. Ese derecho, descrito en esos mismos términos por el propio testigo de las Demandantes,[1009] no es una inversión protegida autónoma de Almadex o Minera Gavilán bajo el TIPAT o el Convenio CIADI.[1010]

798. El marco de cuantificación de daños de las Demandantes confirma esa conclusión. El valor del NSR no está incorporado en la capitalización bursátil de Almaden, sino que debe añadirse por separado precisamente porque representa una obligación de pago que Almaden tendría frente a Almadex si, y solo si, se generaran ventas de minerales.[1011] Ello demuestra que el mercado no reconoce al NSR como una contribución económica propia de Almadex al Proyecto, sino como un derecho contractual pasivo y derivado, enteramente dependiente de las inversiones realizadas por Almaden y Minera Gorrión.

799. Las Demandantes intentan caracterizar el NSR como un "revenue-sharing agreement" bajo el Artículo 9.1 del TIPAT,[1012] pero esa caracterización no satisface la exigencia de que el activo tenga las características de una inversión.[1013] El listado del Artículo 9.1 es ilustrativo, no automático: un activo no queda protegido simplemente porque pueda describirse como un contrato de ingresos futuros. La cuestión relevante es si ese activo refleja una contribución, una duración,

---

1009 Segunda Declaración Testimonial del Sr. McDonald, 18 de mayo de 2026, ¶¶ 12-13 ("An NSR is a royalty payment made by the mining operator to the royalty holder based upon a percentage of the net revenue generated from mineral sales…Minera Gorrión agreed to pay Minera Gavilán during the production phase of the Ixtaca Project a 2% royalty based on the final mineral products sold").

1010 Memorial de Contestación, ¶¶ 532-533. *Ver también Mihaly Int'l Corp. v. Sri Lanka*, ICSID Case No. ARB/00/2, Award, 15 March 2002, ¶¶ 48–51, 55–61 (concluyendo que los gastos preparatorios y las expectativas contractuales sujetas a la futura aprobación y ejecución de un proyecto no constituían una inversión protegida, al no haberse materializado nunca una inversión independiente.). **RL-0146.**

1011 Primer Informe de Brattle,18 de mayo de 2026, ¶ 28 ("Quadrant 1 proceeds to estimate damages to the Claimants solely on the basis of the observed market price of Almaden's shares […]. It then adds its estimate of the 2% Net Smelter Return ("NSR") royalty that Almadex held which *was not* reflected in Almaden's market capitalization because Almaden would be expected to pay that amount to Almadex, and subtracts the losses that Almaden actually incurred after 17 December 2020.") (énfasis anadido).

1012 Réplica, ¶ 825.

1013 TIPAT, Art. 9.1 (estableciendo que las inversiones tienen que incluir características tales como "el compromiso de capital u otros recursos, la expectativa de ganancia o beneficio, o la asunción de riesgos".) **CL-0007.** *Ver también*, Memorial de Contestación, ¶ 534.

un riesgo de inversión y una participación económica protegida en el Estado receptor; el NSR no cumple con esos requisitos.

800. La inscripción del NSR ante el Registro Público de Minería tampoco convierte ese derecho contractual y contingente en una inversión protegida.[1014] Dicha inscripción es una formalidad de publicidad frente a terceros conforme al derecho mexicano; no constituye un pronunciamiento del Estado anfitrión reconociendo la existencia de una "inversión protegida" bajo un tratado internacional. A lo sumo, dicha inscripción acredita que las partes registraron un acuerdo privado entre sociedades relacionadas; no demuestra que Almadex o Minera Gavilán hayan realizado una contribución económica propia, asumido riesgo de inversión o desarrollado actividad económica sustantiva en México.

801. Las Demandantes siguen sin demonstrar las "*hallmark characteristics*" de su supuesta inversión. Tratan de distinguir el caso *Nova Scotia c. Venezuela* pero su intento fracasa. Mientras las Demandantes señalan que la NSR "no es un contrato de venta de bienes", esa distinción es irrelevante. Lo relevante del precedente *Nova Scotia* es el principio de que un compromiso de pagar un precio predeterminado a cambio de la entrega de un bien o derecho — como fue la estructura del Contrato de Cesión de 2011 — no constituye la "contribución" que fundamenta una inversión protegida.[1015] Aquí, la estructura es análoga: Minera Gavilán entregó sus derechos de concesión, recibió un pago en efectivo, y obtuvo un derecho a regalía futura. Es una transacción mercantil liquidada, no una inversión activa.

802. La Réplica de las Demandantes tampoco permite satisfacer el criterio de contribución bajo *Salini*. Respecto de la contribución, las Demandantes pretenden apoyarse en aportes realizados por Almaden, Minera Gorrión o, en todo caso, por Minera Gavilán antes de la cesión de las Concesiones.[1016] Pero la contribución relevante debe ser la de Almadex y Minera Gavilán respecto del activo que ahora invocan como inversión protegida: la regalía NSR.

1014 Réplica, ¶¶ 822, 827.

1015 *Nova Scotia Power Incorporated v. Bolivarian Republic of Venezuela* (II), ICSID Case No. ARB(AF)/11/1, Award, Apr. 30, 2014, ¶ 97. **RL-0136.**

1016 Réplica, ¶ 830 (a).

803. Ese activo no refleja una contribución económica actual o independiente en México. Minera Gavilán transfirió las Concesiones a Minera Gorrión en 2011 y, como contraprestación, recibió MXN $4.5 millones y un derecho contingente a una regalía futura.[1017] Cualquier aporte previo de Minera Gavilán quedó incorporado y compensado en esa transacción; lo que subsistió fue únicamente un derecho contractual a recibir pagos si otra entidad del grupo lograba desarrollar, producir y vender minerales.

804. Lo mismo ocurre con Almadex. Su supuesto interés no surgió de una inyección de capital, tecnología, servicios u otros recursos en México, sino de una reestructuración corporativa posterior dentro del mismo grupo empresarial. El segundo testimonio del Sr. Douglas McDonald, testigo de las Demandantes, así lo evidencia.[1018] Las Demandantes tergiversan la relevancia de *Komaksavia*. México no invoca ese caso para importar al TIPAT las palabras "invested by investors", sino por el principio más amplio que ese tribunal reconoció: la noción ordinaria de "inversión" exige una contribución destinada a obtener un retorno durante un período de tiempo y sujeta a riesgo. De hecho, el tribunal aclaró que la frase "invested by investors" no era indispensable para esa conclusión, sino que simplemente la reforzaba.[1019] Ese principio ha sido confirmado por otros tribunales incluso bajo tratados que no contienen la frase "invested by investors", y que aun así han exigido una contribución propia del demandante.[1020] Por lo tanto, la mera redistribución

---

[1017] Memorial de Contestación, ¶ 532; Contrato de Cesión de Derechos del 13 de diciembre de 2011. **C-0013**; Convenio Modificatorio del 21 de diciembre de 2012, al Contrato de Cesión de Derechos del 13 de diciembre de 2011. **C-0017**.

[1018] Segunda Declaración Testimonial del Sr. Douglas J. McDonald, ¶¶ 15, 19 (admitiendo que "Almaden spun off all of its non-Ixtaca related assets, including its 99.9% interest in Minera Gavilán (which also comprised Minera Gavilán's 2.0% NSR royalty in the Ixtaca Project), into a newly incorporated entity: Almadex Minerals Limited…in 2018 Azucar established Almadex, to which [Azucar] transferred all of its assets not related to the El Cobre Project – including ownership of Minera Gavilán and the 2% NSR royalty on the Ixtaca Project.").

[1019] *Komaksavia Airport Invest Ltd. v. Republic of Moldova*, SCC Case No. 2020/074, Award, August 3, 2022 ¶ 153 ("The phrase 'invested by investors' is not present in all BIT definitions of investment. In the Tribunal's view, […] this phrase is not essential to its conclusion about an objective meaning of 'investment […].'") **RL-0135**.

[1020] *Ver,* por ejemplo, *Standard Chartered Bank v. United Republic of Tanzania,* ICSID Case No. ARB/10/12, 2 November 2012, ¶ 257, (el tribunal sostuvo que la inversión debe haber sido "made by, not simply held by, an investor", y que el demandante debía haber contribuido activamente a la inversión.) **RL-0147**; *KT Asia Investment Group B.V. v. Republic of Kazakhstan*, ICSID Case No. ARB/09/8, Award, 17 October 2013, ¶¶ 190-192, 206 (el tribunal examinó "whether the Claimant has made any injection of capital or any other original or subsequent contribution during or after the acquisition of the […] shares." Tras concluir que el demandante no había realizado contribución alguna, el tribunal sostuvo que este no

interna de activos entre sociedades relacionadas no constituye el "*commitment of capital or other resources*" exigido por el Artículo 9.1 del TIPAT, ni satisface el requisito de contribución bajo el Convenio CIADI.

805. En cuanto al riesgo, las Demandantes confunden riesgo comercial con riesgo de inversión.[1021] Que el NSR no pague si el Proyecto no produce no lo convierte en una inversión; esa es la contingencia ordinaria de cualquier derecho a pagos futuros. Ello es particularmente claro aquí: el Proyecto Ixtaca nunca llegó a producción ni a etapa operacional, por lo que cualquier regalía dependía enteramente de que otra sociedad del grupo obtuviera permisos, financiara, construyera y operara exitosamente el Proyecto.[1022] Los riesgos de exploración, desarrollo, permisos, construcción, operación y financiamiento correspondían al operador y a quienes financiaban el Proyecto, no a un titular pasivo de una regalía intra-grupo que no participaba en la administración, no tenía obligaciones operativas y no comprometió recursos adicionales en México.[1023] Las Demandantes no disputan esa caracterización.

806. Las Demandantes intentan distinguir *Romak c. Uzbekistán* y *Poštová Banka c. Grecia* por sus hechos específicos,[1024] pero evaden el principio jurídico que esos casos establecen: no todo

había demostrado la existencia de una inversión protegida bajo el Convenio CIADI ni el tratado aplicable.) **RL-0148**; *Alapli Elektrik B.V. v. Republic of Turkey*, ICSID Case No. ARB/08/13, Award, 16 July 2012, ¶¶ 337-338, 350 (el tribunal concluyó que el demandante no había realizado contribución alguna al proyecto, pues todas las contribuciones provenían "from someone other than Claimant", y sostuvo que, para ser inversionista, una persona debe haber realizado una inversión "in the sense of an active contribution.") **RL-0149**; *Raymond Charles Eyre and Montrose Developments (Private) Limited v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka*, ICSID Case No. ARB/16/25, Award, 5 March 2020, ¶ 293 (donde el tribunal concluyó que "'investment' has an inherent meaning and implies at least a contribution by the *investor*, a certain duration, and economic risk.") (emphasis added) **RL-0150.**

[1021] Réplica, ¶ 830 (b).

[1022] *Jin Hae Seo v. Republic of Korea*, HKIAC Case No. 18117, Award, 27 September 2019, ¶¶ 133-134 (sosteniendo que la asunción de riesgo debe ir más allá de los rasgos que cualquier activo posee automáticamente; aunque la frustración de ingresos esperados puede, en ciertos casos, ser relevante, el tribunal concluyó que, cuando la expectativa de ganancia es débil, también lo es la supuesta asunción de riesgo). **RL-0151.**

[1023] Esto también se desprende del segundo testimonio del Sr. McDonald, que confirma que Almaden fue quien obtuvo el financiamiento del Proyecto y contrató al personal especializado necesario para avanzar hacia su construcción, mientras que Minera Gorrión fue quien tramitó la MIA ante SEMARNAT, adquirió los derechos superficiales y llevó a cabo las actividades de relacionamiento comunitario. *Ver* Segunda Declaración Testimonial del Sr. McDonald, 18 de mayo de 2026, ¶¶ 5-7, 42-45, 58-59, 127.

[1024] Réplica, ¶ 830 (b).

riesgo económico es riesgo de inversión. En *Romak*, el tribunal explicó que el riesgo de inversión supone una incertidumbre sobre el retorno y sobre los recursos que el inversionista terminará comprometiendo, incluso si las contrapartes cumplen sus obligaciones.[1025] En *Poštová Banka*, el tribunal reafirmó que el riesgo relevante debe ser operacional, vinculado al éxito o fracaso de la empresa económica, y no un mero riesgo comercial o de contraparte.[1026] Estos principios han sido reconocidos en la práctica arbitral.[1027]

807. Aplicados esos principios, el supuesto riesgo de Almadex como titular del NSR es puramente comercial y pasivo. Si el Proyecto no producía, Almadex simplemente no percibía regalías; no enfrentaba costos de desarrollo, obligaciones de operación, exposición a sobrecostos, ni pérdidas derivadas de la gestión del Proyecto. Su posición era funcionalmente equivalente a la de un acreedor contingente: tenía derecho a un porcentaje de ingresos sólo si el operador lograba producir y vender minerales. Esa contingencia no es riesgo de inversión en sentido jurisdiccional, sino el riesgo ordinario de que un derecho contractual a pagos futuros no genere ingresos.

808. Tampoco ayuda a las Demandantes afirmar que "the very existence of this dispute is an indication of risk".[1028] Esa formulación proviene de *Fedax c. Venezuela*, un caso sobre pagarés emitidos por el Estado bajo un régimen de crédito público, y no establece que cualquier

---

1025 *Romak S.A. v. The Republic of Uzbekistan*, PCA Case No. 2007-07/AA280, Award, November 26, 2009, ¶ 230. **RL-0138**.

1026 *Poštova Banka, A.S. and Istrokapital SE v. The Hellenic Republic*, ICSID Case No. ARB/13/8, Award, April. 9, 2015, ¶¶ 367-370. **RL-0137.**

1027 *Ver*, por ejemplo, *Kaloti Metals & Logistics, LLC c. República del Perú*, Caso CIADI No. ARB/21/29, Laudo, 14 de mayo de 2024, ¶¶ 375-379 (citando *Romak c. Uzbekistán,* el tribunal distinguió el riesgo de inversión del riesgo propio de una transacción comercial ordinaria y concluyendo que los riesgos inherentes a una operación comercial no bastan para transformar esa operación en una inversión). **RL-0152**; *Mercuria Energy Group Limited v. Republic of Poland (II),* SCC Case No. V 2019/126, Final Award, 29 December 2022, ¶ 544 (citing the same principle established in *Romak c. Uzbekistán)*. **RL-0153**; *Gramercy Funds Management LLC, and Gramercy Peru Holdings LLC v. The Republic of Peru*, ICSID Case No. UNCT/18/2, Dissenting Opinion of Brigitte Stern, 6 December 2022, ¶¶ 93-95 (citando *Romak c. Uzbekistán,* la Profesora Stern explicó que todo contrato conlleva algún riesgo, incluido el riesgo comercial o de contraparte, pero que el riesgo de inversión exige que la rentabilidad dependa del éxito o fracaso de la operación económica que constituye la inversión; concluyó que los riesgos derivados de la aplicación o modificación del marco legal peruano eran externos a la operación de adquisición de los bonos y, por tanto, no constituían riesgo de inversión.). **RL-0154.**

1028 Réplica, ¶ 830 (b).

controversia baste para demostrar riesgo de inversión.[1029] Por el contrario, en *Nova Scotia Power c. Venezuela*, el tribunal rechazó expresamente esa lectura y sostuvo que la mera existencia de una controversia no ayuda al análisis: el riesgo relevante debe distinguirse del riesgo propio de una transacción comercial ordinaria.[1030] Aceptar la posición de las Demandantes haría circular el razonamiento y vaciaría de contenido el requisito jurisdiccional, pues toda transacción comercial disputada satisfaría automáticamente la exigencia de "riesgo de inversión".

809. En cuanto a la duración, el hecho de que el NSR exista desde 2012 y pudiera, en teoría, extenderse durante la vida productiva de una mina hipotética no satisface por sí mismo el estándar. La duración relevante no es la vigencia nominal de un derecho contractual, sino la continuidad de una actividad económica o transacción protegida en el Estado receptor.[1031] Aquí, el NSR nunca generó ingresos, nunca estuvo vinculado a una operación minera existente y dependía enteramente de que otra sociedad obtuviera los permisos necesarios, financiara, construyera y llevara a producción un proyecto que nunca llegó a etapa operacional. Esa expectativa contingente de pagos futuros no demuestra la duración de una inversión autónoma de Almadex o Minera Gavilán.

810. En cuanto a la contribución al desarrollo económico de México, las Demandantes vuelven a apoyarse en el Proyecto Ixtaca en su conjunto.[1032] Argumentan que el Proyecto contribuyó al desarrollo de México a través de la creación de empleo, pago de impuestos y la potencial producción minera del mismo. Sin embargo, estas actividades son atribuidas a Almaden o Minera Gorrión, no a Almadex o Minera Gavilán.[1033] Atribuir a Almadex y Minera Gavilán las contribuciones económicas del Proyecto es un ejercicio de atribución indebida. Quien realizó las actividades de exploración, desarrollo y generación de empleo fue Minera Gorrión, no Almadex

---

1029 *FEDAX N.V. v. The Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB/96/3, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, 11 July 1997, ¶¶ 38-40. **CL-0229**.

1030 *Nova Scotia Power Incorporated v. Bolivarian Republic of Venezuela* (II), ICSID Case No. ARB(AF)/11/1, Award, April 30, 2014, ¶ 105. **RL-0136**.

1031 Schill, Stephan W., et al. *Schreuer's Commentary on the ICSID Convention*, Cambridge University Press, 2022, p. 182, ¶ 248 ("The need for a certain duration of an activity or transaction is one of the main criteria to distinguish investments from short-term economic exchanges that are not subject to the jurisdiction of the Centre."). **RL-0155.**

1032 Réplica, ¶ 830 (d).

1033 Segunda Declaración Testimonial del Sr. McDonald, Secciones 3 y 4; Segunda Declaración Testimonial de la Sra. Uzcanga Vergara, ¶ 41; Segunda Declaración Testimonial del Sr. Dorantes, ¶ 12.

ni Minera Gavilán en su calidad de titulares de una regalía pasiva Almadex no inyectó nuevos fondos en México después de la cesión de 2011, no transfirió tecnología, no contrató personal y no asumió obligaciones operativas. Además, las Demandantes invocan beneficios hipotéticos de una mina que nunca fue autorizada, construida ni puesta en operación. Esa especulación no puede suplir la falta de una contribución económica real del activo específico que pretenden proteger.

811. Las Demandantes invocan *Phoenix Action c. República Checa* y *Deutsche Bank c. Sri Lanka* para argumentar que este criterio Salini es "particularly disfavored" y que "many tribunals have rejected it".[1034] Pero esa objeción no elimina su relevancia, especialmente cuando —como aquí— la ausencia de contribución al desarrollo económico confirma las deficiencias ya identificadas respecto de contribución, riesgo y duración. Además, este criterio adquiere particular importancia cuando el tratado aplicable tiene como objeto promover el desarrollo económico de las Partes.[1035] Ese es precisamente el caso del TIPAT.[1036]

812. Las Demandantes reconocen implícitamente la artificialidad de su posición al argumentar que "Minera Gavilán's initial investments in the Project enabled and supported that economic activity. The NSR is the economic legacy of that contribution".[1037] Describir la NSR como un "legado económico" de contribuciones pasadas — contribuciones que ya fueron compensadas mediante la cesión de 2011 — equivale a admitir que no existe una contribución *actual* de Almadex al desarrollo económico de México.

813. Por estas razones, el Tribunal carece de jurisdicción *ratione materiae* sobre las reclamaciones de Almadex y Minera Gavilán. El NSR y la participación accionaria de Almadex en Minera Gavilán derivan de una operación intra-grupo que no implicó nuevos recursos en México y no satisface los requisitos de contribución, riesgo de inversión, duración ni contribución al desarrollo económico exigidos por el Artículo 9.1 del TIPAT y el Artículo 25(1) del Convenio CIADI. En consecuencia, esas reclamaciones deben ser desestimadas por falta de jurisdicción.

1034 Réplica, ¶ 830 (d) nota de pie 2258.

1035 *Gramercy Funds Management LLC, and Gramercy Peru Holdings LLC v. The Republic of Peru*, ICSID Case No. UNCT/18/2, Final Award, 6 December 2022, ¶ 240. **RL-0082.**

1036 TIPAT, Preámbulo, (the Parties to this Agreement, resolving to: ESTABLISH a comprehensive regional agreement that promotes economic integration to liberalise trade and investment, bring economic growth and social benefits, create new opportunities for workers and businesses, contribute to raising living standards, benefit consumers, reduce poverty and promote sustainable growth …). **RL-0156.**

1037 Réplica, ¶ 830 (d).

C. El Tribunal carece de jurisdicción *ratione personae* y *ratione voluntatis* porque las Demandantes no refutaron que son mexicanas respecto de su supuesta inversión

814. En su Réplica, las Demandantes intentan refutar las objeciones jurisdiccionales *ratione personae* y *ratione voluntatis* de México mediante cuatro argumentos: (1) que las Declaraciones son cláusulas Calvo obligatorias de formato estándar limitadas a la protección diplomática; (2) que los requisitos del derecho interno no pueden anular los derechos derivados del TIPAT; (3) que las Demandantes no están impedidas por *estoppel* de presentar este arbitraje; y (4) que las Declaraciones no constituyen una renuncia válida a los derechos del TIPAT.[1038] Ninguno resiste escrutinio. Las Declaraciones fueron el prerrequisito constitucional, legal y estatutario que permitió a las Demandantes participar en el sector minero mexicano, y ahora les impide presentarse como inversionistas extranjeros respecto de esa misma inversión.[1039]

1. Las Declaraciones no se limitan a la protección diplomática

815. Las Demandantes argumentan que las Declaraciones son "cláusulas Calvo obligatorias de formato estándar dirigidas a impedir que los inversionistas extranjeros busquen protección diplomática, y no tienen relación alguna con sus derechos bajo el TIPAT."[1040] Según ellas, la frase "por lo mismo" del Artículo 27 constitucional une el compromiso de considerarse nacionales mexicanos con la renuncia a la protección gubernamental en una sola obligación limitada a protección diplomática.[1041]

816. La posición de las Demandantes es incorrecta. Los estatutos de Minera Gavilán y Minera Gorrión contienen dos obligaciones distintas e independientes: (i) el compromiso de ser considerados mexicanos respecto de sus inversiones, y (ii) la renuncia a las protecciones de su gobierno extranjero.[1042] Sin embargo, si, como dicen las Demandantes, la renuncia a la protección extranjera es *consecuencia* de aceptar ser consideradas mexicanas entonces el resultado es el

---

1038 Réplica, ¶ 767.

1039 Memorial de Contestación, Section III (A).

1040 Réplica, ¶ 767.

1041 Réplica, ¶¶ 769-772.

1042 Memorial de Contestación, ¶ 460. *Ver también* Estatutos sociales de Minera Gavilán, Cláusula Tercera p.16. **C-0162;** *Ver también* Acta constitutiva de Minera Albatros, 4 de enero de 2011, p. 12. **C-0178**.

mismo: las Demandantes aceptaron no actuar como extranjeras respecto de sus acciones, derechos, bienes, concesiones, participaciones e intereses en Minera Gavilán y Minera Gorrión.

817. Las Demandantes admiten que las Declaraciones derivan del Artículo 27 constitucional y que la LIE y su Reglamento exigen su incorporación en los estatutos sociales.[1043] Las Declaraciones no son lenguaje incidental, sino el mecanismo mediante el cual el régimen mexicano de inversión extranjera implementa una condición constitucional para acceder a derechos mineros. Las Demandantes no pueden invocar la LIE para caracterizar las Declaraciones como obligatorias y, al mismo tiempo, negarles todo efecto jurídico.

818. El Artículo 14 del Reglamento de la LIE confirma, además, el alcance amplio de ese compromiso. Los socios extranjeros deben obligarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse nacionales respecto de las acciones o derechos que adquieran, los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de la sociedad, y los derechos y obligaciones derivados de sus contratos.[1044] Ese lenguaje no es accidental ni limitado: cubre precisamente los derechos, concesiones e intereses que las Demandantes ahora pretenden proteger bajo el TIPAT.

819. Estas Declaraciones no son lo mismo que la protección diplomática.[1045] Nada en el texto de las Declaraciones se limita al concepto restrictivo de "protección diplomática." Si las partes hubieran tenido la intención de limitar la renuncia exclusivamente a la protección diplomática, lo habrían dicho expresamente; particularmente dado que, como las propias Demandantes reconocen, el concepto de protección diplomática ya estaba bien establecido cuando el arbitraje inversionista-Estado aún no existía.[1046]

820. Además, la protección diplomática pertenece al Estado, no al individuo.[1047] El inversionista no puede extinguir un derecho que no le pertenece. Por eso, interpretar las Declaraciones como

---

1043 Réplica, ¶ 770.

1044 Articulo 14, Reglamento de la LIE. **R-0004.**

1045 Réplica, ¶ 772.

1046 Réplica, ¶ 772; Respuesta a la Solicitud de Bifurcación, ¶ 47.

1047 Memorial de Contestación, ¶ 481. *Ver también ICSID Convention, Article 27 [Diplomatic Protection]*, in Stephan W. Schill, Loretta Malintoppi, et al. (eds), *Schreuer's Commentary on the ICSID Convention* (Third Edition), Section I. **RL-0042;** Comisión de Derecho Internacional (CDI), *Proyecto de Artículos sobre protección diplomática*, 2006, Documentos Oficiales de la Asamblea General, Sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 10 (A/61/10), Artículo 1. **RL-0043**.

una mera renuncia a protección diplomática las vaciaría de efecto útil. La lectura correcta es la que les da consecuencia jurídica: las Demandantes aceptaron un estatus jurídico mexicano respecto de su inversión y renunciaron a invocar protección extranjera respecto de esa misma inversión, lo que incluye las protecciones contenidas en el TIPAT.

821. La jurisprudencia invocada por las Demandantes no cambia ese resultado.[1048] Las decisiones mexicanas que citan confirman que el Artículo 27 impone una condición constitucional para que los extranjeros adquieran ciertos bienes o derechos en México: considerarse nacionales respecto de ellos y no invocar protección extranjera. La Contradicción de Tesis 132/2002-PS, no analizó arbitraje internacional ni tratados de inversión; resolvió únicamente el momento en que debía acreditarse el convenio del Artículo 27 en una sociedad conyugal, reconociendo además que dicho convenio aplica a sociedades mexicanas con participación extranjera en tierras o concesiones mineras.[1049]

822. El amparo directo número 560/2011 tampoco interpretó derechos bajo tratados; trató sobre la incapacidad de extranjeros para adquirir dominio directo en zona restringida y reiteró que las restricciones del Artículo 27 son constitucionales y vinculantes.[1050]

823. Por otro lado, *AES c. Argentina*, *Mobil c. Venezuela* y la opinión separada del árbitro Nikken en *AWG c. Argentina*, solo describen el origen histórico de la Doctrina Calvo; no interpretan el régimen constitucional mexicano, la Ley Minera, la Ley de Inversión Extranjera, el Reglamento LIE ni las Declaraciones específicas de Minera Gavilán y Minera Gorrión. Ninguno de esos casos establece una regla universal según la cual toda renuncia a la protección del gobierno extranjero debe limitarse a protección diplomática.

824. La distinción que las Demandantes intentan hacer con *Sastre* tampoco funciona.[1051] El punto central de *Sastre* no es si el inversionista "renunció" formalmente a su nacionalidad de origen; es si aceptó compromisos jurídicos que le impiden invocar una nacionalidad extranjera

---

1048 Réplica, ¶ 774.

1049 Primera Sala de la SCJN, Contradicción de Tesis 132/2002-PS, 29 de marzo de 2005, pp. 28-38. **C-0590.**

1050 Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, Amparo Directo No. 560/2011, 17 de amyo de 2012, at pp. 16-18, 81-84. **C-0591.**

1051 Réplica, ¶¶ 776-777.

contra el Estado anfitrión respecto de la inversión.[1052] Aquí, las Demandantes asumieron ese compromiso de forma expresa, ante el Estado mexicano, y como condición para acceder a derechos mineros. El efecto jurídico de tales compromisos es impedir que los inversionistas invoquen la protección de otro Estado o de un tratado internacional en contravención de su voluntad expresamente declarada.[1053]

825. *Niko Resources c. Petrobangla* confirma el mismo principio. Un acuerdo sobre nacionalidad entre las partes tiene peso jurídico considerable cuando no pretende fabricar una nacionalidad inexistente.[1054] Eso es exactamente lo que ocurre aquí: México no sostiene que las Demandantes dejaron de ser canadienses para todo efecto; sostiene que aceptaron ser consideradas mexicanas respecto de su inversión minera en México. Esa aceptación basta para excluir la jurisdicción *ratione personae* y *ratione voluntatis* respecto de reclamaciones que dependen de la premisa contraria.

826. También es falso que la objeción de México sea una táctica *post hoc* o que dejaría sin efecto todos sus tratados de inversión.[1055] Las Demandantes exageran el alcance de la LIE: el Artículo 15 no convierte toda inversión extranjera en México en inversión "mexicana" para todo efecto, sino que implementa la exigencia del Artículo 27 cuando una sociedad mexicana con participación extranjera debe incorporar la cláusula de exclusión de extranjeros o, alternativamente, el convenio constitucional aplicable.[1056]

827. La Constitución, la Ley Minera y la LIE operan de manera conjunta. El Artículo 27 condiciona el acceso de extranjeros a ciertos bienes y concesiones —incluidas las concesiones mineras— a que acepten ser considerados nacionales respecto de ellos y no invocar protección

---

1052 Memorial de Contestación, ¶ 496; *Carlos Sastre et al c. los Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. UNCT/20/2, Laudo sobre jurisdicción, 21 de noviembre de 2022, ¶¶ 248, 256-257, 263, 266, 272. **RL-0009.**

1053 Memorial de Contestación, ¶ 496.

1054 *Niko Resources (Bangladesh) Ltd. v. Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation (Petrobangla), Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (Bapex),* ICSID Case No. ARB/10/18, Decision on Jurisdiction, August 19, 2013, ¶ 204. **RL-0037.**

1055 Réplica, ¶ 779, 784.

1056 Memorial de Contestación, ¶ 483. *Ver también*, Ley de Inversión Extranjera publicada en el DOF el 7 de junio de 1995, Artículo 15. **R-0003**; Ley de Inversión Extranjera publicada en el DOF el 20 de agosto de 2008, Artículo 15. **R-0007.**

extranjera; la Ley Minera exige que la participación extranjera se ajuste a la LIE; y la LIE y su Reglamento trasladan esa condición a los estatutos sociales. Por tanto, las Declaraciones no son accesorias, si no el mecanismo jurídico que permitió a las Demandantes entrar al sector minero mexicano.

828. La práctica convencional de México confirma que no hay absurdo ni mala fe. El Artículo 27 ha permanecido constante desde 1917 y ha coexistido con la práctica moderna de México en materia de tratados de inversión, incluido el TIPAT. El hecho de que esta objeción no se hubiera planteado antes sólo demuestra que la cuestión no había sido sometida directamente a un tribunal; no que México haya renunciado a hacer valer sus requisitos constitucionales.[1057]

2. El principio de *pacta sunt servanda* es aplicable por lo que las Demandantes no pueden escapar de sus compromisos voluntarios

829. Las Demandantes alegan que México pretende usar su derecho interno para evadir obligaciones internacionales y que las Declaraciones no fueron libremente negociadas, sino impuestas por ley.[1058] También intentan distinguir *Anderson c. Costa Rica*, *SunReserve c. Italy,* y *Pawlowski c. Czech Republic*, sobre la base de que esos casos involucraban inversionistas que estructuraron deliberadamente sus inversiones para obtener beneficios específicos.[1059]

830. Esa objeción tergiversa la posición de México. México no sostiene que su derecho interno derogue el TIPAT. Sostiene que las Demandantes asumieron compromisos válidos bajo el régimen constitucional, legal y estatutario que hizo posible su inversión. La LIE no "anula" derechos internacionales; define las condiciones bajo las cuales una sociedad mexicana con inversión extranjera puede acceder a bienes, derechos y concesiones constitucionalmente restringidos. El Tribunal no necesita subordinar el TIPAT al derecho mexicano; basta reconocer que el consentimiento de México al arbitraje no se extendió a inversionistas que aceptaron no invocar protección extranjera respecto de las concesiones que sustentan su reclamación.

1057 Memorial de Contestación, ¶¶ 483-488.

1058 Réplica, ¶¶ 780-781.

1059 Réplica, ¶¶ 781-782.

831. Además, las Declaraciones son compromisos válidos y ejecutables de acuerdo al principio de *pacta sunt servanda* del mismo derecho internacional.[1060] Este principio constituye "la fuerza vinculante de las obligaciones contractuales para las partes de un contrato o acuerdo [que] es reconocida en todo ordenamiento jurídico que utiliza la institución del contrato."[1061] No es "a one-way Street."[1062] Así como México debe cumplir sus obligaciones internacionales, las Demandantes deben cumplir los compromisos que asumieron para acceder al régimen minero mexicano. No pueden aceptar la nacionalidad mexicana cuando les abre la puerta a concesiones y rechazarla cuando les cierra la puerta al arbitraje.

832. La supuesta "obligatoriedad" de las Declaraciones no elimina su efecto vinculante.[1063] La LIE y el Reglamento LIE establecen una condición legal para participar en ciertos sectores o adquirir ciertos derechos; no obligan a ningún extranjero a invertir en minería en México. Las Demandantes eligieron estructurar su inversión mediante sociedades mexicanas dedicadas a exploración y explotación minera, y eligieron hacerlo bajo estatutos que incorporaban expresamente el convenio de nacionalidad y la renuncia exigidos por la ley mexicana.[1064] Esa fue la condición de entrada. Habiendo recibido el beneficio, no pueden negar la condición.

833. *Anderson, SunReserve* y *Pawlowski* son relevantes por el principio que aplican: un inversionista no puede beneficiarse de un marco jurídico y luego impugnar las condiciones que aceptó para obtener ese beneficio.[1065] Lo mismo ocurre aquí. Las Demandantes conocían —o debieron conocer— las restricciones estatutarias de Minera Gavilán y Minera Gorrión antes de invertir; la diligencia debida básica exigía evaluar esas condiciones. Su omisión no puede convertirse en jurisdicción.

1060 Memorial de Contestación, ¶¶ 460-466.

1061 *Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia*, ICSID Case No. ARB/81/1, Award, November 20, 1984, ¶ 248. **RL-0008.**

1062 James Crawford, *Treaty and Contract in Investment Arbitration* (Freshfields Lecture on International Arbitration 2007), p. 13. **RL-0033**.

1063 Réplica, ¶¶ 780, 782.

1064 Memorial de Contestación, ¶¶ 456-458.

1065 *Alasdair Anderson et al. v. Costa Rica*, ICSID Case No. ARB(AF)/07/3, Award, 19 May 2010, ¶ 58, **RL-0039**; *SunReserve Luxco Holdings SRL v. Italy*, SCC Case No. 132/2016, Final Award, March 25, 2020, ¶ 714, **RL-0040**; *Pawlowski AG and Project Sever s.r.o. v. Czech Republic*, ICSID Case No. ARB/17/11, Award, November 1, 2021, ¶ 293, **RL-0041**.

834. *Espíritu Santo c. México* no resuelve esta objeción.[1066] En cualquier caso, su razonamiento no es vinculante y debe distinguirse. Aquí las Declaraciones deben leerse dentro de un régimen constitucional y legal integrado —Artículo 27, Ley Minera, LIE y Reglamento LIE— que no sólo contiene una renuncia, sino un acuerdo de estatus: ser consideradas mexicanas respecto de acciones, bienes, derechos, concesiones, participaciones, intereses y obligaciones contractuales. Esa formulación es clara, expresa y suficiente.

835. Finalmente, la distinción que trazan las Demandantes entre "requisitos legales obligatorios" y "compromisos contractuales voluntarios" es una falsa dicotomía.[1067] Las Declaraciones fueron suscritas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores — directamente ante el Estado mexicano — como una obligación formal, expresa y vinculante.[1068] Esto refuerza, en lugar de debilitar, su ejecutabilidad. El hecho de que la legislación mexicana exigiera tales compromisos como condición para la inversión no los hace menos vinculantes; por el contrario, demuestra que las Demandantes ingresaron conscientemente a un régimen cuyos términos ahora desean eludir.

3. Las Demandantes están impedidas por *estoppel* de invocar su nacionalidad canadiense

836. Las Demandantes argumentan que México no cumple con ningún elemento del *estoppel* porque: (i) las Demandantes no hicieron ninguna "representación clara e inequívoca" de que renunciarían a sus derechos bajo el TIPAT; (ii) México no produjo prueba alguna de haber confiado en las Declaraciones respecto de los derechos del TIPAT; y (iii) México no ha identificado ningún perjuicio material.[1069] Esto no es así.

837. La representación fue clara. Las Demandantes aceptaron que los socios extranjeros de Minera Gavilán y Minera Gorrión serían considerados mexicanos respecto de sus derechos, bienes, concesiones e intereses, y que no invocarían la protección de sus gobiernos. No era necesario mencionar el TIPAT.[1070] El *estoppel* no depende de una renuncia nominal a un tratado específico;

1066 Réplica, ¶ 779 nota de pie 2122.

1067 Réplica, ¶ 780.

1068 Memorial de Contestación, ¶ 471.

1069 Réplica, ¶¶ 786-788.

1070 Memorial de Contestación, ¶¶ 493, 501.

depende de que una parte no pueda afirmar hoy lo contrario de lo que afirmó para obtener un beneficio jurídico ayer.

838. México sí confió en esas Declaraciones. Minera Gavilán y Minera Gorrión sólo podían acceder al régimen minero porque declararon cumplir con el requisito de nacionalidad mexicana y con las condiciones de la LIE.[1071] Las Demandantes intentan reformular la confianza de México como si México tuviera que probar que otorgó las Concesiones específicamente a cambio de una renuncia nominal al TIPAT. Ese no es el estándar. México confió en la representación jurídica que la LIE exige: que, respecto de esas acciones, bienes, derechos, concesiones e intereses, los socios extranjeros serían tratados como nacionales mexicanos y no invocarían protección extranjera.

839. El perjuicio para México es evidente. Permitir este arbitraje permitiría a las Demandantes conservar los beneficios del régimen mexicano —incluidas las Concesiones que sólo pudieron obtener aceptando ser mexicanas respecto de ellas— mientras repudian la condición que hizo posible esos beneficios.[1072] Eso no es protección de inversión; es arbitraje regulatorio oportunista. El *estoppel* existe precisamente para impedir ese resultado

4. Las Declaraciones constituyen una renuncia válida a los derechos del Tratado

840. Las Demandantes argumentan que las Declaraciones no pueden constituir una renuncia porque: (i) una renuncia a los derechos del tratado debe estar "formulada en términos claros y específicos" y las Declaraciones no mencionan el TIPAT; (ii) las Declaraciones son anteriores al TIPAT y no se puede renunciar a derechos que aún no existen; y (iii) las Declaraciones son meros requisitos del derecho interno sin incidencia en los derechos derivados de tratados internacionales.[1073] El argumento fracasa porque parte de una premisa equivocada: México no necesita demostrar únicamente una renuncia nominal al TIPAT; basta demostrar que las Demandantes aceptaron un estatus jurídico incompatible con la invocación de protección extranjera respecto de esta inversión.

1071 Memorial de Contestación, ¶ 495.

1072 Memorial de Contestación, ¶ 497.

1073 Réplica, ¶¶ 791-794.

841. En todo caso, la renuncia es clara. Las Declaraciones no necesitan citar expresamente el TIPAT o el arbitraje internacional para ser efectivas como renuncias. Lo que exige es que el compromiso identifique el ámbito renunciado.[1074] Aquí, el Reglamento LIE y los estatutos de Minera Gavilán y Minera Gorrión lo hacen: los socios extranjeros renuncian a invocar protección de sus gobiernos respecto de sus acciones, bienes, derechos, concesiones, participaciones, intereses y relaciones contractuales. La reclamación bajo el TIPAT es una forma de protección internacional que depende de la nacionalidad canadiense de las Demandantes respecto de esos mismos derechos. Es precisamente lo que prometieron no invocar.

842. Que el TIPAT no existiera al momento de las Declaraciones no es determinante. Las Declaraciones no operan sólo como una renuncia a una causa de acción específica; operan como un acuerdo de estatus respecto de la inversión.[1075] Bajo la Constitución, la Ley Minera, la LIE y el Reglamento LIE, las Demandantes aceptaron que, respecto de sus derechos mineros, serían consideradas mexicanas y no invocarían protección extranjera. Un tratado posterior no puede transformar esa misma inversión en extranjera para efectos jurisdiccionales.

843. La referencia de las Demandantes a la Resolución Procesal No. 3 tampoco decide la cuestión.[1076] Esas observaciones se hicieron en el contexto limitado de bifurcación, no como una determinación final sobre jurisdicción. Además, la objeción de México no depende exclusivamente de una renuncia anticipada a una causa de acción específica bajo el TIPAT. Depende de algo más básico: las Demandantes no califican como inversionistas extranjeros respecto de una inversión frente a la cual aceptaron ser tratadas como mexicanas y no invocar protección extranjera.

844. En suma, los argumentos de las Demandantes sobre jurisdicción *ratione personae* y *ratione voluntatis* carecen de mérito. Las Declaraciones no son cláusulas históricas inocuas. Son compromisos estatutarios, legales y constitucionales que permitieron a las Demandantes acceder al sector minero mexicano. Esos compromisos las obligan a ser consideradas mexicanas respecto de su inversión y les impiden invocar protección extranjera —incluido el TIPAT— respecto de los mismos derechos, bienes, concesiones e intereses. Por tanto, el Tribunal debe declinar jurisdicción *ratione personae* y *ratione voluntatis* sobre las reclamaciones de las Demandantes.

1074 Memorial de Contestación, ¶¶ 498-500.

1075 Memorial de Contestación, ¶ 501.

1076 Réplica, ¶ 764 citando Resolución Procesal No. 3, ¶ 37.

V. LAS DEMANDANTES NO HAN DEMOSTRADO NINGUNA VIOLACIÓN DEL TIPAT

A. Las Demandantes no han demostrado que haya ocurrido una expropiación de la supuesta inversión

845. México ha demostrado en su Memorial de Contestación que la reclamación de expropiación de las Demandantes al amparo del artículo 9.8 del TIPAT fracasa de diferentes modos. La reclamación de expropiación debe desestimarse porque: *(i)* las Demandantes no eran titulares de los derechos que alegan fueron expropiados; *(ii)* no ocurrió una expropiación directa en el sentido del TIPAT; *(iii)* la teoría tardía de las Demandantes sobre una "expropiación judicial" es inadmisible y carece de fundamento; y *(iv)* en cualquier caso, las actuaciones de México fueron lícitas. Cada uno de estos fundamentos se aborda a continuación.

1. Las Demandantes no eran titulares de derechos susceptibles de expropiación

846. La cuestión preliminar en toda reclamación de expropiación consiste en determinar si el demandante era titular de los derechos que alega le fueron arrebatados.

847. Son las propias Demandantes quienes identifican el objeto de la supuesta expropiación como "the rights granted under the Concessions", y no las Concesiones como tales.[1077] En su Memorial de Réplica, las Demandantes precisan además que los derechos supuestamente expropiados consisten en "rights to explore, exploit, and benefit from the mineral resources in the Concession areas for a renewable term of 50 years".[1078] Asimismo, se desprende claramente de la exposición de las demandantes sobre los daños que los derechos por los que reclaman indemnización son los derechos de explotación (minera) en el yacimiento de Ixtaca y los beneficios derivados de dicha operación.

848. Las Demandantes no poseían estos derechos. Ellas reconocen que los derechos para explotar y beneficiarse de los recursos minerales estaban condicionados a la obtención de "additional permits and authorizations", permisos y autorizaciones que las Demandantes nunca obtuvieron.[1079] Específicamente, las Demandantes no obtuvieron las aprobaciones necesarias de la SEMARNAT ni una licencia social para operar. Su argumento en respuesta – que las Concesiones

1077 Memorial de Demanda, ¶ 474.

1078 Réplica, ¶ 838.

1079 Réplica, ¶ 845.

contemplaban tanto exploración como explotación, no significa que las Demandantes tuvieran un derecho adquirido a realizar actividades mineras.

849. El testigo de las Demandantes, el Sr. Pablo-Dorantes, confirma este carácter condicional. Señala inequívocamente que "[a] MIA is required for all mining projects that involve exploitation activities, and it must be obtained before such activities commence".[1080] El artículo 28(III) de la *Ley General del Equilibrio Ecológico* ("LGEEPA") de México establece lo mismo: debe obtenerse una autorización en materia de impacto ambiental (MIA) antes de realizar cualquier actividad de explotación.[1081] No existe controversia respecto de que SEMARNAT negó la MIA para el proyecto Ixtaca en diciembre de 2020. En consecuencia, las Demandantes nunca adquirieron el derecho a explotar los recursos minerales, y un derecho que nunca fue adquirido no puede ser expropiado.

850. Los propios títulos de concesión confirman este carácter condicional. Los títulos disponen que "[t]he mining works and works that are carried out under this Title may only be carried out with authorization, permit or concession, as the case may be, from the authorities in charge of the assets that are affected".[1082] Este lenguaje deja claro que los derechos derivados de los títulos de concesión no eran de ejecución automática; estaban expresamente sujetos a la autorización previa de otras autoridades regulatorias.

851. La cita de las Demandantes de *Quiborax S.A. c. Bolivia* es improcedente. En ese caso, el Código de Minería boliviano otorgaba al titular "an exclusive right *in rem* to carry out for an indefinite time prospection, exploration, exploitation, concentration, smelting, refining and commercialization activities regarding all the mineral substances found in that concession".[1083] Las Demandantes no poseían los mismos derechos como la demandante en *Quiborax*, ya que, como se señala en el Artículo 16 de la Ley General de Bienes Nacionales, las concesiones no crean derechos reales,[1084] sino que derechos cuya existencia dependía del cumplimiento de diversas condiciones que, en este caso, las Demandantes no cumplieron.[1085] Además, la demandante en

---

1080 Declaración Testimonial del Sr. Dorantes, ¶ 15.

1081 LGEEPA, Artículo 28(III) **C-0156**.

1082 Concesiones Cerro Grande y Cerro Grande 2. **C-0152**. [Énfasis añadido].

1083 *Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. v. Plurinational State of Bolivia*, ICSID Case No. ARB-06-2, Award, September 16, 2015, ¶ 349, **CL-0094**.

1084 Ley General de Bienes Nacionales, Artículo 16, **FMAB-0054**.

1085 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 205; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 28. **R-0246**, y Ley Minera, Artículos, 10, 13, 27 y 29. **R-0002**.

Quiborax había realizado actividades mineras de forma activa durante más de dos años y era rentable al momento en que se adoptó la medida expropiatoria. El presente caso es fundamentalmente distinto: las Demandantes nunca adquirieron el derecho a explotar porque la MIA fue negada, y nunca obtuvieron un solo dólar de ingresos provenientes de actividades de explotación.

852. Por separado, aun si las Demandantes hubieran tenido en algún momento derechos derivados de las concesiones, esos derechos dejaron de existir mucho antes de la Resolución de No Factibilidad de 2023. En junio de 2022, Economía declaró insubsistentes las Concesiones conforme a las directrices de la Suprema Corte de Justicia.[1086] Como reconoció el tribunal en *Infinito Gold c. Costa Rica*, "[t]he existence of rights subject to expropriation must be assessed immediately before the adoption of the measures impugned".[1087]

853. Las Demandantes no controvierten que Economía declaró insubsistentes las Concesiones en junio de 2022. Tampoco caracterizan esa declaración de insubsistencia como una violación del TIPAT, ni impugnan la decisión de la Suprema Corte como una denegación de justicia o violación de derecho internacional. Dado que las Concesiones ya habían sido declaradas insubsistentes para junio de 2022, las Demandantes no eran titulares de derechos derivados de ellas al momento de la medida de febrero de 2023. No pueden expropiarse derechos que ya han dejado de existir.

854. El caso *Infinito Gold* resulta ilustrativo. En ese caso, la concesión minera otorgada al inversionista en 2008 fue anulada por el Tribunal Contencioso-Administrativo de Costa Rica en noviembre de 2010, y la Sala Primera de la Corte Suprema confirmó dicha anulación el 30 de noviembre de 2011. La parte demandante alegó que la decisión de 2011 daba lugar a una expropiación directa.[1088] Por su parte, Costa Rica sostuvo que la decisión de 2011 no conllevaba una expropiación directa, dado que los derechos mineros ya habían sido anulados por el tribunal de instancia inferior en 2010. El Tribunal dio la razón a Costa Rica y desestimó la reclamación por

---

1086 Memorial de Contestación, ¶ 544.

1087 *Infinito Gold Ltd. v. Republic of Costa Rica*, ICSID Case No. ARB/15/5, Award, June 3, 2021, ¶ 706. **RL-0014**.

1088 *Infinito Gold Ltd. v. Republic of Costa Rica*, ICSID Case No. ARB/15/5, Award, June 3, 2021, ¶ 646. **RL-0014**.

expropiación directa, al considerar que las concesiones habían sido anuladas con anterioridad a 2011.

855. La afirmación de las Demandantes de que Economía simplemente "suspendió" las Concesiones carece de sustento. Como se explica en la Sección B.1.a. *supra,* la Suprema Corte aclaró que la "insubsistencia" equivalía a invalidar el acto, al referirse en la Sentencia a las concesiones declaradas insubsistentes como los "títulos [de concesión] invalidados",[1089] confirmando que su decisión conllevo una anulación definitiva de las concesiones y no una mera suspensión temporal de las mismas. El Ministro Carrancán en su voto concurrente a la Sentencia de la Suprema Corte también confirmó que la insubsistencia de las Concesiones "equivale a una nulidad absoluta en materia administrativa".[1090]

856. La jurisprudencia de la Suprema Corte también confirma que cuando una sentencia de amparo declara la insubsistencia de un acto, este pierde todos sus efectos legales de manera automática e inmediata desde que se dicta la sentencia, sin que la autoridad tenga que hacer un trámite o emitir una nueva resolución para confirmarlo.[1091]

857. En consecuencia, como explican los Sres. Aguinaco, la insubsistencia invalidó las Concesiones, haciendo que desaparecieran del orden jurídico y dejaran de surtir cualquier efecto.

> Al dejar insubsistentes los títulos de concesión, éstos se invalidaron y desaparecieron del orden jurídico y, por tanto, la autoridad ya no podía actuar como si continuaran surtiendo efectos. Su obligación consistía en resolver nuevamente sobre las solicitudes de concesión; determinar, conforme al marco jurídico aplicable y en función de las constancias que integraban el expediente administrativo, si procedía expedir nuevos títulos y, de ser así, continuar con la consulta indígena ordenada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.[1092]

1089 Amparo en Revisión 134/2021, Sentencia de la Suprema Corte, p. 299. **C-0092**

1090 Voto Concurrente que Formula el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá relativo a la sentencia del amparo en revisión 134/2021, ¶¶ 48-51. **FMAB-0046**. Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 52-56.

1091 Segundo Informe de Experto de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 48-49. Jurisprudencia I.1o.A. J/19 (10a.), de la Décima Época, de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 66, Tomo III, página 2360, con registro digital 2019976, de rubro siguiente: "SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO. TIENE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS." **FMAB-0050.**

1092 Segundo Informe de los Sres Aguinaco, ¶ 249.

2. No ocurrió una expropiación directa en el sentido del TIPAT

858. Aun suponiendo *arguendo* que las Demandantes fueran titulares de derechos susceptibles de expropiación, no han demostrado que dichos derechos hayan sido expropiados *directamente* en el sentido del TIPAT. Debe destacarse que las Demandantes alegan únicamente una expropiación directa, no una expropiación indirecta.[1093] Por tanto, la tarea del Tribunal se limita a determinar si ocurrió una expropiación directa conforme a la definición del Tratado.

859. El Anexo 9-B(2) del TIPAT define la "expropiación directa" como aquella que ocurre cuando una inversión es "nationalised or otherwise directly expropriated through formal transfer of title or outright seizure". En contraste, el Anexo 9-B(3) define la "expropiación indirecta" como una acción o serie de acciones que tienen "an effect equivalent to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure". Comparar ambas definiciones es imperativo: las características definitorias de la expropiación directa son la "formal transfer of title or outright seizure". En ausencia de esos elementos, una medida no puede, por definición, constituir una expropiación directa conforme al TIPAT.

860. Esta distinción está bien establecida en la jurisprudencia internacional en materia de inversiones. Como reconoció el tribunal en Glamis Gold: "A direct expropriation is readily apparent: there is an 'open, deliberate and acknowledged taking[] of property, such as outright seizure or formal or obligatory transfer of title in favour of the host State."[1094] En contraste, "[i]ndirect expropriation refers to a government measure that, although not on its face effecting a transfer of property, results in the foreign investor being deprived of its property or its benefits".[1095]

861. Las Demandantes no satisfacen la definición de expropiación directa del TIPAT. En febrero de 2023, se *denegaron* a las Demandantes los derechos concesionarios cuando Economía declaró la no factibilidad de las Concesiones. Eso no constituye una "formal transfer of title or

---

1093 *Véase* Réplica, ¶¶ 860-861. *Pero ver* Réplica, ¶ 1063 ("The Claimants present a unified damages figure because the measures are not divisible as they formed part of a single course of conduct directed at the same investment and producing the same result.").

1094 *Glamis Gold, Ltd. v. United States of America*, UNCITRAL, Award, June 8, 2009, ¶ 355. **RL-0058.** (citando *Metalclad Corporation. v. The United Mexican States*, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, Award, August 30, 2000, ¶ 103. **CL-0022**).

1095 *Michael Anthony Lee-Chin v. Dominican Republic*, ICSID Case No. UNCT/18/3, Award, 6 October 2023, ¶ 343. **RL-0054.**

outright seizure". Los títulos no fueron transferidos a México ni a un tercero; simplemente fueron negados a las Demandantes. No hubo nacionalización, confiscación ni transferencia, formal o de cualquier otra naturaleza. Incluso cuando se anulan o cancelan derechos preexistentes, ello se considera "equivalente a una expropiación" de esos derechos, y no una transferencia formal o incautación de los mismos.[1096]

862. Las Demandantes sostienen que el "February 2023 Oficio had the effect of transferring the titles back to the State".[1097] Este argumento fracasa por al menos dos razones. *Primero*, las propias Demandantes definen la inversión supuestamente expropiada no como los títulos, sino como los derechos derivados de las Concesiones. Incluso conforme al planteamiento de las Demandantes, la cuestión relevante es si esos derechos fueron "formally transferred" a alguien, y no lo fueron. *Segundo*, caracterizar el Oficio de febrero de 2023 como si hubiera efectuado una "transferencia" tergiversa lo ocurrido. Economía declaró no viables las solicitudes de concesión. Al hacer esto, negó derechos a las Demandantes. No transfirió a sí misma ni a otra parte los derechos de las Demandantes.

863. Además, como se explicó *supra,* no puede existir una "transferencia formal de la titularidad ni confiscación" de los derechos de explotación o exploración de minerales, ya que sólo la Nación ejerce el dominio directo sobre los recursos minerales conforme al Artículo 27 de la Constitución Mexicana. Aunque una concesión minera autoriza que particulares puedan explotar recursos minerales, ello no significa que los recursos minerales y los derechos derivados de los mismos se desvinculen de su naturaleza de propiedad de la Nación. El dominio directo de los recursos naturales y los derechos derivados de las concesiones no se transfiere en ningún momento de la Nación al particular, ya que es intransferible e inalienable conforme a la Constitución, por lo que no puede existir una "transferencia formal de la titularidad ni confiscación" de los derechos derivados de la Concesión nunca dejaron de pertenecer al dominio de la Nación.[1098]

1096 *See Saipem S.p.A v. The People's Republic of Bangladesh, ICSID Case No. ARB/05/7*, Award, June 30, 2009, ¶ 129. **RL-0157.** *Sistem Mühendislik In aat Sanayi ve Ticaret A. v. Kyrgyz Republic*, ICSID Case No. ARB(AF)/06/1, Award, 9 September 2009, ¶ 118 ("It is well established that the abrogation of contractual rights by a State, in the circumstances which obtained in this case, is tantamount to an expropriation of property by that State."). **RL-0158.**

1097 Réplica, ¶ 852.

1098 Ver Sección II.C.4 *supra*.

864. La invocación por las Demandantes del estándar formulado en *Quiborax* es errónea. El tribunal en *Quiborax* aplicó la siguiente prueba: "a State measure constitutes expropriation under the Treaty if (i) the measure deprives the investor of its investment; (ii) the deprivation is permanent; and (iii) the deprivation finds no justification under the police powers doctrine".[1099] Ese estándar fue formulado al amparo del TBI Bolivia–Reino Unido, un tratado con lenguaje y estructura distintos. El TIPAT es más específico: exige una "formal transfer of title or outright seizure" para que exista una expropiación directa. Por tanto, el estándar de Quiborax no resulta útil para interpretar la definición más estrecha de expropiación directa del TIPAT, y debe rechazarse el intento de las Demandantes de importar una prueba más amplia proveniente de un tratado distinto.

865. La presentación sobre daños de las Demandantes confirma además que no ocurrió una expropiación directa. Las Demandantes solicitan compensación por los "beneficios" no realizados de recursos minerales no explotados. México no confiscó directamente esos beneficios ni los transfirió formalmente a sí mismo o a otra persona. La ausencia de toda confiscación o transferencia es determinante: lo que las Demandantes describen es, a lo sumo, una privación, no una expropiación directa conforme a la definición del TIPAT.

3. La reclamación de "expropiación judicial" es inadmisible y carece de fundamento

866. Por primera vez en el Memorial de Réplica, las Demandantes sugieren que la propia sentencia de la Suprema Corte constituye una "unlawful judicial expropriation".[1100] Esta reclamación nunca fue formulada en el Memorial de Demanda y no puede plantearse por primera vez en el Memorial de Réplica. Las Demandantes están vinculadas a los límites del caso, tal cual lo plantearon originalmente.[1101]

1099 *Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. v. Plurinational State of Bolivia*, ICSID Case No. ARB-06-2, Award, September 16, 2015, ¶ 200. **CL-0094**.

1100 Réplica, ¶ 854.

1101 La Solicitud de Arbitraje no menciona una expropiación judicial. La Solicitud de Arbitraje señala: "Mexico's unlawful measures directly expropriated the Claimants' rights and investments in the Ixtaca Project, including, but not limited to, DGM's removal of the Claimants' concessions from the Public Registry of Mining, and Economiá's subsequent arbitrary, unlawful, and retroactive determination that the original concession applications filed and approved decades earlier were 'not feasible', thereby permanently

867. Las Demandantes estructuraron deliberadamente su reclamación de modo que el acto expropiatorio impugnado fuera el Oficio de Economía de 9 de febrero de 2023, y no la sentencia de la Suprema Corte de 16 de febrero de 2022. Incluso en su Réplica, las Demandantes confirman que "the Supreme Court's decision did not operate to extinguish the Claimants' rights definitely", lo que significa que la decisión no constituyó una expropiación directa.[1102] A lo largo de su Memorial de Demanda, las Demandantes trataron las órdenes de la Corte como contexto de antecedentes y como un instrumento que Economía supuestamente utilizó indebidamente, pero no impugnaron directamente los actos judiciales en sí mismos como constitutivos de la expropiación conforme al artículo 9.8 del TIPAT. Habiendo adoptado esa decisión estratégica, las Demandantes no pueden ahora cambiar de rumbo para alegar una teoría de responsabilidad completamente distinta.

868. En cualquier caso, la teoría de "expropiación judicial" de las Demandantes fracasa en cuanto al fondo. Las Demandantes no analizan esta reclamación dentro del marco del TIPAT. Se limitan a citar dos casos decididos al amparo de tratados distintos, con disposiciones diferentes, y afirman, sin mayor desarrollo, que un acto judicial puede constituir una expropiación. Eso es insuficiente. El estándar aplicable a la expropiación judicial —en la medida en que el TIPAT contemple ese concepto— es la denegación de justicia,[1103] o al menos una ilegalidad manifiesta. Las Demandantes no han alegado una denegación de justicia, no han identificado los elementos de

depriving the Claimants of their concession rights and dispossessing the Claimants of the value they had cultivated in the Project." ¶ 5.5.

1102 Réplica, ¶ 841.

1103 *Ver Ver América Móvil SAB de CV c. República de Colombia,* Caso CIADI No. ARB(AF)/16/5, Laudo, 7 de Mayo de 2021, ¶ 351 ("En lo que respecta a la aplicación del derecho interno por los tribunales domésticos, es unánimemente reconocido que ésta solo puede ser cuestionada e ignorada por los tribunales internacionales en situaciones excepcionales, en particular, si la decisión del juez nacional es 'arbitrary or irrational', 'outrageously wrong' o 'misapplied the law in such an egregiously wrong way, that no honest, competent court could have possibly done so', es 'an egregious error amounting to abject failure of justice' o hizo una 'aplicación incorrecta de la ley en una forma clara y maliciosa'.'"). **RL-0159.** *Ver también Lion Mexico Consolidated c. Estados Unidos Mexicanos,* Caso CIADI No. ARB(AF)/15/2, Laudo, 20 de septiembre de 2021, ¶ 188 ("… el Tribunal observa que la responsabilidad por expropiación en virtud del Art. 1110 derivada de las decisiones de los tribunales nacionales requiere la constatación de una denegación de justicia."). **RL-0160.** *Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States of America,* ICSID Case No. ARB(AF)/98/3, Award, June 26, 2003, ¶ 165 ("In the circumstances of this case, a claim alleging an appropriation in violation of Article 1110 can succeed only if Loewen establishes a denial of justice under Article 1105"). **RL-0161.**

dicha reclamación y no han intentado demostrar que la sentencia de la Suprema Corte violara derecho internacional.

869. Los casos citados por las Demandantes confirman el alto estándar aplicable. El tribunal en *Standard Chartered* concluyó que la decisión judicial pertinente —una decisión de un tribunal inferior— equivalía a una expropiación judicial porque era "inexplicable" y "an abject failure of justice".[1104]

870. En *Saipem c. Bangladesh*, el tribunal debía determinar si la decisión de la Corte Suprema que anuló un laudo de la CCI equivalía a una expropiación, es decir, a una expropiación indirecta. En cuanto al estándar jurídico, el tribunal declaró que la "substantial deprivation" de los derechos de Saipem no era suficiente para concluir que existía una expropiación indirecta.[1105] La cuestión decisiva era si la decisión de la Corte Suprema era ilícita. El tribunal concluyó que, a pesar de la "substantial discretion" reconocida a los tribunales nacionales, la decisión de la Corte Suprema carecía por completo de fundamento y había sido adoptada "for an end which was different from that for which it was instituted and thus violated the internationally accepted principle of prohibition of abuse of rights."[1106]

871. La cuestión en *Karkey c. Pakistan* era similar. El tribunal debía determinar si la decisión de la Corte Suprema que declaró nulo un contrato había privado al inversionista del uso y goce de esos derechos.[1107] Para constituir una expropiación, el tribunal señaló que la decisión de la Corte Suprema debía haber "violated international law".[1108] Tras examinar la decisión de la Corte

---

[1104] *Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited v. United Republic of Tanzania*, ICSID Case No. ARB/15/41, Award, 11 October 2019, ¶ 350. *Ver también id* ¶ 353 ("The Utamwa J Order had gone beyond merely being a wrong judicial decision, rather it is an egregious error amounting to abject failure of justice."). **RL-0162.**

[1105] *Saipem S.p.A. v. The People's Republic of Bangladesh*, ICSID Case No. ARB/05/07, Award, 30 June 2009, ¶¶ 133-134. **RL-0157.**

[1106] *Saipem S.p.A. v. The People's Republic of Bangladesh*, ICSID Case No. ARB/05/07, Award, 30 June 2009, ¶ 161. **RL-0157.**

[1107] *Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. v. Islamic Republic of Pakistan*, ICSID Case No. ARB/13/1, Award, 22 August 2017, ¶ 648. **RL-0116.**

[1108] *Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. v. Islamic Republic of Pakistan*, ICSID Case No. ARB/13/1, Award, 22 August 2017, ¶ 643. **RL-0116.**

Suprema, el tribunal concluyó que era "arbitrary", "irrational" e incompatible con principios básicos del derecho local.[1109]

872. El tribunal en *Sistem* no articuló un estándar específico para la expropiación judicial. Sin embargo, al igual que en las decisiones anteriores, el tribunal discrepó fundamentalmente de las conclusiones de los tribunales locales.[1110]

873. En este caso, las Demandantes no han demostrado que la decisión de la Suprema Corte haya sido ilícita, inexplicable o que, de algún otro modo, constituyera un abuso de derecho contrario al derecho internacional. La decisión de la Corte estuvo firmemente sustentada en su autoridad constitucional para proteger los derechos de las comunidades indígenas conforme al artículo 2 de la Constitución y al Convenio No. 169 de la OIT. Los actos impugnados en el amparo incluían el otorgamiento y registro de las Concesiones sin consulta previa, y Tecoltemi solicitó expresamente que se dejaran sin efectos los títulos y se restituyeran sus derechos territoriales. Las instrucciones de la Suprema Corte —declarar insubsistentes los títulos, determinar si su otorgamiento resultaba factible conforme a las condiciones y requisitos aplicables al momento en que se presentaron las solicitudes y, de ser así, llevar a cabo la consulta requerida— estaban dirigidas a remediar esa violación constitucional. No eran ajenas al objeto ni a la finalidad del amparo.[1111]

874. *Saipem* es claramente distinguible. En ese caso, el tribunal de Bangladesh concluyó que el tribunal de la CCI había incurrido en una conducta indebida. El Tribunal arbitral no estuvo de acuerdo porque las órdenes procesales de la CCI citadas por dicho tribunal no contenían el "slightest trace of error or wrongdoing".[1112] La decisión de la corte local no identificó la norma

---

1109 *Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. v. Islamic Republic of Pakistan*, ICSID Case No. ARB/13/1, Award, 22 August 2017, ¶¶ 555-556, 645. **RL-0116.**

1110 *Ver Sistem Mühendislik Insaat Sanayi ve Ticaret A.S v Kyrgyz Republic*, ICSID Case No ARB(AF)/06/1, Award, 22 September 2009, ¶ 74 (concluding that the agreements "were valid and legally binding"). *But see id*. ¶¶ 117-118 (finding that the courts abrogated rights that the claimant lawfully held under the contract for no reason other than the erroneous conclusion that the agreements were void). **CL-0232.**

1111 *Ver* Memorial de Contestación, ¶¶ 657-663; Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 135-139, 218-220, 225-226.

1112 *Saipem S.p.A. v. The People's Republic of Bangladesh*, ICSID Case No. ARB/05/07, Award, 30 June 2009, ¶ 155. **RL-0157.**

jurídica que supuestamente habían ignorado los árbitros, Bangladesh no intentó demostrar que los árbitros hubieran incurrido en conducta indebida y los propios árbitros nunca fueron consultados ni oídos. El tribunal concluyó, por tanto, que la determinación de conducta carecía de toda justificación y que la consecuente revocación había sido "grossly unfair". [1113]

875. En suma, el hecho de que los derechos de las Demandantes se hayan visto afectados por la decisión de la Suprema Corte no es suficiente para establecer una expropiación judicial, aun suponiendo que tal reclamación hubiese sido debidamente planteada. Las Demandantes pueden discrepar del alcance de la reparación ordenada o de la interpretación del derecho mexicano realizada por la Suprema Corte, pero no han demostrado que la actuación de la Corte haya alcanzado el elevado umbral exigido por el derecho internacional.

4. Las actuaciones de la Demandada fueron lícitas.

876. Aun si el Tribunal concluyera que Economía confiscó o transfirió formalmente derechos mineros de las Demandantes —lo que México niega—, las Demandantes no han demostrado que esos actos violaran el derecho internacional.

877. Como se explica en el Memorial de Contestación, el Anexo 9-B incorpora la doctrina de los poderes de policía: "los actos regulatorios no discriminatorios de una Parte, diseñados y aplicados para proteger objetivos legítimos de bienestar público —tales como la salud pública, la seguridad y el medio ambiente—, no constituyen expropiaciones indirectas". [1114] Las Demandantes cuestionan si esta redacción se aplica tanto a las expropiaciones directas como a las indirectas. [1115] La respuesta es clara. Aun cuando la redacción del Anexo 9-B se refiera específicamente a la expropiación indirecta, la doctrina de los poderes de policía no se limita a ella; se ha aplicado sistemáticamente a reclamaciones por expropiación directa. [1116] De hecho, el tribunal del caso

---

[1113] *Saipem S.p.A. v. The People's Republic of Bangladesh*, ICSID Case No. ARB/05/07, Award, 30 June 2009, ¶¶ 155-161. **RL-0157.**

[1114] Memorial de Contestación, ¶ 560.

[1115] Réplica, ¶ 861.

[1116] *See, e.g.*, *Burlington Resources Inc. c. Ecuador*, Caso CIADI No. ARB/08/5, Decisión sobre Responsabilidad, 14 de diciembre de 2012, ¶ 506. **RL-0163.** *Copper Mesa Mining Corporation v. Republic of Ecuador*, PCA No. 2012-2, Award, 15 de marzo de 2016, ¶ 6.60. **CL-0222.** *Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic*, UNCITRAL, PCA Case No. 2001-04, Partial Award, 17 March 2006, ¶ 255 ("It is now established in international law that States are not liable to pay compensation to a foreign investment

Quiborax, al evaluar una reclamación por expropiación directa, determinó que el ejercicio de los poderes de policía resulta "particularly true" en el contexto minero, donde los derechos del inversionista están condicionados al cumplimiento de ciertos requisitos y el gobierno tiene la responsabilidad de velar por que dichos requisitos se cumplan.[1117]

878. Las Demandantes no controvierten que les corresponde demostrar que Economía tomó sus derechos (a) por motivos distintos de una utilidad pública; (b) de manera discriminatoria; (c) sin el debido proceso legal; y (d) sin una indemnización adecuada.[1118] Las Demandantes no han demostrado ninguno de estos elementos.

a. Utilidad pública

879. Las Demandantes no controvierten que la determinación técnica de Economía merece cierto grado de deferencia.[1119] Asimismo, reconocen que los tribunales en *Chemtura*, *Naturgy Energy* y *Nelson* se negaron, en cada caso, a "re-examine the regulator's underlying technical determination on the merits".[1120] Si bien el Tribunal está ciertamente facultado para examinar dichas determinaciones a fin de verificar si existe una arbitrariedad manifiesta que vulnere el

when, in the normal exercise of their regulatory powers, they adopt in a non-discriminatory manner *bona fide* regulations that are aimed at the general welfare."). **RL-0061.**

[1117] Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. v. Plurinational State of Bolivia, ICSID Case No. ARB-06-2, Award, 16 September 2015, ¶ 206 ("If a State cancels a license or a concession because the investor has not fulfilled the necessary legal requirements to maintain that license or concession, or has breached the relevant laws and regulations that are sanctioned by the loss of those rights, such cancellation cannot be considered to be a taking by the State."). **CL-0094.** *Ver también, Casinos Austria International GmbH and Casinos Austria Aktiengesellschaft v. Argentine Republic*, ICSID Case No. ARB/14/32, Award, 5 November 2021, ¶ 337 ("in the absence of specific commitments or assurances by the host State, both the introduction and administration of new regulatory requirements under its domestic law and the administration of existing regulatory requirements under domestic law will not qualify as an indirect expropriation requiring compensation"). **RL-0164.**

[1118] *Les Laboratoires Servier, S.A.S., Biofarma, S.A.S., Arts et Techniques du Progres S.A.S. v. Republic of Poland*, Award, 14 February 2012, ¶ 584 ("Thus, the burden then falls onto the Claimants to show that Poland's regulatory actions were inconsistent with a legitimate exercise of Poland's police powers."). **RL-0071.**

[1119] Memorial de Contestación, ¶ 567.

[1120] Réplica, ¶ 867.

derecho internacional,[1121] el Tribunal "no es un organismo regulador". [1122] Debe abstenerse de emitir juicios sobre las políticas y los criterios técnicos que sustentan las determinaciones de Economía, aplicando la misma deferencia que se otorga a los organismos estatales en virtud del derecho internacional consuetudinario. A los efectos del análisis que realiza el Tribunal en este caso, basta con que las actuaciones de Economía guardaran relación con un interés público legítimo. A falta de pruebas claras y convincentes de una actuación indebida en el plano internacional, se presume la legitimidad de los actos de Economía.[1123]

880. Como se explica en la Sección II. C *supra*, las deficiencias en las Solicitudes de Concesión y trabajos periciales eran significativas y no podían subsanarse.

881. En el caso de Cerro Grande, el Sr. Palma explicó que las deficiencias impedían confirmar con certeza en qué punto exacto del terreno se encuentra la concesión minera o si se estarían invadiendo concesiones vecinas o terreno del Estado.[1124] También explicó que, desde el punto de vista técnico, no es posible corregir la línea auxiliar una vez que la solicitud ya fue presentada y únicamente se está a la espera de la valoración y resolución de la DG Minas. Esto es por dos razones principales: la primera es que es el propio solicitante (en este caso Minera Gavilán) quien decide y propone desde el primer momento qué terreno quiere explotare y con base en eso solicita la concesión con los datos aportados. La autoridad no puede ni tiene la facultad de modificar los datos aportados por el particular; la segunda es que, en dado caso de que se le permitiera al particular cambiar la distancia o el trazo de la línea auxiliar para enmendar errores de la solicitud,

---

1121 *Glamis Gold Ltd. v. The United Stataes of America*, Award, 8 June 2009, ¶ 805 ("The sole inquiry for the Tribunal, however, is whether or not there was a manifest lack of reasons for" the measure). **RL-0058.**

1122 *Copper Mesa Mining Corporation v. Republic of Ecuador*, PCA No. 2012-2, Award, 15 March 2016,, ¶ 6.64. **CL-0222.**

1123 *Saluka Investments B.V. v. Czech Republic*, PCA Case No. 2001-04, Partial Award, Mar. 17, 2006, ¶ 273 (""In the absence of clear and compelling evidence that the CNB erred or acted otherwise improperly in reaching its decision … the Tribunal must in the circumstances accept the justification given by the Czech banking regulator for its decision."). Glamis Gold Ltd. v. United States, Award, June 8, 2009, ¶ 779 ("It is not the role of this Tribunal, or any international tribunal, to supplant its own judgment of underlying factual material and support for that of a qualified domestic agency. Indeed, our only task is to decide whether Claimant has adequately proven that the agency's review and conclusions exhibit a gross denial of justice, manifest arbitrariness, blatant unfairness, a complete lack of due process, evident discrimination, or a manifest lack of reasons so as to rise to the level of a breach of the customary international law standard."). **RL-0061.**

1124 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 27.

la consecuencia sería que todo el polígono de la concesión se desplazaría a un lugar diferente en el mapa, lo cual significaría resolver la emisión de una concesión sobre un terreno que no fue solicitado por el particular.[1125]

882. Además, permitir que un particular corrija o mueva alguno de estos tres elementos (punto de partida, línea auxiliar o punto 1 del perímetro) después de que la solicitud ya fue presentada y registrada, violaría el principio de "primero en tiempo, primero en derecho" que rige los procedimientos de otorgamiento de concesión. Como explica el Sr. Palma, en la práctica, esto equivaldría a permitir que alguien presente una solicitud con un terreno en el que queda "apartado" hasta que se resuelve la procedencia de la solicitud, para que luego se desplace a otra ubicación, guardando la misma prioridad en la "fila", afectando así a otros solicitantes que esperaban obtener una concesión sobre esos terrenos o generando incertidumbre al Estado.[1126] La aplicación de ese requisito perseguía el fin público de identificar con exactitud el terreno respecto del cual podían otorgarse derechos mineros exclusivos y proteger los derechos de terceros y del Estado mediante requisitos cartográficos uniformes y obligatorios, y no utilizar un defecto trivial como pretexto

883. En el caso de Cerro Grande 2, el Sr. Palma explicó que los métodos de medición utilizados eran invalidos y no estaban permitidos por la legislación aplicable debido a que tiene una precisión muy baja y lo que puede provocar que los límites del lote se desplacen decenas de metros y genera el riesgo de invadir terrenos de terceros o del Estado. Además, como los yacimientos se explotan a profundidad indefinida, un desfase de metros puede significar la extracción no autorizada de volúmenes de mineral considerable, el cual es de domio directo de la Nación y no puede ser explotado sin autorización expresa.[1127]

884. El Sr. Palma también explicó que el perito contratado por Minera Gavilán no acudió físicamente al sitio a realizar los trabajos periciales, sino que copió y transcribió datos de expedientes antiguos elaborados por otros peritos para otras concesiones. Este tipo de trabajos periciales "de escritorio" carece de validez técnica, pues la esencia de dichos trabajos es acudir directamente al terreno. [1128] El Sr. Palma explicó que es técnicamente imposible corregir un trabajo

---

1125 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶¶ 29-31.

1126 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 31.

1127 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 39.

1128 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 40.

pericial que nunca se realizó. [1129] La exigencia de Economía de cumplir con requisitos cartográficos uniformes y obligatorios perseguía el fin público de garantizar que pudiera identificarse con exactitud el terreno sujeto a derechos mineros exclusivos y que se protegieran los derechos de terceros y del Estado; no constituía un pretexto basado en defectos triviales.

b. Discriminación

885. Las Demandantes no han aportado prueba alguna de discriminación por parte de Economía. Los dos párrafos del Memorial de Réplica dedicados a este elemento consisten íntegramente en alegaciones recicladas dirigidas contra SEMARNAT y en retórica política atribuida al Poder Ejecutivo. Las Demandantes no identifican ningún comparador, es decir, ningún otro concesionario cuyas concesiones mineras hubieran estado sujetas a procedimientos judiciales similares, directrices de la Suprema Corte y una reevaluación administrativa por orden judicial, y que hubiera recibido un trato más favorable que las Demandantes. Sin un comparador, no puede existir una determinación de discriminación.

886. El argumento de las Demandantes de que "Mexico cannot use the decisions of its own domestic courts to immunize its discriminatory actions under international law" interpreta erróneamente la posición de México.[1130] México no pretende "inmunizar" nada. Las decisiones judiciales son relevantes porque proporcionan el contexto jurídico de las actuaciones de Economía: explican el motivo y el fundamento jurídico de la declaración de *insubsistencia* y la posterior reevaluación de las solicitudes de Concesión. El Segundo Tribunal Colegiado confirmó que Economía ejerció correctamente su *libertad de jurisdicción* (discreción) para evaluar la viabilidad de las Concesiones conforme a la Ley Minera y cumplió debidamente con la orden de la Suprema Corte.[1131]

c. Debido proceso

887. El debido proceso en el contexto de una expropiación debe evaluarse de conformidad con el derecho internacional. El estándar aplicable exige una "ausencia total de debido proceso" que conduzca a un resultado que "ofenda la discrecionalidad judicial".[1132] Cuando los actos

---

1129 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 42.

1130 Réplica, ¶ 870.

1131 Ver Sección II.B.3 *supra*.

1132 Memorial de Contestación, ¶ 577.

expropiatorios están sujetos a revisión judicial y dicha revisión no es impugnada como una denegación de justicia, los inversionistas carecen de base razonable para alegar una falta de debido proceso.

888. En la Réplica, las Demandantes sostienen —sin una explicación adecuada— que el TIPAT no exige una "ausencia total" de debido proceso. Argumentan que existe una falta de debido proceso cuando el Estado priva al inversionista de una notificación significativa, conduce de manera opaca el procedimiento decisivo y le niega una oportunidad razonable de defender sus derechos.[1133] Incluso conforme a este estándar menos exigente, la reclamación fracasa.

889. El Gobierno mexicano indiscutiblemente proporcionó a las Demandantes procedimientos legales para impugnar las actuaciones de Economía.[1134] Las Demandantes hicieron uso de dos medios judiciales distintos. Primero, interpusieron un Recurso de Inconformidad, que fue desestimado por el Segundo Tribunal Colegiado. Ese tribunal confirmó que Economía tenía discrecionalidad para evaluar la viabilidad conforme a la Ley Minera y emitir una nueva determinación. Segundo, las Demandantes promovieron un juicio de nulidad ante el TFJA para invalidar la decisión de Economía. Aunque inicialmente el TFJA concedió a las Demandantes una medida cautelar, las Demandantes se *desistieron voluntariamente* de ese procedimiento antes de que se emitiera una decisión definitiva.[1135]

890. Las Demandantes no respondieron al argumento de México de que estos procedimientos les brindaron debido proceso. Como reconoció el tribunal en *Azinian*: "Una autoridad pública no puede ser inculpada por realizar un acto respaldado por sus tribunales a menos que los propios tribunales sean desautorizados en el plano internacional".[1136] Las Demandantes no sostienen que haya existido una denegación de justicia por parte de los tribunales mexicanos, ya sea respecto de la decisión de la Suprema Corte de 2022, del Recurso de Inconformidad o del juicio de nulidad. Habiendo tenido acceso a recursos judiciales internos y habiendo optado voluntariamente por

---

1133 Réplica, ¶ 878.

1134 Memorial de Contestación, ¶¶ 578-580.

1135 Ver Sección II. D *supra*.

1136 *Robert Azinian, Kenneth Davitian, & Ellen Baca v. The United Mexican States*, ICSID Case No. ARB(AF)/97/2, Award, 1 November 1999, ¶ 97. **RL-0059.**

desistirse de esos procedimientos, las Demandantes no pueden ahora alegar una falta de debido proceso en el plano internacional.

d. Indemnización

891. Las Demandantes no han identificado qué derechos concesionarios específicos estaban sujetos a indemnización ni han intentado cuantificar qué indemnización habría correspondido por esos derechos en particular. En lugar de analizar qué derechos limitados poseían y cuál era su valor, las Demandantes simplemente reiteran su reclamación total de daños, una reclamación basada en el valor no realizado de recursos minerales que nunca tuvieron derecho a explotar. Corresponde a las Demandantes demostrar qué derechos específicos fueron tomados y qué indemnización se debía por esos derechos. No han intentado satisfacer esa carga. No corresponde a la Demandada ni al Tribunal subsanar las deficiencias del caso de las Demandantes.

5. No ocurrió una expropiación porque las Demandantes abandonaron el Juicio de Nulidad

892. Cuando una demandante dispone de una vía razonablemente disponible capaz de corregir la decisión administrativa impugnada, su falta de utilización de esa vía incide directamente en determinar si la supuesta privación llegó a ser definitiva, irreversible y suficientemente consumada como para constituir una expropiación conforme al Artículo 9.8.[1137] Mientras esa posibilidad de corrección no haya seguido su curso —o la demandante no demuestre que dicha vía era objetivamente inaccesible o manifiestamente ineficaz— la supuesta privación continúa siendo

[1137] *Generation Ukraine, Inc. v. Ukraine*, ICSID Case No. ARB/00/9, Award, 16 September 2003, ¶ 20.30 ("an international tribunal may deem that the failure to seek redress from national authorities disqualifies the international claim, not because there is a requirement of exhaustion of local remedies, but because the very reality of conduct tantamount to [a treaty breach] is doubtful in the absence of a reasonable – not necessarily exhaustive – effort by the investor to obtain correction"). **RL-0165.** *Parkerings-Compagniet AS v. Republic of Lithuania*, ICSID Case No. ARB/05/8, Award, 11 September 2007, ¶ 454 ("In the absence of any objective reason not to bring the case before national tribunals, it cannot be concluded, on the basis of the facts at hand, that the Claimant's investment has been indirectly expropriated."). **RL-0166.** Marvin Roy Feldman Karpa c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. ARB (AF)/99/1, Laudo, 16 de diciembre de 2002, ¶114. **RL-0167.** *Helnan International Hotels A/S v. Arab Republic of Egypt*, Award, 3 July 2008, ¶ 148 ("The ministerial decision to downgrade the hotel, not challenged in the Egyptian administrative courts, cannot be seen as a breach of the Treaty by EGYPT. It needs more to become an international delict for which EGYPT would be held responsible under the Treaty.). **RL-0168.** *Waste Management v. United Mexican States (II)*, ICSID Case No. ARB(AF)/00/3, Award, 30 April 2004, ¶ 116. **CL-0035.**

susceptible de corrección y no puede considerarse automáticamente un ilícito internacional consumado.

893. Minera Gorrión y Minera Gavilán interpusieron un Juicio de Nulidad ante el TFJA el 30 de marzo de 2023 para impugnar la Resolución de No Factibilidad. La acción no era colateral ni hipotética: impugnaba sustancialmente los mismos defectos técnicos y jurídicos que las Demandantes ahora alegan en este arbitraje, incluida la forma en que Economía trató las solicitudes originales de concesión, su consideración de la información técnica, su supuesta omisión de permitir la subsanación de las deficiencias conforme al Artículo 17-A de la LFPA y del Reglamento de la Ley Minera, y su alegado desconocimiento de la buena fe y de las expectativas legítimas.[1138]

894. La reparación disponible en ese procedimiento respondía directamente al perjuicio alegado. El TFJA podía haber anulado la Resolución de No Factibilidad u ordenado a la DG Minas reponer el procedimiento administrativo, incluida una nueva determinación respecto de las solicitudes de concesión y una oportunidad para que Minera Gorrión solicitara la adecuación de los perímetros y superficies de las concesiones. El TFJA también otorgó una medida cautelar el 3 de octubre de 2023 que impidió la publicación de la declaratoria de libertad de terreno mientras el juicio permaneciera pendiente. El procedimiento interno preservó, por tanto, la posibilidad de corregir la medida impugnada. Las Demandantes no identifican ninguna razón objetiva que demuestre que esa vía era inaccesible o manifiestamente ineficaz.

895. Tanto los Sres. Aguinaco como el experto de las Demandantes coinciden en que el Juicio de Nulidad era un recurso idóneo y disponible en contra de la Resolución de No Factibilidad. En concreto, los Sres. Aguinaco confirman que un resultado favorable para las Demandantes en el Juicio de Nulidad les hubiera permitido corregir las ilegalidades o deficiencias de la Resolución de No Factibilidad e incluso haber ocasionado que las Demandantes tuvieran derecho a obtener nuevamente las Concesiones:

> El escenario habría sido distinto si Minera Gorrión y Minera Gavilán hubieran continuado el juicio de nulidad y sus argumentos hubieran prosperado. En ese supuesto, el TFJA habría podido declarar la nulidad del Oficio de No Factibilidad y, dependiendo de la naturaleza de la ilegalidad identificada, determinar los efectos correspondientes. En particular, si se hubiera tratado de un vicio susceptible de subsanación, la DGM habría quedado obligada a emitir una nueva resolución en la que corrigiera la

[1138] Ver Sección II. D.2 *supra*.

> irregularidad advertida por el Tribunal y volviera a pronunciarse sobre la factibilidad de expedir las concesiones.
>
> Una sentencia favorable en el juicio de nulidad no habría implicado, por sí misma, que las Demandantes tuvieran derecho a obtener nuevamente los títulos de concesión. Esa consecuencia habría dependido del alcance y los efectos concretos de la sentencia del TFJA. Lo relevante es que el juicio de nulidad ofrecía precisamente la vía para que las objeciones de legalidad que ahora formulan fueran examinadas por el órgano jurisdiccional competente y, de resultar fundadas, se corrigieran sus consecuencias. Fueron las propias empresas quienes, al desistirse del juicio, renunciaron a obtener ese pronunciamiento.[1139] [Énfasis añadido]

896. En consecuencia, al abandonar el Juicio de Nulidad, las Demandantes renunciaron a una suspensión que las protegía en contra de los efectos de la Resolución de No Factibilidad y permitieron que la Resolución quedara firme y tuviera carácter definitivo, a pesar de las supuestas violaciones y deficiencias legales. Las Demandantes no pueden utilizar el arbitraje como una corte supranacional o alternativa para resolver sobre la legalidad de actos emitidos por una autoridad mexicana en el ejercicio de sus poderes regulatorios, sin permitir antes que las propias cortes nacionales competentes ejerzan sus funciones de control de legalidad.

897. Los Sres Aguinaco también explicaron, que incluso ante una sentencia desfavorable en el Juicio de Nulidad, las Demandantes mantenían la posibilidad de presentar un Amparo Directo en contra de esa determinación:

> Finalmente, si las empresas hubieran continuado el juicio de nulidad y obtenido una sentencia definitiva desfavorable, podían, en su caso, combatirla mediante juicio de amparo directo, mecanismo previsto para revisar la constitucionalidad de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales administrativos.[1140]

898. En consecuencia, las Demandantes contaban con diversos mecanismos jurisdiccionales para controvertir el Oficio de No Factibilidad y hacer valer las supuestas violaciones procesales y sustantivas que ahora invoca su experto. Sin embargo, optaron por desistirse del juicio de nulidad y no hicieron valer ningún otro medio de defensa, entonces sus consideraciones relativas a violaciones procesales, o de legalidad o de cualquier otra índole, precluyeron definitivamente.[1141]

1139 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 240-241.

1140 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 246.

1141 Segundo Informe de los Sres. Aguinaco, ¶ 247.

B. Las Demandantes no han demostrado que existió una violación del Trato Justo y Equitativo con respecto su supuesta inversión

899. Las Demandantes reiteran en su Réplica que México habría incumplido el estándar mínimo de trato ("NMT") bajo el Artículo 9.6 del TIPAT al no otorgar trato justo y equitativo ("TJE") a sus supuestas inversiones protegidas.[1142] Sin embargo, no lo logran demostrar. Los argumentos en su Réplica no subsanan las deficiencias de la reclamación de las Demandantes. Se limitan a acumular calificativos —"arbitrario," "pretextual," "discriminatorio," "desproporcionado" y "no transparente"— y a presentar como hechos probados las mismas inferencias controvertidas que México refutó en su Memorial de Contestación.[1143] Esa caracterización no demuestra una violación del Artículo 9.6. Las decisiones de SEMARNAT y Economía respondieron a procedimientos distintos, se apoyaron en competencias legales diferentes y perseguían objetivos igualmente diferenciados. Mientras que SEMARNAT actuó en ejercicio de sus competencias en materia de protección ambiental, Economía actuó en cumplimiento de la sentencia vinculante de la Suprema Corte que le ordenó analizar la factibilidad de las Concesiones, y, en el marco de ese análisis y del ejercicio de sus propias facultades administrativas, determinó que las Concesiones no eran factibles.[1144]

900. La alegación adicional de que México habría violado los derechos humanos de las comunidades próximas al Proyecto tampoco establece una violación del Artículo 9.6.[1145] Las Demandantes carecen de legitimación para convertir este arbitraje en una acción internacional en nombre de terceros y, en cualquier caso, no identifican qué obligación del TIPAT les permitiría reclamar por supuestas afectaciones a comunidades locales. Más importante aún, su argumento invierte la realidad: la intervención de las autoridades y de los tribunales mexicanos respondió precisamente a la necesidad de proteger el derecho constitucional de Tecoltemic a ser consultada, derecho que no había sido respetado al otorgarse originalmente las Concesiones.

1142 Réplica, ¶ 883.

1143 Réplica, ¶¶ 883-886; *Ver también* Memorial de Contestación, ¶¶ 710-716.

1144 Memorial de Contestación, ¶¶ 613-649, 656-680, 689-703.

1145 Réplica, ¶ 884.

901. Las Partes coinciden únicamente en el punto de partida: el Artículo 9.6 no exige trato adicional o superior al nivel mínimo de trato del derecho internacional consuetudinario.[1146] Pero las Demandantes intentan vaciar esa limitación de contenido al incorporar, bajo la etiqueta de TJE, una serie de obligaciones autónomas que el Tratado no contiene.[1147] Como México explicó, el Artículo 9.6 no establece prohibiciones generales e independientes contra toda arbitrariedad, falta de transparencia, inconsistencia, retroactividad, discriminación o desproporción.[1148]

902. La distinción es esencial. Esas circunstancias pueden ser elementos relevantes para evaluar si una conducta estatal, considerada en su contexto y gravedad, alcanza el umbral del nivel mínimo de trato. Pero no constituyen, por separado, obligaciones autónomas cuya mera infracción genere responsabilidad internacional. La formulación de *Waste Management II* es un estándar compuesto y contextual: exige una conducta de suficiente gravedad, no una lista de ilícitos independientes.[1149]

1. La evolución del nivel mínimo de trato no elimina la carga de demostrar práctica estatal y *opinio juris*

903. Las Demandantes aceptan que el derecho internacional consuetudinario surge de una práctica general y consistente de los Estados seguida por convicción jurídica, pero acto seguido pretenden demostrar su contenido casi exclusivamente mediante laudos arbitrales.[1150] Esa metodología es insuficiente. Los laudos pueden servir como medios auxiliares para identificar una norma consuetudinaria; no sustituyen la prueba de la práctica estatal y la *opinio juris* exigidas por el Anexo 9-A del TIPAT.

904. La referencia de *ADF v. United States* a la jurisprudencia arbitral no respalda la posición de las Demandantes.[1151] El tribunal indicó que el análisis debía estar "disciplined" por la práctica estatal, la jurisprudencia y otras fuentes del derecho internacional; no sostuvo que la repetición de

---

1146 Réplica, ¶¶ 885, 887; *Ver también* Memorial de Contestación, ¶ 584.

1147 Memorial de Contestación, ¶¶ 907-937.

1148 Memorial de Contestación, ¶¶ 584-612.

1149 *Waste Management v. United Mexican States (II)*, ICSID Case No. ARB(AF)/00/3, Award, 30 April 2004, ¶ 98. **CL-0035**.

1150 Réplica, ¶ 887.

1151 Réplica, ¶ 887.

formulaciones en laudos dictados bajo tratados distintos bastara para crear costumbre.[1152] De hecho, los tribunales en *Lone Pine v. Canada* y *Cargill c. México* recordaron que los laudos no crean derecho internacional consuetudinario y, a lo sumo, pueden reflejarlo.[1153]

905. La invocación de *Glamis Gold v. United States* tampoco ayuda a las Demandantes.[1154] Ese tribunal sostuvo expresamente que los laudos "do not constitute State practice and thus cannot create or prove customary international law"; únicamente pueden servir como ilustraciones cuando aplican un análisis genuinamente consuetudinario, mientras que los laudos que interpretan cláusulas autónomas de TJE no ayudan a identificar la costumbre.[1155] La opinión del profesor Reisman en *Railroad Development Corporation* tampoco altera ese marco.[1156] Se trata de una opinión pericial presentada por una parte, no de una conclusión del tribunal, y su planteamiento no establece que los laudos constituyan por sí mismos práctica estatal ni que sustituyan la prueba de *opinio juris*. Además, la propia opinión limita su razonamiento a tribunales autorizados por los Estados para determinar si una práctica específica satisface el estándar jurídico sometido a su consideración.[1157] Aun aceptando ese enfoque, únicamente podrían tener valor indicativo los laudos que examinen la conducta estatal conforme al NMT consuetudinario relevante. Las decisiones que interpretan cláusulas autónomas de TJE no evalúan la licitud de la conducta bajo ese estándar y, por tanto, no demuestran el contenido del Artículo 9.6.

906. Tampoco existe inconsistencia en que México cite laudos.[1158] México los invoca como medios persuasivos cuando examinan correctamente el NMT consuetudinario y respetan su metodología, no como sustitutos de la prueba de sus dos elementos constitutivos. Son las

---

1152 *ADF Group Inc. v. United States of America,* ICSID Case No. ARB(AF)/00/1, Award, 9 January 2003, ¶¶ 179-184, **CL-0060**.

1153 *Lone Pine Resources Inc. v. the Government of Canada*, ICSID Case No. UNCT/15/2, Final Award, 21 November 2022, ¶ 600. **RL-0063;** *Cargill, Incorporated v. Uniyted Mexican States*, ICSID Case No. ARB(AF)/05/2, Award, September 182009, ¶ 277. **CL-0012**.

1154 Réplica, ¶ 905.

1155 *Glamis Gold, Ltd. v. The United States of America*, UNCITRAL, Award, 8 June 2009, ¶ 605. **RL-0058**.

1156 Réplica, ¶ 905.

1157 Second Opinion of W. Michael Reisman on Legal Issues Raised in the Respondent's Counter-Memorial, *Railroad Development Corp. v. Guatemala, DR-CAFTA*, ICSID Case No. ARB/07/23, 11 March 2011, ¶ 52, **CL-0242.**

1158 Réplica, ¶ 905.

Demandantes quienes pretenden utilizar decisiones dictadas bajo cláusulas autónomas y textos convencionales distintos para incorporar al Artículo 9.6 obligaciones que no han demostrado mediante práctica estatal y *opinio juris*.

907. No está en disputa que el derecho internacional consuetudinario puede evolucionar.[1159] Pero reconocer su posible evolución no demuestra que haya evolucionado en la dirección y con el alcance pretendidos por las Demandantes. *Mondev v. United States* no eliminó la necesidad de establecer el contenido concreto de la norma mediante práctica estatal y *opinio juris*; únicamente rechazó que el estándar quedara congelado en 1926.[1160]

908. Las Demandantes confunden, además, dos proposiciones distintas. Que el estándar moderno no requiera necesariamente una conducta "outrageous" en el sentido literal de *Neer* no significa que cualquier error administrativo o irregularidad de derecho interno constituya una violación internacional.[1161] La jurisprudencia posterior mantiene un umbral elevado. Por ejemplo, *Glamis Gold*, *Thunderbird*, *Al Tamimi* y confirman que el nivel mínimo de trato impone una barrera extremadamente alta.[1162]

909. La decisión en *Red Eagle v. Colombia* confirma este enfoque en un contexto particularmente relevante: medidas mineras adoptadas para proteger el medio ambiente y otros intereses públicos. El tribunal observó que, al evaluar arbitrariedad, debe considerarse la dificultad real de la toma de decisiones gubernamentales frente a objetivos legítimos y presiones contrapuestas; diferencias entre órganos del Estado o cambios de dirección no convierten por sí solos las medidas en arbitrarias.[1163]

1159 Réplica, ¶¶ 888, 896.

1160 *Mondev International Ltd. v. United States of America*, ICSID Case No. ARB(AF)/99/2, Award, 11 October , 2002, ¶¶ 116, 119-120, 123. **RL-0016.**

1161 Réplica, ¶ 888.

1162 *Glamis Gold, Ltd. v. The United States of America*, UNCITRAL, Award, 8 June 2009, ¶ 616. **RL-0058**; *International Thunderbird Gaming Corp. c. los Estados Unidos Mexicanos*, CNUDMI, Laudo, 26 de enero de 2006, ¶ 194. **RL-0169;** *Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman*, ICSID Case No. ARB/11/33, Award, November 3, 2015, ¶ 390. **RL-0107**; *Neustar, Inc. and Vercara, LLC (formerly Security Services, LLC, formerly Neustar, Inc.) v. Republic of Colombia*, ICSID Case No. ARB/20/7, Award, 20 September 2024, ¶ 606. **RL-0170.**

1163 *Red Eagle Exploration Limited c. Colombia*, Caso CIADI No. ARB/18/12, Laudo, 28 de febrero 2024, ¶¶ 308-309. **RL-0052.**

910. La falta de prueba de la supuesta evolución del NMT también es fatal para el argumento de las Demandantes de que dicho estándar se habría vuelto materialmente indistinguible de las cláusulas autónomas de TJE. Esa pretendida equivalencia no puede establecerse mediante la mera repetición de conclusiones formuladas por tribunales bajo tratados distintos, sino que requeriría demostrar que las obligaciones adicionales reconocidas en esos laudos han adquirido carácter consuetudinario. Las Demandantes no han hecho tal demostración.

2. La pretendida equivalencia entre el NMT y el estándar autónomo de TJE es incorrecta

911. Las Demandantes sostienen que la diferencia entre el nivel mínimo de trato conforme al derecho internacional consuetudinario y las cláusulas autónomas de trato justo y equitativo es meramente formal. Para ello, se limitan a enumerar laudos que supuestamente habrían encontrado que ambos estándares no son materialmente diferentes, y destacan las decisiones en *Duke Energy v. Ecuador* y *ELA USA v. Estonia.*[1164] Ese argumento confunde la posible coincidencia entre los resultados alcanzados por ciertos tribunales con la identidad jurídica de dos obligaciones que tienen fuentes, textos y métodos de determinación distintos.

912. El Artículo 9.6 del TIPAT no contiene una obligación autónoma de TJE. Por el contrario, establece expresamente que el TJE se limita al nivel mínimo de trato de extranjeros conforme al derecho internacional consuetudinario, que no exige trato adicional o superior al requerido por ese estándar y que no crea derechos sustantivos adicionales.[1165] El Anexo 9-A precisa, además, que el contenido de ese estándar debe resultar de una práctica general y consistente de los Estados seguida por un sentido de obligación jurídica.[1166] Por tanto, no basta demostrar que determinados tribunales hayan empleado formulaciones similares al interpretar cláusulas autónomas de TJE; las Demandantes deben demostrar que las protecciones específicas que pretenden incorporar al Artículo 9.6 forman parte del derecho internacional consuetudinario.

913. *Mondev v. United States* confirma esta distinción. Al interpretar el Artículo 1105 del TLCAN —funcionalmente análogo al Artículo 9.6—, el tribunal explicó que la disposición remitía

---

1164 Réplica, ¶¶ 893-895.

1165 TIPAT, Artículo 9.6. **RL-0156.**

1166 TIPAT, Anexo 9-A. **RL-0156.**

a un estándar existente bajo el derecho internacional consuetudinario, y no a estándares establecidos en otros tratados. Añadió que, si las Partes hubieran pretendido incorporar por referencia obligaciones convencionales externas, habría sido necesaria una indicación clara en el texto.[1167] Lo mismo sostuvo el tribunal en *IC Power c. Peru*, el cual estableció que "the rationale of provisions of this type is to prevent an overbroad interpretation of the MST/FET, setting a higher threshold for a finding of breach than under an autonomous FET clause not tethered to customary international law."[1168] Por tanto, el Artículo 9.6 no autoriza al Tribunal a importar formulaciones desarrolladas bajo cláusulas autónomas de TJE ni a sustituir el consentimiento de las Partes por un estándar abstracto. Corresponde a las Demandantes demostrar que las obligaciones específicas que invocan han adquirido carácter consuetudinario.[1169] No lo han hecho.

914. Los casos invocados por las Demandantes no les asisten. *Deutsche Bank v. Sri Lanka, Rusoro Mining v. Venezuela, Rumeli v. Kazajistán, Duke Energy v. Ecuador* y *ELA USA v. Estonia* fueron decididos bajo instrumentos que no limitaban la obligación de TJE al derecho internacional consuetudinario.[1170] Ninguno autoriza a este Tribunal a prescindir de la limitación expresa contenida en el Artículo 9.6 y en el Anexo 9-A.

[1167] *Mondev International Ltd. v. United States of America*, ICSID Case No. ARB(AF)/99/2, October 11, 2002, ¶ 121. **RL-0016.**

[1168] *IC Power Ltd and Kenon Holdings Ltd v. Republic of Peru*, ICSID Case No. ARB/19/19, Laudo, 3 de octubre de 2023, ¶ 120. **CL-0128**.

[1169] *Glamis Gold v. United States of America*, (CNUDMI) Final Award, 8 June 2009, ¶¶ 600-603. **RL-0058**; *ADF Group Inc. v. United States of America*, ICSID Case No. ARB(AF)/00/1, Award, 9 January 2003, ¶ 185, **CL-0060**; *Cargill, Incorporated v. United Mexican States*, Caso CIADI No. ARB(AF)/05/2, Laudo, 18 de septiembre de 2009, ¶ 271-274. **CL-0012**; *United Parcel Services of Am. Inc. v. Canada*, UNCITRAL, Award, 24 May 2007, ¶¶ 84-86. **CL-0049**; Case concerning the Rights of Nationals of the United States of America in Morocco (France v. United States of America), [1952] I.J. Rec. 176, Judgment of August 27, 1952, p. 200, citing the case concerning the right of asylum (Colombia v. Peru), [1950] I.J. Rec. 276-277 ("The party invoking a custom of this nature must prove that it has been established in such a way that it has become binding on the other party.") **RL-0171**; Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), p. 12 ("In practice, the proponent of a custom has a burden of proof, the nature of which will vary according to the subject matter and the form of the pleadings.") **RL-0172.**

[1170] Germany-Sri Lanka BIT (2000) ("Article 2. Each Contracting State shall in its territory promote as far as possible investments by nationals or companies of the other Contracting State and admit such investments in accordance with its legislation. It shall in any case accord such investments fair and equitable treatment…."). **RL-0064**; TBI entre Canadá y Venezuela (1996) ("Cada Parte Contratante, de acuerdo con los principios del derecho internacional, acordará las Inversiones y a las ganancias de los inversores de la otra Parte Contratante un trato justo y equitativo y protección y seguridad..."). **RL-0065**; Kazakhstan -

915. La observación de un tribunal de que dos estándares son "esencialmente" similares o que su diferencia es "más percibida que material" constituye, a lo sumo, la conclusión interpretativa de ese tribunal respecto del tratado que tenía ante sí.[1171] No constituye práctica estatal ni *opinio juris*, ni puede modificar el alcance de una obligación convencional redactada deliberadamente en términos más restrictivos. Como se reconoció en *Glamis Gold*, "arbitral decisions that apply an autonomous standard provide no guidance inasmuch as the entire method of reasoning does not bear on an inquiry into custom."[1172]

916. *Duke Energy* no interpretó una cláusula equivalente al Artículo 9.6. El TBI Estados Unidos-Ecuador exigía TJE y añadía que las inversiones no recibirían, "en ningún caso," un trato inferior al exigido por el derecho internacional. A partir de esa redacción, el tribunal consideró que el lenguaje del tratado constituía "a floor and not a ceiling" y que uno de sus elementos era la existencia de un entorno jurídico y empresarial estable y predecible.[1173] Pero esa cláusula no decía —como sí lo hace el Artículo 9.6— que el TJE no exige trato adicional o superior al NMT y que no crea derechos sustantivos adicionales. Las Demandantes no pueden trasladar una formulación desarrollada bajo ese texto diferente para incorporar al TIPAT una obligación autónoma de estabilidad que sus Partes excluyeron expresamente.

Turkey BIT (1992) ("Each Party shall accord to these investments, once established, treatment no less favourable than that accorded in similar situations to investments of its investors or to investments of investors of any third country, whichever is the most favourable…"). **RL-0066**; USA-Ecuador BIT (1993) ("Investment shall at all times be accorded fair and equitable treatment, shall enjoy full protection and security and shall in no case be accorded treatment less than that required by international law.") **RL-0173**; USA-Estonia TBI ("Investment shall at all times be accorded fair and equitable treatment, shall enjoy full protection and security and shall in no case be accorded treatment less than required by international law.") **RL-0174.**

1171 Réplica, ¶¶ 894-895.

1172 *Glamis Gold v. United States of America* (CNUDCI) Final Award, 8 June 2009, ¶ 608. **RL-0058**; *Cargill, Incorporated v. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/05/2, Laudo, 18 de septiembre de 2009, ¶ 276. **CL-0012**. *Véase también Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia*, ICSID Case No. ARB/16/41, Partial Dissent of Professor Philippe Sands, 9 September 2021, ¶¶ 9-11 (explicando que el nivel mínimo de trato consuetudinario conserva una identidad autónoma y distinta de un estándar autónomo de TJE, y que su violación exige una conducta estatal verdaderamente excepcional o grave). **RL-0129.**

1173 *Duke Energy Electroquil Partners & Electroquil S.A. v. Republic of Ecuador*, ICSID Case No. ARB/04/19, Award, dated 18 August 2008, ¶¶ 333-339. **CL-0239**.

917. *ELA USA* tampoco demuestra la equivalencia alegada. Basado en el mismo lenguaje que el tratado en *Duke Energy*, el tribunal observó que otros tribunales habían considerado que el lenguaje del tratado "was merely intended as a floor" e interpretanando otros casos donde existía un TJE autónomo (*Rumelia* y *Azurix)* concluyo que no existía una diferencia material entre ambos estándares y adoptó esa posición en el contexto del TBI Estados Unidos-Estonia.[1174] Esta reiteración de conclusiones contenidas en laudos anteriores no demuestra que el derecho consuetudinario haya incorporado todas las protecciones reconocidas bajo cláusulas autónomas de TJE. Tampoco permite dejar sin efecto las palabras específicas elegidas por las Partes del TIPAT. La cuestión ante este Tribunal no es si algunos tribunales han considerado que ambos estándares pueden producir resultados semejantes, sino si las Demandantes han demostrado, mediante las fuentes pertinentes de la costumbre, que las obligaciones concretas que invocan forman parte del NMT. No lo han hecho. Importante, el tribunal acepto que el TJE test "is indeed reminiscent of the *Neer* standard."

918. La posición de las Demandantes produciría, además, un resultado interpretativo inadmisible. Si el NMT y el TJE autónomo fueran jurídicamente equivalentes, resultarían superfluas tanto la referencia expresa al derecho internacional consuetudinario como las aclaraciones de que el TJE no exige protección adicional y no crea derechos sustantivos adicionales. Su interpretación privaría de efecto útil a esas disposiciones y reemplazaría el estándar elegido por las Partes por las formulaciones más amplias desarrolladas bajo otros tratados. El Profesor Philippe Sands lo ha expresado de forma clara:

> En el pasado, algunos tribunales han intentado—de manera accidental o deliberada—equiparar o fusionar los estándares de NMT y TJE. Ambos estándares pueden compartir el objetivo común de imponer restricciones sobre la forma y el alcance en que el Estado debe tratar al inversionista extranjero en su territorio, pero lo hacen de manera diferente. El incumplimiento del estándar consuetudinario de NMT invariablemente daría lugar al incumplimiento del estándar de TJE, pero no suele ocurrir lo mismo a la inversa. Esto se debe a que el estándar de NMT establece una vara mucho más alta.
>
> […] El tribunal que fusione los dos términos, que aplique erróneamente un estándar (NMT) al aplicar las condiciones del otro (TJE), que no se cerciore de que el demandante haya cumplido con la carga de la prueba que le incumbe o que no dé efecto a las intenciones de los redactores corre el riesgo de adoptar un enfoque que podría considerarse una extralimitación manifiesta de sus facultades.

[1174] *ELA U.S.A., Inc. v. The Republic of Estonia*, PCA Case No. 2018-42, Award, 21 February 2025, ¶¶ 738-745.**CL-0240**.

> […] Si bien los procesos habituales de toma de decisiones del Estado pueden dar lugar a una violación del estándar de TJE, la violación del NMT no es un hecho cotidiano y solo debe declararse en circunstancias verdaderamente atroces.[1175]

919. En consecuencia, los argumentos de las Demandantes no refutan la posición de México. La posible convergencia práctica entre ambos estándares en determinadas circunstancias no elimina su diferencia jurídica ni releva a las Demandantes de probar el contenido del derecho internacional consuetudinario. El Tribunal debe aplicar el Artículo 9.6 conforme a sus propios términos, no convertirlo en una cláusula autónoma de TJE mediante la importación de estándares derivados de tratados distintos.

3. México no sostiene que las decisiones gubernamentales estén inmunes al control internacional

920. Las Demandantes tergiversan la posición de México. México no sostiene que las decisiones gubernamentales sean inmunes al control internacional ni que el Tribunal carezca de facultades para sancionar una conducta que efectivamente infrinja el Artículo 9.6.[1176] Su posición es más limitada y jurídicamente correcta: el Tribunal no debe sustituir el criterio de las autoridades nacionales, revisar *de novo* determinaciones técnicas o actuar como una instancia administrativa de apelación cuando las decisiones fueron adoptadas de buena fe, dentro de las competencias legales del Estado y sobre fundamentos razonables.[1177]

921. El propio pasaje de *TECO c. Guatemala* invocado por las Demandantes confirma ese punto al reconocer que un tribunal internacional no debe "second-guess" ni revisar decisiones adoptadas genuinamente y de buena fe en el ejercicio ordinario de potestades soberanas.[1178] La facultad del

---

1175 *Eco Oro Minerals Corp. c. República de Colombia*, Caso CIADI No. ARB/16/41, Opinión Disidente del Profesor Philippe Sands QC, 9 de septiembre de 2021, ¶¶ 7-10. **RL-0129**.

1176 Réplica, ¶¶ 898-899.

1177 Memorial de Contestación ¶¶ 588-589.

1178 *TECO Guatemala Holdings, LLC v. Republic of Guatemala*, ICSID Case No. ARB-10-23, Award, 19 December 2013, ¶ 493. **CL-0084**. Lo mismo ha sido reconocido por otros tribunales arbitrales incluyendo *B3 Croatian Courier Coöperatief U.A. v. Republic of Croatia*, ICSID Case No. ARB/15/5, Award, 5 April 2019 ¶ 944 ("The Tribunal considers that a certain level of deference is due to national agencies, tasked to regulate highly technical and specialized fields of economic activity (such as the CCA), with regard to their assessment of whether particular forms of conduct ran counter to the prescriptions of national law."). **RL-0175**; *Saluka Investments BV v. The Czech Republic*, PCA Case No. 2001-04, Partial Award, 17 March 2006, ¶¶ 272-273 (concluyendo que una decisión de una autoridad reguladora, adoptada en el ejercicio de sus competencias conforme al derecho interno, merece cierto grado de deferencia.) **RL-0061.**

Tribunal bajo el Tratado no elimina la deferencia; presupone que la conducta rebase el elevado umbral de arbitrariedad manifiesta, desprecio evidente de las normas aplicables o denegación sustancial del debido proceso. Las Demandantes no han demostrado que esto ocurrió en el presente caso.

922. *Parkerings v. Lithuania* tampoco respalda la formulación expansiva de las Demandantes. Además de interpretar una cláusula autónoma de TJE,[1179] ese tribunal reconoció expresamente el derecho soberano del Estado a modificar y aplicar su marco regulatorio.[1180] Su referencia a actuaciones "unfair," "unreasonable" o "inequitable" no convierte el Artículo 9.6 —expresamente limitado al NMT consuetudinario— en una revisión general de razonabilidad. Bajo el estándar aplicable aquí, no basta con que las Demandantes discrepen de la apreciación técnica de SEMARNAT o de la interpretación jurídica de Economía; deben demostrar con evidencia clara y convincente una conducta manifiestamente arbitraria y suficientemente grave para infringir el derecho internacional consuetudinario.[1181] México explicó precisamente que ese elevado umbral y el margen regulatorio son especialmente relevantes cuando las autoridades actúan en materias ambientales y de protección de derechos indígenas.[1182] Las Demandantes no lo han hecho.

923. Las Demandantes también malinterpretan los argumentos de México respecto del Artículo 9.16 del Tratado. México nunca sostuvo que esa disposición constituya una excepción absoluta o un "carve-out" que vuelva inaplicables las demás obligaciones del Capítulo 9.[1183] La expresión "otherwise consistent with this Chapter" confirma que las medidas regulatorias continúan sujetas al Tratado; pero ello no elimina la otra instrucción expresa de la disposición: que nada en el

---

1179 Lithuania-Norway BIT (1992) ("Each Contracting Party shall promote and encourage in its Territory investments of Investors of the other Contracting Party and accept such investments in accordance with its laws and regulations and accord them equitable and reasonable treatment and protection. Such investments shall be subject to the laws and regulations of the Contracting Party in the Territory of which the investments are made."). **RL-0176.**

1180 *Parkerings-Compagniet AS v. Republic of Lithuania*, ICSID Case No. ARB-05-8, Award, 11 September 2007, ¶ 332. **RL-0166**.

1181 *Saluka Investments BV v. The Czech Republic*, PCA Case No. 2001-04, Partial Award, 17 March 2006, ¶ 273 (concluyendo que "[i]n the absence of *clear and compelling evidence* that the CNB erred or acted otherwise improperly in reaching its decision … the Tribunal *must* in the circumstances accept the justification given by the [] regulator for its decision.") [énfasis añadido]. **RL-0061.**

1182 Memorial de Contestación ¶¶ 586-589.

1183 Réplica, ¶¶ 901-902.

Capítulo 9 debe interpretarse de manera que impida a una Parte adoptar, mantener o aplicar las medidas que considere apropiadas para que la actividad de inversión se desarrolle de forma sensible a objetivos ambientales, sanitarios u otros objetivos regulatorios.[1184] La interpretación de las Demandantes se concentra exclusivamente en la primera proposición e ignora la segunda, privando a la disposición de efecto útil.

924. El Artículo 9.16 cumple, por tanto, una función interpretativa. No inmuniza las medidas regulatorias frente al escrutinio del Tratado, pero exige que el Artículo 9.6 se aplique de manera compatible con el ámbito regulatorio expresamente preservado por las Partes. En consecuencia, la mera adopción de una medida que afecte una inversión para alcanzar objetivos ambientales o regulatorios no demuestra arbitrariedad; corresponde a las Demandantes acreditar que la medida carecía manifiestamente de fundamento, fue adoptada de mala fe o utilizó esos objetivos como pretexto. Aquí, el expediente demuestra lo contrario: la negativa de la MIA respondió a una evaluación ambiental que identificó deficiencias concretas, mientras que la Resolución de No Factibilidad fue emitida en cumplimiento de una sentencia vinculante de la Suprema Corte.

925. Las Demandantes repiten su teoría de una supuesta política antiminería, pero no demuestran ningún nexo causal entre esa supuesta campaña y las medidas impugnadas, todas las cuales fueron adoptadas en cumplimiento de objetivos regulatorios legítimos.[1185] La negativa de la MIA se apoyó en deficiencias técnicas y legales identificadas durante el PEIA; la actuación de Economía respondió a una sentencia vinculante de la Suprema Corte y a las deficiencias técnicas identificadas en las solicitudes de concesión. Las Demandantes no han demostrado con evidencia clara y convincente que alguna de esas decisiones fue tomada basada en la supuesta política antiminera. Sus "argumentos" se reducen a meras especulaciones que no sustituyen la prueba de que las razones técnicas y jurídicas consignadas en las resoluciones fueran ficticias. México ya explicó que las Demandantes no aportaron evidencia sustantiva que vincule la retórica política con las decisiones concretas de SEMARNAT o Economía.[1186]

926. La deferencia resulta particularmente pertinente aquí. SEMARNAT debía evaluar un proyecto minero a cielo abierto con implicaciones ambientales, hídricas y sociales complejas;

1184 Artículo 9.16 del TIPAT. **RL-0156.**

1185 Réplica, ¶ 904.

1186 Memorial de Contestación ¶¶ 710-711.

Economía debía ejecutar una sentencia constitucional que declaró insubsistentes las Concesiones y exigió pronunciarse nuevamente sobre su factibilidad. El Tribunal no debe sustituir esas evaluaciones salvo prueba clara de abuso manifiesto. No existe tal prueba.

4. Las Demandantes confunden factores relevantes para evaluar el NMT con obligaciones autónomas inexistentes

927. Las Demandantes tergiversan la posición de México al afirmar que pretende "deprive the standard of any meaning."[1187] México no sostiene que la arbitrariedad, la mala fe, falta de transparencia, discriminación, o las deficiencias procesales sean siempre irrelevantes para el análisis del Artículo 9.6. Su posición es que esos conceptos no constituyen, por sí solos y con el alcance amplio que proponen las Demandantes, obligaciones autónomas incorporadas al NMT.[1188] El Artículo 9.6.2 dispone expresamente que el TJE no exige un trato adicional o superior al requerido por el nivel mínimo consuetudinario. Por tanto, las Demandantes deben demostrar, mediante práctica estatal y *opinio juris*, tanto la existencia como el contenido de cada obligación específica que pretenden incorporar al estándar. El hecho de que ciertos laudos hayan considerado la consistencia, transparencia, proporcionalidad o buena fe bajo cláusulas autónomas de TJE no satisface esa carga.[1189]

a. No existe una prohibición general contra la conducta arbitraria en virtud del NMT

928. Las Demandantes sostienen que el uso de la conjunción "or" en *Waste Management II* demuestra que cualquier conducta calificable como arbitraria basta, por sí sola, para establecer una violación.[1190] Esa lectura aísla una palabra del contexto y elimina el umbral de gravedad que informa toda la formulación. *Waste Management II* se refirió a conducta "arbitrary, grossly unfair, unjust or idiosyncratic" y, en materia procesal, a una falta de debido proceso que conduzca a un resultado que ofenda la corrección jurídica, como un fracaso manifiesto de la justicia natural o una falta completa de transparencia e imparcialidad.[1191] La formulación describe conductas graves

---

1187 Réplica, ¶ 906.

1188 Memorial de Contestación ¶¶ 594-612.

1189 Réplica, ¶¶ 905, 935.

1190 Réplica, ¶ 908.

1191 *Waste Management v. United Mexican States (II)*, ICSID Case No. ARB(AF)/00/3, Award, 30 April 2004, ¶ 98. **CL-0035.**

consideradas en su contexto; no convierte cualquier error, inconsistencia o decisión administrativa discutible en una infracción internacional.

929. *Cargill* confirma esa distinción. El tribunal no reconoció una prohibición general de toda arbitrariedad, sino que exigió una conducta "arbitrary beyond a merely inconsistent or questionable application" de la política o del procedimiento administrativo, hasta el punto de constituir una repudiación inesperada y chocante de los fines de la política aplicable o una subversión grave del derecho interno por un motivo ulterior.[1192] Por tanto, la cuestión no es si las Demandantes pueden describir las decisiones de SEMARNAT o Economía como "arbitrarias," sino si han demostrado una conducta tan grave que exceda una aplicación meramente cuestionable del derecho. No lo han hecho. El propio tribunal en *TECO c. Guatemala,* citado por las Demandantes, afirma este umbral.[1193]

930. Tampoco basta invocar las categorías propuestas por el profesor Schreuer en su opinión pericial en *EDF v. Romania*.[1194] Esas categorías proceden de una opinión experta formulada en un caso regido por un texto convencional distinto; no constituyen prueba de práctica estatal ni *opinio juris*.[1195] La referencia de las Demandantes a *PACC Offshore Services Holdings c. México* es irrelevante.[1196] México no niega que estatales que resulten de "mass innteres group or electora pressure" o de "pressure from special or narrow interest groups" puedes evidenciar fluencia política.[1197] Lo que México niega es que aquí esto ocurrió. Las medidas impugnadas se sustentaron en normas ambientales y mineras, evaluaciones técnicas y decisiones judiciales vinculantes. Las Demandantes deben demostrar que la supuesta presión sustituyó esos fundamentos y determinó las decisiones por una finalidad impropia; no lo han hecho. Su afirmación conclusiva no basta.

1192 *Cargill, Inc. v. United Mexican States*, ICSID Case No. ARB(AF)/05/2, Award, 18 September 2009, ¶ 296. **CL-0012.**

1193 Réplica, ¶ 909; *TECO Guatemala Holdings, LLC v. Guatemala*, ICSID Case No. ARB-10-23, Award, 19 December 2013, at para. 465, **CL-0084**.

1194 Réplica, ¶ 910.

1195 Memorial de Contestación, ¶ 596.

1196 Réplica, ¶ 911. *Ver también* Memorial de Contestación, ¶¶ 650-654.

1197 *Pacc Offshore Services Holdings LTD v. United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT/18/5, Rejoinder on the Merits, 10 June 2020, ¶ 407. **CL-0073**.

931. Del mismo modo, *Odyssey* y *B-Mex* no ayudan a las Demandantes.[1198] Ambos casos, la conclusión dependió de *hallazgos probatorios* específicos de que la decisión había sido adoptada por razones ajenas al marco regulatorio y había excedido una aplicación meramente inconsistente o cuestionable de la ley.[1199] Aquí, las Demandantes deben demostrar, con evidencia concreta, que las razones técnicas y jurídicas expresadas por las autoridades fueron pretextuales; no basta identificar declaraciones políticas o contactos con organizaciones sociales y presumir que determinaron el resultado. No lo han hecho.

932. Aceptar los argumentos de las Demandantes en este caso,[1200] implicaría cometer los mismos errores que el profesor Vinuesa explico se cometieron en *B-MEX*. En ese caso, el profesor Vinuesa rechazó que el expediente demostrara que la actuación de la SEGOB hubiera estado impulsada por una predisposición política arbitraria.[1201] A su juicio, la mayoría extrajo inferencias insuficientemente sustentadas de declaraciones ambiguas y contradictorias de una de las testigos de los demandantes, ignoró que la insubsistencia de los permisos derivó de decisiones de los tribunales mexicanos y sustituyó indebidamente el criterio de la autoridad al especular sobre los cursos alternativos que la SEGOB "podría" haber seguido. El profesor Vinuesa concluyó que la mayoría incurrió en un ejercicio de "second-guessing" sin identificar una obligación jurídica que exigiera a la SEGOB preservar el negocio de las demandantes.[1202] Lo mismo haría este Tribunal al aceptar las especulaciones de las Demandantes.

1198 Réplica, ¶¶ 912-916. *Ver también* Memorial de Contestación, ¶¶ 597, 650-654.

1199 *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Final Award, 17 September 2024, ¶¶ 333-336, 387-388, 433-446. **CL-0134**; *B-Mex v. Mexico*, Final Award, dated 21 June 2024, ¶¶ 78-81, 92. **CL-0030**.

1200 Réplica, ¶ 917.

1201 *B-Mex, LLC Deana Anthone, Neil Ayervais, Douglas Black y otros c. Estados Unidos Mexicanos,* Caso CIADI No. ARB(AF)/16/3, Opinión disidente, 21 de junio de 2024, ¶ 25. **RL-0097**.

1202 *B-Mex, LLC Deana Anthone, Neil Ayervais, Douglas Black y otros c. Estados Unidos Mexicanos,* Caso CIADI No. ARB(AF)/16/3, Opinión disidente, 21 de junio de 2024, ¶¶ 26-32, 34-43, 72. **RL-0097**.

b. La buena fe no constituye una obligación independiente del NMT

933. Las Demandantes también confunden el valor interpretativo de la buena fe con la existencia de una obligación autónoma.[1203] México no sostiene que la buena fe sea ajena al derecho internacional; sostiene que no constituye una fuente independiente de responsabilidad cuando no se ha identificado previamente una obligación sustantiva aplicable. Como explicó la CIJ, la buena fe es un principio que rige la creación y el cumplimiento de obligaciones jurídicas, pero no constituye por sí misma una fuente de obligaciones.[1204] Por ello, las referencias en *Merrill & Ring, Abengoa* y *TECO* a la buena fe como principio general no eximen a las Demandantes de identificar la regla concreta del NMT supuestamente violada y demostrar su contenido consuetudinario.[1205]

934. La invocación de *Mesa Power* tampoco favorece a las Demandantes.[1206] Si bien ese tribunal consideró que *Waste Management II* identificaba correctamente el contenido del NMT, también rechazó expresamente la equiparación del estándar consuetudinario con las cláusulas autónomas de TJE, confirmó que no existe margen para incorporar obligaciones adicionales derivadas de otros tratados, reconoció que el umbral del Artículo 1105 es elevado y exigió un grado considerable de deferencia frente al ejercicio regulatorio estatal.[1207] Por tanto, *Mesa Power* no demuestra que la buena fe constituya una obligación autónoma del NMT; confirma, por el contrario, que cualquier elemento invocado debe permanecer dentro de los límites del estándar consuetudinario y no puede utilizarse para añadir obligaciones propias del TJE autónomo.

c. La transparencia y el debido proceso no imponen un régimen general de revisión administrativa

935. Las Demandantes invocan *Waste Management II* para sostener que México no puede negar una obligación general de transparencia y debido proceso.[1208] Pero ese laudo no reconoció un deber

---

1203 Réplica, ¶¶ 918-924.

1204 Memorial de Contestación, ¶ 598; *Case concerning Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras),* Jurisdiction and Admissibility, Judgment, [1988] I.C.J. Rep. 69, at 105-106, ¶ 94. **RL-0088**.

1205 Memorial de Contestación, ¶¶ 598-599.

1206 Réplica, ¶ 921.

1207 *Mesa Power Group LLC v. Government of Canada*, PCA Case No. 2012-17, Award, 24 March 2016, ¶¶ 501-507. **CL-0243**.

1208 Réplica, ¶ 927.

general de transparencia administrativa. Se refirió a una falta de debido proceso que podría ser producido por, entre otros, una falta *completa* de transparencia e imparcialidad.[1209] *Lopez-Goyne c. Nicaragua* confirma precisamente esta distinción. El tribunal concluyó que una "falta total de transparencia" puede constituir evidencia de una ausencia de debido proceso, pero rechazó que ello convierta la transparencia en una obligación autónoma del NMT.[1210]

936. La diferencia es sustantiva: una deficiencia extrema puede contribuir a demostrar una violación del debido proceso bajo el NMT; ello no significa que *toda* omisión de información, oportunidad limitada de participación o apartamiento de una práctica administrativa constituya, por sí sola, una violación internacional.

937. No asiste a las Demandantes citar *Tecmed*, *Cargill v. Polonia, Rumeli*, *Binder v. República Checa,* o *Murphy Exploration c. Ecuador* pues esas decisiones interpretaron textos convencionales distintos o cláusulas autónomas de TJE.[1211] Respecto de *Metalclad,* su formulación amplia de transparencia en fue anulada en la revisión judicial ante la Suprema Corte de Columbia Britanica, por lo cual también deber ser inaplicable al presente caso.[1212] El tribunal en *Lee-Chin c. República*

[1209] *Waste Management v. United Mexican States (II)*, ICSID Case No. ARB(AF)/00/3, Award, 30 April 2004, ¶ 98. **CL-0035.**

[1210] *The Lopez-Goyne Family Trust and others v. Republic of Nicaragua*, ICSID Case No. ARB/17/44, Award, 1 March 2023, ¶¶ 424-428. **RL-0177.**

[1211] *Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/00/2, Laudo, 29 de mayo de 2003, ¶ 155 (Al interpretar el Artículo 4 del TBI México-España, el tribunal afirmó que "the scope of the undertaking of fair and equitable treatment under Article 4(1) of the Agreement described above is that resulting from an autonomous interpretation…"). **CL-0033**; *Cargill, Incorporated v. Republic of Poland*, ICSID Case No. ARB(AF)/04/2, Final Award, 29 February 2008, ¶ 453 ("The wording of Article II:6 quoted above shows that the Contracting States intended to adopt an autonomous standard.") **CL-0056;** *Rumeli v. Kazakhstan*, interpretó el Kazakhstan - Turkey TBI (1992) ("Each Party shall accord to these investments, once established, treatment no less favourable than that accorded in similar situations to investments of its investors or to investments of investors of any third country, whichever is the most favourable…"). **RL-0066**; *Rupert Joseph Binder v. Czech Republic* interpretó el República Checa – Alemania TBI (1990) ("Each Contracting Party shall in its territory promote as far as possible investments by investors of the other Contracting Party, permitting such investments in accordance with its laws. It shall in all cases afford investments just and equitable treatment.") **RL-0213;** *Murphy c. Ecuador* interpretó Ecuador – Estados Unidos TBI ("Investment shall at all times be accorded fair and equitable treatment, shall enjoy full protection and security and shall in no case be accorded treatment less than that required by international law."). **RL-0173.**

[1212] *Marvin Feldman v. United Mexican States*, ICSID Case No. ARB(AF)/99/1, Award, 16 December 2002, ¶ 133 (The British Columbia Supreme Court held in its review of the Metalclad decision that Section A of Chapter 11, which establishes the obligations of host governments to foreign investors, *nowhere*

Dominicana especifico que sus hallazgos se limitaban al tratado especifico de ese caso, el cual difiere del presente.[1213]

938. México tampoco niega que el debido proceso sea relevante. Lo que rechaza es la equiparación entre cualquier irregularidad administrativa y una violación del estándar internacional. Las garantías descritas en *Glencore v. Colombia y Odyssey* deben leerse en el contexto de los tratados y hechos respectivos.[1214] Bajo el NMT, el Tribunal debe determinar si las Demandantes fueron privadas de una oportunidad real de presentar su posición o si la decisión fue adoptada mediante un procedimiento tan defectuoso que su resultado ofenda el decoro jurídico. El Artículo 9.6 no convierte al Tribunal en una instancia de revisión *de novo* de cada decisión procesal de SEMARNAT o Economía.

939. En otras palabras, la cuestión bajo el Artículo 9.6 no es si México actuó con la transparencia *ideal*, sino si existió una deficiencia procesal manifiesta y suficientemente grave para alcanzar el umbral del NMT. Dicha deficiencia no existió y las Demandantes no han podido demostrar lo contrario.

d. La consistencia, la no retroactividad y la proporcionalidad no son obligaciones autónomas

940. México reitera que no existen prohibiciones generales de conducta incoherente, toma de decisiones retroactives o medidas desproporcionadas en virtud del NMT.[1215] Que el tribunal en *Telefónica v. Colombia* se refiriera a un "duty not to act in a contradictory manner," o que *ADC v. Hungary* observara que numerosos sistemas jurídicos impiden a las partes "blowing hot and cold," no demuestra que exista una prohibición consuetudinaria general de toda conducta estatal inconsistente.[1216] Esos pronunciamientos pueden ser relevantes para caracterizar las medidas

mentions an obligation of transparency to such investors, and that a denial of transparency alone thus does not constitute a violation of Chapter 11) [Énfasis añadido]. **CL-0031**.

1213 *Michael Anthony Lee-Chin v. Dominican Republic*, ICSID Case No. UNCT/18/3, Final Award, 6 October 2023, ¶ 445 ("The Tribunal accepts that the applicable standard in this case – that is, Article IV of Annex III of the Treaty – also includes a certain obligation for the State to act transparently"). **CL-0234.**

1214 Réplica, ¶¶ 931-933.

1215 Memorial de Contestación, ¶ 609.

1216 Réplica, ¶ 936.

concretas adoptadas en un caso específico, pero no establecen el contenido del NMT del Artículo 9.6.

941. En todo caso, los gobiernos no están obligados a actuar de manera mecánica. Una autoridad gubernamental puede modificar su posición cuando cambian los hechos, el derecho aplicable o las decisiones judiciales que debe ejecutar. *IC Power c. Perú* confirma este punto. En ese caso, el tribunal rechazó que el NMT/FET imponga al Estado una obligación de garantizar un entorno jurídico y regulatorio estable y predecible,[1217] por lo que las autoridades públicas pueden modificar el marco regulatorio para responder a nuevas políticas y necesidades, incluso cuando esos cambios tengan consecuencias significativas para el inversionista.

942. En este caso, la actuación posterior de Economía no contradijo arbitrariamente las confirmaciones anteriores sobre las Concesiones: respondió a una sentencia de la Suprema Corte que ordenó dejar insubsistentes las Concesiones y someterlas nuevamente a revisión, tras lo cual la DG Minas las evaluó conforme al mismo estándar aplicable a las demás solicitudes de concesión determinando que no eran factibles. Para ello, DG Minas examinó el expediente original a fin de verificar si las solicitudes cumplían con los requisitos legales aplicables para el otorgamiento de las Concesiones, lo que, como se expone más adelante, no era el caso.[1218] Ese reexamen del expediente original no constituye, por sí solo, una aplicación retroactiva del derecho, como sostienen las Demandantes. Para demostrar una violación del NMT, las Demandantes deben acreditar una reversión caprichosa o una utilización retroactiva del derecho suficientemente grave para alcanzar el umbral de *Waste Management (II)* y *Cargill*, no simplemente que la decisión final difirió de posiciones administrativas anteriores.

943. La proporcionalidad tampoco constituye una obligación autónoma del NMT. El Artículo 9.6 no autoriza al Tribunal a decidir una reclamación de TJE basado únicamente en si México pudo adoptar una alternativa menos restrictiva. Las Demandantes deben demostrar que la medida carecía de toda relación razonable con un objetivo legítimo o imponía una carga manifiestamente excesiva por una finalidad impropia suficiente para alcanzar el elevado umbral del TJE. No lo han hecho. La mera existencia de opciones regulatorias distintas no satisface ese estándar.

1217 *IC Power Ltd and Kenon Holdings Ltd v. Republic of Peru*, ICSID Case No. ARB-19-19, Award, 3 October 2023, ¶¶ 313-315. **CL-0128.**

1218 *Ver* Secciones II.B.2.b., II.B.2.d. y II.C *supra*.

e. No existe una prohibición general de la discriminación en virtud del NMT

944. Finalmente, las Demandantes afirman que *Waste Management II* y *Cargill* reconocen una prohibición general de discriminación dentro del NMT.[1219] Esos laudos, sin embargo, no establecen que cualquier diferencia de trato constituya una violación autónoma. *Waste Management II* se refirió a un trato discriminatorio cuando el demandante está expuesto a prejuicio racial o sectario; *Cargill* examinó una política deliberadamente dirigida contra productores extranjeros y adoptada para alcanzar un objetivo ulterior ajeno a la medida.[1220] Esos contextos confirman que la discriminación debe ser manifiesta, injustificable y suficientemente grave para alcanzar el umbral internacional; no basta identificar resultados regulatorios distintos.

945. Además, el TIPAT contiene obligaciones específicas de trato nacional y nación más favorecida, con elementos y límites propios.[1221] Permitir que cualquier trato diferenciado se reformule como una violación del Artículo 9.6 eludiría esas disposiciones. Bajo el NMT, las Demandantes tendrían que demostrar, como mínimo, que inversionistas o proyectos en circunstancias materialmente comparables recibieron un trato más favorable y que la diferencia respondió a nacionalidad, prejuicio u otra finalidad manifiestamente impropia. La mera comparación con proyectos sujetos a condiciones ambientales, sociales, técnicas o procesales distintas no establece discriminación.

946. En suma, México no pretende vaciar de contenido el NMT, sino preservar la distinción que las Partes incorporaron expresamente en los Artículos 9.6: el estándar aplicable es el nivel mínimo de trato conforme al derecho internacional consuetudinario, no una cláusula autónoma que acumula todos los conceptos desarrollados por tribunales bajo tratados distintos. La arbitrariedad, la mala fe, las deficiencias procesales, la inconsistencia o la discriminación pueden ser relevantes cuando, consideradas en su contexto y debidamente probadas, revelan una conducta excepcionalmente grave. No constituyen, sin embargo, prohibiciones autónomas que permitan

---

1219 Réplica, ¶ 937.

1220 *Waste Management Inc. v. United Mexican States (II)*, ICSID Case No. ARB(AF)/00/3, Award, 30 April 2004, ¶ 98. **CL-0035;** *Cargill, Incorporated v. United Mexican States*, ICSID Case No. ARB(AF)/05/2, Award, 18 September 2009, ¶¶ 219-220. **CL-0012**.

1221 TIPAT, Artículos 9.4 y 9.5. **RL-0156.**

internacionalizar cualquier desacuerdo con una decisión regulatoria. Esa es la distinción que las Demandantes intentan borrar en su Réplica.

5. Las alegaciones sobre supuestas motivaciones políticas no demuestran una violación del estándar de TJE

947. Las Demandantes intentan atribuir las medidas impugnadas a una supuesta política contraria a la minería.[1222] Sin embargo, no identifican prueba alguna de que esos factores hayan determinado la negativa de la MIA o de la Resolución de no Factibilidad. En ausencia de ese nexo causal, el contexto político general que invocan no demuestra que las razones jurídicas, técnicas y ambientales expuestas por las autoridades fueran meramente pretextuales ni, por tanto, permite establecer una violación del estándar de TJE

948. Las Demandantes pretenden suplir esa carencia probatoria mediante su invocación del laudo en *Odyssey c. México*.[1223] Sin embargo, las circunstancias excepcionales examinadas en *Odyssey* confirman la necesidad de demostrar mediante pruebas concretas que las consideraciones políticas alegadas determinaron efectivamente las medidas impugnadas.

949. En *Odyssey*, la mayoría determinó que el estándar TJE no impide a los Estados adoptar decisiones estratégicas, que una infracción del derecho interno no constituye por sí sola arbitrariedad y que los tribunales de inversión no pueden actuar como instancias de apelación de las autoridades administrativas especializadas.[1224] La conducta impugnada debe ser grave, flagrante y manifiesta. No puede consistir simplemente en una aplicación cuestionable de la política pública o en irregularidades administrativas.[1225]

950. *Odyssey* no establece que la existencia de un contexto político desfavorable sea suficiente para demostrar una violación del TJE. La mayoría concluyó que una decisión puede ser gravemente arbitraria cuando las razones oficiales son meramente pretextuales y la medida obedece, en realidad, a consideraciones ajenas a los criterios técnicos, científicos y objetivos que

---

1222 Réplica, ¶¶ 7, 914, 951, 999.

1223 Réplica, ¶¶ 913-915.

1224 *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶¶ 305–311, 334. **CL-0134**.

1225 *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶¶ 321–324. **CL-0134**.

la autoridad debía aplicar.[1226] Esa conclusión exige pruebas concretas de que la justificación oficial no fue la verdadera razón de la medida.

951. La propia divergencia dentro del tribunal en *Odyssey* confirma la necesidad de examinar rigurosamente esa prueba. En su opinión disidente, el Profesor Sands advirtió que concluir que un Estado actuó por razones distintas de las declaradas "is a most serious charge"; por ello, el tribunal debe examinar cuidadosamente la plausibilidad de la justificación oficial, el expediente técnico y las explicaciones alternativas. También enfatizó que la especulación sobre los motivos de una autoridad no puede sustentar una conclusión fáctica o jurídica.[1227] Estas cautelas tienen especial relevancia aquí, donde las Demandantes pretenden sustituir la ausencia de prueba directa mediante referencias a un contexto político general.

952. A diferencia de este caso, en *Odyssey* la mayoría encontró un conjunto acumulativo de pruebas que sustentaban la conclusión de que la actuación del Secretario Pacchiano obedeció a intereses personales: (i) el testimonio directo de dos exfuncionarios que afirmaron haber recibido instrucciones de rechazar el proyecto; (ii) la conclusión de que el funcionario acusado carecía de credibilidad; (iii) una sentencia del TFJA que identificó graves deficiencias y la ausencia de fundamentos científicos objetivos en la primera decisión; (iv) el rechazo arbitrario de pruebas técnicas aportadas por el inversionista; y (v) evidencia de que SEMARNAT estaba decidida a rechazar nuevamente el proyecto después de que la primera decisión fuera anulada.[1228] Sobre esa base, la mayoría concluyó que, de no haber mediado la instrucción externa, la DGIRA habría aprobado el proyecto, aunque sujeto a condiciones.[1229]

953. Aquí, las Demandantes no presentan evidencia comparable respecto del Proyecto Ixtaca. No identifican una instrucción política dirigida a SEMARNAT o Economía para producir un resultado predeterminado; tampoco presentan testimonios directos de los funcionarios responsables, documentos contemporáneos que revelen una "orden oculta" o evidencia de que las

---

1226 *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶¶ 433-437. **CL-0134**.

1227 *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Dissenting Opinion of Professor Philippe Sands KC, 17 September 2024, ¶¶ 18–20, 42. **RL-0214.**

1228 *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶¶ 433–435. **CL-0134**.

1229 *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶¶ 333, 436. **CL-0134**.

autoridades abandonaron una conclusión técnica favorable para cumplir una instrucción política. Sus alegaciones dependen, en cambio, de inferencias construidas a partir de declaraciones generales y de una narrativa política que no establece vínculo alguno con las razones consignadas en las medidas concretas. Por el contrario, el expediente demuestra que la Denegación del MIA y la Resolución de No Factibilidad respondieron a consideraciones jurídicas, ambientales y sociales concretas.[1230] La existencia de estos fundamentos independientes impide inferir que una supuesta política antiminera fue la razón real y determinante de las medidas.

954. En suma, las Demandantes no han demostrado que las consideraciones políticas que invocan hayan determinado las medidas impugnadas ni que las razones expuestas por las autoridades mexicanas fueran pretextuales. Sus alegaciones, basadas en declaraciones generales y en el contexto político, no desvirtúan los fundamentos jurídicos, ambientales y sociales de esas medidas ni acreditan una conducta que alcance el elevado umbral de arbitrariedad exigido por el estándar mínimo de trato. Por consiguiente, no permiten establecer una violación del Artículo 9.6 del TIPAT.

6. La falta de utilización de los recursos internos impide a las Demandantes demostrar que las medidas controvertidas violaron el Artículo 9.6

955. Las Demandantes tergiversan el alcance de la objeción de México al reducirla a una condición jurisdiccional general.[1231] El punto aquí es que la disponibilidad y falta de utilización de mecanismos administrativos y judiciales eficaces son relevantes para determinar si las medidas impugnadas adquirieron el carácter definitivo y la gravedad necesarios para constituir una violación del Artículo 9.6. El Artículo 26 del Convenio CIADI y la renuncia prevista en el Artículo 9.21 del TIPAT regulan el acceso al arbitraje y la coexistencia de procedimientos; no vuelven irrelevante que el inversionista haya omitido solicitar la corrección de una decisión administrativa antes de presentarla como un ilícito internacional consumado.[1232]

1230 Ver *supra* Sección II.F (deficiencias técnicas y ambientales de la MIA) y Sección II.C (Resolución de No Factibilidad y deficiencias en trabajos periciales).

1231 Réplica, ¶¶ 938-943.

1232 Demirkol, Berk. *Judicial Acts and Investment Treaty Arbitration*, Cambridge University Press, 2018, pp. 80-81, ("The non-compliance with the substantive condition to resort to further remedies [] makes an internationally wrongful act inchoate or incomplete. At this stage, the host state would not be committing

956. Esta distinción fue reconocida expresamente en *Waste Management II*. Aunque el tribunal confirmó que el TLCAN dispensaba el agotamiento como requisito procesal, sostuvo que "the availability of local remedies" seguía siendo relevante para determinar si el Estado había cumplido el Artículo 1105. De otro modo, el arbitraje de inversión se convertiría en un mecanismo de primera instancia para revisar incumplimientos contractuales o administrativos que el sistema nacional todavía podía corregir.[1233] En consecuencia, la proposición de las Demandantes de que los recursos internos solo importan en reclamaciones formalmente denominadas "denegación de justicia" es demasiado amplia.

957. *Generation Ukraine* confirma el mismo principio fuera del contexto de la denegación de justicia. Ese tribunal distinguió entre un requisito formal de agotamiento y la necesidad sustantiva de que el inversionista realice un esfuerzo razonable para obtener la corrección de una supuesta irregularidad administrativa. En ausencia de tal esfuerzo, explicó, puede resultar dudosa "the very reality" de la violación internacional alegada.[1234] El inversionista no puede limitarse a identificar una supuesta irregularidad administrativa, abstenerse de utilizar los mecanismos razonablemente disponibles para obtener su corrección y sostener, sin más, que esa irregularidad constituye por sí sola un ilícito internacional.

958. Contrario a lo que afirma las Demandantes, la relevancia en el agotamiento de recursos internos no solo es necesario para denegación de justicia.[1235] Tal como lo estableció Dr. Berk Demirkol, para que exista una perfección de una violación del TJE, se necista que "objections, complaints, appeals" con las autoridades relevantes se hayan realizado. Esto es porque "availability and operation of these remedies constitutes part of the treatment the state is obliged to accord." Por ende, "[w]hen an investor fails to complain of a state organ's misconduct, it would

---

a breach of its international obligations… in the context of investment treaty arbitration [] it is important to distinguish the procedural rule from the substantive requirement to resort to local remedies. Indeed, whether or not local remedies have been resorted to or exhausted by the investor may be of account in this context to the extent that it is a substantive requirement for the emergence of the particular wrongful act.") **RL-0180.**

1233 *Waste Management v. United Mexican States (II)*, ICSID Case No. ARB(AF)/00/3, Award, 30 April 2004, ¶ 116. **CL-0035.**

1234 *Generation Ukraine Inc. v. Ukraine*, ICSID Case No. ARB/00/9, Award, 16 September 2003, ¶ 20.30. **RL-0165.**

1235 Réplica, ¶ 939.

not be able to demonstrate that the state has unfairly denied its right to a properly functioning system presenting adequate remedies." En suma, "[b]y depriving the state to accord a certain treatment, the investor itself averts the state to commit a breach of the standard."[1236] La propia jurisprudencia citada por las Demandantes afirma esta posición.[1237]

959. Las decisiones invocadas por las Demandantes no contradicen ese principio. *Arif* y *Gavrilović* sostienen que no existe una obligación general y procesal de agotar los recursos internos antes de iniciar un arbitraje CIADI, salvo que el tratado lo exija o la reclamación sea por denegación de justicia.[1238] No sostienen que la disponibilidad y utilización de esos recursos sea irrelevante al decidir si una medida administrativa fue definitiva, incorregible o suficientemente grave para violar el tratado. Ademas, la aserción de que "*al lof* the legal authorities Mexico relies upon for this defesnse relate to denia of justice claims"[1239] es incorrecta. Como se evidencia en el Memorial de Contestación, dichas autoridades plenamente respaldan que el agotamiento de los remedios locales es un elemento sustancial requerido para comprar una violación del TJE.[1240]

1236 Demirkol, Berk. *Judicial Acts and Investment Treaty Arbitration*, Cambridge University Press, 2018, p. 107. **RL-0180.** *Ver tambien Ascom Group S.A., Anatolie Stati, Gabriel Stati and Terra Raf Trans Traiding Ltd. v. Republic of Kazakhstan (I),* SCC Case No. 116/2010, Award, 19 December 213, ¶ 1092 (considerando la disponibilidad de recursos internos antes de concluir que el estado había violado el TJE). **RL-0181.**

1237 *Parkerings-Compagniet AS v. Republic of Lithuania,* ICSD Case No. ARB/05/08, Award, 11 September 2007, ¶ 319 ("[E]ven supposing that the Agreement has been wrongfully terminated, the Claimant failed to show that the right of BP to complain of the breach of the Agreement has been denied by the Republic of Lithuania and thus that its own investment was actually not accorded, by the Respondent, an equitable and reasonable treatment in such circumstances.") **RL-0166.**

1238 *Franck Charles Arif v Republic of Moldova*, ICSID Case No ARB/11/23, Award, April, 2013, ¶¶ 333-334. **CL-0251**; *Gavrilović and Gavrilović d.o.o. v. Republic of Croatia*, ICSID Case No. ARB/12/39, Award, 26 July 2018, ¶ 889. **CL-0248**.

1239 Réplica, ¶ 943.

1240 *Krederi Ltd. v. Ukraine*, ICSID Case No. ARB/14/17, Award, 2 July 2018, ¶ 475 ("[E]xhaustion of local remedies is a required substantive element of a claim for denial of justice or breach of fair and equitable treatment."). **RL-0075**; *Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company v. the Republic of Ecuador (I),* PCA Case No. 2007-02/AA277, Interim Award, December 1, 2008, ¶ 233 ("This exhaustion requirement can be viewed as a necessary element both for a denial of justice under customary international law and for the breach of a substantive BIT obligation such as 'fair and equitable treatment'). **RL-0076;** *ECE v. Czech Republic*, PCA Case No. 2010-05, Final Award, September 19, 2013, ¶ 4.805 ("The purpose of due process is however while enabling the decision-maker to exercise its administrative or judicial powers, to see to it that that is done in a manner which is fair to the interests of an investor; it follows that there can be no violation of fair and equitable treatment in a flawed decision at first instance which is subsequently reversed on appeal, and the effects of which were therefore only temporary."). **RL-0078**.

960. Tampoco existe incompatibilidad entre este principio y la renuncia prevista en el Artículo 9.21 del TIPAT.[1241] Esa disposición exige abandonar procedimientos relacionados con la medida cuando se somete la reclamación al arbitraje; no obliga al inversionista a iniciar el arbitraje antes de que la autoridad nacional competente haya tenido una oportunidad razonable de corregir la medida. Las Demandantes podían utilizar los recursos disponibles y, antes de presentar su reclamación bajo el TIPAT, desistir de los procedimientos conforme a la renuncia. De hecho, eso es precisamente lo que hicieron respecto de las concesiones: iniciaron procedimientos de nulidad, pero los abandonaron deliberadamente antes de que concluyeran.

961. La falta de impugnación de la negativa de la MIA es especialmente relevante porque las Demandantes solicitan que este Tribunal actúe como autoridad revisora de cuestiones técnicas y jurídicas que nunca sometieron a los órganos mexicanos competentes. Alegan que SEMARNAT aplicó incorrectamente el principio precautorio, exigió certeza científica absoluta, evaluó deficientemente la información ambiental y debió permitir que subsanaran ciertas insuficiencias.[1242] Esas son precisamente cuestiones que podían plantearse mediante los recursos administrativos y judiciales disponibles. Al abstenerse de hacerlo, las Demandantes privaron al sistema mexicano de la oportunidad de confirmar, aclarar o corregir la decisión y ahora pretenden que el Tribunal determine en primera instancia si SEMARNAT aplicó correctamente el derecho ambiental mexicano. El NMT no convierte a un tribunal internacional en una jurisdicción administrativa supranacional.

962. Su alegación de futilidad tampoco satisface el umbral aplicable.[1243] La futilidad no se demuestra mediante la convicción *subjetiva* de que el recurso probablemente fracasaría ni mediante declaraciones políticas generales. Debe acreditarse que el recurso era efectivamente

---

Frontier Petroleum Services Ltd. v. *The Czech Republic*, PCA, Final Award, IIC 465 (2010), November 12, 2010, ¶ 293 ("[t]he fair and equitable treatment standard has been found on several occasions to encompass the notion of a denial of justice which, in turn, implies the requirement to exhaust local remedies."). **RL-0079**; August Reinisch, Christoph H. Schreuer, *Fair and Equitable Treatment*, in August Reinisch and Christoph H. Schreuer, *International Protection of Investment*, ¶ 666 ("[The] international law requirement to 'exhaust local remedies' before an international claim may be brought [and] is sometimes raised as a defence not only to investment claims in general, but more specifically to claims alleging a violation of FET as a result of due process breaches."). **RL-0080.**

1241 Réplica, ¶ 942.

1242 Réplica, ¶¶ 372-448, 944, 959-969.

1243 Réplica, ¶¶ 944-945.

inaccesible o manifiestamente incapaz de ofrecer una reparación significativa.[1244] La nota atribuida a la Sra. Beatriz Mariquez, en la que supuestamente habría afirmado que las solicitudes de MIA no serían revisadas, la especulación de las Demandantes de que SEMARNAT "movería los postes" para rechazarla y la desconfianza general hacia el entorno político no demuestran que los recursos administrativos o judiciales fueran inútiles.[1245]

963. Lo mismo ocurre con la Resolución de No Factibilidad. Minera Gorrión y Minera Gavilán promovieron precisamente el procedimiento disponible para obtener una decisión sobre su legalidad. El 30 de marzo de 2023 iniciaron ante el TFJA un Juicio de Nulidad en el que formularon sustancialmente las mismas objeciones que ahora plantean ante este Tribunal, incluyendo que Economía evaluó incorrectamente los aspectos técnicos de las solicitudes originales y que debió permitirles subsanar las deficiencias identificadas. El procedimiento podía conducir a la nulidad de la Resolución de No Factibilidad o a la reposición del procedimiento administrativo y, de hecho, el TFJA concedió una suspensión definitiva que impedía la declaratoria de libertad de los terrenos mientras se resolvía el fondo.[1246]

964. A pesar de ello, las Demandantes abandonaron el Juicio de Nulidad antes de que el TFJA pudiera pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución de No Factibilidad.[1247] Las Demandantes sostienen que decidieron desistirse de este Juicio debido a su supuesta falta de confianza en el sistema jurídico mexicano y optar por este arbitraje.[1248] Sin embargo, no identifican ninguna razón

---

1244 *Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States of America*, ICSID Case No. ARB(AF)/98/3, Award, 26 June 2003, ¶¶ 169-170. ("Availability is not a standard to be determined or applied in the abstract. It means reasonably available to the complainant in the light of its situation, including its financial and economic circumstances as a foreign investor, as they are affected by any conditions relating to the exercise of any local remedy. If a State attaches conditions to a right of appeal which render exercise of the right impractical, the exercise of the right is neither available nor effective nor adequate. Likewise, if a State burdens the exercise of the right directly or indirectly so as to expose the complainant to severe financial consequences, it may well be that the State has by its own actions disabled the complainant from affording the State the opportunity of redressing the matter of complaint. The scope of the need to exhaust local remedies must be considered in the light of these considerations.") **CL-0034**; *Apotex Inc. v. United States of America*, ICSID Case No. UNCT/10/2, Award on Jurisdiction and Admissibility, June 14, 2013, ¶¶ 268, 284. **RL-0015**.

1245 Réplica, ¶¶ 944-945.

1246 Memorial de Contestación, ¶¶ 427–431.

1247 Memorial de Contestación, ¶ 432.

1248 Réplica, ¶¶ 667-668.

objetiva que demuestre que el Juicio de Nulidad era inaccesible, ineficaz o incapaz de ofrecer una reparación efectiva.[1249] Que el desistimiento haya sido recomendado por sus abogados o considerado necesario para cumplir con la renuncia prevista en el TIPAT explica, a lo sumo, su estrategia procesal, pero no demuestra que el recurso fuera inútil.

965. En efecto no se trataba de un recurso meramente fútil. El TFJA admitió la demanda el 3 de agosto de 2023 y, ese mismo día, suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución de No Factibilidad para impedir que DG Minas publicara la declaratoria de libertad de terreno. El 3 de octubre de 2023, esa protección fue confirmada mediante una suspensión definitiva.[1250] Pese a contar con una vía que había demostrado ser accesible y capaz de otorgarles protección efectiva, Minera Gorrión y Minera Gavilán se desistieron voluntariamente del juicio en junio de 2024, antes de obtener una decisión sobre el fondo.

966. En suma, las Demandantes no pueden demostrar arbitrariedad manifiesta, falta grave de debido proceso o una privación definitiva cuando: (i) no impugnaron la negativa de la MIA; (ii) abandonaron voluntariamente el procedimiento que podía revisar el Oficio de febrero de 2023; y (iii) no han probado que esos recursos fueran manifiestamente ineficaces. Esa omisión no impide formalmente el acceso al arbitraje, pero sí impide transformar decisiones administrativas susceptibles de corrección en violaciones consumadas del Artículo 9.6.

7. La conducta de México no infringió el NMT

967. Las Demandantes vuelven a argumentar que la decisión de la SEMARNAT de denegar la MIA y la decisión separada de Economía de "cancelar" las Concesiones mineras fueron basadas en pretextos e infringieron el estándar de TJE del TIPAT.[1251] Sin embargo, tal como México argumento en su Memorial de Contestación, estas alegaciones carecen de fundamento porque las decisiones adoptadas por la SEMARNAT y Economía se adoptaron en estricta conformidad con la legislación mexicana, las instrucciones de la Suprema Corte, y de conformidad con la discrecionalidad otorgada a la SEMARNAT y Economía en virtud de la ley.[1252] Nada en la Réplica

1249 Réplica, ¶ 945.

1250 *Ver supra* Sección II.D.

1251 Réplica, Sección 4.2.3.

1252 Memorial de Contestación, ¶ 613.

demuestra que las conducta de SEMARNAT o Economía violentaran el TJE, estándar establecido en *Waste Management (II).*

968. El desarrollo de los hechos desmiente la premisa de una actuación estatal coordinada dirigida a alcanzar un resultado predeterminado. La negativa de la MIA, en diciembre de 2020, fue adoptada por SEMARNAT dentro de un procedimiento de evaluación ambiental y respondió a deficiencias identificadas en la información técnica presentada por Minera Gorrión. La insubsistencia de las Concesiones, en junio de 2022, derivó de una sentencia de la Suprema Corte dictada en un litigio constitucional iniciado en 2015 por Tecoltemic; y la Resolución de No Factibilidad, de febrero de 2023, fue emitida por Economía en cumplimiento del segundo efecto de esa sentencia. Se trató, por tanto, de decisiones adoptadas por autoridades distintas, en procedimientos diferentes y sobre fundamentos jurídicos y técnicos propios. La mera sucesión de resultados adversos para las Demandantes no demuestra que esas decisiones formaran parte de una campaña política común.

a. La suspensión y la negativa de la MIA respondieron a razones jurídicas, técnicas y ambientales, no a una instrucción política

969. Las Demandantes no subsanaron el defecto central de su reclamación: no existe un nexo causal entre, por un lado, las declaraciones políticas generales y la supuesta campaña antiminería y, por otro, las medidas impugnadas. Para demostrar que la suspensión y la negativa de la MIA fueron pretextuales, las Demandantes debían probar que esos supuestos sentimientos antiminería constituyeron las razones reales de las decisiones y que su resultado obedeció a una instrucción política, y no a las consideraciones jurídicas, ambientales y sociales expresadas en el expediente. No lo hacen. La existencia de una política gubernamental restrictiva frente a nuevas minas a cielo abierto,[1253] aun si se aceptara, no demuestra que la evaluación particular del Proyecto Ixtaca fuera ficticia ni desplaza la extensa evidencia contemporánea sobre sus deficiencias técnicas.

(1) La suspensión de la evaluación de la MIA no fue pretextual

[1253] Réplica, ¶¶ 6, 272.

970. Las Demandantes sostienen que la suspensión carecía de fundamento porque la medida cautelar del Amparo 445/2015 protegía únicamente los derechos agrarios de Tecoltemi y porque la evaluación ambiental no podía afectar esos derechos.[1254] Esa lectura ignora la información disponible para la DGIRA en ese momento. El amparo impugnaba directamente la constitucionalidad de las Concesiones que sustentaban el Proyecto y Tecoltemi había solicitado la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados y de "todo acto derivado de las concesiones mineras".[1255] Ante ese lenguaje amplio y la conexión evidente entre las Concesiones, la eventual explotación y la MIA, la SEMARNAT actuó razonablemente al solicitar al Juzgado que aclarara el alcance de la suspensión antes de continuar.[1256]

971. Tampoco es decisivo que la SEMARNAT no hubiera sido designada formalmente como autoridad responsable en el amparo, como alegan las Demandantes.[1257] La suspensión no se adoptó porque la SEMARNAT hubiera asumido que estaba inequívocamente vinculada como parte procesal, sino porque debía determinar si continuar un procedimiento ambiental directamente relacionado con las Concesiones podía afectar el *statu quo*, interferir con la protección judicial de derechos indígenas o producir una autorización que quedara posteriormente sin sustento. La obligación constitucional de la SEMARNAT de proteger el medio ambiente y garantizar los derechos de las comunidades indígenas no desaparecía por no figurar como autoridad responsable en ese litigio.[1258] La consulta al Juzgado fue, por tanto, una medida de coordinación y prudencia institucional, no un pretexto.

1254 Réplica, ¶¶ 948, 950.

1255 Recurso de amparo indirecto interpuesto por la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemic y el Ejido de Tecoltemic (Sexto Distrito Judicial de la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla), con fecha 7 de abril de 2015, p. 40 ("Con fundamento en el Artículo 125 y 126 tercer párrafo de la Ley de Amparo, solicitamos a su Señoría la SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO de los actos reclamados, *así como de todo acto derivado de las concesiones mineras y* en ejecución o materialización de las mismas, tales como la exploración y la explotación; y que tienen y pueden tener por efecto, privarnos del uso, aprovechamiento, posesión y propiedad de la tierra y territorio de nuestra Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemic, y el Ejido que forma parte de ella"). [Énfasis añadido]. **C-0032**.

1256 Memorial de Contestación, ¶¶ 617-621.

1257 Réplica, ¶ 949.

1258 Memorial de Contestación, ¶¶ 617-621.

972. Las Demandantes razonan que, como el Juzgado concluyó en septiembre de 2020 que la DGIRA podía resolver el PEIA, nunca existió una incertidumbre jurídica genuina.[1259] Pero la aclaración judicial era precisamente la respuesta a la incertidumbre que motivó la consulta. Una autoridad no actúa arbitrariamente por solicitar confirmación judicial cuando existe una medida cautelar formulada en términos suficientemente amplios como para generar dudas sobre sus efectos.[1260]

973. La cronología tampoco prueba que la SEMARNAT suspendiera el procedimiento de manera pretextual "to buy time".[1261] La DGIRA debía consultar primero con sus áreas jurídicas y formular su petición al Juzgado. El propio experto de las Demandantes considera "altamente probable" que la DGIRA esperara una opinión de la UCAJ debido a la naturaleza jurídica del asunto antes de remitir una comunicación al juez de amparo.[1262] Esa secuencia es compatible con una deliberación jurídica interna seguida de una consulta judicial, no con la fabricación de una justificación política.

974. No es cierto que México "elides" la evidencia de notificación de la suspensión.[1263] La SEMARNAT sí notificó formalmente a Minera Gorrión la suspensión del PEIA: la resolución fue emitida el 23 de octubre de 2019 y notificada a su representante legal el 29 de octubre, dentro del plazo de diez días permitido por el Artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.[1264] Asimismo, la comunicación de 31 de octubre de 2019, mediante la cual la SEMARNAT reiteró la suspensión, fue notificada al día siguiente. El hecho de que Minera Gorrión hubiera advertido previamente una anotación en SINAT no demuestra ocultamiento, falta de transparencia ni indefensión.[1265]

975. Tampoco puede equipararse la notificación posterior del oficio de 21 de febrero de 2020 con una ausencia de actuación. En ese oficio, la DGIRA informó que no resolvería la solicitud de

---

1259 Réplica, ¶¶ 949, 953-954.

1260 Memorial de Contestación, ¶¶ 620-624.

1261 Réplica, ¶¶ 951 y 955.

1262 Segundo Informe del Sr. Limón Aguirre, ¶ 79.

1263 Réplica, ¶¶ 952-953.

1264 Memorial de Contestación, ¶ 622.

1265 Memorial de Contestación, ¶¶ 258-261, 622-623.

reanudación hasta que el Juzgado 2º de Distrito aclarara si la continuación del PEIA era compatible con la suspensión del Amparo 445/2015.[1266] Ello demuestra continuidad y congruencia en la actuación de la SEMARNAT. La afirmación de que el oficio "parece" antedatado es meramente especulativa y no se apoya en alteraciones, inconsistencias materiales ni otra prueba de fabricación o mala fe.[1267] En estas circunstancias, el cumplimiento de las formalidades procesales internas descarta cualquier abuso procesal de la gravedad necesaria para infringir el NMT.

976. Las Demandantes también omiten el efecto de la pandemia. Entre marzo y agosto de 2020 se suspendieron los plazos y labores de la SEMARNAT y del Poder Judicial Federal. La DGIRA consultó al Juzgado 2º de Distrito si la reanudación del PEIA afectaba la Suspensión otorgada en el Amparo 445/2015 en febrero de 2020.[1268] Sin embargo, la DGIRA no obtuvo una respuesta judicial hasta septiembre de 2020. Por tanto, el tiempo transcurrido no demuestra que la suspensión se utilizara para "comprar tiempo"; corresponde, en gran medida, a una interrupción general de las actividades administrativas y judiciales.[1269]

977. Las Demandantes también exageran la relevancia de la fecha de reactivación electrónica del expediente. Según la Réplica, la asignación del asunto a un nuevo evaluador el 17 de diciembre de 2020 demostraría que éste revisó más de 3,200 páginas y decidió la MIA en cuestión de horas.[1270] Esa inferencia confunde la modificación administrativa del *estatus* del expediente con el *análisis* sustantivo acumulado durante el PEIA. Para entonces, la DGIRA ya había revisado la MIA, formulado un requerimiento de información adicional, conducido la Consulta Pública y recabado opiniones técnicas e interinstitucionales sobre agua, residuos mineros, biodiversidad, uso de suelo y comunidades indígenas.[1271] La reactivación o reasignación del expediente no demuestra que el análisis técnico comenzara y concluyera ese mismo día.

1266 Oficio No. GPA/DGIRA/DG/01596, 21 de febrero de 2020. **C-0334**. *Ver también*, Oficio SGPA/DGIRA/DG/01558 por el que la DGIRA le preguntó al Juzgado Segundo de Distrito si el PEIA violaría la suspensión del Amparo 445/2015, 21 de febrero de 2020. **C-0335**.

1267 Réplica, ¶ 953.

1268 Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/01558 por el que la DGIRA consulta por segunda vez al Juzgado de Distrito sobre la reanudación del PEIA, 21 de febrero de 2020. **C-0335**.

1269 Memorial de Contestación, ¶¶ 259-261.

1270 Réplica, ¶ 954.

1271 Memorial de Contestación, ¶¶ 217-251, 263-340, 625-628.

978. La alegación de motivación política tampoco se apoya en evidencia que vincule las declaraciones públicas con la decisión concreta de suspender el PEIA. Las Demandantes se apoyan en comentarios del presidente López Obrador y de los secretarios Toledo y Albores para afirmar que la suspensión formó parte de una orden de impedir el Proyecto.[1272] Pero no identifican una comunicación, testimonio o documento contemporáneo que vincule a quienes evaluaron la MIA con una instrucción de decidirla al margen del expediente. Una posición política general frente a la minería a cielo abierto no demuestra que la DGIRA recibiera una instrucción de suspender esta MIA al margen del expediente. México explicó que no existe documento, comunicación o testimonio que establezca ese nexo causal.[1273]

979. Las Demandantes intentan suplir esa ausencia probatoria mediante inferencias adversas.[1274] Sin embargo, como se explicó *supra*, esta petición carece de sustento factico y jurídico. Las Demandantes no han probado la existencia de los documentos alegados, no han demostrado incumplimiento alguno de México de alguna orden de producción de documentos y no han identificado una inferencia limitada que se derive lógicamente de una omisión probatoria específica. Las Demandantes no pueden convertir la supuesta ausencia de documentos internos en prueba afirmativa de que la suspensión fue políticamente ordenada, pues esa es precisamente la proposición que debían demostrar.

980. *Cargill* tampoco favorece a las Demandantes. Las Demandantes invocan ese laudo para sostener que la suspensión habría "subvertido" el régimen ambiental para alcanzar un objetivo político ulterior.[1275] Pero en *Cargill* el tribunal contó con evidencia de que las medidas fueron deliberadamente dirigidas contra productores estadounidenses de jarabe de maíz de alta fructosa para presionar a Estados Unidos en una controversia comercial distinta.[1276] Aquí, la suspensión mantuvo temporalmente el *statu quo* mientras se aclaraba el alcance de una orden judicial relacionada con las Concesiones y los derechos indígenas.

1272 Réplica, ¶¶ 955-957, 961-962.

1273 Memorial de Contestación, ¶¶ 434-449, 616, 710-716.

1274 Réplica, ¶¶ 17-29, 957.

1275 Réplica, ¶ 956.

1276 *Cargill, Incorporated v. United Mexican States*, ICSID Case No. ARB(AF)/05/2, Award, 18 September 2009, ¶¶ 219-220. **CL-0012**.

981. En suma, la suspensión de la MIA respondió a una incertidumbre jurídica real, fue tramitada conforme a las formalidades aplicables y se mantuvo mientras la SEMARNAT obtenía la aclaración judicial necesaria. Las Demandantes no han demostrado que esa medida fuera un pretexto ni que estuviera determinada por una instrucción política. Esa conclusión conduce al análisis de la Resolución Negativa, que igualmente se sustentó en el marco legal aplicable y en deficiencias técnicas identificadas durante la evaluación ambiental.

(2) La negativa de la MIA no fue arbitraria ni políticamente predeterminada

982. Las Demandantes sostienen que la Resolución Negativa fue el resultado inevitable de una directiva política contra la minería a cielo abierto.[1277] Sin embargo, esa teoría no satisface el estándar de arbitrariedad aplicable bajo el Artículo 9.6 del TIPAT. Para prevalecer, las Demandantes deben demostrar, mediante pruebas concretas, que las razones expresadas por SEMARNAT fueron meramente pretextuales y que una consideración ajena a los criterios jurídicos, técnicos y ambientales aplicables determinó efectivamente el resultado.

983. *Odyssey* confirma ese elevado umbral. La mayoría sostuvo que una violación del TJE requiere una conducta grave, manifiesta o de tal magnitud que atente contra los cánones judiciales.[1278] En particular, una medida es arbitraria cuando "[is] not founded on reason or fact, nor on the law" o es "clearly improper and discreditable".[1279] Por consiguiente, cuando las medidas impugnadas se sustentan racionalmente en los hechos, el derecho aplicable y los fundamentos expresados por la autoridad —como ocurre con la negativa de la MIA y la Resolución de No Factibilidad—, no se configura la arbitrariedad necesaria para establecer una violación del TJE.

984. En el caso de la Denegación de la MIA, el expediente confirma que fue el producto de un procedimiento que incluyó la presentación y revisión de la MIA, un requerimiento de información adicional, una Consulta Pública, opiniones de autoridades especializadas y coordinación interinstitucional. Además, dicha resolución identificó expresamente su fundamento en, entre

---

1277 Réplica, ¶¶ 961-962.

1278 *Odyssey Marine Exploration, Inc. v. United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Final Award, 17 September 2024, ¶ 323. **CL-0134.**

1279 *Odyssey Marine Exploration, Inc. v. United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Final Award, 17 September 2024, ¶ 307. **CL-0134.**

otros, los artículos 30 y 35 de la LGEEPA, su Reglamento y el Convenio 169 de la OIT.[1280] Un tribunal de inversión no debe sustituir el criterio de una autoridad administrativa especializada, actuar como tribunal de apelación ni revisar *de novo* el mérito técnico de una decisión ambiental.[1281] Ese principio fue expresamente reconocido por la mayoría en *Odyssey*, el laudo invocado por las propias Demandantes.[1282] La mayoría no se apartó de él; concluyó que no estaba llamada a revisar el mérito técnico de la decisión porque existían pruebas contundentes de que la evaluación favorable de la DGIRA había sido desplazada por instrucciones específicas del Secretario Pacchiano para rechazar el proyecto por razones ajenas a criterios ambientales.[1283] No existe evidencia comparable en este caso.

985. Aquí, las deficiencias identificadas no fueron genéricas ni fabricadas. La SEMARNAT señaló, entre otros aspectos, información insuficiente sobre la disponibilidad y el balance de agua durante la vida del Proyecto; falta de consideración adecuada de las necesidades hídricas de las comunidades y la vida silvestre; incertidumbres respecto de las presas propuestas; deficiencias en el manejo de jales y tepetates; insuficiente protección de las aguas subterráneas; impactos sobre especies protegidas y el Bosque de Táscate; y medidas de prevención y mitigación que no demostraban la preservación de la biodiversidad.[1284]

986. La conducta posterior de las propias Demandantes es consistente con la existencia de cuestiones técnicas que aún requerían desarrollo. Después de la negativa de diciembre de 2020, las Demandantes continuaron preparando una MIA-R actualizada durante 2021 y 2022, que incorporaba nuevos estudios sobre fauna, ruido, suelos, hidrología superficial y subterránea, áreas inundables, vegetación y áreas de influencia, así como modificaciones a determinada

[1280] Memorial de Contestación, ¶¶ 625-627. Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 195-207.

[1281] *Odyssey Marine Exploration, Inc. v. United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Final Award, 17 September 2024, ¶ 334. **CL-0134**.

[1282] Réplica, ¶ 915.

[1283] *Odyssey Marine Exploration, Inc. v. United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Final Award, 17 September 2024, ¶¶ 433-437. **CL-0134.**

[1284] Memorial de Contestación, ¶¶ 269-330, 627-628. Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, sección VIII.E.

infraestructura del Proyecto.[1285] Las Demandantes finalmente decidieron no presentar esa MIA actualizada porque consideraron que hacerlo sería fútil.[1286]

987. El hecho que las Demandantes actualizaran su MIA evidencia la existencia de imprecisiones y errores en la MIA rechazada y que potencialmente pudieron ser solventados ante la autoridad, los expertos en materia ambiental de la Demandada señalan:

> Minera Gorrión elaboró una nueva MIA-R, la MIA actualizada, que no fue sometida al PEIA. La existencia de este documento demuestra que era técnicamente posible preparar una nueva manifestación y someterla a evaluación.[1287]

988. La diferencia con *Odyssey* es, por tanto, fundamental. En este caso no existe evidencia de instrucciones dirigida a SEMARNAT para rechazar la MIA, testimonios directos de funcionarios que afirmen haber recibido semejante orden, documentos contemporáneos que revelen un resultado predeterminado ni una conclusión técnica favorable que hubiera sido abandonada para cumplir una directiva política.[1288] La teoría de las Demandantes depende de inferencias extraídas de declaraciones públicas generales, la suspensión temporal legal del procedimiento y su desacuerdo con el análisis técnico de SEMARNAT. Esa concatenación de circunstancias no demuestra que las razones consignadas en la Resolución Negativa fueran pretextuales.

989. Las Demandantes también caracterizan las opiniones de la DGVS y la DGGFS como opiniones expertas "secretas" utilizadas sin permitir que Minera Gorrión respondiera.[1289] México explicó que esas opiniones fueron solicitadas a unidades de la propia administración conforme a las facultades de la DGIRA y no estaban sujetas al régimen aplicable a grupos externos de expertos.[1290] Las Demandantes no discuten la legitimidad de las opiniones de la DGVS y de la DGGFS. Su disconformidad se limita a si debía dar a conocer de ellas al Minera Gorrión. México reitera los argumentos realizados en su Contestación. Pero, en todo caso, esta es una cuestión de

---

1285 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 335-348.

1286 *Ver supra* Secciones II.F.1 (Las Demandantes no han refutado que la Negativa de la MIA derivó de deficiencias técnicas y ambientales) y II.F.3 (Las Demandantes tenían proyectada la presentación de una MIA actualizada).

1287 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 336.

1288 *Odyssey Marine Exploration, Inc. v. United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Final Award, 17 September 2024, ¶¶ 433-437. **CL-0134.**

1289 Réplica, ¶ 963.

1290 Memorial de Contestación, ¶¶ 235-239, 627-628; Informe Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 134-135, 231-233.

interpretación del procedimiento interno que no demuestra, por sí misma, una privación del derecho a ser oído.[1291] Los expertos en materia ambiental de la Demandada señalan:

> Además, el REIA ya preveía mecanismos de colaboración de la propia Secretaría, que les permiten asesorarse, atender consultas y proporcionarse información, datos o cooperación técnica en el ejercicio de sus atribuciones. Por ello, aun siguiendo, sin conceder, el razonamiento del experto ambiental de las Demandantes, la DGIRA podía solicitar información a la DGGFS y la DGVS, como unidades administrativas de la SEMARNAT, sin que dicha colaboración interna quedara, por ese solo hecho, sujeta a la obligación de notificación prevista para la consulta a grupos de expertos.[1292]

990. Además, Minera Gorrión tuvo acceso al expediente administrativo y podía presentar observaciones dentro del PEIA. El propio experto de las Demandantes reconoce que el expediente estuvo disponible para consulta.[1293] En ese contexto, la ausencia de traslado individualizado de cada comunicación interadministrativa no equivale a una falta de transparencia.

991. Tampoco es correcto afirmar que la SEMARNAT utilizó el principio precautorio como una cuarta causal independiente de negativa.[1294] La causal aplicada fue que el Proyecto no cumplía con el marco ambiental, conforme al Artículo 35 de la LGEEPA.[1295] El principio precautorio informó la evaluación de riesgos ante la ausencia de datos fiables; no sustituyó las causales legales. Los propios expertos de las Demandantes reconocen que el principio precautorio vincula a la SEMARNAT y que la autoridad debe adoptar medidas proporcionales frente a riesgos de daño grave o irreversible.[1296] Su desacuerdo se refiere a la proporcionalidad de la negativa, no a la facultad de la autoridad para aplicar el principio. Los expertos de la Demandada señalan:

> Resulta relevante advertir que la Resolución Negativa invocó este principio posterior a que la DGIRA examinara (i) la MIA-R, (ii) el ERA, (iii) la Información Adicional presentada por Minera Gorrión y (iv) las opiniones técnicas incorporadas al expediente. Como resultado de ese análisis, la autoridad identificó diversos componentes del Proyecto Ixtaca respecto de los cuales la información disponible no permitía determinar con suficiente claridad la magnitud de las posibles afectaciones ambientales ni establecer si las medidas propuestas resultaban adecuadas para prevenirlas, mitigarlas o compensarlas. De esta manera, la aplicación del Principio Precautorio en el

1291 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 73-80.

1292 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 77.

1293 Segundo Informe del Sr. Limón Aguirre, ¶¶ 84-88.

1294 Réplica, ¶ 964.

1295 Memorial de Contestación, ¶¶ 302, 630.

1296 Segundo Informe del Sr. Limón Aguirre, ¶ 107; Segunda Declaración Testimonial del Sr. Dorantes, ¶ 33.

> Considerando 27 de la Resolución Negativa se sustentó en los hallazgos técnicos previamente documentados por la propia autoridad.
>
> Tal como se aprecia en la Resolución Negativa, la DGIRA no formuló sus consideraciones sobre el Principio Precautorio a partir de una incertidumbre planteada en abstracto, sino del análisis de componentes concretos del Proyecto Ixtaca.[1297] [Énfasis añadido]

992. La valoración de esa proporcionalidad merece especial deferencia porque las deficiencias no se limitaban a un aspecto del MIA, sino que afectaban simultáneamente cuestiones centrales del Proyecto: agua, jales, biodiversidad, aguas subterráneas y posibles impactos sobre comunidades indígenas.[1298] El NMT no autoriza al Tribunal a sustituir el juicio técnico de la autoridad únicamente porque las Demandantes y sus expertos consideran que los riesgos podían mitigarse mediante condiciones.

993. *Odyssey* refuerza ese punto. La mayoría reconoció expresamente la complejidad de las decisiones con posibles repercusiones ambientales y señaló que debe alentarse todo intento genuino de regular para proteger el medio ambiente.[1299] Solo rechazó la defensa basada en el ejercicio legítimo de facultades regulatorias después de concluir, con base en pruebas contundentes, que allí no había existido un auténtico ejercicio regulatorio.[1300] Aquí, en cambio, el expediente documenta una evaluación ambiental real, deficiencias técnicas concretas y razones jurídicas identificables que las Demandantes no han demostrado que fueran falsas.

994. Por la misma razón, el Artículo 35(II) de la LGEEPA no obligaba a la SEMARNAT a conceder una autorización condicionada.[1301] Las Demandantes sostienen que la autoridad debía imponer medidas adicionales en lugar de negar la MIA.[1302] Sin embargo, una autorización condicionada constituye una facultad de SEMARNAT, no un derecho del promovente.[1303] Por

---

1297 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 166 y 167.

1298 Memorial de Contestación, ¶¶ 269-330, 627-630.

1299 *Odyssey Marine Exploration, Inc. v. United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Final Award, 17 September 2024, ¶ 444. **CL-0134.**

1300 *Odyssey Marine Exploration, Inc. v. United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Final Award, 17 September 2024, ¶¶ 444-447. **CL-0134.**

1301 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 171 y 172.

1302 Réplica, ¶¶ 964, 968.

1303 Memorial de Contestación, ¶ 634.

tanto, las Demandantes no podían exigir que SEMARNAT recurriera a esa alternativa y, dadas las deficiencias identificadas en la MIA del Proyecto Ixtaca, no correspondía hacerlo en este caso.[1304]

995. Las Demandantes también aíslan la expresión "absolute scientific certainty" del razonamiento completo de la Resolución.[1305] La expresión describía la falta de información técnica suficientemente fiable para evaluar la viabilidad ambiental, la integridad de los ecosistemas y la capacidad de las medidas propuestas para enfrentar riesgos relevantes, conforme al Artículo 44 del Reglamento.[1306] Leída en contexto, no estableció un estándar autónomo e imposible, sino que reflejó las insuficiencias de la información presentada.

996. No debemos inferir que las Demandantes debían cumplir con estándar para obligar a demostrar que el Proyecto Ixtaca jamás produciría impacto ambiental. Por el contrario, solo era necesario presentar la información necesaria para que la DGIRA pudiera evaluar adecuadamente los elementos esenciales del Proyecto para permitir, cuando menos, identificar y caracterizar los impactos ambientales relevantes, valorar razonablemente su magnitud e interacción y determinar si las medidas propuestas son adecuadas para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales.[1307] Los expertos en materia ambiental de la Demandada señalan:

> El marco jurídico del PEIA no exige eliminar toda incertidumbre científica; pero sí requiere que la autoridad cuente con elementos suficientes para realizar la evaluación que le encomiendan la LGEEPA y el REIA. En consecuencia, la referencia a la "certeza científica absoluta" utilizada en la Resolución Negativa debe entenderse dentro del razonamiento técnico que la acompaña y no de manera aislada, como si la DGIRA

1304 *TECO* no altera esa conclusión. Ese tribunal reconoció que la deferencia a las facultades regulatorias del Estado no ampara conductas manifiestamente arbitrarias, abusivas o adoptadas con manifiesto desprecio de las normas aplicables o del debido proceso. Al mismo tiempo, precisó que no corresponde a un tribunal internacional sustituir el criterio de la autoridad ni revisar decisiones adoptadas genuinamente y de buena fe en el ejercicio ordinario de sus facultades regulatorias. En este caso, las Demandantes no han demostrado que la decisión de SEMARNAT de negar la MIA, en lugar de otorgar una autorización condicionada, alcance ese elevado umbral. *Ver TECO Guatemala Holdings, LLC v. Republic of Guatemala*, ICSID Case No. ARB/10/23, Award, 19 December 2013, ¶¶ 490-493. **CL-0084**.

1305 Réplica, ¶¶ 965-966.

1306 LGEEPA, Articulo 35 (II): ("Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que *podrá:* […] II.- Autorizar de manera condicionada la obra […]; III.- Negar la autorización solicitada, cuando: a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables […]"). [Énfasis añadido]. **C-0156.**

1307 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 175 – 181.

> hubiera exigido a Minera Gorrión garantizar la inexistencia absoluta de cualquier impacto ambiental futuro.[1308]

997. Las Demandantes también tergiversan el tratamiento de la consulta indígena. La SEMARNAT no trasladó a Minera Gorrión la obligación estatal de realizar una consulta ni negó la MIA como sanción por no haberla organizado.[1309] Consideró, como parte de la evaluación ambiental y social, la presencia de población indígena potencialmente afectada y la información insuficiente sobre los efectos del Proyecto en sus derechos y territorio. Las opiniones del INPI, de la Comisión para el Diálogo y de la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas habían identificado una presencia indígena significativa y la necesidad de proteger sus derechos.[1310] En Resolución, SEMARNAT también acepto que era la obligación de México hacer esta consulta y reconoció que el Proyecto incumplió con la obligación del Convenio 169 sobre los Pueblos Indigenas porque "se limito a decir que la población indígena era inexsitente"; lo que conllevo a que la consulta no pudiese hacerse.[1311] La circunstancia de que el Estado deba conducir la consulta no obliga a la autoridad ambiental a autorizar primero el Proyecto e investigar después sus posibles impactos.[1312]

998. Que El Boleo, Camino Rojo y el Proyecto del Río Huazamota hayan recibido autorizaciones condicionadas no establece que Ixtaca tuviera derecho al mismo resultado.[1313] Una comparación válida exige demostrar similitud respecto de los riesgos ambientales, la información técnica presentada, el marco normativo aplicable, las características hidrológicas y ecológicas, las especies afectadas, las medidas de mitigación y la situación de las comunidades indígenas.[1314] Las diferencias entre esos proyectos impiden inferir que la negativa a Ixtaca respondió a una finalidad política. El hecho de que proyectos distintos recibieran condiciones distintas demuestra el análisis

---

1308 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶ 181.

1309 Réplica, ¶ 967.

1310 Memorial de Contestación, ¶¶ 241-247, 631-632.

1311 Aviso Oficial de la SEMARNAT No. SGPA/DGIRA/DG/06549, de 17 de diciembre de 2020, en las páginas 8 y 132, p. 136. **C-0086**

1312 Segundo Informe de los Sres. Del Razo y Rábago, ¶¶ 172, 185 – 194.

1313 Réplica, ¶ 969.

1314 Memorial de Contestación, ¶ 633.

individualizado propio del régimen ambiental, no una práctica uniforme de autorizar toda obra condicionadamente.

999. Las Demandantes pretenden que el Tribunal vuelva a evaluar el mérito técnico de la MIA y elija entre las opiniones contrapuestas de las Partes. Ese no es el análisis bajo el Artículo 9.6. El NMT no sanciona meros errores administrativos, aplicaciones discutibles de las políticas regulatorias o diferencias razonables de criterio; exige una conducta grave y manifiesta, y no permite que un tribunal de inversión sustituya el juicio de una autoridad ambiental especializada.[1315] Las Demandantes no han aportado la clase de prueba que permita a este Tribunal alcanzar ese umbral.

1000. En suma, las Demandantes no han demostrado que las razones expresadas por la SEMARNAT fueran falsas ni que una orden política hubiera determinado el resultado. Su teoría depende de concatenar declaraciones públicas, la suspensión temporal del expediente y desacuerdos técnicos para inferir una instrucción que ningún documento o testimonio acredita. El expediente demuestra algo distinto: la suspensión respondió a una incertidumbre judicial real y fue prolongada por la pandemia; la negativa se sustentó en deficiencias técnicas y jurídicas concretas; y Minera Gorrión conservó oportunidades para acceder al expediente, formular observaciones e impugnar la decisión. Esa conducta no alcanza el elevado umbral del Artículo 9.6 y, por ende, el Tribunal debe rechazarlas.

b. La Resolución de No Factibilidad de las Concesiones no infringió el TJE

1001. Las Demandantes vuelven a caracterizar erróneamente la actuación de Economía como una cancelación arbitraria y pretextual de las Concesiones.[1316] Esa descripción tergiversa tanto la Sentencia de la Suprema Corte como el procedimiento administrativo que le siguió. Economía no se "unió" a otras autoridades para poner fin al Proyecto Ixtaca ni actuó en cumplimiento de una supuesta política contra la minería o la inversión extranjera.[1317] Economía ejecutó una sentencia vinculante que dejó los títulos insubsistentes, reevaluó la factibilidad de expedirlos conforme a la

---

1315 *Odyssey Marine Exploration, Inc. v. United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Final Award, 17 September 2024, ¶¶ 323–324, 334, 439–440. **CL-0134**.

1316 Réplica, ¶ 970.

1317 Réplica, ¶ 971.

legislación minera aplicable y explicó las deficiencias jurídicas y técnicas que impedían su reexpedición.[1318] Para efectos de este Arbitraje, México ha presentado el testimonio del Sr. Palma para explicar con mayor detalle por qué las Concesiones fueron declaradas no factibles. Las alegaciones de contradicción, retroactividad, discriminación, falta de transparencia y ausencia de debido proceso se derivan de una lectura selectiva de los hechos y de la premisa errónea de que Economía estaba obligada a reexpedir automáticamente las Concesiones una vez realizada la consulta indígena.

(1) La actuación de México no fue contradictoria ni retroactiva

1002. Las Demandantes argumentan que la actuación de México fue contradictoria y retroactiva.[1319] Sin embargo, sus argumentos parten de una premisa jurídicamente insostenible: que las Concesiones y las determinaciones administrativas que precedieron a su otorgamiento debían permanecer inmunes a toda revisión, incluso después de que la Suprema Corte ordenara expresamente a Economía pronunciarse nuevamente sobre la factibilidad de expedir los títulos. El Artículo 9.6 del TIPAT no exige semejante resultado ni transforma la ejecución de una sentencia judicial en una violación del nivel mínimo de trato.

1003. En cualquier caso, no existió contradicción entre las actuaciones anteriores de Economía y la Resolución de No Factibilidad. Las decisiones y manifestaciones previas fueron adoptadas antes de que la Suprema Corte ordenara a Economía analizar y determinar si las Concesiones eran factibles.[1320] Una autoridad no incurre en conducta contradictoria cuando reevalúa una situación jurídica a raíz de una sentencia vinculante que altera decisivamente el marco jurídico aplicable.

1004. Las Demandantes tergiversan los efectos de la Sentencia al sostener que Economía únicamente debía realizar la consulta y reexpedir automáticamente los títulos.[1321] La Suprema Corte estableció una secuencia distinta: dejar insubsistentes las Concesiones; evaluar nuevamente la factibilidad jurídica y técnica de expedirlas; y, únicamente si dicha expedición resultaba factible,

---

1318 Memorial de Contestación, ¶¶ 656–669.

1319 Réplica, ¶¶ 975-985.

1320 Réplica, ¶¶ 975, 978–980; Memorial de Contestación, ¶¶ 657-663, 676-677.

1321 Réplica, ¶¶ 975-977.

llevar a cabo la consulta indígena.[1322] Además, la propia Sentencia reconoció a Economía "libertad de jurisdicción" para emitir un nuevo acto, sin obligarla a resolver en un sentido determinado ni en favor de Minera Gorrión o de Tecoltemi.[1323] La opinión del exministro Cossío no sustituye el texto de la Sentencia, y dicha interpretación privaría de todo efecto útil al pronunciamiento ordenado por la Suprema Corte.

1005. La posición de las Demandantes también fue rechazada por los órganos judiciales encargados de supervisar el cumplimiento de la Sentencia. El Juzgado 2º de Distrito tuvo por cumplida la ejecutoria, y el 2º Tribunal Colegiado confirmó que la consulta solo debía realizarse si Economía determinaba previamente que la expedición de nuevas concesiones era legal y técnicamente factible. Asimismo, el Tribunal Colegiado concluyó que Economía podía evaluar las solicitudes conforme a la Ley Minera y emitir una nueva determinación, rechazando los argumentos de Minera Gorrión sobre un supuesto exceso en el cumplimiento y violaciones al debido proceso.[1324]

1006. Tampoco es correcto afirmar que la Suprema Corte dejó intacta una determinación definitiva según la cual las solicitudes cumplían todos los requisitos para el otorgamiento de los títulos.[1325] Que las actuaciones anteriores al otorgamiento subsistieran significaba que Economía debía conservar los expedientes y utilizarlos como base para la nueva evaluación; no significaba que la información contenida en ellos debiera darse por válida ni que las conclusiones administrativas previas fueran inmutables.[1326] De aceptarse la lectura de las Demandantes, el mandato de evaluar nuevamente la factibilidad quedaría privado de todo efecto útil.

1007. La referencia al Oficio de junio de 2022 tampoco demuestra que las Concesiones continuaran plenamente vigentes o que su reexpedición estuviera garantizada.[1327] Economía declaró los títulos insubsistentes, suspendió los derechos y obligaciones derivados de ellos y

---

1322 Memorial de Contestación, ¶¶ 393–399, 657–663; Sentencia de la SCJN, ¶¶ 296-297. **C-0092**. *Ver también* Informe Legal de los Sres. Aguinaco, ¶¶ 227-228.

1323 Informe Sres. Aguinaco, ¶¶ 244-245.

1324 Memorial de Contestación, ¶¶ 412–418, 578–580, 669; Segunda Declaratoria de Cumplimiento de la Sentencia, 11 de abril de 2023, pp. 7-8, 12. **R-0100**; Sentencia del Recurso de Inconformidad 23/21, pp. 53-54, 60-61. **C-0588**.

1325 Réplica, ¶¶ 976, 981.

1326 Memorial de Contestación, ¶¶ 398, 400–404, 664-665.

1327 Réplica, ¶ 980.

preservó únicamente las actuaciones administrativas anteriores para efectuar la evaluación ordenada por la Suprema Corte. La subsistencia del expediente no equivalía a una aprobación anticipada de la factibilidad ni generaba un derecho adquirido a la reexpedición de los títulos.

1008. Por las mismas razones, la evaluación de Economía no fue retroactiva. Economía no aplicó una norma nueva a hechos consumados ni revocó derechos existentes con fundamento en legislación posterior. Examinó las solicitudes originales conforme a los requisitos legales que debían satisfacer desde el momento de su presentación, después de que la Sentencia retrotrajera los efectos jurídicos al momento anterior al otorgamiento de los títulos.[1328] Que la evaluación haya examinado documentación histórica la hace retrospectiva, no retroactiva.

1009. El principio de *estoppel* tampoco resulta aplicable.[1329] Las Demandantes no identifican una representación clara, específica e inequívoca mediante la cual Economía hubiera garantizado que las Concesiones permanecerían vigentes con independencia de cualquier revisión constitucional o que serían reexpedidas automáticamente tras una sentencia adversa. Las manifestaciones anteriores se produjeron bajo un contexto jurídico distinto y antes de la Sentencia de la Suprema Corte.[1330] Ninguna autoridad podía comprometer válidamente al Estado a ignorar una futura decisión judicial vinculante.

1010. La prolongada defensa de las Concesiones por parte de Economía tampoco prueba contradicción.[1331] En esos procedimientos, Economía defendió la legalidad de sus actuaciones en el contexto de las controversias planteadas en los procedimientos de amparo. Una vez que la Suprema Corte ordenó una nueva evaluación, Economía estaba obligada a ajustar su actuación a ese mandato. Defender una decisión antes de que sea corregida judicialmente no impide a la autoridad cumplir posteriormente la sentencia que la deja sin efectos.

1011. *Segundo*, la autenticidad del supuesto proyecto de oficio de noviembre de 2022 ha sido cuestionada y, en cualquier caso, dicho documento no demuestra que Economía hubiera adoptado una decisión definitiva de reexpedir las Concesiones.[1332] Como se explica en la Sección II.C.7, no

---

1328 Memorial de Contestación, ¶¶ 667, 676–680. *Ver también* Informe Sres. Aguinaco, ¶¶ 227-228.

1329 Réplica, ¶¶ 974, 978–980.

1330 Memorial de Contestación, ¶¶ 676-677.

1331 Réplica, ¶ 979.

1332 Réplica, ¶ 981; Borrador de oficio de Economía sobre la factibilidad de las concesiones, noviembre 2022, **Anexo C-930**.

existe ningún registro en Economía de que dicho documento haya sido generado por algún funcionario publico y, de hecho, la Sra. Margarita Olivas y el Sr. Efrain Alva, quienes supuestamente compartieron el documento con las Demandantes habían dejado de trabajar en Economía al menos dos meses antes de su elaboración, por lo que no representaban los intereses de Economía y no debe ser tomado en cuenta por el Tribunal.

1012. En todo caso, incluso si el documento fuera tomado en consideración, se trataba de un documento preliminar elaborado durante un proceso administrativo en curso, sujeto a revisión y sin efectos jurídicos vinculantes. Las autoridades deben poder modificar sus análisis internos antes de emitir una resolución definitiva; convertir cada borrador en una posición irrevocable eliminaría la naturaleza deliberativa del procedimiento administrativo.

1013. *Tercero*, las Demandantes intentan atribuir la Resolución de No Factibilidad al cambio de titular en Economía señalando que, tras el nombramiento de la secretaria Buenrostro, disminuyeron las comunicaciones con Minera Gorrión y que poco después Economía declaró la no factibilidad de las Concesiones.[1333] Pero esa secuencia temporal no demuestra que la secretaria Buenrostro hubiera instruido, influido o intervenido en la decisión concreta respecto de las Concesiones, ni convierte una inferencia política en prueba de arbitrariedad. La correlación temporal que invocan las Demandantes no satisface su carga de demostrar que la medida fue adoptada por motivos distintos de los declarados.

1014. Tampoco existe fundamento para caracterizar la coordinación entre Economía, SEMARNAT e INPI como una campaña ilícita.[1334] La consulta de información elaborada por otras dependencias con competencias ambientales e indígenas no implica que Economía haya delegado sus atribuciones o sustituido su análisis bajo la Ley Minera. La Resolución de No Factibilidad se sustentó en deficiencias legales y técnicas identificadas en las solicitudes y en los informes periciales originales, incluidas irregularidades relativas a la ubicación, delimitación y coordenadas de los lotes.[1335]

1015. Como se explicó en la Sección II.C.6 *supra*, el estudio del INPI y los estudios ambientales no formaron parte de las consideraciones por las que DG Minas desaprobó la factibilidad de las

---

1333 Réplica, ¶¶ 982-983.

1334 Réplica, ¶¶ 983-984.

1335 Memorial de Contestación, ¶¶ 664–672.

Concesiones. La Resolución de No Factibilidad aclara que el Apartado D no fue la base para la determinación de Economía. La Resolución de No Factibilidad también aclara que la base de dicha determinación son los elementos de hecho y derecho contenidos en los apartados A (Manifestaciones sobre "CERRO GRANDE"), B (Manifestaciones sobre "Cerro Grande 2") y C (Análisis de Factibilidad) de la misma, excluyendo el apartado en el que se mencionan los estudios ambientales y del INPI de la base de la determinación.

> Una vez analizados los procedimientos administrativos para el otorgamiento de la concesión minera de conformidad con el marco legal applicable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13, 19, fracciones I, II y V y 20 de la Ley Minera, y 16 de su Reglamento, y con base en lo señalado en los apartados A, B y C de este oficio, esta autoridad, en cumplimiento de la ejecutoria dictada en fecha y al acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2022, dicatada por ese H. Juez de Distrito, en el Amparo Indirecto con número de expediente 445/2015, hace de su atento conocimiento que existen elementos de hecho y de derecho para determiner que NO ES FACTIBLE la expedición de los títulos de concesión.[1336] [Énfasis añadido]

1016. Adicionalmente, la DG Minas confirmó que los elementos que tomó como base para la Resolución de No Factibilidad no incluían el Estudio del INPI en diversas ocasiones.

1017. Por ejemplo, el 23 de marzo de 2023 el Sr. Palma envió una comunicación interna dirigida a la Jefa de Departamento de Dictaminación de la Unidad de Apoyo Jurídico (UAJ) de Economía enlistando los elementos que la DG Minas tomó como base de la Resolución de No Factibilidad. Esta comunicación aclara los elementos tomados en cuenta para cada una de las concesiones.

1018. En el caso de la Concesión "CERRO GRANDE", el Sr. Palma aclaró que se tomó en cuenta la (i) la solicitud de concesión minera presentada el 28 de octubre de 2002 y (ii) el informe de trabajos periciales. Para la concesión minera "CERRO GRANDE 2", aclaró que se tomó en cuenta: (i) la Solicitud de concesión minera presentada el 14 de julio de 2008, (ii) el informe de trabajos periciales y (iii) la ficha técnica del Punto de Control del INEGI.[1337] No se hizo ninguna mención al Estudio del INPI porque no fue un elemento que la DG Minas tomó como base en la determinación contenida en la Resolución de No Factibilidad.

1336 Resolución de No Factibilidad, p.16. **R-0099**.

1337 Comunicación interna SE con explicación de la base de la Resolución de No Factibilidad, 23 de marzo de 2023. **REPM-001**.

1019. La misma explicación se presentó ante el Juzgado de Distrito encargado de dar seguimiento al cumplimiento de la Sentencia de la Suprema Corte. Incluso DG Minas remitió la totalidad de la documentación utilizada como base de la Resolución de No Factibilidad ante el Juzgado de Distrito, sin incluir el Estudio del INPI al no haber formado la base de esa determinación.[1338]

1020. Además, las Demandantes tuvieron oportunidades efectivas de controvertir la Resolución. La decisión fue comunicada por escrito, fue impugnada mediante recursos internos y estuvo sujeta a revisión por el Juzgado 2º de Distrito y el 2º Tribunal Colegiado. Posteriormente, Minera Gorrión y Minera Gavilán promovieron un juicio de nulidad en el que formularon sustancialmente los mismos argumentos que presentan en este arbitraje, pero se desistieron de dicho procedimiento antes de que se resolviera.[1339] Este historial procesal es incompatible con cualquier alegación de ausencia fundamental de debido proceso.

1021. Finalmente, como se explicó en el Memorial de Contestación, los casos invocados por las Demandantes no respaldan su posición, pues se refieren a contradicciones entre distintos órganos estatales, mientras que, en este caso, la actuación de Economía constituyó la aplicación directa de la Sentencia de la Suprema Corte y de una evaluación técnica de la factibilidad de las Concesiones.[1340] La cuestión relevante es si existía una justificación jurídica objetiva para la reevaluación posterior; esa justificación fue precisamente la Sentencia, que exigía a Economía examinar nuevamente la factibilidad de las solicitudes.

1022. En suma, las Demandantes presentan como una "volte-face"[1341] arbitraria lo que fue la ejecución de una sentencia constitucional y el ejercicio de atribuciones expresamente reconocidas por los tribunales mexicanos. Economía preservó los expedientes originales, reevaluó las solicitudes conforme al marco jurídico aplicable, explicó por escrito las deficiencias que impedían expedir nuevamente los títulos y sometió su actuación al control judicial. Nada de ello constituye contradicción, retroactividad o estoppel, y mucho menos alcanza el elevado umbral de arbitrariedad exigido por el Artículo 9.6 del TIPAT.

1338 Oficio de DG Minas al Segundo Juzgado de Distrito sobre elementos considerados para la Resolución de No Factibilidad, 24 de marzo de 2023. **R-0133**.

1339 Memorial de Contestación, ¶¶ 428–433, 578–580.

1340 Memorial de Contestación, ¶¶ 681-683.

1341 Réplica, ¶ 984.

(2) La revocación de las Concesiones no fue arbitraria

1023. Las Demandantes tampoco demuestran que la Resolución de No Factibilidad haya sido arbitraria. Su argumento se sustenta en tres premisas igualmente erróneas: que el Artículo 9.6 del TIPAT impone un umbral de arbitrariedad inferior al reconocido por México; que las irregularidades identificadas por Economía eran insignificantes y debían ser corregidas de oficio; y que la Resolución obedeció al estudio del INPI y a una supuesta instrucción política, en lugar de a las razones jurídicas y técnicas expresadas en ella. Ninguna de esas afirmaciones resiste el análisis del expediente.[1342]

1024. Como se ha mencionado, una medida es arbitraria cuando la misma "[is] not founded on reason or fact, nor on the law" o es "clearly improper and discreditable".[1343] Nada de ello ocurrió en este caso. Economía sustentó su decisión en deficiencias concretas de las solicitudes y de los trabajos periciales que impedían verificar la identificación, ubicación y delimitación de las superficies solicitadas y, por tanto, determinar que los títulos podían expedirse válidamente conforme a la Ley Minera y su Reglamento.

1025. Las Demandantes minimizan las irregularidades encontradas por Economía calificándolas de defectos *de minimis* que podían corregirse "en minutos".[1344] Esto no es cierto. Las discrepancias afectaban elementos esenciales de las solicitudes —incluidas la configuración, ubicación y delimitación de los lotes— y, por tanto, impedían a Economía confirmar que las superficies descritas en los trabajos periciales correspondían jurídicamente a las áreas respecto de las cuales se habían solicitado las Concesiones.[1345]

1026. La referencia de las Demandantes a los mecanismos de corrección previstos en el Reglamento Minero tampoco demuestra arbitrariedad.[1346] La Suprema Corte no ordenó reabrir íntegramente los procedimientos originales ni iniciar un nuevo procedimiento de solicitud en el

---

1342 Réplica, ¶¶ 986-991.

1343 *Odyssey Marine Exploration, Inc. v. United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Final Award, 17 September 2024, ¶ 307. **CL-0134.**

1344 Réplica, ¶ 988.

1345 Memorial de Contestación, ¶¶ 666, 690-691, 700. Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶¶ 20, 23-34, 35-43.

1346 Réplica, ¶ 988.

que Minera Gorrión pudiera sustituir o complementar, décadas después, los documentos que debían acreditar el cumplimiento de los requisitos aplicables al momento de presentar las solicitudes. Ordenó a Economía pronunciarse nuevamente sobre la factibilidad de expedir los títulos con base en las actuaciones administrativas que subsistían. En ese contexto, Economía tenía libertad de jurisdicción para evaluar el expediente existente y no estaba obligada a permitir que las solicitantes subsanaran retroactivamente deficiencias sustantivas de sus solicitudes originales.

1027. A lo mucho, la posición de las Demandantes plantea una diferencia respecto de la interpretación del alcance de la Sentencia y de los mecanismos de subsanación disponibles bajo el derecho interno. Pero, como confirma *Odyssey*, una interpretación discutible o incluso una irregularidad administrativa no constituye por sí sola una violación del TJE.[1347] Para demostrar arbitrariedad, las Demandantes tendrían que acreditar que la interpretación adoptada por Economía carecía manifiestamente de fundamento jurídico o que fue utilizada como pretexto para alcanzar un resultado decidido por razones ajenas al expediente. No han demostrado ninguna de esas circunstancias.

1028. Las Demandantes tampoco pueden satisfacer ese estándar mediante la afirmación circular de que Economía actuó por razones diferentes de las expresadas en la Resolución. La existencia de información adicional en el expediente administrativo no demuestra que las razones jurídicas y técnicas contenidas en el Oficio de febrero de 2023 fueran falsas. La Resolución identificó irregularidades concretas en las solicitudes y en los trabajos periciales que afectaban la identificación, ubicación y delimitación de las superficies solicitadas y, por tanto, impedían verificar que los títulos pudieran expedirse válidamente conforme a la Ley Minera y su Reglamento.[1348]

1029. *Tercero*, la referencia al estudio del INPI no demuestra que la Resolución se haya adoptado por una razón oculta. Que un servidor público señalara que dicho estudio "sirvió de base" para la actuación de la DGM no significa que fuera la causa exclusiva de la determinación de no factibilidad, ni que desplazara las irregularidades jurídicas y técnicas expresamente identificadas

---

1347 *Odyssey Marine Exploration, Inc. v. United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Final Award, 17 September 2024, ¶¶ 322-324. **CL-0134.**

1348 Memorial de Contestación, ¶¶ 408-411, 664-680, 700.

en la Resolución.[1349] De hecho, el Sr. Palma, confirmó que el Estudio del INPI no fue relevante para la Resolución de No Factibilidad:

> En primer lugar, me gustaría reiterar que la Resolución de No Factibilidad se basó completamente en las deficiencias técnicas que fueron encontradas en los trabajos periciales presentados por la empresa como parte de sus solicitudes de concesión. La Resolución de No Factibilidad en ningún momento estuvo basada o influenciada por una supuesta "campaña de mala fe" liderada por SEMARNAT en colaboración con el INPI, como lo mencionan las Demandantes.[1350]

1030. Tampoco existe prueba de que las reuniones entre dependencias y organizaciones sociales tuvieran por objeto "fabricar" estudios para poner fin al Proyecto Ixtaca.[1351] La coordinación entre autoridades con competencias mineras, ambientales e indígenas era razonable ante una Sentencia que involucraba precisamente la validez de Concesiones mineras y los derechos constitucionales de una comunidad indígena.

1031. *Finalmente*, la Resolución sí guardaba una relación directa con el objeto y los efectos del amparo.[1352] Las Demandantes vuelven a reducir la Sentencia a la obligación de realizar una consulta, ignorando que la Suprema Corte dejó los títulos insubsistentes y exigió que Economía se pronunciara previamente sobre la factibilidad de expedirlos.[1353] La consulta no era un acto independiente que debiera realizarse aun cuando las solicitudes no fueran jurídica y técnicamente viables; era la etapa posterior de una secuencia que solo debía continuar si Economía determinaba primero que la expedición de los títulos era factible.

1032. Por ello, la decisión de no realizar una consulta después de determinar la inviabilidad de las solicitudes no desconoció los derechos que la Suprema Corte pretendía proteger. Al contrario, realizar una consulta sobre títulos que Economía había determinado que no podían ser válidamente expedidos habría convertido ese derecho en un ejercicio abstracto y carente de objeto. La Resolución perseguía así propósitos regulatorios legítimos: cumplir la Sentencia, asegurar que las concesiones mineras solo fueran expedidas cuando se satisficieran los requisitos legales y técnicos aplicables y preservar la integridad del procedimiento constitucionalmente ordenado.

1349 Réplica, ¶¶ 988-989. *Ver también*, Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 45.

1350 Declaración Testimonial del Sr. Palma, ¶ 45.

1351 Réplica, ¶ 989.

1352 Réplica, ¶ 990.

1353 Sentencia de la SCJN del Amparo en Revisión 134/2021, ¶¶ 296-297. **C-0092**.

1033. En suma, Economía ejecutó la secuencia ordenada por la Suprema Corte, examinó los documentos que subsistían en los procedimientos originales, identificó deficiencias que impedían validar la expedición de los títulos y explicó su decisión por escrito. Esa actuación puede contrariar el resultado que las Demandantes esperaban, pero no constituye arbitrariedad bajo el elevado estándar del Artículo 9.6 del TIPAT.

(3) La Resolución de No Factibilidad fue transparente y no vulneró el debido proceso

1034. Las Demandantes tampoco demuestran que la Resolución de No Factibilidad haya sido adoptada mediante un procedimiento no transparente o contrario al debido proceso. Su argumento confunde dos cuestiones distintas: la aplicabilidad de determinados mecanismos de subsanación previstos en los Artículos 22, 24 y 31 del Reglamento Minero; y la existencia de oportunidades efectivas para conocer, impugnar y obtener la revisión judicial de la decisión de Economía.[1354] En cada aspecto, el expediente contradice la caracterización de las Demandantes.[1355]

1035. La opinión del exministro Cossío no modifica el alcance de la Sentencia ni demuestra que Economía careciera de facultades para reevaluar las solicitudes.[1356] Como se explicó anteriormente, la Suprema Corte dejó los títulos insubsistentes y ordenó a Economía pronunciarse sobre la factibilidad de expedirlos, reconociéndole libertad de jurisdicción para emitir un nuevo acto sin obligarla a resolver en favor de Minera Gorrión.[1357] El 2º Tribunal Colegiado confirmó posteriormente que Economía podía realizar esa evaluación conforme a la Ley Minera y rechazó expresamente la alegación de que debía requerir aclaraciones o información adicional antes de emitir la Resolución.[1358]

1036. Las Demandantes presuponen, sin demostrarlo, que el Artículo 22 del Reglamento Minero resultaba aplicable a la reevaluación ordenada por la Suprema Corte.[1359] Sin embargo, como se explica en las Secciones II.C.1 y II.C2 *supra*, esta no era la continuación ordinaria de los

---

1354 Réplica, ¶¶ 992-995.

1355 Ver Sección II.C.2.a. *supra.*

1356 Réplica, ¶ 993.

1357 Memorial de Contestación, ¶¶ 392-399.

1358 Memorial de Contestación, ¶¶ 414-419.

1359 Réplica, ¶ 993.

procedimientos originales ni una nueva solicitud de concesión en la que Minera Gorrión tuviera derecho a completar o sustituir la documentación presentada décadas antes. Economía debía determinar la factibilidad con base en las actuaciones que subsistían y no estaba obligada a permitir que las solicitantes subsanaran retrospectivamente deficiencias sustantivas del expediente.

1037. La secuencia de actuaciones posterior a la Sentencia no demuestra falta de transparencia.[1360] El Oficio de junio de 2022 confirmó que subsistían las actuaciones anteriores al otorgamiento para permitir a Economía cumplir la Sentencia; no garantizó que los títulos serían reexpedidos ni creó un derecho procesal a participar en las deliberaciones internas de la Secretaría. Del mismo modo, la autenticidad del supuesto proyecto de oficio de noviembre de 2022 ha sido cuestionado, y en todo caso, era un borrador preliminar, sujeto a revisión y sin efectos jurídicos vinculantes, no una resolución definitiva cuya modificación exigiera una audiencia previa.[1361]

1038. La interrupción de las comunicaciones informales con Minera Gorrión y la existencia de reuniones interinstitucionales no demuestran, por sí solas, una falta de transparencia o una violación del debido proceso.[1362] Lo relevante es que la Resolución no fue "concealed",[1363] si no que fue notificada a las Demandantes por escrito, expuso las razones jurídicas y técnicas de la determinación de no factibilidad, Minera Gorrión pudo impugnarla ante los tribunales mexicanos y que, además, promovió un juicio de nulidad en el que podía plantear sus objeciones de fondo, pero posteriormente se desistió.[1364]

1039. En suma, Economía actuó en ejecución de una sentencia judicial, aplicó el marco legal publicado, explicó por escrito las razones de su determinación y sometió su actuación a un control judicial efectivo. Las Demandantes fueron notificadas, impugnaron la decisión ante diversos órganos y tuvieron acceso a un juicio de nulidad que decidieron abandonar. Ese historial es incompatible con una falta total de transparencia o una denegación fundamental de debido proceso bajo el Artículo 9.6 del TIPAT.

1360 Réplica, ¶ 994.

1361 Memorial de Contestación, ¶¶ 400-403. Ver Sección II.C.7 *supra.*

1362 Réplica, ¶ 994.

1363 Réplica, ¶ 995.

1364 Memorial de Contestación, ¶¶ 428-432, 664-680, 706-707.

(4) La Resolución de No Factibilidad no fue desproporcionada

1040. Las Demandantes tampoco demuestran que la Resolución de No Factibilidad fuera desproporcionada. Su argumento vuelve a partir de la premisa incorrecta de que la Suprema Corte únicamente ordenó realizar la consulta indígena y reexpedir las Concesiones.[1365] Por el contrario, la Sentencia exigió que Economía determinara primero si su expedición era jurídica y técnicamente factible y solo entonces procediera a la consulta.[1366] La medida perseguía así objetivos legítimos: cumplir una sentencia vinculante, proteger la legalidad del régimen concesional y garantizar que cualquier consulta se refiriera a títulos susceptibles de ser válidamente expedidos.

1041. Tampoco existía una alternativa menos restrictiva que permitiera alcanzar esos mismos objetivos.[1367] Los artículos 24 y 31 del Reglamento Minero no obligaban a Economía a corregir por cuenta propia las solicitudes ni a permitir que Minera Gorrión modificara, décadas después, la documentación sobre la cual debía efectuarse la reevaluación ordenada por la Suprema Corte. Una vez que Economía concluyó que el expediente subsistente no permitía validar la expedición de los títulos, no podía reemplazar esa determinación con una subsanación informal que el mandato judicial no contemplaba.[1368]

1042. La comparación entre una supuesta discrepancia corregible "en minutos" y la pérdida de Concesiones mantenidas durante años simplifica indebidamente el análisis.[1369] La Resolución no impuso una sanción por un error aislado, sino que determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para expedir nuevamente títulos que la Suprema Corte había dejado insubsistentes; por ello, el impacto sobre las Demandantes no puede separarse de la ausencia de un derecho adquirido a su reexpedición automática.

1043. Finalmente, las alegaciones sobre una supuesta campaña política no demuestran que la medida fuera desproporcionada.[1370] Las Demandantes no acreditan que Economía hubiera ignorado el expediente o actuado conforme a una instrucción política, mientras que la Resolución

---

1365 Réplica, ¶ 997.

1366 Sentencia de la SCJN, paras. 296-297. **C-0092**; Informe Sres. Aguinaco, ¶¶ 244-245.

1367 Réplica, ¶ 998.

1368 Ver Sección II.C.2 *supra*.

1369 Réplica, ¶ 999.

1370 Réplica, ¶ 999.

respondió a un mandato judicial concreto y expuso las razones jurídicas y técnicas de la no factibilidad. Por tanto, incluso bajo el test invocado por las Demandantes, existía una relación razonable entre los objetivos perseguidos, los medios empleados y los intereses afectados.

(5) México no discriminó a las Demandantes

1044. Las Demandantes tampoco demuestran que México las haya discriminado. Además de no establecer que la discriminación constituya una obligación autónoma del nivel mínimo de trato bajo el derecho internacional consuetudinario, no identifican a ningún inversionista mexicano en circunstancias equivalentes que haya recibido un trato más favorable.[1371] La referencia general a empresas estatales no satisface esa carga, pues no demuestra que esas empresas solicitaran concesiones comparables, estuvieran sujetas a una sentencia que dejara sus títulos insubsistentes o presentaran las mismas deficiencias jurídicas y técnicas.[1372]

1045. Las declaraciones políticas citadas por las Demandantes tampoco demuestran que la evaluación de factibilidad se aplicara de manera distinta por razón de su nacionalidad.[1373] La Resolución respondió a la Sentencia de la Suprema Corte y a la evaluación de las solicitudes conforme al marco minero aplicable, que se aplica uniformemente con independencia de la nacionalidad del solicitante. Además, asumiendo que las declaraciones a las que se refieren las Demandantes fuesen relevantes (no lo son), las mismas se referían, a lo sumo, al Proyecto, a la minería a cielo abierto o a la política minera en general; no establecen que Economía negara las Concesiones porque las Demandantes fueran extranjeras.

1046. La alegación de que el Gobierno favoreció a empresas estatales tampoco acredita discriminación "en diseño o efecto".[1374] Las Demandantes deben demostrar un trato menos favorable frente a comparadores que se encontraban en circunstancias similares, como se demostrará *infra*, no lo han hecho.[1375] En ausencia de un comparador adecuado y de un nexo entre

1371 Memorial de Contestación, ¶¶ 605-608, 702–703, 721–748.

1372 Réplica, ¶¶ 1001-1002.

1373 Réplica, ¶ 1002.

1374 Réplica, ¶ 1001.

1375 *Ver infra* Sección V. B.

la nacionalidad de las Demandantes y la Resolución de No Factibilidad, su reclamación de discriminación fracasa.

c. La Sentencia de la Suprema Corte confirma la justificación jurídica de la actuación de Economía

1047. Las Demandantes tergiversan la defensa de México. México no sostiene que una decisión judicial interna pueda justificar una violación del TIPAT.[1376] México sostiene que no existió tal violación porque Economía cumplió una sentencia vinculante, y realizó una evaluación técnica de la factibilidad de las Concesiones conforme a la Ley Minera y su Reglamento, mediante una decisión motivada que fue posteriormente sometida a revisión judicial. Los Artículos 3 y 32 de los Artículos de la CDI y el Artículo 27 de la Convención de Viena no dispensan a las Demandantes de demostrar que la implementación de la Sentencia alcanzó el elevado umbral del Artículo 9.6.

1048. La actuación de Economía estuvo sujeta a un control judicial concreto durante todo el proceso de cumplimiento. El 5 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo de Distrito declaró cumplido el primer efecto de la sentencia —la insubsistencia de los títulos— y requirió expresamente a DG Minas que se pronunciara nuevamente sobre la factibilidad de expedirlos. Tras la emisión de la Resolución de No Factibilidad, el Juzgado solicitó los elementos considerados por Economía, recibió las manifestaciones de las partes y, el 11 de abril de 2023, concluyó que la autoridad había expresado motivos concretos y documentados y había cumplido cabalmente la sentencia. Posteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado confirmó que la consulta indígena solo debía realizarse si previamente se acreditaba la factibilidad de las nuevas concesiones y que DG Minas había actuado con libertad de jurisdicción al efectuar esa evaluación.[1377]

1049. No existe contradicción entre invocar la Sentencia como justificación objetiva de la reevaluación y reconocer que el derecho internacional determina la existencia de una violación. La Sentencia es un hecho jurídicamente relevante para evaluar si la actuación de Economía fue arbitraria, de mala fe o carente de debido proceso; no es una defensa basada en la primacía del

---

1376 Réplica, ¶¶ 1003-1004.

1377 *Ver supra* Sección II.B.3 (El Juzgado 2º de Distrito y el 2º Tribunal Colegiado aclararon los efectos de la Sentencia de la Corte y confirmaron el cumplimiento de Economía); Sección II.D.1 (El Recurso de Inconformidad confirmó que DG Minas dio cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte).

derecho interno sobre el tratado. Las Demandantes no pueden eliminar ese contexto y presentar como una cancelación política lo que fue el cumplimiento de una orden judicial específica.

1050. Finalmente, la alegación de una supuesta falta de franqueza ante los tribunales mexicanos (la cual México niega rotundamente) no sustituye una reclamación de denegación de justicia ni demuestra por sí sola una violación del nivel mínimo de trato. Minera Gorrión tuvo acceso a mecanismos judiciales para controvertir la Resolución, obtuvo decisiones motivadas y posteriormente desistió del juicio de nulidad que podía examinar sus objeciones de fondo.

1051. En conclusión, las Demandantes no han demostrado que las decisiones de SEMARNAT o Economía infringieran el Artículo 9.6 del TIPAT. El expediente demuestra que ambas autoridades actuaron dentro de sus competencias, con fundamentos jurídicos y técnicos identificables, y que las Demandantes contaron con mecanismos efectivos para impugnar esas decisiones; por tanto, sus reclamaciones bajo el NMT deben rechazarse.

d. Las actuaciones de México son conformes con sus obligaciones internacionales en materia de protección ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas

1052. De conformidad con la norma consuetudinaria de interpretación, el Artículo 9.6 debe interpretarse a la luz del objeto y fin del TIPAT, así como cualquier norma pertinente del derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.[1378]

1053. El Preámbulo del TIPAT deja en claro que las Partes Contratantes buscan "reafirmar la importancia de promover […] la protección y conservación ambiental, […] los derechos indígenas, […] y los conocimientos tradicionales".[1379] Este objetivo se refleja en el andamiaje del TIPAT:

- De conformidad con el Artículo 9.16 (Inversión y Objetivos de Medio Ambiente, Salud y otros Objetivos Regulatorios) las Partes pueden "adoptar, mantener o hacer cumplir cualquier medida … que considere apropiada para asegurar que la actividad de inversión en su territorio se realice de una manera sensible al medio ambiente, salud u otros objetivos regulatorios".[1380]

1378 Artículo 31, Convención de Viena. **RL-0045**.

1379 TIPAT, Preámbulo. **RL-0156.**

1380 TIPAT, Artículo 9.16. **RL-0156.**

- A través del Artículo 20.2, las Partes reconocieron que "una mayor cooperación para proteger y conservar el medio ambiente y manejar sosteniblemente sus recursos naturales trae beneficios que pueden contribuir al desarrollo sostenible, a fortalecer su gobernanza ambiental y a complementar los objetivos de este Tratado."[1381]

- El Artículo 20.3.6 señala expresamente que "las Partes reconocen que es inapropiado alentar el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o la reducción de la protección otorgada en sus respectivas leyes ambientales."[1382]

- En el Artículo 20.4, las Partes "afirma[ron] su compromiso para implementar los acuerdos multilaterales de medio ambiente de los que [son] parte", debido a que "juegan un papel importante … en la protección del medio ambiente y que su respectiva implementación de estos acuerdos es crítica para alcanzar los objetivos ambientales de estos acuerdos."[1383]

- El Artículo 29.8 (Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales) permite a las Partes establecer "medidas apropiadas para respetar, preservar y promover los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales", sujeto a las obligaciones internacionales de cada una de ellas.[1384]

1054. Todas esas disposiciones ponen de manifiesto que las obligaciones de protección a la inversión previstas en el Capítulo 9 no pueden interpretarse de manera aislada. Por el contrario, las Partes del TIPAT buscaron un equilibrio entre la protección de las inversiones y otros intereses públicos que las Partes consideraron fundamentales, como la protección del medio ambiente y los derechos indígenas.

1055. Además, el Artículo 9.25 (Derecho Aplicable) establece que cualquier reclamación por una violación al Artículo 9.6 —y de cualquier otra disposición de la Sección A del Capítulo 9 del TIPAT— debe resolverse "de conformidad con este Tratado y con las normas aplicables del

---

1381 TIPAT, Artículo 20.2. **RL-0156.**

1382 TIPAT, Artículo 20.3.6. **RL-0156.**

1383 TIPAT, Artículo 20.4.1. **RL-0156.**

1384 TIPAT, Artículo 29.8. **RL-0156.**

derecho internacional";[1385] incluidas aquellas relativas a la protección del medio ambiente y a los derechos humanos.[1386]

1056. De esta forma, debido a que las medidas impugnadas en este arbitraje fueron adoptadas en ejercicio de facultades regulatorias relacionadas con el medio ambiente y los pueblos indígenas, estas deben examinarse a la luz de las obligaciones internacionales de México en materia de protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. En concordancia con lo anterior, el Prof. Viñuales ha señalado que "[e]nvironment-related disputes, […] are particularly prone to present broader public considerations, which a tribunal should take into account in reaching a decision,[1387] añadiendo que "investment tribunals 'should' indeed integrate environmental considerations into their decision-making process".[1388]

1057. Además, México tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ambientales. Por ejemplo, es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana) desde marzo de 1981,[1389] en la cual se reconocen el derecho a la propiedad,[1390] incluida la propiedad comunitaria,[1391] y el desarrollo progresivo de los derechos

---

1385 TIPAT, Artículo 9.25 ("…cuando una reclamación sea presentada de conformidad con el Artículo 9.19.1(a)(i)(A) (Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje) o con el Artículo 9.19.1(b)(i)(A), el tribunal decidirá las cuestiones en controversia de conformidad con este Tratado y con las normas aplicables del derecho internacional."). **RL-0156.**

1386 *Urbaser S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa c. la República Argentina*, Caso CIADI No. ARB/07/26, Laudo, 8 de diciembre de 2016, ¶ 1199. **RL-0182**. *Bear Creek Mining Corporation c. República de Perú*, Caso CIADI No. ARB/14/21, Opinión parcialmente disidente del Profesor Philippe Sands QC, 12 de septiembre de 2017, ¶¶ 7-14. **RL-0128**. *Eli Lilly et al. c. Canadá*, Case No. UNCT/14/2, Final Award, 16 March 2017, ¶ 106. **RL-0183**; *Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman*, ICSID Case No. ARB/11/33, Award, 3 November 2015, ¶ 389 ("When it comes to determining any breach of the minimum standard of treatment under Article 10.5, the Tribunal must be guided by the forceful defence of environmental regulation and protection provided in the express language of the Treaty."). **RL-0107**.

1387 Viñuales, J. E., 'The Environment breaks into Investment Disputes', in M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe, A., Reinisch (eds), International Investment Law, (Munich/London: C.H. Beck/Hart/Nomos, forthcoming 2012), p. 15. **RL-0184.**

1388 Viñuales, J. E., 'The Environment breaks into Investment Disputes', in M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe, A., Reinisch (eds), International Investment Law, (Munich/London: C.H. Beck/Hart/Nomos, forthcoming 2012), p. 5. **RL-0184.**

1389 Convención Americana sobre Derechos Humanos. **RL-0185**.

1390 Artículo 21, Convención Americana sobre Derechos Humanos. **RL-0185**

1391 Sentencia CoIDH, *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua*, 31 de agosto de 2001, ¶ 149. **RL-0207.**

sociales y culturales.[1392] En 1988, las partes de la Convención Americana acordaron el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador).[1393]

1058. El Artículo 11 del Protocolo de San Salvador reconoce el derecho a un medio ambiente sano y establece que "[t]oda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos".[1394] Esto impone a los Estados parte, incluyendo a México, la obligación de garantizar un medio ambiente sano, así como de proteger, preservar y mejorar el medio ambiente.[1395] Su cumplimiento comprende, entre otros aspectos, la protección de las fuentes hídricas, la calidad del aire y del suelo, la biodiversidad y los recursos forestales, así como la adecuada gestión de residuos y recursos energéticos.[1396] Cabe mencionar que el derecho consuetudinario internacional reconoce la existencia de la obligación estatal de debida diligencia de prevenir daños significativos al medio ambiente.[1397]

1059. Adicionalmente, los derechos humanos tienen una relación íntimamente estrecha con el medio ambiente, ya que el pleno disfrute de los derechos humanos depende en gran medida de un medio ambiente propicio.[1398] En ese sentido, una afectación al medio ambiente conlleva una afectación en el ejercicio de los derechos humanos.[1399] Esta afectación puede ser más severa en grupos vulnerables tales como los pueblos indígenas.[1400]

1060. En su Opinión Consultiva OC-23/17, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana) identificó distintas obligaciones de los Estados parte frente a posibles daños al

---

1392 Artículo 26, Convención Americana sobre Derechos Humanos. **RL-0185**.

1393 Protocolo de San Salvador. **RL-0186**.

1394 Protocolo de San Salvador, Artículo 11. **RL-0186**.

1395 Protocolo de San Salvador, Artículo 11. **RL-0186**. Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, ¶ 60. **RL-0130**.

1396 Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, ¶ 60. **RL-0130**.

1397 *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, I.C.J. Reports 2010 (I), p. 56, ¶ 101. **RL-0133**.

1398 Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, ¶¶ 49, 51-54, 109. **RL-0130**.

1399 Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, ¶¶ 54, 59. **RL-0130**.

1400 Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, ¶¶ 48, 67. **RL-0130**.

medio ambiente a efectos de garantizar los derechos humanos.[1401] Dichas obligaciones incluyen el deber de prevenir daños al ambiente a través de, entre otras cosas, la elaboración de estudios de impacto ambiental.[1402] Dichos estudios deben realizarse antes de la actividad,[1403] abarcar todos los posibles impactos de la totalidad de proyectos relacionados,[1404] tomar en cuenta la conexión de los pueblos indígenas con su territorio[1405] y garantizar la participación de las comunidades en el proceso de estudio de impacto ambiental mediante consultas.[1406] Los Estados parte también están obligados a actuar con base en el principio precautorio.[1407]

1061. Dado que el presente caso está relacionado con medidas estatales para proteger el medio ambiente y los derechos humanos de los pueblos indígenas, la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana "may properly form (or at minimum inform) relevant rules of international law".[1408]

1062. Asimismo, el Convenio 169, del que México es parte, obliga a los Estados a "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".[1409]

1063. Las actuaciones de México fueron conformes con todas estas obligaciones. *Primero*, la decisión de la SEMARNAT de negar la MIA es conforme con la obligación de México de proteger el medio ambiente y garantizar un medio ambiente sano, como se lo exige el Artículo 11 del

---

1401 Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017. **RL-0130**.

1402 Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, ¶¶ 127-130, 156-157, 242, a) y b). **RL-0130**.

1403 Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, ¶ 162. **RL-0130**.

1404 Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, ¶ 165. **RL-0130**.

1405 Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, ¶ 169. **RL-0130**.

1406 Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, ¶ 166. **RL-0130**.

1407 Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, ¶¶ 175-180. **RL-0130**. Declaración de Río, Principio 15. **RL-0027**.

1408 Ése fue el razonamiento del tribunal en *Mainstream v Germany* al aceptar la relevancia de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre cambio climático de julio de 2025. **RL-0215**. *Mainstream Renewable Power Ltd and others v. Federal Republic of Germany*, ICSID Case No. ARB/21/26, Award, 13 May 2026, ¶ 867 ("In cases dealing with State measures to mitigate climate change, the ICJ Advisory Opinion may properly form (or at minimum inform) relevant rules of international law applicable in the relations between the parties."). **RL-0187**.

1409 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Artículo 6. **RL-0028**.

Protocolo de San Salvador, así como con su obligación de prevenir daños al ambiente a efectos de garantizar los derechos humanos de la Convención Americana.

1064. La SEMARNAT determinó que Minera Gorrión no demostró la disponibilidad suficiente y segura de agua ni los posibles efectos de las presas FWD y WSD sobre los cauces existentes y los ecosistemas cercanos.[1410]

1065. También determinó que la MIA-R no contenía información técnica suficiente y confiable para evaluar los impactos ambientales del Proyecto, debido a deficiencias en la identificación y valoración de impactos,[1411] los estudios sobre flora y fauna,[1412] el manejo de jales y tepetates[1413] y los instrumentos metodológicos empleados, entre otros.[1414] En particular, la información presentada no permitía determinar con certeza la magnitud de los impactos ni la suficiencia de las medidas de prevención y mitigación.[1415]

1066. Esta situación llevó a la SEMARNAT a determinar que:

> la promovente no presentó los elementos técnicos científicos necesarios para establecer una certeza científica absoluta, para demostrar que el desarrollo del Proyecto en los sitios seleccionados por la promovente garantizan la viabilidad ambiental y jurídica del Proyecto, y en consecuencia, *no es posible determinar que en el desarrollo del mismo, no causará desequilibrios ecológicos en los ecosistemas en los que se pretende insertar* …[1416]

1067. En este sentido, la negativa de la MIA constituyó una medida preventiva frente a impactos cuya magnitud y consecuencias no podían ser adecuadamente evaluadas. Tal como lo ha expresado la Corte Interamericana, "[t]omando en cuenta que frecuentemente no es posible restaurar la situación existente antes de la ocurrencia de un daño ambiental, la prevención debe ser la política principal respecto a la protección del medio ambiente."[1417]

1410 Memorial de Contestación, ¶¶ 275-279. *Ver* también Sección II.F.3.

1411 Memorial de Contestación, ¶¶ 280-284.

1412 Memorial de Contestación, ¶¶ 291-293.

1413 Memorial de Contestación, ¶¶ 286-290.

1414 Memorial de Contestación, ¶¶ 297-298.

1415 Memorial de Contestación, ¶¶ 294-296.

1416 Resolución negativa de la MIA, 17 de diciembre de 2020, pp. 133-135. [Énfasis añadido] **C-0086**.

1417 Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, ¶ 130. **RL-0130**.

1068. *Segundo*, la resolución de no factibilidad de la Secretaría de Economía se emitió en cumplimiento de la Sentencia de la Suprema Corte, la cual estuvo firmemente sustentada en su autoridad constitucional y convencional para proteger los derechos de las comunidades indígenas conforme al Convenio No. 169 de la OIT y a los estándares interamericanos de derechos humanos.[1418] En particular, la Suprema Corte determinó expresamente que la emisión de los títulos de concesión sin consulta previa fue contraria al Convenio No. 169 de la OIT:

> [C]onforme al artículo 2° constitucional, así como los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Comunidad Indígena de Tecoltemi contaba con un derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado, de manera que, al haberse emitido estos títulos de concesión minera afectando parte de sus tierras, sin haberse llevado a cabo dicha consulta, debe prevalecer su insubsistencia.
>
> […]
>
> En el caso particular la Secretaría de Economía durante el proceso de emisión de los títulos de concesión minera sobre los predios denominados "Cerro grande" y "Cerro grande 2", debió prever un procedimiento de consulta a la comunidad indígena, a la hoy parte quejosa, que cumpliera con todos los requisitos señalados por el Convenio 169 de la OIT, pues las actividades de extracción de los minerales del subsuelo – objeto de los títulos concesionarios – son bienes que comparten un doble régimen. […]
>
> Por tanto, la autoridad señalada como responsable, en efecto, incurrió en la omisión de realizar los mecanismos necesarios de consulta a la Comunidad Indígena de Tecoltemi, previo a otorgar las concesiones. Lo anterior, en atención a que dicha autoridad administrativa se encuentra constreñida a cumplir con la obligación convencional prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es parte.[1419]

1069. Por ello, la Suprema Corte dejó insubsistentes los títulos de concesión y ordenó a Economía "pronunci[arse] nuevamente con relación a la factibilidad de expedir los títulos solicitados, y en el caso de que se considere que se cumplen las condiciones y requisitos, antes de otorgarlas sobre terrenos de la comunidad indígena, deberá previamente realizar el procedimiento de consulta a la comunidad indígena, observando el contenido y requisitos establecidos en […]el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes".[1420]

1418 Sentencia de la Suprema Corte, 16 de febrero de 2022, pp. 3, 46, 77, 149, 197-204, entre otros. **R-0092**.

1419 Sentencia de la Suprema Corte, 16 de febrero de 2022, pp. 197-205, ¶¶ 278-295. **R-0092**.

1420 Amparo en Revisión 134/2021, Sentencia de la Suprema Corte, pp.206-206. **C-0092**.

1070. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que los integrantes de las comunidades indígenas tienen un estrecho vínculo con sus tierras tradicionales y los recursos naturales que ahí se encuentren.[1421] En ese sentido, dado que las concesiones abarcaban el territorio de Tecoltemic, la Suprema Corte salvaguardó el derecho humano de Tecoltemic a la propiedad en relación con su identidad colectiva.[1422]

1071. La reclamación de las Demandantes de que las actuaciones de México fueron arbitrarias es incorrecta. De acuerdo con la CIJ en *ELSI*, la arbitrariedad "is not so much something opposed to a rule of law, as something opposed to the rule of law".[1423] En ese sentido, una medida adoptada de conformidad con las obligaciones internacionales de protección del medio ambiente —incluidas aquellas relativas a la protección de los derechos humanos— no puede calificarse de arbitraria.[1424] Como se ha demostrado, las actuaciones de México fueron adoptadas de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. En consecuencia, las medidas reclamadas en el presente arbitraje no pueden ser calificadas como arbitrarias.

C. Las Demandantes no han demostrado que existió una denegación del Trato Nacional o del Trato de Nación Más Favorecida con respecto de supuesta inversión

1072. La Réplica de las Demandantes reitera sus reclamaciones de discriminación conforme a los Artículos 9.4 (Trato Nacional o "TN") y 9.5 (Nación Más Favorecida o "NMF") del TIPAT, sin subsanar las deficiencias fundamentales identificadas por México en su Memorial de Contestación.

1421 Sentencia CoIDH, *Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay*, 17 de junio de 2005, ¶ 135. **RL-0216**. *Ver* Sentencia CoIDH, *Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay*, 29 de marzo de 2006, ¶ 118. **RL-0217**.

1422 Artículo 21, Convención Americana de Derechos Humanos. **RL-0185**. *Ver* Sentencia de la SCJN, 16 de febrero de 2022, p. 177, ¶ 239 ["derechos colectivos de dichos pueblos tales como el derecho a la propiedad colectiva y el aprovechamiento de sus recursos naturales a fin de crear un enfoque de análisis que permita cumplir su objetivo que no es otro que el ejercicio real de sus derechos y la expresión de su identidad individual y colectiva […]". **C-0092**.

1423 *Cargill, Incorporated v. United Mexican States*, ICSID Case No. ARB (AF)/05/2, Award, 18 September 2009, ¶ 291, citando *Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI)*, Judgment, I.C.J. Reports 1989, ¶ 128. **CL-0012**.

1424 *Peteris Pildegovics and SIA North Star v. Kingdom of Norway*, ICSID Case No. ARB/20/11, Award, 22 December 2023, ¶ 543. **RL-0188**.

1073. Las Partes coinciden en que estas reclamaciones requieren determinar (i) si el Estado otorgó un "trato" al inversionista o a su inversión; (ii) si el inversionista o la inversión se encontraba en "circunstancias similares" respecto del comparador pertinente; y (iii) si recibió un trato menos favorable.[1425] Corresponde a las Demandantes identificar los comparadores pertinentes.[1426] Las Partes también coinciden en que las obligaciones de TN y NMF no exigen extender a las Demandantes el "mejor trato" otorgado a cualquier inversionista.[1427]

1074. Ni en su Memorial de Demanda ni en su Réplica las Demandantes logran acreditar los elementos necesarios para establecer una violación del TN o del NMF. En lugar de demostrar los requisitos específicos de los Artículos 9.4 y 9.5, las Demandantes se limitan a reformular las mismas alegaciones fácticas que sustentan sus reclamaciones de expropiación y trato justo y equitativo bajo una teoría jurídica distinta. Esa reformulación no basta. Las Demandantes aplican incorrectamente cada elemento del estándar por lo que sus reclamaciones de TN y NMF deben ser rechazadas.

1075. Para comenzar, las Demandantes afirman que México adoptó una "política anti-minera discriminatoria *de facto*" dirigida contra los inversionistas mineros extranjeros.[1428] Esa acusación no solo carece de sustento probatorio, sino que contradice la propia evidencia invocada por las Demandantes. Como México ya demostró, durante el mismo período SEMARNAT autorizó las MIAs de otros proyectos mineros de propiedad extranjera, incluido Camino Rojo, de propiedad canadiense.[1429] Este hecho desmiente la premisa de que las medidas impugnadas respondieran a una campaña contra la inversión extranjera: las Demandantes no pueden sostener, por una parte, que México perseguía a los inversionistas mineros extranjeros por razón de su nacionalidad y, por otra, reconocer que el propio Estado autorizó proyectos mineros pertenecientes a inversionistas extranjeros —incluso canadienses— en circunstancias contemporáneas.

1425 Réplica, ¶ 1007; Memorial de Contestación, ¶¶ 718-731.

1426 *Finley Resources Inc., MWS Management Inc. and Prize Permanent Holdings, LLC v. United Mexican States*, ICSID Case No. ARB/21/25, Revised Decision on Jurisdiction and Liability, 8 January 2025, ¶¶ 538, 541. **RL-0105.**

1427 Réplica, ¶ 1022.

1428 Réplica, ¶¶ 1006, 1008.

1429 Memorial de Contestación, ¶ 739; Memorial de Demanda, ¶¶ 649-650.

1076. La propia evidencia de las Demandantes contradice su teoría de discriminación por nacionalidad. Su perito en materia de daños reconoce que "permitting of all mining projects, not just Ixtaca, came to a standstill under the new Administration."[1430] Si la política invocada por las Demandantes afectó indistintamente a todos los proyectos mineros —no únicamente al suyo—, entonces no puede tratarse de una medida dirigida contra las Demandantes por razón de su nacionalidad, sino de una política general aplicable sin distinción al sector extractivo en su conjunto.

1077. Esa contradicción refleja el defecto central de sus reclamaciones. Para establecer una violación de los Artículos 9.4 o 9.5, las Demandantes debían demostrar que un inversionista o una inversión en circunstancias similares recibió un trato más favorable por razón de su *nacionalidad*. No lo han hecho. El hecho de que distintos proyectos mineros obtuvieran resultados regulatorios diferentes no significa que la Demandada discriminara a dichos proyectos por razón de su nacionalidad.

1078. Las reclamaciones de las Demandantes fracasan en cada uno de los demás elementos del análisis. En primer lugar, las medidas que invocan no constituyen "trato" en el sentido de las disposiciones sobre TN y NMF. En segundo lugar, las Demandantes no han identificado ningún comparador adecuado que se encuentre en circunstancias similares. Y, aun si tal comparador existiera, tampoco han demostrado que hubieran recibido un trato menos favorable. En cualquier caso, las medidas adoptadas por México respondieron a consideraciones regulatorias legítimas, racionales y no discriminatorias, y no a la nacionalidad de las Demandantes.

1. Las Demandantes no han demostrado "trato" discriminatorio en el sentido de los Artículos 9.4 y 9.5

1079. Las Demandantes sostienen que el concepto de "trato" bajo los Artículos 9.4 y 9.5 constituye un "requisito amplio y poco exigente", capaz de abarcar prácticamente cualquier medida estatal que afecte a un inversionista o a su inversión.[1431] Sobre esa base, acusan a México de "confundir deliberadamente" el análisis de umbral sobre el "trato" con la cuestión de si dicho trato fue discriminatorio.[1432] Esa caracterización tergiversa la posición de México y, más

1430 Segundo Informe Brattle, ¶ 33.

1431 Réplica, ¶ 1010.

1432 Réplica, ¶ 1013.

importante aún, pretende analizar el término "trato" de manera aislada del contenido y objeto específicos de las obligaciones de TN y NMF.

1080. México no sostiene que la Resolución Negativa de la MIA de SEMARNAT o la Resolución de No Factibilidad de Economía queden fuera del ámbito de los Artículos 9.4 y 9.5 por el solo hecho de constituir ejercicios legítimos de potestades regulatorias.[1433] Su posición es más precisa: el concepto de "trato" previsto en esas disposiciones debe interpretarse a la luz de la naturaleza y finalidad de las obligaciones de TN y NMF, esto es, evitar diferencias de trato basadas en la *nacionalidad*. Así lo confirma expresamente la Nota Interpretativa acordada por las Partes del TIPAT: los Artículos 9.4 y 9.5 "do not prohibit all measures that result in differential treatment. Rather, they seek to ensure that foreign investors or their investments are not treated less favourably on the basis of their nationality."[1434] Por consiguiente, no basta con identificar una medida estatal que haya producido consecuencias adversas para una inversión extranjera y denominarla "trato". Para que resulte pertinente bajo estas disposiciones, dicho trato debe evidenciar algún vínculo con la nacionalidad del reclamante.

1081. *Finley* respalda esa interpretación. El tribunal concluyó que el objeto del trato nacional es impedir la discriminación basada en la nacionalidad y que la comparación pertinente debe realizarse entre el reclamante o su inversión y un inversionista o inversión nacional que se encuentre en circunstancias similares.[1435] Así, aunque el "trato" sea un requisito independiente, la reclamación no puede prosperar sin una comparación que revele la clase de discriminación que la obligación pretende evitar.

1082. No existe, por ello, la supuesta confusión entre el primer y el tercer elemento del análisis que las Demandantes pretenden atribuir a México.[1436] El vínculo entre el "trato" impugnado y la nacionalidad no puede ser excluido artificialmente del análisis, pues constituye el eje mismo de las obligaciones de TN y NMF. La interpretación propuesta por las Demandantes, en cambio, descontextualiza el término "trato" y corre el riesgo de convertir esas disposiciones en garantías

---

1433 Réplica, ¶ 1012, Memorial de Contestación, ¶ 733.

1434 Nota Interpretativa de los Artículos 9.4 y 9.5 del TIPAT, ¶ 2. **RL-0134**.

1435 *Finley Resources Inc., MWS Management Inc. and Prize Permanent Holdings, LLC v. United Mexican States*, ICSID Case No. ARB/21/25, Revised Decision on Jurisdiction and Liability, 8 January 2025, ¶¶ 539-542. **RL-0105.**

1436 Réplica, ¶ 1013.

generales frente a cualquier decisión regulatoria adversa que produzca resultados distintos entre proyectos, incluso cuando tales diferencias respondan a las circunstancias particulares de cada uno y no a la nacionalidad de sus inversionistas.

1083. Ello tampoco significa, como sugieren las Demandantes, que un Estado pueda sustraer una medida discriminatoria al escrutinio del Tratado simplemente calificándola como regulatoria o lícita.[1437] Significa, más bien, que corresponde a las Demandantes demostrar que las medidas impugnadas constituyeron el tipo de trato que los Artículos 9.4 y 9.5 prohíben: un trato diferencial basado en la nacionalidad. Esa demostración está ausente en este caso.

1084. México explicó que la Resolución Negativa de la MIA fue el resultado de una evaluación individualizada del Proyecto Ixtaca conforme al marco establecido por la LGEEPA y su Reglamento, que identificó deficiencias ambientales concretas en la información presentada por Minera Gorrión.[1438] De igual manera, la Resolución de No Factibilidad no surgió de una decisión dirigida contra las Demandantes por su nacionalidad, sino del procedimiento que Economía debió llevar a cabo como consecuencia de la sentencia vinculante de la Suprema Corte en el caso *Tecoltemic*, que dejó insubsistentes las concesiones y ordenó reevaluar su factibilidad bajo las condiciones establecidas por esa decisión.[1439] Las Demandantes podrán discrepar de esos resultados, pero esa discrepancia no transforma las decisiones en trato discriminatorio bajo los Artículos 9.4 y 9.5.

1085. La invocación de *Merrill & Ring c. Canadá* y *Corn Products c. México* tampoco subsana este defecto.[1440] Aun suponiendo, *arguendo*, que el término "trato" deba recibir la amplitud que las Demandantes le atribuyen como cuestión de umbral, de ello no se sigue que toda medida que afecte adversamente a una inversión extranjera quede comprendida, sin más, dentro de la prohibición sustantiva de TN o NMF. Esas obligaciones siguen siendo de naturaleza relativa. Una decisión adoptada con fundamento en las circunstancias regulatorias particulares de una inversión, y no en la nacionalidad de su propietario, no puede convertirse en una violación de los Artículos

1437 Réplica, ¶ 1014.

1438 Memorial de Contestación, ¶¶ 733-734.

1439 *Ver supra* Sección II.B; Memorial de Contestación, ¶¶ 55-56, 734, 737 y 744.

1440 Réplica, ¶¶ 1010, 1014.

9.4 o 9.5 por el simple hecho de haber producido un resultado menos favorable que el obtenido por otro proyecto.

1086. En cualquier caso, aun si se considerara satisfecho el requisito de "trato", las Demandantes todavía tendrían que demostrar la existencia de comparadores en "circunstancias similares" y un trato menos favorable basado en la nacionalidad. Como se explica a continuación, no acreditan ninguno de esos elementos.

2. Las Demandantes no fueron tratadas menos favorablemente que inversionistas o inversiones "en circunstancias similares"

1087. Las Demandantes no han demostrado que ellas o sus inversiones hayan recibido un trato menos favorable que inversionistas o inversiones en "circunstancias similares". Su reclamación se limita a contrastar resultados regulatorios distintos, sin acreditar que los proyectos comparados fueran materialmente comparables.

1088. Respecto de la comparabilidad, México nunca ha sostenido que los comparadores deban ser idénticos.[1441] Su posición es que la determinación de si dos inversionistas o inversiones se encuentran en "circunstancias similares" exige considerar la totalidad de las circunstancias y en este caso, las distinciones señaladas por la parte demandada son fundamentales.[1442] Las diferencias identificadas por México son fundamentales porque guardan una relación directa con las decisiones que SEMARNAT y Economía debían adoptar.

[1441] Réplica, ¶ 1016.

[1442] Memorial de Contestación, ¶¶ 724, 738. *Ver también Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman*, ICSID Case No. ARB/11/33, Award, November 3, 2015, ¶ 463 ("The Claimant must point to evidence that a domestic [or foreign in case of MFN] operator which possessed the same or substantially similar approvals as the Claimant, and carried out the same or substantially similar material conduct (including the Claimant's repeated violations of the terms of those approvals) was treated less harshly or according to a different standard."). **RL-0107**; *Invesmart B.V. v. Czech Republic,* Award, June 26, 2009, ¶ 415 ("The question of whether Union Banka was similarly situated to other banks requires more than an identification of single points of similarity, such as size, origin or private ownership. There must be a broad coincidence of similarities covering a range of factors. The comparators must be similarly placed in the market and the circumstances of the request for state aid must be similar. Therefore, the Tribunal concludes that Invesmart has not demonstrated that Union Banka was subject to discrimination by the Czech Republic."). **CL-0067**; *William Ralph Clayton, William Douglas Clayton, Daniel Clayton and Bilcon of Delaware, Inc. v. Government of Canada*, PCA Case No. 2009-04, Award on Jurisdiction and Liability, March 17, 2015, ¶ 695 (afirmando que los comparadores deben ser "suficientemente similares" para sostener una comparación de TN.). **CL-0091**.

1089. *Finley Resources c. México* confirma este enfoque. El tribunal sostuvo que corresponde al demandante identificar inversionistas o inversiones comparables y que la determinación de si se encuentran en "circunstancias similares" depende necesariamente de los hechos. Precisó, además, que las "circunstancias" son las condiciones o hechos que acompañan al trato —no el trato mismo— y que el comparador debe ser similar al reclamante "en todos los aspectos pertinentes", salvo la nacionalidad de la propiedad.[1443]

1090. La nota al pie 14 del Artículo 9.4 confirma precisamente ese enfoque contextual al disponer que el análisis debe tomar en cuenta, entre otros factores, si la diferencia de trato responde a objetivos legítimos de bienestar público.[1444] Las Demandantes reconocen que tanto la nota al pie 14 como la Nota Interpretativa de los Artículos 9.4 y 9.5 forman parte del contexto aplicable, pero sostienen que México pretende convertir los objetivos legítimos de bienestar público en una "cuestión dispositiva de umbral".[1445] Esa caracterización tergiversa la posición de México. México no sostiene que la mera invocación de un objetivo público excluya automáticamente la existencia de "circunstancias similares"; su posición es que, conforme al propio texto del Tratado, la razón que explica una diferencia de trato es una de las circunstancias relevantes para determinar si la comparación es válida en primer lugar.

1091. La Nota Interpretativa confirma esa lectura y explica la función de la nota al pie 14. En particular, aclara que la expresión "circunstancias similares" busca asegurar que las comparaciones se realicen únicamente entre inversionistas o inversiones que compartan características relevantes.[1446] La nota al pie 14 identifica, a su vez, una de esas características relevantes: si la distinción responde a objetivos legítimos de bienestar público. Leídas conjuntamente, ambas disposiciones dejan claro que tales objetivos no constituyen una justificación externa que solo deba

---

1443 *Finley Resources Inc., MWS Management Inc. and Prize Permanent Holdings, LLC v. United Mexican States*, ICSID Case No. ARB/21/25, Revised Decision on Jurisdiction and Liability, 8 January 2025, ¶¶ 541-542. **RL-0105.**

1444 Nota Interpretativa de los Artículos 9.4 y 9.5 del TIPAT, ¶ 3 ("The phrase 'in like circumstances' ensures that comparisons are made only with respect to investors or investments on the basis of relevant characteristics."). **RL-0134**

1445 Réplica, ¶¶ 1018-1020.

1446 Nota Interpretativa de los Artículos 9.4 y 9.5 del TIPAT, ¶ 3. **RL-0134**.

examinarse después de acreditada la discriminación; integran el propio análisis de si los sujetos comparados se encontraban en "circunstancias similares".

1092. Esta secuencia es consistente con la naturaleza comparativa de las obligaciones de TN y NMF. Como explicó el tribunal en *Archer Daniels Midland c. México*, antes de determinar si existió un trato menos favorable debe establecerse que los sujetos comparados se encontraban en circunstancias similares; si esa premisa falla, la comparación no puede sostener una reclamación de discriminación.[1447] En consecuencia, el análisis de "circunstancias similares" debe atender tanto a las características materiales relevantes de los proyectos como a las razones regulatorias que explican cualquier diferencia de trato entre ellos.

1093. En *Finley*, el tribunal siguió esa misma secuencia: primero examinó las características objetivas de las situaciones comparadas y solo después determinó si el trato había sido menos favorable.[1448]

1094. Este estándar, por tanto, no permite establecer "circunstancias similares" mediante coincidencias abstractas o aisladas. Exige comparar las características concretas pertinentes para la medida impugnada y determinar si las diferencias identificadas explican razonablemente el distinto resultado. Precisamente ese análisis demuestra que Ixtaca no se encontraba en circunstancias similares a Camino Rojo, El Boleo o Río Huazamota.

1095. Las Demandantes aceptan que debe examinarse si la diferencia de trato entre Ixtaca y los proyectos propuestos como comparadores guarda una conexión racional con objetivos legítimos de bienestar público.[1449] Esa conexión existe. Por un lado, la evaluación de la MIA del Proyecto estuvo directamente vinculada con las características ambientales, técnicas y sociales específicas del mismo y con las obligaciones de México en materia de protección ambiental y derechos de los pueblos indígenas.[1450] Por otro lado, la Resolución de No Factibilidad se produjo como

---

1447 *Archer Daniels Midland Company c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/04/5, Laudo, 21 de noviembre de 2007, ¶ 196. **RL-0108.**

1448 *Finley Resources Inc., MWS Management Inc. y Prize Permanent Holdings, LLC c. los Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB/21/25, Decisión sobre Jurisdicción y Responsabilidad (Revisada), 8 de enero de 2025, ¶¶ 538, 838-847. **RL-0105.**

1449 Réplica, ¶¶ 1020-1021.

1450 Ver Sección II.F *supra*.

consecuencia de la sentencia vinculante de la Suprema Corte y de la reevaluación que ésta exigió, una decisión exclusiva para las Demandantes.[1451] Estas consideraciones no fueron objetivos invocados "en abstracto", sino circunstancias jurídicas y regulatorias directamente relacionadas con las medidas adoptadas y, por tanto, relevantes para determinar si Ixtaca podía compararse válidamente con los proyectos invocados por las Demandantes.

1096. A ello se suman las diferencias materiales entre los propios proyectos. Las Demandantes intentan reducir las "circunstancias similares" a tres coincidencias de alto nivel —sector económico, régimen jurídico y productos o servicios— que resultan insuficientes para establecer una comparación válida.[1452] Que dos empresas pertenezcan al sector extractivo y requieran una MIA no elimina diferencias en escala, métodos de explotación y procesamiento, generación y manejo de residuos, infraestructura, entorno ecológico, regulatorio, contexto social, presencia indígena, medidas de mitigación o restricciones judiciales. Son precisamente esas características las que resultan relevantes para las decisiones regulatorias impugnadas. Las Demandantes no pueden, por tanto, identificar resultados distintos y deducir de esa sola diferencia la existencia de discriminación.

1097. Las Demandantes tampoco pueden suplir esa deficiencia recurriendo a alegaciones de intención discriminatoria. Las Demandantes sostienen que sus alegaciones sobre motivación política constituyen únicamente evidencia "adicional y corroborativa" de una supuesta violación.[1453] Pero esa caracterización no corresponde a la teoría que ellas mismas han desarrollado: califican la Resolución Negativa de la MIA y la Resolución de No Factibilidad como "políticamente motivadas", las vinculan con las supuestas políticas "anti-mineras" del Gobierno y recurren reiteradamente a declaraciones públicas y reuniones gubernamentales para sostener que las decisiones relativas a Ixtaca estuvieron dirigidas contra ellas.[1454] No pueden construir su teoría de discriminación sobre una supuesta motivación política y, al mismo tiempo, reducirla a un elemento meramente accesorio cuando México señala que la intención no sustituye la prueba de los demás elementos del estándar bajo NT o NMF.

1451 Ver Sección II.B *supra*.

1452 Réplica, ¶ 1017.

1453 Réplica, ¶ 1024.

1454 Réplica, ¶ 363- 500, 650, 1021, 1038.

1098. Su lectura de *Corn Products* tampoco contradice la posición de México. Si bien el tribunal reconoció en una "estrecha relación" entre la intención discriminatoria y el análisis de las "circunstancias similares", no utilizó la intención como sustituto de ese requisito: dedicó un análisis separado a determinar la comparabilidad de los productores involucrados antes de abordar la relevancia de la nacionalidad.[1455] *Corn Products*, por tanto, no permite a las Demandantes utilizar sus alegaciones de motivación política para suplir la falta de comparadores en circunstancias similares.

1099. México tampoco sostiene, como sugieren las Demandantes, que la intención sea irrelevante en toda circunstancia.[1456] El punto de México es que la intención por sí sola es insuficiente. Esto es precisamente lo que los tribunales en los casos citados en el Memorial de Contestación resolvieron.[1457] Ninguna de estas decisiones establece que la evidencia de intención—y menos aún las alegaciones especulativas de intención no respaldadas por el expediente—pueda sustituir la prueba de efecto discriminatorio. Una reclamación de discriminación *de facto* exige demostrar que la medida estaba especialmente dirigida contra los inversionistas extranjeros.[1458]

1100. En este caso, las Demandantes describen la supuesta política antiminera como una política general de la Administración, pero no demuestran que su finalidad o sus efectos discriminaran por razón de nacionalidad

1101. Sus referencias a declaraciones públicas de funcionarios y a supuestas reuniones "a puerta cerrada" no establecen que la nacionalidad de las Demandantes haya determinado las decisiones regulatorias específicas relativas a Ixtaca. Son, a lo sumo, elementos circunstanciales de carácter

---

1455 *Corn Products International Inc. v. United Mexican States*, ICSID Case No. ARB(AF)/04/1, Decision on Responsibility, 15 de enero de 2008, ¶¶ 117-118, 125-136. **CL-0055**.

1456 Réplica, ¶ 1026.

1457 Memorial de Contestación, ¶ 730 nota al pie 940 citando *S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada*, UNCITRAL, Partial Award, 13 November, 2000, ¶ 254, **CL-0023**; *Siemens v. The Argentine Republic*, ICSID Case No. ARB/02/8, Award, 17 January 2007, ¶ 321 ("The Tribunal concurs that intent is not decisive or essential for a finding of discrimination"). **RL-0114**; *Occidental Exploration and Production Company c. República del Ecuador*, TAIL caso No. UN 3467, Sentencia Final, 1 de julio de 2004, ¶ 177 (encontrando que la intención no es esencial y que lo que importaba era el resultado de la política en cuestión). **RL-0179**; *IC Power Ltd and Kenon Holdings Ltd v. Republic of Peru*, ICSID Case No. ARB/19/19, Award, October 3 2023, ¶ 507 ("an overwhelming majority of tribunals have considered discriminatory effect (as opposed to intent) sufficient for a finding of discrimination") **CL-0128**.

1458 *Finley Resources Inc., MWS Management Inc. y Prize Permanent Holdings, LLC c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB/21/25, Decisión sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 8 de enero de 2025, ¶¶ 854-855. **RL-0105.**

general que no demuestran el nexo que las Demandantes pretenden atribuirles. Además, el hecho objetivo de que SEMARNAT autorizara proyectos pertenecientes a otros inversionistas extranjeros debilita, en lugar de corroborar, la inferencia de que la nacionalidad extranjera fuera el criterio determinante.

1102. Resulta particularmente relevante que el propio testigo de las Demandantes, Daniel Santamaría Tovar, reconozca que la oposición anti-minera en la región de Puebla no estaba dirigida contra inversionistas extranjeros por razón de su nacionalidad y había empezado mucho antes del supuesto mandato político del presidente López Obrador en 2018. Describe cómo las ONGs primero lanzaron una campaña exitosa contra el proyecto de Minera Frisco —una empresa mexicana controlada por Carlos Slim— en Tetela de Ocampo, Puebla, antes de dirigir su atención a Ixtaca.[1459] Si la oposición que las Demandantes califican de discriminatoria se dirigió primero contra una empresa mexicana, la teoría de que las medidas estatales obedecieron a la nacionalidad canadiense de las Demandantes resulta insostenible.

1103. Es en ese contexto que deben analizarse Camino Rojo, El Boleo y Río Huazamota, los tres proyectos que las Demandantes proponen como comparadores.[1460] Estos proyectos presentan diferencias sustanciales entre ellos y con respecto de Ixtaca en las circunstancias pertinentes para evaluar el trato regulatorio que las Demandantes impugnan. Camino Rojo es un proyecto canadiense en Zacatecas con características regulatorias, técnicas y sociales distintas; El Boleo era una ampliación de una operación minera histórica en Baja California Sur, con infraestructura y autorizaciones previas; y Río Huazamota consistía en extracción mecánica de gravas y arenas a una escala incomparablemente menor.[1461]

1104. Agruparlos por el solo hecho de que todos estuvieran sometidos a algún tipo de evaluación ambiental elimina precisamente las características relevantes que la Nota Interpretativa o la nota al pie 14 y *Finley* exigen considerar. En *Finley*, la pertenencia al mismo sector fue solo el punto de partida; la comparabilidad se sustentó también en la misma contraparte estatal, el mismo tipo

1459 Segunda Declaración Testimonial del Sr. Santamaría, ¶ 33.

1460 Réplica, ¶ 1027.

1461 Memorial del Contestación, ¶¶ 738-743.

de servicio, la misma conducta contractual y perjuicios equivalentes.[1462] No existe una coincidencia semejante en las circunstancias pertinentes para comparar el trato regulatorio otorgado a Ixtaca con el otorgado a los proyectos invocados por las Demandantes.

1105. Respecto de Camino Rojo, México no necesita sostener que su propiedad canadiense lo excluya categóricamente como posible comparador.[1463] El punto es doble. Primero, la autorización de un proyecto perteneciente a otro inversionista canadiense contradice la teoría de las Demandantes de que México implementó una política dirigida contra la inversión extranjera o canadiense. Segundo, y decisivamente, Camino Rojo no se encontraba en circunstancias similares a Ixtaca en los aspectos pertinentes para la evaluación ambiental.[1464]

1106. Las diferencias identificadas por México no son detalles menores.[1465] El Proyecto Ixtaca reunía circunstancias que ninguno de los supuestos comparadores compartía en su conjunto: era un proyecto minero nuevo y de gran escala; su evaluación ambiental planteaba cuestiones específicas relativas, entre otras, a jales, agua, uso de suelo, flora y fauna y medidas de mitigación; se desarrollaba en un contexto social e indígena particularmente volátil; y, respecto de las Concesiones, estaba sujeto a una sentencia de la Suprema Corte que dejó los títulos insubsistentes y exigió a Economía pronunciarse nuevamente sobre su factibilidad.[1466] Esas características guardan una relación directa con las decisiones que las Demandantes impugnan y, por ello, no pueden ser descartadas como diferencias secundarias.

1107. Precisamente por esa razón es insuficiente señalar que todos los proyectos pertenecían al sector extractivo, estaban sujetos a la LGEEPA y se encontraban en municipios con alguna presencia indígena.[1467] Ese nivel de generalidad demostraría "circunstancias similares" para prácticamente cualquier proyecto minero sujeto a evaluación federal. La Nota Interpretativa exige

---

1462 *Finley Resources Inc., MWS Management Inc. y Prize Permanent Holdings, LLC c. Etsaods Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB/21/25, Decisión sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 8 de enero 2025, ¶¶ 838-847. **RL-0105.**

1463 Réplica, ¶ 1028.

1464 Memorial del Contestación, ¶ 740.

1465 Réplica, ¶ 1030.

1466 Ver Sección II.B.2.c. *supra*; Memorial de Contestación, ¶¶ 737-744.

1467 Réplica, ¶ 1032.

características relevantes, y el expediente demuestra que las condiciones técnicas, ambientales y sociales de los proyectos diferían sustancialmente.

1108. Tampoco existe una práctica jurídicamente vinculante conforme a la cual la presencia de comunidades indígenas obligara a SEMARNAT a conceder una autorización condicionada.[1468] La LGEEPA contempla autorización, autorización condicionada o negativa y exige evaluar cada MIA conforme a su expediente. Que otros proyectos hayan recibido autorizaciones condicionadas no demuestra que Ixtaca tenía derecho al mismo resultado cuando su evaluación presentaba cuestiones adicionales e independientes de la consulta indígena. El marco mexicano expresamente contempla la negativa cuando el proyecto incumple la legislación ambiental.

1109. Por la misma razón, las tres categorías de diferencias que las Demandantes intentan minimizar —contexto geográfico y social, métodos de producción y generación de residuos, y suficiencia de las medidas de prevención y mitigación— son precisamente cuestiones que una autoridad ambiental debe considerar.[1469] No son justificaciones *post hoc* para discriminar; son elementos que explican por qué proyectos que difieren en aspectos materialmente relevantes para la evaluación ambiental pueden legítimamente producir decisiones regulatorias distinta.

1110. Tampoco favorece a las Demandantes que Camino Rojo, El Boleo y Río Huazamota difieran entre sí.[1470] Al contrario, pone de manifiesto que SEMARNAT evalúa proyectos de manera individualizada y que el resultado no se determina mediante una regla automática vinculada con la nacionalidad del inversionista. El elemento común que las Demandantes identifican —la eventual necesidad de consulta indígena— no elimina las restantes cuestiones ambientales, regulatorias, técnicas y sociales que debían ser evaluadas en cada expediente.

1111. Las Demandantes tampoco pueden apoyarse en *Bilcon* para excluir esas diferencias del análisis.[1471] Su lectura del laudo es excesivamente amplia. El tribunal en *Bilcon* no sostuvo que las diferencias técnicas, ambientales o sociales fueran irrelevantes para determinar si dos proyectos se encontraban en "circunstancias similares"; por el contrario, examinó las circunstancias concretas

---

1468 Réplica, ¶ 1033.

1469 Réplica, ¶ 1034.

1470 Réplica, ¶ 1035.

1471 Réplica, ¶ 1036.

de los proyectos propuestos como comparadores y reconoció que diferencias fácticas podían justificar tanto procedimientos como resultados regulatorios distintos.[1472]

1112. Lo determinante en *Bilcon* fue algo mucho más específico: la legislación canadiense imponía un mismo estándar jurídico obligatorio —el análisis de los *"likely significant adverse effects after mitigation"*— con independencia de la modalidad de evaluación, y ese estándar había sido sustituido, respecto del proyecto de Bilcon, por un criterio distinto que el tribunal consideró ajeno al régimen legal aplicable.[1473] Las Demandantes omiten, además, una precisión particularmente importante del propio laudo: el tribunal afirmó expresamente que su conclusión no excluía la posibilidad de que los proyectos hubieran obtenido resultados distintos si se les hubiera aplicado el mismo estándar.[1474] *Bilcon*, por tanto, no establece que proyectos sometidos al mismo régimen ambiental deban recibir el mismo resultado. Establece, a lo sumo, que proyectos suficientemente comparables deben ser evaluados conforme al estándar jurídico que les corresponde, sin impedir que diferencias fácticas produzcan resultados regulatorios distintos.

1113. Esa distinción es decisiva aquí. A diferencia de *Bilcon*, las Demandantes no han identificado un estándar jurídico que obligara a SEMARNAT a conceder al Proyecto Ixtaca una autorización condicionada simplemente porque otros proyectos la hubieran recibido. La LGEEPA contempla la autorización, la autorización condicionada y la negativa según las características del proyecto y los resultados de la evaluación correspondiente. Por ello, las diferencias relativas a los métodos de explotación y procesamiento, la naturaleza y magnitud de los residuos y jales, las condiciones ambientales y sociales del sitio y la suficiencia de las medidas de mitigación son

---

1472 *William Richard Clayton, Douglas Clayton, Daniel Clayton, and Bilcon of Delaware, Inc. v. Government of Canada*, UNCITRAL, Award on Jurisdiction and Liability, PCA Case No. 2009-04, 17 March 2015, ¶¶ 694-705. **CL-0091**.

1473 *William Richard Clayton, Douglas Clayton, Daniel Clayton, and Bilcon of Delaware, Inc. v. Government of Canada*, UNCITRAL, Award on Jurisdiction and Liability, PCA Case No. 2009-04, 17 March 2015, ¶¶ 694-697, 700-701, 704-708. **CL-0091**.

1474 *Bilcon v. Canada*, Award on Jurisdiction and Liability, PCA Case No. 2009-04, dated 17 March 2015, ¶ 697 ("The Tribunal emphasizes again that it does not preclude the possibility that different outcomes could still have been reasonably obtained in Whites Point and Belleoram if the same standard had been applied. What is of critical importance here is that the Whites Point project did not receive the expected and legally mandated application, for the purposes of federal Canada environmental assessment, of the essential evaluative standard under the *CEAA*."). *William Richard Clayton, Douglas Clayton, Daniel Clayton, and Bilcon of Delaware, Inc. v. Government of Canada*, UNCITRAL, Award on Jurisdiction and Liability, PCA Case No. 2009-04, 17 March 2015. **CL-0091**.

relevantes tanto para determinar si los proyectos eran comparables como para explicar por qué la aplicación del mismo marco normativo podía legítimamente conducir a resultados diferentes.

1114. Con respecto la Resolución de No Factibilidad,[1475] las Demandantes no identifican a otro titular —mexicano o extranjero— cuyas concesiones hubieran sido dejadas insubsistentes por la Suprema Corte, cuyo expediente hubiera sido devuelto para una nueva determinación de factibilidad y que, encontrándose en condiciones equivalentes, hubiera recibido un resultado más favorable. En ausencia de tal comparador, no existe base para concluir que Minera Gorrión recibió trato menos favorable en relación con esa medida.

1115. La afirmación de que Minera Gorrión puede compararse con "cualquier otro concesionario" lleva el concepto de circunstancias similares hasta hacerlo inútil.[1476] Todos los titulares de concesiones están sujetos a la Ley Minera, pero no todos estaban sujetos a la sentencia específica dictada en el Recurso de Revisión 134/2021 ni a la reevaluación de sus solicitudes originales exigida como consecuencia de esa decisión. Más aún, la alegación de que México favoreció a empresas estatales y buscó devolver al control del Estado amplias partes de la industria minera carece del presupuesto fáctico necesario: ninguna entidad —mexicana, extranjera o estatal— obtuvo los derechos relativos del Proyecto Ixtaca después de que las Concesiones fueran declaradas insubsistentes en junio de 2022.[1477] La ausencia de una sola entidad que haya recibido un trato más favorable en circunstancias comparables es fatal para esta parte de la reclamación.

1116. En *Finley*, la existencia de un comparador nacional directamente equivalente fue esencial: empresas mexicanas sujetas a la misma contraparte estatal y a condiciones contractuales comparables recibieron una respuesta sustancialmente más favorable ante una conducta equivalente.[1478] Aquí no existe un inversionista mexicano o extranjero que haya recibido los derechos de Ixtaca o un resultado más favorable después de encontrarse sujeto a la misma sentencia y al mismo procedimiento de factibilidad. La ausencia de ese comparador impide establecer trato menos favorable respecto de la Resolución de No Factibilidad.

1475 Réplica, ¶ 1037; Memorial de Contestación, ¶ 744.

1476 Réplica, ¶ 1050.

1477 Réplica, ¶ 1006.

1478 *Finley Resources Inc., MWS Management Inc. y Prize Permanent Holdings, LLC c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB/21/25, Decisión sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 8 de enero de 2025, ¶¶ 838–847, 857–863. **RL-0105.**

1117. Finalmente, incluso si las Demandantes pudieran identificar un comparador válido —que no pueden— todavía tendrían que demostrar un trato menos favorable atribuible a la *nacionalidad*. Tampoco lo han hecho. SEMARNAT y Economía aplicaron el marco ambiental, minero y de consulta indígena pertinente sin distinción de nacionalidad, y la propia evidencia invocada por las Demandantes demuestra que empresas mexicanas y extranjeras estuvieron sujetas a evaluaciones, requisitos y escrutinio regulatorios según las circunstancias particulares de sus proyectos.

1118. Lo que las Demandantes caracterizan como "trato menos favorable" es, en realidad, la consecuencia de circunstancias fácticas y jurídicas distintas. El Proyecto Ixtaca presentaba cuestiones particulares relativas a su escala, residuos y jales, medidas de mitigación, contexto social e indígena y, respecto de las Concesiones, una situación jurídica singular derivada de la sentencia de la Suprema Corte. Que otros proyectos, con expedientes y circunstancias diferentes, hayan obtenido autorizaciones condicionadas no permite inferir que la diferencia de resultado obedeció a la nacionalidad de las Demandantes.

1119. En suma, las Demandantes han demostrado únicamente que proyectos diferentes recibieron resultados diferentes. No han identificado un inversionista o una inversión en circunstancias materialmente similares que haya recibido un trato más favorable por razón de su nacionalidad. Sin esa comparación, sus reclamaciones bajo los Artículos 9.4 y 9.5 no pueden prosperar.

3. En cualquier caso, las medidas respondieron a objetivos gubernamentales legítimos y no discriminatorios

1120. Las Demandantes afirman que, una vez demostrado un caso *prima facie* de discriminación, la carga probatoria se desplaza al Estado demandado.[1479] Esta proposición de ser correcta, tendría el efecto de reducir la carga de los demandantes a un nivel *prima facie*. Eso no puede ser correcto. Las demandantes deben acreditar plenamente los elementos constitutivos de la discriminación antes de que la carga de la prueba se traslade a la parte demandada. Solamente después de satisfacer este umbral es que la carga probatoria se desplaza al Estado.[1480]

1479 Réplica, ¶ 1040.

1480 *Resolute Forest Products Inc. v. Canada*, PCA Case No. 2016-13, Final Award, July 25, 2022, ¶ 575 ("a tribunal will conclude the less favorable treatment proven *prima facie* by the Claimant was not provided 'in like circumstances' where the Respondent can provide evidence that the differences in treatment have a 'reasonable nexus to rational government policies' that do not distinguish on their face or

1121. Como México ha demostrado a lo largo de este arbitraje, las Demandantes no han identificado adecuadamente el supuesto "trato" discriminatorio ni proporcionado comparadores válidos "en circunstancias similares". Las Demandantes no han alcanzado ese umbral y la supuesta falta de producción de documentos tampoco puede utilizarse para llenar ese vacío.[1481] Por lo tanto, no existe carga probatoria alguna que México deba satisfacer.

1122. Las Demandantes no identifican una discrepancia real entre las Partes respecto de la distribución de la carga de la prueba. México no niega la distinción entre la carga jurídica y la carga de producción de prueba.[1482] En su Memorial de Contestación, México reconoció expresamente que, si las Demandantes demostraban los tres elementos de sus reclamaciones de TN o NMF, correspondería entonces al Estado demostrar que cualquier diferencia de trato respondía a una política pública racional y no discriminatoria.[1483] Esto no sucede aquí. Por ello, *Bilcon* y *Feldman* no favorecen a las Demandantes pues parten de la existencia previa de un caso *prima facie*.[1484]

1123. En todo caso, aun si se asumiera *arguendo* que alguna carga evidenciaría hubiera pasado a México, el expediente demuestra las razones regulatorias concretas que sustentaron las medidas

---

de facto between foreign and domestic investors or investments…"). **CL-0123**. *Ver también, Pawlowski AG and Project Sever s.r.o. v. Czech Republic*, ICSID Case No. ARB/17/11, Award, November 1, 2021, ¶ 546 ("Investment tribunals have consistently held that reasonable distinctions between domestic and foreign investors do not imply discrimination.") **RL-0041**; *Pope & Talbot Inc. v. Government of Canada*, UNCITRAL, Award on the Merits of Phase 2, April 10, 2001, ¶ 78 ("Differences in treatment will presumptively violate [NT], unless they have a reasonable nexus to rational government policies that (1) do not distinguish, on their face or *de facto*, between foreign-owned and domestic companies, and (2) do not otherwise unduly undermine the investment liberalizing objectives of NAFTA.") **CL-0025.**

1481 *Ver supra* Sección III.

1482 Réplica, ¶¶ 1042-1043.

1483 Memorial de Contestación, ¶ 731 ("Finalmente, las Demandantes no disputan que, si cumplieran los tres requisitos descritos anteriormente, la carga recaería entonces en el Estado, que debería demostrar que su conducta se basaba en una política pública racional y no discriminatoria, y que, si el Estado lo lograra, no se le podría considerar responsable a nivel internacional.). (Énfasis añadido).

1484 *William Richard Clayton, Douglas Clayton, Daniel Clayton, and Bilcon of Delaware, Inc. v. Government of Canada*, UNCITRAL, Award on Jurisdiction and Liability, PCA Case No. 2009-04, 17 March 2015, ¶ 723 ("once a prima facie case is made out under [the national treatment obligation], the onus is on the host state to show that a measure is still sustainable within the terms of [that obligation]."). **CL-0091**; *Marvin Feldman v Mexico*, ICSID Case No. ARB (AF)/99/1, 16 December 2002, ¶ 178 (noting that "if the Respondent had had available to it evidence showing that the [comparator companies] had not been treated in a more favorable fashion . . . it has never been explained why it was not introduced"). **CL-0031**.

impugnadas. Las Demandantes caracterizan como "falsa" la afirmación de México de que SEMARNAT y Economía aplicaron los mismos estándares ambientales y de consulta indígena a todos los inversionistas.[1485] Sin embargo, México ha demostrado que esto es incorrecto. Los plazos administrativos, los requisitos probatorios y los criterios de evaluación aplicables al Proyecto Ixtaca fueron los mismos que se aplicaron a empresas mineras mexicanas y extranjeras.[1486] El hecho de que el resultado fuera diferente no implica que las Demandantes fueran tratadas de modo menos favorable; los resultados regulatorios divergen legítimamente cuando las circunstancias fácticas, técnicas y sociales de cada proyecto son distintas. México rechaza por completo la afirmación de que "no aplicó los mismos estándares de derechos humanos uniformemente en las comunidades de Ixtaca".[1487] Las Demandantes carecen de legitimación y sustento para hacer dicha afirmación y el análisis de esta se encuentra por fuera de este arbitraje.

1124. Las Demandantes califican de "hipócrita" la posición de México respecto de la Resolución Negativa de la MIA, reduciendo la Resolución Negativa de la MIA a una sola cuestión: la consulta indígena.[1488] Esa caracterización es insostenible frente al expediente. La negativa fue el resultado de una evaluación ambiental integral y se sustentó en múltiples cuestiones técnicas y jurídicas, incluidas deficiencias relativas al agua, uso de suelo, jales y tepetates, flora y fauna, impactos acumulativos y residuales, medidas de prevención y mitigación, y suficiencia de la información técnica presentada.[1489] La LGEEPA permite a SEMARNAT autorizar, autorizar condicionadamente o negar una MIA según los resultados de esa evaluación.[1490] Por tanto, aun si las Demandantes discrepan con el tratamiento de la consulta indígena, esa discrepancia no convierte en "pretextuales" las demás razones ambientales que sustentaron la decisión.

1125. Tampoco existe la supuesta contradicción que las Demandantes pretenden construir respecto del deber de consulta.[1491] México no controvierte que la consulta indígena formal corresponde al Estado conforme a la Constitución y al Convenio 169 de la OIT.[1492] Sin embargo,

---

1485 Réplica, ¶ 1044.

1486 Memorial de Contestación, ¶ 745.

1487 Réplica, ¶ 1044.

1488 Réplica, ¶¶ 1045-1047.

1489 Memorial de Contestación, ¶¶ 299-302, 625-632.

1490 Artículo 35, LGEEPA. **C-0156.**

1491 Réplica, ¶¶ 1046-1047.

1492 Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/06913, 3 September 2019, **Exhibit C-0628**.

esto no significa que Minera Gorrión fuera ajena a las cuestiones sociales e indígenas relevantes para la evaluación de su Proyecto. Una cosa es la obligación estatal, no delegable, de conducir una consulta formal; otra muy distinta son las responsabilidades del promovente de identificar adecuadamente los impactos sociales del Proyecto, proporcionar información suficiente sobre las comunidades potencialmente afectadas y realizar la debida diligencia que los estándares aplicables a la industria minera exigen. México explicó que las Demandantes identificaron de manera deficiente a las comunidades indígenas cerca del Proyecto y que los estándares internacionales de conducta empresarial exigían identificar, prevenir y mitigar esos riesgos.[1493] México no necesita atribuir a Minera Gorrión la obligación jurídica de realizar la consulta para sostener que esas deficiencias eran relevantes para evaluar la viabilidad ambiental y social del Proyecto.

1126. La alegación relativa a la ausencia de documentos sobre la respuesta de la UCPAST tampoco demuestra el supuesto "encubrimiento" que las Demandantes pretenden inferir.[1494] Aun aceptando que determinados documentos no obren en el expediente producido, esa circunstancia no establece que SEMARNAT haya diseñado la negativa para ocultar un incumplimiento propio, y menos aún elimina las múltiples razones técnicas y ambientales consignadas en la Resolución. Las Demandantes intentan convertir una cuestión probatoria puntual en evidencia de la motivación de toda la decisión, sin demostrar el vínculo necesario entre ambas.

1127. El supuesto trato diferencial otorgado a los supuestos proyectos comparadores no demuestran ningún "pretexto", como alegan las Demandantes.[1495] Como se explicó *supra,* Camino Rojo, El Boleo y Río Huazamota no se encontraban en circunstancias similares al Proyecto Ixtaca. Camino Rojo presentaba un proceso y contexto ambiental distintos; El Boleo era una ampliación de una operación histórica con infraestructura previamente autorizada; y Río Huazamota era una extracción de materiales pétreos de 7.58 hectáreas sin procesos de beneficio, jales, sustancias químicas ni excavación comparable.[1496] El Proyecto Ixtaca, en contraste, contemplaba más de 1,044 hectáreas, un tajo, planta de beneficio, explosivos, presas, tepetateras y enormes volúmenes

1493 Memorial de Contestación, ¶¶ 94-95, 141-165.

1494 Réplica, ¶ 1047; *ver supra* Sección III.

1495 Réplica, ¶ 1048.

1496 *Ver supra* Sección III.

proyectados de jales y material estéril.[1497] La LGEEPA contempla expresamente distintos resultados regulatorios, incluida la negativa, y la elección entre ellos depende de las circunstancias de cada expediente.[1498] Las Demandantes vuelven así a confundir igualdad de estándar con identidad de resultado.

1128. La misma deficiencia afecta su ataque contra la Resolución de No Factibilidad. Las Demandantes continúan describiendo el Oficio de febrero de 2023 como una "culmination of a politically orchestrated campaign to destroy [their] investment".[1499] Esto es incorrecto. Economía no "destruyo" sus inversiones simplemente porque las mismas no existían en el 2023. Para ese entonces, los títulos de Concesión ya habían sido dejados insubsistentes como consecuencia de la sentencia de la Suprema Corte. Lo que correspondía a Economía era pronunciarse nuevamente sobre la factibilidad de expedirlos, tomando en cuenta las actuaciones que subsistían en los expedientes originales. La Resolución de No Factibilidad fue, por tanto, una decisión adoptada dentro de un procedimiento cuya existencia y alcance derivaban directamente de una sentencia judicial vinculante, no una cancelación *ad hoc* creada para implementar una política presidencial contra las Demandantes.

1129. La invocación del Artículo 22 del Reglamento de la Ley Minera tampoco demuestra lo contrario. Las Demandantes sostienen que las supuestas deficiencias podían corregirse "en un día" y que Economía estaba obligada a conceder una nueva oportunidad de subsanación.[1500] Esto es incorrecto. Como explica el Sr. Palma, una vez que la Suprema Corte dejó insubsistentes las Concesiones y ordenó a Economía pronunciarse sobre su factibilidad, correspondía a la DG Minas realizar esa evaluación técnica conforme a la Ley Minera y su Reglamento, sobre la base de las actuaciones originales del expediente.[1501] En ejercicio de esa función, la DG Minas determinó, conforme al Artículo 23, que las solicitudes no cumplían las condiciones y requisitos necesarios para el otorgamiento de las Concesiones. En esa etapa, el Reglamento no imponía una nueva obligación de prevenir al solicitante antes de resolver. El Artículo 24, por su parte, contempla una

---

1497 Escrito de presentación de la MIA del "Proyecto de explotación y beneficio de minerales Ixtaca", 22 de febrero de 2019. **C-0262.**

1498 Artículo 35, LGEEPA. **C-0156.**

1499 Réplica, ¶ 1049.

1500 Réplica, ¶ 1050.

1501 DT del Sr. Palma, ¶¶10-12.

facultad de corrección respecto de una concesión ya expedida, no un derecho del solicitante a obtener un nuevo título para luego subsanar las deficiencias identificadas.[1502]

1130. Tampoco basta afirmar que la Resolución de No Factibilidad se basó en un estudio del INPI que las Demandantes consideran "impugnado".[1503] Aun si ese estudio formó parte del contexto considerado por las autoridades, ello no altera el dato jurídico fundamental: Economía actuaba en ejecución de la sentencia de la Suprema Corte, que había dejado insubsistentes los títulos y ordenado una nueva determinación sobre la factibilidad de expedirlos. Más aún, tanto el Juzgado Segundo de Distrito como el Segundo Tribunal Colegiado determinaron posteriormente que las actuaciones de Economía cumplían con esa sentencia, y las Demandantes abandonaron el juicio de nulidad mediante el cual podían continuar impugnando la Resolución de No Factibilidad.[1504]

1131. En definitiva, las Demandantes sustituyen el análisis de las razones objetivas de las medidas por una narrativa general de motivación política. Pero calificar esas razones de "pretextuales" no las convierte en tales. La Resolución Negativa de la MIA respondió a una evaluación ambiental que identificó múltiples deficiencias concretas; la Resolución de No Factibilidad respondió a una situación jurídica singular creada por una sentencia de la Suprema Corte. Esas razones guardan una conexión directa y racional con los objetivos legítimos que México invoca: la protección del medio ambiente, la tutela de los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de decisiones judiciales vinculantes. Estas políticas se aplican sin distinción de nacionalidad y reflejan el ejercicio de las facultades regulatorias del Estado.

1132. La cita de *S.D. Myers c. Canadá* que las Demandantes invocan apoya la posición de México: la obligación de trato nacional permite el trato diferenciado que resulte de "legitimate public policy measures that are pursued in a reasonable manner."[1505] Esto es exactamente lo que México hizo: proteger el medio ambiente y garantizar los derechos de las comunidades indígenas mediante la aplicación uniforme de marcos normativos obligatorios. No basta con etiquetar la política como "pretexto" para neutralizarla; las Demandantes deben demostrar que la explicación

---

1502 Memorial de Contestación, ¶¶ 49-52.

1503 Réplica, ¶ 1021.

1504 Memorial de Contestación, Sección II.E.2. (c)-(e); Informe de Experto del Sr. Cossío, ¶ 33.

1505 Réplica, ¶ 1051; *S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada*, UNCITRAL, Partial Award, 13 November 2000, ¶ 246, **CL-0023.**

regulatoria carece de conexión racional con las medidas y que la diferencia obedeció, en cambio, a su nacionalidad. No han demostrado ninguna de las dos cosas.

1133. En suma, las Demandantes no establecieron un caso de discriminación y, por ello, no se produjo el desplazamiento de la carga evidenciara que invocan. Pero aun si se asumiera *arguendo* que esa carga se desplazó, México la ha satisfecho: las medidas impugnadas estuvieron vinculadas a circunstancias regulatorias concretas, objetivos legítimos de bienestar público y, en el caso de la Resolución de No Factibilidad, al cumplimiento de una sentencia vinculante de la Suprema Corte. La discrepancia de las Demandantes con esas decisiones no las convierte en medidas nacionalistas, proteccionistas o discriminatorias prohibidas por los artículos 9.4 y 9.5 del TIPAT y el Tribunal debe desestimarlas.

VI. DAÑOS

1134. Esta sección aborda todas las cuestiones relacionadas con la determinación de los daños en caso de que el Tribunal determine que existe responsabilidad internacional de la Demandada. Nada de lo dicho aquí debe interpretarse como una admisión de responsabilidad o un desistimiento de las defensas sobre el fondo. En apoyo a los argumentos que se expondrán a continuación, la Demandada presenta con este escrito el segundo informe pericial de WGM (expertos en minería) y Quadrant Economics (expertos en daños).

A. Las aclaraciones de las Demandantes sobre su reclamación de daños son insuficientes

1135. La Demandada argumentó en su Memorial de Contestación que la reclamación de daños de las Demandantes estaba mal especificada. Se refirió en particular a cinco problemas: *(i)* la desconexión que existía entre la reclamación por la expropiación directa de sus derechos como concesionarias y una reclamación de daños basada en el VJM del Proyecto, que solo sería apropiada en el contexto de una reclamación por la expropiación indirecta del Proyecto; *(ii)* las implicaciones de que la reclamación por expropiación se basara exclusivamente en la Resolución de No Factibilidad, ignorando otras medidas como la Denegación de la MIA; *(iii)* las implicaciones que tenía sobre el escenario contrafáctico agrupar todos los daños en una sola reclamación; *(iv)* el hecho de que la reclamación de daños no permite identificar los daños asociados a presuntas violaciones distintas de la expropiación y, por último, *(v)* el hecho de que no se especificaba qué

entidad había sufrido los daños y los problemas que esto acarreaba para determinar quién debía ser resarcido de conformidad con el artículo 9.29 del TIPAT.[1506]

1136. La Réplica ofrece una respuesta muy limitada a algunos de estos planteamientos. Otros de plano se ignoran.

1137. Las Demandantes alegan, por ejemplo, que el argumento de la Demandada en el sentido de que no se ha especificado un monto de daños para cada una de las violaciones o medidas es "misguided" porque "the measure of damages does not change depending on which CPTTP obligation the Tribunal finds Mexico breached".[1507] Este es un argumento nuevo que no debe pasar inadvertido.

1138. Para empezar, la Demandada desea aclarar que no argumentó en el vacío que una parte demandante tenga la obligación de presentar valuaciones independientes de los daños causados por cada una de las violaciones que se reclaman, como lo sugieren las Demandantes. El problema se suscitó *en este caso* por la manera en que plantearon su reclamación por expropiación y el hecho de que presentaron una sola estimación de los daños causados por todas las presuntas violaciones que reclaman. El argumento se apoyó en dos hechos que, a la fecha, no han sido rebatidos.

1139. El primero es que las Demandantes reclamaban la expropiación *directa* de sus derechos como concesionarias[1508], pero los daños se basaron en el supuesto valor justo de mercado del Proyecto Ixtaca, lo cual solo sería compatible con una reclamación por expropiación *indirecta* de dicho proyecto.[1509] La Demandada también advirtió que las Demandantes no habían presentado una reclamación de esta naturaleza y, por lo tanto, "exist[ía] una clara desconexión entre los daños reclamados y los supuestos incumplimientos."[1510] Esa incongruencia se mantiene a la fecha.

1506 Memorial de Contestación, sección V.C, ¶¶ 765-774.

1507 Réplica, ¶ 1061.

1508 Los encabezados de las secciones, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2, y 4.1.2.3 del Memorial de Demanda que se ocupan de la reclamación por expropiación específicamente se refieren a una expropiación "directa".

1509 Una reclamación por la expropiación del Proyecto necesariamente tendría que ser indirecta porque ni la propiedad ni la posesión de dicho Proyecto pasó al Estado. Las Demandantes siguen siendo las propietarias y mantienen la posesión de los activos que conformaban el Proyecto, salvo por las Concesiones que fueron dejadas insubsistentes por orden de la SCJN.

1510 Memorial de Contestación, ¶ 766.

1140. El segundo es que la Denegación de la MIA "ni siquiera se menciona[ba]" en la sección del Memorial dedicada a la expropiación, lo cual llevó a México a concluir que "la presunta expropiación se llevó a cabo mediante un único acto —es decir, no se trató de una expropiación progresiva— que tuvo lugar el 9 de febrero de 2023 [i.e., la fecha de la Resolución de No Factibilidad]".[1511] El Memorial en ningún lugar señala que la Denegación de la MIA hubiese tenido efectos expropiatorios o que formara parte de una serie de medidas que culminaron en una expropiación el 9 de febrero de 2023, y el mismo punto puede hacerse con respecto a lo que se dice en la Réplica.

1141. A estos dos hechos habría que sumar que la fecha de valuación *ex ante* que las Demandantes seleccionaron es la fecha de la Resolución de No Factibilidad y no la fecha en que emitió la Denegación de la MIA. Esto es significativo porque las Demandantes mismas reconocen que el Proyecto no habría podido continuar sin un permiso ambiental.

1142. Estos hechos demuestran que las Demandantes no consideraron la Denegación de la MIA como una medida expropiatoria o parte de una expropiación progresiva. Por lo tanto, tenían la obligación de cuantificar los daños asociados con las presuntas violaciones asociadas a dicha medida y no lo hicieron. La consecuencia es probatoria: si el Tribunal no encuentra acreditada la expropiación directa sobre la que descansa la valuación de Brattle, el expediente no contendrá prueba alguna de una pérdida sufrida "by reason of, or arising out of" las demás medidas impugnadas, que es lo que exige el artículo 9.19.1 del TIPAT.[1512]

1143. En la Réplica, las Demandantes intentan rehabilitar su posición inicial. Alegan que no es necesario ofrecer una cuantificación del daño sufrido por cada una de las violaciones argumentando que "[e]ach breach, [...] *individually* or cumulatively destroyed the Claimants'

[1511] Memorial de Contestación, ¶ 767.

[1512] El punto se anticipó en el Memorial de Contestación, ¶ 772, donde la Demandada preguntó qué ocurriría si el Tribunal considerara lícita la Denegación de la MIA pero ilícita la Resolución de No Factibilidad, y observó que "[n]i las Demandantes ni Brattle tienen en cuenta este posible escenario". Ver *Silver Bull Resources, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB/23/24, Laudo, 29 de mayo de 2026, ¶¶ 465 y 466: el tribunal constató que la demandante no tenía "pleaded case as to any loss or damage that might be attributable to the alleged breaches" que permanecían dentro de su competencia, ni había aportado prueba alguna al respecto, y recordó que los artículos 1116 y 1117 del TLCAN exigen alegar y probar que se ha incurrido en una pérdida "by reason of, or arising out of, the alleged breach", de modo que "[i]n the absence of any such allegation and proof, there is no sustainable claim for relief". **RL-0218**.

investments in their entirety [...]".[1513] Eso, desde luego, no explica por qué la Denegación de la MIA no se identifica como una medida expropiatoria, ni la selección de la fecha de valuación *ex ante*. Tampoco es compatible con la alegación de expropiación *directa*, pues ninguno de los activos que integraban el Proyecto pasaron a manos del Estado tras la Denegación de la MIA o la Resolución de No Factibilidad. Los derechos de las Demandantes como concesionarias simplemente se extinguieron cuando las Concesiones se declararon insubsistentes.

1144. En la Réplica, las Demandantes ofrecen un argumento nuevo y contradictorio para tratar de salvar esta inconsistencia. A pesar de mantener su posición de expropiación directa basada en la Resolución de No Factibilidad, para efectos de daños argumentan:

> 1063. Mexico's contention that the Claimants have not demonstrated standalone harm from each measure is flatly wrong. The Claimants' case is that Mexico's unlawful measures operated in tandem to deprive the Claimants of the use, enjoyment, and economic value of their investment: the MIA Denial Decision arbitrarily stripped the Claimants of the regulatory approval necessary to advance the Project to construction, and Mexico's pretextual cancellation of the Concessions eliminated the legal basis for exploiting the mineral resources altogether. Together, these measures cumulatively and progressively foreclosed the Ixtaca Project in its entirety. [...].[1514]

1145. El párrafo anterior no es compatible con el argumento de expropiación directa en la sección 4.1 de la Réplica pues sugiere que la expropiación fue progresiva –i.e., se llevó a cabo a través de múltiples actos– y fue indirecta. Las Demandantes también intentan justificar la manera en que presentaron su reclamación de daños con la siguiente afirmación: "The Claimants present a unified damages figure because *the measures are not divisible* as they formed part of a single course of conduct directed at the same investment and producing the same result".[1515] Sin embargo, esto entra en directa contradicción con lo que argumentan para rebatir las objeciones de la Demandada a la jurisdicción del Tribunal. En esa sección de la Réplica señalan que sus reclamaciones (en plural) surgen de cuatro medidas individuales que contradictoriamente describen como "self-standing" e "independently actionable".[1516]

1146. Estos constantes intentos por soplar frío y caliente al mismo tiempo, comprometen la defensa y, en la respetuosa opinión de la Demandada, no deben permitirse.

1513 Réplica, ¶ 1061.

1514 Réplica, ¶ 1063.

1515 Réplica, ¶ 1063. [Énfasis de la Demandada]

1516 Réplica, ¶ 801.

1147. Igualmente, el último de los problemas de especificación que la Demandada identificó en su Contestación tampoco ha sido resuelto. La reclamación sigue sin desagregarse entre Almaden, Almadex y las inversiones en México (Minera Gorrión y Minera Gavilán). La Demandada observó que la reclamación no permite identificar qué entidad sufrió el daño, distinción que es material porque los artículos 9.29(2) y 9.29(5)(b) del TIPAT prescriben acciones distintas dependiendo de si la pérdida la sufrió el inversionista o la empresa.[1517] La Réplica no solo sigue sin atender ese problema, sino que declina expresamente desagregar el reclamo. Tras calificar el planteamiento de "entirely misconceived", las Demandantes aclaran que presentaron sus reclamaciones a nombre propio y en nombre de sus filiales mexicanas, Minera Gorrión y Minera Gavilán, y explican que, por esa razón, "Brattle valued the Project as a whole, rather than analyzing the value of its individual elements".[1518] Esa aclaración agrava el problema en lugar de resolverlo: si las reclamaciones se presentan también en nombre de dos empresas distintas, el artículo 9.29(5)(b) exige que la indemnización se pague a cada una de ellas, y eso es imposible sin una desagregación.

1148. La respuesta deja además cuatro problemas intactos. El primero es que el propio Memorial de Réplica no atribuye la regalía NSR del 2% de manera consistente. En unos párrafos la titular es Minera Gavilán; en otros lo son Almadex y Minera Gavilán conjuntamente.[1519] El segundo es que nunca se indica el porcentaje de participación de Almadex en Minera Gavilán. Las Demandantes se limitan a afirmar que "Almadex acquired Minera Gavilán in 2015". Si Almadex es accionista de la sociedad titular de la regalía, su pérdida es indirecta y depende de una participación accionaria que en ningún momento se cuantifica.[1520] El tercero es que Almadex desaparece del capítulo de daños. El nombre aparece 36 veces a lo largo del Memorial de Réplica y ninguna de ellas en la sección dedicada a los daños. El petitorio, en cambio, solicita una suma única de USD 2,682.4 millones en favor de cuatro entidades distintas, sin fracción alguna por demandante ni por inversión.[1521]

[1517] Memorial de Contestación, ¶¶ 773-774.

[1518] Réplica, ¶ 1104.

[1519] Como titular exclusiva, Réplica, ¶¶ 822, 824, 827 y 1104. Como titulares conjuntas, Réplica, ¶¶ 762, 765, 830 y 880.

[1520] Réplica, ¶ 830.

[1521] Réplica, ¶¶ 1152 y 1154. La última mención de Almadex en el cuerpo del escrito es el ¶ 880; la sección de daños comprende los ¶¶ 1053-1153.

1149. El cuarto y último es que la ausencia de desagregación no obedece a un obstáculo técnico genuino, sino a una instrucción de los abogados de las Demandantes. Brattle reconoció desde su primer informe que la regalía de Almadex "ought to be subtracted when calculating the value of the Project to Almaden" y que dicha regalía "splits the value of the Project between Almaden and Almadex". Sin embargo, acto seguido, reconoció que no hizo esa operación porque se le instruyó que, "because Almaden and Almadex are both Claimants, it is not necessary to calculate the value of the separate interests of each Claimant".[1522] La desagregación, por tanto, no solo era posible: el perito de las Demandantes la consideró procedente, al igual que la Demandada, y se abstuvo de aplicarla solo por instrucción de la parte. Ciertamente, esa es una decisión de litigio que, como tal, debe tener consecuencias.

B. Estándar de compensación

1150. Las Demandantes invocan la reparación íntegra (*Chorzów*) para justificar una valuación a la fecha del laudo que supone la existencia de una mina operativa en enero de 2023 que nunca se construyó. La Demandada demostrará que *Chorzów* enuncia un principio de restitución que mira al pasado, no una regla que ordene maximizar el valor de una inversión incierta en una fecha futura; y que, en todo caso, la reclamación conjunta de Almaden y Almadex sigue sin desagregarse.

1151. Como cuestión preliminar, la Demandada reitera que no controvierte que el estándar de reparación plena sea apropiado para determinar los daños en este caso.[1523]

1. La reparación integral exige restituir a las Demandantes a la posición anterior al ilícito, no otorgarles un valor futuro incierto

1152. Las Demandantes insisten en que, tratándose de la pérdida total de la inversión, "full reparation requires compensation at FMV placing the Claimants in the financial position they would have occupied had the wrongful acts never occurred" y que la indemnización debe "wipe out all *the consequences* of the illegal act" conforme a *Chorzów*.[1524]

1153. La Demandada no controvierte que el VJM sea una métrica común en casos de expropiación, sin embargo, su adopción no es un requisito bajo el estándar de reparación plena,

---

1522 Primer Informe de Brattle, ¶ 96.

1523 Réplica, ¶ 1059.

1524 Réplica, ¶ 1057.

como afirman las Demandantes. Esto se comprueba fácilmente a partir de los numerosos casos de expropiación de proyectos mineros en etapa preoperativa en los que el tribunal fijó los daños con base en otras métricas como costos hundidos.[1525]

1154. La Demandada tampoco cuestiona que la reparación plena exija poner a las Demandantes en la posición financiera que con toda probabilidad habrían enfrentado si la conducta ilícita no se hubiese suscitado, como lo dejó claro en su Memorial de Contestación.[1526] Sin embargo, de ello no se sigue que la reparación íntegra necesariamente implique una valoración *ex post* o que garantice a la parte perjudicada el mayor valor imaginable de su inversión. Esta observación es especialmente pertinente en casos en donde la inversión nunca entró en operación y, por lo tanto, la determinación de su valor es inherentemente especulativa cuando se basa en su rendimiento futuro. Ese es precisamente el salto lógico en el que siguen incurriendo las Demandantes y que debe ser rechazado por las siguientes razones.

1155. *En primer lugar*, *Chorzów* enuncia un principio de reparación, no una regla rígida sobre la fecha de valuación, la medida de compensación o el enfoque de valuación que deba seguirse para cuantificar los daños. El razonamiento de la Corte Permanente estuvo estrechamente vinculado a las circunstancias particulares de un caso que involucraba la expropiación ilícita de una *empresa en marcha* cuya restitución no era posible, pues ambas partes coincidían en que Polonia conservaría la fábrica objeto de la controversia.[1527] En ese contexto, la Corte Permanente afirmó que el principio fundamental del derecho internacional era de naturaleza restitutiva y que, cuando la restitución en especie no fuera posible, debía otorgarse una compensación monetaria "corresponding to the value which a restitution in kind would bear".[1528] Lo relevante, por tanto, no era determinar el mayor valor que el activo pudiera alcanzar en el futuro, sino otorgar el equivalente económico de la restitución que permitiera reconstruir la posición patrimonial que habría existido de no haberse cometido el ilícito.

1525 Ver la sección de metodología de este escrito, donde se analizan las decisiones sobre cuantificación dictadas en varios arbitrajes de inversión relativos a proyectos mineros.

1526 Memorial de Contestación, ¶ 753.

1527 *Caso relativo a la Fábrica de Chorzów*, CPJI, Demanda de indemnización, Fondo, Sentencia No. 13, 13 de septiembre de 1928, Serie A, No. 17, p. 47. **CL-0013**.

1528 *Caso relativo a la Fábrica de Chorzów*, CPJI, Demanda de indemnización, Fondo, Sentencia No. 13, 13 de septiembre de 1928, Serie A, No. 17, p. 47. **CL-0013**.

1156. En este caso, lo que se tendría que restituir si el Tribunal determinara que se produjo una expropiación ilegal sería el *proyecto minero* que estaba en manos de Minera Gorrión, no la mina en plena operación que imaginan las Demandantes para efectos del *quantum*. En caso de que la restitución no fuere posible, el principio de reparación plena implicaría, en las circunstancias de este caso, fijar el monto de la compensación con base en el VJM del Proyecto inmediatamente antes de la violación (o violaciones). En ningún caso el principio enunciado por la Corte Permanente implicaría suponer que Minera Gorrión habría conseguido los permisos faltantes (incluida la MIA); que habría obtenido el financiamiento necesario para la construcción de la mina; que la mina habría sido construida conforme al calendario y el presupuesto que anticipaba la empresa; y que la mina habría podido producir oro y plata en los volúmenes proyectados con los costos presupuestados. Esto por citar solo algunos de los supuestos empleados por las Demandantes para determinar el VJM de la inversión en la fecha del laudo.

1157. *En segundo lugar*, en *Chorzów,* la Corte Permanente expresamente subordinó la reparación a la existencia de un daño cierto y causalmente vinculado al acto ilícito. La indemnización debía comprender únicamente el perjuicio sufrido "as a consequence" del hecho internacionalmente ilícito. Las Demandantes citan el conocido *dictum* sobre reparación íntegra, pero omiten estos requisitos de causalidad y certeza, que forman parte del mismo razonamiento.

1158. En *Chorzów*, el perjuicio concreto que derivaba del ilícito era identificable con un grado razonable de certeza: (i) para Oberschlesische, consistía en "the total value *-but to that total only-* of the property, rights and interests of this Company"[1529]; (ii) para Bayerische, consistía en la pérdida de las remuneraciones contractualmente pactadas bajo el contrato celebrado el 5 de marzo de 1915 con el Reich alemán, mediante el cual la compañía se había comprometido a "establish for the Reich and forthwith to begin the construction of, amongst other things, a nitrate factory at Chorzow in Upper Silesia".[1530] En ambos casos, la reparación se refería a beneficios económicos cuya existencia y cuantía podían determinarse con un grado razonable de certeza a partir de derechos ya existentes y relaciones contractuales consolidadas.

[1529] *Caso relativo a la Fábrica de Chorzów*, CPJI, Demanda de indemnización, Fondo, Sentencia No. 13, 13 de septiembre de 1928, Serie A, No. 17, p. 31. **CL-0013**.

[1530] *Caso relativo a la Fábrica de Chorzów*, CPJI, Demanda de indemnización, Fondo, Sentencia No. 13, 13 de septiembre de 1928, Serie A, No. 17, p. 18. **CL-0013**.

1159. *En tercer lugar*, la reparación íntegra tampoco exige reconstruir el escenario más favorable que el inversionista pudiera o deseara alcanzar. El propio *dictum* de *Chorzów* se refiere a la situación que "in all probability" habría existido de no mediar el ilícito. En ese caso, ello significaba suponer que la fábrica habría permanecido en manos de Oberschlesische como propietaria y bajo la dirección técnica de Bayerische. Más importante aún, la Corte Permanente reconoció expresamente que el ejercicio contrafactual podía sustentarse en elementos objetivos que reducían significativamente la incertidumbre, en particular "by the possibility of comparison with other undertakings of the same nature directed by the Bayerische, and, in particular, with the Piesteritz factory, the analogy of which with Chorzow".[1531] Es decir, el desempeño hipotético de la fábrica de Chorzow podía derivarse a partir del desempeño de otra fábrica análoga en operación.

1160. Esa circunstancia dista por completo de la situación que enfrenta este Tribunal, al que se le pide suponer que el Proyecto habría continuado avanzando conforme a las expectativas de las Demandantes, para así proyectar durante lustros el desempeño de una mina que nunca se construyó, nunca obtuvo los permisos necesarios y nunca inició operaciones. En tales circunstancias, el principio de reparación plena exige prudencia, no dar rienda suelta a la especulación.

1161. En consecuencia, cuando la determinación de los rendimientos futuros depende inevitablemente de hipótesis altamente inciertas o especulativas (como ocurre en este caso), el estándar de reparación plena exige identificar cuál habría sido la posición financiera *probable* de las Demandantes de no haberse producido el ilícito. Su lógica es eminentemente restitutiva: busca restablecer la situación patrimonial perdida, no maximizar retrospectivamente el valor de la inversión ni garantizar a las Demandantes la realización de expectativas que nunca llegaron a materializarse por una multiplicidad de causas.

2. El escenario contrafáctico bajo el estándar de reparación plena

1162. Como cuestión de principio, el escenario contrafáctico no puede presuponer un resultado favorable de los procesos administrativos que las autoridades locales de la Demandada tenían la facultad de resolver, a saber: la evaluación de la MIA y la evaluación de la viabilidad de emitir de nueva cuenta las concesiones que se dejaron insubsistentes por instrucciones de la SCJN. La

[1531] *Caso relativo a la Fábrica de Chorzów*, CPJI, Demanda de indemnización, Fondo, Sentencia No. 13, 13 de septiembre de 1928, Serie A, No. 17, p. 52. **CL-0013**.

Demandada desarrolla este principio a continuación respecto de la Denegación de la MIA, dado que es la primera de las medidas que reclama y le resulta igualmente aplicable a la Resolución de No Factibilidad.

a. El escenario contrafactual no puede suponer un resultado favorable en procesos administrativos locales que competen a las autoridades mexicanas

1163. Las propias Demandantes reconocen que la cuestión central en este caso es "whether the Claimants can establish the but-for scenario with reasonable certainty".[1532] Sostienen que, en ese escenario contrafáctico, "the Project would have commenced production by January 2022, would have generated revenue from the sale of silver and gold, and the Tribunal must assess its value accordingly".[1533] Para llegar a esa conclusión, refieren al primer informe de SLR, sin embargo, los propios peritos reconocen que esta suposición descansa en dos fuentes: (i) el cronograma previsto en el Estudio de Factibilidad de Ixtaca de 2019, *ajustado entre seis y nueve meses por la pandemia* y (ii) la experiencia del proyecto Camino Rojo, cuya MIA fue presentada a finales de 2019 e inició producción a finales de 2021.[1534] Ninguna de estas fuentes demuestra, con el grado de certeza razonable que exige el estándar de reparación plena, que el Proyecto habría seguido su curso de la manera en que suponen los peritos de las Demandantes.

1164. Si la Denegación de la MIA fue ilícita y "cristalizó" la expropiación –como ahora parecen alegar las Demandantes[1535]– la pregunta jurídica relevante no es cuál habría sido el valor del Proyecto si hubiese continuado su curso, sino cuál habría sido su valor de no haberse producido ese ilícito. Asumir, como lo hacen las Demandantes, que la autorización ambiental habría sido concedida y que el proyecto habría sido construido y habría iniciado operaciones simplemente porque así estaba planeado y otras empresas pudieron llevar a buen puerto sus respectivos proyectos, es un *non sequitur*.

1165. Por una parte, el cronograma previsto en el estudio de factibilidad (FS) refleja un escenario *posible*, el que las Demandantes *esperaban* alcanzar; no el que, "*in all probability*", habría

1532 Réplica, ¶ 1070.

1533 Réplica, ¶ 1064.

1534 Informe SLR, ¶ 350.

1535 Réplica, ¶ 801(a).

ocurrido. Las propias Demandantes lo reconocen al afirmar que el FS "provides an accurate assessment of the project's production potential".[1536] En efecto, el potencial de producción de un proyecto constituye apenas una aspiración técnica y económica de lo que podría lograr; no equivale a un pronóstico de la situación que con toda probabilidad habría existido en ausencia del supuesto ilícito. También sucede que la valoración del daño que hacen las Demandantes no se basa en el FS sino en una reevaluación *ex post* del FS por parte de SLR que expande materialmente el alcance del Proyecto y una proyección de los precios del oro y plata que pertenece al reino de la fantasía como se verá más adelante.

1166. La comparación con Camino Rojo no permite salvar esa deficiencia. El hecho de que ese proyecto haya presentado su MIA en 2020 y haya iniciado producción en 2021 no demuestra que Ixtaca habría seguido el mismo camino. A diferencia de la comparación realizada por la Corte Permanente en *Chorzów* entre la fábrica expropiada y otra fábrica existente y operativa bajo la dirección de Bayerische, la analogía propuesta por las Demandantes presupone la existencia de condiciones regulatorias, técnicas, ambientales y sociales equivalentes para ambos proyectos. Esa premisa nunca se demuestra.

1167. La realidad es que el Proyecto continuaba sujeto a múltiples contingencias regulatorias, financieras y operativas que hacían incierta su entrada en producción –y en su caso, el momento en que esto ocurriría– incluso en ausencia del supuesto ilícito. El criterio que la Corte Permanente estableció en *Chorzów* no autoriza a los tribunales a especular sobre el futuro; por el contrario, implica el desarrollo de un escenario contrafactual que, en ese caso, era posible construir con un alto grado de confiabilidad porque se disponía de un punto de comparación empírico (la fábrica de Piesteritz). Precisamente ese elemento objetivo está ausente en el presente caso. Incluso si este Tribunal determinara que la Demandada expropió la inversión de las Demandantes, esa inversión no consistía en una mina en operación con producción y costos conocidos, sino un proyecto minero que ni siquiera había avanzado a la etapa de construcción.

1168. La incertidumbre alrededor del futuro del Proyecto se confirma al examinar la propia teoría de responsabilidad de las Demandantes. En su Memorial de Demanda, sostuvieron que la denegación de la MIA fue arbitraria y pretextual, y, por consiguiente, violatoria del artículo 9.6 del TIPAT (Sección 4.2.3.1). En particular, alegan que la evaluación de la MIA no se realizó "in

[1536] Réplica, ¶ 1070.

an objective, fair, and reasonable manner, in compliance with administrative due process, and not in an arbitrary or capricious manner or in wilful disregard of the applicable legal and regulatory framework".[1537] Su queja, por tanto, se dirige fundamentalmente a la forma en la que la autoridad ejerció sus facultades, no contra la mera posibilidad de que la autoridad negara la autorización ambiental; supuesto que no está en disputa en este arbitraje.

1169. En esas circunstancias, el contrafactual jurídicamente correcto consiste en suponer que la MIA habría sido evaluada conforme al Tratado, y no necesariamente que se habría aprobado. Aun eliminando todos los elementos que, según las Demandantes, configuran el ilícito –e.g., arbitrariedad o incompatibilidad con el debido proceso–, seguía siendo perfectamente posible que la autoridad competente negara la autorización ambiental. De hecho, utilizando las propias formulaciones de las Demandantes, las autoridades habrían podido denegar la MIA "motivated by good faith or existing Mexican environmental law"[1538], con base en "the extensive information and documentation that Minera Gorrión had provided with the MIA and RAI response"[1539], sin aplicar un "impossibly high legal standard"[1540] e incluso ignorando el evidente "lack of indigenous consultations"[1541], entre otros aspectos. Las Demandantes sencillamente ignoran esa posibilidad e instruyen a sus peritos a suponer, sin más, la aprobación de la MIA.

1170. El caso de daños de las Demandantes especula excesivamente con posibilidades futuras, incluida la conducta y el ejercicio de las facultades de las autoridades mexicanas. El contrafactual que proponen, no solo elimina el supuesto acto ilícito, sino también todo el riesgo asociado con los permisos y toda capacidad regulatoria inherente al proceso de evaluación y autorización ambiental. Así, las Demandantes instruyeron a sus peritos suponer que "SEMARNAT would have concluded the MIA review by November 2019", apoyándose principalmente en las declaraciones de dos de sus testigos.[1542] Pero esa conclusión presupone precisamente aquello que debe demostrarse: que, en ausencia del supuesto ilícito, el proyecto necesariamente habría obtenido

1537 Memorial de Demanda, ¶ 581.
1538 Memorial de Demanda, ¶ 582.
1539 Memorial de Demanda, ¶ 586.
1540 Memorial de Demanda, ¶ 587.
1541 Memorial de Demanda, ¶ 589.
1542 Réplica, ¶¶ 955, 1126.

todos los permisos requeridos, habría sido construido y habría iniciado producción conforme al cronograma previsto. El estándar de reparación íntegra no autoriza semejante salto lógico.

1171. Ese salto tampoco resiste un contraste con el expediente. Aun suponiendo que la solicitud ambiental se hubiese evaluado sin los vicios alegados por las Demandantes, ello no significa que el Proyecto habría quedado en condiciones de operar. Persistían varias contingencias: i) la consulta a las comunidades indígenas y la oposición social documentada, cuyo desenlace no podía darse por descontado[1543]; ii) otros permisos y autorizaciones federales y locales necesarios para iniciar la explotación[1544]; iii) el hecho de que la MIA se presentó sobre los títulos de concesión reducidos, pese a que esas reducciones habían sido revocadas desde diciembre de 2018, lo que exponía incluso una autorización favorable a su cancelación[1545], y iv) el derecho a explotar los recursos minerales nunca surgió porque estaba condicionado a permisos que las Demandantes nunca obtuvieron.[1546]

1172. Los tribunales de inversión han rechazado precisamente este tipo de contrafactual cuando depende de autorizaciones cuyo resultado no estaba garantizado. Este criterio se aplicó en *Eco Oro c. Colombia*, donde habiendo declarado la violación del tratado, el tribunal determinó que no podía atribuirse a la parte demandada la pérdida de todo el proyecto porque estaba pendiente una licencia ambiental que la autoridad podía legítimamente haber denegado, y tampoco podía valorarse una oportunidad cuya probabilidad de éxito no había sido demostrada.[1547] La existencia de un incumplimiento no permitió sustituir por certeza el resultado contingente de un procedimiento administrativo. Lo mismo ocurre aquí.

1173. Por consiguiente, el perjuicio que podría atribuirse "as a consequence" del supuesto hecho internacionalmente ilícito es, en el mejor de los casos, la pérdida de la oportunidad de que la

---

1543 Ver Sección II.A. *supra*.

1544 Ver Sección II.A. *supra*.

1545 Ver Sección II.F. *supra*.

1546 Ver Sección II.C. *supra*.

1547 *Eco Oro Minerals Corp. c. República de Colombia*, Caso CIADI No. ARB/16/41, Laudo sobre Daños, 15 de julio de 2024, ¶ 299 ("a claimant can only recover for losses which it has established to have been caused by an internationally wrongful act. A loss caused by other factors, including any act which has been found to be lawful, is not recoverable") y ¶ 305 ("Under the applicable domestic law, the grant of an environmental licence is subject to the discretion of the Respondent. It cannot be excluded that, absent the acts found to amount to a breach of Article 805, the Respondent could have decided, on an entirely lawful basis, to refuse to grant any environmental licence", y el tribunal añadió que no estaba en posición de determinar "the likelihood of an environmental licence being granted, or the value of the opportunity to apply for a licence which may or may not be granted"). **RL-0219**.

solicitud ambiental fuera evaluada sin los vicios que las Demandantes imputan al proceso. Restituir a las Demandantes a la posición que probablemente habrían ocupado en ausencia del ilícito significaría colocarlas nuevamente en la situación de un proyecto minero, todavía sujeto al cumplimiento de múltiples requisitos regulatorios (incluida la MIA) y de hitos técnicos, financieros y sociales, no exentarla de todos esos riesgos. Como lo determinó la Corte Permanente en *Chorzów*, si la restitución en especie no es posible, la compensación monetaria debe reflejar una posición patrimonial congruente con la situación que habría enfrentado el Proyecto. Como se demuestra más adelante, esa es precisamente la lógica económica subyacente a la valoración propuesta por Quadrant mediante la capitalización de mercado de Almaden.

1174. En la alternativa, la misma deficiencia puede expresarse en términos de causalidad. Conforme al artículo 9.19.1 del TIPAT no basta con acreditar un incumplimiento de la Sección A del Capítulo 9: exige además que la parte demandante alegue haber sufrido una pérdida o daño "by reason of, or arising out of, that breach". Como lo explicó la Demandada en su Contestación[1548], y las Demandantes lo reconocen[1549], la causalidad es una condición de la reclamación. La pregunta que el Tribunal debe responder no es cuánto valdría hoy el Proyecto si todo hubiese ocurrido como las Demandantes esperaban, sino qué pérdida fue causada por la violación que, en su caso, el Tribunal efectivamente declare. La existencia de un incumplimiento no basta para obtener una indemnización si no se demuestra suficientemente la pérdida atribuible a ese incumplimiento.

1175. Eso es justo lo que ocurrió recientemente en *Kappes c. Guatemala*. Aunque el tribunal declaró que Guatemala había violado el Artículo 10.5 del DR-CAFTA respecto de un proyecto minero, rechazó íntegramente la reclamación de daños. Partiendo de una disposición idéntica al artículo 9.19.1 del TIPAT[1550], concluyó que las demandantes no habían satisfecho "their burden of demonstrating the fact of loss or damage 'by reason of, or arising out of, th(e) breach'" y que,

---

[1548] Memorial de Contestación, ¶¶ 775-787, en particular el ¶ 775 (los límites de la pérdida jurídicamente relevante "están definidos por los principios de causalidad y certeza razonable") y el ¶ 787 (los daños reclamados "no serían la consecuencia directa del acto ilegal").

[1549] Memorial de Réplica, ¶ 1147.

[1550] *Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates c. República de Guatemala*, Caso CIADI No. ARB/18/43, Laudo, 23 de diciembre de 2025, ¶ 1256. **RL-0206**.

siendo así, "no issue of quantification of such loss or damage properly arises".[1551] En consecuencia, rechazó la reclamación de daños "for lack of sufficient evidence of causation".[1552] La misma dificultad se presenta aquí. Las Demandantes ofrecen una única cuantificación, construida sobre el supuesto de que las medidas impugnadas destruyeron la totalidad de la inversión, y se han negado a cuantificar el perjuicio atribuible a cada medida. Por ello, si el Tribunal declarara ilícita alguna de esas medidas, pero no aceptara alguna parte de la cadena de violaciones sobre la que descansa esa cuantificación, el expediente no contendría una estimación del daño causado por la violación efectivamente declarada. Corresponde a las Demandantes probar ese daño; no al Tribunal reconstruir *ex officio* una cuantificación que no presentaron.

b. El escenario contrafactual de las Demandantes llama al tribunal a sustituir decisiones de autoridades competentes con su propio criterio

1176. El escenario contrafactual que proponen las Demandantes descansa en un supuesto que este Tribunal no está facultado para adoptar: que la Semarnat debió haber aprobado la MIA. Aceptarlo implicaría ponerse en los zapatos de Semarnat y revalorar su decisión, lo cual iría en contra de una robusta serie de precedentes que establecen que los tribunales internacionales no constituyen órganos de apelación para decisiones de autoridades locales y no pueden arrogarse sus funciones. En otras palabras, no corresponde a este Tribunal determinar si la MIA se conformaba a las normas mexicanas y, por tanto, tendría que haber sido aprobada. Su función, en este contexto, se circunscribe a determinar si la Denegación de la MIA violó alguna disposición del Tratado y, en su caso, el monto de los daños que se desprenderían de tal ilícito. Esto último, como se demostró en la sección anterior, no implica especular sobre el resultado del proceso de evaluación de la MIA, sino valorar el Proyecto que existía en ese momento considerando todos los factores de riesgo. El escenario contrafactual que plantean las Demandantes simplemente elimina todos esos factores

[1551] *Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates c. República de Guatemala*, Caso CIADI No. ARB/18/43, Laudo, 23 de diciembre de 2025, ¶¶ 1261 y 1263. **RL-0206**.

[1552] *Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates c. República de Guatemala*, Caso CIADI No. ARB/18/43, Laudo, 23 de diciembre de 2025, ¶ 1302(6). **RL-0206**.

mediante supuestos, empezando por la instrucción a sus expertos de suponer que la MIA se habría aprobado en noviembre de 2019.[1553]

1177. Las Demandantes alegan que la MIA que sometieron a consideración de la Semarnat cumplía con todas las regulaciones aplicables y que, no obstante, fue denegada arbitrariamente.[1554] Al hacerlo, no solo ignoran la deferencia que los tribunales internacionales confieren a las decisiones de autoridades locales altamente especializadas, sino que solicitan indirectamente al Tribunal que actúe como un órgano de apelación. El escenario contrafactual que plantean solo opera si una decisión de la Semarnat se reemplaza por una del Tribunal, y esto es importante porque solo así podría suponerse que el Proyecto habría continuado avanzando entre diciembre de 2020 y principios de 2023, es decir, la fecha en que la mina habría comenzado operaciones de acuerdo con las Demandantes. Evidentemente sin una decisión favorable sobre la MIA sería imposible proceder a la construcción de la mina y subsecuentemente a la etapa de producción.

1178. La petición es particularmente delicada aquí, donde la evaluación ambiental abarcaba de manera simultánea la disponibilidad de agua, el manejo de jales, la biodiversidad, la protección de las aguas subterráneas y los posibles impactos sobre comunidades indígenas, y donde las Demandantes nunca impugnaron ninguna de esas cuestiones ante los órganos mexicanos competentes, a pesar de contar con medios para hacerlo. El expediente no contiene *ninguna* determinación de las autoridades locales sobre la conformidad de la MIA con el derecho mexicano que pudiera servir de base al contrafactual que las Demandantes proponen: lo que piden es que el Tribunal la produzca.[1555]

1179. El principio, sin embargo, no está en disputa. El Memorial de Contestación ya sostuvo que el análisis y la evaluación realizados por las autoridades técnicas regulatorias mexicanas merecen la deferencia de este Tribunal, y que el Tribunal no está autorizado para revisar la decisión de la

---

[1553] Primer Informe Brattle, ¶ 67 (las Demandantes le instruyeron suponer que "SEMARNAT would have rendered a (…) decision on the Project's MIA approval no later than November 2019"); Informe SLR, ¶ 350. Ver también Memorial de Contestación, ¶ 769.

[1554] Memorial de Demanda, ¶ 286.

[1555] Estos puntos se desarrollan en la sección V.C del Memorial de Contestación y en el acápite de metodología de este escrito.

autoridad como si fuera un tribunal nacional.[1556] Las autoridades que sustentan ese principio ya obran en el expediente, y varias fueron aportadas por las propias Demandantes.[1557] Al responder a ese planteamiento, las Demandantes no negaron el principio: reconocieron que en *Chemtura*, *Naturgy* y *Nelson* la deferencia se refería a "whether the tribunal should re-examine the regulator's underlying technical determination on the merits" y que "the tribunals declined to do so".[1558] Más aún, en otro pasaje de la Réplica hacen suya la formulación general del principio, al citar con aprobación el laudo *TECO c. Guatemala*:

> [...] although the role of an international tribunal is not to second-guess or to review decisions that have been made genuinely and in good faith by a sovereign in the normal exercise of its powers, it is up to an international arbitral tribunal to sanction decisions that amount to an abuse of power, are arbitrary, or are taken in manifest disregard of the applicable legal rules and in breach of due process in regulatory matters.[1559]

1180. El pasaje delimita con precisión lo que un tribunal internacional puede sancionar: el abuso de poder, la arbitrariedad, el desconocimiento manifiesto de las normas aplicables y la violación del debido proceso en materia regulatoria. Ninguno de esos supuestos consiste en determinar cuál debía ser o habría sido el resultado sustantivo de una evaluación ambiental en ausencia de estas

---

1556 Memorial de Contestación, ¶¶ 268 y 567. Ver también los ¶¶ 588-589 sobre el margen regulatorio reservado del Estado y el artículo 9.16 del TIPAT.

1557 *Chemtura Corporation v. Government of Canada*, CNUDMI (TLCAN, Capítulo XI), CPA Case No. 2008-01, Award, August 2 2010, ¶ 134. **CL-0076**; *Joshua Dean Nelson and Jorge Blanco v. United Mexicans States*, ICSID Case No. UNCT/17/1, Final Award, 5 June 2020, ¶ 257 ("as several tribunals have indicated, this Tribunal must grant some deference to the regulator in technical matters"). **CL-0117**; *TECO Guatemala Holdings, LLC v. The Republic of Guatemala*, ICSID Case No. ARB/10/23, Award, December 19 2013, ¶ 493. **CL-0084**; *Naturgy Energy Group, S.A. y Naturgy Electricidad Colombia, S.L. v. República de Colombia*, Caso CIADI No. UNCT/18/1, Laudo, 12 de marzo de 2021, ¶ 263 ("los tribunales internacionales han otorgado tradicionalmente una medida de deferencia al Estado en el ejercicio de sus obligaciones regulatorias"). **RL-0056**; *Mesa Power Group, LLC v. Government of Canada*, CPA Case No. 2012-17, Award, 24 March 2016, ¶ 505 ("international law requires tribunals to give a good level of deference to the manner in which a state regulates its internal affairs"). **RL-0050**; *Les Laboratoires Servier, S.A.S. and Arts et Techniques du Progrès S.A.S. v. Republic of Poland,*, CNUDMI, Final Award, 14 February 2012, ¶ 568 ("the Tribunal must accord due deference to the decisions of specialized Polish administrators interpreting and applying laws and regulations governing their area of competence"). **RL-0071**; *Glamis Gold, Ltd. v. The United States of America*, CNUDMI (TLCAN, Capítulo XI), Award, 8 June 2009, ¶ 779 ("it is not the role of this Tribunal, or any international tribunal, to supplant its own judgment of underlying factual material and support for that of a qualified domestic agency"). **RL-0058**. Las tres primeras autoridades fueron aportadas por las propias Demandantes.

1558 Réplica, ¶ 867.

1559 Réplica, ¶ 900, citando *TECO Guatemala Holdings, LLC v. Republic of Guatemala*, ICSID Case No. ARB/10/23, Award, 19 December 2013, ¶ 493. **CL-0084**.

circunstancias. Esa concesión resuelve la cuestión, porque el escenario contrafáctico que las Demandantes proponen exige exactamente aquello que ellas admiten que un tribunal internacional no debe ni puede hacer: reexaminar en el fondo la determinación técnica de la Semarnat para concluir que la MIA satisfacía los requisitos del artículo 35 de la LGEEPA y que, por consiguiente, debía aprobarse.

1181. La línea que traza la jurisprudencia es precisa: el escrutinio internacional recae sobre cómo se ejerció la facultad regulatoria, no sobre cuál debía ser su resultado.[1560] El tribunal de *ADF v. United States* la formuló en los términos más rotundos, al rechazar el argumento de la demandante de que la autoridad federal competente había actuado en exceso de sus facultades:

> [...] the Tribunal has no authority to review the legal validity and standing of the U.S. measures here in question under U.S. internal administrative law. We do not sit as a court with appellate jurisdiction with respect to the U.S. *measures*. Our jurisdiction is confined by NAFTA Article 1131(1) to assaying the consistency of the U.S. measures with relevant provisions of NAFTA Chapter 11 and applicable rules of international law.[1561]

1182. El mismo criterio se ha aplicado, con mayor razón, cuando la decisión impugnada proviene de una autoridad ambiental especializada. En *Chemtura v. Canada*, el inversionista impugnó la revisión especial que la *Pest Management Regulatory Agency* de *Health Canada* practicó sobre el lindano –un plaguicida organoclorado– y que culminó en la cancelación de los registros de sus productos. Alegaba que la revisión respondía a un irritante comercial y no a preocupaciones sanitarias y ambientales, y que el proceso había sido científica y procedimentalmente viciado, con

---

1560 *Mercer International Inc. v. Government of Canada*, ICSID Case No. ARB(AF)/12/3, Award, 6 March 2018, ¶ 7.33 ("Under NAFTA's Chapter 11, this Tribunal cannot operate as a court of appeal from decisions made by BC Hydro or the BCUC, particularly on such extensive and complex technical matters calling for specialist judgment to be exercised by BC Hydro and the BCUC at the particular time"). **CL-0104**; *GAMI Investments, Inc. v. The Government of the United Mexican States*, UNCITRAL (TLCAN, Capítulo XI), Final Award, 15 November 2004, ¶¶ 93-94 ("NAFTA arbitrators have no mandate to evaluate laws and regulations that predate the decision of a foreigner to invest (…) The duty of NAFTA tribunals is rather to appraise whether and how preexisting laws and regulations are applied to the foreign investor"). **CL-0037**. En el ¶ 93 el tribunal de GAMI hizo suyo el pasaje de *S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada*, UNCITRAL (TLCAN, Capítulo XI), Partial Award, 13 November 2000, ¶ 261, conforme al cual, al interpretar y aplicar el estándar mínimo, "a Chapter 11 tribunal does not have an open-ended mandate to second-guess government decision-making". **CL-0023**. Ese mismo pinpoint se citó en el Memorial de Contestación, nota al pie 692.

1561 *ADF Group Inc. v. United States of America*, ICSID Case No. ARB(AF)/00/1, Award, 9 January 2003, ¶ 190. **CL-0060**.

un resultado predeterminado. El tribunal desestimó todas las reclamaciones y, al delimitar el alcance de su análisis bajo el artículo 1105 del TLCAN, sostuvo que la apreciación del trato otorgado debía tomar en cuenta "all the circumstances, *including the fact that certain agencies manage highly specialized domains involving scientific and public policy* determinations".[1562] Al delimitar su propia función fue todavía más explícito:

> The Tribunal notes at the outset that it is not its task to determine whether certain uses of lindane are dangerous, whether in general or in the Canadian context, as the Claimant acknowledged at the hearing for closing arguments: 'As Canada has noted, the role of a Chapter 11 Tribunal is not to second-guess the correctness of the science-based decision-making of highly specialized national regulatory agencies. We agree with this proposition'.[1563] [Énfasis de la Demandada]

1183. La analogía con este caso es directa. La Semarnat es, como la agencia canadiense en *Chemtura*, una autoridad ambiental especializada que realiza evaluaciones técnicas y de política pública. Si un tribunal internacional no puede juzgar la corrección científica de una evaluación de esa naturaleza,[1564] con mayor razón no puede sustituirla por una propia de sentido aprobatorio. El estándar que ambas Partes invocan mide la calidad del procedimiento, no el acierto de la decisión; y trasladada esa premisa a la cuantificación, la consecuencia es ineludible: lo que puede repararse es el vicio del procedimiento, no una aprobación que nunca existió.

1184. Los tribunales han aplicado este criterio al supuesto que aquí se plantea –el de un permiso ambiental minero que nunca llegó a otorgarse– y lo han hecho también al momento de cuantificar el daño. En *Gabriel Resources v. Romania*, caso que las propias Demandantes invocan en su Réplica, el proyecto aurífero Roșia Montană nunca obtuvo el permiso ambiental porque fracasó el procedimiento ante la comisión técnica de análisis, y el tribunal se negó a concluir que Rumania "should have issued the Environmental Permit but did not".[1565]

1562 *Chemtura Corporation v. Government of Canada*, UNCITRAL (NAFTA, Chapter XI), CPA Case No. 2008-01, Award, 2 August 2010, ¶ 123. **CL-0076**.

1563 *Chemtura Corporation v. Government of Canada*, UNCITRAL (NAFTA, Chapter XI), CPA Case No. 2008-01, Award, 2 August 2010, ¶ 134. **CL-0076**.

1564 *Chemtura Corporation v. Government of Canada*, UNCITRAL (NAFTA, Chapter XI), CPA Case No. 2008-01, Award, 2 August 2010, ¶ 153, donde el tribunal recogió el reconocimiento de la propia demandante de que no le correspondía juzgar "the correctness or adequacy of the scientific results of the Special Review". **CL-0076**.

1565 *Gabriel Resources Ltd. y Gabriel Resources (Jersey) Ltd. v. Romania*, ICSID Case No. ARB/15/31, Award, 8 March 2024, ¶ 981 (el tribunal no podía concluir "that the 29 November 2011 meeting was the

1185. En *Bilcon v. Canada*, donde sí se declaró la responsabilidad del Estado porque el panel de revisión conjunta encargado de evaluar el impacto ambiental del proyecto excedió el mandato que le fijaba la legislación aplicable, el tribunal precisó que no le correspondía realizar "its own environmental assessment, in substitution for that of the JRP", ni decidir "what the actual outcome should have been", ni prejuzgar la decisión de las autoridades competentes, porque estas "had the authority and duty to make their own decision about the future of the Bilcon project".[1566]

1186. En suma, la propia teoría de responsabilidad de las Demandantes se dirige a la forma en que la autoridad ejerció sus facultades, y no a la posibilidad misma de una denegación, de modo que ni siquiera una declaratoria de responsabilidad podría producir la aprobación de la MIA que su escenario contrafactual presupone. Aceptar ese escenario exigiría de este Tribunal un pronunciamiento sobre una cuestión que el Tratado no le somete: si la MIA del Proyecto Ixtaca satisfacía los requisitos sustantivos del ordenamiento ambiental mexicano y debía, por tanto, haberse aprobado. La consecuencia para la cuantificación es la que ya se anticipó: el escenario contrafactual debe valorar el Proyecto tal y como existía, con su riesgo regulatorio intacto, que es precisamente la lógica económica de la valoración propuesta por Quadrant.

c. El escenario contrafactual no puede eliminar el impacto de actos anteriores a la fecha crítica

1187. El Artículo 9.21(1) del TIPAT señala:

> 1. No claim shall be submitted to arbitration under this Section if more than three years and six months have elapsed from the date on which the claimant first acquired, or should have first acquired, knowledge of the breach alleged under Article 9.19.1 (Submission of a Claim to Arbitration) and knowledge that the claimant (for claims brought under Article 9.19.1(a)) or the enterprise (for claims brought under Article 9.19.1(b)) has incurred loss or damage.

1188. Las Demandantes sometieron su reclamación a arbitraje el 14 de junio de 2024 y, por lo tanto, la fecha crítica para efectos de determinar la jurisdicción del Tribunal *ratione temporis* es el

last TAC meeting, that matters were resolved at that time, and that Romania should have issued the Environmental Permit but did not"). **CL-0196**.

[1566] *William Richard Clayton, Douglas Clayton, Daniel Clayton y Bilcon of Delaware, Inc. v. Government of Canada* UNCITRAL(NAFTA, Chapter XI), CPA case No. 2009-04, Laudo sobre Daños, 10 de enero de 2019, ¶¶ 130-131. Los pasajes citados reproducen las conclusiones del Laudo sobre Jurisdicción y Responsabilidad de 17 de marzo de 2015. **CL-0091**.

14 de diciembre de 2020. Esto implica que las Demandantes no pueden quejarse en este arbitraje de acto o conducta alguna ocurrida antes de esa fecha.

1189. Dado que un escenario contrafactual bajo el principio de reparación plena implica "wipe out all *the consequences of the illegal act* and re-establish the situation which would, in all probability, have existed *if that act had not been committed*" y, en este caso, las Demandantes no pueden reclamar presuntos ilícitos ocurridos antes del 14 de diciembre de 2020, se seguiría lógicamente que las Demandantes no pueden basar su reclamación de daños en un escenario contrafactual que elimine los efectos de actos que ocurrieron antes de la fecha crítica. Sin embargo, como se observó oportunamente en el Memorial de Contestación, las Demandantes violaron este presupuesto.[1567]

1190. El escenario contrafactual que plantean para efectos del cálculo de daños no es válido bajo el principio de reparación plena porque elimina los efectos de la suspensión del proceso de evaluación de la MIA –ocurrido en octubre de 2019– y el retraso que ello implicó para la decisión de la MIA. El supuesto sobre el que descansa el escenario contrafactual de las Demandantes elimina así el impacto de actos cuya legalidad no está frente a este Tribunal *ratione temporis*. A pesar de que esta observación se hizo oportunamente en el Memorial de Contestación, las Demandantes no abordaron este tema en la Réplica.

1191. Por la misma razón, el escenario contrafáctico tampoco puede suprimir el riesgo, plenamente vigente al 14 de diciembre de 2020, de que el amparo 445/2015 promovido por la comunidad de Tecoltemi prosperara y las Concesiones quedaran insubsistentes. Ese procedimiento se inició en 2015, casi tres años antes del cambio de administración, y su desenlace no dependía de ninguna de las medidas impugnadas en este arbitraje: dependía de una determinación de los tribunales mexicanos, que en su momento adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un contrafáctico que asume a la vez la aprobación de la MIA y el fracaso del amparo elimina más que solo las consecuencias del ilícito. Elimina el riesgo del Proyecto.

C. Fecha de valuación y uso de información *ex post*

1192. Como se sabe, las Demandantes han presentado dos valoraciones de los daños utilizando dos fechas de valuación distintas: i) la fecha *ex ante* que coincide con la fecha de la Resolución de

[1567] Memorial de Contestación, ¶ 769.

No Factibilidad (9 de febrero de 2023), y; ii) la fecha *ex post* que se define como la fecha del laudo. Las Demandantes sostienen en la Réplica que este Tribunal debe adoptar un enfoque *ex post* argumentando que: i) le permite al Tribunal determinar las pérdidas con "máxima información" y, por lo tanto, es más confiable y; ii) la inversión se apreció después de la violación y el derecho internacional consuetudinario le otorga al inversionista el beneficio de dicho incremento.[1568]

1193. Por las razones que se expondrán a continuación, la Demandada sostiene que la fecha de valuación *ex ante* es la fecha apropiada para valorar los daños en este caso. Sin embargo, antes de entrar a esa discusión desea hacer dos observaciones iniciales.

1194. *Primero*, dado el reconocimiento de las Demandantes en el sentido de que la Denegación de la MIA impedía continuar con el Proyecto, la fecha *ex ante* debe considerarse ahora como el 17 de diciembre de 2020 y no el 9 de febrero de 2023, como originalmente se planteó. Lo anterior es congruente además con la observación que se hizo oportunamente en el Memorial de Contestación sobre la imposibilidad de continuar desarrollando el Proyecto sin una decisión favorable sobre la MIA.[1569]

1195. *Segundo*, aunque la Demandada aboga por utilizar la fecha *ex ante* redefinida conforme al punto anterior, se observa que la metodología que utiliza Quadrant es flexible y permite actualizar el VJM que tenía la inversión en la fecha *ex ante* a una fecha posterior, como la fecha del laudo, en caso de que el Tribunal lo considere apropiado en las circunstancias de este caso. Esto permitiría atender el segundo de los argumentos en los que las Demandantes se apoyan para favorecer la fecha *ex post* –i.e., que el inversionista tiene derecho al beneficio implícito en la apreciación de su inversión. Sin embargo, se hace notar que el incremento en el valor de la inversión derivado de los altos precios del oro y la plata bien podría ser efímero y, por lo tanto, como se explicará más adelante, basar los daños cuando los precios se encuentran cerca de sus máximos históricos conlleva el riesgo de sobrecompensar materialmente a las Demandantes.

1568 Réplica, ¶ 1065.

1569 Memorial de Contestación, ¶ 767. Al observar que la sección de expropiación del Memorial no mencionaba la Denegación de la MIA, la Demandada señaló que "[e]sto resulta cuanto menos sorprendente, ya que en esa fecha la AIA ya había sido denegada, y se requería una AIA para sacar adelante el Proyecto y generar los flujos de caja que sirven de base para la reclamación por daños."

1. Las Demandantes no logran desvirtuar ninguna de las razones para rechazar la fecha del laudo como fecha de valuación

1196. En su Memorial de Contestación, la Demandada observó que las propias Demandantes habían aceptado que una indemnización equivalente al VJM de la inversión determinada en la fecha *ex ante* era congruente con el TIPAT y el derecho internacional.[1570] Dada la coincidencia de las partes sobre este punto, la Demandada concluyó que la fecha apropiada para valorar la inversión era la fecha *ex ante*.[1571] Las Demandantes no respondieron al razonamiento desarrollado por la Demandada. Su única reacción consistió en afirmar, sin ofrecer fundamento alguno, que "[w]hether the measure was instantaneous does not dictate the valuation date".[1572] Esa sola afirmación no desvirtúa el argumento de la Demandada.

1197. La Demandada, por lo tanto, mantiene su posición de que la fecha de valuación relevante es la fecha *ex ante*, con la observación que se hizo en párrafos anteriores sobre la pertinencia de redefinirla como el 17 de diciembre de 2020.

a. Las Demandantes tergiversan la posición de la Demandada sobre la fecha de valuación apropiada

1198. Las Demandantes tergiversan la posición de la Demandada al afirmar que México sostiene que la medida de compensación del Artículo 9.8.2 controla la determinación de los daños en el presente caso.[1573] La Demandada nunca alegó tal cosa. Lo que sostuvo es que "la medida de indemnización del Tratado para las expropiaciones legales [i.e., la que establece el Artículo 9.8.2] [...] a menudo se considera coherente con el estándar de reparación plena que aplican los tribunales internacionales, como lo demuestran los numerosos casos en los que se han determinado los daños utilizando ese parámetro y aplicando el estándar de reparación plena."[1574] La Demandada se apoyó en los casos de *Santa Elena v. Costa Rica* y *Glencore v. Bolivia*, el cual, a su vez, refiere a un tercer caso: *Flughafen v. Venezuela*.

1199. Sobre *Santa Elena* las Demandantes argumentan que dicho tribunal caracterizó la expropiación como legal y determinó la compensación sobre la base del estándar para

---

1570 Memorial de Contestación, ¶ 759, citando el Memorial de Demanda, ¶ 530.

1571 Memorial de Contestación, ¶ 760.

1572 Réplica, ¶ 1067.

1573 Réplica, ¶ 1058

1574 Memorial de Contestación, ¶ 754

expropiaciones legales. Para ello refiere al lector a los párrafos 71 y 72 del laudo. Sin embargo, dichos párrafos no señalan que la expropiación haya sido legal. Lo que se explica ahí es que el derecho internacional permite a Costa Rica expropiar propiedades en manos de nacionales extranjeros para fines públicos mediante el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva y que incluso en casos de expropiación legal el Estado tiene la obligación de pagar una indemnización.[1575] En ningún momento el tribunal "caracterizó" la expropiación como una expropiación legal, como afirman las Demandantes.

1200. Sobre *Glencore v. Bolivia*, las Demandantes alegan que dicho tribunal expresamente declinó discutir "whether Article 5 of the Treaty provides a compensation standard applicable to both lawful and unlawful expropriations and whether the Treaty standard would be more appropriate than the customary international law standard".[1576] Con base en lo anterior, concluyen que *Glencore* no apoya la posición de la Demandada. Este argumento es engañoso.

1201. Es cierto que el tribunal en *Glencore* declinó entrar a la discusión referida, sin embargo, eso no es relevante porque México *nunca* alegó que el tribunal en *Glencore* haya determinado que la medida de compensación para una expropiación ilegal sea necesariamente la misma que para una expropiación legal en todos los casos. Lo que alegó es que dicho tribunal, al resolver un caso de expropiación ilegal: (i) aplicó el estándar de reparación plena, y; (ii) fijó el monto de la compensación sobre la base del VJM de la inversión determinado *antes de la expropiación*.

1202. Como se desprende del extracto completo al que aluden las Demandantes, el tribunal concluyó que Bolivia había violado el artículo 5 del tratado subyacente, es decir, había expropiado ilegalmente la inversión:

> 291. As to the compensation standard, the Tribunal does not deem it necessary to discuss whether Article 5 of the Treaty provides a compensation standard applicable to both lawful and unlawful expropriations and whether the Treaty standard would be more appropriate than the customary international law standard. In this case, we have found that Article 5 has been breached and thus compensation must follow. Since both Parties

---

1575 *Compañía del Desarrollo de Santa Elena S.A. v. República de Costa Rica*, Caso CIADI No. ARB/96/1, Laudo, 17 de febrero de 2000, ¶¶ 71-72. **CL-0021**. El ¶ 78 del mismo laudo fija el criterio temporal: "The expropriated property is to be evaluated as of the date on which the governmental 'interference' has deprived the owner of his rights or has made those rights practically useless".

1576 Réplica, ¶ 1060, citando *Glencore Finance (Bermuda) Limited v. Plurinational State of Bolivia*, CPA Case No. 2016-39, Award, 8 September 2023, ¶ 291. **RL-0115**.

> refer to the FMV, we agree with the Respondent's argument that in practical terms, the result of applying one standard or the other should be the same. [...]

1203. Sobre la fecha de valuación, Glencore, al igual que las Demandantes en este caso, argumentó que "where the value of an investment has increased following expropriation, 'full reparation may require […] the valuation date to be fixed at the date of the award'."[1577] Por consiguiente, argumentó: "the valuation should be made as of the date of the award."[1578] Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento y concluyó que la fecha de valuación apropiada era la fecha inmediata anterior a la expropiación:

> The purpose of Article 5 is to ensure that compensation is given when an expropriation takes place, and such compensation entails calculating what the FMV would be if the investor had sold to a willing buyer the investment "but-for" the Respondent's breach, which is, in this case, what the FMV of the Antimony Smelter had been if not for the Reversion Decree that effectively took away the property and control of the Antimony Smelter in 2010.[1579]

1204. Lo anterior confirma la proposición para la que se citó el caso originalmente, es decir, que el tribunal del caso *Glencore*: i) determinó que había ocurrido una expropiación ilegal (i.e., una violación del Artículo 5 del tratado subyacente); ii) determinó que el principio de reparación plena era el estándar aplicable para determinar los daños; y iii) utilizó la fecha inmediata anterior a la expropiación como fecha de valuación.

1205. El tribunal de *Glencore* también hizo notar que otros tribunales habían seguido un enfoque similar y citó explícitamente a *Santa Elena v. Costa Rica* y *Flughafen v. Venezuela*. Sobre este último se afirmó lo siguiente:

> 291. [...] The Tribunal notes that other investment cases have followed a similar approach. For example, in *Santa Elena v. Costa Rica*, the tribunal stated that it would not enter into a doctrinal discussion of the standard of compensation since "there [was] no dispute between the parties as to the applicability of the principle of full compensation for the [FMV] of the Property, i.e., what a willing buyer would pay to a willing seller". In *Flughafen v. Venezuela*, the tribunal also considered: […] "It is a firm principle of customary international law that the victim of a wrongful act perpetrated by a State is entitled to receive full reparation, as if the wrongful act had not occurred. […] And in an expropriation, full reparation is equivalent to the market value of the

---

1577 *Glencore Finance (Bermuda) Limited v. Plurinational State of Bolivia*, CPA Case No. 2016-39, Award, 8 September 2023, ¶ 315. **RL-0115**.

1578 *Glencore Finance (Bermuda) Limited v. Plurinational State of Bolivia*, CPA Case No. 2016-39, Award, 8 September 2023, ¶ 315. **RL-0115**.

1579 *Glencore Finance (Bermuda) Limited v.Plurinational State of Bolivia*, Award, CPA Case No. 2016-39, Award, 8 September 2023, ¶ 321. **RL-0115**.

> expropriated property, a value that the owner could have obtained, if he had disposed of it just before the date on which the State carried out the dispossession, or on which the will of expropriation transcended the public (reducing the market value of the property) […].[1580]

1206. Sin embargo, *Santa Elena*, *Glencore* y *Flughafen*, no son los únicos casos en los que tribunales internacionales que resolvieron casos de expropiación determinaron los daños con base en el estándar de reparación plena y en la medida de compensación establecida en el tratado. Entre ellos se encuentran *South American Silver* e incluso *Stans Energy* y *Rusoro*, autoridades presentadas por las propias Demandantes.[1581]

b. La lógica con la cual las Demandantes abogan por la fecha del laudo como fecha de valuación no aplica en este caso

1207. Como se explicó en el Memorial de Contestación, la posición de las Demandantes parte de una premisa específica: que, en los casos de expropiación ilegal, el remedio primario en el derecho internacional es la restitución del bien expropiado y, por tanto, su equivalente monetario debe calcularse al momento en que esa restitución habría tenido lugar, es decir, después del laudo.[1582] Significativamente, las Demandantes no controvierten este razonamiento en su Réplica, confirmando así que esa es la base de su planteamiento.

1208. Sin embargo, como se hizo notar en su momento, las Demandantes en este caso no solicitan la restitución de su inversión –i.e., un proyecto minero en vía de desarrollo. Lo que solicitan es una compensación monetaria basada en el valor potencial de la mina que pretendían construir y operar. Naturalmente, eso implica especular sobre cuestiones como: la inversión necesaria para construir la mina (CAPEX); la disponibilidad de financiamiento suficiente y sus términos; el calendario de construcción; el volumen de oro y plata que se produciría durante la vida útil de la mina; los costos de producción y los precios de venta del oro y plata y; la obtención de los permisos

---

1580 *Glencore Finance (Bermuda) Limited v. Plurinational State of Bolivia*, Award, CPA Case No. 2016-39, Award, 8 September 2023, ¶ 291. **RL-0115**.

1581 *South American Silver Limited c. el Estado Plurinacional de Bolivia*, Caso CPA No. 2013-15, Laudo, 22 de noviembre de 2018, ¶¶ 799 y 865-866 (el tribunal fijó la compensación conforme a la medida del artículo 5 del tratado subyacente, sobre el valor de lo efectivamente invertido en el proyecto). **RL-0189**; *Stans Energy Corp. and Kutisay Mining LLC v. Kyrgyz Republic (II)*, Award, CPA Case No. 2015-32, 20 August 2019, ¶¶ 783-784. **CL-0111**; *Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB(AF)/12/5, Award, 22 August 2016, ¶¶ 787-790 (determinación del "genuine value" de la inversión "as of 16 September 2011", fecha de la expropiación). **CL-0099**.

1582 Memorial de Contestación, ¶ 761.

necesarios. Lo que solicitan las Demandantes es, en esencia, que el Tribunal presuponga la existencia de la inversión que sus peritos valoran para efectos de determinar los daños.

1209. La Demandada sostiene que lo que plantean las Demandantes iría más allá de lo que supone el principio de reparación plena. Más que restablecer la situación que con toda probabilidad habrían enfrentado las Demandantes de no haber sido por las presuntas violaciones, lo que pretenden es que se les compense por la realización del Proyecto en condiciones favorables –i.e., sin desviaciones mayores sobre el programa delineado en el FS conforme a la reformulación de SLR–, sin incurrir en los gastos ni en los riesgos que habría implicado proseguir con el Proyecto. Es así como transforman un proyecto que el mercado valoraba en unos USD $114.5 millones –i.e., la capitalización de mercado de Almaden en la fecha de la Denegación de la MIA–, en una reclamación de aproximadamente USD $2,700 millones. Dicha lógica no tiene cabida en este caso.

1210. La Demandada no condiciona el rechazo de la fecha del laudo a que las Demandantes hubieran solicitado la restitución de su inversión, como estas parecen atribuirle; ese es un planteamiento que las Demandantes construyen para luego rebatirlo. El punto de la Demandada es distinto: la propia regla de la fecha del laudo que invocan las Demandantes descansa en una lógica restitutoria, tomada de *Chorzów*, que en este caso no se satisface. Las Demandantes no solicitan la restitución de la inversión, pero incluso si lo hubiesen hecho, lo que tendría que restituirse es un proyecto minero preoperativo, y no la mina que las Demandantes esperaban construir y operar si se aprobaba la MIA y se mantenían las Concesiones. En consecuencia, la indemnización no debe reflejar el valor que la inversión presuntamente habría tenido en la fecha del laudo si el Proyecto hubiese seguido desarrollándose, sino la pérdida sufrida cuando ocurrió el supuesto incumplimiento.[1583]

1211. La lógica de las Demandantes está basada en la solución adoptada por la Corte Permanente en *Chorzów*: al no ser posible la restitución, la compensación monetaria sustituiría el valor del bien del que habían sido privadas las partes afectadas. Sin embargo, en marcado contraste con el caso que nos ocupa, las partes afectadas en *Chorzów* contaban con un activo productivo, derechos contractuales adquiridos y una proyección de producción suficientemente cierta sustentada en una fábrica comparable. Ninguna de esas circunstancias concurre en el presente caso y, por ello, la

[1583] Memorial de Contestación, ¶ 762.

valuación en este caso se tendría que limitar al valor de la inversión *existente* en la fecha del ilícito (reflejado fielmente en la capitalización de mercado de Almaden en esa fecha), nada más.

1212. Como también lo demostró la Demandada en su Contestación, aunque las Demandantes prefieren la fecha del laudo porque maximiza las ganancias de este arbitraje, ellas mismas presentan la opción de valorar los daños *ex ante*, por lo que ambas partes están de acuerdo en que este enfoque es adecuado y congruente con el estándar de compensación aplicable.[1584] En su Réplica, las Demandantes no dicen nada al respecto, lo cual confirma el punto.

1213. La Demandada también citó el laudo en *Tidewater*, notando que allí el tribunal rechazó el uso de información *ex post* porque, al igual que en este caso, la parte demandante no solicitó la restitución.[1585] La única respuesta de las Demandantes a todo el argumento se limitó a señalar que el caso *Tidewater* se trató de una expropiación lícita y, por ende, el caso no es relevante.[1586] Esa respuesta pierde completamente de vista el punto planteado por la Demandada. La relevancia del caso no radica en la licitud o ilicitud de la expropiación, sino en un principio mucho más básico: la compensación monetaria busca restablecer el valor de la inversión al momento en que se produjo el daño, no reconstruir retrospectivamente el valor que el activo pudo haber adquirido con el paso del tiempo, cuando dicho valor es incierto y especulativo.

1214. Desde luego, ello no significa que una valuación *ex post* nunca pueda ser apropiada. Significa, simplemente, que se trata de un enfoque excepcional cuya procedencia debe justificarse a partir de las circunstancias particulares del caso y no del apetito de la parte demandante por maximizar el monto de su reclamación.

c. La valuación *ex post* no es apropiada en el caso de inversiones preoperativas como Ixtaca

1215. La Demandada explicó en su Memorial de Contestación que la cautela con una valuación *ex post* resulta especialmente importante cuando se trata de inversiones preoperativas como el Proyecto. Para demostrarlo, analizó los casos invocados por las Demandantes y demostró que, en todos, las inversiones objeto de la controversia estaban en operación cuando ocurrieron las

1584 Memorial de Contestación, ¶ 759.

1585 Memorial de Contestación, nota al pie 975.

1586 Réplica, ¶ 1068.

violaciones.[1587] Las Demandantes no controvierten este hecho ni intentan distinguir dichos casos del presente arbitraje. De hecho, ni siquiera vuelven a mencionarlos.[1588] Su única respuesta consistió en acusar a la Demandada de inventar un requisito y afirmar, nuevamente sin sustento, que "[a]n ex post valuation does not depend on whether the asset was operational".[1589] Sin embargo, las circunstancias de los casos que ellas mismas citan demuestran lo contrario.

1216. Con el fin de llenar el vacío generado por la falta de antecedentes que apoyen su posición, las Demandantes incorporan un caso adicional en la Réplica: *ConocoPhillips v. Venezuela*. Sostienen que allí el tribunal aplicó un enfoque *ex post* pese a que, en el bloque Corocoro, "production did not take place" antes de la expropiación.[1590] Sin embargo, esta lectura ignora nuevamente los hechos del caso. *ConocoPhillips* no involucraba un proyecto aislado e incipiente, sino una inversión integrada a una operación petrolera de gran escala, que ya producía crudo extrapesado con niveles de clase mundial. Cuando se implementaron las medidas reclamadas en ese caso, Petrozuata y Hamaca (los otros dos proyectos que formaban parte de la misma inversión) se encontraban en plena producción[1591], mientras que Corocoro estaba "at the beginning of its operation". Esto quiere decir que, aun cuando Corocoro nunca produjo crudo, el proyecto no tenía mayores obstáculos pendientes para iniciar operaciones.[1592] Nada de eso aplica en este caso.

1217. Más importante aún, y como lo reconocen las propias Demandantes, "[t]he tribunal used *actual post-expropriation production* and *sales data from the company's other productive*

1587 Memorial de Contestación, ¶ 763.

1588 Además de estos casos, las Demandantes invocan el caso *Tethyan* como supuesto respaldo de su posición. Sin embargo, ese laudo no sostiene la regla general que pretenden derivar de él, y la Demandada lo demuestra en el acápite de metodología de este escrito, donde la cuestión del DCF en proyectos preoperativos se examina de manera integral. Basta señalar aquí que el propio tribunal de *Tethyan* calificó de excepcionales las circunstancias que justificaban su enfoque y que, como lo demuestran la práctica arbitral y la doctrina, se trata un claro *outlier* en el arbitraje de inversión.

1589 Réplica, ¶ 1070.

1590 Réplica, ¶ 1071, citando *ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB/07/30, Award, 8 March 2019, ¶ 521. **CL-0215**.

1591 ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/07/30, Award, 8 March 2019, ¶¶ 282, 446, 451 y 457. **CL-0215**.

1592 ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/07/30, Award, 8 March 2019, ¶ 521. **CL-0215**.

assets".[1593] Esto quiere decir que, a diferencia del presente caso, el tribunal en *ConocoPhillips* no se vio obligado a especular sobre los flujos de caja hipotéticos de un activo productivo que aún no existía, sino que fundamentó su decisión en la existencia de datos históricos de producción y facturación reales generados por los propios activos expropiados, *que fueron operados por una empresa petrolera del Estado durante los años posteriores a la medida*.[1594] En otras palabras, la decisión del tribunal parece haber sido influenciada por un presunto beneficio indebido del Estado a partir de la expropiación.

1218. La realidad es diametralmente distinta en este caso. Como se explicó *supra*, las Demandantes no han demostrado que se haya producido una expropiación directa; el Proyecto nunca obtuvo la autorización ambiental necesaria –y las Demandantes nunca impugnaron la decisión de negarla–, la mina nunca fue construida y nunca produjo un solo gramo de mineral y el Estado no se apropió del Proyecto para explotarlo en su beneficio. Tampoco es el caso que Almaden posea otras minas similares en operación de las cuales se puedan extrapolar datos de inversión, producción y costos. Mientras que en *ConocoPhillips* la información posterior reflejaba la evolución efectiva de un negocio ya operativo, en este caso la valuación *ex post* pretende valuar la inversión, no con base en el Proyecto que las Demandantes tenían al momento de la presunta expropiación, sino en la mina que esperaban construir y explotar en el futuro. Lejos de apoyar la posición de las Demandantes, *ConocoPhillips* confirma precisamente el criterio defendido por la Demandada: los precedentes que admiten valoraciones *ex post* involucran expropiaciones directas de activos productivos cuyo desempeño podía observarse objetivamente, no proyectos que nunca se construyeron.

1219. En suma, las Demandantes no han desvirtuado ninguno de los fundamentos expuestos por la Demandada para rechazar la utilización de una fecha de valuación posterior al supuesto ilícito. No respondieron por qué la fecha de la expropiación dejaría de ser la regla cuando el propio acto alegado es instantáneo; no controvirtieron que la lógica de la valuación al momento del laudo está vinculada a remedios restitutorios que aquí no se solicitan; no respondieron al hecho de que todos los precedentes relevantes sobre valuación *ex post* involucraban inversiones operativas; y el único

---

[1593] Réplica, ¶ 1071.

[1594] ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/07/30, Award, 8 March 2019, ¶ 556. **CL-0215**.

caso adicional que invocan (*ConocoPhillips*) confirma esa misma premisa. Como se explica a continuación, el hecho es que el enfoque *ex post* se utiliza por lo general en casos de expropiación directa en donde la inversión expropiada se apreció objetivamente entre la fecha de la violación y la fecha del laudo para evitar que la parte demandada se beneficie indebidamente de la violación. Ese no es el caso aquí.

2. Las Demandantes solo buscan maximizar su reclamación de daños con el análisis *ex post* que proponen

1220. La Demandada explicó en su Memorial de Contestación que el principio de reparación íntegra rige la determinación de los daños en este caso, pero que numerosos tribunales que han aplicado ese estándar han cuantificado la indemnización con base en el VJM de la inversión inmediatamente antes del ilícito, y que la idoneidad de un enfoque *ex ante* o *ex post* depende de las circunstancias particulares del caso.[1595] Las Demandantes no controvirtieron ninguno de esos dos puntos. De hecho, ya en su Memorial reconocían que "taking into account *ex post* information in assessing damages aligns with the standard of full reparation under international law" solo "*in certain circumstances*".[1596] Esas circunstancias no concurren aquí.

1221. Las Demandantes sostienen que el Tribunal debe valorar la inversión "on an ex post basis using the date of the award as the valuation date" y que "[w]here, as here, the investment has appreciated in value since the breach, customary international law *entitles* the investor to receive the benefit of that increase".[1597] Como se demuestra a continuación, esta premisa se fundamenta en una lectura incompleta de los tres casos de la saga Yukos (*Hulley*, *Yukos* y *Veteran*), que son claramente distinguibles de este arbitraje. Asimismo, las Demandantes afirman que una valuación *ex post* permite decidir con "maximum information rather than maximum ignorance"[1598], apoyándose para ello en el caso *Burlington*.[1599]

1595 Memorial de Contestación, ¶¶ 754-755.

1596 Memorial de Demanda, ¶ 669.

1597 Réplica, ¶ 1065, citando *Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador*, ICSID Case No. ARB/08/5, Decision on Reconsideration and Award, 7 February 2017, ¶ 332. **CL-0223**.

1598 Réplica, ¶ 1070.

1599 *Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador*, ICSID Case No ARB/08/05, Decision on Reconsideration and Award, 7 February 2017, ¶ 332. **CL-0223**.

1222. *En primer lugar*, una fecha posterior a las medidas impugnadas no reduce necesariamente la especulación, y menos tratándose de un proyecto que aún no había avanzado a la fase de construcción. Por el contrario, la incrementa al incorporar supuestos especulativos como: la aprobación de permisos (MIA incluida), la solución a problemas detectados en el estudio de factibilidad (como la disponibilidad de agua suficiente), la disponibilidad de fuentes adecuadas de financiamiento y un largo etcétera.

1223. Este tipo de incógnitas no se presenta cuando la inversión expropiada se encuentra en operación, lo cual permite reducir la especulación en el escenario contrafactual. En su segundo informe, Quadrant explica que, desde un punto de vista estrictamente económico, la cuestión clave es si "hindsight materially reduces the uncertainty associated with the asset being valued", y la principal justificación de un análisis ex post sería que "actual observed outcomes can eliminate uncertainty that existed at the time of the alleged breach."[1600] Sin embargo, Quadrant añade la siguiente observación:

> 44. The present case is fundamentally different from the foregoing example. The Project was not a going concern. The mine had not yet been constructed, commercial production had not commenced, and the Project had not generated revenues. Consequently, there are no actual operating results that became known through hindsight.[1601] [Énfasis añadido]

1224. El experto de México añade que, en las circunstancias de este caso, "even under an *ex post* framework, Ixtaca's cash flows in the But-For Scenario remain forecasts, predictions, or assumptions, rather than realized outcomes" y, el resultado es que "hindsight does not replace uncertainty regarding the Project's performance with observed facts. *Rather, it merely replaces one set of assumptions with another set of assumptions*."[1602] [Énfasis añadido]

1225. En esas circunstancias, la información "histórica" que se pretende incorporar no reduce la especulación; solo sirve para reconstruir retrospectivamente un escenario hipotético cuya probabilidad no puede determinarse sin caer en excesos especulativos. De hecho, como también lo explica Quadrant en su segundo informe, el enfoque *ex post* de las Demandantes se utiliza para maximizar los daños, al tratar los flujos hipotéticos que habría generado la imaginada mina entre

---

1600 Segundo Informe Quadrant, ¶¶ 42-43.

1601 Segundo Informe Quadrant, ¶ 44.

1602 Segundo Informe Quadrant, ¶ 45.

febrero de 2023 (la fecha ex ante de las Demandantes) y la fecha del laudo como una pérdida *histórica* cierta que no solo no se descuenta, sino que genera intereses pre laudo.[1603]

1226. *En segundo lugar*, es precisamente por las razones que se exponen en el punto anterior que la Demandada hizo notar que laudos como el de *Burlington* correspondían a inversiones plenamente operativas y, por tanto, no eran comparables con Ixtaca.[1604] Las Demandantes no controvirtieron este punto.

1227. Lo mismo ocurre con la saga Yukos, que las Demandantes invocan para sostener que el derecho internacional consuetudinario reconoce un supuesto derecho del inversionista a elegir la fecha de valuación que más le beneficie.[1605] La realidad es que los casos en los que se apoyan las Demandantes involucraban la mayor empresa petrolera de Rusia, la cual estaba plenamente operativa al momento de las medidas y cuya apreciación posterior a las medidas reflejaba el desempeño y el valor económico de activos productivos que continuaron generando ingresos *bajo control del Estado después de la expropiación*.[1606]

1228. De hecho, la práctica confirma que la fecha de valuación por defecto es la inmediatamente anterior a la conducta ilícita y los casos en los que se apoyan las Demandantes lo confirman.[1607]

1603 Segundo Informe Quadrant, ¶¶ 48, 61.

1604 Memorial de Contestación, ¶ 763.

1605 Memorial de Demanda, ¶ 698.

1606 *Hulley Enterprises Limited (Chipre) v. Russian Federation*, CPA Case No. 2005-03/AA226, Final Award, 18 July 2014, ¶ 1769. **CL-0086**; *Yukos Universal Limited (Isla de Man) v. Russian Federation*, CPA Case No. 2005-04/AA227, Final Award, 18 July 2014, ¶ 1769. **CL-0088**; *Veteran Petroleum Limited (Chipre) v. Russian Federation*, CPA Case No. 2005-05/AA228, Final Award, 18 July 2014, ¶ 1769. **CL-0087**.

1607 *Compañía del Desarrollo de Santa Elena S.A. v. Republic of Costa Rica*, ICSID Case No. ARB/96/1, Award, 17 February 2000, ¶ 78 ("The expropriated property is to be evaluated as of the date on which the governmental 'interference' has deprived the owner of his rights or has made those rights practically useless"). **CL-0021**; *Glencore Finance (Bermuda) Limited v. Plurinational State of Bolivia*, CPA Case No. 2016-39, Award, 8 September 2023, ¶ 321. **RL-0115**. *STEAG GmbH c. Reino de España*, Caso CIADI No. ARB/15/4, Decisión sobre Jurisdicción, Responsabilidad e Instrucciones sobre Cuantificación de Daños, 8 de octubre de 2020, ¶ 752. **RL-0190**; *Nachingwea U.K. Ltd. et. al v. United Republic of Tanzania*, ICSID Case No. ARB/20/38, Award, 14 July 2023, ¶ 372. **CL-0127**; Gemplus S.A., SLP S.A., Gemplus Industrial S.A. de C.V. v. The United Mexican States, ICSID Cases No. ARB(AF)/04/3 and ARB(AF)/04/4, Award, 16 June 2010, ¶ 12.43. **CL-0075**; Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi v. The Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB-05-15, Award, 01 June 2009 ¶ 542. **CL-0066**; *Bernardus Henricus Funnekotter and others, v Republic of Zimbabwe, ICSID Case No. ARB/05/6,*

El tribunal en *Crystallex c. Venezuela* fijó la valuación el 13 de abril de 2008, el día inmediatamente anterior a la carta de denegación del permiso ambiental[1608] y el de *Copper Mesa c. Ecuador*, valoró la inversión en noviembre de 2008 y junio de 2009, las fechas de las medidas impugnadas.[1609] Estos y otros tribunales subrayan que la valuación debe reflejar la información disponible en ese momento y que los riesgos y oportunidades del mercado serían asumidos por un comprador hipotético en esa fecha, no retrospectivamente.[1610]

1229. En consecuencia, aun si fuera cierto que "the investment has appreciated in value since the breach", esto no quiere decir que la parte demandante esté en libertad de especular sobre el futuro de esa inversión y que "customary international law entitles the investor to receive the benefit of that increase"[1611], como engañosamente afirman las Demandantes. Los tres laudos de la saga Yukos, que son la autoridad principal que las Demandantes invocan para sustentar esa supuesta regla, no constituyen costumbre internacional y, en cualquier caso, son claramente distinguibles de este arbitraje. Ixtaca no era la inversión operativa que los expertos de las Demandantes valoran, sino un proyecto *greenfield* que nunca obtuvo los permisos necesarios, nunca fue construido y nunca generó producción.

1230. El aumento sin precedentes en el precio internacional del oro seguramente incrementó el valor del *Proyecto*. Sin embargo, una cosa es estimar la apreciación del Proyecto en el estado en que estaba cuando ocurrió la presunta violación –i.e., lo que hace Quadrant al actualizar el VJM del Proyecto con un índice que mide el desempeño del sector– y otra muy distinta suponer que el

---

Award, 22 April 2009, ¶ 115. **RL-0191**; *Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB(AF)-12-5, Award, 22 August 2016, ¶¶ 78-79. **CL-0099**.

1608 *Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB(AF)/11/2, Award, 04 April 2016, ¶¶ 916-917 ("the valuation date that it considers appropriate in this case (i.e., 13 April 2008)"). **CL-0156**.

1609 *Copper Mesa Mining Corporation v. Republic of Ecuador*, CPA Case No. 2012-2, Award, 15 March 2016, ¶ 7.27 ("the most reliable, objective and fair method in this case for valuing the Claimant's investments in November 2008 and June 2009 is to take the Claimant's proven expenditure"). **CL-0222**.

1610 *Flughafen Zürich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A. v. República Bolivariana de Venezuela*, Caso CIADI No. ARB/10/19, Laudo, 18 de noviembre de 2014, transcrito y seguido en *Glencore Finance (Bermuda) Limited v. Plurinational State of Bolivia*, CPA Case No. 2016-39, Award, 8 September 2023, ¶ 291 ("in an expropriation, full reparation is equivalent to the market value of the expropriated property, a value that the owner could have obtained, if he had disposed of it just before the date on which the State carried out the dispossession"). **RL-0115**.

1611 Réplica, ¶ 1065.

Proyecto habría continuado su desarrollo y comenzado operaciones poco tiempo antes de la Resolución de No Factibilidad, para así determinar los daños con base en el VJM de una mina operativa (que nunca existió) en un entorno volátil de precios de oro y plata cerca de sus máximos históricos. Esto no es lo que prescribe el estándar de reparación plena.

1231. La valuación propuesta por las Demandantes convierte la reparación íntegra en una apuesta arreglada sobre el precio del oro porque supone de entrada que las Demandantes habrían estado en posición de tomar pleno provecho de esos altos precios como productores de oro y plata. No es casual que los tribunales que excepcionalmente han recurrido a una fecha de valuación posterior hayan rechazado incorporar beneficios futuros cuando estos permanecían inciertos.[1612] De particular relevancia para este caso, el tribunal en *Perenco* rechazó una valuación *ex post* precisamente porque la volatilidad inherente al mercado petrolero hacía impredecible la evolución futura de los precios.[1613] Esa consideración cobra especial importancia en este caso. Brattle calcula los daños utilizando una fecha de corte que coincide con un incremento extraordinario del precio del oro y le permite proyectar precios futuros que crecen constantemente a partir de estos máximos históricos. Quedaría por ver si Brattle excluirá la evolución posterior del mercado si esta deja de favorecer a las Demandantes.

1232. Se insiste en que la supuesta apreciación que capturan las Demandantes no deriva de un mejor desempeño de un activo existente con respecto al anticipado, sino exclusivamente de un factor completamente exógeno al Proyecto y ajeno a cualquier actuación atribuible a la Demandada. Una cosa es suponer en el contrafáctico que una empresa en operación habría obtenido mayores ingresos por estar en posibilidad de vender a un precio más alto un producto que efectivamente producía, y otra muy distinta suponer la existencia de una inversión que habría podido tomar provecho de esos precios más altos. De aceptarse este enfoque, la indemnización

---

1612 *Siemens A.G. v. The Argentine Republic*, ICSID Case No. ARB/02/8, Award, 17 January 2007, ¶¶ 379-385. **RL-0114**.

1613 Memorial de Contestación, ¶¶ 754-755 y 763. *Perenco Ecuador Ltd. c. República del Ecuador y Empresa Estatal Petróleos del Ecuador*, Caso CIADI No. ARB/08/6, Laudo, 27 de septiembre de 2019, ¶ 116 ("Considerando el extenso debate sostenido entre las Partes con respecto al uso de información sobre valuación *ex ante* o *ex post, el Tribunal es consciente del grado de arbitrariedad que subyace al empleo de la fecha del Laudo como la fecha de valuación dado que un solo hecho sustancial puede tener efectos drásticos en la valuación dada la volatilidad del mercado del crudo*. En las circunstancias de este caso, el Tribunal empleará un enfoque ex ante de comprador y vendedor interesados utilizando el precio del crudo existente a la fecha de la expropiación") (énfasis añadido). **RL-0192**.

dejaría de reparar el supuesto ilícito para convertirse en una apuesta retrospectiva sobre la evolución futura de un *commodity* durante un horizonte de aproximadamente 16 años.

1233. Algo parecido ocurre con la reevaluación que hace SLR del FS. Esta opinión no consiste en información que habría estado disponible a un comprador y vendedor hipotéticos en la fecha de valuación (cualquiera que se tome). Se utiliza únicamente como sustento para la hipótesis de la mina operativa y para brindar apoyo al gran número de supuestos y variables que intervienen en el DCF de las Demandantes.

1234. *En tercer lugar*, los precedentes invocados por las Demandantes comparten una característica adicional que está completamente ausente en este caso: el Estado demandado capturó la apreciación posterior de los activos cuya restitución resultaba imposible. Como ya se demostró, en los casos de nacionalizaciones que citan las Demandantes, como la saga *Yukos*, los activos continuaron bajo control estatal y su incremento de valor benefició directamente al Estado.[1614] La misma lógica subyace a *ConocoPhillips*, única autoridad adicional que las Demandantes invocan sobre este punto[1615], y encuentra fundamento en el principio *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, conforme al cual nadie puede beneficiarse de su propio ilícito.[1616] Así lo confirman los hechos y el razonamiento del tribunal en *ADC c. Hungría*, caso principal que citan las Demandantes para afirmar que pueden beneficiarse del incremento en los precios del oro.[1617] Allí el Estado no solo tomó control de la inversión (el aeropuerto de Budapest) sino que posteriormente la privatizó y obtuvo a cambio una ganancia multimillonaria.[1618]

1614 Ver *supra* ¶ 1227.

1615 Réplica, ¶ 1071.

1616 *Triodos SICAV II v. Kingdom of Spain*, SCC Arbitration No. 2017/194, Final Award, 24 October 2022 , ¶ 796 ("In cases of unlawful expropriation, for example, an ex post date of valuation may well be appropriate *to avoid unjust enrichment on the part of the expropriating State*") (énfasis añadido). **RL-0193**.

1617 Réplica, ¶ 684 y nota al pie 1579.

1618 *ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited v. The Republic of Hungary*, ICSID Case No. ARB-03-16, Award, 02 October 2006, ¶ 304 ("The subsequent privatization of the airport involving BAA and netting Hungary US$ 2.26 billion renders any public interest argument unsustainable. In the opinion of the Tribunal, this is the clearest possible case of expropriation"). **CL-0045**. De hecho para fundamentar su posición, y reconociendo que estaba aplicando un enfoque distinto al usual cuando se seguía el estándar de compensación articulado en el caso *Chorzow*, el tribunal se refirió al caso de *Papamichalopoulos and Others v. Greece* en el que el Gobierno griego ocupó terrenos privados en 1967 para construir viviendas para el personal de la Marina y, como consecuencia de ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la compensación debía incluir el valor actual de la tierra,

1235. Nada de ello ocurrió con Ixtaca. El Proyecto nunca avanzó y México nunca tomó el control de Proyecto y jamás obtuvo beneficio alguno derivado de la presunta apreciación posterior de la inversión. Por ello, trasladar esa apreciación a las Demandantes no evitaría un enriquecimiento indebido del Estado; simplemente les otorgaría una ganancia extraordinaria que nadie anticipaba y que está completamente desvinculada tanto del supuesto ilícito como del valor que el Proyecto tenía al momento de las medidas.

1236. Es claro entonces que la teoría de daños de las Demandantes no utiliza la información *ex post* para medir con mayor precisión el valor de una inversión existente. La utiliza para capturar retrospectivamente el beneficio extraordinario que habría obtenido la mina que planeaban construir si todo hubiese ocurrido conforme a sus expectativas. Esa no es la lógica de la reparación plena que ambas Partes aceptan como el estándar aplicable.

a. La información *ex post* se utiliza para expandir el alcance del Proyecto para maximizar la reclamación de daños

1237. Las Demandantes alegan que SLR "reviewed the 2019 FS and its underlying technical and cost assumptions, evaluated the Project's Mineral Resources and Mineral Reserves, metallurgy, mine plan, and execution schedule, *and produced an adjusted life-of-mine model for use by Brattle.*"[1619] Lo que no aclaran es que ese ajuste al modelo LOM representa una redefinición sustancial del Proyecto. Eso es paradójico porque las Demandantes se apoyan en la existencia del estudio de factibilidad para justificar su enfoque de ingresos bajo el CIMVAL, solo para ignorarlo a la hora de cuantificar los daños.

1238. La Demandada se refirió a las inconsistencias del análisis de SLR en su Memorial de Contestación y observó que éstas ponían en duda la confiabilidad del escenario contrafactual que planteaban las Demandantes. En su Réplica, las Demandantes responden con tres argumentos que, a su decir, rinden las críticas originales de WGM "irrelevant and unpersuasive".[1620]

1239. *En primer lugar,* alegan que Quadrant no adoptó ninguna de esas críticas en su análisis de daños y tampoco cuantifica la incertidumbre generada por los puntos identificados por WGM. La

incrementado por la apreciación de los edificios durante la ocupación. Esto confirma que la valuación *ex post* responde a una situación donde el Estado se ha apropiado y aprovechado del activo, ver ¶ 497.

1619 Réplica, ¶ 1089. Énfasis añadido.

1620 Réplica, ¶ 1091.

razón es simple: el análisis de daños de Quadrant no depende del escenario contrafactual que plantean las Demandantes. Por lo tanto, no había ninguna razón para que Quadrant se refiera a ellas en su primer informe.

1240. *En segundo lugar*, las Demandantes alegan que WGM concede que el FS descansa en lo que describe como "robust fundamentals".[1621] WGM reconoce que las metodologías y componentes utilizados para elaborar estudios como el PEA, PFS y FS fueron apropiadas en sus respectivas etapas, sin embargo, expresamente puntualizó que ese reconocimiento no constituía una aceptación de todos los supuestos, insumos o conclusiones de dichos estudios.[1622] En su opinión "many of the studies supporting the 2019 FS relied on assumptions, which lacked the project site specific details that would properly capture the true nature of the actual project risks and related cost that reflect realistic real world mine operating conditions."[1623]

1241. En cualquier caso, el problema no se limita a la confiabilidad del FS, sino a la confiabilidad de la reevaluación que hace SLR de ese estudio, la cual, en palabras de WGM: "materially expands the Project by extending mine life from 11 to 16 years, increasing crusher feed by approximately 54%, plant feed by approximately 59%, and ore-sorter rejects by approximately 45%, while total operating cost increases by approximately 75.5% and total capital cost by approximately 46.4%." Este escenario expandido que sirve de base para la valuación de Brattle, "increase the Project's exposure to metallurgical performance, storage capacity, water management, sustaining capital, permitting, construction, operating and schedule risks".

1242. Más importante aún, de acuerdo con WGM, "SLR appears to have assumed that the expanded pit and waste storage would not require additional consultation, environmental and other permitting." Por consiguiente, la conclusión de WGM es que "SLR has not demonstrated that the unresolved engineering uncertainties associated with its expanded but-for case have been adequately quantified, costed or risk-adjusted."[1624] A decir de WGM, "SLR's adjusted but-for case

---

1621 Réplica, ¶ 1093.

1622 Segundo Informe WGM, ¶ 11.

1623 Segundo Informe WGM, ¶ 12. Por ejemplo, "WGM continues to consider the approximately 14%–17% local gold-grade overestimation identified in NEHG/NELG domains to be a material resource-model uncertainty requiring further review and adjustment of grade capping, domain boundaries and local estimation bias". Segundo Informe WGM, ¶ 13.

1624 Segundo Informe WGM, ¶¶ 25-26.

should therefore be regarded as a materially modified development case rather than a simple cost update and extension of the original 2019 FS as SLR has done" y, en consecuencia, "*SLR's adjusted but-for case should not be treated as having feasibility-level support merely because it originates from, or incorporates elements of, the 2019 FS.*"[1625]

1243. La tercera razón por la cual las Demandantes consideran las críticas de WGM como irrelevantes y poco persuasivas es que, a su decir, "many of WGM's assertions are speculative, unsupported, or flat out incorrect."[1626] Por ejemplo, las Demandantes señalan que "many of WGM's criticisms boil down to the unremarkable observation that further work would eventually be required for the Project to become a producing mine".[1627] Sin embargo, la observación es engañosa. Como lo explica WGM en su segundo informe: "WGM does not dispute SLR's general proposition that detailed engineering normally follows a feasibility study [...] WGM's concern is different and more specific: the existence of the 2019 FS and its classification as an AACE Class 3 estimate does not, by itself, establish that the project can be developed and achieve profitable production. By extension nor does it imply that the materially modified project case adopted by SLR is sufficiently engineered, costed, scheduled and risk-adjusted to assure its development."[1628]

1244. Las Demandantes también critican a WGM por no proponer un escenario minero alternativo o su propia estimación de recursos.[1629] Sin embargo, esta objeción carece de fundamento, ya que la estimación alternativa de daños de la Demandada (elaborada por Quadrant) no se basa en un escenario minero alternativo o una nueva estimación de recursos, sino en el valor que los inversionistas asignaban al Proyecto inmediatamente antes de las medidas reclamadas, el cual se refleja en el valor de capitalización de Almaden en esa fecha. Si hubiese necesidad de utilizar una fecha de valuación distinta –para considerar, por ejemplo, el incremento en los precios del oro y la plata– ese valor base se puede actualizar con base en el comportamiento observado de índices representativos del sector. Para la Demandada, no hay razones para especular sobre un

1625 Segundo Informe WGM, ¶ 105. Énfasis añadido.

1626 Réplica, ¶ 1094.

1627 Réplica, ¶ 1099.

1628 Segundo Informe WGM, ¶ 23.

1629 Réplica ¶ 1094.

escenario minero alternativo o una nueva cuantificación de recursos, como sí lo hacen las Demandantes y sus expertos.

1245. La Demandada invita al Tribunal a revisar el segundo informe de WGM, el cual profundiza en estos y otros detalles relevantes para evaluar la falta de razonabilidad del escenario contrafáctico de las Demandantes.

D. Culpa concurrente

1246. La Demandada sostuvo en su Memorial de Contestación que cualquier indemnización que eventualmente pudiera reconocerse debe reducirse para reflejar la contribución de las propias Demandantes al perjuicio que ahora reclaman, de conformidad con el Artículo 39 de los Artículos de la CDI y el Artículo 9.17 del TIPAT.[1630] La Réplica dedica apenas algunos párrafos a este argumento y, en buena medida, responde a una proposición que la Demandada nunca formuló: que la licencia social era un requisito jurídico autónomo cuyo incumplimiento justificaría la privación de derechos adquiridos y la reducción del monto de daños.

1. El Artículo 39 de los Artículos de la CDI no exige la infracción de una norma de derecho positivo, sino una contribución causal al daño

1247. Las Demandantes construyen su respuesta sobre la premisa de que México pretende transformar la licencia social en una obligación jurídica cuya ausencia justificaría las medidas controvertidas.[1631] La Demandada nunca sostuvo tal cosa. El Artículo 39 de los Artículos de la CDI no exige que la persona lesionada haya infringido una norma de derecho positivo. Exige tomar en consideración "la contribución al perjuicio resultante de la acción o la omisión, intencional o negligente, del Estado lesionado o de toda persona o entidad en relación con la cual se exija la reparación".[1632] El punto de la Demandada para efectos de daños no es que Almaden hubiera infringido una obligación autónoma de obtener una licencia social, sino que determinadas

---

1630 Memorial de Contestación, ¶¶ 791-796.

1631 Réplica, ¶¶ 1130-1131.

1632 Comisión de Derecho Internacional (CDI), *Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, con comentarios*, 2001, Articulo 39. **RL-0044.**

decisiones y omisiones de las Demandantes contribuyeron materialmente a generar y agravar el perjuicio cuya reparación reclaman.[1633]

1248. Esa distinción es decisiva. Para efectos de valorar la culpa concurrente *de Almaden*, el Tribunal no necesita determinar si la licencia social constituye una institución exigible bajo el derecho mexicano ni si correspondía jurídicamente a las Demandantes realizar una consulta indígena formal, como erradamente afirman[1634]. Lo que debe determinar es una cuestión distinta: si la conducta de las Demandantes contribuyó causalmente al perjuicio cuya reparación solicitan. En esa medida, la solicitud de reducción de daños por culpa concurrente no solo es compatible con el estándar de reparación plena que las Demandantes invocan, sino que es una parte integral de dicho estándar. El Artículo 39 forma parte del mismo régimen de reparación que el Artículo 31 de los Artículos de la CDI ("Reparación del perjuicio") y la reparación íntegra. Exige reparar el daño atribuible al hecho internacionalmente ilícito; no trasladar al Estado aquella porción del perjuicio que resulta de la conducta intencional o negligente de quien reclama la indemnización.[1635]

1249. La Demandada se apoyó en *Abengoa* para argumentar que "[p]ara que la responsabilidad internacional del Estado pueda ser excluida o disminuida con base en una omisión o culpa del inversor, es necesario […] que se establezca el nexo de causalidad entre la misma y el daño sufrido".[1636] Las Demandantes le reprochan que su argumento "fails to mention" que la defensa fue desestimada en aquel caso.[1637] Sin embargo, esto es irrelevante porque la Demandada no citó el laudo por su resultado, sino por su criterio jurídico. Y ese criterio, trasladado a este expediente, arroja una conclusión distinta. En *Abengoa* no se acreditó que las deficiencias del programa de comunicación social de la parte demandante hubieran contribuido de manera significativa al daño. En contraste, en el presente caso existe una secuencia causal concreta: las deficiencias en la identificación y gestión del riesgo indígena y comunitario dieron lugar a una controversia

---

1633 Ver Segundo Informe Dra. Torres-Mazuera, ¶ 87.

1634 Réplica, ¶ 673.

1635 Conscientes de sus propios actos, las Demandantes pretenden transferirle la carga al Estado y afirmar que la omisión de llevar a cabo consultas con la comunidad indígena no recae en ellas, sino en el Estado. Esto es absurdo. Supone que un inversionista no tiene ninguna obligación de cumplir con estos requisitos y que sus omisiones para tal efecto deben ser ignoradas de plano. Réplica, § 2.18.3.

1636 Memorial de Contestación, ¶ 792, citando *Abengoa, S.A. y COFIDES, S.A. c. Estados Unidos Mexicanos*, Caso CIADI No. ARB(AF)/09/2, Laudo, 18 de abril de 2013 ¶ 670. **RL-0126**.

1637 Réplica, ¶ 1134.

constitucional promovida por Tecoltemi que, a su vez, derivó en las medidas cautelares y decisiones judiciales que afectaron los derechos de las Demandantes como concesionarias. Que esa secuencia incluya actos de terceros o decisiones judiciales no elimina la contribución causal de las Demandantes. La cuestión a resolver es si su propia conducta fue uno de los factores materiales que condujeron al resultado.

2. Los precedentes que invocan las Demandantes no fijan el umbral que les atribuyen

1250. Las Demandantes también sostienen que México habría pretendido derivar de la jurisprudencia una supuesta regla conforme a la cual la culpa concurrente exige reducciones de entre 30% y 50%.[1638] Ese no es el argumento. La Demandada no sostiene que exista una fórmula predeterminada. Lo que sostiene es que corresponde al Tribunal determinar el monto de la reducción en función de la importancia que asigne a la conducta de las Demandantes como causa del daño que reclaman. Los precedentes muestran, sin embargo, que la reducción por contribución del inversionista constituye un remedio reconocido y efectivamente aplicado en arbitraje de inversión. Así ocurrió con una reducción del 50% en *MTD Equity*, confirmada en anulación[1639], y del 30% en *Copper Mesa*, laudo que las propias Demandantes aportaron al expediente.[1640]

1251. Tampoco sirve a las Demandantes presentar *Copper Mesa* como si ese tribunal hubiera establecido que *únicamente* conductas activas, flagrantes o violentas pueden justificar una reducción de los daños. A su decir, el Tribunal debe desestimar el argumento de culpa concurrente de la Demandada porque, a diferencia de aquel caso, Almaden no contrató personal armado para enfrentar a las comunidades.[1641] Esto es absurdo. La comparación no solo confunde los hechos particulares de ese caso con la regla jurídica aplicable, sino que implica que un tribunal solo puede encontrar culpa concurrente cuando haya acciones armadas del inversionista. Este ciertamente no es el *status quo* en los casos de inversión ni sería deseable que lo fuera. Lo que sí decidió el tribunal en *Copper Mesa* es que la reducción procede cuando la conducta del inversionista contribuye

---

1638 Réplica, ¶ 1136.

1639 *MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile*, ICSID Case No. ARB/01/7, Award, 25 May 2004, ¶ 242. **CL-0036**; *MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile*, ICSID Case No. ARB/01/7, Decision on Annulment, 21 March 2007, ¶ 101. **RL-0127**.

1640 *Copper Mesa Mining Corporation v. Republic of Ecuador*, Award, CPA Case No. 2012-2, Award, 15 March 2016, ¶ 6.102. **CL-0222**.

1641 Réplica, ¶¶ 1137-1138.

causalmente al deterioro del entorno en el que la inversión debía desarrollarse, como ocurrió también en Ixtaca.

1252. El Artículo 39 no distingue entre acción y omisión, ni entre dolo y negligencia: su texto abarca expresamente "la acción o la omisión, intencional o negligente". La cuestión entonces es si la conducta del inversionista contribuyó al perjuicio. En *Copper Mesa*, esa contribución adoptó una forma particularmente grave; en otros casos puede consistir en omisiones negligentes (como en *MTD Equity*), decisiones empresariales adoptadas con conocimiento de riesgos relevantes o la continuación de inversiones pese a circunstancias que comprometen materialmente su viabilidad.

1253. Lo mismo ocurre con *Bear Creek*. Las Demandantes objetan que México se apoye en la opinión parcialmente disidente del profesor Sands y preguntan por qué el Tribunal debería preferirla al razonamiento de la mayoría.[1642] La Demandada no sostiene que deba hacerlo. El disenso resulta pertinente por una razón diferente: identifica un supuesto fáctico que sí debe examinarse aquí, esto es, si deficiencias verificables en los acercamientos iniciales del inversionista con las comunidades afectadas hicieron previsible el deterioro posterior del entorno social y contribuyeron a las circunstancias que terminaron afectando la inversión.[1643] Su valor, como el de los casos restantes, radica en la lógica de causalidad que expone, no en pretender atribuirle autoridad vinculante al resultado que evidentemente dependió de las circunstancias del caso.

3. La conducta de las Demandantes contribuyó causalmente a la pérdida que reclaman

1254. En este caso existe evidencia concreta de la contribución de las Demandantes al daño. La EVIS encargada por las propias Demandantes concluyó (erróneamente) que no existían comunidades indígenas dentro del área de influencia del Proyecto.[1644] Las Demandantes no niegan este hecho; simplemente intentan justificar *ex post facto* la metodología que condujo a esta conclusión.[1645] Como explica el informe del Sr. Cabrera, esa identificación deficiente del contexto

---

1642 Réplica, ¶ 1135.

1643 *Bear Creek Mining Corporation v. República del Perú*, Caso CIADI No. ARB/14/21, Opinión parcial disidente del profesor Philippe Sands, 30 de noviembre de 2017, ¶ 6. **RL-0128**.

1644 Memorial de Contestación, ¶ 795.

1645 Réplica, ¶ 1140.

indígena y comunitario llevó a las Demandantes a subestimar un riesgo que posteriormente se materializó en la controversia promovida por Tecoltemi mediante el Amparo 445/2015.[1646]

1255. La respuesta de las Demandantes fue calificar el análisis del Sr. Cabrera como una "*ex-post narrative*" y destacar el carácter familiar de Almaden, afirmando que se trata de una empresa minera detrás de la cual "are a father and son who have directed the Company continuously as a family-run enterprise since its inception, resisting over-capitalization and staying true to their guiding principles and family values at every turn".[1647] Esto, sin embargo, no tiene nada que ver con el punto de la Demandada. La buena fe subjetiva, la estructura familiar de la compañía o sus valores declarados no determinan si su debida diligencia identificó y gestionó adecuadamente un riesgo de consulta comunitaria que terminó afectando la viabilidad jurídica del Proyecto. Tampoco responde al argumento afirmar que la licencia social es "an informal, non-legal concept that no Mexican statute, regulation, or administrative rule defines or operationalizes".[1648] Precisamente porque la Demandada no plantea una infracción autónoma de esa figura para efectos de la culpa concurrente, su naturaleza jurídica no resuelve la cuestión bajo el Artículo 39.

1256. Es revelador que, al mismo tiempo que las Demandantes niegan categóricamente toda obligación de realizar una consulta con las comunidades indígenas aledañas al Proyecto, afirman en su Réplica que, desde el inicio de la inversión, interactuaron de forma transparente y proactiva con las comunidades locales.[1649] La misma conducta que tuvieron contemporáneamente las Demandantes la replican ahora en este arbitraje. Esto no es un asunto menor, pues fue justamente esa conducta la que llevó a Almaden a ignorar riesgos cuya materialización posterior resultaría en su alegada pérdida. En cualquier caso, si estas iniciativas para establecer relaciones con la comunidad fueron tan eficaces como plantean las Demandantes, no se explicaría el amparo constitucional interpuesto por la comunidad Tecoltemic ni la omisión de medidas para gestionar ese riesgo o limitar su exposición al mismo una vez que se volvió manifiesto. Se debe recordar que el procedimiento de amparo comenzó en 2015 y, desde esa fecha, las Demandantes estaban

1646 Informe pericial del Sr. Cabrera, ¶¶ 71-74.

1647 Réplica, ¶¶ 34-35.

1648 Réplica, ¶¶ 671, 688, 1131.

1649 Réplica, ¶¶ 1138, 1143.

conscientes de que existía un recurso legal que potencialmente podría afectar la viabilidad de su Proyecto. La Réplica no ofrece una respuesta a ninguna de esas cuestiones.

1257. Las Demandantes afirman que "[t]he causation analysis confirms that no act or omission by the Claimants broke the chain between Mexico's treaty breaches and the Claimants' loss"; a su decir "[i]t was SEMARNAT's unlawful denial of the MIA that destroyed the Project's path to production, and Economía's baseless cancellation of the mining concessions that extinguished the investment entirely".[1650] Pero el Artículo 39 no exige que la conducta de la parte lesionada "rompa" la cadena causal. Si así fuera, ya no se trataría de culpa concurrente, sino de una causa sustitutiva de responsabilidad. El estándar pregunta si la conducta del reclamante *contribuyó* al perjuicio. Y los hechos muestran precisamente que el menosprecio de las Demandantes por las preocupaciones de las comunidades indígenas derivó en decisiones que incidieron directamente en el desarrollo regulatorio del Proyecto; posteriormente, la SCJN ordenó a la DG de Minas declarar las Concesiones insubsistentes el 16 de febrero de 2022. La Réplica no elimina esta secuencia causal.

1258. Existe, además, una segunda dimensión de la contribución de las Demandantes que es independiente de las deficiencias iniciales de la EVIS. Desde 2015, Almaden sabía que la constitucionalidad y subsistencia de sus derechos como concesionario estaban siendo controvertidas en el Amparo 445/2015 y que la ausencia de consulta indígena constituía precisamente uno de los fundamentos centrales de esa controversia.[1651] Un inversionista minero sofisticado no podía ignorar que ese litigio planteaba un riesgo directo para los derechos sobre los cuales descansaba el Proyecto. A partir de ese momento, cualquier decisión de continuar incrementando la exposición económica de Ixtaca fue adoptada con conocimiento de un riesgo jurídico material que no había sido resuelto.

1259. Este punto resulta especialmente relevante si las Demandantes pretenden que el Tribunal indemnice el supuesto incremento de valor derivado de la evolución del Proyecto de 2015, cuando era considerado un proyecto de exploración, hasta 2019 cuando se convirtió en un "Development Property" con la publicación del FS. En la medida en que esa apreciación dependa de inversiones realizadas con conocimiento del riesgo que implicaba la impugnación constitucional de las Concesiones, las Demandantes no pueden trasladar íntegramente a México las consecuencias. Su

---

1650 Réplica, ¶ 1147.

1651 Ver Sección II.B *supra*.

decisión de continuar desarrollando el Proyecto mientras ese riesgo persistía habría contribuido inevitablemente a los daños que ahora reclaman. Lo anterior es aún más claro bajo la teoría del caso que identifica una supuesta política adversa a la minería que la nueva administración habría adoptado a partir de 2018.[1652]

1260. Si esa percepción de animadversión contra la minería fue suficientemente seria como para formar parte de su teoría de responsabilidad –y, según Brattle, para afectar la cotización de Almaden– también tendría que haberlo sido para determinar cuánto capital adicional exponer a ese riesgo. En efecto, las propias Demandantes y su experto alegan que el mercado percibió esos riesgos con suficiente claridad para reducir el precio de las acciones de Almaden.[1653] No pueden sostener simultáneamente que era razonable que Almaden siguiera invirtiendo y desarrollando el Proyecto como si esos riesgos no existieran. Como ya explicó la Demandada, los tratados de inversión no funcionan como una póliza de seguro frente a decisiones empresariales adoptadas conscientemente por el inversionista.[1654]

1261. Las controversias fácticas restantes relativas al contenido de la EVIS, el alcance del relacionamiento comunitario y la suficiencia de la información hidrológica incluida en la MIA se abordan en la sección de hechos de esta Dúplica.[1655] Para efectos de daños, basta señalar que esas discusiones no eliminan la secuencia de acontecimientos relevante bajo el Artículo 39.[1656] En particular, aunque las Demandantes sostienen que la medida cautelar del Amparo 445/2015 protegía únicamente los derechos agrarios de Tecoltemi, lo cierto es que la acción impugnaba directamente la constitucionalidad de las Concesiones que sustentaban el Proyecto y Tecoltemi había solicitado la suspensión de oficio y de plano de "todo acto derivado de las concesiones mineras".[1657] Desde ese momento, dada la amplitud de la solicitud y su conexión con las Concesiones, cualquier inversionista razonable habría entendido que la controversia podía afectar

---

1652 Réplica, ¶¶ 6, 1006.

1653 Réplica, ¶¶ 1122-1125; Segundo Informe Brattle, ¶¶ 36-44.

1654 Memorial de Contestación, ¶ 791 y nota al pie 1015.

1655 Sección II.F *supra*.

1656 Réplica, ¶¶ 1140-1146.

1657 Amparo 445/2015 interpuesto por la Comunidad Indígena Nahua de Tecoltemic y el Ejido de Tecoltemic (Sexto Distrito Judicial de la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla), 7 de abril de 2015, p. 40. **C-0032**.

la continuidad jurídica y económica del Proyecto. Seguir adelante fue una decisión consciente que implicaba la asunción del riesgo que finalmente se materializó en 2023.

1262. El expediente demuestra contribuciones concretas de Almaden: una identificación y gestión deficiente del riesgo indígena y comunitario que posteriormente se materializó en una impugnación directa de las Concesiones y la decisión consciente de continuar incrementando la exposición económica del Proyecto durante años pese a conocer esos riesgos. Si el Tribunal llegara a reconocer alguna indemnización, no puede imputar íntegramente a México el valor de pérdidas cuya generación o agravamiento fue también consecuencia de dichas decisiones.

E. Valuación de los daños

1. La metodología de capitalización de mercado debe ser preferida al enfoque de ingresos en las circunstancias de este caso

a. El Código CIMVAL admite el enfoque de mercado y no impone el enfoque de ingresos

1263. La defensa metodológica de las Demandantes descansa, en lo esencial, en un instrumento de la industria minera canadiense. Sostienen que el Código CIMVAL es "the leading Canadian industry standard for valuing mineral properties" y que "provides the appropriate framework for assessing the Ixtaca Project's FMV".[1658] De ahí construyen un silogismo con dos premisas: i) que Ixtaca califica como "Development Property" porque completó un estudio de factibilidad final y declaró reservas minerales; y ii) que, para esa categoría, el Código indica que "the income approach is usually the most appropriate". A partir de ello concluyen que Brattle correctamente valoró el Proyecto mediante un DCF (la metodología más común bajo un enfoque de ingresos).[1659]

1264. La Demandada no controvierte estas dos premisas en lo esencial. El Código CIMVAL recoge las prácticas de la industria minera y es razonable la clasificación del Proyecto como "Development Property" dado que había completado el FS y había declarado reservas minerales, que son las dos condiciones que impone el CIMVAL para clasificar un proyecto en dicha categoría. Lo que no se sigue es la conclusión. El Código no dice que el enfoque de ingresos sea el único admisible, ni que su empleo sea obligatorio para esa categoría de propiedades. Dice que,

---

[1658] Réplica, ¶ 1073.

[1659] Réplica, ¶¶ 1073 y 1080, citando el Código CIMVAL, § 3.4.1. **DC-0024**. *Ver también* Primer Informe Brattle, ¶ 59(a).

"[d]epending on the circumstances", cualquiera de los enfoques de valuación (el de ingresos o el de mercado que usa Quadrant) "may be most appropriate"; que para las propiedades con reservas minerales el enfoque de ingresos es "usually" el más apropiado; y su Tabla 1 califica expresamente el enfoque de mercado como aplicable a las "Development Properties".[1660] Las propias Demandantes lo reconocen cuando afirman, en la Réplica, que para esta categoría de propiedades el Código "*recommends* income- and market-based methodologies and advises against cost-based approaches".[1661] Una recomendación general, expresada además con la reserva de "usually", no puede convertirse en la regla imperativa que las Demandantes infieren.

1265. En efecto, el apoyo documental de ese silogismo es considerablemente más estrecho de lo que parece. Se reduce a cuatro elementos: i) la existencia de un FS y una declaración de reservas minerales; ii) la consiguiente clasificación del Proyecto como "Development Property" de conformidad con los lineamientos del CIMVAL (2019); iii) la recomendación del CIMVAL del enfoque de ingresos para las propiedades en dicha categoría, y iv) dos laudos que, según afirman las Demandantes, habrían avalado el uso del Código CIMVAL: *Tethyan Copper* y *Crystallex.*[1662] La Réplica suma a lo anterior el reproche de que la Demandada mencionó el Código una sola vez en su Memorial de Contestación y no lo controvirtió.[1663] La respuesta es simple: la Demandada no controvirtió el Código CIMVAL porque no hay nada que controvertir. Lo que corresponde no es discutir la autoridad del Código, sino leerlo completo y aplicarlo a las circunstancias de este caso pero siempre sujeto a las restricciones que impone el derecho internacional y el estándar de reparación plena.

1266. *En primer lugar,* conviene precisar el lugar que el Código ocupa en este arbitraje. El CIMVAL es un instrumento de autorregulación profesional emitido por un comité especializado

---

[1660] Código CIMVAL, § 3.3.3, Tabla 1 ("Valuation Approaches for Different Types of Mineral Properties"), que califica el enfoque de mercado como aplicable ("Yes") a las Development Properties, y § 3.4.1 ("Depending on the circumstances, the Income Approach, the Market Approach, or the Cost Approach may be most appropriate for the Valuation of a Mineral Property containing Mineral Reserves or Mineral Resources"). **DC-0024**.

[1661] Réplica, ¶ 1080 ("For such properties, the CIMVAL Code recommends income- and market-based methodologies and advises against cost-based approaches"), citando Primer Informe Brattle, ¶ 59(a).

[1662] Réplica, ¶¶ 1073 y 1080-1081, citando el Código CIMVAL, adoptado el 29 de noviembre de 2019. **DC-0024**.

[1663] Réplica, ¶ 1081.

del Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, y su propio texto recomienda su observancia en las valuaciones exigidas por los *administradores de valores y bolsas*, y añade que, cuando esas reglas y el Código difieran, prevalecen las reglas del mercado de valores.[1664] Su finalidad principal es disciplinar lo que una emisora puede afirmar públicamente sobre sus activos y proteger así a los inversionistas frente a divulgaciones engañosas, como lo recuerda Quadrant al señalar que el Código nació como respuesta regulatoria al fraude de Bre-X Minerals de 1997.[1665]

1267. El propio Código delimita además su alcance: se limita a la valuación de propiedades mineras de conformidad con las mejores prácticas de la industria que admiten el juicio profesional cuando las circunstancias lo justifican.[1666] Nada de ello le resta valor como referente, pero sí precisa su función: el Código orienta la elección del método, no sustituye los principios que gobiernan la cuantificación de la indemnización en derecho internacional, que son la causalidad, la certeza razonable y la prohibición de la especulación indebida. Ese es el marco dentro del cual el Tribunal debe escoger entre los métodos que el propio Código admite.

1268. *En segundo lugar*, el Código exige que se considere y discuta más de un enfoque, que se justifique la exclusión de los no utilizados y que los resultados obtenidos se reconcilien de manera explícita, indicando las razones para preferir un enfoque por encima de los demás.[1667] Brattle solo simuló el cumplimiento de ese deber, pues, como se explicará más adelante, busca verificar su conclusión de valor con dos métodos que Brattle misma considera inaplicables en las circunstancias de este caso. En efecto, Brattle utiliza el método de comparables a pesar de que en sus propias palabras "Although we found no directly comparable traded companies or transactions

---

1664 Código CIMVAL, §§ 1.1 y 1.7. **DC-0024**.

1665 Primer Informe Quadrant, ¶ 68 y nota al pie 95.

1666 Código CIMVAL, § 1.1 ("The CIMVAL Code is limited to the Valuation of Mineral Properties (…) and does not cover valuation of corporations or other entities that hold Mineral Properties as assets") y § 1.2 ("The CIMVAL Code is based on industry best practices and allows for professional judgement where warranted"). **DC-0024**.

1667 Código CIMVAL, § 2.8 ("More than one approach should be used in the Valuation of each Mineral Property, if it is reasonably possible and appropriate to apply them. If a Qualified Valuator is of the opinion that only one approach should be used in particular circumstances, the Qualified Valuator must justify and explain why other approaches are not used in such circumstances", y "[t]he results from the Valuation Approaches and Methods employed should be analyzed and reconciled into a concluding opinion of Value. The reasons for giving a higher weighting to one Valuation Approach or Method over another (…) should be stated"). **DC-0024**. Ver también *Tethyan Copper Company Pty Limited v. Islamic Republic of Pakistan*, ICSID Case No. ARB/12/1, Award, 12 July 2019, ¶¶ 351 y 365. **CL-0109**.

that met our full comparability criteria, four companies… exhibit some relevant similarities". También utiliza el método MEE (que pertenece al enfoque de costos) pero expresamente señala: "[w]hile we do not consider the cost approach to be appropriate for a valuation of Ixtaca, counsel has instructed us to apply the cost approach as a back-up valuation approach.".[1668]

1269. Vale la pena observar que Brattle también intenta validar su modelo precisamente acudiendo a la capitalización de mercado de Almaden que Quadrant utiliza como base de su valuación (aunque a una fecha distinta). Brattle comparó el valor que arroja el DCF del FS con ciertas modificaciones con el valor de capitalización de Almaden al 28 de enero de 2019, y concluyó, a partir de la pequeña diferencia entre los dos valores, que su modelo era válido.[1669] Lo destacable de este ejercicio es que la explicación que Brattle ofreció para tomar el valor de capitalización como referente: Almaden es una sociedad que cotiza en el mercado de valores "with Ixtaca as its sole focus", sus acciones "traded frequently" y el precio de las mismas "reacted to relevant and available information – it can therefore be used to assess Almaden's fair market value".[1670]

1270. De ahí se siguen dos consecuencias que las Demandantes no pueden eludir. La primera es que el desacuerdo entre los peritos no versa sobre la admisibilidad de la capitalización de mercado bajo el Código CIMVAL, porque el perito de las Demandantes también la emplea y la considera un indicador objetivo del valor del Proyecto. El desacuerdo versa sobre la fecha en que debe leerse ese indicador, que es una cuestión distinta que se aborda en las Secciones VI.C y VI.E.2.a.(1)

1271. La segunda es que, en la única fecha que Brattle considera no "contaminada", el mercado atribuía a los activos de Almaden, netos de caja, un valor de US$ 80.2 millones, frente a los US$ 310 millones de valor presente neto que arrojaba el DCF del FS.[1671] Brattle trata de explicar esa significativa diferencia diciendo que los DCF de los estudios de factibilidad no están diseñados

---

1668 Primer Informe Brattle, ¶ 45, 139, 175.

1669 Primer Informe Brattle, ¶¶ 169-171; Segundo Informe Brattle, ¶ 31. El Anexo A del segundo informe de Quadrant explica por qué esta comparación no es válida.

1670 Primer Informe Brattle, ¶ 169 ("Almaden was a publicly traded company with Ixtaca as its sole focus. (…) Almaden's shares traded frequently, and the price reacted to relevant and available information – it can therefore be used to assess Almaden's fair market value"). Ver también Quadrant 1, ¶ 22.

1671 Primer Informe Brattle, ¶ 171. La cifra corresponde al valor de capitalización de Almaden al 28 de enero de 2019, que Brattle contrasta con el valor presente de los flujos de caja después de impuestos de US $310 millones calculado en el FS.

para estimar el VJM.[1672] La explicación confirma que cuando el enfoque de ingresos y la evidencia de mercado divergen en esa magnitud, el deber de reconciliación que impone el Código obliga a explicar la divergencia, no a descartar el indicador que la revela.

1272. Asimismo, resulta un tanto peculiar que las Demandantes y sus expertos utilicen la existencia de un estudio de factibilidad para argumentar a favor del enfoque de ingresos sobre la base de que ese es el método recomendado por el CIMVAL, para luego ignorarlo y sustituirlo con una reformulación elaborada *ex profeso* para este procedimiento. En efecto, el DCF de Brattle no se basa en el FS que se publicó en 2019, sino en un escenario expandido elaborado por SLR que incrementa sustancialmente la vida útil de la mina (de 11 a 16 años) y diversas variables que impactan la determinación de ingresos. WGM explica en su segundo informe por qué esa reformulación no puede servir de base para un análisis DCF. Para evitar repetir aquí sus conclusiones, se invita al Tribunal a revisarlo con detenimiento.[1673]

1273. En suma, el desacuerdo entre las Partes no versa sobre la autoridad del Código CIMVAL, sino sobre el peso que las Demandantes le atribuyen. Las Demandantes extraen de una recomendación general, expresada con la reserva de "usually", una regla que excluiría cualquier otro método, y omiten tanto la admisibilidad del enfoque de mercado (que su propio perito admite y aplica) para las propiedades en desarrollo como el deber de considerar y reconciliar más de un enfoque que el Código impone. Leído en su totalidad, el Código no resuelve la controversia metodológica de este arbitraje: la remite a las circunstancias del caso concreto.

b. Las circunstancias de este caso favorecen el uso del enfoque de mercado y el método de capitalización de mercado

1274. Las Demandantes sostienen que, bajo el Código CIMVAL, "the market capitalization method is secondary and thus not suitable to assess the FMV of a company as Respondent seeks to do".[1674] Es cierto que la Tabla 2 del Código clasifica la capitalización de mercado como método secundario dentro del enfoque de mercado, y que el Código añade que los métodos secundarios

---

1672 Primer Informe Brattle, ¶ 171.

1673 *Ver* Segundo Informe WGM, ¶ 12, 25, 46.

1674 Réplica, ¶ 1127 y nota al pie 3053, citando Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶ 724. **CL-0134**.

"may be considered suitable only to check the Reasonableness" de las valuaciones realizadas con métodos primarios.[1675] Pero de esa clasificación no se sigue la conclusión de las Demandantes.

1275. Por una parte, se trata de una jerarquía general expresada en términos permisivos ("may be considered"), y no de una prohibición: el mismo Código encomienda al valuador la decisión sobre los métodos que emplea y le exige justificarla a la luz de las circunstancias. Por otra parte, esa jerarquía se explica por las condiciones que normalmente restan valor informativo al valor de capitalización, a saber, que la sociedad emisora sea titular de varios proyectos o que su acción sea ilíquida. Ninguna concurre aquí. La pregunta pertinente no es, por tanto, qué método figura primero en un listado, sino cuál de los dos produce en este expediente una medida más confiable del valor del Proyecto, bajo el estándar de compensación aplicable conforme al derecho internacional. Tres circunstancias de este caso responden esa pregunta a favor del método de Quadrant.

1276. *En primer lugar*, Almaden era una sociedad cuyo valor dependía sustancialmente de un solo activo. Ixtaca era el Proyecto que definía la cotización de la acción, de modo que el precio de mercado no venía distorsionado por el desempeño de una cartera de proyectos ajenos al que aquí se discute. No se trata de una caracterización de la Demandada: Quadrant lo explica en ambos informes y Brattle lo afirma en los mismos términos al describir a Almaden como una sociedad "with Ixtaca as its sole focus".[1676] Esa es, precisamente, una de las circunstancias que en otros casos ha llevado a descartar la capitalización de mercado, y aquí no solo no concurre, sino que opera en sentido inverso: la concentración del valor en un único activo convierte el valor de capitalización de la empresa matriz en el mejor indicador disponible del valor de ese activo.

1277. *En segundo lugar,* el mercado en el que cotizaba Almaden era líquido e incorporaba la información relevante, y eso tampoco lo afirma solamente la Demandada. Brattle sostiene que los inversionistas podían entrar y salir de su exposición a Ixtaca negociando la acción de Almaden,

---

[1675] Código CIMVAL, § 3.3.4, Tabla 2 ("Methods"), que clasifica la capitalización de mercado como método secundario dentro del enfoque de mercado, y § 3.3.4 ("Some methods are considered to be primary methods for Valuation while others are secondary methods or 'rules of thumb' and may be considered suitable only to check the Reasonableness of Valuations conducted by applying primary methods"). **DC-0024**.

[1676] Primer Informe Quadrant, ¶¶ 20-22 ("Almaden is both publicly traded, and the Project was its sole focus"); Quadrant 2, ¶ 75. Lo reconoce igualmente Brattle 1, ¶ 169.

que la compañía tenía acceso a los mercados públicos de capital y que ese acceso disipaba el riesgo de tener que vender el Proyecto para atender necesidades de liquidez.[1677] También acepta la premisa misma sobre la que descansa el método de Quadrant, al afirmar que "[t]hrough trading by informed investors, stock markets incorporate value-relevant information as it becomes available".[1678] Las dos condiciones que la práctica arbitral exige para confiar en la capitalización bursátil, la liquidez de la acción y la eficiencia, están así admitidas por la Demandada y los peritos de ambas partes.

1278. *En tercer lugar*, y de manera decisiva, el enfoque de ingresos sólo puede aplicarse aquí a costa de suponer la existencia de una mina que nunca existió. El escenario contrafactual de Brattle exige asumir, de manera encadenada, que la MIA se habría resuelto hacia noviembre de 2019 y que su aprobación era "highly likely"; que se habrían superado las impugnaciones que pesaban sobre las Concesiones; que las condicionantes de un eventual permiso favorable se habrían cumplido sin afectar la economía del Proyecto; que se habría obtenido el financiamiento necesario para la construcción; que la mina se habría construido conforme al cronograma y al presupuesto proyectados, hasta iniciar producción en enero de 2022 según SLR; y que, aun computando un año de retraso por la oposición del ejido, el Proyecto habría estado en producción en las fechas de valuación de 2023 y 2026.[1679] Y a eso habría que sumar todos los supuestos que utiliza SLR para expandir la vida útil de la mina y el volumen de recursos que contempla el DCF de Brattle. Ninguno de esos eslabones estaba resuelto a la fecha de valuación, y la probabilidad *conjunta* de todos ellos no puede estimarse con la certeza razonable que exige el derecho internacional.

1279. El enfoque de mercado, en cambio, no exige suponer ninguno de esos hechos: mide lo que inversionistas informados estaban efectivamente dispuestos a pagar por el Proyecto tal como existía, con sus permisos pendientes y sus riesgos incorporados en el precio.

[1677] Segundo Informe Brattle, ¶ 160 ("Ixtaca is owned by Almaden, a publicly traded company whose shares can be bought and sold in the stock market. (…) In addition, as a listed company, Almaden has access to public capital markets and can raise funds through equity or other financing instruments. That access mitigates concerns that the illiquidity would require Almaden to (…) sell the Project to meet liquidity needs").

[1678] Segundo Informe Brattle, ¶ 32.

[1679] Segundo Informe Brattle, ¶¶ 47 y 49, este último citando el Segundo Informe de SLR. *Ver también* Réplica, ¶ 1122.

1280. Conviene añadir que esos riesgos no eran teóricos. Un vendedor que hubiese querido enajenar el Proyecto a mediados de diciembre de 2020 habría tenido que hacerlo con la MIA sin resolver, con el amparo de Tecoltemi vivo y sin saber qué condicionantes habría impuesto un eventual permiso favorable. Un comprador informado habría descontado todos esos factores, que es exactamente lo que la cotización de la acción de Almaden reflejaba. Sostener que el valor del Proyecto en esa fecha era el de una mina en operación en 2023 no corrige un defecto del método de mercado: describe un activo distinto del que las Demandantes efectivamente tenían. El enfoque de mercado no es aquí, por tanto, un sustituto de segunda categoría del enfoque de ingresos. Es el método que, en las circunstancias de este caso, satisface las exigencias de causalidad, certeza razonable y evitar la especulación excesiva que el enfoque de ingresos no puede satisfacer, y es un método que el propio Código CIMVAL admite para propiedades como Ixtaca.

c. La práctica arbitral confirma que el enfoque de ingresos no es el apropiado para proyectos mineros preoperativos

1281. La lectura del Código que propone la Demandada es la que han seguido los tribunales que lo han considerado. En *Crystallex c. Venezuela*, contrario a lo sostenido por las Demandantes, el tribunal no aplicó el enfoque de ingresos para determinar la indemnización a la fecha de valuación.[1680] El tribunal reconoció que el Proyecto Las Cristinas era una "propiedad de desarrollo" bajo las Guías CIMVAL[1681] y, aun así, descartó el enfoque de ingresos por considerar que los resultados de correr los números para esa fecha, como reconocieron los propios peritos, llevaban a "somewhat artificial and incomplete results".[1682] En su lugar, prefirió métodos basados en el mercado (capitalización bursátil y múltiplos), por considerarlos "particularly appropriate and reliable".[1683] *Crystallex* es, por tanto, el mejor ejemplo de lo que aquí sostiene la Demandada: la clasificación de un proyecto como propiedad de desarrollo bajo el CIMVAL no impone el enfoque

---

[1680] *Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB(AF)/11/2, 04 April 2016, ¶ 916 ("the valuation date that it considers appropriate in this case (i.e., 13 April 2008)"). **CL-0156**.

[1681] *Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB(AF)/11/2, 04 April 2016, ¶ 884. **CL-0156**.

[1682] *Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB(AF)/11/2, 04 April 2016, ¶ 899. **CL-0156**.

[1683] *Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB(AF)/11/2, 04 April 2016, ¶ 889. **CL-0156**.

de ingresos, y un tribunal puede preferir el enfoque de mercado sin apartarse del Código. A ello se suma una diferencia que juega en contra de las Demandantes: Las Cristinas era un proyecto "shovel-ready", con una factibilidad aprobada años antes por el Ministerio de Minas de Venezuela y con reservas probadas de 16.86 millones de onzas de oro,[1684] un grado de certidumbre y avance que el Proyecto Ixtaca, carente de permisos ambientales y con riesgos técnicos no resueltos, nunca alcanzó.

1282. Fuera del Código CIMVAL, la práctica arbitral también confirma caso por caso que el enfoque de ingresos no es el apropiado para proyectos mineros preoperativos. La Demandada examinó los laudos sobre cuantificación dictados en 13 arbitrajes de inversión relativos a proyectos mineros donde, como Ixtaca, el activo controvertido no había iniciado producción. De esos 13 casos, siete fijaron la compensación sobre los costos hundidos, tres acudieron al enfoque de mercado, uno al Método de Múltiplos del Gasto en Exploración y solo dos, *Tethyan Copper y Gold Reserve* emplearon un enfoque de ingresos.[1685]

[1684] *Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB(AF)/11/2, Award, 04 April 2016, ¶ 733 ("At the time of Venezuela's measures, Crystallex was poised to begin construction at Las Cristinas, to be followed by production a short time thereafter") y ¶ 878 (it cannot be cast into doubt that Las Cristinas is one of the most important mines in Latin America, and the Venezuelan authorities also clearly viewed it as such. During the years in which it was active on the ground, Crystallex had completed the exploration (drilling and testing) activities and the feasibility studies produced by the Claimant (and approved by the Ministry of Mines) show that that the nature of the Las Cristinas deposit was well known. In particular, the MDA 2007 Technical Report confirmed that Las Cristinas had proven and probable reserves estimated at 16.86 million ounces of gold in situ, and measured and indicated resources of 20.76 million ounces and inferred resources of 6.28 million ounces). **CL-0156**.

[1685] *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶¶ 732-737. **CL-0134**; *Mohamed Abdel Raouf Bahgat v. Egypt (I),* PCA Case No. 2012 07, Final Award, 23 December 2019, ¶¶ 433, 445 y 483. **RL-0194**; Copper Mesa Mining Corporation v. Republic of Ecuador, PCA No. 2012-2, Award, 15 March 2016, ¶¶ 7.24 y 7.27. **CL-0222**; *South American Silver Limited c. el Estado Plurinacional de Bolivia*, Caso CPA No. 2013-15, Laudo, 22 de noviembre de 2018, ¶¶ 857 y 865-866. **RL-0189**; *Stans Energy Corp. and Kutisay Mining LLC v. Kyrgyz Republic (II)*, Award, 20 August 2019, ¶¶ 783-784. **CL-0111**; *Bear Creek Mining Corporation v. República del Perú*, Caso CIADI No. ARB/14/21, Laudo, 30 noviembre 2017, ¶¶ 600, 604 y 656-657. **RL-0195**; *William Richard Clayton and others v. Government of Canada*, PCA Case No. 2009-04, Award on Damages, 10 January 2019, ¶ 302. **RL-0196**; *Khan Resources Inc. et al v. the Government of Mongolia and MonAtom LLC*, PCA Case No. 2011-09, Award on the Merits, March 2 2015, ¶ 390. **CL-0219**; Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB (AF)/11/2, Award, 04 April 2016, ¶¶ 916-917. **CL-0156**; *Tethyan Copper Company Pty Limited v. Islamic Republic of Pakistan*, ICSID Case No. ARB/12/1, Award, 12 July 2019, ¶¶ 331-337. **CL-0109**; *Nachingwea U.K. Limited, Ntaka Nickel Holdings Limited and Nachingwea Nickel Limited v. United Republic of Tanzania*, ICSID Case No. ARB/20/38, Award, 14 July 2023 ¶¶ 347, 352, 367. **CL-0127**; Gold Reserve Inc. v.

1283. El tribunal de *Odyssey c. México*, sostuvo que "in the case of mining projects that have not started operations, the sunk cost methodology for calculating compensation is the approach most commonly used by international tribunals", y descartó el enfoque de ingresos por varias razones, de las cuales dos aplican al presente caso: la ausencia de un historial de operaciones, y el número de supuestos que debían tenerse por suficientemente ciertos.[1686] Aunque otra de esas razones fue la ausencia de un estudio de prefactibilidad o factibilidad, circunstancia que no ocurre en el caso de Ixtaca y no es objeto de disputa en este arbitraje, la práctica arbitral demuestra que contar con un estudio de estos no basta.

1284. En *Bahgat c. Egipto* el tribunal concluyó que "the DCF method is inappropriate to determine the fair market value of Claimant's investment" porque las sociedades expropiadas "cannot be considered to have constituted going concerns".[1687]

1285. En *Copper Mesa c. Ecuador*, laudo que las propias Demandantes aportaron al expediente, el tribunal rechazó todas las metodologías propuestas por los peritos de ambas partes por ser "too uncertain, subjective and dependent upon contingencies", y lo hizo precisamente porque las concesiones "remained in an early exploratory stage with no actual mining activities, still less any track record as an actual mining business".[1688]

1286. En *South American Silver c. Bolivia* el tribunal explicó que no era posible estimar el valor del proyecto mediante el descuento de flujos "since it is not a project in the production stage, as the experts for both Parties accept".[1689]

Bolivarian Republic of Venezuela (I), ICSID Case No. ARB (AF)/09/1, Award, 22 September 2014, ¶ 690 ("Both valuation experts used the Discounted Cash Flow ('DCF') method as the primary method for assessing the quantum of damages"). **CL-0153**; *Westwater Resources, Inc. c. República de Türkiye*, Caso CIADI No. ARB/18/46, Laudo, 3 de marzo de 2023, ¶ 422-423. **RL-0197**.

1686 *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶¶ 682 y 733. **CL-0134**.

1687 *Mohamed Abdel Raouf Bahgat v. Egypt (I),* PCA Case No. 2012 07, Final Award, 23 December 2019, ¶¶ 433 y 445. **CL-0115**.

1688 *Copper Mesa Mining Corporation v. Republic of Ecuador*, CPA Case No. 2012-2 Award, 15 March 2016, ¶ 7.24. **CL-0222**.

1689 *South American Silver Limited c. el Estado Plurinacional de Bolivia*, Laudo, Caso CPA No. 2013-15, Laudo, 22 de noviembre de 2018 ¶ 865. **RL-0189**.

1287. En *Bear Creek c. Perú*, el proyecto sí contaba con un estudio de factibilidad y con reservas declaradas.[1690] Sin embargo, el tribunal rechazó el DCF porque "the Project remained too speculative and uncertain to allow such a method to be utilized" y fundó esa conclusión, entre otras razones, en que el proyecto "had not received many of the government approvals and environmental permits it needed to proceed".[1691] La coincidencia con Ixtaca es exacta, y la conclusión también debería serlo.

1288. Las dos excepciones que las Demandantes invocan (*Tethyan* y *Gold Reserve*) confirman la regla. En *Gold Reserve c. Venezuela* el tribunal no resolvió una controversia sobre el método de valuación: los peritos de ambas partes estuvieron de acuerdo en utilizar el DCF como método principal, de modo que su aplicación no fue consecuencia de una determinación del tribunal sino un punto no controvertido entre las partes.[1692]

1289. En cuanto al caso *Tethyan Copper c. Pakistán*, se trata de una decisión ampliamente cuestionada en materia de cuantificación, por la exorbitante indemnización otorgada (USD $4,087 millones) "for a mining project that had not yet begun running nor obtained the necessary authorisation".[1693] También se ha subrayado que en esas circunstancias "the investment does not exist, and therefore, future cash flows are speculative".[1694] Las Directrices del Banco Mundial de

---

1690 Réplica, ¶ 1086.

1691 *Bear Creek Mining Corporation c. República del Perú* Caso CIADI No. ARB/14/21, Laudo, 30 noviembre 2017, ¶¶ 600 y 604. **RL-0195**.

1692 Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela (I), ICSID Case No. ARB(AF)/09/1, Award, 22 September 2014, ¶ 690 ("Both valuation experts used the Discounted Cash Flow ('DCF') method as the primary method for assessing the quantum of damages"). **CL-0153**. Así lo describe también el tribunal de *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶ 634. **CL-0134**.

1693 Toni Marzal, "Quantum (In)Justice: Rethinking the Calculation of Compensation and Damages in ISDS", Journal of World Investment & Trade, vol. 22, núm. 2, 2021, p. 278. **RL-0198**. *Ver también* Sarah Ahmad, "The Role of Developing Countries in Investor-State Arbitration: Reflections on Tethyan Copper v Islamic Republic of Pakistan", LSE Law Review, vol. VIII, 2023, p. 453. **RL-0199**. David Schneiderman, "International Investment Law and Discipline for the Indebted", European Journal of International Law, vol. 33, núm. 1, febrero de 2022, pp. 65-96. **RL-0200**; Jonathan Bonnitcha y Sarah Brewin, "Compensation Under Investment Treaties: What are the problems and what can be done?", International Institute for Sustainable Development, December 2020. **RL-0201**.

1694 Clara López, "Compensating uncertainty: the case of mineral resource exploration in ISDS", Journal of International Economic Law, vol. 28, núm. 2, 2025, p. 150. **RL-0202**;

1992, que ya obran en el expediente, apuntan en el mismo sentido: el DCF debe reservarse para empresas en marcha con un historial probado de operaciones rentables.[1695]

1290. Más importante aún, el propio tribunal en *Tethyan* reconoció el carácter extraordinario de las circunstancias que justificaban su enfoque y la aplicación del denominado "DCF moderno".[1696] Entre otras, se declaró convencido de que el proyecto "would have gone forward and become operational and profitable in due course" por el respaldo financiero y la experiencia operativa de Antofagasta y Barrick, y consideró establecido que ninguno de los riesgos de agua, seguridad y licencia social constituía "a 'fundamental uncertainty' that would have stopped the project or rendered it unprofitable".[1697] En Ixtaca, esos tres riesgos permanecían abiertos. Además, Almaden no cuenta con una trayectoria de construcción y operación de minas comparable a la de las dos empresas inversionistas en el caso que citan. Notablemente, los pocos tribunales que han considerado el caso *Tethyan* tampoco lo han tratado como una regla general ni han reproducido su metodología, sino que han enfatizado las condiciones excepcionales que permitieron utilizar un DCF para un proyecto preoperativo.[1698]

1291. Incluso aceptando (*quod non*) que este único caso tenga tal peso que desplace i) los estándares de compensación del derecho internacional, ii) la metodología aplicada en el resto de los arbitrajes de inversión con proyectos mineros preoperativos, y iii) las Directrices del Banco Mundial para valuar proyectos, sus hechos difieren materialmente de los de este caso. En particular, el tribunal en *Tethyan* consideró relevante la evidencia de que las autoridades de

---

1695 Directrices del Banco Mundial sobre el Tratamiento de la Inversión Extranjera Directa, 1992, p. 6. **RL-0123**, ya citada en el Memorial de Contestación, ¶ 806 y nota al pie 997. Ver también Jonathan Bonnitcha y Sarah Brewin, Compensation Under Investment Treaties, International Institute for Sustainable Development, Best Practices Series, November 2020, p.21 ("the 1992 World Bank Guidelines on the Treatment of Foreign Investment are clear that the DCF method should only be used to value going concerns"). **RL-0203**.

1696 Tethyan Copper Company Pty Limited v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/12/1, Award, 12 July 2019, ¶ 359. **CL-0109**.

1697 Tethyan Copper Company Pty Limited v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/12/1, Award, 12 July 2019, ¶¶ 331 y 333. **CL-0109**.

1698 Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶ 634 ("The most used method by tribunals is the sunk cost approach (five out of 11 cases), while the DCF methodology has been applied on only two occasions: in one of these cases, Gold Reserve v. Venezuela, it was partly due to the agreement of the experts of both parties), whereas in Tethyan v. Pakistan, the tribunal applied a modern DCF methodology"). **CL-0134**; *Westwater Resources, Inc. v. Republic of Türkiye*, ICSID Case No. ARB/18/46, Award, 3 March 2023, ¶ 337. **RL-0197**.

Baluchistán contemplaban actividades mineras que competían directamente con el proyecto de la demandante, lo que lo llevó a concluir que las medidas frustraron un proyecto que, sin la conducta estatal, habría seguido desarrollándose.[1699] Nada de eso ocurre aquí: la Demandada no busca desarrollar ni apropiarse de Ixtaca o actividad económica alguna que sea equivalente. Con esto, la premisa metodológica de las Demandantes queda sin sustento alguno.

1292. En suma, cuando los tribunales internacionales han tenido que cuantificar la pérdida de un proyecto minero que no llegó a producir, y en particular cuando el permiso ambiental estaba pendiente, han rechazado de manera consistente el enfoque de ingresos y han acudido a evidencia observable del valor de la inversión. Ese es el antecedente que este Tribunal tiene ante sí, y no el que las Demandantes describen. Más importante aún, este es también el antecedente que respalda el método que emplea Quadrant.

2. La valuación de Quadrant refleja el valor justo de mercado de la inversión de las Demandantes

1293. Como se explica en el primer informe de Quadrant y se confirma en el segundo, el método que utiliza el experto de daños de la Demandada es más confiable en las circunstancias de este caso, pues no involucra la estimación de decenas de variables (todas sujetas a error) sin contar con un referente objetivo –i.e., un historial de operaciones rentables suficiente. En contraste, el valor de capitalización está basado en la valoración que hacen diversos inversionistas que transan con la acción y es particularmente precisa cuando, como lo admite Brattle, la empresa matriz tiene un solo proyecto y sus acciones se intercambian frecuentemente y reaccionan a información relevante.

a. Los presuntos defectos de la valuación de Quadrant

1294. Las Demandantes cuestionan la valuación de Quadrant porque, a su decir, descansa en dos supuestos críticos e incorrectos: i) que dicha capitalización de mercado "remained unaffected by concerns that Mexico would engage in the very conduct the Claimants challenge", cuando la realidad era que el precio de la acción "[had] already been materially depressed by a series of Respondent's acts that increased the expectation of Unlawful Conduct"[1700]; y, ii) que el Proyecto

---

[1699] *Tethyan Copper Company Pty Limited v. Islamic Republic of Pakistan*, ICSID Case No. ARB/12/1, Award, 12 July 2019, ¶ 1224. **CL-0109**.

[1700] Réplica, ¶ 1122; Segundo Informe Brattle, ¶ 30(a).

"would have remained frozen at its December 2020 development stage through the 2023 Valuation Date and beyond".[1701] Ninguna de estas críticas se sostiene, según se explica a continuación.

(1) La valuación de Quadrant no está "contaminada" por la anticipación de conducta ilegal

1295. Apoyándose en Brattle, las Demandantes cuestionan la capitalización de mercado de Almaden al 17 de diciembre de 2020 porque (según afirman) descansa en la premisa de que dicho valor no había sido afectado por medidas que anticipaban la conducta ilegal que da lugar a la presente controversia. Añaden que "[t]he Tribunal should consider circumstances occurring before the unlawful measures", aunque no profundizan sobre las razones que justificarían tal consideración.[1702] Esta primera crítica falla por varias razones.

1296. *En primer lugar*, la mayoría de los acontecimientos que Brattle invoca como indicadores de que el mercado anticipaba la "conducta ilegal" no son (ni podrían ser) medidas impugnadas en este arbitraje porque son anteriores a la fecha crítica del 14 de diciembre de 2020.[1703] Este es el caso de la llegada de la administración del Presidente López Obrador en 2018 y la retórica de MORENA; la cancelación de las Nuevas Concesiones en diciembre de 2018; la suspensión de la evaluación de la MIA, resuelta el 23 de octubre de 2019 y notificada el 29 de octubre de 2019; y el rechazo judicial de la apelación el 1 de diciembre de 2020.[1704] Como lo advierte Quadrant en su segundo informe, las Demandantes mismas han señalado expresamente que "no crystallized breach or loss existed before 17 December 2020", y que los hechos anteriores a esa fecha "serve as context, they do not constitute a breach."[1705] La consecuencia de estas declaraciones es que los escenarios actual y contrafactual que sirven de base para la estimación de los daños no pueden divergir antes del 17 de diciembre de 2020, pues de lo contrario, se estaría excluyendo el efecto de actos cuya legalidad no está sujeta a la consideración de este Tribunal por encontrarse fuera de su jurisdicción *ratione temporis*.[1706] Esto es consistente con la objeción jurisdiccional planteada en este escrito, pero en cualquier caso no depende de ella, pues la fecha del 17 de diciembre de 2020

1701 Réplica, ¶ 1122; Segundo Informe Brattle, ¶ 48.

1702 Réplica, ¶¶ 1122-1123.

1703 Réplica, ¶ 798.

1704 Segundo Informe Brattle, ¶¶ 36-44.

1705 Segundo Informe Quadrant, ¶ 22 citando la Réplica, ¶¶ 765(b) y 801(a).

1706 Segundo Informe Quadrant, ¶ 23.

para efectos de daños se basa además en la propia declaración de las Demandantes, sin conceder que la reclamación se cristalizara en esa fecha. Por consiguiente, incluso si el Tribunal decide desestimar la objeción en jurisdicción, no puede ignorar las fechas basadas en la propia conducta de Almaden en este arbitraje para efectos de daños.

1297. Como se explicó anteriormente, el escenario contrafactual que supone el principio de reparación plena se limita a eliminar las consecuencias de las *violaciones* y nada más. Las Demandantes, por lo tanto, se equivocan cuando afirman que el hecho de que la Denegación de la MIA sea la primera de las medidas reclamadas no exige "anchoring Almaden's market capitalization to that date irrespective of the events that preceded it".[1707] Esto es precisamente lo que exige un escenario contrafactual congruente con el estándar de reparación plena. Los efectos económicos de hechos anteriores a las presuntas violaciones pueden tomarse en cuenta como contexto, pero en ningún caso se convierten en daños indemnizables ni pueden servir como pretexto para descalificar un enfoque de valuación que toma como punto de partida el VJM de la inversión inmediatamente antes de las presuntas violaciones.

1298. *En segundo lugar*, el propio Brattle reconoce que muchos de los acontecimientos a los que alude no tuvieron efectos discernibles sobre el precio de las acciones de Almaden y, por lo tanto, no afectaron su capitalización de mercado. Sobre los retrasos e irregularidades en el proceso de evaluación de la MIA, Brattle afirma que sus efectos "cannot be discerned from share price reactions" y lo mismo sucede con el presunto impacto de la declaración de insubsistencia de las Nuevas Concesiones con la que se pretendía resolver la oposición de la comunidad Tecoltemi al Proyecto.[1708] A pesar de ello, pretenden que el Tribunal considere estos actos presuntamente irregulares para descartar el enfoque de valuación de Quadrant.

1299. En su segundo informe, Quadrant explica que el pobre desempeño de las acciones de Almaden comparado con los índices representativos del sector entre la fecha de emisión del FS y la Denegación de la MIA, se explica fundamentalmente a partir de dos eventos: i) la suspensión del proceso de evaluación de la MIA en octubre de 2019 y; ii) el anuncio del 1 de diciembre de 2020 relativo a las Nuevas Concesiones.[1709] Sin embargo, es evidente que el mercado no anticipaba

---

1707 Réplica, ¶ 1123.

1708 Segundo Informe Brattle, ¶¶ 40 y 42.

1709 Segundo Informe Quadrant, ¶ 29.

una denegación "arbitraria" o "ilegal" de la MIA, sino un retraso en la decisión y una posible denegación de la autorización ambiental, como en cualquier otro caso que involucrara un proyecto minero. Del mismo modo, el mercado tampoco anticipaba que las concesiones serían declaradas insubsistentes "ilegalmente", como afirman las Demandantes. Evidentemente existía el riesgo de que las concesiones fuesen declaradas insubsistentes como resultado del procedimiento de amparo que inició la comunidad Tecoltemic *tres años antes* de que el Presidente López Obrador llegara al poder –y antes de que el TIPAT entrara en vigor–, pero esto no puede ser caracterizado como una "anticipación de conducta ilegal".

1300. El único acontecimiento anterior a la fecha crítica que las Demandantes vinculan directamente con una medida controvertida en este arbitraje es la declaración del Secretario Toledo del 23 de agosto de 2019 en la que supuestamente anticipó la posterior denegación de la MIA.[1710] Sin embargo, la única fuente invocada para sostener ese planteamiento es una nota de apenas dos páginas publicada en un medio digital local, según la cual el Secretario habría afirmado que la mina "no va a ser". La propia publicación califica esa afirmación como "escueta" y precisa que "el secretario no ahondó en el tema, ni habló de acciones específicas o explicó cómo resolvería las cuestiones legales con las mineras". En el párrafo siguiente, el artículo añade que el Gobierno tenía preocupaciones relacionadas con "proyectos que sugieran un riesgo para el medio ambiente y para las comunidades", que estos serían analizados "a detalle y con justificaciones científicas". La nota, por tanto, no anunciaba una denegación anticipada, arbitraria o predeterminada de la MIA. Era perfectamente compatible con la posibilidad de que el Proyecto no fuera autorizado por razones lícitas, incluidas deficiencias en el cumplimiento de los requisitos aplicables. De hecho, el propio artículo concluía que "[e]l proceso jurídico continúa, y el rumbo de la mina […] *es aún incierto*".

1301. También cabe señalar que Quadrant analizó el posible impacto del supuesto anuncio del Secretario Toledo y encontró un impacto *de minimis* sobre el precio de las acciones de Almaden:

> 29. I note that Claimants and Brattle refer to an event on 23 August 2019 (a Friday) at which, according to Brattle, Mr. Victor Manuel Toledo (the Secretary of Environment and Natural Resources) "stated his explicit intent to reject Ixtaca's MIA." Almaden's share price declined by less than 1% in the two business days after Secretary Toledo's speech, whereas it declined by 23% in the two business days following the 29 October 2019 announcement, and by 19% in the two business days following the 1 December

[1710] Lado B, Titular de la Semarnat asegura que la mina en Ixtacamaxtitlán 'no va a ser', 29 de agosto de 2019. **C-0307**.

> 2020 announcement. Therefore, it does not appear that Secretary Toledo's speech contributed in any meaningful way to the differential performance identified by Brattle.[1711]

1302. En estas circunstancias, las Demandantes y Brattle no pueden alegar con seriedad que la declaración del secretario Toledo redujo o "contaminó" el precio de la acción de Almaden porque los inversionistas anticipaban una futura conducta ilícita como una denegación arbitraria de la MIA o la "cancelación" ilegal de sus concesiones.

1303. Las Demandantes ignoran nuevamente que las MIA se evalúan conforme a derecho y pueden denegarse legítimamente. También ignoran que el marco jurídico mexicano proporciona, a quienes solicitan una MIA, medios para impugnar decisiones que consideren arbitrarias, incorrectas o incongruentes con el debido proceso. Las Demandantes no hicieron valer ninguno de estos recursos y no se han molestado en explicar las razones detrás de esta decisión. No obstante, piden a este Tribunal mirar más allá de su jurisdicción para eliminar el impacto de actos cuya legalidad no impugnaron en su momento ni pueden impugnar ahora *ratione temporis*.

1304. Como se explicó antes, la reclamación de las Demandantes no implica determinar si las autoridades mexicanas tienen facultades para denegar un permiso o cancelar una concesión, sino determinar si ejercieron esas facultades violando alguna de las obligaciones que el Estado asumió en el TIPAT. Evidentemente, el mercado no podía haber anticipado como ilícita una conducta cuya existencia y caracterización jurídica son precisamente objeto de las determinaciones en este arbitraje. Por ello, etiquetar actos anteriores a la fecha crítica como una "anticipation of Unlawful Conduct" como lo hace Brattle de manera reiterada[1712] es engañoso. No constituye una conclusión económica, sino una petición de principio sobre una cuestión que corresponde al Tribunal decidir. Para ser claros, el mercado no "anticipó la conducta ilegal" de la que se quejan las Demandantes en este arbitraje; consideró el riesgo –implícito en cualquier proyecto minero– de que las autoridades ambientales negaran la MIA y el riesgo que implicaba el procedimiento de amparo *iniciado en 2015* que ponía en entredicho la validez de las concesiones de las Demandantes. Sugerir que cualquier decisión adversa a los intereses de las Demandantes en estos dos frentes constituye *per se*, una violación del TIPAT o una anticipación de conducta ilegal es un sinsentido.

1711 Segundo Informe Quadrant, ¶ 29.

1712 Segundo Informe Brattle, ¶¶ 36, 39, 46.

1305. El escenario contrafactual debe eliminar las consecuencias de las medidas que el Tribunal determine ilícitas, no cualquier y toda circunstancia que las Demandantes consideren que afectó negativamente el valor de su inversión. Sin embargo, apoyándose en *RosInvestCo, Odyssey* y otros laudos, las Demandantes sostienen que "[t]he Tribunal should consider circumstances occurring before the unlawful measures".[1713] Ninguno de esos casos respalda esta proposición.

1306. El pasaje de *RosInvestCo* se refiere a la consideración de hechos anteriores para informar el análisis de la existencia de una inversión o de la condición de inversionista, no para determinar el *quantum*. Lo mismo ocurre con los demás casos citados: en *Jak Sukyas,* los hechos anteriores se consideraron para determinar "whether the State has subsequently committed a breach of the obligation"; y, en *Gabriel Resources*, como "context or evidence of intent with respect to claims of alleged violations after that date".[1714] Las Demandantes no explican cómo esos precedentes permitirían ignorar los efectos de acontecimientos que no constituyen medidas impugnadas ni ilícitos comprendidos dentro de la jurisdicción del Tribunal, ni por qué son relevantes para una discusión de daños.

1307. El caso *Odyssey* tampoco rescata el punto. Las Demandantes lo invocan para afirmar que el Tribunal debe considerar los acontecimientos anteriores a las medidas porque constituyen antecedentes relevantes para evaluar el VJM y el daño sufrido, y sostienen que allí se aceptó la tesis de una capitalización de mercado "contaminada".[1715] Sin embargo, en *Odyssey*, los expertos de la demandante alegaron que la capitalización de mercado de la empresa estaba distorsionada por factores concretos de mercado como la escasa liquidez de la acción, los efectos de ventas en corto ("short selling") y las dificultades financieras de la empresa.[1716] En este caso, Brattle misma reconoció que esas preocupaciones no aplican en el presente caso pues "*Almaden's shares traded frequently, and the price reacted to relevant and available information*."[1717]

1713 Réplica, ¶ 1123.

1714 Réplica, nota al pie 3035;Jak Sukyas v. Republic of Romania, PCA Case No. 2020-53, Partial Award on Jurisdiction, 06 November 2024, ¶ 298. **CL-0181**; *Gabriel Resources Ltd. y Gabriel Resources (Jersey) Ltd. v. Rumania,* ICSID Case No. ARB/15/31, Award, 8 March 2024, ¶ 738. **CL-0196**.

1715 Réplica, ¶ 1123.

1716 *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶ 712, **CL-0134**.

1717 Brattle I, ¶ 169.

1308. Más importante aún, tras rechazar la capitalización de mercado propuesta por la demandada, la mayoría en *Odyssey* rechazó el enfoque de ingresos y la valuación *ex post* que, al igual que las Demandantes en este caso, Odyssey propuso en aquella ocasión como enfoque principal. Por el contrario, calculó los daños con base en los costos hundidos, usando como fecha de valuación el día inmediatamente anterior a la denegación de la MIA.[1718] Lejos de respaldar la metodología de Brattle, *Odyssey* confirma que, tratándose de un proyecto minero preoperativo sujeto a una autorización ambiental, no procede una valuación *ex post* basada en el enfoque de ingresos, como la que propone Brattle en este caso.

1309. En conclusión, como lo señala Quadrant en su segundo informe: "Based on Claimants' assertion that there were no breaches and no loss was suffered before 17 December 2020, Almaden's share price as of 17 December 2020 is the appropriate baseline to assess damages according to the market capitalization approach".[1719] La Demandada comparte esta posición.

(2) El estándar de reparación plena no exige considerar la evolución del Proyecto como suponen las Demandantes

1310. La segunda crítica de las Demandantes al método de Quadrant es que este supuestamente "freezes the Project in time".[1720] Según alegan, al actualizar la capitalización de mercado de Almaden a una fecha futura con índices de empresas mineras junior (ETFs), Quadrant "assumes that the only factor affecting the Project's but-for value is broad sector performance and makes no adjustment for the expected advancement of the Project itself". El resultado de esta supuesta omisión sería que Quadrant "effectively values a producing mine [sic] as though it was still awaiting its first permit decision".[1721] Brattle incluso afirma que este supuesto "congelamiento"

1718 *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶¶ 570 y 758, **CL-0134**.

1719 Segundo Informe Quadrant, ¶ 30. *Ver también* Réplica, ¶¶ 765(b) ("no crystallized breach or loss existed before 17 December 2020"), 801a ("The breach crystallized with SEMARNAT's final, definitive denial on 17 December 2020. The irregularities that preceded it serve as context, they do not constitute a breach.") y 813 ("no loss was suffered before that date [17 de diciembre de 2020]").

1720 Segundo Informe Brattle, ¶¶ 48-49.

1721 Réplica, ¶ 1126; Segundo Informe Brattle, ¶¶ 48-50

explica "the bulk of the difference" entre su DCF y la valuación de Quadrant.[1722] La crítica es circular y falla por al menos tres razones.

1311. *En primer lugar*, Quadrant no valoró una "mina en producción" porque dicha mina nunca existió. Lo que valoró fue el *Proyecto* que presuntamente le fue expropiado a las Demandantes, y tomó como base el valor que este tenía en la fecha inmediatamente anterior a la Denegación de la MIA porque dicha medida es la primera de las violaciones que las Demandantes reclaman en este arbitraje.

1312. *En segundo lugar*, no suponer que el Proyecto habría evolucionado entre la fecha de la Denegación de la MIA y la emisión de la Resolución de No Factibilidad es correcto porque dicha evolución es inherentemente especulativa. El escenario de una "producing mine … generating revenue from gold and silver sales"[1723] a inicios de 2023 depende de una cadena de supuestos sobre acontecimientos futuros alineados con las expectativas de las Demandantes más que con el futuro probable del Proyecto. [1724] La Demandada se ha referido ya a la cadena de supuestos que tendrían que adoptarse para llegar al contrafactual que plantean las Demandantes y, por tanto, considera innecesario repetirlas aquí. A esto habría que sumar que la expansión del proyecto original que presupone SLR, con seguridad habría necesitado de una modificación de la MIA y otros permisos. Lejos de ser un hecho consumado, la mina en producción que sirve de sustento a la valuación de Brattle era una mera posibilidad que depende de un gran número de supuestos cuya probabilidad conjunta es imposible de determinar sin caer en excesos especulativos.

1313. El hecho es que el activo presuntamente expropiado consistía en un proyecto minero preoperativo, no en una mina en producción. Como ambas Partes reconocen, la reparación íntegra busca restablecer la situación que con toda probabilidad habría enfrentado el inversionista en ausencia del ilícito, sin embargo, esto no se traduce en suponer la materialización de todas las expectativas del inversionista. El hecho de que Quadrant valore el Proyecto en lugar de una mina productiva, como lo hace Brattle, no supone un defecto de la valuación de Quadrant, sino un defecto de la valuación de Brattle por el nivel de especulación que dicho supuesto implica.

1722 Segundo Informe Brattle, ¶ 50.

1723 Réplica, ¶ 1126.

1724 Segundo Informe Brattle, ¶¶ 47, 49 (citando SLR I, ¶ 350), y nota 45.

1314. *En tercer lugar*, las Demandantes omiten un hecho importante: Quadrant ajusta el valor base del Proyecto utilizando índices de empresas mineras de oro y plata (ETFs) precisamente con la idea de incorporar la evolución del valor del Proyecto sobre una base objetiva: la evolución general del sector y de las condiciones de mercado a partir de diciembre de 2020. Por lo tanto, es falso sugerir que Quadrant "congela" el Proyecto a esa fecha. Brattle lo reconoce al afirmar que "the only factor affecting the Project's but-for value […] is broad market performance in the gold and silver junior mining sector".[1725] Por lo tanto, su queja no es que el método de Quadrant no capture el potencial incremento en el valor del Proyecto, sino que "solo" hace eso. De hecho, Brattle observa que "the rise in metal prices has caused a rapid and commensurate rise in the market values of mining projects, as reflected in the market capitalization of gold and silver mining companies", y admite que "the four ETFs that Quadrant 1 relies on to update project values also experienced similar evolutions".[1726] De hecho, Quadrant también observa que los índices referidos incluyen empresas con proyectos en distintas etapas y muchas que pasaron de la etapa de desarrollo a la fase de producción. Por lo tanto, el uso de estos índices no implica suponer que el Proyecto habría permanecido en la etapa en que se encontraba en diciembre de 2020.[1727]

1315. La exclusión del supuesto de una mina operativa del modelo de Quadrant, representa un reconocimiento prudente de que la materialización del Proyecto en una mina operativa nunca ocurrió y que sería excesivamente especulativo hacerlo en las circunstancias de este caso.[1728]

b. Los casos que citan las Demandantes confirman la confiabilidad del método de capitalización de mercado

1316. Las Demandantes invocan *Khan Resources c. Mongolia* para desacreditar la metodología de Quadrant.[1729] Sin embargo, al hacerlo incorporan al expediente un laudo cuyo razonamiento metodológico, lejos de respaldar su posición, confirma que la capitalización de mercado constituye una herramienta válida de valuación en ciertas condiciones.

1725 Segundo Informe Brattle, ¶ 48.

1726 Segundo Informe Brattle, ¶ 184 y nota al pie 288.

1727 Segundo Informe Quadrant, ¶ 9.

1728 Segundo Informe Quadrant, ¶ 61.

1729 Réplica, ¶ 1127, citando *Khan Resources Inc., Khan Resources B.V. y CAUC Holding Company Ltd. v. The Government of Mongolia and MonAtom LLC*, CPA Case No. 2011-09, Award on the Merits, 2 March 2015, ¶¶ 407 y 409. **CL-0219**.

1317. *En primer lugar*, el tribunal en *Khan Resources* reconoció la capitalización de mercado como un método potencialmente apropiado para valuar una sociedad cotizada cuyo valor dependía sustancialmente del proyecto en cuestión. Si finalmente descartó ese método, lo hizo por circunstancias específicas de aquel expediente, en particular la limitada liquidez de la acción y el riesgo de que la cotización no reflejara adecuadamente el valor de la inversión.[1730] Esas circunstancias no concurren aquí. Por el contrario, el propio perito de las Demandantes reconoce que Almaden tenía un único proyecto, por lo que el precio de su acción no se veía afectado por otras inversiones. Como se advirtió anteriormente, también reconoce que las acciones de Almaden "traded frequently" –i.e., eran líquidas–, y la premisa fundamental sobre la que descansa el método de Quadrant: "through trading by informed investors, stock markets incorporate value-relevant information as it becomes available".[1731] Las razones que llevaron al tribunal en *Khan Resources* a desechar el valor de capitalización de mercado, por tanto, no aplican en este caso y no pueden utilizarse para desacreditar su utilización respecto de Almaden.

1318. *En segundo lugar*, las Demandantes atribuyen incorrectamente al tribunal en *Khan Resources* una conclusión que este no formuló. En el párrafo 1127 de la Réplica, vinculan el rechazo de la capitalización de mercado con la afirmación de que el método "is not an accurate method for ascertaining the fair value of a mine". Sin embargo, esta última afirmación no se refiere a la capitalización de mercado, sino a "the investment made", es decir, al enfoque de costos hundidos. Leído en su integridad, el párrafo 409 del laudo en *Khan Resources* explica que los costos hundidos constituían el "bottom line below which compensation should not fall", pero que no permitía, por sí solo, determinar el valor de la mina.[1732] Las Demandantes amalgaman así dos

---

1730 *Khan Resources Inc., Khan Resources B.V. y CAUC Holding Company Ltd. v. The Government of Mongolia and MonAtom LLC*, CPA Case No. 2011-09, Award on the Merits, 2 March 2015, ¶¶ 407-409. **CL-0219**.

1731 *Khan Resources Inc., Khan Resources B.V. y CAUC Holding Company Ltd. v. The Government of Mongolia and MonAtom LLC*, CPA Case No. 2011-09, Award on the Merits, 2 March 2015, ¶ 390. **CL-0219**. Sobre las condiciones de liquidez e información de la acción de Almaden, Brattle 2, ¶¶ 32, 159, 160 y 161.

1732 *Khan Resources Inc., Khan Resources B.V. y CAUC Holding Company Ltd. v. The Government of Mongolia and MonAtom LLC*, CPA Case No. 2011-09, Award on the Merits, 2 March 2015, ¶ 409. **CL-0219**.

conclusiones sobre métodos distintos para atribuir al laudo un rechazo absoluto al método de capitalización de mercado que este nunca formuló.

1319. *En tercer lugar*, y más importante aún, el tribunal en *Khan Resources* tampoco aceptó el DCF. Ello resulta particularmente significativo porque el proyecto de uranio allí examinado se encontraba en un estado de desarrollo avanzado: contaba con un *Definitive Feasibility Study* de mayo de 2009, reservas verificadas independientemente conforme a estándares regulatorios canadienses, un CAPEX presupuestado superior a US $330 millones, y una tasa interna de retorno después de impuestos del 29%.[1733] Pese a esas circunstancias, el tribunal concluyó, después de examinar los distintos métodos de valuación, que "none of these methodologies are wholly satisfactory in the present case" y determinó la compensación principalmente a partir de evidencia de transacciones reales: las ofertas de adquisición recibidas en fechas próximas a la desposesión.[1734]

1320. El contraste es significativo. Si en *Khan Resources*, pese al grado de desarrollo alcanzado por el proyecto y a la existencia de un estudio de factibilidad definitivo, el tribunal no consideró suficientemente confiable un DCF para determinar el VJM, con mayor razón este Tribunal debe proceder con cautela respecto de Ixtaca. Además, el tribunal privilegió la evidencia de lo que terceros efectivamente habían ofrecido pagar por la inversión en condiciones de mercado próximas a la desposesión, un método que responde a la misma lógica económica que sustenta el enfoque de Quadrant: inferir valor a partir de evidencia observable del mercado, en lugar de suponer la construcción y entrada en operación de una mina, para después proyectar lustros de flujos de caja hipotéticos. *Khan Resources*, por tanto, se encuentra metodológicamente mucho más cerca del enfoque de Quadrant que del DCF de Brattle.

1733 *Khan Resources Inc., Khan Resources B.V. y CAUC Holding Company Ltd. v. The Government of Mongolia and MonAtom LLC*, CPA Case No. 2011-09, Award on the Merits, 2 March 2015, ¶ 60. **CL-0219**.

1734 *Khan Resources Inc., Khan Resources B.V. y CAUC Holding Company Ltd. v. The Government of Mongolia and MonAtom LLC*, CPA Case No. 2011-09, Award on the Merits, 2 March 2015, ¶¶ 390 y 410-421. **CL-0219**.

1321. Las Demandantes invocan también, sin ningún análisis, el caso *Eco Oro c. Colombia* para cuestionar el método de capitalización de mercado.[1735] Pero ese laudo tampoco respalda su posición. El tribunal descartó allí la capitalización de mercado debido, entre otros factores, al reducido volumen intercambiado de las acciones de la demandante –i.e., la iliquidez de la acción.[1736] Como se explicó hace un momento, esa circunstancia no concurre respecto de Almaden.[1737] Removida la premisa fáctica que llevó al tribunal de *Eco Oro* a rechazar el método de capitalización de mercado, el caso opera en sentido inverso al que las Demandantes le atribuyen: confirma que la objeción a la capitalización de mercado depende de las condiciones de liquidez e información de la acción, y esas condiciones se satisfacen en este caso.

1322. Finalmente, las Demandantes vuelven a invocar *Odyssey*. Citan el pasaje según el cual "as per the CIMVAL Standards, the market capitalization method is secondary and thus not suitable to assess the FMV of a company as Respondent seeks to do".[1738] Pero ese razonamiento depende nuevamente de poner el Código CIMVAL por encima del estándar de compensación aplicable y otros principios que aplican a la valuación de daños, como el de evitar la especulación desmedida, y tomar en cuenta las circunstancias particulares del caso. También vale la pena observar que el enfoque de mercado (al cual pertenece la metodología de capitalización de mercado) está permitido por el CIMVAL como método para valorar proyectos como Ixtaca, y las razones por las que normalmente se desecha como método primario, no concurren en este caso. No resulta persuasivo, por tanto, trasladar mecánicamente la jerarquía metodológica del CIMVAL sin tomar en cuenta las circunstancias particulares de este caso y los principios aplicables a la cuantificación de daños en procedimientos inversionista-Estado.

1323. Más importante aún, *Odyssey* tampoco condujo al resultado que las Demandantes pretenden obtener aquí. Después de rechazar la capitalización de mercado propuesta en ese caso,

---

[1735] Réplica, ¶ 1127, citando *Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia*, ICSID Case No. ARB/16/41, Decision on Jurisdiction, Liability and Directions on Quantum, 9 September 2021, ¶ 898. **CL-0220**.

[1736] *Eco Oro Minerals Corp. v. Republic of Colombia*, ICSID Case No. ARB/16/41, Decision on Jurisdiction, Liability and Directions on Quantum, 9 September 2021, ¶ 854. **CL-0220**.

[1737] Primer Informe Brattle, ¶ 169 ("Almaden's shares traded frequently, and the price reacted to relevant and available information").

[1738] Réplica, ¶ 1127, citando *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶ 724. **CL-0134**.

el tribunal no adoptó un DCF ni determinó los daños con un enfoque *ex post*. Por el contrario, rechazó ambas solicitudes de las demandantes y determinó la compensación con base en los costos hundidos.[1739]

1324. Es entonces evidente que ninguno de los casos invocados por las propias Demandantes establece que la capitalización de mercado sea inherentemente inadecuada para determinar el VJM de una compañía minera. Los tribunales en *Khan Resources* y *Eco Oro* la descartaron por circunstancias específicas que no existen respecto de Almaden. Y el tribunal en *Odyssey* tampoco adoptó el enfoque de ingresos que las Demandantes defienden aquí. El hilo conductor de estas decisiones es, por tanto, contrario a su posición: cuando los tribunales han considerado demasiado incierta una metodología determinada, han privilegiado evidencia objetiva y observable del valor efectivamente atribuido a la inversión. Eso es precisamente lo que hace Quadrant al utilizar la capitalización de mercado de Almaden.

3. La valuación DCF de las Demandantes es excesivamente especulativa e innecesaria dada la existencia de una alternativa más confiable

1325. Como se expuso desde el Memorial de Contestación, el problema con el DCF de las Demandantes es que resulta excesivamente especulativo en las circunstancias de este caso. Las Demandantes argumentan en la Réplica que la observación de la Demandada y su experto en daños, en el sentido de que la valuación de Brattle implica estimar 35 variables y eso la hace especulativa y poco confiable es simplista y equivocada.[1740] Afirman que la mayoría de los DCFs involucran un número similar de variables y que "[t]hat is what makes them accurate".[1741]

1326. Efectivamente, la mayoría de los DCFs involucran un número similar de variables que requieren estimarse, sin embargo, lo que las Demandantes dejan fuera es que esas estimaciones normalmente se hacen sobre la base de resultados observados y registrados en documentos como los estados financieros auditados. En este caso, la mina que valora Brattle no cuenta con un historial de operaciones con el cual sustentar todas esas estimaciones y, por lo tanto, se convierte

---

1739 *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶ 732. **CL-0134**.

1740 Réplica, ¶ 1087.

1741 Réplica, ¶ 1087.

en un ejercicio por demás especulativo. Es precisamente por esa razón que los lineamientos del Banco Mundial reservan el DCF para empresas en marcha con un historial probado de operaciones rentables y también es la razón detrás de los numerosos precedentes inversionista-Estado que encontraron dicho método excesivamente especulativo cuando se trata de inversiones que nunca entraron en operación.[1742] Como se puede ver, la observación de las Demandantes no es más que una de esas "lawyerly complaints devoid of any familiarity with finance" de las que se quejan en su Réplica.[1743]

1327. Las Demandantes también se apoyan en CIMVAL para argumentar que dichos lineamientos recomiendan un DCF para propiedades en desarrollo que cuentan con un estudio de factibilidad y reservas declaradas. Sin embargo, la valuación de Brattle no se basa en ese estudio de factibilidad que, por cierto, fue elaborado cuatro años antes de la fecha *ex ante* que utilizan las Demandantes. Se basa en una revaluación de dicho estudio que SLR elaboró *ex profeso* para este procedimiento que, además, no habría estado disponible para un comprador o vendedor hipotético en la fecha de valuación. Como lo explica WGM en su segundo informe:

> This distinction is particularly material because SLR's but-for case *is not simply an expanded 2019 FS case carried forward unchanged*. SLR materially expands the Project by extending mine life from 11 to 16 years, increasing crusher feed by approximately 54%, plant feed by approximately 59%, and ore-sorter rejects by approximately 45%, while total operating cost increases by approximately 75.5% and total capital cost by approximately 46.4%. SLR also materially increases indirect costs, contingency and sustaining capital and relies on additional Inferred and out-of-pit Mineral Resources. These changes materially increase the Project's exposure to metallurgical performance, storage capacity, water management, sustaining capital, permitting, construction, operating and schedule risks. More importantly SLR appears to have assumed that the expanded pit and waste storage would not require additional consultation, environmental and other permitting. Accordingly, *WGM* contends that SLR has not demonstrated that the unresolved engineering uncertainties associated with its expanded but-for case have been adequately quantified, costed or risk-adjusted. SLR's own upward adjustments to CAPEX and OPEX confirm that these uncertainties are financially material rather than merely theoretical. In WGM's opinion, they must therefore be addressed through project-specific engineering evidence, appropriate

---

1742 *Metalclad Corporation v. The United Mexican States*, ICSID Case No. ARB(AF)-97-1, Award, ¶ 120. **CL-0022**. *Gemplus S.A. y otros v. los Estados Unidos Mexicanos*, Laudo, 16 de junio de 2010, Parte XIII, ¶¶ 13-70 a 13-72. **CL-0075**. *Energía y Renovación Holding, S.A. v. la República de Guatemala*, Caso CIADI No. ARB/21/56, Laudo, 31 de marzo de 2025 [español], ¶ 452. **RL-0122**. *Odyssey Marine Exploration, Inc. (USA) v. The United Mexican States*, ICSID Case No. UNCT-20-1, Award, 17 September 2024, ¶ 682. **CL-0134**.

1743 Réplica, ¶ 1087.

> contingency and sustaining-capital allowances, schedule and permitting analysis, and valuation sensitivities rather than as SLR has done, merely assume they will be resolved later without material cost, delay or operational consequence.[1744] [Énfasis de la Demandada]

1328. WGM observa además que, "the most significant distinction between the 2019 FS and SLR adjusted case is that SLR has assumed it can automatically be considered feasible by simply updating the original FS case to validate the expanded (from 11-16-year) project", sin embargo, "[t]he expanded storage configuration and five-year mine-life extension cannot reasonably be assumed to be automatically engineered, permitted, constructed or schedule-neutral without confirmation of the applicable technical and regulatory pathway."[1745] Como se puede observar, la mina que Brattle valora ni siquiera es la mina que anticipaba el FS, sino una versión extendida cuyo único sustento es un estudio reciente con lagunas importantes que ponen en duda la viabilidad del escenario contrafactual.

1329. Pero las especulaciones no se limitan a la parte técnica del escenario contrafactual. También se presentan en la valoración misma. Quadrant se enfoca en dos áreas que considera especialmente problemáticas: la estimación de precios futuros que gobierna la generación de ingresos de la mina hipotética y los distintos ajustes por riesgo –e.g., el riesgo de denegación de permisos, el riesgo de incurrir costos por encima de lo presupuestado, el riesgo de retrasos en la entrada en operación y riesgos de financiamiento, entre otros. Esta sección resume las principales conclusiones de Quadrant sobre estas dos cuestiones, sin embargo, por razones de espacio y eficiencia, la Demandada refiere al informe de Quadrant para una explicación más detallada y completa, en especial los Anexos B y C de su segundo informe en donde se profundiza en los detalles.

a. La sorprendente evolución de las valuaciones de Brattle

1330. La Demandada observa de entrada que las valuaciones de Brattle muestran una notable evolución en el tiempo. En total, Brattle ha presentado cuatro valuaciones a diferentes fechas: 28 de enero de 2019 –para supuestamente demostrar la confiabilidad de su modelo–, 9 de febrero de 2023 (la fecha *ex ante* que utilizan las Demandantes), 31 de enero de 2025 (el proxy inicial de la

[1744] Segundo Informe WGM, ¶¶ 25-26, 174.

[1745] Segundo Informe WGM, ¶ 17.

fecha del laudo) y; 30 de abril de 2026 (el proxy actualizado de la fecha del laudo). La Figura 7, tomada del segundo informe de Quadrant, muestra el total de los daños en estas cuatro fechas, y cómo entre la primera y la última, el total se incrementó aproximadamente 25 veces.[1746]

Figure 7: Drivers of Increases in Brattle's DCF Valuations[80]

Valuation Dates	Brattle's But-For FMV of the Project	Increase v. 2019 DCF	Increase from Passage of Time	Increase from Changes in Economic Factors
	(US$ Millions)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28-Jan-19	106.5	-	-	-
9-Feb-23	368.1	261.6	43.9	217.7
31-Jan-25	1,049.1	942.6	75.6	866.9
30-Apr-26	2,676.6	2,570.1	96.1	2,474.0

1331. Como se explica en el segundo informe de Quadrant, este notable incremento excede en casi 600% el desempeño del sector durante el mismo periodo medido a partir de cuatro índices representativos (ETFs).[1747] Quadrant añade que la comparación con estos índices es particularmente ilustrativa porque dichos índices también fueron impactados favorablemente por el incremento de los precios del oro y plata, los cuales alcanzaron sus máximos históricos a principios de 2026. De hecho, de acuerdo con Quadrant, este incremento en los precios constituye el factor principal detrás del notable desempeño del sector en los últimos años.[1748]

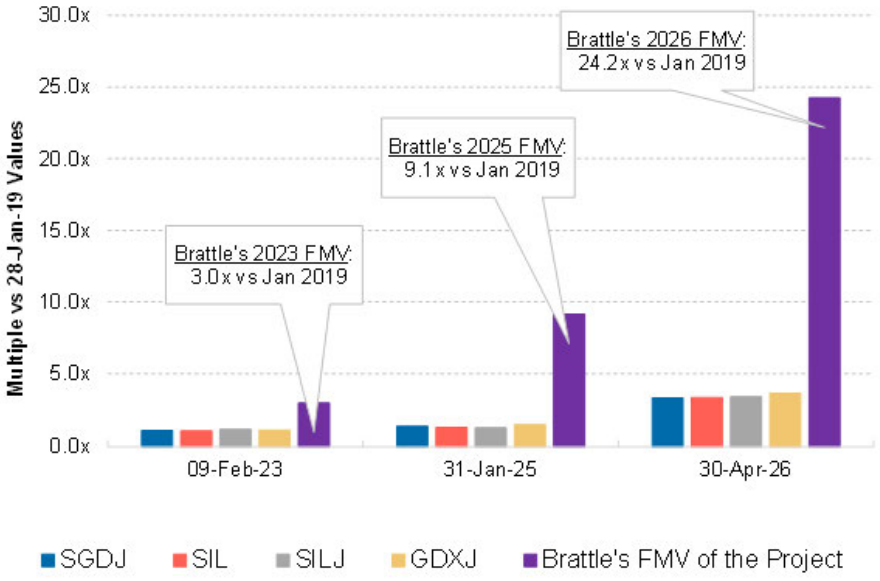
1332. La siguiente gráfica tomada del segundo informe de Quadrant compara la evolución del valor del Proyecto de acuerdo con Brattle con el crecimiento que experimentaron los índices sectoriales, tomando como base para la comparación el valor registrado en enero de 2019.

1746 Segundo Informe Quadrant, ¶¶ 47 y Figura 7 (p.34).

1747 Segundo Informe Quadrant, ¶¶ 32, 52. Los cuatro índices que utiliza Quadrant para medir el desempeño del sector son: dos de oro VanEck Junior Gold Miners ("GDXJ") y Sprott Junior Gold Miners ("SGDJ"), y dos de plata Amplify Junior Silver Miners ("SILJ") y Global X Silver Miners ("SIL")

1748 Segundo Informe Quadrant, ¶¶ 49-50.

Figure 9: Increases in Brattle's FMV of the Project v. Mining ETFs Since 28 January 2019[112]



1333. Como se puede ver, en todos los periodos, la evolución de las estimaciones de Brattle se encuentra significativamente por encima de la del sector. En particular llama la atención la estimación de Brattle correspondiente a abril de 2026 (a la derecha) la cual implica un crecimiento de 24.2 veces con respecto a la estimación a enero de 2019. Durante ese mismo periodo, los índices representativos del sector crecieron apenas 3.5 veces en promedio. Brattle por supuesto no explica qué justificaría este significativo crecimiento por encima de las tendencias del sector.[1749]

1334. El comportamiento de los precios y su tratamiento a futuro es especialmente pertinente a la discusión sobre la viabilidad del método DCF en las circunstancias de este caso. Quadrant hace notar que diversos analistas recientemente han alertado sobre una burbuja especulativa en estos mercados. Por ejemplo, refiere a un artículo publicado en The Economist a finales del año pasado que señala "speculators as the most likely drivers of recent price movements", y concluye que "[w]hat may have started, months ago, as a limited push for more gold in central banks' reserves then snowballed into a self-propelled mass of hot money chasing prices higher."[1750] Quadrant refiere también a otro artículo publicado en el Wall Street Journal también de finales de 2025 en donde se afirma: "danger is that gold is now in the grip of exactly the sort of speculative excess

1749 Segundo Informe Quadrant, ¶¶ 82.

1750 Segundo Informe Quadrant, ¶ 58.

that creates bubbles in other parts of the financial system," y añade que "gold is caught up in the broader speculative fervor, with recent buyers more attracted by the rising price than the fear of inflation."[1751]

1335. En el Memorial de Contestación, la Demandada se refirió al incremento sin precedente en los precios de los metales que servía de base al DCF de Brattle, el cual nadie anticipaba cuando se tomaron las medidas que reclaman las Demandantes.[1752] Las Demandantes minimizaron estos argumentos. Advierten, por ejemplo, que "Mexico challenges the magnitude of the Claimants' loss driven by the subsequent rise in gold and silver prices", pero observan (equivocadamente) que "this is precisely the type of market development the Claimants would have experienced in the but-for scenario, making the but for Ixtaca substantially more valuable, and from which Mexico's breaches excluded them." Como se explicó anteriormente, el problema principal con este argumento es que descansa en un contrafactual que supone la existencia de una mina en operación a principios de 2023 la cual nunca se construyó y es sustancialmente más grande que la que considera el FS. (*Véase* Sección VI.B.1)

1336. Las Demandantes también se quejan de que la Demandada confunde la previsibilidad del daño con la previsibilidad del *quantum* al referirse al reciente e inusitado incremento de los precios del oro y plata.[1753] La Demandada reconoce que existe esa distinción y que la apreciación de los metales está más relacionada con el *quantum* que con la existencia del daño. Sin embargo, no puede ser el caso que una vez establecido el daño (cualquiera que este sea) un inversionista tenga rienda suelta para especular sobre el valor de una inversión que nunca existió y considerar factores fortuitos que tendrían un significativo impacto sobre el valor de la inversión hipotética. La existencia del daño y su magnitud no son dos consideraciones completamente independientes como se pretende hacer creer. Si en lugar de haberse apreciado, los precios del oro y la plata hubiesen descendido temporalmente a un nivel tal que no fuera económicamente viable el desarrollo de la mina, las Demandantes seguramente no aceptarían como defensa que el daño existió, pero el *quantum* sería cero de conformidad con el escenario contrafactual.

1751 Segundo Informe Quadrant, ¶ 58.

1752 Memorial de Contestación, ¶ 786.

1753 Réplica, ¶¶ 1076 y 1077.

1337. Asimismo, las Demandantes afirman que "[a] State that expropriates an income-generating asset assumes liability for the consequences of that act, including subsequent market movements."[1754] Pero esto lejos de avanzar su posición expone su principal defecto: en este caso nunca hubo un "income-generating asset". La Demandada también rechaza la observación de Marboe, en el sentido de que "[it is] necessary to compare the two values of the expropriated property and award the higher one in cases of unlawful expropriations" cuando no hay una apreciación objetiva de la inversión y menos aun cuando la apreciación potencial en la fecha del laudo involucra un activo productivo hipotético distinto de la inversión presuntamente expropiada.

1338. Pero además, la posición de las Demandantes ignora un riesgo adicional: el de sobrecompensar a las Demandantes. Como lo explica Quadrant en su Segundo informe, "[i]f the Tribunal were to choose an ex-post valuation date near the peak of the gold and silver price bubble and such bubble were to burst thereafter, Claimants would receive a windfall".[1755] Lo anterior se relaciona directamente con la manera en que Brattle pronostica los precios futuros, como se explica a continuación.

b. Precios

1339. Como se sabe, el DCF que utilizan las Demandantes requiere pronosticar los precios del oro y la plata en un horizonte de aproximadamente 16 años para así poder estimar los ingresos que habría generado la mina cuya existencia suponen para efectos del cálculo de daños. Como se explicó anteriormente, esta estimación se produce en un entorno de alta volatilidad que ha llevado los precios a sus máximos históricos.

1340. Para estimar los precios futuros del oro y plata Brattle utiliza los contratos futuros, sin embargo, como se explicó desde el primer informe de Quadrant, los contratos futuros no son pronósticos de precios.[1756] Más bien reflejan la relación entre el precio spot y el precio futuro que impediría obtener ganancias sin riesgo –i.e., "non arbitrage relationship". Esto se desarrolla a detalle en el Anexo B del segundo informe de Quadrant. Los precios de los *commodities* normalmente se proyectan utilizando estimaciones consensuadas, como la de Consensus

1754 Réplica, ¶ 1079.

1755 Segundo Informe Quadrant, ¶ 59.

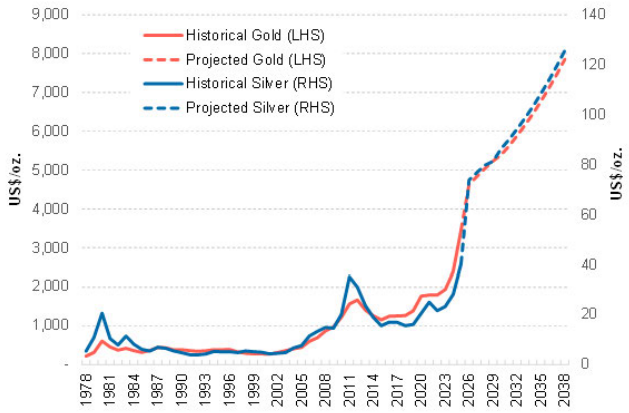
1756 Segundo Informe Quadrant, ¶ 88.

Economics, que recogen las opiniones de diversos connotados analistas como JP Morgan, Goldman Sachs, Moody's, y UBS entre otros.[1757] Quadrant reitera que si hubiese consenso entre estos analistas en que la mejor manera de proyectar precios es con base en los contratos futuros, todos los participantes del mercado seguirían esa metodología y las estimaciones convergirían. Sin embargo, esto no es lo que se observa en la realidad.[1758]

1341. Asimismo, Brattle intenta minimizar la observación de Quadrant en el sentido de que el propio SLR utiliza pronósticos de Consensus Economics, argumentando que la estimación de reservas es un ejercicio distinto de la valuación de una empresa minera. En su segundo informe, Quadrant responde que esto crea una falsa dicotomía, pues si bien es cierto que la estimación de reservas y la valuación son ejercicios distintos, las reservas son un insumo crítico de cualquier valuación. Por lo tanto, los supuestos sobre precios que se usan para estimar reservas necesariamente impactan en el resultado de una valuación.[1759]

1342. La metodología de Brattle resulta en una proyección de precios *siempre ascendente*, es decir, supone que los precios del oro y la plata continuarán apreciándose durante 13 años, partiendo de un nivel cercano a su máximo histórico. La siguiente gráfica, tomada del segundo informe de Quadrant, muestra los precios históricos del oro y la plata (líneas sólidas) y las proyecciones de Brattle (líneas punteadas) y habla por sí misma.

Figure 11: Historical Gold and Silver Prices and Brattle's Projections as of Claimants' 2026 Valuation Date[125]



1757 Segundo Informe Quadrant, ¶ 88.

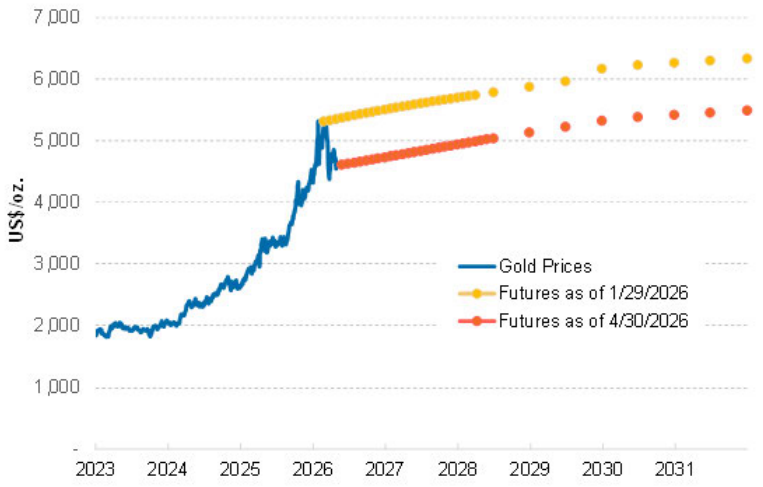
1758 Segundo Informe Quadrant, ¶ 88.

1759 Segundo Informe Quadrant, ¶ 102.

1343. Brattle defiende su proyección argumentando que "futures prices necessarily reflect market participants' price expectations about future spot prices at the time that the contracts are executed."[1760] Quadrant difiere y observa que la condición de no arbitraje se mantiene con independencia de las expectativas de los participantes del mercado, y añade que si los precios de los contratos futuros representaran las expectativas del mercado, esto implicaría que el mercado *siempre* anticipa un incremento en los precios, con independencia de las condiciones macroeconómicas, lo cual carece de sentido.[1761]

1344. La siguiente gráfica tomada del segundo informe de Quadrant muestra cómo la proyección de precios de Brattle es siempre ascendente por la condición de no arbitraje (que se explica a detalle en el Anexo B) y depende fundamentalmente de los precios observados en la fecha de la proyección.

Figure 12: Gold Spot Prices and Futures Prices as of 29 January 2026 and Claimants' 2026 Valuation Date[128]



1345. Como se puede apreciar, una proyección basada en contratos futuros realizada en una fecha cercana al precio spot máximo (línea amarilla) pronosticaría un incremento constante en los precios de esa fecha en adelante. Sin embargo, entre el 29 de enero de 2026 y abril de 2026, los precios del oro y la plata se redujeron en aproximadamente 13% y 36%.[1762] También es notable la

1760 Segundo Informe Quadrant, ¶ 92, citando el Segundo Informe de Brattle, ¶ 77. Énfasis añadido.

1761 Segundo Informe Quadrant, ¶¶ 94-96.

1762 Segundo Informe Quadrant, ¶ 95.

diferencia en las proyecciones representadas por las líneas amarilla y anaranjada a pesar de que las separan apenas tres meses.

1346. Independientemente de lo anterior, Quadrant sostiene que es engañoso sugerir, como lo hace Brattle, que los precios de los contratos futuros son "observable market prices" y que éstos "are formed in a competitive market in which participants with differing information, expectations, and commercial needs commit capital and assume risk".[1763] Para proyectar precios de la fecha de valuación a diciembre de 2031, Brattle utiliza el precio de los contratos futuros siempre que se haya comercializado al menos una unidad del contrato en los 30 días anteriores a la fecha de valuación. Sin embargo, Quadrant observa que el intercambio de estos contratos se concentra en aquellos con vencimiento más corto, y el volumen comercializado de contratos con un mayor plazo cae rápidamente a niveles cercanos a cero. Esto implica que las proyecciones de Brattle se extienden más allá del rango observable de los supuestos precios de mercado.[1764]

1347. Quadrant también hace notar que el VJM se define como el precio al cual se intercambiaría un activo entre un vendedor y un comprador hipotéticos con conocimiento razonable de los hechos. Bajo esta definición, lo relevante es cómo proyectarían los precios estos agentes, y Brattle no proporciona ninguna evidencia de que los participantes en este mercado proyecten los precios de los metales con base en las cotizaciones de los contratos futuros. En contraste con la posición de Brattle (y de las Demandantes):

i. El análisis económico del informe técnico de Cerro Los Gatos se basó en estimaciones basadas en un promedio móvil de tres años y estimaciones consensuadas como la de Consensus Economics.

ii. El análisis económico de Las Chispas se basó en "consensus average long-term forecast gold and silver prices from Canadian financial institutions", y;

iii. El análisis económico del Proyecto Ixtaca en el PEA, PFS y FS se basó en una combinación de precios spot y "current common peer usage" o "recent common peer usage."[1765]

1763 Segundo Informe Quadrant, ¶ 97.

1764 Segundo Informe Quadrant, ¶¶ 97-100.

1765 Segundo Informe Quadrant, ¶¶ 101-104.

1348. Por último, los expertos de las Demandantes sostienen que los pronósticos de Consensus Economics que utiliza Quadrant tienen un sesgo a la baja. El segundo informe de Quadrant explica que el análisis de Brattle es defectuoso por la medida que utiliza ("Mean Percentage Error" o MPE). En cualquier caso, Quadrant demuestra con un ejemplo que la precisión y el sesgo son dos conceptos distintos y que es posible tener una estimación sesgada más precisa que una sin sesgo.[1766]

c. La estimación de riesgos

1349. El segundo problema fundamental con el DCF de las Demandantes es que los riesgos preoperativos que identifica Brattle –i.e., el riesgo de que el Proyecto no alcanzara la actividad comercial y el riesgo asociado con la producción comercial– son difíciles de identificar y aún más difíciles de cuantificar.[1767] En opinión de Quadrant, "[a]ny attempt to identify and measure all of the risks and uncertainties to which Ixtaca may have been exposed is both speculative and unnecessary in this case, given that the FMV of the Project can be obtained from Almaden's market capitalization".[1768]

1350. Un ejemplo de estos riesgos difíciles de medir es el riesgo asociado a la denegación de un permiso ambiental que depende de las circunstancias del caso de que se trate. Como se explicó en el primer informe de Quadrant, Brattle utiliza el proyecto Las Chispas para cuantificar este riesgo en 13%. Quadrant hizo notar en su primer informe que Las Chispas e Ixtaca no eran comparables por una variedad de razones, como el hecho de que Las Chispas era un "brownfield development" que estaba ubicado en una zona de mucho menor densidad de población. Brattle mismo reconoce que los proyectos no son "perfectamente comparables" y reconoce que no son expertos en "Mexican environmental permitting".[1769] No obstante mantiene la estimación de 13% para el riesgo de denegación del permiso ambiental que deriva del proyecto de Las Chispas. La realidad es que nadie puede estimar con un nivel aceptable de confiabilidad y/o precisión la probabilidad de que la MIA del Proyecto hubiese sido aprobada. La de Brattle no es más que una especulación disfrazada de un análisis serio.

1766 Segundo Informe Quadrant, ¶¶ 135-139.

1767 Segundo Informe Quadrant, ¶ 107.

1768 Segundo Informe Quadrant, ¶ 107.

1769 Segundo Informe Brattle, ¶ 95.

1351. Otro ejemplo es el riesgo de retrasos por oposición social. Brattle se apoya en la opinión de SLR para incorporar un retraso de aproximadamente nueve meses por cuenta de la pandemia y 12 meses más a causa de la oposición social, lo cual empujó el comienzo de operaciones a febrero de 2023. Para estimar el retraso potencial por oposición social, Brattle se apoya en el proyecto de Dolores que, según Brattle, experimentó un retraso de esa magnitud por esa causa. Quadrant explicó en su primer informe que el análisis de Brattle sufría de lo que se denomina "survivorship bias" (sesgo de sobreviviente) porque en el proceso que derivó en la selección del proyecto de Dolores solo consideró proyectos que alcanzaron la etapa productiva e ignoró aquellos que no prosperaron, precisamente a causa de la oposición social que experimentaron. La respuesta de Brattle es que ese sesgo no aplica porque "[Brattle] ha[s] been instructed that social opposition could not legally block Ixtaca's completion".[1770]

1352. La Demandada observa que fue precisamente la oposición social al Proyecto lo que llevó a la comunidad Tecoltemic a promover un amparo en 2015 que finalmente derivó en la insubsistencia de las Concesiones por orden de la SCJN y, como atinadamente sostuvo el tribunal de *Azinian v. México*, "[a] governmental authority surely cannot be faulted for acting in a manner validated by its courts unless the courts themselves are disavowed at the international level."[1771] En cualquier caso, no se puede eliminar uno de los principales riesgos que enfrentan los proyectos mineros alrededor del mundo –*i.e.*, el riesgo de que la oposición social lo detenga– simplemente por instrucciones de los abogados de una parte demandante.

1353. Un tercer riesgo que algunos tribunales internacionales han considerado para desechar el método DCF es el riesgo de financiamiento.[1772] Brattle se apoya en la existencia de tres cartas de intención para concluir que dicho riesgo, en el caso de Ixtaca, sería poco significativo.[1773] Sin embargo, el primer informe de Quadrant explica que el financiamiento del Proyecto aún no se

---

1770 Segundo Informe Brattle, ¶ 119.

1771 *Robert Azinian, Kenneth Davitian, & Ellen Baca v. United Mexican States*, ICSID Case No. ARB(AF)/97/2, Award, 1 November 1999, ¶ 97. **RL-0059**.

1772 *Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela*, ICSID Case No. ARB(AF)-12-5, Award, 22 August 2016, ¶ 759. **CL-0099**. Dicho tribunal determinó que el DCF funciona correctamente cuando se cumplen todas o la mayor parte de una lista de criterios que incluye: "The business plan can be financed with self-generated cash, or, *if additional cash is required, there must be* ***no uncertainty*** *regarding the availability of financing.*" [Énfasis añadido]

1773 Primer Informe Brattle, ¶ 111.

había asegurado –i.e., entre otras cosas porque el Proyecto aún no contaba con los permisos necesarios–, que las cartas de intención no eran vinculantes y, en cualquier caso, Brattle asumía en su modelo que el Proyecto se financiaría enteramente con capital.[1774] Brattle no parece controvertir ninguna de estas observaciones, sin embargo, en su segundo informe se apoya en la existencia del FS y el testimonio del Sr. McDonald para reafirmar la conclusión a la que llegó en su primer informe.[1775]

1354. El hecho es que no es razonable simplemente suponer que Almaden habría podido conseguir financiamiento o ignorar los términos que la empresa habría tenido que aceptar para conseguirlo.[1776] La Demandada observa, por ejemplo, que dos de las tres cartas de intención proponen "streaming agreements" cuya aceptación habría implicado vender una parte del oro y plata a un descuento significativo. Sin embargo, esto no se toma en cuenta en la proyección de ingresos de Brattle.[1777] También destaca el hecho de que el financiamiento ofrecido en las cartas es significativamente menor al monto de capital que se requería para la construcción de la mina, sin embargo, nada se dice sobre esto. Este uso selectivo de evidencia permea todo el análisis de Brattle.

1355. A lo anterior habría que añadir la consideración de otros riesgos que se subestiman o de plano se ignoran como: el riesgo de sobrecostos (CAPEX), el riesgo de que la mina produjera por debajo de lo anticipado –e.g., por una sobreestimación del contenido de oro y plata en el mineral o una sobreestimación de la cantidad de oro y plata que se habría podido recuperar a través del método metalúrgico que se planeaba utilizar. Nada de esto sería una incógnita tratándose de una mina en operación con un historial de operaciones suficiente, lo cual subraya la pertinencia de utilizar este criterio para aceptar una valuación DCF para efectos de determinar los daños en un procedimiento inversionista-Estado.

1356. Más importante aún es que el análisis de riesgo de Brattle no es congruente con la manera en que compradores y vendedores habrían determinado los riesgos asociados con el Proyecto al

1774 Primer Informe Quadrant, ¶¶ 83-88.

1775 Segundo Informe Brattle, ¶ 124.

1776 Primer Informe Quadrant, ¶¶ 174-184.

1777 Primer Informe Quadrant, ¶¶ 182-183.

estimar su valor.[1778] Quadrant advierte, por ejemplo, que Brattle: i) se apoya en supuestos adoptados por instrucciones de las Demandantes; ii) ignora evidencia relevante; iii) se apoya en construcciones teóricas que no son coherentes con los métodos que normalmente utilizan los participantes del mercado; iv) se apoya en estudios anticuados que no son aplicables a Ixtaca, y; v) se apoya en comparaciones de minas supuestas comparables seleccionadas por Brattle y SLR con criterios subjetivos.[1779]

1357. Para una explicación más detallada de todas estas consideraciones y otros riesgos que por cuestiones de espacio no pudieron abordarse en esta sección, se invita al Tribunal a leer el Anexo C del segundo informe de Quadrant (¶¶ 136-230).

d. La supuesta verificación de la confiabilidad del modelo de Brattle

1358. Brattle mantiene que su DCF es razonable y para apoyar su posición realiza un "ejercicio de calibración" que consiste en utilizar un DCF con la misma estructura y fuentes utilizadas en las valuaciones de 2023 y 2026, pero recalibrando ciertos supuestos para reflejar la información disponible y las condiciones de mercado al 28 de enero de 2019.[1780] Brattle concluye que la pequeña diferencia resultante entre este DCF y el valor de capitalización de Almaden a esa fecha demuestra la confiabilidad de su modelo.[1781]

1359. El Anexo A del segundo informe de Quadrant explica las razones para descartar este ejercicio de calibración como una demostración de la confiabilidad del DCF de Brattle. Quadrant advierte, en primer lugar, que múltiples combinaciones de supuestos y parámetros pueden generar un mismo resultado en el contexto de un análisis DCF. Por consiguiente, el hecho de que el DCF de Brattle produzca un resultado similar al valor de capitalización de Almaden en enero de 2019 no necesariamente valida el modelo ni los diversos parámetros utilizados como insumos.[1782]

1360. La segunda observación de Quadrant es que el ejercicio de calibración de Brattle obscurece en lugar de demostrar en qué medida sus valuaciones DCF divergen de la evidencia que

---

1778 Segundo Informe Quadrant, ¶ 108.

1779 Segundo Informe Quadrant, ¶ 108. Véase también el Anexo C al segundo informe de Quadrant.

1780 Segundo Informe Brattle, ¶ 53.

1781 Segundo Informe Brattle, ¶ 55.

1782 Segundo Informe Quadrant, ¶ 123.

proporciona el mercado.[1783] Quadrant añade que si Brattle hubiese seguido el método inverso, es decir, comenzar con el valor en 2019 y ajustar ese valor para reflejar los cambios en las condiciones de mercado y el desarrollo del Proyecto, habría advertido que una parte sustancial del valor resultante de sus valuaciones de 2023 y 2026 no podrían reconciliarse con el valor de mercado histórico de Almaden. La Figura 18 del segundo informe de Quadrant demuestra este punto[1784]:

Figure 18: Unreconciled Portion of Brattle's 2026 DCF[175]

		Calculations	
			(US$ Millions)
1.	Almaden's Market Value as of 28-Jan-2019		82.9
2.	Brattle's Assumed Increase for MIA/Permit Approval		15%
3.	Adjusted Market Value with Brattle's Permit Bump as of 28-Jan-2019	R1 x (1+15%)	95.3
4.	Avg. Increase of Market Indicators from 28-Jan-19 to 30-Apr-2026		3.5x
5.	Estimated Market Value as of 30-Apr-2026	R3 x R4	334.9
6.	Brattle's 2026 DCF Valuation of the Project (Gross of Almadex's Royalty)		2,676.6
7.	Value of Almadex's Royalty		79.2
8.	Project FMV According to Brattle (Net of Almadex's Royalty)	R6 - R7	2,597.4
9.	Increases from 28-Jan-2019 Due to the Passage of Time		85.7
10.	**Unreconciled Portion of Brattle's 2026 DCF**	R8 - R9 - R5	**2,176.8**

1361. Como se puede ver, la supuesta verificación del modelo es todo menos eso.

e. Las valuaciones por costos hundidos y comparables son inaplicables y no corroboran el DCF de las Demandantes

1362. Los expertos de las Demandantes intentan verificar o comprobar los resultados de su análisis DCF a través de dos métodos alternativos: transacciones comparables (perteneciente al enfoque de mercado) y el denominado "Multiple of Exploration Expenditure" o MEE (perteneciente al enfoque de costos). Sin embargo, ninguno de estos métodos es aplicable en las circunstancias de este caso y, por lo tanto, no puede servir como verificación del resultado de Brattle.

1363. Con respecto al método de comparables, Quadrant reitera en su segundo informe que la viabilidad del método, sea para valorar una inversión o validar una valuación realizada con otro

[1783] Segundo Informe Quadrant, ¶ 129.

[1784] Segundo Informe Quadrant, Anexo A, ¶ 124. El informe contiene una tabla similar correspondiente a la valuación de 2023 de Brattle.

enfoque, depende de la existencia de comparables adecuados y observa que, durante la primera ronda de escritos, ambos expertos en daños coincidieron en que no existían transacciones comparables adecuadas para Ixtaca. En efecto, en su primer informe Brattle afirmó: "[w]e consider the differences between the but-for Ixtaca and these other companies or mines to be significant" y, por consiguiente, "they cannot provide substantial confirmation that our DCF is reasonable because of the lack of comparability".[1785] Quadrant estuvo de acuerdo con esta afirmación.[1786] Sin embargo, en su segundo informe Brattle considera que el análisis de comparables es útil para probar la razonabilidad del resultado de su DCF no obstante su falta de comparabilidad. Como lo señala Quadrant en su segundo informe, estas posiciones son difíciles de reconciliar.[1787]

1364. Del mismo modo, ambos peritos estuvieron de acuerdo en la primera ronda de informes que el enfoque de costos no era apropiado para valorar el Proyecto y, por extensión, para validar el resultado obtenido con otro método.[1788] Existen dos razones principales sobre las que no parece haber controversia entre los expertos de ambas partes: i) la determinación del VJM de una inversión es un ejercicio prospectivo que depende de los beneficios esperados y no de los gastos incurridos, y ii) el enfoque de costos no es una metodología apropiada para valorar propiedades en la etapa en la que se encontraba el Proyecto.

1365. Dada la reiterada afirmación de las Demandantes en el sentido de que la medida de compensación apropiada en este caso es el VJM de la inversión, se seguiría que el enfoque de costos no encontraría cabida en este caso.[1789] Del mismo modo, las Demandantes se apoyan fuertemente en los lineamientos del CIMVAL para abogar por el enfoque de ingresos –i.e., un DCF– sin advertir (al parecer) que dichos lineamientos no recomiendan el enfoque de costos para

---

1785 Primer Informe Brattle, ¶ 168.

1786 Primer Informe Quadrant, ¶¶ 139-143.

1787 Segundo Informe Quadrant, ¶ 236.

1788 Segundo Informe Brattle, de hecho, señala expresamente en el párrafo 175: "While *we do not consider the cost approach to be appropriate for a valuation of Ixtaca*, counsel has instructed us to apply the cost approach as a back-up valuation approach."

1789 Réplica, ¶¶ 1057-1059, 1063.

proyectos en el estado de desarrollo en el que se encontraba el Proyecto, como se demuestra en la siguiente tabla[1790]:

TABLE 1. Valuation Approaches for Different Types of Mineral Properties

Valuation Approach	Exploration Properties	Mineral Resource Properties	Development Properties	Production Properties
Income	No	In some cases	Yes	Yes
Market	Yes	Yes	Yes	Yes
Cost	Yes	In some cases	No	No

1366. Pero aun poniendo de lado la imposibilidad de reconciliar las posiciones de las Demandantes sobre la cuantificación de los daños y el uso del MEE como método de verificación, la Demandada advierte otros problemas. Los dos principales son: la subjetividad en la selección del múltiplo PEM que sirve para escalar los costos incurridos y la falta de sustento para el PEM utilizado. Para evitar repeticiones innecesarias, la Demandada refiere al Tribunal al Anexo E del segundo informe de Quadrant.

F. Intereses

1367. Como se explicó en el Memorial de Contestación, la Demandada está de acuerdo en que utilizar una tasa de interés libre de riesgo a corto plazo es coherente con la teoría y prácticas económicas, pero controvierte la adición de una prima adicional para considerar el riesgo de impago soberano (i.e., el "country default risk"). Apoyada en su experto de daños, la Demandada argumentó que la adición de dicha prima no procedía porque un inversionista no debe ser compensado por riesgos que no enfrentará, y no había ningún fundamento para suponer que la compensación que en su caso dicte este Tribunal estará expuesta a un riesgo *ex ante*. Por esa razón, los intereses previos al laudo tendrían que calcularse sobre la base de la tasa libre de riesgo en dólares.[1791]

1368. En su Réplica, las Demandantes insisten en que tienen derecho a intereses previos y posteriores al laudo a una tasa equivalente al costo de fondeo en dólares mensual del Estado mexicano, la cual asciende a aproximadamente 4.8%.[1792] Argumentan que la fuente principal en

---

1790 Special Committee of the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum on the Valuation of Mineral Properties (CIMVAL), The CIMVAL Code for the Valuation of Mineral Properties, adopted 29 November 2019, at p. 16. **DC-0024**.

1791 Memorial de Contestación ¶ 854. Segundo Informe Quadrant, ¶ 116

1792 Réplica, ¶ 1149.

la que se apoya Quadrant en su argumento es un artículo académico sobre intereses previos a una sentencia en Estados Unidos, el cual "does not address awarding interest at the defendant's borrowing rate but rather at the plaintiff's opportunity cost of capital (i.e., WACC)". Las Demandantes observan que Brattle no propone utilizar el WACC o cualquier otra medida del costo de oportunidad del capital y, por lo tanto, "Quadrant's position is therefore misplaced". [1793]

1369. La Demandada aclara, de entrada, que Quadrant basó sus conclusiones en tres fuentes distintas que enuncian un mismo razonamiento que ni las Demandantes ni sus expertos controvierten: que la parte demandante no debe ser compensada por riesgos que no enfrentará.[1794] En palabras de Quadrant:

> [...] The reasoning of Fisher and Romaine, Mark Kantor, and the tribunal in *Sistem v. Kyrgyz Republic*, however, is not limited to rejecting WACC. Rather, they are based on the broader economic principle that interest on historical damages should compensate a claimant for the time value of money between the alleged breach and the award, and not for risks that the claimant did not bear during that period.[1795]

1370. Como se puede apreciar, el hecho de que las fuentes en las que se apoya Quadrant argumenten en contra del uso del costo de oportunidad de la parte demandante, es completamente irrelevante. La cuestión relevante es si la tasa que emplea Brattle compensaría a las Demandantes por riesgos que no enfrentaron ni enfrentarán. Y este es precisamente el caso con la tasa que proponen las Demandantes, y la razón por la que debe ser rechazada.

1371. Las Demandantes alegan haber sufrido daños entre febrero de 2023 y abril de 2026 (la fecha que se utiliza como proxy de la fecha del laudo) y exigen intereses pre laudo sobre esos montos a una tasa que incorpora el riesgo de default del Estado mexicano. Sin embargo, como lo apunta Quadrant, "[t]he fact is that we know today that Mexico did not default on its debt at any time between Claimants' Valuation Dates and today" y, por lo tanto, "it would […] be inappropriate to increase the interest rate to account for a risk that, ex post, did not occur".[1796] Así,

---

[1793] Réplica, ¶ 1150.

[1794] El Primer Informe de Quadrant se apoya en tres fuentes: un paper de Fisher and Romaine (Anexo **QE-74**), el libro "Valuation for Arbitration: Compensation Standards, Valuation Methods and Expert Evidence" de Mark Kantor (Anexo - **QE-75**) y el laudo en Sistem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. v. Kyrgyz Republic (ICSID Case No. ARB(AF)/06/1), Award, 9 September 2009, (Anexo **QE-76**).

[1795] Segundo Informe Quadrant, ¶ 115.

[1796] Segundo Informe Quadrant, ¶ 117. Quadrant observa que incluso si hubiese existido un evento de impago, las supuestas pérdidas de las Demandantes no habrían enfrentado riesgo de default *ex post*.

lo único que habría que compensar es el valor del dinero en el tiempo transcurrido entre la fecha de la pérdida y la fecha del laudo. Eso es lo que captura la tasa libre de riesgo.

1372. Quadrant ofrece el siguiente ejemplo para ilustrar este punto:

> 114. [...] Assume that a claimant brought two identical claims for damages against two countries: Country X, a country with low credit ratings and high borrowing costs, and Country Y, a country with high credit ratings and low borrowing costs. Assume also that the same compensation is awarded to the claimant in the two arbitrations. If Country X and Country Y's cost of borrowing were used, the claimant would get much higher interest compensation from the arbitration against Country X, due to its higher borrowing costs. This is illogical, since the claimant incurred the same damages in both countries. The purpose of compensation in arbitration is to make a claimant whole, not to punish countries with lower credit ratings. This goal should be achieved regardless of respondent's credit standing and borrowing costs.[1797]

1373. También sucede que la posición que asumen las Demandantes con respecto a la tasa de interés pre laudo sería inconsistente con su teoría de que el Tribunal debe determinar los daños a la fecha del laudo para utilizar "maximum information rather than maximum ignorance". Si ahora sabemos que no ocurrió ningún evento de default en el periodo transcurrido entre la fecha de la pérdida y la fecha que se utiliza como proxy de la fecha del laudo, ¿cómo se justificaría ignorar esa información y compensar a las Demandantes por ese "riesgo"? Como lo señala Quadrant en su segundo informe, "[f]rom an economic perspective, using Mexico's borrowing rate for calculating interest is inappropriate and would result in a windfall for Claimants."[1798]

1374. Brattle sostiene además que "the economically coherent and commercially reasonable rate is Mexico's borrowing rate; the risk-free rate would be commercially unreasonable and undercompensate the Claimants."[1799] Sin embargo, estas conclusiones dependen de dos supuestos que los abogados de las Demandantes le ordenaron adoptar: i) "that Claimants are entitled to interest calculated at a commercially reasonable rate for that currency in which the FMV is calculated, accrued from the date of expropriation until the date of payment of the award", y ii) "that Claimants have effectively been forced lenders to the Government of Mexico since the Valuation Date."[1800] Más aún, es evidente que las conclusiones de Brattle están condicionadas a la

---

1797 Segundo Informe Quadrant, ¶ 118.

1798 Segundo Informe Quadrant, ¶ 116.

1799 Réplica, ¶ 1151 y Segundo Informe Brattle, ¶ 195.

1800 Segundo Informe Brattle, ¶ 189(b).

adopción de esos supuestos: "If Claimants are treated as involuntary lenders to Mexico during this period, then the economically appropriate interest rate is Mexico's borrowing rate".[1801]

1375. Las Demandantes, sin embargo, no se ocupan de explicar cómo es que los supuestos que le ordenaron a Brattle adoptar se alinean con el estándar de reparación plena o las razones por las cuales este Tribunal debería apartarse de dicho estándar para favorecer este enfoque. Esto es pertinente no solo porque las Demandantes tienen la carga de la prueba, sino porque Brattle concede que si este Tribunal determina que las Demandantes no asumieron riesgo de *default* (i.e., *sovereign credit risk*), entonces: "*we would agree with Quadrant 1 that the risk-free rate would be appropriate*."[1802] Esto quiere decir que las Demandantes no solo debían probar que su hipótesis de préstamo forzado es congruente con el estándar de reparación plena, sino que enfrentaron riesgo de *default* soberano. No lo hicieron.

1376. Sobre la observación de que a "lower rate would only incentivize Mexico to delay paying the Award", la Demandada sostiene que esa consideración es irrelevante bajo el estándar de reparación plena porque dicho estándar tiene por objetivo lograr una compensación justa para la parte demandante, no incentivar el pago de un laudo, y en cualquier caso, la crítica solo aplicaría a la tasa de interés posterior al laudo.

1377. Finalmente, sobre la observación de que los precedentes inversionista-Estado favorecen la adopción del enfoque que proponen las Demandantes, se observa que no hay uniformidad en los criterios adoptados por los tribunales internacionales, lo que sugiere que dicha determinación depende del tratado y el estándar de compensación aplicable, en lugar de la regla rígida que buscan imponer las Demandantes a base de supuestos. Asimismo, se observa que numerosos tribunales han determinado intereses sobre la base de la tasa libre de riesgo, como lo demuestra el trabajo que las propias Demandantes citan en la Réplica.[1803]

1378. En atención a todo lo anterior, la Demandada reitera su posición de que la tasa de interés pre laudo debe fijarse con base en la tasa libre de riesgo equivalente al rendimiento de los bonos

---

1801 Segundo Informe Brattle, ¶ 190.

1802 Segundo Informe Brattle, ¶ 195.

1803 Darrell Chodorow and Bennet Berger, "The Determination of Financial Interest Rates in Investment Arbitration," Investment Treaty Arbitration, Edition 10 (2025), p. 6, **DC-0181**.

del Tesoro de Estados Unidos a un año con composición anual, como normalmente se determina en casos inversionista-Estado.[1804] Cabe observar en relación con esto último que las Demandantes no especifican el periodo de composición que solicitan y no han ofrecido ninguna justificación para la composición mensual que utiliza Brattle para los intereses pre laudo.

VII. SOLICITUD DE COSTOS

1379. Conforme a lo establecido en las Secciones 3, 10, 12, y 19 de la Resolución Procesal No. 1, así como la Regla 52(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI, México solicita al Tribunal que condene a las Demandantes al pago de la totalidad de las costas y gastos en que México ha incurrido como consecuencia de este arbitraje, incluyendo los honorarios y gastos del Tribunal, los gastos administrativos del CIADI, los honorarios y gastos de los abogados y expertos que representan a México, así como cualquier gasto adicional relacionado con este procedimiento en que México razonablemente incurra hasta la emisión del Laudo.

1380. Las circunstancias del presente arbitraje justifican una condena en costas a favor de la Demandada. Las Demandantes han obligado a México a defender reclamaciones cuya procedencia es cuestionable desde su planteamiento, particularmente frente a las objeciones de jurisdicción ratione personae, ratione voluntatis, ratione temporis y ratione materiae formuladas por México. En particular, pretenden obtener protección internacional respecto de derechos cuya existencia y alcance conforme al derecho mexicano no han demostrado y que, en cualquier caso, no constituyen una inversión protegida conforme al TIPAT.

1381. Aun si el Tribunal tuviera jurisdicción, las Demandantes tampoco han demostrado la existencia de una violación al Tratado ni han demostrado el daño que reclaman. Su cuantificación parte de un escenario irreal en el que el Proyecto Ixtaca habría llegado a operar como una mina, ignorando a su vez que su operación dependía de autorizaciones y decisiones administrativas que nunca se obtuvieron.

1382. México ha debido, por tanto, incurrir en costos para responder a reclamaciones que, además de presentar serios obstáculos jurisdiccionales y sustantivos, descansan en una teoría de daños altamente especulativa.

[1804] Memorial de Contestación, ¶¶ 853-854.

1383. Por lo anterior, la defensa de estas reclamaciones ha requerido un esfuerzo especializado en materias de derecho administrativo y constitucional, medio ambiente, derechos de comunidades indígenas, industria minera y valuación de daños, incluyendo la participación de expertos en dichas materias. En estas circunstancias, los costos incurridos por México son consecuencia directa de las reclamaciones formuladas por las Demandantes y resultan razonables para su adecuada defensa.

1384. Por lo anterior, la Demandada solicita respetuosamente al Tribunal:

- Condenar a las Demandantes al pago de la totalidad de las costas y gastos de este arbitraje, incluyendo los honorarios y gastos del Tribunal, los gastos administrativos del CIADI, así como los honorarios y gastos de los abogados y expertos de México;
- Incluir en dicha condena cualquier gasto adicional relacionado con este procedimiento en que México incurra razonablemente hasta la emisión del Laudo; y
- Ordenar que dichas sumas devenguen intereses desde la fecha del Laudo hasta su completo pago, a una tasa comercial razonable que determine el Tribunal.

VIII. PETITORIOS

1385. La Demandada reitera los petitorios solicitados en el Memorial de Contestación, es decir, que el Tribunal:

- Determine que no tiene jurisdicción *ratione personae* y *ratione voluntatis* para conocer de la controversia porque las Demandantes no demostraron su condición de inversionistas protegidos conforme al Artículo 9.1 del TIPAT y 25(2)(b) del Convenio del CIADI. Además, no tiene jurisdicción *ratione temporis* porque las reclamaciones de las Demandantes derivan de hechos ocurridos antes de la entrada en vigor del TIPAT y en todo caso están prescritas. Tampoco tiene jurisdicción *ratione materiae* porque la supuesta inversión de las Demandantes no cumple con los requisitos del TIPAT y el Convenio CIADI.
- En caso de que el Tribunal determine que tiene jurisdicción, la Demandada solicita que el Tribunal reconozca que las reclamaciones de las Demandantes carecen de méritos, adicional a que no han sido probadas.
- En caso de que el Tribunal considere declarar la responsabilidad de la Demandada, se solicita que el Tribunal deniegue toda compensación por falta de prueba y, si hubiere lugar a ella, la determine conforme a la posición de la Demandada en materia de valuación de daños, el razonamiento del Dr. Flores y el principio de culpa concurrente.
- En caso de que el Tribunal determine que la Demandada expropió el Proyecto, se solicita que ordene a las Demandantes transferir todos los activos de dicho proyecto a la Demandada, al momento de recibir el pago.

1386. La Demandada también solicita al Tribunal el rechazo de las solicitudes de inferencias adversas de las Demandantes ya que carecen de fundamento jurídico y tratan de cambiar la carga de la prueba en este caso.

1387. Finalmente, la Demandada solicita la correspondiente condena en costos a su favor descrita en este Memorial de Dúplica.

Presentado respetuosamente,

El Director General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional



Alan Bonfiglio Ríos